

Sergio Camargo V.



El Narcotraficante N° 82
Álvaro Uribe Vélez
Presidente de Colombia



Sergio Camargo V.

ALVARO URIBE VELEZ EL NARCOTRAFICANTE # 82

UNIVERSO LATINO ASSOCIATION

Del mismo autor
Democracia Real Universal

Unilatino-tv@hotmail.fr

París Francia

Primera edición 2008-07-22

Foto Carátula: José Cruz/Abr

Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de su autor.*

**(Nota: Por circunstancias especiales nos vemos en la necesidad de reproducirlo para su uso como documento jurídico, como prueba indiciaria y anexo de los prontuarios que sobre las investigaciones penales cursan ante las autoridades judiciales contra la mafia en Colombia, y en especial las investigaciones penales que cursan internacionalmente contra su líder jefe máximo, mesías, "inteligencia superior", autoelegido, actual jefe de la mafia del Cartel de Medellín, quien dice ser presidente.)*

ISBN: 978-2-9550449-0-4

Deposito Legal: M-12604-200

©Sergio Camargo V.

©2007 UNILATINO

PRINTED IN SPAIN

Desde hace varios decenios, Colombia atraviesa por una crisis institucional. Hoy en día esta en manos de la mafia y gobernada por un espurio presidente.

ES TERRIBLE CUANDO LA MAFIA SE HACE GOBIERNO

LUCHEMOS CONTRA LA DESIDIA HUMANA

Para la mayoría de colombianos y colombianas era un secreto la cercanía del presidente Álvaro Uribe Vélez y su familia con los capos del «Cartel de Medellín» iniciada por allá en los años ochenta.

Amistad y negocios los unirían a Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Correa Arroyave, Fabio Ochoa, Pablo Escobar y otros narcotraficantes y criminales de alta y mediana peligrosidad. Igualmente podemos afirmar que para los servicios secretos estadounidenses, los nombres de Alberto Uribe Sierra y su hijo Álvaro Uribe Vélez, no son desconocidos por cuanto sus nombres figuran en la «lista negra» de narcotraficantes elaborada por la Defense Intelligence Agency (DIA) publicada en 1991, y seguramente registrado también en las listas de la DEA (Departamento de Control Antinarcóticos) y la CIA. Lo anterior sin contar con los problemas jurídicos de su hermano Santiago y sus primos Mario Uribe (senador), Carlos Alberto y Juan Diego Vélez Ochoa, por actividades relacionadas con la conformación de escuadrones de la muerte, narcotráfico y la sindicación de decenas de asesinatos. Tan brillante prontuario familiar, no ha eclipsado en nada las magníficas relaciones de Álvaro Uribe desde su posesión como presidente de Colombia, el 7 de agosto de 2002, con el presidente de los Estados Unidos George Walker Bush, y las cuales han sido una eterna luna de miel.

Para un juicioso y bien documentado investigador, resulta sorprendente ver el cambio que ha tenido el “presidente” Álvaro Uribe frente a los 'gringos', a los cuales no les tenía ni un centímetro de aprecio expresado en su vida pública y en su entorno privado, por allá en los años ochenta. Este cambio repentino y radical a la vez debe tener un poderoso motivo, pues ahora como “presidente”, Uribe acepta y cumple las órdenes emanadas de Washington -en su primera administración de cuatro años -2002-2006- viajó más de ocho veces a la Casa Blanca y hasta el embajador de Estados Unidos en Bogotá, coadministra el país. Pueda ser que ese repentino cambio de odio por amor del presidente Uribe, hacia el gobierno estadounidense, no se deba solamente a su camaleonesca personalidad, si no también, a la defensa de sus intereses y seguridad.

Aún cuando este “presidente” piensa una cosa y dice otra mientras dice lo que jamás ha pensado, ha logrado fomentar una estructura mafiosa y político-militar al interior del país, que le es incondicional, mientras que a nivel internacional ha logrado mantener una estatura de político pulcro, sin que su oscuro pasado y el de su familia le reste la confianza y los honores de jefe de Estado que le rinden gobiernos en el mundo, a pesar de su abierta y total connivencia con la mafia. Corrupción generalizada, complicidad y preservación de grandes intereses transnacionales, puede ser la causa del silencio de los poderosos.

Frente a este confuso cuadro los colombianos de buena voluntad se preguntan sin cesar, ¿qué pacto secreto se firmó entre los presidentes Uribe y Bush, entre un gobierno colombiano para nada impoluto y un gobierno estadounidense, cada vez más ladeado hacia la postura dictatorial? Lo cierto es que desde la toma de posesión de Uribe como presidente de la República colombiana, la vida cambió completamente para sus ciudadanos y ciudadanas; la entrada de miles de agentes y soldados norteamericanos, además de los mercenarios israelíes y británicos al territorio nacional, gozando de una absoluta impunidad para sus potenciales crímenes; el aumento indiscriminado de fumigaciones a cultivos 'ilícitos' y no ilícitos, con el glifosato que vende Monsanto, sin un estudio serio sobre las graves consecuencias humanas y ecológicas, además del elevado precio de este veneno; el ciego apoyo del gobierno de Uribe a la criminal invasión en Irak; el envío de centenas de colombianos pedidos en extradición, varios de ellos inocentes y el sometimiento a las políticas económicas norteamericana sin el debido derecho a la reflexión, son parte de ese cheque en blanco que Uribe le entregó al gobierno de los Estados Unidos.

¿El por qué? Veamos:

A principios del año dos mil tres, los colombianos reciben con estupefacción la noticia sobre una «lista negra» emitida por la U.S INTELLIGENCE y publicada por los principales diarios de Estados Unidos, entre ellos el Newsweek, en la cual se encuentran alrededor de ciento veinte peligrosos narcotraficantes Colombianos y de otros países, así como abogados y colaboradores de la mafia en el continente americano. En dicha lista aparecen los más conocidos narcotraficantes pasando por firmes militares y honorables políticos colombianos.

En el puesto N° 79 se encuentra el tristemente célebre Pablo Escobar Gaviria (fallecido) y en el puesto N° 82 Álvaro Uribe Vélez “presidente” de Colombia.¹

“82. ALVARO URIBE VELEZ -A COLOMBIAN POLITIAN AND SENATOR DEDICATED TO COLABORATION WITH THE MEDELLIN CARTEL AT HIGH GOVERNMENT LEVELS. URIBE WAS LINKED TO A BUSINESS INVOLVED IN NARCOTICS ACTIVITIES IN US. HIS FATHER WAS MURDERED IN COLOMBIA FOR HIS CONNECTION WITH THE NARCOTIC TRAFFICKERS. URIBE HAS WORKED FOR THE MEDELLIN CARTEL AND IS A CLOSE PERSONAL FRIEND OF PABLO ESCOBAR GAVIRIA. HE HAS PARTICIPATED IN ESCOBAR'S POLITICAL COMPAINING TO WIN THE POSITION OF ASSISTANT PARLARIAMENTAN TO JORGE ORTEGA. URIBE HAS BEEN ONE OF THE POLITICIANS, FROM THE SENATE, WHO HAS ATTACKED ALL FORMS OF THE EXTRADITION TREATY.”²

**82. ALVARO URIBE VELEZ - POLITICO Y SENADOR COLOMBIANO DEDICADO A COLABORAR CON EL CARTEL DE MEDELLIN EN ALTOS NIVELES DEL GOBIERNO.
-URIBE SE VINCULO A NEGOCIOS INVOLUCRADO A ACTIVIDADES DE NARCOTICOS EN ESTADOS UNIDOS. SU PADRE FUE ASESINADO EN COLOMBIA POR SUS CONEXIONES CON LOS NARCOTRAFICANTES, URIBE HA TRABAJADO PARA EL CARTEL DE MEDELLIN Y ES UN AMIGO INTIMO DE PABLO ESCOBAR GAVIRIA. EL PARTICIPO EN LA CAMPAÑA POLITICA DE ESCOBAR PARA GANAR LA POSICION DE SUPLENTE DE JORGE ORTEGA. URIBE FUE UNO DE LOS POLITICOS DEL SENADO QUE ATACO TODAS LAS FORMAS DEL TRATADO DE EXTRADICION.**

La estupefacción nacional fue total. Pero no igual para todos, pues la inmensa mayoría de colombianas y colombianos desconocedores del tejemaneje *narcocriminal* en el cual estaba sumergido Álvaro Uribe, era un completo secreto. Pero para ese puñado de narco-políticos y narco-empresarios el golpe fue terrible y había que contrarrestarlo. Y la pregunta en las altas esferas del poder fue, ¿por qué el gobierno estadounidense desclasificó y difundió dicha información y con qué fines? Sabemos por experiencia propia sobre la doble moral ejercida por los distintos gobiernos norteamericanos, y que va encaminada a defender exclusivamente sus mezquinos intereses. Entonces, debemos preguntarnos en que incumplió Uribe, o que mensaje (amenaza) el gobierno de Bush le está enviando? Nada claro. Lo cierto es que el destino de millones de colombianos depende estúpidamente de las truculentas y sucias negociaciones entre los dos gobiernos y el chantaje que el gobierno estadounidense -uno de lo más repudiados en los últimos tiempos inflige al gobierno de Álvaro Uribe.

La reacción de la Casa de Nariño -sede del gobierno- fue inmediata. Veamos lo manifestado en la prensa colombiana el 2 de agosto de 2004:

¹ U.S. Intelligence Tied Colombia's Uribe to Drug Trade in '91 Report

² "Confidencial DIA, Report had Uribe Alongside Pablo Escobar, Narco-Assassins. Uribe « Worked for the Medellin Cartel» and was a «Close Personal Friend of Pablo Escobar».

«Gobierno desmiente publicación de Newsweek sobre pasado oscuro del presidente Álvaro Uribe: La revista publicó un documento que asegura, fue elaborado en 1991 por la 'Defense Intelligence Agency', y en el cual establece que el mandatario colombiano, tenía por ese entonces, relaciones con el narcotráfico y el Cartel de Medellín, que su padre fue asesinado por sus relaciones con los narcotraficantes, que era amigo personal de Pablo Escobar y participó en la campaña que llevó a este a la Cámara de Representantes como segundo renglón de Jairo Ortega, y que, como Senador se opuso al tratado de extradición».

De acuerdo con el comunicado de la presidencia colombiana, el actual gobernante Álvaro Uribe Vélez, no fue elegido para el congreso entre 1986 y 1991 por un movimiento político del narcotraficante Pablo Escobar³, y siempre ha tenido una sola postura frente a la extradición. El documento incluye una lista de individuos que se cree están asociados con el Cartel de Medellín, entre asesinos, narcotraficantes, de alto y medio nivel— y abogados. El nombre de Álvaro Uribe ocupa el lugar 82 entre 106', según versiones periodísticas¹.

Y añade la Casa de Nariño en su comunicado, que cuando el presidente Álvaro Uribe fue Senador, fue elegido por un movimiento diferente al de Pablo Escobar, que el gobernante jamás ha tenido negocios en el exterior y tuvo dos cuentas bancarias en el extranjero, cuando estudió en Harvard y en Oxford. Además, añadió que desde el inicio de su gobierno ha extraditado a más de 170 personas⁴.

Como podemos apreciar, en el escueto comunicado de la Presidencia de la República, se busca cortar el paso a la delicada acusación sin argumentos de peso, desmintiendo fechas de nombramientos en el senado, negando negocios en el exterior y aduciendo que sí se cumple con la extradición. Pero en el fondo, no hay una respuesta contundente y satisfactoria que desmienta abiertamente los lazos de amistad y negocios de Álvaro Uribe Vélez con los capos de la mafia de Medellín y en especial Pablo Escobar. Igual que lo han hecho todos los políticos, empresarios, ganaderos y militares colombianos ligados con el crimen y la mafia, el “presidente” Uribe se limita a desmentir su amistad con Pablo Escobar y las que tuvo con el otrora y también temido narcocriminal Gonzalo Rodríguez Gacha y otros importantes varones de la mafia de las drogas, argumentando que los vio una o dos veces, que en la época no era reconocido como narcotraficantes y que nunca fueron amigos.

Álvaro Uribe Vélez, nació en Medellín en el año 1952, en una familia ultraconservadora y de pocos recursos y con un padre que iba y venía colmado de deudas pero era honesto, hasta cuando se le apareció el 'gran negocio'. Tiene varios hermanos entre los cuales están Jaime y Santiago, sindicado el primero de una muy buena amistad con Pablo Escobar, lo que le valió ser arrestado por los servicios de Inteligencia militares y Santiago, acusado de haber fundado un escuadrón de criminales junto a un sacerdote y al cual llamaron los «doce apóstoles» culpables de varias decenas de asesinatos en Antioquia. Álvaro Uribe está casado con Lina Moreno y tiene dos hijos: Tomas y Jerónimo.

³ Pablo Escobar fue elegido a la cámara baja por el partido liberal, el mismo partido en el que ha militado Uribe y por el cual fue elegido senador. Como veremos más adelante Uribe senador se opuso a la extradición, postura diferente a la de ahora como presidente.

⁴ En cuanto a que Uribe nunca ha tenido negocios en el exterior, esta por verificarse. Ahora bien, es cierto que ha extraditado a ese número de personas, pero en su mayoría son raspachines (recogedores de hoja de coca). Y todos los extraditados de peso pertenecen en su inmensa mayoría al Cartel de Cali, acérrimos enemigos de Pablo Escobar. Tan solo dos capos han sido extraditados, los hermanos Rodríguez Orejuela —financadores de la campaña del presidente Ernesto Samper Pizano— y en circunstancias que son más que particulares. ¿Y los capos de la mafia del Cartel de Medellín? Hasta mediados del año 2007 ningún narcotraficante perteneciente a este Cartel ha sido extraditado. Uribe se niega a hacerlo.

Durante su época de estudiante se caracterizó por su extrema antipatía hacia los movimientos estudiantiles progresistas. Caprichoso y altanero, siempre se distinguió por dar órdenes y no escuchar las opiniones ajenas, su extrema intolerancia producía admiración en unos y desprecio en otros de sus compañeros, quienes no dejaban de sentir cierta incomodidad. Su comportamiento no era el de un verdadero líder estudiantil con un sentimiento demócrata, sino más bien, el de un joven voluntarioso, caprichoso y con tendencia a la trampa.

Emprendía empresas que nunca llegaban a su fin y tranzaba negocios que salían casi siempre torcidos. Como es habitual en ciertos documentos biográficos, se esconden ciertos datos y oscuras situaciones de su vida familiar; en este caso, no aparece en su biografía que su padre Alberto Uribe Sierra, un hombre controvertido, con singulares amistades y quien fuera asesinado en una de sus haciendas llamada «Las Guacharacas» el 14 de junio de 1983 a las seis de la tarde, en un asalto que los Uribe achacan a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y testigos de la región a un ajuste de cuentas entre la mafia del narcotráfico y el controvertido 'hacendado' Alberto Uribe Sierra. Lo cierto es que Uribe padre, mantenía una entrañable amistad y numerosos negocios con los varones de la droga de Medellín y en especial con Pablo Escobar, Pablo Correa Arroyave, Fabio Ochoa, Jefe del clan donde sobresalen los hermanos Juan David y Jorge Luis Ochoa Vázquez⁵ y el sanguinario Gonzalo Rodríguez Gacha.

El grueso jefe de la familia Fabio Ochoa, llamado absurdamente «El Patriarca» campesino inculto y de ademanes toscos, mentalidad ultraconservadora y actitud arrogante, no paraba de contarle a todo el que quisiera escucharle que a Alberto Uribe Sierra, lo había asesinado las FARC y que el había muerto en su ley defendiéndose con su pistola. Sin embargo, la primera versión dada en los pueblos de la región como Cisneros, Yolombo, Maceo, San José del Nus y Puerto Barrio, fue en el sentido de que Uribe Sierra había sido '*quebrado por torcido*'⁶ Corría la voz en el sentido de que Uribe Sierra se había apropiado de una gran suma de dinero en dólares producto de una de esas negociaciones de narcotráfico y que sus 'amigos' lo habían mandado matar.

En vida, Uribe padre cultivo enormes amistades vinieran de donde vinieran, lo importante para él, era poder sacarle partido a esas relaciones y de la noche a la mañana se convirtió en un hombre rico, acumulando a su vez poder. Durante su trayectoria de hombre de negocios bastante controvertida, logro acumular un enorme capital y con este poder económico comprar caballos de pura sangre en los cuatro puntos cardinales del planeta, adquirir su helicóptero como medio de transporte y adquirir una docena y media de haciendas ubicadas con las mejores y más productivas tierras, en varias regiones del país. Mucho después se habla que no eran verdaderamente suyas. En sus casi cotidianas parrandas en las cuales bebía y bebía litros de aguardiente y se hacía cubrir del amor de las mujeres que conquistaba con su fluida cháchara y su poder adquisitivo, se jactaba de sus buenas relaciones con la alta clase política y los altos «ejecutivos» paisas (oriundos del departamento de Antioquia cuya capital es Medellín), como también de tener un hijo con «talla presidencial». Uribe Sierra al momento de su muerte estaba inmerso en un mundo de negocios alucinantes, en los cuales según relatos, hoy podía ser dueño de cinco haciendas, mañana de diez, pasado mañana de veinticinco, además de contar con un pequeño ejército de individuos prestos a administrarlas y a seguirlo y obedecerlo ciegamente.

Enterado de la muerte de su padre Jorge Alberto Uribe Sierra, su hijo Álvaro Uribe Vélez se desplazó rápidamente desde Medellín hacia la finca 'Las Guacharacas' el lugar de los hechos, en un helicóptero

⁵ El clan Ochoa fue fundador con otros narcotraficantes de uno de los escuadrones de la muerte que sembró el terror en más de la mitad del departamento de Antioquia. Junto con Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente Álvaro Uribe, trabajaron juntos en el negocio de las drogas y en la formación de grupos armados privados al amparo de las Convivir. Los hermanos Ochoa y los hermanos Uribe son primos hermanos por el lado maternal.

⁶ En el medio mafioso *quebrar por torcido* a alguien, significa matarlo por no cumplir con sus obligaciones o por traición

moderno y equipado con sofisticados equipos electrónicos y radar perteneciente al 'hacendado' Pablo Escobar Gaviria.

La muerte de Uribe padre fue contada a su manera por la prensa bogotana de la siguiente forma: «Quince minutos después de que él, y sus hijos Santiago y María Isabel aterrizaran en la hacienda a las 4 de la tarde (venían en un helicóptero Hugues 500 manejado por el capitán Bernardo Rivera), llegan veinte hombres armados dispuestos a secuestrarlo... Hay un enfrentamiento. Uribe les dispara y ellos lo matan de dos tiros en la cabeza. Los guerrilleros de las FARC dinamitaron el helicóptero.» Pero la versión de la prensa antioqueña —de Medellín— narro otro hecho «Los hombres venían a tratar unos asuntos» Y la versión de otro periódico de Medellín dijo en su momento que Uribe recibió un disparo en el pecho y otro en la cabeza, añadiendo «Los guerrilleros ametrallaron y dejaron completamente inservible al helicóptero que estaba valorado en 20 millones de pesos». El helicóptero de la familia Uribe, que de acuerdo con declaraciones del propio Álvaro Uribe Vélez, había sido incinerado y destruido por las FARC, el día del asesinato de su padre, fue incautado años mas tarde en la renombrada operación «Tranquilandia», cuando se allanó una de las más grandes fabricas de elaboración de cocaína, perteneciente a los criminales narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, «El Mexicano», Pablo Escobar y otros importantes narcos, quienes por la época producían la mayor cantidad de cocaína para la exportación hacia el norte del continente. Dicho helicóptero seguía en servicio activo y con muchas horas más de vuelo.

A los funerales del controvertido 'caballista' Alberto Uribe Sierra, se llevaron a cabo en un ambiente surrealista. Más de 7 mil personas se hicieron presentes en el cementerio 'Campos de Paz' de Medellín, entre los que se contaban familiares, amigos, dirigentes políticos, empresarios, algunos funcionarios del gobierno, la crema de la crema de los 'empresarios emergentes' y varios de los campesinos, trabajadores del occiso y quienes le obedecieron en vida, ciegamente. Hasta el propio presidente de la República Belisario Betancur Cuartas, asistió al entierro de este controvertido ciudadano. Mientras la multitud se agolpaba alrededor de la capilla, una avioneta sobrevoló el lugar lanzando claveles rojos y margaritas blancas, a la par con la lluvia de flores, un poderoso helicóptero cruzaba el firmamento portando el helicóptero del asesinado 'hacendado'. Un discurso del alcalde de Medellín y aplausos de la muchedumbre también adornaron los funerales. Vale la pena preguntar ¿quién pago por este inusual espectáculo? Tal vez alguna de las personalidades que Álvaro Uribe Vélez, insistentemente cataloga como 'gentes de bien'. Como un tal Pablo Escobar, que no era un criminal narcotraficante, sino un político y hacendado. O unos tales del clan Ochoa, que no eran unos narcos y patrocinadores de los temibles escuadrones de la muerte, sino unos criadores de finos caballos como el difunto, o los dirigentes políticos, empresarios y otros aduladores y socios del 'Medellín sin Tugurios', que no era un lavadero de los dólares producto del narcotráfico y el crimen, sino una fundación social para ayudarle a los desheredados. O tal vez esas encopetadas Damas Grises disfrazadas de caridad y capaces de cualquier cosa... En todo caso allí estaba presente la flor y nata del poderío emergente antioqueño y de otras regiones, quienes siempre cultivaron con estoica esperanza esa gran frase compartida por los capos de la mafia y el crimen organizado y martillada continuamente por el gordo jefe del clan Ochoa, en que «algún día Colombia sería controlada (gobernada) económica y políticamente por ellos», el cartel de la cocaína.

La familia Uribe había entrado a ser parte de los terratenientes de Antioquia con haciendas en varios puntos del departamento destinadas a la ganadería y a la crianza de caballos. Alberto Uribe Sierra era también un importante testaferro de los narcotraficantes con muchas propiedades en los departamentos de Antioquia y Córdoba.

Adiestrador de caballos, Alberto Uribe, en compañía de su hijo el actual presidente narcoparamilitar de Colombia, acudían a las ferias de caballos, compartiendo espectáculos y negocios con los principales capos de la mafia y el crimen organizado como los Ochoa, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, entre otros peligrosos mafiosos y quienes también poseían magníficos caballos de origen árabe y

español. Siguiendo la tradición de los narcotraficantes antioqueños, Alberto Sierra adquirió varias haciendas para la ganadería brava, entre las cuales resaltaban 'La Carolina', 'La Mundial', 'las Guacharacas' y 'San Cipriano', las cuales serían utilizadas de varias formas por los narcoparamilitares y la misma fuerza pública —Brigada XIV del Ejército— para torturar y asesinar campesinos, acusados generalmente de comunistas o de ser auxiliares de las guerrillas. Existen denuncias de obreros campesinos de la hacienda 'La Mundial', sobre asesinatos y persecuciones cometidos por los escuadrones de la muerte (también llamados paramilitares) y la fuerza pública. En 1989 llegaron los escuadrones de la muerte dirigidos por Carlos Castaño, asesinaron a dos campesinos, incendiaron las casas y obligaron a muchas familias a dejar la hacienda. En 1995 siendo gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, cinco helicópteros del ejército ametrallaron los cultivos de 'La Mundial', el comandante de la brigada del ejército de esa zona era el general Rito Alejo del Río. El 16 de noviembre de 1996 los escuadrones de la muerte se llevaron por la fuerza de la hacienda 'La Mundial' al trabajador Dairon Olarte Castaño, sin que hasta hoy se conozca su paradero. Líderes sindicales uno a uno fueron víctimas de asesinatos y desaparición forzosa. Entre 1983 y 1997 doce trabajadores campesinos fueron asesinados en dicha hacienda. El Banco de Datos establecido por el Cinep⁷ (Centro de Investigaciones y Educación Popular) sobre la violencia política en el departamento de Antioquia y titulado 'Deuda con la Humanidad', presenta un informe detallado de 14.476 crímenes cometidos por agentes del Estado y escuadrones de la muerte en el periodo comprendido entre 1988-2003, y en la página 168 hace alusión a denuncias de las organizaciones campesinas de Antioquia sobre desapariciones y homicidios cometidos por los escuadrones de la muerte contra trabajadores de la hacienda 'La Mundial' de propiedad de Álvaro Uribe Vélez. Uribe posee además dos fincas en el departamento de Córdoba (cuna del narcoparamilitarismo), una cerca de Montería llamada Ubérrimo 2.000 hectáreas y la otra de 23 hectáreas también cerca de Montería y que limita con la hacienda del criminal narcoparamilitar Salvatore Mancuso. En Tierra Alta, departamento de Córdoba, la gente comenta en voz baja que los jefes narcoparamilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso obsequiaron una *finquita* a la familia Uribe, de aproximadamente 26 mil hectáreas y que fue escriturada en Montería a nombre de Santiago Uribe, hermano del capo presidente Álvaro Uribe, y quién posee un expediente judicial en la fiscalía por los delitos de concierto para delinquir y asesinato.

Álvaro Uribe Vélez comenzó su carrera narcopolítica como director de la Aeronáutica Civil. Nombrado por el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala en 1981⁸ en reemplazo de Fernando Uribe Sénior, (ningún lazo familiar con los Uribe) asesinado por la mafia por haberse negado a otorgarles licencias y por haber cerrado varios aeropuertos clandestinos desde donde salían toneladas de cocaína. Entonces es nombrado Álvaro Uribe Vélez, y los primeros comentarios de los politiqueros que se escucharon por aquí y por allá, fue el de que no duraría mucho en ese cargo, mismo si fuese un recomendado de Bernardo Guerra Serna, un demagogo político, corrupto y experimentado que llevaba años haciéndose reelegir al senado a base de compra de votos, componendas y toda clase de chanchullos. Los más pesimistas se atrevieron a decir que lo matarían. Pero nada le paso al joven Uribe, por cuanto permaneció dos años y cuatro meses al frente del máximo organismo de control aéreo del país. Tiempo en el cual le fueron aprobadas licencias a reconocidos narcotraficante del Cartel de Medellín, entre los que podemos contar Pablo Escobar, Carlos Ledher (condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por narcotráfico), Jorge Ochoa Vázquez (preso en Estados Unidos) y Samuel Alarcón.

⁷ Desde hace varias décadas, las asociaciones de víctimas y las organizaciones de Derechos Humanos vienen documentándose y denunciando estos aberrantes hechos, tratando de romper esa impunidad que reina en el país desde hace más de cinco décadas.

⁸ Este gobierno se caracterizó por su terrible represión ejercida bajo el 'Estatuto de Segunda'. Gran número de estudiantes, sindicalistas y opositores políticos fueron encarcelados, torturados en las Brigadas Militares y la mayoría fueron asesinados o encarcelados, torturados en las Brigadas Militares y la mayoría fueron asesinados o desaparecidos. Mientras tanto el narcotráfico y los escuadrones de la muerte gozaban de una total libertad. Turbay participo activamente en el auge del comercio de las drogas.

Pero la lista no paró ahí, y de nuevo surgieron mas nombres de narcotraficantes a los cuales la Aeronáutica les había otorgado licencias, figurando: Gonzalo Rodríguez Gacha, alias 'el Mexicano', hombre cruel y sanguinario, fundador y patrocinador con Pablo Escobar de los primeros y modernos Escuadrones de la Muerte, autores de horribles masacres de campesinos, mujeres y niños. Alfonso Ramón Rodríguez Muñoz, Luis Eduardo Marín Marín, propietarios todos ellos de una flotilla de 12 helicópteros, 26 avionetas y cuatro aviones.

El Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, uno de los primeros dirigentes políticos asesinados por el cartel de la droga, ordeno en 1982 paralizar aproximadamente una 50 aeronaves pertenecientes a los principales capos de la cocaína, argumentando enseguida, que esa medida no representaba siquiera un 10 por ciento del poder del Cartel de Medellín; mientras tanto el flamante director de la Aerocivil Álvaro Uribe, se paseaba por los aeropuertos del país en donde llegaban las cuadras de caballos para el clan Ochoa, liderado por el flamante Fabio Ochoa. Manera muy sutil de estos narcotraficantes de disimular sus negocios de droga con los negocios de cualquier hacendado o comerciante de caballos.

El 4 de marzo de 2002 fue asesinado en Bogotá Cesar Villegas, apodado 'El Bandi', especialista en transporte aéreo —hizo estudios en Canadá— y luego de volver al país en 1980, su padrino político Ernesto Samper Pizano, se lo recomendó al recién posesionado director de la aeronautica civil Álvaro Uribe Vélez, quien de inmediato lo nombro como jefe de planeación. Con el correr del tiempo se convertiría en uno de sus mejores amigos y socio. Según reportes, Villegas tenía cita, el día siguiente de su muerte, con un agente estadounidense perteneciente a la DEA, para hablar varios asuntos y en especial sobre Álvaro Uribe Vélez. En ese momento Cesar Villegas mantenía excelentes contactos con el clan Rodríguez Orejuela, cabecillas del Cartel de Calé. Con la muerte del 'Bandi', según testimonios excepcionales, el conflictivo pasado de Uribe se desvanecía. Al momento de abandonar su gestión en la aerocivil, Villegas enfrentaba vaños procesos abiertos por la Procuraduría General con relación a la expedición irregular de licencias de vuelos a empresas de los narcotraficantes. Sin embargo esto no le impidió fundar la empresa «VTS Proyectos e Inversiones» en la cual aparecía como socia Strauss Jacquin, nada más y nada menos, que la esposa del que sería presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano⁹. También fundó una empresa llamada «Taller de Ensamble» encargada de importar y vender cabañas de madera importadas del Canadá, en la constitución de la empresa no figura el ex director de la aeronáutica Álvaro Uribe¹⁰, pues quedó en la sombra y en su lugar se inscribió como socio al arquitecto Héctor Jaime Cuesta Escobar. Tiempo después la empresa cambió de razón social llamándose «VC Maderas» destinada a comprar casas prefabricadas a una empresa canadiense llamada «Maison d'Autrofois» de Quebec y venderlas en el mercado dominado por el narcotráfico. Dichas casas prefabricadas, fueron también adquiridas por varios políticos cercanos al narcotráfico. Entre 1992 y 1994 Villegas recibió sendos cheques por un monto aproximado de 70 mil euros de parte del narcotraficante Rodríguez Orejuela, lo cual le valió una condena de cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito'. La suma era irrisoria comparada con la fortuna que comenzaba a amasar 'El Bandi', futuro mecenas del futuro gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez.

Los contactos y negocios de Álvaro Uribe con la mafia no cesaron nunca, y fue así, que siendo Alcalde de Medellín asistió a la reunión semiclandestina organizada por los cuatro narcocriminales mas importantes del momento: Carlos Ledher, Pablo Escobar, Fabio Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha, tal vez el más sanguinario de los cuatro.

Uribe fue recogido por un helicóptero de propiedad de uno de los narcotraficantes y llevado al lugar de la reunión, no se sabe con exactitud la fecha de dicha reunión, pero se calcula que se llevo a cabo a

⁹ Presidente de Colombia 90/94 cuya campaña presidencial fue adornada con millones de dólares del narcotráfico

¹⁰ El 17 de febrero del 2002, el hoy presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, declaro a las cadenas de radio Caracol y RCN de Bogotá, que cuando fue director de la Aeronáutica hizo «una gran labor que el país en su momento premió».

finales de 1982, en cuanto al contenido de la misma, es de suponer que los delincuentes no deseaban tomarse un café con el alcalde de Medellín, o que la reunión fuese por mero placer de hablar. El angustiante hecho era el de que la mafia comenzaba a gobernar en el departamento de Antioquia y se estaban metiendo en todas partes. Es así que el Medellín de entonces era llamado el 'Santuario', debido a la completa protección de que gozaban los traficantes de droga por parte del gobierno local, en aquella hermosa y primaveral ciudad. La mafia ya había comenzado a infiltrar las campanas políticas. El entonces gobernador de Antioquia de la época en que Uribe fue alcalde, un político de apellido Villegas, hombre chapado a la antigua y marrullero como todos los demás, supo poco tiempo después de la clandestina reunión de Uribe con la mafia, montó en cólera e inmediatamente pidió una investigación interna y envió una nota a Bobota al presidente Belisario Betancur. El gobernador Villegas conocía el pasado de los Uribe y sus poco frecuentables amigos, por lo cual estaba atento a cualquier desliz del alcalde Álvaro Uribe Vélez. El gobernador citó al alcalde para pedirle cuentas sobre dicha reunión y obligarlo a renunciar, a lo cual Uribe se negó rotundamente. Esos caciques politiqueros antioqueños fueron enterados del caso y con juntamente con el presidente Belisario Betancur, simuló una crisis política y pidieron a Uribe su renuncia protocolaria¹¹. Ante tal presión de una parte y la ventajosa propuesta, el alcalde Uribe muerto de ira, tuvo que renunciar. La Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), resume así, motivos de la renuncia del desafortunado alcalde:

«En ese tiempo, Uribe se vio envuelto en al menos dos proyectos en los cuales también estuvo Pablo Escobar: Uno era la construcción de un barrio para gente pobre conocido como 'Medellín sin Tugurios' y el otro un programa cívico que condujo a la plantación de miles de árboles en la ciudad. Pablo Escobar financió ambos proyectos en un intento por mejorar su imagen pública y Uribe apoyó públicamente ambos esfuerzos. Incluso, Uribe inauguró el nuevo barrio cuando era bien sabido el hecho de que casi toda la cobertura de prensa positiva sería para Escobar».

La Agencia de Noticias Nueva Colombia, (ANNCOL) también cita al periodista Fernando Garavito autor del libro 'La Biografía no Autorizada de Álvaro Uribe Vélez', amenazado de muerte y exiliado, escribiría en una de sus columnas en la prensa bogotana.

«Garavito señaló que durante el tiempo que Uribe fue director de la Agencia de la Aeronáutica Civil de Colombia (1980-1982) numerosas licencias de pilotos fueron dadas al Cartel de Medellín permitiendo a sus pilotos volar con grandes cantidades de cocaína fuera de Colombia y hacia o dentro de los Estados Unidos. Uribe fue supuestamente retirado del cargo por esta irregularidad».

En los pasillos del Departamento Antinarcóticos de los Estados Unidos se murmuraba que el alcalde de Medellín había sido echado de la alcaldía por narcotraficante.

Siguiendo con las coincidencias que han rodeado el camino político del controvertido Álvaro Uribe y al que sería su secretario de gobierno en la gobernación de Antioquia, además de entrañable amigo y Consejero presidencial Pedro Juan Moreno Villa¹²; ya se leía en la prensa la participación de este ganadero ultraconservador apoyando los más terroríficos grupos de extrema derecha. Grupos criminales creados por la fuerza pública y el Cartel de Medellín y que según noticias de prensa de la época (1983), se dedicaba a hacer trabajos de "limpieza social"¹³ en las regiones del Magdalena Medio y Puerto Barrio.

¹¹ Libro "La biografía no autorizada de Alvaro Uribe Velez". Editorial La Oveja Negra, Bogotá, 2002

¹² Moreno Villa, siempre fue un hombre controvertido, ya fuese como ganadero o como político. Acusado de importar insumos para la fabricación de cocaína, sería amigo y cercano colaborador de Uribe gobernador y asesor de Uribe presidente. Se destacó por su extremo conservatismo y sus ideas de extrema derecha. Fue retirado en su calidad de asesor presidencial por fuertes discrepancias con Uribe. Murió en un extraño accidente de helicóptero.

¹³ Asesinato de vagabundos, prostitutas y hasta líderes de izquierda que asimilaba con los delincuentes.

El 22 de agosto de ese mismo año, la prensa nacional informaría que «a las 3 de la tarde del pasado domingo se produjo un encuentro trascendental en la Cuarta Brigada del Ejército, en Puerto Barrio... Veinte ganaderos de la región se reunieron con el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla —asesinado meses más tarde por la mafia y el Procurador General de la Nación Carlos Jiménez Gómez... Tuvo que ser un encuentro dramático por que entre los veinte ganaderos había tres que aparecieron en la célebre lista que promulgo la Procuraduría como integrantes del MAS... Su presencia en masa ante el ministro y el procurador es ciertamente una respuesta a un rumor que circula en todo el país: un sector de los ganaderos esta vinculado a la acción de limpieza de Puerto Barrio y del Magdalena Medio». En el país corría el rumor que grupos armados de extrema derecha, asesinaban a diestra y siniestra con la complicidad de personalidades de la región y miembros de la policía y el ejército y quienes hablaban sin descanso de defenderse de la inseguridad y la delincuencia.

Días después, el 6 de agosto el diario El Colombiano de Medellín, publicó en su primera pagina una noticia en relación con el dicho encuentro: «Procurador ratifica enérgica posición frente al MAS» pero curiosamente, allí se leía también que 'Pedro Juan Moreno Villa, en nombre del gremio ganadero de Antioquia envió un mensaje al Procurador en el que le expresaba «profunda satisfacción por su cambio de actitud asumida por su despacho en relación con la difícil situación de orden público y la seguridad de la región del Magdalena Medio', durante la visita que el alto funcionario hizo recientemente a la localidad de Puerto Barrio». Con esta noticia, se quería dar a entender que el Procurador estaba de acuerdo con los grupos civiles armados, es decir con el ideario de los políticos de extrema derecha.

Al día siguiente en su pagina 12 A el periodico incluye el texto de la carta del Procurador Jiménez Gómez:

«Excusome decirle no entiendo su mensaje ni lo que significan para usted comprensión y cambio de actitud, todo lo cual obligame a hacerle algunas precisiones que considero indispensables para evitar equívocos institucionales que podrían traer graves males... Aprovecho esta ocasión para reiterar cuanto he venido diciendo al país anteriormente: que tengo que cumplir con mi deber, que sin ánimo persecutorio continuare denunciando todos los fenómenos contrarios a la salud del país en una labor que no puede reconocer tregua alguna y que deploro los acontecimientos de justicia privada como la amenaza de una guerra civil que tenemos que detener entre todos si no queremos ver naufragar la nación en un baño de sangre».

El Procurador había firmado su condena de muerte, no solo por su firme actitud contra los grupos privados de justicia, sino también por su frontal lucha contra las drogas. Y como vaticinio ajustado a la realidad del momento y que sería el futuro destinado al país por la mafia, acertó en lo que se vive hoy en día: El naufragio del país en ríos de sangre.

Y en Colombia, como tal vez en otros países también, los delincuentes de cuello blanco caen parados, el cínico, confabulador y pérfido político Álvaro Uribe, lograría tiempo después hacerse elegir al Senado de la República. La política colombiana había entrado en una dinamica de corrupción total. Y los asesinatos contra políticos opositores a la mafia y funcionarios públicos que la combatían, comenzaron a ser una triste realidad. Estando Uribe en plena campaña política para el Senado de la República, el cotidiano El Nuevo Herald de Miami (11 marzo 1984), anunciaba al mundo la incautación por parte de la Policía colombiana y el Departamento Antinarcóticos estadounidense, (DEA) de un helicóptero de propiedad de Álvaro Uribe Vélez en la llamada «Operación Yará». En el vasto complejo de 550 hectáreas de terreno, se encontraron 7 pistas de aterrizaje y 14 fábricas para producir 20 toneladas semanales de cocaína. El helicóptero era un Hughes 500, modelo 369D con matricula HK 2704¹⁴, importado a

¹⁴ Entonces la información dada por la prensa de Bogotá, en el sentido de que 'los guerrilleros de las FARC dinamitaron el helicóptero' es tendenciosa, por cuanto dicho aparato siguió siendo utilizado por la mafia del narcotráfico. Por su parte la prensa de Medellín afirmo 'los guerrilleros ametrallaron y dejaron completamente inservible el helicóptero...'. Información tal vez inexacta. Lo que nos deja abiertos a la versión de los campesinos de la zona, quienes dijeron que Alberto Uribe Sierra fue asesinado por la mafia, por torcido.

Colombia por Alberto Uribe Sierra el 27 de octubre de 1981 y al cual se le habría otorgado la licencia de operaciones y la matrícula en un tiempo record de 4 horas, en lugar de 20 días como es la norma, el director de la Aeronautica Civil de ese entonces, se denominaba Álvaro Uribe Vélez y su más cercano colaborador Cesar Villegas.

Durante su paso por el Congreso de la República, Uribe se caracterizó por su oposición a la ley de extradición. Acuerdo entre los dos gobiernos que obligaba al de Colombia a enviar a cualquiera de sus ciudadanos acusados de narcotráfico a Estados Unidos, cuando alguno de estos fuese requerido por la justicia de este país. Al parecer Alvar Uribe, era un Senador convencido de preservar la soberanía de su país para juzgar a sus nacionales en su propio territorio, pero otra muy distinta ha sido su posición en tanto que presidente, teniendo en cuenta su cercana con la renovada plana mayor del Cartel de Medellín y sus demostrados vínculos con el antiguo cartel de su tierra natal, y que heredaba Pablo Escobar Gaviria.

Para esa época, la familia Uribe, contaba con buenas relaciones con los capos del Cartel de Medellín y esta amistad daba para defender los intereses comunes y evitar cualquier injerencia o sometimiento jurídico a cualquier potencia extranjera y en especial a la de los Estados Unidos. Pero eso no era todo, por cuanto el narcotráfico había logrado sentar varias de sus fichas en el Congreso de la República, para simplemente sabotear la aprobación de la ley que daba vida libre a la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos, acusados de narcotráfico¹⁵. En 1983 el Senador Rodrigo Lara Bonilla, y posterior Ministro de Justicia del gobierno de Betancur, asesinado por la mafia, había denunciado que alrededor de diez parlamentarios pertenecientes a los departamentos de la Guajira, Magdalena, Atlántico, Antioquia y Córdoba estaban vinculados al narcotráfico. Y Fueron precisamente estos narcocongresistas, quienes se idearon la forma para que dicha ley de extradición, fuera presentada ante el pueblo colombiano para su aprobación por medio de un referendo, y así poder influenciarlo mediante actos tanto de propaganda como de terrorismo programado por los carteles de la droga, con la participación de empresarios, políticos y una parte de la fuerza pública.

Otro de los grandes exponentes del tal referendo, fue un político provinciano cercano a Pablo Escobar, y muy poco conocido llamado Mario Uribe Escobar, primo hermano del presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, actualmente senador de la República. El forcejeo entre los pro y los contra, estaba en su pleno apogeo, pero el país no lograba tomar la decisión salvadora, pues los oscuros intereses de la mafia, iban ganando terreno y sus narco-dólares comprando mas y mas conciencias. Los políticos de los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, siempre pendientes de sus intereses personales y de partido, no prestaban atención al sistema mafioso que empezaba a gangrenar el país y sus principales instituciones, o tal vez no querían ver ese grave problema, por conveniencia o por estar ocupados en como participar en la repartición de la apetitosa torta estatal.

La bancada Liberal, partido en el poder para el año 1989 y en el cual, hacían carrera varios narcocongresistas —Jairo Ortega, Tiberio Villarreal, Jaime Arizabaleta, Álvaro Uribe, Cesar Pérez, Alberto Santofimio Botero entre otros—, convocaría a todos sus senadores, 54 en total, a una reunión urgente para salvar el país de las garras de la mafia y de la criminalidad. El gobierno Liberal del Presidente Virgilio Barco Vargas le habría dicho a los congresistas reunidos que debían definirse si estaban con el narcotráfico o si estaban con el gobierno. Como la reunion fue informal, todos los alii presentes pudieron expresarse sin tapujos. Lo hicieron entre otros David Turbay, procesado y condenado años más tarde por sus vínculos con el narcotráfico; Federico Estrada Vélez, asesinado por la mafia en oscuras circunstancias y Álvaro Uribe Vélez, los cuales no estuvieron a favor del gobierno. Uribe diría que no se podía estar a favor de la extradición de colombianos para ser juzgados en el exterior. Años mas tarde, cuando sus aspiraciones presidenciales se concretizaron y sus adversarios políticos le enrostraban su

¹⁵ Es indispensable aclarar que en Colombia, ciudadanos honestos y patriotas se han opuesto a la extradición de sus conciudadanos por razones humanitarias, sobre todo a Estados Unidos. Más aun, cuando se tiene conocimiento del abominable sistema carcelario estadounidense.

sumisión frente a los extraditables, Uribe negó todo compromiso con las reglas dictaminadas por la mafia, y como es su costumbre, dijo que cuando se desempeñó como senador, hizo una labor transparente, de cara al país y que estuvo de parte de los que apoyaban la extradición.

El caso es que el gobierno del señor Barco, transcurrió con más pena que gloria, su temida lucha contra la mafia dejó un gran espacio para que esta, de la mano de los políticos tradicionales, continuara tomando posesión de las instituciones del Estado y se fuera afianzando en todo el territorio nacional.

En los años 1995-1997 Álvaro Uribe Vélez, ocuparía el cargo de gobernador del departamento de Antioquia, años después de haber ocupado por un corto periodo el de alcalde de Medellín con su consabida y catastrófica salida. Como gobernador impulsaría las CONVIVIR —Cooperativas de Vigilancia Privada—, que serían creadas con campesinos civiles armados para luchar contra la delincuencia y la inseguridad —según planteamientos del nuevo gobernador, su asesor estrella Pedro Juan Moreno y la plana mayor de los poderosos ganaderos—, además, sus miembros deberían convertirse en delatores incondicionales de las fuerzas armadas y de policía. Pero en realidad, las Convivir habían sido conformadas para defender los intereses de los terratenientes de la región, proteger a los carteles de la droga y aterrorizar al campesinado supuestamente acusado de ser auxiliar de las guerrillas de izquierda.

Con el correr del tiempo se convertirían en temibles Escuadrones de la Muerte (solemnemente llamados por las elites y la poderosa prensa, Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), asesorados y asistidos por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Servicios Secretos (DAS), tolerados por el Estado Colombiano y financiados por los carteles de la droga. Lo anterior con un abierto beneplácito por parte de los diferentes gobiernos de los Estados Unidos, que han participado con hombres, armamento y dinero. Aun cuando los Estados Unidos sigan hablando de su pretendida lucha contra las drogas, y que deviene más exactamente una lucha frontal contra el movimiento guerrillero y el partido comunista. Sin mucha pérdida de tiempo, las Convivir de Uribe, se fusionarían con los pistoleros y sicarios de los Carteles de las drogas, para devenir un solo grupo criminal, sanguinario y despiadado, responsable de más de mil masacres y cientos de miles de muertos.

En 1997 agentes de la DEA decomisaron en California 50 toneladas de permanganato de potasio, las investigaciones relacionadas con el asunto, demostraron que estos insumos, suficientes para fabricar 500 toneladas de cocama (en caso de que estuvieran destinadas a ese propósito) con un valor de 15 mil millones de dólares en el mercado, fueron importados por la empresa GMP Productos Químicos, con sede en Medellín y de propiedad de Pedro Juan Moreno Villa. Estos datos fueron ratificados por la DEA, Donme R. Marshall, en un documento del 3 de agosto de 2001. En el momento del decomiso Moreno era el secretario de gobierno de Uribe Vélez en Antioquia. Durante esos años, según Marshall, GMP fue el mayor importador de permanganato de potasio en Colombia. Con The Narco News Bulletin, podemos reconstruir la siguiente historia:

«En noviembre 17 de 1997, un barco chino arribó a los muelles de Long Beach, California, cargando 20 toneladas de permanganato de potasio, destinado a GMP. Un mes más tarde, en diciembre 16 del mismo año, otra nave china, atracó en Oakland, con destino a la misma empresa y también con 20 toneladas del precursor químico.

Cronométricamente, un mes después, en enero 17 de 1998 una tercera nave llegó a Long Beach, también con un cargamento para Moreno, pero con solo 10 toneladas de dicha sustancia. El servicio de aduana de los Estados Unidos (USCS por sus siglas en inglés) detuvo las embarcaciones. Según Marshall¹⁶, 'no hubo ningún aviso previo a la DEA sobre el cargamento'. Y de acuerdo con la ley 21

¹⁶ El número de archivo del caso civil de la DEA es: FR doc 00-21482. La orden de Marshall puede consultarse en www.deadiversion.usdoj.gov/fed/rgs/notices/2000/fr08237.htm.

U.S.C 971 (a) 'cada persona registrada que importa o exporta un químico especificado a, o desde, los Estados Unidos, requiere notificar previamente sobre la importación o exportación, con un plazo de hasta quince días antes que la transacción tenga lugar'.

El tema de los precursores químicos es grande. “Así como la planta de coca no crece en Estados Unidos —dice el periodista Giordano, director de narco news —el permanganato no se produce en Suramérica.

La cocaína como la conocemos no sería posible, sin las exportaciones de este químico hacia los países productores, provenientes de los países europeos Estados Unidos y China.

Normalmente cuando los oficiales estadounidenses decomisan una cantidad masiva, convocan a la prensa y a la televisión y proclaman una 'victoria' más en la guerra contra las drogas'.

Pero con el cargamento destinado a Moreno Villa no paso nada. Usualmente las compañías de los Estados Unidos deben notificar a la DEA de ese tipo de embarques. Cuando no la hacen, las multas que se les imponen son enormes. El 14 de enero del año 2000, el diario Hartford Courant informo que la empresa Connecticut MacDermid Inc., pagó 50 mil dólares al gobierno federal por no reportar una venta de 500 kilos de permanganato de potasio. Mac Dermid vendió el químico a compradores legítimos, — anuncio el periódico— 'Pero el gobierno sostiene que falló al no notificar esa venta para exportación'. Entonces «Si se le hubiera aplicado la misma ley a Moreno, habría tenido que pagar una multa de 5 millones de dólares.

Pero como se trata de un aliado político de los Estados Unidos, las autoridades guardaron silencio». El asunto tardo tres años en ser denunciado.

La orden de suspender el zarpaje —escribió Marshall— estableció que la DEA creía que el mencionado químico podría ser mal utilizado, basándonos en la falla al notificar a la DEA del embarque, en la violación a la ley 21 CFR 1313.31, en las asociaciones entre la GMP y otras compañías químicas delictivas en Colombia y en otras prácticas de alteración de GMP». Pero según parece «los vivos oficiales de aduanas en Long Beach y Oakland quizá no se habían percatado de que se paraban en el lugar equivocado: tres naves cuyo viaje no debió ser interrumpido». Marshall explico porque: «GMP es una compañía fundada en 1938 que distribuye productos químicos, con cuatro oficinas en Colombia. Su presidente, Pedro Juan Moreno Villa, ha trabajado en las juntas directivas de otras compañías en Colombia. Además, de 1995 a 1997, fue secretario del gobierno de Antioquia».

Los propietarios del cargamento demandaron a la DEA para buscar la entrega de las 50 toneladas. El caso fue sometido a la decisión de un Juez civil, Gail Randall. Dentro del juicio se preguntó por qué la compañía de Moreno no dio aviso previo a la DEA, y Marshall aportó una declaración según la cual «el permanganato de potasio y el acido clorhídrico son químicos de la lista II, que pueden ser usados para una variedad de propósitos legítimos, pero también para la manufactura ilícita de cocama. Entre 1994 y 1998, GMP fue uno de los más grandes importadores de permanganato de potasio en Colombia.

Desde 1994 aproximadamente, la empresa tuvo negocios con Eland, una compañía de Hong Kong. Desde 1996 hasta 1998, Eland le vendió a GMP un exceso de 200 toneladas de permanganato de potasio... Desde luego que hay otros usos legales de utilización de dicho producto, como por ejemplo, la manufactura de tabletas impresas para circuitos electrónicos y otros productos de alta tecnología, pero esos no son precisamente ningún soporte de la economía colombiana. Este es precisamente uno de los agujeros por donde la ilícita industria de la droga desliza cada año 500 mil millones de dólares».

Según Marshall, los Estados Unidos tuvieron problemas con los reportes de algunos agentes colombianos, que encontraron que GMP importaba grandes cantidades de permanganato, burlando permanentemente las leyes de ambos países. El jefe de la DEA escribió: «La Dirección Nacional de

Estupefacientes (DNE) es la agenda del gobierno de Colombia que emite, revoca y renueva los permisos de uso de químicos a individuos o compañías que manejan sustancias controladas. La DNE establece la cuota de químicos que pueden importar, por mes, los autorizados. Si un individuo o una compañía quieren manejar una cantidad superior a cinco kilogramos, o a cinco litros de un químico controlado por mes, debe obtener la autorización... En junio 10 de 1997, la Policía Nacional colombiana inspecciono los registros de la GMP y encontró que en nueve ocasiones, la compañía no había proporcionado la información requerida concerniente a la venta de 2.450 kilos de permanganato de potasio...

«El 15 de diciembre de 1997, —según Marshall— la Policía Nacional colombiana inspecciono los registros computarizados que la GMP tema desde 1991, y encontró direcciones y teléfonos que no existían, también varios números telefónicos que no correspondían a las direcciones anotadas en las facturas. Habían facturas, que tenían la misma fecha a nombre de diferentes personas, con la misma dirección y número de teléfono. Cada factura reflejaba una venta de 46 kilogramos de permanganato de potasio, por debajo de la cantidad permitida. También la policía descubrió que las personas anotadas en las facturas no habían adquirido en realidad el permanganato de potasio, aunque sus identificaciones personales habían sido utilizadas para obtener el controlado producto. En una carta del 22 de enero de 1998, la policía concluyo que la GMP 'podría ser culpable de vender sustancias químicas controladas, para lo cual se utilizaron direcciones ficticias, así como nombres de personas inexistentes, y estaría realizando venta de químicos controlados, en cantidades mayores no autorizadas por la Oficina del Director Nacional de Narcóticos sin tener una licencia de la Dirección Nacional de Estupefacientes'».

La DEA por su parte siempre ha creído que quien o quienes han controlado el permanganato de potasio en Colombia, controla y controlará el tráfico global de cocaína procesada.

Los precursores químicos incautados nunca llegaron hasta las bodegas del secretario de gobierno Moreno, en Medellín. Pero según la DEA, doscientas toneladas fueron vendidas por esta compañía en el tiempo en el cual Pedro Juan Moreno, fue secretario de gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Antioquia.

En la prensa colombiana apareció la información, (24-05-1999) que agentes de los dos gobiernos colombiano y estadounidense, llegaron a la conclusión de que la empresa de Moreno Villa había vendido precursores químicos a diferentes personas, cuyo destino final era la misma dirección, y para lo cual no tenía autorización, que habían importado permanganato de potasio en una cantidad superior a la autorizada; y que llevaba un doble libro de control para los negocios que realizaba con base en ese producto. Sin embargo, La Dirección Nacional de Estupefacientes 'anuló el certificado de carencia de anotaciones por narcotráfico' a GMP y a Moreno Villa. La decisión fue posteriormente confirmada.

De todas maneras, las investigaciones de la DEA demostraron que en los años en que Moreno Villa importó el permanganato de potasio desde China, llegaron al departamento de Córdoba y a la región de Urabá enormes cantidades de este producto con destino a Carlos Castaño (reconocido narcotraficante de la costa norte del país y uno de los supremos cabecillas de los escuadrones de la muerte). Así pues, vemos como desde un principio el político Álvaro Uribe se rodea de gente de dudosa honorabilidad.

El 16 de marzo de 1996 el gobernador de Antioquia, envió una misiva al gobierno de los Estados Unidos, en la cual sentaba una enérgica protesta, por su falta de respeto y trato despectivo en contra del ministro de justicia apellidado Medellín, es como si un secretario de Estado norteamericano se apellidase Washington.

El funcionario encargado de ubicar el departamento de Antioquia, comenzó su trabajo pulsando sobre Antioquia/95, encontrando un informe en el cual el gobernador de ese departamento pedía las fumigaciones contra los nuevos cultivos de amapola que comenzaban a aparecer en el noroeste de Antioquia. En su informe, el gobernador Uribe, manifestaba que había propuesto al gobierno colombiano

la fumigación inmediata de los cultivos de amapola que comenzaban a proliferar en varios municipios del departamento de Antioquia.

Este si es un verdadero amigo —Dijo uno de los novicios funcionario estadounidense— por fin un funcionario inteligente. Nos convendrá estar atentos a la carrera del señor Uribe.

Lo que no sabia el feliz funcionario era que el señor Álvaro Uribe, gobernador del departamento de Antioquia ya tenía un largo expediente y no precisamente por ser amigo de Estados Unidos, si no mas bien, por ser amigo de los principales capos del narcotráfico, pertenecientes al Cartel de Medellín¹⁷. Se afirmaba también en el informe del gobernador de Antioquia, que el gobierno nacional se había opuesto a cualquier fumigación. Había sido un no rotundo'. La misiva terminaba con unos datos muy pobres sobre el cultivo de la amapola: «La mayor parte de los cultivos que han sido ubicados por la policía en Antioquia, son de carácter domestico y con una extensión de entre tres y seis hectáreas... Lo cierto es que el gobierno departamental no le temblara la mano para acabar con los cultivos ilícitos... Los mandatarios de los municipios afectados por este fenómeno, alegan que la aspersión aérea produciría daños ecológicos irreparables en esas aéreas, habitadas por pequeños cultivadores campesinos y sus familias»... El hecho esencial en el informe, era que el gobernador hablaba de aproximadamente 157 hectáreas de cultivos de amapola y para esa fecha Antioquia era el departamento en Colombia en donde se ubicaba la menor extensión de este cultivo, mientras que los cultivos de coca crecían vertiginosamente. Además que, las escalofriantes cifras de asesinatos y atentados ligados a la mafia, aumentaba escandalosamente, según las estadísticas del propio gobierno regional hablaba de 52.137 muertos en los últimos diez años en la guerra contra el narcotráfico¹⁸. Veamos las siguientes cifras: 1.104 atentados terroristas, el asesinato de 694 policías, 2 jueces, varios fiscales, 4 magistrados, sin incluir los miles de anonimos. Todos ultimados por el Cartel de Medellín de Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, el clan Ochoa Vázquez, con la complicidad de políticos, la fuerza pública, ganaderos y empresarios. Hombres públicos, asesinados impunemente por esta horda de barbaros, como por ejemplo: el gobernador Antonio Roldan Betancur, el ex alcalde de Medellín Pablo Peláez González y el Procurador de la Nación Carlos Mauro Hoyos. Resaltando también los cobardes asesinatos del medico y militante de los Derechos Humanos de Antioquia Héctor Abad Gómez, asesinado el 25 de agosto de 1987 y quien en diferentes oportunidades acuso al Ejercito y la Policía Nacional de participar con los escuadrones de la muerte, en las horribles masacres del 'El Aro' y 'la Granja', en el municipio de Ituango, con un saldo de vanas decenas de campesinas y campesinos horriblemente masacrados. La muerte anunciada de Jesús María Valle, reconocido profesor universitario y quien remplazaría al médico Gómez, en la direccion del 'Comité de los Derechos Humanos de Antioquia'. El doctor Valle, fue asesinado el 26 de febrero de 1998, un día después de concurrir a la fiscalía a responder por el delito de injuria y calumnia, que en su contra habían puesto miembros del Ejercito por sus denuncias contra la cuarta brigada por complicidad en las masacres del 'Aro' y la 'Granja' y el asesinato de más de 200 personas en todo el departamento. Jesús María Valle había acusado al comandante de la brigada Alfonso Manosalva, durante el periodo de gobierno de Álvaro Uribe, y su secretario Pedro Juan Moreno, por su 'conducta omisiva' frente a estas masacres. Según testigos del asesinato del doctor Valle en su propia oficina de Medellín, uno de los sicarios había dicho que «este hombre era muy importante para las Fuerzas Militares, nos venían jodiendo mucho»¹⁹.

¹⁷ La biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. Editorial La Oveja Negra, Bogotá, 2002

¹⁸ Fuente Gobernación de Antioquia 1996

¹⁹ "Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El cabecilla narcoparamilitar Salvatore Mancuso, en su confesión ante la fiscalía, ratificó las acusaciones hechas por el Defensor de los Derechos Humanos Jesús María Valle y añadió que el general Alfonso Manosalva le había proporcionado mapas y detalles para efectuar las masacres. Ocho días antes de su asesinato, Valle había demandado penalmente ante la Fiscalía al gobernador Álvaro Uribe y al comandante de la cuarta brigada de Medellín Alfonso Manosalva por los crímenes que estaban cometiendo los paramilitares en Ituango y en todo el departamento de Antioquia.

Entonces, ¿que buscaba Uribe Vélez, frente al gobierno de los Estados Unidos y que quería representar frente a los encargados de la represión contra el narcotráfico? No era su deber el luchar primero contra las miles y miles de hectáreas de cultivo de coca, en lugar de ocuparse de un centenar de cultivos de amapola y que el mismo describía como domésticos? (no era su deber reprimir a las compañías y personas, de su departamento, encargadas de importar los productos químicos que sirven para la elaboración de la cocaína y que no cumplían con los mas elementales requisitos? (no debía el, en tanto que primera autoridad del departamento, propiciar el castigo de los autores de tantos crímenes? (no era una de sus acostumbradas cortina de humo para desviar la atención del verdadero problema? (no era su carta de protesta, una forma de hacerse conocer?... Y tal vez lo habría logrado.

La situación de orden público con la legalización de las Convivir de Uribe, durante su mandato en la gobernación pasó a mayores no solo por su carácter armado, si no por el respaldo que ciertos sectores políticos liberales y conservadores de extrema derecha, ganaderos y empresarios le brindaron. En lugar de disminuir la criminalidad aumentaba considerablemente. Las familias campesinas que no se sometían a los dictámenes de estos grupos de seguridad privada, estaban condenadas al destierro en el mejor de los casos, pero muchas también fueron asesinadas por desobediencia o por la falaz acusación de ser auxiliares de la guerrilla. Entre tanto la poderosa prensa regional y nacional, repetía el discurso oficial, el cual consistía en que las Convivir, surgieron de una necesidad de la población civil para defenderse de la criminalidad. Si bien esta poderosa prensa, no alababa dichos grupos, tampoco los condonaba a sabiendas del terrible mal que pudieran causarle al país. Pues en efecto, estos grupúsculos de extrema derecha, La mano negra, Los tiznados, Jacob, Muerte a comunistas, Autodefensas, Los mirlos, La triple A y otros mas, se unieron a la mafia, ganaderos y terratenientes y con el aval y aportes de las fuerzas militares y de policía y mas adelante con el decidido apoyo de los industriales, aplicarían una política de tierra arrasada en casi todo el territorio nacional, en su lucha sin cuartel por el exterminio de la insurgencia de izquierda. Los resultados saltan a la vista, una década después cientos de miles de civiles muertos y desaparecidos y una guerrilla solida, intacta²⁰.

Fue con las Convivir de Uribe, que los escuadrones de la muerte —denominados en primer lugar Autodefensas Campesinas, para luego hacerse llamar Autodefensas Unidas de Colombia— lograron su despliegue nacional. Se consolidaron en Antioquia y Córdoba el ingresaron al eje bananero de Urabá asesinando a miles de campesinos y centenares de sindicalistas y desplazando a otros tantos miles de familias campesinas a las cuales les robarían sus tierras y propiedades. Las empresas bananeras le contribuirían con dinero y armamento a estas organizaciones criminales. Como gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez y su secretario de gobierno Pedro Juan Moreno Villa, se encargaron de atizar el fuego, redoblando el derecho de las Convivir a utilizar armas de largo alcance para, según estos dos funcionarios, brindarán una mejor colaboración a la policía y al ejército en su lucha contra la inseguridad y las guerrillas de izquierda²¹.

Para cierto sector de la prensa y ciertos periodistas de extrema derecha, (una especie de sirvientes de cuanto gobierno represivo asumía las riendas del país en cabeza de un tal Plinio Apuleyo Mendoza) aprobaba la errada política uribista e incluso la impulsaba como única salida contra la oposición armada de izquierda. El tal Plinio Apuleyo Mendoza, no dudaría en escribir artículos disculpando la incongruente y peligrosa labor política de Uribe, defendiéndolo sobre sus implicaciones con la mafia y lo que es mas

²⁰ Para el año 1996 cifras extraoficiales estimaban que el número de miembros de las dos principales guerrillas —FARC y ELN— eran aproximadamente de 10 a 12 mil combatientes. Una década después, se estima que el movimiento guerrillero posee más de 20 mil hombres y mujeres en sus filas. En su mayoría de extracción campesina y con una presencia femenina que se aproxima al cuarenta por ciento.

²¹ Revista Alternativa NQ 5, dic./1996

descabellado, haciendo llamados para la exterminación física de Colombianos, que según él, cooperan con la subversión o simplemente no son claros al no ofrecer una acérrima crítica hacia estos grupos, gracias a Apuleyo vaños colombianos fueron asesinados. Su servilismo y falta de ética, le serían premiados años más tarde por el propio presidente Uribe, nombrándolo embajador en Portugal. Mientras este periodista escribía sus diatribas contra todo lo que concernía con el movimiento social y alababa las políticas de la extrema derecha, la Secretaria de los Derechos Humanos y Libertades con sede en Madrid, condenó la visita de Uribe Vélez a España hecha el 29 de julio de 1997. El comunicado de la Organización Humanitaria, expresaba que el promotor de las Convivir «puso en marcha un modelo de Estado fascista, en el que se estimuló la participación de la ciudadanía, con el pretexto de generación de empleo. Con el apoyo de Harvard, continúa el comunicado, Uribe capacitó a 50 mil antioqueños en la 'negociación pacífica de conflictos', proyecto que sirvió de base para la conformación de las Convivir en 1994. Estas cooperativas han sido utilizadas por los narcotraficantes y los terratenientes para reprimir y aplicar la contrainsurgente política de 'tierra arrasada' en numerosas zonas campesinas...» Mientras Uribe, Moreno, su periodista de cabecera y poderosos sectores de la industria y el comercio defendían las Convivir de Uribe, numerosas ONGs nacionales e internacionales elevaron toda clase de denuncias sobre sus controvertidas actividades. A pesar de todo, el gobernador de Antioquia proseguía en su caprichosa empresa, y también después de las múltiples desaprobaciones de la Corte Constitucional.

Sin embargo, el cinismo y la maldad de este sátrapa es ilimitado, en su camaleónico proceder y su doble lenguaje con los cuales se ha caracterizado, Uribe declararía a la prensa nacional en 1996 que «Este año hemos recibido visitas de Amnistía Internacional y de American Watch, y ninguna de las dos organizaciones ha encontrado nada irregular en el funcionamiento de las Convivir»²². Desde que fueron creadas las asociaciones solo se ha registrado un caso de extorsión, que fue rápidamente neutralizado. Hay consenso, en cambio, en el papel tan positivo que han jugado en materia de seguridad. Y no son pocos los finqueros²³ que han podido regresar a sus fincas gracias a ellas...». El prisma por medio del cual Uribe lee los acontecimientos —económicos, sociales y políticos— del país, es muy suyo. Él siempre se ha caracterizado al afirmar cosas que se imagina y quisiera que fuesen así, o en el mejor de los casos, les da la importancia positiva, que él desea, pues son de su inspiración o pertenecen a su estrambótico ideal. En la misma fecha que Uribe le hablaba a la prensa de las bondades de las Convivir, las masacres de campesinos e indígenas por parte de estos grupos privados en armas no paraban de estremecer al país. En cuanto a los que él llama finqueros, eran en realidad terratenientes dueños de ricas tierras, pudientes ganaderos o nuevos propietarios de tierras (narcotraficantes), que no dudaban en ocupar otras tierras más amplias y productivas gracias a las Convivir que, mediante el robo, la intimidación, el chantaje, la amenaza o el asesinato se las arrebataban a pequeños propietarios. Familias enteras de campesinos, debieron huir para salvar sus vidas.

Pero también, otro era el decir de la organización holandesa de Derechos Humanos *Pax Christi* —con respecto a las afirmaciones de Uribe—, invitada por la Conferencia Episcopal a la región de Urabá, terriblemente azotada por la violencia. Liduwin Zumpwole, una de las tres representantes de la organización señaló: «No hay voluntad de paz, se sigue matando a las personas y es increíble que nadie diga nada» Así las cosas, agregaron las delegadas «una misión internacional de observadores se vería impotente para trabajar en Urabá, debido al temor y la intimidación que allí existen y que se manifiestan en la impunidad y la ley del silencio imperantes».

²² Uribe en su época de gobernador concedió varias licencias a “personajes” fundadores de las susodichas convivir, entre los que se cuentan narcoparamilitares como es el caso del clan Castaño y Salvatore Mancuso. Uribe, tenía pleno conocimiento del andar delictivo de estos “personajes”

²³ El término 'finquero' es bien utilizado por Uribe, queriendo abarcar el total de campesinos propietarios de grandes, medianas o pequeñas fincas. Pero en la realidad eran los grandes propietarios, Hacendados, quienes se beneficiaban del favor de las Convivir. La inmensa mayoría de pequeños finqueros y aun medianos finqueros, sostenía los combates criminales de estos grupos de seguridad privada, convertidos luego en paramilitares.

Con la fusión de las Convivir y los grupos de extrema derecha existentes, aparecerían los temibles escuadrones de la muerte financiados por el narcotráfico, pero también, por los poderosos ganaderos colombianos y sectores de la empresa privada y apoyados por las fuerzas armadas e importantes sectores políticos, que serían utilizados por el Estado colombiano en su cruzada anticomunista y la guerra contra las guerrillas de izquierda. Todo lo anterior, con el beneplacito de los diferentes gobiernos de los Estados Unidos, los cuales, han manejado una posición ambigua, ante la barbarie cometida por los escuadrones de la muerte contra la población civil. Y es que si la lucha norteamericana contra las drogas, ha sido una especie de 'palos de ciego', su lucha contra todo cambio en la política colombiana contrario a sus intereses, ha sido bien planificada, pasando por el desembolso de un buen presupuesto económico, destinado a sabotear cualquier cambio social o político en el país, acompañado de una abundante ayuda militar en esa fratricida guerra interna que vive el país, hace más de un siglo y que se ha polarizado desde los años cincuenta del siglo pasado. En el caso de Colombia, esta 'solidaridad' estadounidense data de varias décadas atrás y no ha tenido ninguna clase de reparo a pesar de la barbarie estatal. El genocidio de más de siete mil miembros de la Unión Patriótica, por parte de las fuerzas armadas del Estado y los escuadrones de la muerte, es uno de los ejemplos. La Unión Patriótica, nació como partido político después de los acuerdos de Paz de la Uribe Meta, región en donde en 1985 el grupo guerrillero PARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) firmó la Paz con el gobierno de Belisario Betancur. Sin embargo, se acusa a la cúpula militar y sectores de extrema derecha, de haber saboteado dichos acuerdos. Lo esencial, fue que del acuerdo de Paz nacería un nuevo partido político diferente a los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, que se habían repartido el poder durante más de ciento cincuenta años. Era una tercera fuerza política de izquierda, que irrumpiría en la escena política nacional en forma magistral, al lograr en las elecciones de 1986, una magnífica votación, en la cual lograría por primera vez en la historia del país, desbancar a los dos partidos tradicionales, obteniendo alcaldías, concejos municipales y varios diputados y senadores. La mayoría de ellas y ellos, elegidos popularmente, serían aniquilados sistemáticamente por los grupos criminales con la participación del Estado. Igual suerte corrieron los dos candidatos presidenciales de la naciente Unión Patriótica, el ex magistrado Jaime Pardo Leal, asesinado en 1987 y el ex diputado Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado en 1990. La persecución y asesinato de miembros y simpatizantes de la U.P., se efectuó hasta en sus propios hogares y lugares de trabajo, a altas horas de la madrugada, en plena luz del día, en la noche. *Las autoridades estatales nada vieron, nada escucharon, nada hicieron...*

El libro Colombia Nunca Más, ilustra vastamente la violencia que durante décadas ha impuesto el Estado Colombiano a sus ciudadanos, bajo diferentes formas y con 'razonables' pretextos. Leamos un pasaje destinado a los que fue el calvario del nuevo partido:

«La década del genocidio: La historia de las colonizaciones había marcado también el territorio de la zona séptima (sur del país). Se formaron poblaciones conservadoras en Villavicencio, Guayabal, Acacias y Restrepo, así como otras liberales en Granada, San Martín, San Juan de Arama, Fuente de Oro y El Castillo. En estas últimas el liberalismo sufrió profundas fracturas y sus vertientes más de izquierda se acercaron al Partido Comunista. En los municipios que nacieron a principios de los setenta como Vista Hermosa, Mesetas, Lejanías, La Macarena, Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Guitán el electorado fluctuó entre el liberalismo y el comunismo. Todo explica que la propuesta política que se originó en los Acuerdos de Paz con las FARC, hubieran encontrado una acogida significativa en la zona. Otro factor que hacía mirar con simpatía una fuerza política nueva, conformada por sectores sociales, duramente golpeados por el Estado y el establecimiento, era la enorme corrupción que se percibía en las capas gobernantes de la región, predominantemente liberales. El 28 de enero de 1985, como fruto de los mismos acuerdos de paz, se dio vida jurídica y política a la UNIÓN PATRIÓTICA. Su primer congreso finalizó el 16 de noviembre 1985 con la participación de 3.245 delegados, para esa fecha ya habían sido asesinados 70 de sus militantes en diferentes partes del país, de los cuales, por lo menos 4 en el departamento del Meta,: Giovanni Parra, en Villavicencio (en el mes de febrero), Joaquín Ernesto Toro (el 29 de julio en Granada),

Misael Rodríguez (el 22 de agosto en Vista Hermosa), Fabio López (el 30 de septiembre en Puerto Agitan), los cuatro eran campesinos de base... la cifra de víctimas de la Unión Patriótica para la fecha septiembre 1986, era calculada en 300 en todo el país, entre ellos Pedro Nel Jiménez, senador de la república por el departamento del Meta, y Leonardo Posada, representante a la Cámara por el departamento de Santander. A pesar de la evidente persecución a los militantes y simpatizantes de la recién creada fuerza política, rápidamente se convirtió en una alternativa de poder en los municipios de tradición liberal, pero sobre todo en las zonas de influencia del Partido Comunista o donde habían procesos fuertes de organización social. Las elecciones de 1986, así lo demostraron.

Los años que siguieron estuvieron marcados por el asesinato de numerosos dirigentes de las organizaciones populares y militantes de la Unión Patriótica...» Se estima en más de siete mil los muertos pertenecientes a esta organización a todo lo largo y ancho de la geografía nacional...

La testarudez del gobernador Uribe Vélez de armar grupos privados dio sus frutos, y fue así como en todo el territorio nacional, se fueron imponiendo estos grupos criminales que a la postre irían a formar un triangulo destinado a:

- 1) Defender los intereses económicos de los terratenientes y narcotraficantes.
- 2) Luchar militarmente contra las guerrillas de izquierda y
- 3) Hacer el trabajo sucio contra la población civil (torturas, asesinatos, masacres, desapariciones), que las fuerzas armadas no podían realizar abiertamente. Sin embargo, son miles de oficiales, suboficiales y soldados del ejército y miembros de la policía nacional, acusados a lo largo de estos últimos cuarenta años, de haber participado en asesinatos selectivos y masacres, muchas de estas, en asocio con los escuadrones de la muerte, desapariciones y fusilamientos de civiles (niños, mujeres embarazadas, indígenas, miembros activos de los derechos humanos, sindicalistas, abogados, periodistas, estudiantes y también de sus mismos compañeros de armas).

Según las estadísticas que reposan en los archivos del departamento de Antioquia, ya para el año 1995 los escuadrones de la muerte realizaron en Urabá, seis masacres con un saldo de 86 personas muertas. Se presentaron también 952 asesinatos en casos 'aislados', inferiores a 5 individuos. Otra de las masacres se efectuó en una discoteca de un barrio habitado por miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica. Después de unos días de tregua, los escuadrones de la muerte mataron a 6 miembros de la Unión Patriótica en Turbo. En Apartado un grupo desconocido detuvo un bus intermunicipal, hizo descender a todos sus ocupantes y después de atarles las manos a la espalda los ejecutó, eran 26 trabajadores de la zona bananera, una de las más azotadas por estos grupos criminales.

A su turno, el IPEC (Instituto Popular de Educación y Capacitación) señaló que en 1996 en Antioquia, «se registraron 55 masacres, en las cuales murieron 342 personas, en su mayoría campesinos. En ese mismo momento Apartado registro el mayor número de masacres, con un saldo de 52 personas muertas. Le siguieron Medellín, Mutatá y Turbo. Lo grave del caso es que la mayoría de estas masacres han sido cometidas por negligencia o complicidad de las fuerzas militares y de policía».

Durante la gobernación de Uribe Vélez fueron arrasados los movimientos campesinos en Urabá y creció el desplazamiento. Según testimonios hay dos terratenientes involucrados directamente en los sangrientos hechos: Javier Uribe y Gilberto Arbeláez.

De acuerdo con el informe del CINEP y Justicia y Paz en 1998, «Esos grupos de inteligencia y colaboración con las autoridades participaron activamente en la escalada de violencia que vivió el departamento de Antioquia, cuando se desempeñaba como gobernador Uribe Belez. Por ejemplo —dice el informe— en el trimestre de Julio a Septiembre de 1996, de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas

en el país, 104 corresponden al departamento de Antioquia. En el primer semestre de 1998, las víctimas de violaciones a los derechos humanos fueron 207 de las 668 en la totalidad del territorio... Cifras que representan los niveles de violencia alcanzados en uno de los departamentos con mayor presencia de la fuerza pública y de las Convivir...

En Antioquia, el proyecto de instauración de las Convivir, ha sido claramente abanderado por el ex gobernador Álvaro Uribe Vélez, incluso en contra o sin conocimiento de las autoridades municipales. A pesar de que los alcaldes, además de ser elegidos popularmente, son los responsables del orden público local, la creación de las cooperativas de seguridad, no les son siquiera comunicadas. Muchos de ellos se enteraron de la existencia de estas organizaciones armadas, gracias a las informaciones de prensa, y así lo manifestaron en carta al gobernador Uribe, los alcaldes de San Jerónimo, Mutatá, Copacabana, Jardín, Río Negro, Anorí, Andes, Necoclí, y Puerto Barrio». El departamento de Antioquia estaba en llamas y Colombia comenzaba a incendiarse.

Luego el Cinep transcribe apartes de la entrevista que el periódico El Colombiano le hizo al Personero de Medellín Rafael Alberto Patino, el 4 de marzo de 1998: «Nos tocó el periodo gobernado por Álvaro Uribe Vélez, quien insistió en una propuesta de fuerza y choque frente a la situación de orden público que vivía el departamento. Al principio de 1995, Antioquia tenía dos o tres zonas difíciles, y culminando el periodo de ese gobierno (Uribe), el departamento está en guerra. La administración municipal nunca tuvo noticia formal de las asociaciones Convivir... Durante el gobierno de Uribe Vélez se crearon unas Convivir ovejitas que eran las de mostrar, a las que debía tapársele muchas cosas, camuflándose en ellas las Convivir lobo, organizadas por el Ejército Nacional sin tener competencia alguna. En mi opinión todas las Convivir que están funcionando son ilegales».

En el mismo informe puede leerse algunos datos de importancia. Por ejemplo, a raíz de la masacre de 10 personas en La Herradura, que ocurrió el 14 de agosto de 1997, las autoridades judiciales hicieron un allanamiento a la sede de las Convivir, donde decomisaron las armas de fuego utilizadas para dicha masacre. El 10 de agosto de 1998 la Fiscalía capturó a cuatro integrantes de las Convivir acusándolos de la horrible masacre.

El Cinep reseña algunos casos de crímenes ocurridos durante la administración de Uribe. «La Fiscalía regional de Medellín llamo a juicio a Juan David González Quiceno, integrante de la mayor cooperativa comunitaria de vigilancia rural del departamento de Antioquia, 'La Accpal', por su presunta participación en el homicidio agravado de los indigentes: Giovanni Alberto Flórez Manco y Juan Bernardo Ossa Marín, baleados el 11 de noviembre de 1997 en el atrio de la Iglesia de La Veracruz de Medellín. (Es necesario señalar, que a partir de los años 1984 en adelante, comenzó a surgir en Medellín y a extenderse por todo el territorio nacional, la «moda» de exterminar todo 'desechable'. Para los grupúsculos de extrema derecha de la época, todo vagabundo, prostitutas, homosexuales, fumadores de marihuana y gentes sin domicilio fijo, entre los cuales se cuenta niños y niñas de la calle, deberían ser borrados del mapa nacional. Las autoridades civiles y de policía en general no tuvieron una actitud responsable y humana para detener este genocidio y fue así como en las calles de las principales ciudades se comenzó a asesinar 'desechables'. Posteriormente la policía nacional sería acusada de participar en los asesinatos de vagabundos y niños de la calle).

«En agosto de 1997, fueron capturados ex miembros de las Convivir 'Los Girasoles' y de las Convivir 'Acepal' cuando fueron sorprendidos en el momento en que asaltaban dos camiones. Otros tres fueron sorprendidos cuando recibían una gruesa suma de dinero producto de una extorsión. Además de estar sindicadas de haber participado en el asesinato de 8 personas en la ciudad de Medellín.

En la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia, fue radicada una diligencia del Fiscal Delegado, quien luego de estudiar una serie de denuncias presentadas ante su despacho, observe la presencia y con formación de un grupo de justicia privada en el municipio de Amagá, y que extiende su radio de

acción a otros municipios del suroeste antioqueño, irrumpen en la población en vehículos con hombres fuertemente armados que se dedican a desaparecer jóvenes y campesinos de la región. Este accionar criminal se le atribuye a la Convivir 'Las Garzas', integrada básicamente por ex policías de ese municipio. (Sin embargo Álvaro Uribe Vélez seguía pregonando en cuanto estrado gubernamental tema a su disposición y ante la prensa nacional y extranjera, que las Convivir eran una forma de seguridad para la población y de ayuda para las fuerzas de seguridad del Estado).

En el mes de septiembre de 1996 se entrego a la Fiscalía Nacional, el reconocido jefe de uno de los escuadrones de la muerte José Arcila Vásquez, quien en sus diferentes declaraciones ante las fiscalías de Medellín y Bogotá, afirmo haber sido integrante de la cooperativa Convivir 'Los Sables' del municipio ciudad Bolívar, ubicado al suroeste del departamento de Antioquia y el segundo al mando, bajo la dirección del ex capitán del Ejército Ciro Alfonso Vargas. Reconoció haber participado en los meses de enero a mayo de 1996 en la comisión de más de 40 asesinatos de campesinos. Reconoció igualmente la participación de un sargento del Ejército de apellido Castro, quien entrego a los escuadrones de la muerte una lista de más de 60 personas con nombres, fotografías y direcciones, y a las cuales se les sospechaba de ser colaboradores de la guerrilla de izquierda y quienes fueron horriblemente asesinadas. El confeso criminal, confirmo la labor conjunta desempeñada entre las Convivir de Uribe y los grupos de asesinos de extrema derecha, llamados también paramilitares. Además, señaló como cabecilla supremo de estos escuadrones de la muerte a Carlos Castaño reconocido narcotraficante y la complicidad del mayor del ejército de la IV brigada de Medellín de apellido Clavijo, el mayor Oscar Zuloaga y el sargento del B2 de inteligencia Miguel Salmas, quienes se reunieron en vanas ocasiones con el criminal narcotraficante Carlos Castaño, para planear ciertos asesinatos en contra de defensores de Derechos Humanos. Termino diciendo el inculpado, que Castaño esta detrás de las Convivir, a las cuales financia con dineros del narcotráfico».

«Luis Alberto Villegas Uribe, fundador y presidente de la cooperativa Convivir 'El Cóndor' del municipio de Maceo, Antioquia, se le impuso medida de aseguramiento por su participación con grupos criminales y su presunta participación en las masacres ocurridas en la zona del noreste del departamento. En los vehículos de las Convivir se desplazan asesinos pertenecientes a los escuadrones de la muerte quienes tienen buenas relaciones con Villegas Uribe, al igual que miembros de la fuerza pública de los municipios de Santo Domingo, Museo y San Roque. Villegas Uribe dice ser ganadero de la región».

Investigaciones adelantadas por la Fiscalía de Medellín indican que Oscar Restrepo Silva y Henry de Jesús Restrepo López integrantes de la Convivir 'Las Guacamayas', operan permanentemente con los escuadrones de la muerte del Magdalena Medio y narcotraficantes, se les ve siempre fuertemente armados, y mantienen estricta relación con el estado mayor del Ejército de Puerto Berrío y con la policía. Todos los anteriores, culpables de la muerte de Hilder Alfonso Corredor Rivillas y Gabriel Antonio Monsalve Salazar, en hechos ocurridos el día 27 de junio 1995. El día 29 de julio del mismo año son asesinados Elías Alberto David Jaramillo y Hernando Abad Martínez, se involucra en estas muertes a Oscar Restrepo y Félix Gaitán miembros de la dicha Convivir».

«Otro declarante afirma ser testigo del hecho que la Convivir 'Guacamayas' ha transportado estos temibles grupos a la zona, los entrenan en el municipio de Caño Baúl, departamento de Santander, durante tres meses, y luego comienzan a operar bajo el mando de Félix Restrepo encargado de pagarles. El declarante afirma que tal situación empeoro desde cuando nombraron al general Faruk Yanine Díaz como comandante de la XIV Brigada del Ejército, los vehículos de la Convivir se abastecían de remesas y luego partían hacia los campamentos de los grupos criminales de extrema derecha. Conto además, que fue llevado a trabajar a la finca de un tal Salomón Valencia y una vez allí se dio cuenta que esta era una base del grupo criminal, después conoció a Félix Gaitán, el cabecilla criminal del Magdalena Medio, quien se desplazaba con un impresionante ejército de hombres fuertemente armados, agrego, que llevaron una señora y tres jóvenes a quienes torturaron, a la mujer le vaciaron el estomago y a los tres muchachos los descuartizaron con una motosierra. Después mataron a un

anciano trabajador de Felix Gaitan por haber dicho que este era mafioso. A los pocos días mataron a dos menores de edad, con los cuales hicieron polígono y después los destrozaron con la motosierra y los metieron en costales. El mismo testigo advierte que oficiales de la XIV Brigada hacen parte del grupo por que entran y salen de las fincas de Valencia y Gaitán».

«En un informe de inteligencia del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) se asegura que la acción conjunta de los escuadrones de la muerte y la cooperativa Convivir 'Las Guacamayas', además de las acciones ya referidas, son culpables de la muerte de Luis Alfonso Martínez, Alfonso Pelees, Darwin Cifuentes, Miguel Amariles, Ramón Agudelo, Francisco Toro y Henry Jiménez Arroyabe. El informe ratifica que los integrantes del grupo criminal son en su mayoría los mismos miembros de la Convivir en cuestión, de la cual hacen parte Carlos Gómez, Rogelio Becerra Carmona, Teódulo Palacios Rentería, Rafael Díaz Palacios, Luis Albero Arrieta, Salomón Valencia y Algiro Tamayo, quienes gozan del pleno respaldo de las autoridades civiles locales de Policía y Ejército.

En el curso de la investigación se recibieron otras declaraciones con reserva de identidad que continua narrando diferentes crímenes contra más de 30 campesinos, cometidos por la Convivir 'Las Guacamayas' en asocio de grupos criminales en Puerto Berrío, San Roque, Maceo... El 19 de marzo de 1997 el capitán del ejército Ernesto Camacho le manifestó al declarante que tenía conocimiento de que estaba colaborando con la Fiscalía y que 'ya tenían gente para que lo despedazaran y tiraran al río'...»

«El 2 de diciembre de 1996 ejecutaron extrajudicialmente a Walter Balaguera, Filiberto Ruiz y Jairo Gualdron, los dos últimos en presencia de sus 6 hijos, el menor de 8 años de edad. Del macabro crimen se sindicó a la Convivir 'Renacer'...

«El 4 de febrero de 1997 integrantes de uno de los grupos criminales con apoyo de unidades del Batallón contraguerrilla N° 43, adscrito a la VIX Brigada y miembros de una cooperativa de segunda Convivir, quienes portaban armas de corto y largo alcance, algunos con capuchas sobre el rostro, incursionaron en el pequeño municipio de San Francisco y durante más de cuatro días detuvieron arbitrariamente a 40 campesinos, entre ellos a 15 menores de edad, a quienes sometieron a tratos crueles y amenazas verbales, torturando al campesino de nombre Antonio. Al abandonar la población, ejecutaron extrajudicialmente a 4 campesinos a los cuales castraron y descuartizaron, llevándose consigo a otro campesino cuyo paradero es desconocido».

A mediados de julio de 1997 un comando perteneciente a los escuadrones de la muerte de Urabá departamento de Antioquia, salió en dirección de la apartada localidad llanera de Mapiripan con la complicidad de los altos mandos militares, cuando arribaron al lugar comenzaron a reunir a la gente entre amenazas e insultos, después las acusaron de ser simpatizantes de la guerrilla y durante tres días torturaron, despedazaron, degollaron y asesinaron a más de 49 niños, mujeres y hombres, colombianos trabajadores de la tierra, campesinos honestos y desarmados, que al igual que la mayoría del campesinado del país, no ha obtenido del Estado más que represión, desamparo e injusticia. Los criminales eran aproximadamente 120 hombres fuertemente armados y vestidos con prendas privativas de las fuerzas militares, sus armas de corto y largo alcance cuyo uso es monopolio de Estado, y utilizaban radios de alta frecuencia, eran comandados por el narcoparamilitar Carlos Castaño Gil²⁴, quien manifestó que venían de Urabá (Antioquia) y que habían sido transportados en un avión Hércules del Ejército. Además de la masacre, quemaron las casas de los campesinos y destruyeron cuanto encontraron a su alcance. Esta otra masacre horrorizaría a los colombianos y a las organizaciones internacionales de los derechos humanos, pero desafortunadamente continuarían a lo largo y ancho del

²⁴ Carlos Castaño, manifestaría a la prensa nacional e internacional tiempo después de su abominable masacre, que sus hombres habían combatido contra guerrilleros de las FARC y que en forma valerosa habían dado muerte a 49 guerrilleros y recuperado armamento, terminó diciendo con un cinismo alucinante, que habían mas mapiripanes. Expediente: CA-irte Interamericana de Derechos Humanos.

país, sin que las autoridades civiles ni militares tomaran medidas concretas, para combatir estos abominables escuadrones de la muerte. Como siempre el gobernador Álvaro Uribe, prometería una exhaustiva investigación, que no se realizó, pues como lo declararían víctimas y algunos de los mismos autores de dicha masacre, años después, el mismo día del horrible hecho y en el mismo lugar, el helicóptero de la gobernación de Antioquia se encontraba presente. Las desmentidas, como es lógico, han pululado en todas las direcciones, pero lo cierto es que la mayoría de los autores de este genocidio están libres y en especial sus autores intelectuales.

Pero pesar de los tropiezos por cuales ha tenido que atravesar esta investigación, la lentitud burocrática y la nula colaboración de parte del ejercito, investigadores judiciales (muchos han sido amenazados, otros han sido asesinados o han tenido que salir del país, por que también los hay cómplices) con la decidida participación de organizaciones de derechos humanos y la Secretaria Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos), se logro establecer la complicidad de las autoridades militares de la época, con los autores de estos horribles crímenes. Hay ya un coronel condenado en primera instancia por esta demencial masacre, y en marzo del 2004 ⁴⁴ fue llamado a juicio y detenido en Bogotá, el general Jaime Humberto Uscategui, acusado de omisión y complicidad en la matanza.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos jugó un papel importante en la búsqueda de la verdad sobre estos horribles hechos, pero es también una verdad enorme la total impunidad sobre los autores materiales intelectuales del genocidio, ya que ninguno de estos criminales está preso.

Después de su detención y al verse abandonado de todos, el general Uscategui amenazó de contar toda la verdad y dijo que con ella arrastraría hacia al abismo a una gran cantidad de notables del país. Según los medios de prensa colombianos, Uscategui, fue visitado en la cárcel por el comandante de las fuerzas militares general Jorge Enrique Mora Rangel, (acusado por violación de derechos humanos y paramilitarismo) el acusado le habría dicho al comandante que él no estaba dispuesto a pagar los platos rotos, que estaba cansado de ese asunto y lo previno con la siguiente frase «hagámonos pasito mi general, hagámonos pasito». En la audiencia pública celebrada en un juzgado de Bogotá a finales del mes de enero del 2005, el general irrumpió en llanto cuando la juez lo exhorto a que dijera los nombres de los inspiradores de tan atroz crimen, y que al parecer el general Uscategui conoce muy bien, el ex militar con lagrimas en los ojos se dirigió a la juez y le dijo que si el daba los nombres de los autores intelectuales del genocidio, a quienes ubico en Tierra Alta departamento de Córdoba²⁵, sus hijos ya no tendrían siquiera la oportunidad de verlo preso, pues sería inexorablemente asesinado.

Los hechos anteriormente narrados, ocurrieron en solo algunos meses de la larga gobernación de Álvaro Uribe Vélez, quien continua manifestando hoy día, que las Convivir que se organizaron bajo su mandate solamente dos tuvieron problemas. Pero otro repugnante hecho, y que es de gran importancia citarlo ya que suscita series interrogantes sobre la complicidad directa de Álvaro Uribe Vélez, con los escuadrones de la muerte en su calidad de gobernador del departamento de Antioquia. Se presento en el proceso —donde figura su nombre— que por masacres ocurridas en ese departamento, adelanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó al país al pago de una cuantiosa indemnización a favor de las víctimas, al comprobar que los escuadrones de la muerte habían actuado con la complicidad de las autoridades civiles y militares del departamento de Antioquia. En el citado proceso consta que en la masacre del corregimiento de la Granja municipio de Ituango, los paramilitares comandados por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, asesinaron a 4 campesinos. Temerosos de que los criminales volvieran al Municipio a cometer una nueva masacre, los vecinos del lugar acudieron al

²⁵ En este departamento se concentra los máximos capos del narcotráfico y los cabecillas de los escuadrones de la muerte, alii también el presidente Uribe posee dos haciendas v criadero de caballos, se dice que cuando el presidente va por los lados de su finca no necesita guardaespaldas y se pasea con plena tranquilidad ya que los paramilitares lo cuidan con esmero.

gobernador Álvaro Uribe Vélez, para pedir protección. La cual nunca les llegó. Poco tiempo después, los paramilitares, durante 5 días, masacraron a 14 campesinos más. Una de las personas que acompañó a los campesinos para hablar con el gobernador fue el prestante ciudadano de Ituango, Jesús María Valle Jaramillo, concejal del Municipio y presidente del comité de Derechos Humanos de Antioquia. A menos de dos meses que el gobernador Uribe terminara su mandato, el prestante concejal Jesús María Valle, rindió declaración jurada en la Fiscalía Regional de Antioquia. Veamos apartes de dicha declaración:

«Ante esa ola de sangre, yo pedí una cita con el gobernador para informarle sobre esas muertes... y lo que me dijo el gobernador Uribe Vélez era que no sabía de la existencia de esos grupos paramilitares y nos envió para que habláramos con el general Manosalva (fallecido)²⁶... La procuraduría quiso ir en varias ocasiones al lugar donde se efectuó la primera masacre. La gobernación se comprometió a prestar el helicóptero y, a última hora, le decían... que no se podía prestar el servicio.

En una ocasión, en un enfrentamiento... en el puente de Pescadero... allí combatían juntos Ejército y paramilitares. Eso lo denuncié públicamente y, por ese motivo fui denunciado por el comandante del Ejército para que se investigara mi conducta, cuando yo lo que buscaba era la protección de la población campesina de la Granja y del Aro...

Y siempre vi... que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos

Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa²⁷ se ha consolidado por el apoyo que esos grupos han tenido de personas vinculadas al gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros de Antioquia y del país...»

Tiempo después el abogado José María Valle Jaramillo, sería asesinado por sicarios en su oficina en pleno centro de Medellín.

Cuando Uribe Vélez, se retira de la gobernación las cifras relacionadas con la seguridad son dramáticas. Pareciera que el departamento estuviera en guerra contra un invasor enemigo, el departamento arde en llamas y las masacres no paran, los asesinatos son continuos, los robos, los secuestros y el terrorismo se dispararon sin control alguno.

Añadiendo a la terrible situación de orden público en el departamento de Antioquia y a nivel nacional con la expansión de las Convivir o grupos criminales de extrema derecha, un hecho iría a marcar la vida de los antioqueños y de los colombianos en general, y sería la implantación de una escuela de sicarios en Medellín, la cual duraría alrededor de siete largos años, bajo la dirección de expertos mercenarios israelíes con la posterior ayuda de mercenarios europeos ingleses en especial. Esta impresionante máquina de muerte, fue montada por Isaac Guttnan Esternberg, en una finca situada cerca a Sabaneta, un municipio próximo a Medellín. Contando con la tolerancia de las autoridades antioqueñas que sabían de su existencia. Es más, se supo mucho después, que el ministerio de interior otorgó documentos a todos los mercenarios y que varios de ellos fueron acogidos en la embajada de Israel en Bogotá.

²⁶ El general Manosalva era en esa época la mano derecha del gobernador Uribe y fue acusado por la población y víctimas de Ituango, de complicidad con los crímenes de los paramilitares.

²⁷ Para esta fecha ya las Convivir de Uribe, hacían parte del crimen organizado bajo el rotulo de Autodefensas Unidas de Colombia.

Guttnan, impartió instrucciones a sus dóciles y atentos alumnos sobre el manejo de la moto, el equilibrio sobre este vehículo cuando se lleva un parrillero y el tiro al blanco desde la propia moto en movimiento. Su manera de disparar sobre el objetivo, que se caracteriza por que sea en forma de cruz.

Son muchas las versiones que circulan sobre el tipo de entrenamiento recibido. El examen del asesino de la moto, consistía en salir con su compañero y disparar una ráfaga de ametralladora contra alguien, en plena calle. La muerte instantánea del objetivo y la velocidad con la cual se debían escabullir los asaltantes, eran los puntos de calificación. Un suceso sobrecogedor y doloroso es el que se cuenta, sin mayores pruebas: una semana antes del asesinato del coronel de la policía Jaime Ramírez Gómez, un estudiante haitiano salió de su pequeño apartamento hacia el centro de la ciudad de Bogotá, y fue atacado por los asesinos de la moto. Se dice que estaban ensayando el asesinato del Coronel Jaime Ramírez Gómez²⁸. La escuela de sicarios era controlada directamente por Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha quienes eran sus principales beneficiarios. Pese a que se afirma que en dicha escuela los alumnos no pasaron de cincuenta, de esta terrible escuela saldrían los más tenebrosos y sanguinarios asesinos de la moto y quienes compondrían los grupos criminales de los 'Quioscos' y los 'Triscos'. Dentro de los innumerables crímenes efectuados por estos 'profesionales' podemos contar el de dos ministros, un Fiscal General, una veintena de Diputados y Senadores elegidos por la Unión Patriótica, además de alcaldes y concejales de todas las regiones del país, un coronel de la policía, una veintena de sindicalistas, varios periodistas y varios defensores de los derechos humanos, entre otros muchos colombianos más. Al ser desmantelada la escuela, muchos de estos sicarios pasaron a formar parte del brazo armado de los diferentes carteles de la droga o ingresaron a los escuadrones de la muerte, también crearon bandas de secuestradores y asesinos a sueldo.

Dentro de ese endemoniado círculo del hampa, fueron muchos los niños y jóvenes que se prestaron para saciar la sed de venganza de la mafia contra sus oponentes y/o enemigos y el ajuste de cuentas entre ellos mismos, en la consabida vendetta, como se llama corrientemente en el bajo mundo de la mafia. Fue así, como niños de diez años en adelante, fueron adiestrados en el uso de las armas de fuego y aprendieron las diferentes técnicas para eliminar el 'cliente' que estorbaba el buen funcionamiento de los negocios de sus jefes mafiosos, o simplemente quitar del medio a los líderes sindicales o de izquierda tan odiados por la mafia, la extrema derecha y los narcotraficantes. Estos niños y jóvenes, pertenecían en su totalidad a las familias más pobres de las principales ciudades, destacándose los de las zonas deprimidas de Medellín. Aprovechando su extrema pobreza, los emisarios del narcotráfico y la extrema derecha les ofrecían unos cuantos miles de pesos (una decenas de euros), les compraban nuevos jeans a la moda y zapatillas de gran marca, a la vez que les prometían proveerles sus miserables ranches con una nevera o un televisor para la 'cucha' (en el vocabulario en las zonas miserables de Medellín, esta palabra se utilizaba con gran cariño para designar a la mamá), les regalaban un celular y en muchas ocasiones eran invitados a fastuosas fiestas mafiosas con prostitutas y bisexuales activos a bordo. Uno de los ritos, antes de acometer el encargo, o tal vez el principal rito religioso de estos niños o jóvenes sicarios antes de efectuar sus crímenes, consistía en el acudir a la iglesia para encomendarse a una de las tantas vírgenes que la religión católica ha inventado en toda su historia. Podía ser la virgen de Fátima, o la virgen de los Milagros o la virgen de los Dolores etc., y según versiones del medio, los infantes oraban pidiéndole a la Virgen les ayudara a bien hacer su 'trabajo' para no decepcionar a sus patrones. Estos niños sicarios se persignaban antes y después del crimen y pasado el susto y hecho el 'trabajo', tenían derecho a una buena recompensa en grupo, fiesta, alcohol y al pago del cincuenta por ciento restantes. Pero la mayoría de estos pobres infelices, pagarían con sus vidas, era asesinado a su turno, pues otros de su misma clase y puerco destino, los acribillarían por orden de los mismos patrones que les habían contratado, para silenciar posibles testimonios.

²⁸ El coronel Jaime Ramírez, funcionario incorruptible se caracterizó por su férrea lucha contra la mafia.

El último cabecilla de los 'Quesitos', Luis Alberto Castaño Molina, fue asesinado al convenirse en testigo clave en el juicio por el asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, pues fue él, el enlace entre los sicarios y los autores intelectuales —Escobar, Ochoa y varios políticos entre ellos Alberto Santofimio Botero, senador y candidato a la presidencia— pertenecientes al Cartel de Medellín.

El mercenario Isaac Guttman, fue asesinado en Medellín desde una moto (seguramente por uno de sus 'ex alumnos' el 9 de agosto de 1986, cuando iba conduciendo su vehículo en compañía de Alfonso Jaramillo.

Pero no solamente el criminal accionar de las Convivir de Uribe, empañarían su Curriculum Vitae, también en lo que respecta a la administración de los dineros del departamento deja mucho que desear.

Todo indica que durante su gestión, el endeudamiento del departamento fue cien veces mayor que el de cualquier otro departamento del país, y muchas obras que él comenzó, invirtiendo sumas astronómicas, no llegaron a su término, y los préstamos que realizó a la banca nacional e internacional fueron exorbitantes, provocando una crisis sin precedentes. «El tema tiene múltiples facetas. Pero hay otras más que son imposibles de descuidar, una de ellas tiene que ver con la administración del departamento. Uribe se precia, se ufana de haber sido un buen gobernador. Las cifras parecen demostrar lo contrario. Al 31 de diciembre de 1994, —dice un experto en el tema económico— Antioquia tenía una deuda pública departamental que ascendía a 56.896 millones de pesos, que representaba con respecto al total de la deuda de los departamentos de Colombia, el 11,418 por ciento. Terminado el mandato de Uribe Vélez, la deuda ascendió a 309.058 millones de pesos, o sea, que la elevo en un 543,19 por ciento y paso a representar el 19,713 por ciento del total de la deuda de los departamentos». Esas cifras constan en el documento que produjo la Federación Nacional de Departamentos, y denominado 'La Crisis Fiscal de los Departamentos' publicado en marzo 26 de 1999.

«El segundo tema tiene que ver con un contrato de 370 mil millones de pesos, para la construcción del Túnel de Oriente. Para este importante trabajo se reunieron sesenta firmas de ingenieros de Antioquia y hasta la fecha correspondiente a febrero del 2002 a pesar de estar firmado el contrato, no se ha podido ejecutar el trabajo por la sencillísima razón de que no tenía disponibilidad presupuestal. Es decir, cometió un peculado por aplicación presupuestal diferente, y/o celebración de contrato sin requisitos legales esenciales, y cuyos procesos duermen el sueño de los justos en el despacho del Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio. Este hecho lo inhabilita para ocupar la presidencia, en primer término porque demuestra irresponsabilidad, ya que embarco al departamento en una multimillonaria demanda que hoy afronta, y en segundo lugar porque tiene en graves problemas a más de sesenta firmas de ingenieros antioqueños, cuya capacidad operativa se ha visto afectada»²⁹.

Con este saldo negativo tanto en lo económico, como en su política de seguridad ciudadana, Uribe dejaría la gobernación de Antioquia, para ocuparse momentáneamente de sus negocios privados y en especial de una de sus haciendas, ubicada en el departamento de Córdoba, asiento de los

²⁹ Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, (El señor de las Sombras), Editorial Oveja Negra, Bogotá.

En este libro se puede leer también, una carta escrita por el periodista sueco Dick Emanuelsson, experto en temas sindicales y residente en Colombia desde hace más de veinte años:

«He cubierto el movimiento sindical colombiano desde el año 1983. Mucha gente que entrevisté está muerta. La macabra cifra de 172 sindicalistas asesinados en el año pasado, es interesante en el sentido que, casi el 25 por ciento eran de Antioquia, el departamento que fue la cuna de las Convivir.

Me pregunte, cuando Álvaro Uribe, presento su proyecto de convertir a los celadores/vigilantes en agentes de seguridad y al servicio de la inteligencia militar en su lucha contra la guerrilla, si él había consultado a los trabajadores de la vigilancia privada.

Entreviste, entonces, al presidente del sindicato SINUVTCOE, Carlos Gómez, y con él fui a entrevistar a tres vigilantes en la noche. Todos están horrorizados por la propuesta de Uribe. Temen, lógicamente, convertirse en blancos militares de la insurgencia».

narcotraficantes y los criminales más sanguinarios del continente entre ellos Carlos Castaño (supuestamente asesinado en extrañas circunstancias, rumores circulan en el sentido de que lo han visto en Estados Unidos —donde esta refugiada su última esposa con su pequeña hija, otros dicen que se encuentra en Israel) Salvatore Mancuso (Colombiano de origen italiano e importante miembro de la tenebrosa mafia del sur de Italia. La N' Drangheta), Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna', el temible Vicente Castaño, (hermano de Carlos) el terrorífico Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40' y Jesús Ignacio Roldan entre otros, creadores de ese monstruo narcoparamilitar, verdadera máquina de muerte.

La violencia extrema que ha acompañado a Colombia durante vanas décadas, sería, desafortunadamente, tema para un nuevo libro, ya que no se puede detallar claramente en pocas páginas, el sectarismo a muerte del que hacían gala los dos únicos partidos políticos del país, el liberal y el conservador, como también, la participación de la iglesia católica llamando a la venganza y ordenando el asesinato en contra de los ateos liberales, añadiendo la sevicia y barbarie de los militares hacia la población civil, en su mayoría campesina. Lo cierto es que esta guerra fratricida que ha vivido y vive el país, fue atizada por el mismo Estado a principios del siglo XX, y el paramilitarismo —o mejor grupos civiles armados— impulsado y financiado por los diferentes gobiernos norteamericanos desde los años cincuenta —en su lucha anticomunista—, cuando el gobierno conservador trataba por todas las formas de liquidar militarmente a las guerrillas liberales, las cuales habían optado por la vía armada, para hacer frente a los desmanes y crímenes perpetrados por las hordas conservadoras en todo el territorio nacional, ante la pasividad del Estado y alentadas por la cúpula eclesiástica. A partir de 1958, y después de los acuerdos logrados entre liberales y conservadores en Madrid, España, se crearía el fatídico «Frente Nacional» que consistió en alternar el poder presidencial, cuatro años para el partido conservador, cuatro años para el partido liberal y así sucesivamente, durante veinte años, cerrando a la vez la compuerta, a una posible opción de un tercer partido político que pudiera entrar a competir por el poder en igualdad de condiciones. El primer presidente elegido dentro de ese acuerdo frente-nacionalista, fue el liberal Alberto Lleras Camargo, y quien fuera uno de los principales opositores a la sangrienta dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla, (1953 /1957) y que dejaría miles de muertos. Pero este presidente liberal no lograría calmar los ardores sectarios y si la situación no empeora, tampoco mejora. En 1962 sube a la presidencia de la República el conservador Guillermo León Valencia, cuyo gobierno se alió estrechamente al de Estados Unidos, y con un poderío militar sin precedentes y mas de 16 mil hombres, fracasaron en su intento por liquidar una diminuta guerrilla liberal compuesta por 46 hombres y dos mujeres en la región de Marquetalia sur del país y comandada por el campesino Pedro Antonio Mann, quien tiempo después se haría llamar Manuel Marulanda Vélez. Este diminuto grupo guerrillero fue bombardeado durante varios días por la aviación estadounidense y atacados en tierra por el ejército colombiano sin lograr su liquidación, en lo que se llamo el plan LASO (Latin American Security Operation), que consistía, según la CIA, en el asesinato de los bandoleros comunistas. La «Operación Marquetalia» había comenzado el 1 de mayo de 1964 y nunca habría obtenido el suceso esperado. Por el contrario, ese diminuto grupo de guerrilleros se convertiría paulatinamente en un poderoso ejército rebelde llamado: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fundadas y comandadas hasta el día de hoy, por el legendario Manuel Marulanda, nombre escogido por el viejo guerrillero, como una señal de reconocimiento al líder sindicalista del mismo nombre, asesinado por la policía durante una manifestación en Bogotá. Palabras más palabras menos el remedio que se empleo para calmar la fiebre resulto inadecuado y explosivo. El grave problema socio-económico que sufría la población, en especial la campesina y el completo abandono estatal, no podía ser resuelto militarmente. Se podía observar entonces, que desde el mero inicio de ese acuerdo bipartidista, de ese acuerdo frente nacionalista, el sectarismo y la intolerancia persistían y seguiría jugando un papel primordial en el futuro del país. Los gobiernos liberales y conservadores se turnaban en el poder cada cuatro años, como había sido convenido, (a espaldas de todo un pueblo) en los acuerdos firmados en Madrid de 1957. Las elites se enriquecían aun más, dejando a los ciudadanos y ciudadanas al margen de la participación y de las decisiones en el manejo de la política y la economía de la nación. Y por consiguiente, dándole cada vez mas atributos a las fuerzas armadas y de policía

para detener y reprimir ese descontento cada día mas amplio y decidido, de miles y miles de ciudadanos ávidos de participación, ávidos de democracia.

En definidas cuentas, la situación general del país no varió un ápice, con la implantación del «Frente Nacional», por el contrario la represión estatal y la corrupción de las elites iban de la mano, para dar a luz una especie de impunidad inamovible a medida que los gobiernos liberal y conservador se iban sucediendo en el poder, con la acumulación de errores que se repetían, en detrimento de una población sectorizada, cada vez más pobre y arrinconada en un espacio rudo y limitado, dentro de un país vasto e inmensamente rico.

En el libro 'Colombia Nunca Más' elaborado con el fin de mostrar la realidad colombiana en toda su crudeza, podemos leer en su primer tomo apartes correspondientes a la violencia que ha vivido el país y sus habitantes (violencia 1962-1987):

«La estrategia represiva del Estado colombiano se puede analizar, por una parte en la serie de manuales de luchas contrainsurgente, publicados con carácter reservado por parte de las Fuerzas Armadas entre 1962 y 1987, pero exige análisis complementarios de los comportamientos sistemáticos de los demás poderes del Estado en apoyo activo o pasivo a la ejecución de esas directrices.

Un eje fundamental de la estrategia trazada en los manuales, ha sido el mantenimiento de estructuras paramilitares, recomendado por la misión del gobierno estadounidense de febrero de 1962, como se vio atrás, pero reforzado en todos los manuales de contrainsurgencia posteriormente conocidos, tanto los importados de Estados Unidos y Francia, como en los elaborados a nivel nacional.

Pero otro eje de no menor importancia ha sido el de **tomar a la población civil como blanco fundamental de la lucha contrainsurgente**. La tesis de base, según la cual, 'la población civil se fundamenta la existencia de los grupos subversivos 'lleva a poner a la población como uno de los 'objetivos fundamentales de las unidades del Ejército'. Por ello todos los manuales mencionados contienen grandes capítulos sobre operaciones de inteligencia y sobre guerra psicológica, de las cuales hacen objetivo a la población.

Los capítulos sobre INTELIGENCIA ofrecen numerosas tácticas para desnudar el alma de la población civil, descubriendo y registrando sus tendencias ideológicas, sus simpatías políticas, sus vulnerabilidades psíquicas, sus costumbres, sus líderes etc. Todo mira a clasificar a los pobladores en listas 'negras, grises y blancas', para luego realizar un 'boleteo al personal de la lista gris y negra que no quiere colaborar con la tropa, para obligarlos a que se descubran, atemorizarlos haciéndoles creer que están comprometidos y que deben abandonar la región', táctica similar a la de la 'Limpieza Étnica', convertida aquí en 'limpieza ideológica'.

Los capítulos sobre GUERRA PSICOLOGICA prescriben someter a la población a análisis rigurosos con miras a descubrir 'sus actitudes; el origen de las mismas; los factores externos que las gobiernan; las vulnerabilidades y susceptibilidades que puedan ser explotadas psicológicamente, y las necesidades humanas que originan problemas políticos, sociales y económicos', lo que se considera como 'identificación indispensable para poder explotarla en provecho de la unidad contraguerrilla'. Las numerosas tácticas contempladas en los manuales equivalen a un permanente y degradante 'lavado extorsivo de cerebros', con el objetivo confeso de 'reeducación' de elementos disidentes' de 'extirpar la organización terrorista del seno de la población' o de 'influir en las opiniones, emociones,

actitudes y comportamiento de grupos hostiles, de tal manera que apoyen la realización de los objetivos nacionales'.

A nadie se le oculta que esto no puede hacerse sin sacrificar todos los derechos a la libertad de conciencia y de opinión que tiene cualquier ser humano, entre otros muchos derechos. La misma Acción Cívico Militar, que consiste en proyectos dirigidos por el ejército que miran a aliviar carencias o necesidades básicas de la población, se la concibe en los manuales como 'el mejor- medio que tiene el ejército para lograr, en su lucha contra las guerrillas, el necesario apoyo de la población', inspirándose en un principio más general, según el cual 'el buen trato (a la población civil) es requisito para explotarla'.

Pero si bien la **Estrategia** Paramilitar, así como la Estrategia para Culpabilizar a la Población civil para Reprimirla Indiscriminadamente, son estrategias agenciadas en directo por las fuerzas armadas y los organismos de seguridad del Estado, no serian estrategias viables si el Estado fungiera como Estado derecho y si' sus agentes e instituciones, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, actuaran conforme al Derecho. Por esto, es parte integrante e importante de ambas estrategias la tolerancia, aquiescencia, consentimiento, complicidad, colaboración, instigación, apoyo y protección que les garantizan los demás poderes del Estado.

El **Poder Ejecutivo** asume ambas estrategias fundamentalmente abdicando de sus funciones de velar por un correcto comportamiento de los funcionarios de su ramo, como las fuerzas armadas; no ejerciendo sus obligaciones de vigilancia, depuración y dirección y remitiendo el problema de los crímenes del Estado a un poder judicial que se sabe acomodado a la impunidad.

El **Poder Judicial** asume la estrategia en su última y definitiva franja protectora (ya que el Ejecutivo abdica de todo control y depuración administrativos), integrando, en primer lugar, la Justicia Penal Militar, como sistema valido de 'justicia', a pesar de no llenar los más mínimos universales requeridos para ello, y en segundo lugar, tolerando, asimilando y afianzando numerosos mecanismos de impunidad, nacional e internacionalmente denunciados por varias décadas.

A su vez, el Poder Legislativo asume las estrategias abdicando de sus poderes de control político del Ejecutivo en el campo de la 'guerra sucia', así como de sus poderes judiciales sobre la Cabeza del Ejecutivo; aprobando los ascensos de los militares comprometidos en crímenes de lesa humanidad y tramitando y aprobando legislaciones que favorecen dichas estrategias. Como se ve, la efectividad de la doble estrategia descansa sobre dos pilares esenciales: por una parte, la articulación operativa de lo militar con lo paramilitar, y por otra, la colaboración de los demás poderes mediante conductas omisivas, elusivas, encubridoras o desviacionistas.

Sin la concurrencia de ambos polos, el modelo no funcionaria. Se trata de un modelo que descansa sobre un esquema de 'esquizofrenia estatal', o sea, en el fraccionamiento aparente del Estado para confeccionar parte de su imagen con rasgos de un «NO-YO», y la posibilidad de jugar ese juego ante la comunidad nacional e internacional lo que le permite subsistir como Estado que supuestamente llena los 'requisitos democráticos' que hoy día se estipulan. Una táctica esencial de ese juego consiste en la elaboración de un lenguaje oficial cosmético (discursos, decretos, declaraciones), que configure el paramilitarismo como NO-YO, sometándolo incluso a censuras verbales, o a persecuciones teatrales. No hay duda de que en esto cumplen una función de primer orden los medios masivos de 'información', en cuyo poder descansa la posibilidad de

vender la mentira como «verdad». En cuanto a los **Métodos** utilizados por el Estado como actor violento, estos podrían enumerarse una manera muy simple: acusaciones falsas, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, juicios injustos, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos individuales y colectivos, desplazamiento forzado de poblaciones, destrucción de bienes de subsistencia, bombardeos indiscriminados, amenazas, atentados y violencia sexual. Pero la simple enumeración no revela la lógica de sus aplicaciones. Los análisis anteriores nos hacen leer estos métodos como encuadrados en una intención general de DISUASION, pues, como se ha visto, se trata de combatir y exterminar una forma de pensar, una ideología, una opción por un modelo alternativo de sociedad que no se compadecería con el modelo hemisférico. La intencionalidad disuasiva, explícita desde el Suplemento Secreto del general Yarborough en 1962, así como en todos los documentos doctrinales y estratégicos antes citados, nos conduce al concepto de Terrorismo de Estado. En efecto, el terror se siente semánticamente como un 'miedo intenso', y puede ser intenso en dos circunstancias, entre otras: a) cuando están en alto riesgo los valores más elementales de lo humano: vida, integridad y libertad (y en sus niveles más básicos, o sea: el terror de ser privado de la vida; de ser disminuido o mutilado en el propio funcionamiento físico-psíquico; de ser privado de la libertad física), y b) cuando no existe una zona o franja de seguridad donde ese riesgo pueda evitarse. Cuando el miedo se apoya en esas dos circunstancias y estas se seleccionan como estrategia disuasiva, se puede hablar de una estrategia terrorista.

Y si es el Estado el que controla esas circunstancias, estaremos frente al Terrorismo de Estado. Así, cuando el Estado crea, por ejemplo, tipos penales ambiguos (como los de «rebelión» o «terrorismo») en cuanto instrumentos manipulables y arbitrarios para arruinar la libertad de un blanco seleccionado; cuando crea procedimientos judiciales manipulables y susceptibles de montajes (como testigos y jueces sin rostro o recompensas monetarias a eventuales acusadores); cuando establece agentes ficticiamente «fuera de control» como encargados de castigar simpatías ideológicas o militancias legítimas; cuando mantiene garantías de impunidad para agentes estatales y paraestatales que amenacen sistemáticamente la vida, integridad y libertad de poblaciones que se escapan a su pleno control, etc., es evidente que se está en presencia del Terrorismo de Estado como substrato común de los métodos violentos antes enumerados.

La disuasión mediante el terror tiene la ventaja, para sus gestores, no solo de conjurar inmediatamente los intentos de transformaciones sociales, sino de condicionar al menos a la generación siguiente a que se pliegue a los proyectos de futuro del Estado victimario. El efecto más recóndito del terror es la opción inconsciente o subconsciente de evitar las vías recorridas por los desaparecidos, por los asesinados, por los torturados y por los desplazados, como tributo pagado al instinto de conservación.

El Narcotráfico

Parte de la violencia de este ciclo ha sido interpretada desde otros países como una violencia ligada al problema del cultivo y tráfico de sustancias psicoactivas como la marihuana, la cocaína y la heroína, ya sea por que en dicho periodo se produce la conformación de carteles competitivos de narcotraficantes que han intentado destruirse mutuamente en algunos momentos; ya por la existencia de una política antinarcóticos de carácter represivo, continuamente rediseñada bajo directrices norteamericanas; ya por manifestaciones de resistencia a esa represión, que a veces asumen características violentas. Esta es la imagen construida a través de las agendas internacionales de 'información', que se vende ordinariamente como interpretación exclusiva de «La Violencia» colombiana. Pudo dar fundamento para esto la espectacularidad de ciertos hechos violentos ocurridos entre 1986 y 1990, en los cuales intervinieron estructuras

armadas ligadas a los carteles de la droga y cuyos móviles parecían estar relacionados con reacciones a mecanismos de represión contra los narcotraficantes (como la extradición) o con conflictos de competitividad entre los carteles. Este tipo de violencia limitada a asuntos de droga es estadísticamente muy pequeña, aunque agrandada por la espectacularidad y publicidad de los hechos. Pero no puede negarse que el fenómeno del narcotráfico se ha integrado por otros caminos en este ciclo de violencia.

A comienzos de los ochentas, grandes extensiones de tierras periféricas del país, ganadas a la selva, donde se habían refugiado centenares de miles de familias expulsadas de otras regiones por la violencia, conocieron el auge de la coca. Se conformo entonces un sector de economía ilegal que reprodujo las estructuras sociales piramidales e injustas: una base calculada en 300 mil familias, que lleva el duro peso del cultivo y «raspado» en condiciones de rudeza y alto riesgo; un sector intermediario que refina y exporta y que fue conformando los carteles nacionales; y unos grandes traficantes distribuidores asentados en Estados Unidos o Europa, que usufructúan el más alto porcentaje de lucro. Los réditos de ese producto, excluido incoherentemente de la legalidad del mercado, y que gracias a su forzosa clandestinidad genera ganancias exorbitantes, se reparte con criterios de sobreexplotación: la base recauda una retribución 250 veces inferior al producto de venta y 40 veces inferior a la que reciben los intermediarios exportadores.

Entre el 96% y 98% del lucro de las operaciones se integra a la economía estadounidense, o europea y entre el 2% y 4% ingresa clandestinamente a la economía colombiana, aportando un promedio mínimo de mil millones de dólares anuales. Uno de los sectores mas recurridos por los carteles nacionales para 'lavar' el dinero ilegal ha sido la compra de tierras. Según el sociólogo Alejandro Reyes, ya en 1992 habían comprado entre 2.5 y 3 millones de hectáreas de las mejores tierras cultivables (de los 8 millones existentes) en 250 municipios. Gran parte de esas tierras estaban ubicadas en zonas de presencia guerrillera, lo que explicaría los intereses de los narcotraficantes en aliarse con los paramilitares para apoderarse de ellas y usufructuar las, tratando de expulsar de allí a las guerrillas.

A mediados de los ochentas es muy evidente la alianza de los grandes narcotraficantes y el paramilitarismo. Cuando en diciembre de 1987 el coronel de ejército Israelí, Yair Klein, por invitación de miembros del gobierno estadounidense entreno a un contingente de paramilitares en el Magdalena Medio, allí concurrieron delegados enviados por los grandes capos de los carteles de la droga conocidos, quienes ya eran simultáneamente líderes paramilitares. Un testigo fuera de sospecha, el oficial del ejército Luis Antonio Meneses Báez integrante de la estructura paramilitar anfitriona lo confeso así ante la DIJIN (Departamento de Inteligencia Judicial) en noviembre de 1989. Según dicho testimonio a ese curso asistieron 50 personas, 20 designadas por Henry Pérez, 20 por Gonzalo Rodríguez Gacha, 5 por Víctor Carranza (el rey de las Esmeraldas), y 5 por Pablo Escobar y Fabio Ochoa (amigos de la familia Uribe) todos reconocidos narcotraficantes. En un momento el curso se traslado a la finca «el cincuenta» de Puerto Boyacá, a la zona de «la azulita» en el (departamento) del Putumayo, dos reconocidos asentamientos del narcotráfico (sur del País). Otro testigo de excepción, el ex militante del M 19 (grupo guerrillero nacionalista que firmo acuerdos de paz con el gobierno para luego disfrutar de varios puestos burocráticos) Diego Viafara Salinas que se integró a la experiencia paramilitar piloto en Puerto Boyacá en diciembre de 1983, narra uno de los momentos en que se fraguo la alianza entre el narcotráfico y el paramilitarismo, en diciembre de 1985, cuando un campero (jeep) cargado de cocaína, fue interceptado por los paramilitares en el sitio «Dos y Medio» cerca de Puerto Boyacá. Los paramilitares decidieron entrar en

negociaciones con los narcotraficantes, devolverles la droga y llegar a acuerdos de integración de actividades.

Tanto las dos confesiones mencionadas, como la del mayor del ejército Oscar de Jesús Echandia Sánchez cofundador de las estructuras paramilitares de Puerto Boyaca corroboran la unidad de acción que se da entre el ejército, los narcotraficantes y los paramilitares, en la segunda mitad de los ochentas. Según el texto de un preacuerdo firmado el 1° de septiembre de 1988 entre el secretario general del presidente Virgilio Barco (1986-1990), Don Germán Montoya, y el abogado Guido Parra en representación del «Grupo A» (o carteles de Medellín, Bogotá y la Costa), que buscaba una negociación de Paz entre el gobierno y los narcotraficantes, los grupos paramilitares, entre ellos el más activo y terrorista del momento: el MAS, son reconocidos formalmente como grupos «auxiliares».

Por su parte, los frentes guerrilleros de las FARC, apoyados en el principio de no buscar la financiación de la guerra en la población pobre, sino extraerla a la fuerza de la población adinerada, establecieron un impuesto por gramo ('gramaje') a quienes participaban en el comercio de la droga, como fuente de financiación. No pocos militares pactaron con los narcotraficantes adoptar una posición de «ceguera voluntaria» frente a los cultivos y franco ilícito de drogas, a condición de millonarios sobornos.

Entre tanto los gobiernos que se han sucedido en los años ochentas y noventas han trazado diferentes políticas represivas supuestamente con miras a eliminar el cultivo y comercialización de la coca, políticas que obedecen a una manifiesta presión del gobierno estadounidense y que han servido para canalizar una constante ayuda militar de Estados Unidos a Colombia, bajo el presupuesto de que la erradicación de la droga debe hacerse militarmente. Este ha sido otro factor de violencia, cuyo blanco ha sido el eslabón más débil del proceso, o sea, las familias que realizan el trabajo de base (cultivo y «raspado») por imperativos de supervivencia, las cuales sufren constantes fumigaciones y destrucciones de sus cultivos y enseres, daños en su salud y en su medio ambiente, cuando no encarcelamientos bajo la acusación de «narcotraficantes».

Para los traficantes poderosos se han elaborado y aprobado leyes de sometimiento voluntario a las justicias, con grandes contraprestaciones judiciales. Pero las políticas represivas no han podido ocultar la doble moral de las clases dirigentes: mientras aprueban legislaciones represivas contra los eslabones más débiles, usufructúan las ganancias del comercio ilícito para trancar con el poder político. En 1996 el presidente Samper fue juzgado y absuelto por el Congreso de la República por haber financiado su campaña con un aporte de 6 mil millones de pesos (2 millones de euros) provenientes del Cartel de Cali. Al mismo tiempo, el proceso judicial N° 8000 evidenció la participación de numerosos líderes políticos y miembros de la clase dirigente en el disfrute de esos dineros «mal habidos». El periodista Javier Darío Restrepo demostró que el financiamiento del poder político con ese tipo de dineros se venía dando desde la década del 70 y un ex ministro de Estado, protagonista de momentos álgidos de la historia nacional, lo reconoció con franqueza:

Sin embargo entender la lógica de la política antinarcóticos del gobierno estadounidense y sus proyecciones extorsivas sobre la política del Estado colombiano, es muy difícil, dado su carácter incoherente, contradictorio y aberrante:

Ante todo, excluir el comercio de la droga de la aplicación de la ley de la oferta y la demanda (ley fundamental del sistema que dice defender) para mantenerlo como un

comercio ilegal, es algo que contradice la racionalidad del sistema. Las «razones éticas» que suelen aducirse, se derrumban en el momento en que se contraponen esa medida a la libertad de que gozan la industria y el comercio de armamento, que no solo atenta contra la calidad de la vida sino que apuntan directamente a la destrucción de vidas humanas a gran escala.

- Si como se ha dicho, la intención que motivó la «guerra contra las drogas» en los gobiernos de Reagan y Bush era producir una alza exorbitante de su precio y por esa vía “disminuir el consumo”, el efecto real fue convertir ese comercio en el mejor negocio del mundo, pues deja utilidades del orden del 20.000%. Y mientras todos los estudios estadísticos muestran que el consumo ha ido siempre en aumento, entre el 96% y el 98% del producto de la venta se queda en los países consumidores, el principal de los cuales es Estados Unidos, entrando solo a los países productores entre el 2% y el 4%. De esto se puede concluir que mantener dicho comercio en la «ilegalidad», le reporta, de hecho, un movimiento exorbitante a la economía estadounidense que irriga muchos de sus sectores financieros y que los supuestos argumentos éticos tienen un carácter de ficción. Por tanto, mantener la represión en los países productores es el factor clave para mantener los precios exorbitantes, que de hecho no han disminuido el consumo pero sí reportan ganancias fabulosas al sector financiero de la unión americana.

- Que ni al gobierno ni al congreso estadounidense les importe en absoluto disminuir el consumo interno, quedó más evidenciado en la coyuntura de discusión de la ayuda al «Plan Colombia» (febrero- junio 2000), al rechazar la enmienda pro-puesta por el senador Wellstone, quien demostró, mediante estudios de la Rand Corporation, que invertir en el tratamiento de los consumidores es 23 veces más efectivo para disminuir el consumo que invertir en la erradicación de cultivos en otros países.

- Pero las incoherencias llegan a su colmo y evidencian que otros intereses se ocultan detrás de la «política antinarcóticos», cuando el gobierno de Estados Unidos acepta, a ciencia y conciencia, entrar en alianza con los carteles colombianos del narcotráfico, vía estructuras paramilitares, que sus mismas agendas recomendaron e incentivaron desde 1962. En efecto, el coronel Israelí Yair Klein confesó que había venido a Colombia en 1986-1987, «invitado por los Americanos», y entrenó a grupos paramilitares seleccionados por los grandes líderes de los carteles de la droga. Además el informe «Stopping the Flood of Cocaine with Operation Snowcap: Is it Working?», elaborado por el comité sobre operaciones gubernamentales, de La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que examinó el destino de la ayuda antinarcóticos entre 1980-1990, reveló que esa ayuda se empleaba en operaciones contrainsurgentes que favorecía a narcotraficantes-paramilitares aliados con el ejército (colombiano). Michale McClintock enfatiza de dicho informe la conclusión de que:

«Los militares que han consolidado una alianza con terratenientes armados y barones de la droga para desarrollar su aparato contrainsurgente, eran parte del problema del tráfico de narcóticos y no un medio efectivo para suprimirlo.

R McClintock afirma, además, que «el despliegue de fuerzas de operaciones de los militares estadounidenses en Bolivia, Perú y Colombia para entrenar y apoyar a fuerzas militares contrainsurgentes, **bajo el paraguas de fuerzas de represión a la droga** ha sido un aspecto del nuevo orden». Esto aparece corroborado en el excepcional testimonio de Stan Goff, oficial del ejército estadounidense, quien sirvió durante dos décadas en las fuerzas especiales, entrenando a ejércitos del 'tercer mundo', y que estuvo en la base Tolemaida (sur de Colombia) en 1992, entrenando a 'fuerzas especiales' del ejército

colombiano: «sabíamos perfectamente, como también lo sabían los comandantes de la nación anfitriona, que los narcóticos eran una excusa ridícula para fortalecer las capacidades de tropas que habían perdido la confianza de la población, luego de años de atropellos (...) Pero yo me había ido acostumbrando a las mentiras. Estas eran la moneda circulante de nuestra política exterior. (...)

Hay también una historia turbulenta del gobierno de Estados Unidos que lucha con —no contra— los traficantes de droga. De hecho la CIA parece tener una tendencia irresistible hacia los barones de la droga.

El cumulo de incoherencias, contradicciones y aberraciones que han hecho ininteligible la «política antidroga» de los gobiernos de Estados Unidos (y colombianos) se vuelve inteligible cuando se la descubre como «paraguas» para cubrir intereses inconfesables. De hecho, la caída del muro de Berlín, con todas sus connotaciones, dejaba sin piso ideológico la política intervencionista de los Estados Unidos en sus aéreas de influencia, pues ya no existía ninguna súper potencia enemiga que tratara de infiltrarse en sus patios. Pero quedaba el desnudo los verdaderos objetivos de esa «guerra». Impedir la autodeterminación de los pueblos que quisieran modificar las reglas de juego de un sistema de explotación generador de miseria a gran escala necesario, entonces, encontrar otra legitimación ideológica para la intervención y para la continuidad de la estrategia militar trazada desde comienzos de los sesentas, y esta fue la «política antinarcóticos».

El fenómeno del narcotráfico se articula, pues, al actual ciclo de violencia:

- a) brindando financiación exorbitante y poder extorsivo y corruptor al paramilitarismo;
- b) brindando legitimación ideológica a la continuidad de la intervención estadounidense en el conflicto (interno) colombiano, mediante la ayuda militar creciente bajo el paraguas de «política antinarcóticos» y presencia creciente de asesores contrainsurgentes bajo el mismo paraguas;
- c) legitimando acciones destructivas contra las capas más vulnerables de la economía de la droga y provocando en ellas reacciones violentas de desesperacion apoyadas por la insurgencia...

(Colombia Nunca Más, Tomo I).

La biografía no oficial de Álvaro Uribe Vélez, se pierde en los largos caminos de halagos y aciertos que le acreditan sus zalameros subalternos, pero no dice ni una sola palabra en lo que respecta a su vida familiar y publica, como por ejemplo: su sombrío paso por la Aeronáutica Civil, o la catastrófica salida de la Alcaldía de Medellín (silencio absoluto). O las mortíferas andanzas armadas de su hermano Santiago y de sus primos narcoparamilitares, como es el caso de su inseparable familiar, amigo y cómplice político Mario Uribe, senador de la República y personaje activo en el ghetto mafioso. Se puede leer en su incompleta 'hoja de vida' que comenzó su carrera pública como gerente de las Empresas Publicas de Medellín en 1976; fue secretario general del Ministerio de Trabajo en 1977/78 en el gobierno del liberal Alfonso López Michelsen,³⁰ tiempo durante el cual trabajo activamente con los ministros Montoya y Restrepo sobre libertades sindicales (¿?); director de la Aeronáutica Civil 1980-82, cargo sobre el cual su biografía oficial no dice absolutamente nada; Alcalde de Medellín en 1982, sobre este cargo y su periodo no hay anotación alguna y es apenas comprensible, pues, es esta la época en que el Cartel de Medellín tomaba fuerza y se infiltraba de lleno en la vida política de la ciudad y el departamento, con el pleno apoyo de la clase dirigente. Fue concejal de la ciudad de Medellín, en los periodos de 1984-86 y

³⁰ En el gobierno de Alfonso López Michelsen 1974-1978 fue creada la 'ventanilla siniestra' en el Banco de la República, por la cual entraron al país millones de dólares producto del narcotráfico, todo esto desde luego, encubierto por movimientos y transacciones comerciales legalizadas por el Estado. López contribuyó a fortalecer la mafia de las drogas.

de 1988-90. En el primer periodo trabajo arduamente en la exoneración tributaria a las cooperativas (No es aventurado decir ahora que ya para esa época Álvaro Uribe Vélez, proyectaba un buen futuro para las cooperativas, sobre todo aquellas relacionadas con la Seguridad Privada, tanto en lo económico como en lo empresarial). Estudio Negociación de Conflictos en la Universidad de Harvard en 1993. Fue elegido senador de la República en 1994 y, es desde ese periodo que comienza a tener, en medio de los círculos más reaccionarios del país, los elogios mas irracionales que lo declaraban como el «senador estrella» o el «mejor senador». La ultraderecha lo eligió como «senador de mejores iniciativas» En tanto que senador de la República por el partido liberal, se caracterizo por su sutil oposición a la extradición de nacionales hacia los Estados Unidos, acusados de narcotráfico, y su proximidad con toda clase de 'notorias' personalidades, que profesaban un rabioso anticomunismo y una especie de ideal 'súper' capitalista, es decir, sin reparos en la forma de abordar los negocios de toda índole para ganar millones y sin importar el costo humano. Pues, es humano y democrático, ser anticomunista sin ordenar el asesinato de los que lo son, como también, se puede ser ateo, sin necesidad de ordenar el asesinato de curas, como igualmente, se puede impulsar la empresa privada, sin acudir a la formación de bandas criminales para cuidarlas y asesinar sindicalistas, o impulsar y desarrollar negocios lícitos, pero, sin maniobras ilícitas, que los hagan aparecer con una fachada de empresas respetables. Pero, el 'magnifico' Uribe, ha hecho posible todo lo anterior. Y los amigos del hoy "presidente" no se han detenido, m se detendrán ante nada, con tal de llevar a cabo su morbosa, mortífera y maquiavélica ideología.

Uribe Vélez se movía en esos dos mundos, el legal y el ilegal como un pez en el agua, ganando reconocimiento de los dos lados y reforzando su popularidad, tanto en los ingenuos y tontos sectores de la población, como en los adinerados y oscuros sectores emergentes del país. «El segundo Uribe se deja ver en las 'tardes doradas de la mafia'», es así como lo describe el escritor Alape Rojas, en uno de sus excelentes artículos. Cuenta el escritor un episodio del que fue testigo presencial:

En una de las lujosas faenas de Armenia (departamento de Quindío y otrora zona cafetera), cuando la ciudad se preparaba para su centenario, el escritor ve de lejos a los (sanguinarios) capos de la mafia Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y el clan de los Ochoa, que asisten al espectáculo. Darío Chica, el consentido de la mafia, presenta su espectáculo de rejoneo. Fabio Ochoa, 'el obeso padrino de los nuevos ricos' y 'notorias' personalidades, imparte absoluciones comiendo siempre mandarinas. 'Tupac Amaru', el caballo de un millón de dólares, opaca con su silueta y con el pequeño lucero gravado en su frente, a las otras cabalgaduras. Rodríguez Gacha (el Mexicano, campesino vulgar e ignorante) propietario del ejemplar, 'disfruta las mieles de su popularidad'.

Y allí, en ese mismo sitio y hora esta él, el candidato (Uribe Vélez), 'con sus magnificas cuadrillas de caballos'. Allí esta el 'doptor Uribe', como le decía el 'Mexicano' (ese sanguinario, inculto y arrogante narco criminal), o 'Varito', como lo motejaba cariñosamente el gordo Fabio Ochoa (con esa voz autoritaria para adormecer culebras). Y de ninguna manera distante, sin ningún prejuicio, ni timidez, sino francamente comprometido en el negocio turbio, desde la brevedad ambigua de su atuendo de paisano y sus gafas de Harvard, intercambiando toda clase de información, —legal e ilegal entre otras la pecuaria para modernizar sus dehesas (yeguas). Daba la impresión —añade el escritor Rojas— de ser un amigo muy cercano de los padrinos caballistas. Me parece observarlo contemplando la conjunción jinete/caballo de Darío Chica (el rejoneador de los narcos), con Venus, el esplendido caballo de uno de los narcotraficantes. Uribe alzaba su entre cejo con visible admiración, seguramente empezando a vislumbrar un país, brioso y Tonto a la vez, montado por él».

Años después cuando seria interrogado por sus vínculos con personajes de la mafia colombiana, o por nombrar en su entorno más cercano como presidente de Colombia a individuos de dudosa reputación, repetía una y mil veces la célebre frase, que hoy sigue declamando: «Este hombre yo lo conozco y es honesto». Como honestos eran esos nuevos ricos en esas tardes doradas...

Posesionado Uribe, como gobernador del departamento de Antioquia en el periodo 1995-1997, desarrolla un impresionante arsenal de leyes y un infernal acosamiento político para lograr (imponer) legalizar, en su departamento y luego en todo el país, sus cooperativas de seguridad privada (Convivir), las cuales devendrían una monstruosa maquina asesina, llamadas en un principio por sus fundadores y patrocinadores (terratenientes, narcotraficantes, industriales y sectores de las fuerzas armadas): Autodefensas Unidas Campesinas (AUC) . Según su acomodada biografía oficial, Uribe redujo la burocracia en el departamento en un 34 por ciento, y el numero de vehículos oficiales en un 35 por ciento; capacito a 40 mil personas, en su mayoría campesinos, en «negociación pacífica de conflictos» (y la pregunta es obligatoria, ¿entonces por qué muchos de estos 'pacifistas' entraron a engrosar las filas de los escuadrones de la muerte?). Y afirma que un millón 200 pobres (dice «pobres») ingresaron al Sistema de Salud Subsidiado, pero sin embargo, muchos ciudadanos morían por falta de atención medica, en especial los niños y niñas. Ordenó militarizar el edificio de la gobernación y llenarlo de perros policías, que husmeaban en todos los rincones, creando un clima de desconfianza entre todos los empleados y sus más cercanos colaboradores; el, era el único que podía llevar y decir la última palabra, su proceder no era propiamente el de un verdadero demócrata; esgrimía un sarcasmo pérfido contra todo aquel que se atrevía a discrepar mínimamente de sus planteamientos, de tal manera, que los aportes de sus colaboradores eran nulos, inexistentes. Cuando Uribe salió de la gobernación, un aire de calma llegó, los perros policías desaparecieron, los guardias de seguridad regresaron a sus cuarteles, las supuestas amenazas de bombas y las evacuaciones sorpresivas fueron un mal recuerdo, las ametralladoras fueron guardadas en el armario, y el nuevo gobernador caminó por lo corredores de la gobernación tranquilamente, hablando con los funcionarios y pidiendo consejos a sus colaboradores sobre tal o cual asunto.

Pero si la situación del departamento de Antioquia empeoraba de la mano de Uribe Vélez, la del país en general no mejoraba. La clase dirigente y los jefes de los dos partidos tradicionales habían renunciado desde muchos años atrás a tomar las riendas del país y dirigirlo con autoridad, ecuanimidad y justicia. El vacío de poder político era evidente, era palpable, mientras el poder militar tomaba ventaja y se iba adueñando de una parte de ese poder para tomar parte en las decisiones más importantes y decisivas de la vida nacional, el poder económico era manejado por la ultraderecha, la cual no dudo en casarse con la economía ilícita, incluida la extranjera (trafico de drogas y tráfico de armas, por ejemplo, sin olvidar la trata de mujeres y prostitución infantil), formando un pulpo de mil tentáculos. Para la mayoría de las colombianas y colombianos, la violencia no era ya solamente el fruto del sectarismo bipartidista de otrora, si no una violencia con plena participación del Estado y aplicada por sus mismos agentes. Innumerables serian los casos de masacres contra la población civil, perpetradas por los escuadrones de la muerte con la complicidad directa de los agentes del Estado. Los tiempos de la tortura no había quedado atrás, esos tiempos en los cuales, esos monstruos oficiales llegaban a los lugares más apartados de la geografía nacional, y sintiéndose dueños de la situación y sobre todo cobijados por la impunidad estatal, sometían a sus víctimas a los castigos más escabrosos, a las torturas mas inhumanas que la especie humana pueda tolerar; campesinas y campesinos eran como seleccionados por un maldito destino y sometidos a una barbarie inimaginable. Humildes campesinos perdían sus ojos, sus victimarios los amarraban a un árbol de cualquier frutal y después de ser ultrajados y golpeados sin descanso y acusados de auxiliar a la guerrilla o de profesar ideas extranjeras (comunistas), sus ojos eran arrancados a sangre fría, por sus esbirros de turno, y en muchas ocasiones, su lengua era cortada como una forma de escarmentar al 'reo' por haber pedido respeto a su vida, a su integridad o por haber denunciado ante las autoridades a sus futuros victimarios. Campesinas eran violadas por uno o varios de estos criminales pertenecientes al estamento gubernamental, o pertenecientes a los grupos narcoparamilitares. En ocasiones cuando la mujer estaba embarazada, su vientre era abierto y su pequeño embrión en gestación, era tirada al no o a los animales salvajes. Si en el lugar había presencia de niños o niñas, estos eran obligados a contemplar el horrible espectáculo y luego eran asesinados. Las niñas, en la mayoría de los casos, eran violadas. En muchos de los casos, también los verdugos de turno degollaban a sus víctimas, después de incesante tortura física y psicológica. En regiones menos apartadas, las víctimas de estos horribles e inhumanos actos, eran quemadas para evitar la labor de

identificación de las autoridades judiciales, cuando estas lograban tener a un superior responsable a la cabeza de la investigación.

Con el correr del tiempo, los criminales mejorarían sus «odiseas», descuartizando a sus víctimas con machetes o motosierra, las indefensas y aterrorizadas víctimas morían lentamente, en el sufrimiento más espantoso, ya que sus verdugos los desmembraban vivos, brazo por brazo, pierna tras pierna, hasta morir cuando sus cabezas eran separadas de sus cuerpos. En varias ocasiones, el grupo encargado de semejante brutalidad, se entretenía jugando fútbol con una de las cabezas de sus víctimas. Ejército y policía miraban hacia otro lado, en el mejor de los casos, en otros, eran ellos los que aportaban las víctimas al cadalso de sangre y muerte.

Maestros de escuelas rurales serían torturados y asesinados en horribles circunstancias, por el solo hecho de haber enseñado a sus alumnos sus derechos de infantes y los derechos humanos. Para las bestias narcoparamilitares, esas son enseñanzas subversivas que hay que cortar de raíz, y la raíz que es el maestro o la maestra de la escuela, eran cortados en picadillo y sus pedazos tirados a los perros salvajes, para escarmiento de la comunidad. Y la participación de la fuerza pública, en estos crímenes está comprobada mediante serias investigaciones judiciales a lo largo de decenios. Sin embargo, se puede contar con los dedos de una mano y sobran dedos, los agentes de las fuerzas armadas que han sido condenados y están en prisión, por haber cometido o ayudado a cometer este genocidio. Se puede estimar que las víctimas de estas masacres, tanto individuales como colectivas de niños, niñas, mujeres y hombres sobrepasa fácilmente las doscientas mil personas, en estas últimas tres décadas, según datos de los organismos de derechos humanos nacionales.

Para ilustración de los amigos de la humanidad, podemos dar como ejemplo, la masacre de la Rochela, en la cual quince miembros de la justicia colombiana fueron horriblemente masacrados y como la justicia en su deber y conciencia ha faltado a su deber:

«La Rochela: Una Investigación que se castigó con la Eliminación de los Investigadores»:

El 18 de enero de 1989 los jueces Pablo Beltrán, Juez 16 de Instrucción Criminal de San Gil; Mariela Morales, jueza 4 de Instrucción Criminal de San Gil (departamento de Santander), y los Investigadores del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial de Bogotá Arturo Salgado, Germán Monroy, Luis Hernández; y los Secretarios de la Policía Judicial de Bogotá Virgilio Hernández, Carlos Castillo, y Miembros del Cuerpo Técnico Judicial de San Gil Cesar Morales, Gabriel Vesga; y los conductores Samuel Vargas y Arnulfo Mejía, fueron asesinados en la pequeña población de La Rochela, por un grupo de hombres fuertemente armados que operaban en el Magdalena Medio. En principio las Fuerzas Armadas y la gran prensa acusaron a las FARC de tan horrible masacre. Pero a medida que la investigación avanzó, no sin enormes tropiezos, se supo que los autores fueron Escuadrones de la Muerte de la región, apodados 'Los Macetos' y quienes recibieron dinero de altos oficiales del Ejército y la Armada entre ellos del Brigadier General Farouk Yanine Díaz, Comandante de la Segunda División del Ejército.

Los funcionarios se habían desplazado a la zona con la finalidad de recaudar una serie de pruebas sobre varias investigaciones concernientes a varias masacres y asesinatos individuales en un número no menor de 25 casos, en los que estaban involucrados los Escuadrones de la Muerte de Simacota y Puerto Parra; también investigaban la desaparición de 19 comerciantes en Cimitarra (Departamento de Santander), ordenada por el Brigadier General Farouk Yanine Díaz y en el que habían participado miembros del Batallón Bárbula y paramilitares al mando de Henry de Jesús Pérez Duran.

La comisión Judicial llegó a La Rochela hacia las 8 de la mañana. Tres miembros del Cuerpo Técnico de la Policía se desplazaron hacia el pequeño caserío llamado Pueblo Nuevo; cuando cruzaron el río Opón fueron interceptados por un nutrido grupo de hombres fuertemente armados,

quienes se identificaron como miembros del XXIII Frente de las FARC. Uno de los hombre se identifico como «comandante Ernesto», en realidad se trataba del jefe paramilitar Julián Jaimes Rodríguez, quien les prometió valiosa ayuda e importantes testimonios. Los funcionarios les creyeron y volvieron por los otros miembros de la comisión. Cuando ya estaban todos reunidos, los falsos guerrilleros les solicitaron amablemente que les entregaran las armas que tenían y estos así lo hicieron. Luego llegaron los supuestos jefes guerrilleros a bordo de un Jepps 'Nissan' extra largos, elegantemente vestidos luciendo anillos, pulseras y relojes de oro, y portando sombreros blancos con cintas de colores, el grupo era comandado por el sanguinario jefe paramilitar Alonso de Jesús Baquero, quien se identifico como «comandante Vladimir» máximo líder del XXIII Frente de las FARC. Repentinamente los falsos guerrilleros les dijeron a los miembros de la comisión, que había movimientos militares en la zona, que era mejor buscar un sitio más seguro para la importante conversación y les sugirieron que se dejaran amarrar, con el pretexto de que si había contacto con los militares, solo tenían que decir que las FARC los tenían como rehenes, a lo cual también accedieron los funcionarios judiciales. Acto seguido fueron subidos en los dos jeeps en que se transportaba la comisión y tomaron la vía Panamericana hacia la localidad de Barrancabermeja; luego de recorrer aproximadamente 5 km se detuvieron y allí los asesinos procedieron a disparar contra los quince miembros de la comisión, dos quedaron heridos y uno solo salió vivo al fingir estar muerto, cuando una de las victimas le cayó encima, y los quince restantes fueron masacrados en el repudiable hecho.

Antes de retirarse del lugar, los criminales paramilitares escribieron en los vchiculos «FUERA EL MAS³¹ - FUERA LOS PARAMILITARES» También se llevaron consigo trece de los quince expedientes que llevaba la comisión.

Antes de la masacre se llevaron a cabo varias reuniones. Henry de Jesús Pérez se reunió con el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, en una finca de este último ubicada a orillas del río Ermitaño. La reunión se dio después de que el mayor del ejército Oscar de Jesús Echandia Sánchez llamara a Pérez Duran y le transmitiera un mensaje del político liberal Tiberio Villareal Ramos, según el cual, 'a esa Comisión había que desaparecerla'. El 10 de enero de 1989, los jefes criminales Gonzalo Pérez, Henry de Jesús Pérez, Ramón Isaza³² y Alonso de Jesús Baquero, se reunieron en la finca La Palma de propiedad de Henry de Jesús, tomaron la decisión de acabar con los miembros de la comisión y robarles los expedientes. En la reunión estaban los directivos de ACDEGAN (Asociación Colombiana de Ganaderos) y del movimiento MORENA (movimiento de Renovación Nacional, de extrema derecha). Para garantizar el éxito de la operación, los criminales coordinaron con el comandante del Batallón Nueva Granada Teniente Coronel Rodrigo Rojas Guerra; el teniente Luis Enrique Andrade Ortiz, del Batallón Rafael Reyes; un oficial de la Armada Nacional y el Mayor Gil que era el comandante de la policía de Barrancabermeja, con ellos se reunieron los para militares Alonso de Jesús Baquero y Jorge Iván Galvis. La reunión aparentemente se llevó a cabo en el Club San Silvestre a donde llegaron los oficiales abordo de un vehículo azul perteneciente a ECOPETROL (Empresa Colombiana de Petróleos). A los miembros de la policía de Barrancabermeja les pagaron para que no escoltaran a los miembros de la Comisión Judicial.

En la ejecución material participaron algo más de veinte paramilitares, con la complicidad de militares que estuvieron involucrados, pues fueron vistos ese mismo día con los criminales paramilitares que ejecutaron la masacre, estos fueron el mayor Oscar Robayo del Batallón Rafael Reyes, y el sargento Otoniel Hernández comandante militar de Las Montoyas. La munición utilizada por los criminales había sido entregada por el Ejército. Según declaró el paramilitar Efrén

³¹ El MAS, Muerte A Secuestradores, fue fundado por los capos de la droga de Medellín,

³² Este criminal Isaza, hace parte de los jefes de los escuadrones de la muerte y narcotráfico, que negocian con el gobierno de Uribe, los 'acuerdos de paz'

Galeano, Alonso de Jesús Baquero recibió 200 millones de pesos (70 mil euros), por llevar a cabo la masacre, los cuales fueron enviados en un maletín por el general Farouk Yanine Díaz. Galeano López fue encargado por el alto oficial de hacer la entrega de la suma de dinero, la cual fue efectuada a las afueras de las instalaciones de la XIV Brigada en Puerto Berrío. Efrén Galeano fue desaparecido tiempo después que diera sus declaraciones. Así mismo Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar enviaron 1,500 millones de pesos (500 mil euros) a Henry de Jesús Pérez en «agradecimiento», según declaró Baquero Agudelo.

La actuación de la Justicia Penal Ordinaria

El 18 de enero de 1989, los juzgados 14 y 15 de Instrucción Criminal de San Gil hicieron el levantamiento de los cadáveres. Ese mismo día la Dirección Seccional de Instrucción Criminal del departamento de Santander integro una Unidad Móvil de Investigación para investigar la masacre, conformada por los Juzgados 5 y 6 de orden Publico de Bucaramanga (capital del departamento), que luego fue reforzada por el juzgado 6 de Orden Publico Bogotá.

El 22 de enero de 1989 se produjo la captura de varios miembros del MAS, junto con el teniente Luis Enrique Andrade Ortiz. El 18 de agosto de 1989, fue capturado Alfonso de Jesús Baquero Agudelo, junto con dos de sus guardaespaldas.

En julio de 1989, el proceso fue remitido al juzgado Segundo de Orden Publico de Pasto (departamento de Nariño), que el 29 de junio de 1990 condenó al teniente Luis Andrade Ortiz y el sargento Otoniel Hernández a cinco años de prisión por «auxilio de actividades terroristas»; a Alonso de Jesús Baquero, Julián Rodríguez y Ricardo Ríos a 30 años de prisión; a otros cuatro paramilitares mas a 10 y 13 años de prisión.

El 14 de noviembre de 1990, el Tribunal Nacional de Orden Publico, en segunda Instancia absolvió al teniente Luis Enrique Andrade Ortiz... (y la participación de los cerebros o gestores intelectuales y los principales actores de la masacre de los jueces, seguía en la impunidad.)

El 5 de noviembre de 1996, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, vinculo al proceso a nueve paramilitares ordenando su captura el 10 de enero de 1997. El cinco de febrero de 1997 ordenó la captura del mayor del ejército Oscar de Jesús Echandía Sánchez por los delitos de «homicidio con fines terroristas y complicidad en tentativa de homicidio...» El 31 de marzo de 1997, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía se abstuvo de ordenar la captura del jefe paramilitar Luis Alberto Arrieta Morales, al considerar que aunque estuvo en el lugar de los hechos «noparticipó en las reuniones, como tampoco en la ejecución de los integrantes de la Comisión Judicial».

El 7 de mayo de 1997, la Unidad de Derechos Humanos lanzo orden de captura contra el militar Luis Alberto Rublo Rojas por «pertenecer a una organización terrorista»... El 10 de julio la Unidad de Derechos Humanos ordeno la cancelación de la orden de captura contra Robinson Gutiérrez de la Cruz, al considerar que no era él quien había participado en los hechos, sino Osuna Gómez y que se había presentado una confusión... El 12 de septiembre de 1997, la Unidad Nacional de Derechos Humanos profirió resolución de acusación al mayor del ejército Oscar de Jesús Echandía Sánchez como 'cómplice en los delitos de homicidio agravado con fines terroristas y tentativa de homicidio agravado'; de igual manera el 8 de octubre de 1997, ordeno la prisión preventiva a Marcelino Panesso 'en calidad de determinador de los homicidios y tentativa de homicidio'.

El 18 de febrero de 1998, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional revocó la resolución del 12 de septiembre de 1977 (concerniente al mayor Echandía).

El 15 de mayo de 1998, la Corte Suprema de Justicia, emitió fallo inhibitorio en favor de Tiberio Villareal Ramos (el político liberal mezclado en la masacre los jueces y la desaparición de los 19 comerciantes)...

La Justicia Penal Militar

El 27 de febrero de 1989, el juzgado 126 de Instrucción penal militar de la XIV Brigada inicio la indagación preliminar por la masacre de los jueces, al surgir las primeras pruebas de la participación del teniente Luis Enrique Andrade Ortiz, abriendo formal investigación contra el oficial el 2 de marzo de 1989, por homicidio. El 31 de octubre de 1989, el juzgado 126 de instrucción penal militar decretó la cesación de procedimiento en favor del teniente Andrade Ortiz, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior Militar.

El Refinamiento de los Mecanismos de Impunidad

En el periodo de represión, en que se da la aparición y fortalecimiento de los Escuadrones de la Muerte (paramilitares), coincide con las denuncias permanentes por parte de las organizaciones de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional, que obliga al Estado, desde todas sus instancias, a retirar los mecanismos que garanticen la IMPUNIDAD de los crímenes. Pero! En casos como la desaparición de los 19 comerciantes y la masacre de la Rochela, que constituyen claramente crímenes de lesa humanidad, los militares implica-dos, no todos fueron procesados, y los procesados lo fueron por la justicia penal militar sin que ninguno fuera sancionado penalmente. El Consejo Superior de la Judicatura, como en otros muchos casos, colocó su decisiva cuota para garantizar impunidad al resolver el conflicto de competencias en favor de la justicia penal militar en el caso de los 19 comerciantes.

El impedir la constitución de parte civil en el proceso, ha sido otra de las formas de contribuir a garantizar la impunidad, en la desaparición de los 19 comerciantes.

Solamente en 1996, después de los hechos fue aceptada la parte civil, y en la masacre de la Rochela, en 1997, o sea 8 años después.

Los paramilitares que participaron (y han participado) en múltiples hechos de muerte, contaron con la protección de miembros de la fuerza pública, pese a que existían ordenes de captura, estas no se hacían efectivas. Como en el caso del paramilitar. Alonso de Jesús Baquero Agudelo, quien teniendo orden de captura se movía por todo el Magdalena Medio, sin que ninguna autoridad lo detuviera. Luis Arrieta paramilitar de Puerto Boyacá, declaró ante la Fiscalía que 'las relaciones del jefe paramilitar con los militares de la zona fueron excelentes, y después de la masacre de los jueces él se paseaba sin problemas por Puerto Berrío, se la pasaba en las fincas, ya que de la XIV Brigada le habían enviado varios mensajes de no acercarse al pueblo por que tenía orden de captura... días antes de la captura de Baquero, el comandante de la policía de Puerto Berrío le había mandado decir que no bajara al pueblo, porque estaba en la obligación de arrestarlo'.

También en los múltiples crímenes siempre aparecieron al frente de las acciones, civiles al servicio del Ejército, que eran los encargados del 'trabajo sucio'. La función de los militares era la de ordenar los crímenes, garantizar la logística para su realización y si eventualmente se presentaban complicaciones o inconvenientes ellos lo resolvían. Esto se evidencia en la declaración del criminal paramilitar Efrén Giancano López, quien servía de escolta al general Farouk Yanine Díaz, cuando este se movía por el Magdalena Medio, y quien afirmo que después de la masacre de La Rochela «El general Farouk Yanine Díaz... no quedando muy contento cuando supo que también habían fallado (hubo sobrevivientes)... se reunieron para llegar a un acuerdo, que si algo pasaba no se debía mencionar al general Yanine y que el saldría en defensa de ellos argumentando que no habían sido los paramilitares sino la guerrilla». Los innumerables

crímenes siempre se han dado en zonas de control militar, con gran influencia paramilitar y en donde estos grupos se mueven con plena libertad y son apoyados en sus criminales acciones por los organismos de seguridad del Estado y autoridades civiles.

En el caso de La Rochela, tres testigos y uno de los agentes investigadores del caso, perteneciente al CTI, fueron asesinados. Así mismo Baquero fue amenazado de muerte por su declaración sobre los hechos y haber denunciado a responsables intelectuales de la masacre, según denunció el paramilitar, el abogado Gabriel Burgos al servicio de Carlos Castaño (cabecilla máximo de los Escuadrones de la Muerte y reconocido narcotraficante, responsable de horribles e innumerables crímenes) en 1996 estuvo visitando en la cárcel en varias oportunidades al paramilitar para ofrecerle 20 millones de pesos (7 mil euros) para que se retractara de lo que había declarado. En una de sus visitas le diría:

«Usted sabe muy bien que entre Yanine Díaz y Carlos Castaño existe una alianza, Carlos Castaño le manda decir que tiene que ayudarlo al general Yanine, al coronel Navas Rubio y al general Rito Alejo del Río,³³ pues ellos ya tenían una copia de lo que ha declarado y su situación está en manos de ellos. El general Yanine le dió una platica³⁴ a Castaño para que parara todo ese asunto. Carlos Castaño le manda decir que si no quiere ceder por las buenas, le va tocar ceder por las malas y no olvide que tiene dos hijas, usted no querrá que en un caso dado muera una de sus hijas».

(Ambas declaraciones de los reos aparecen en los archivos de la Fiscalía bajo el radicado N° 101).

Si este horrible hecho pudo ocurrirle a funcionarios del gobierno, a agentes judiciales de la nación y con cierto poder de respuesta ante los abusos o la disfunción del Estado, es muy fácil imaginarnos, la impunidad en los casos de masacres a simples campesinas y campesinos, indígenas y sus pequeños infantes, como también, en muchas ocasiones de vagabundos y niños de la calle (huérfanos o hijos de familias extremadamente pobres, casos en los cuales, muchos padres devienen alcohólicos o drogadictos y las madres prostitutas), eliminados bajo la abominable consigna de que son «desechables». Pareciera que en la mente de estos grupúsculos fascistas y depravados que se han apoderado del poder absoluto en Colombia, el asesinar viene a ser su deporte favorito, amparados en una completa impunidad. Sin embargo las altas instancias de justicia internacional, a las cuales las colombianas y colombianos sin títulos ni altos cargos, han estado obligados a acudir para obtener Justicia, les han dado toda la razón, tratando a la vez de impartir la justicia y devolverles en parte algo de esa dignidad expoliada, denegada arbitrariamente por el Estado colombiano. Una Justicia que jamás encontrarán en ese Estado Mafioso en que se ha convertido el país, pues, las instituciones colombianas están en manos de un puñado de criminales, los cuales no permitirán, que un diáfano y apacible transcurrir cotidiano se apodere del país, evitando a toda costa, el sueño de la inmensa mayoría de colombianas y colombianos de derrotar esa maldita IMPUNIDAD, que se erigió hace decenas de años atrás, como un monstruo intocable.

La Corte Interamericana en este caso expreso de 'La Rochela', como en muchos otros casos también, encontró entera responsabilidad del Estado colombiano. Un Estado totalmente en contra de lo impartido por la justicia nacional colombiana, que absolvió a la gran mayoría de culpables, y dejando fuera de toda

³³ Este general fue apodado por Uribe, el 'pacificador del Urabá. Durante su permanencia como comandante del ejército, las masacres por parte de los escuadrones de la muerte fueron numerosas y efectuadas con sevicia en la región del Urabá, el asesinato de sindicalistas y miembros de la Unión Patriótica fue cotidiana. Este militar recibió un homenaje de desagravio por el hoy presidente Uribe, cuando fue retirado de la institución por sus vínculos con el narcoparamilitarismo.

³⁴ Esta forma de hablar constantemente con diminutivos es muy corriente entre los mafiosos, y el presidente Uribe la utiliza muy seguido.

responsabilidad a los agentes del Estado, que participaron de una u otra forma en la masacre de los jueces.

Virgilio Hernández, ex coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía e hijo de unos de los funcionarios judiciales sacrificados en 'La Rochela', escribiría en el diario 'El Espectador':

«El Estado pidió perdón por su omisión en la masacre de La Rochela. Para que Colombia no Olvide: Después de dieciséis años, el Estado colombiano a través de sus más importantes instituciones, congregó a familiares y sobrevivientes de la masacre de La Rochela para rendir un homenaje de desagravio, ante la inminente condena internacional contra nuestro país por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar la impunidad.

En un país como el nuestro, donde la memoria se pierde con asombrosa facilidad y donde la metamorfosis del agresor lo convierte en agredido, es necesario recordar los hechos de La Rochela, al menos bajo las circunstancias en que los familiares de las víctimas tuvimos oportunidad de conocerlos.

Solo los quince funcionarios que conformaban la comisión jurídica integrada, aquel diciembre de 1988, por la Dirección de Instrucción criminal de Bucaramanga, llegaban a suponer la responsabilidad que se arrojaba a sus manos: descubrir la verdad de hechos tan graves como masacres de una crueldad inimaginable, secuestros, desapariciones y torturas, perpetrados en un sector del Magdalena Medio del departamento de Santander.

Jueces y secretarios no salían de su asombro frente al reto. El temor por sus vidas y por la suerte de sus familias empezaba a invadir sus cuerpos. Mi padre así lo presintió. Los Jueces y secretarios radicados en San Gil, no habían aprendido a conocer la crueldad ni la barbarie. Tampoco los jóvenes investigadores que conformaban la comisión técnica.

'Tienen que ir, y punto' Esa fue la respuesta del insensato y arrogante director de Instrucción Criminal ante los reclamos y suplicas de una funcionaria de la comisión jurídica. Era una madre que frente al orgullo de sus padres se hizo jueza y nunca imaginé que días más tarde tendría que suplicarles también a sus verdugos para que, en nombre de su nene lactante, le perdonaran la vida. Sus suplicas solo recibieron como respuesta el sonido de las balas.

La inocencia de los funcionarios tuvo un costo muy alto. Fueron fácilmente engañados y conducidos como ovejas mansas a la boca del lobo. 'Hay que acabar la comisión!', fue la recomendación de un político santandereano de ninguna grata recordación, según la versión confesa de uno de los sicarios. Recomendación que compartieron las autoridades presentes y el propio gestor de una de las mayores organizaciones de narcotráfico en Colombia. 'Hay que picarlos y desaparecerlos', replicó otro miembro de la asociación criminal. 'No, hay que dejarlos esparcidos en el área para escarmiento de los jueces', fue el veredicto final. Días más tarde se cumplió el designio.

Una vez engañados, fueron desarmados. Una vez desarmados fueron amarrados. Una vez amarrados cayó la lluvia de fuego, y la lluvia de gracia precedió al tiro de gracia, y el tiro de gracia acabo con el propósito de sus vidas y con los sueños de su descendencia.

«Fueron las FARC», aseguro un comandante, repitió un gobernador y lo replicó la prensa... La sociedad debatía y especulaba sobre el autor del execrable crimen... El dolor no se mide ni se enerva por el autor del agravio. La vida se consume en un dolor intenso que no atiende móviles, uniformes ni insignias.

Como ignorar la valentía de nuestros seres queridos, que en ese instante y en ese pedazo de Colombia representaban lo más sublime del Estado: la justicia. Sin embargo, su valor no fue suficiente. Las armas

de los violentos y las de quienes debían defender las instituciones, se antepusieron a sus ingenuos propósitos.

Algunos hombres que debían velar por la defensa y seguridad de todos, se aliaron con los forajidos y doblegaron a los indefensos funcionarios. Los códigos y las leyes no pudieron someter a las armas. Y cayeron. Cayeron como la esperanza de paz y justicia que desde otrora anhelamos todos los colombianos. Cayeron sepultando la esperanza los propósitos que alguna vez tuvimos de no sucumbir ante el crimen y la barbarie. El sacrificio de los jueces y los investigadores no solo fue la llama que incineró nuestras almas. Fue la esperanza de justicia que los colombianos empezamos a sepultar cuando no tuvimos el valor de defender a nuestros jueces.

¿Y sus verdugos? ¿Donde están sus verdugos? Aquellos que les cortaron la esperanza de vivir y de compartir, de amar y de ser amados, de disfrutar y ver crecer a sus hijos, y quizás, a sus nietos. Aquellos hijos que dieciséis años más tarde tuvieron el valor de recordar y llorar a sus padres desconocidos.

No solo fueron verdugos sobre nuestros seres amados: fueron los verdugos de la justicia, los verdugos de la esperanza, los verdugos del asomo de reconciliación que alguna vez nació en nuestros gobernantes. Mientras la justicia siga doblegada a los ruidos de la guerra, esos verdugos seguirán con nosotros. Estarán aquí y estarán allá, querrán estar donde se hacen y donde se cumplen las leyes. Aspiraran a sentarse en el solio de Bolívar y quizás pretendan administrar justicia.

A pesar de todo, en el alma de nuestras familias no subyace el resentimiento, no permanece el odio ni prolifera el rencor. Solo el dolor por una Colombia que no supo defender a quienes han intentado impartir justicia y que solo, ante el clamor internacional, tantos años después de incertidumbre y sufrimiento, recuerda y reconoce que doce valerosos seres humanos abandonaron a sus seres queridos para hacer nacer la esperanza de justicia y paz».

La complicidad, el contubernio, esa criminal sociedad entre la mayor parte de los políticos colombianos y la fuerza pública con los escuadrones de la muerte y el narcotráfico, no deja lugar a dudas que el dolor de millones de colombianas y colombianos no se detendrá. Pero a pesar de esa cadena de masacres y asesinatos selectivos de colombianas y colombianos que se han opuestos a dejar el país en sus manos, en manos de esos enemigos de la humanidad, en manos de ese sistema mafioso, esos hombres y mujeres reticentes a dejarse invadir por el deshonor y devenir indignos, murieron con la convicción que muchos otros nos levantaremos contra esa vergüenza nacional, contra esa lacra compuesta por una minoría y la cual debemos todos vencer, todos los hombres y mujeres de buena voluntad y dignidad a toda prueba sabremos derrotar por todos los medios justos, a esa mafia, mismo, si devino poder estatal. Venceremos!

Mientras Álvaro Uribe Vélez, fingía como 'senador estrella' de la república, sus más cercanos familiares hacían de las suyas en campos y pueblos de los departamentos de Antioquia y Córdoba, asesinando campesinos y aterrorizando a la población civil. Es así, como Santiago Uribe Vélez crea en 1993 en compañía del sacerdote Gonzalo Palacios, el temible grupo paramilitar denominado los «Doce Apóstoles» y el cual financiara durante varios años, años en los cuales fueron asesinadas y desaparecidas no menos de doscientas personas. Su base de operaciones se centró en la hacienda 'La Carolina' de propiedad de Álvaro Uribe y sus hermanos. Esta banda criminal gozaba de una amplia libertad de movimiento gracias a la fuerza pública y a las autoridades departamentales, las cuales hacían oídos sordos a las denuncias sobre asesinatos, secuestros, robos, extorsiones y desapariciones cometidas por los «doce apóstoles». Su principal radio de acción se concentraba en los municipios de Yarumal y Santa Rosa de Osos, pero su criminal e impune andar era escuchado en todo Antioquia. Campesinos, mujeres y hombres humildes, trabajadores pobres eran acusados de ser simpatizantes del comunismo o de ser auxiliares o complacientes con las guerrillas de izquierda, hecho más que suficiente

para que fueran asesinados, muchas veces bajo una atroz tortura y en presencia de sus familiares o amigos, para que estos fueran a contar lo que le podía suceder a un enemigo del establecimiento. Un manto de silencio se apoderaría de la región por largo tiempo y el temor de la gente de las comunidades reinaba, permitiendo a estos barbaros «apóstoles» imponer su ley de muerte y terror. Como es apenas lógico la pregunta es ¿Por que las autoridades civiles, militares y de policía del departamento no tomaron las correcciones del caso? ¿Por qué no se persiguió a este grupo de criminales para lograr su captura y posterior juzgamiento? ¿Quien o quienes los protegían, y con qué fines? Lo cierto del caso era que, este grupo con cura católico a bordo, sacerdote Gonzalo Palacios, bendeciría las torturas y matanzas en nombre de la cruzada anticomunista, como lo han hecho muchos de sus hermanos de confesión, mientras que otros muchos bendecían los millones de narco-dólares producto del tráfico de estupefacientes y el crimen, que ingresaban a guisa de limosna, beneficiándolos en muchas ocasiones, y enormemente.

Hacia mediados de 1997 el hermano del hoy presidente Uribe Vélez, Santiago, fue interrogado por la Fiscalía respecto a los delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por «los doce apóstoles», pero sin que se hiciera un serio seguimiento a dichos hechos y una seria judicialización, pues este expediente comenzó el largo sueño de la impunidad, siendo archivado. El Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, Fiscal de bolsillo del presidente Uribe, informaría en rueda de prensa que el expediente acusatorio contra Santiago Uribe, hermano de Uribe presidente, fue archivado en 1999 por falta de pruebas. Pero esa no fue la suerte del cura Palacios, que estuvo preso durante unos meses, mediante medida cautelar, y quien recobraría intempestivamente su libertad por falta de pruebas suficientes en su contra. Sin embargo, el caso por los crímenes cometidos por la banda de los «Doce Apóstoles» es investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición de los familiares de algunas víctimas, asesinadas, extorsionadas, desaparecidas y desplazadas, en vista de que la justicia colombiana ha mantenido estos crímenes en la total impunidad.

Pero el escándalo de la familia del presidente Uribe Vélez, no termina aquí, también se denunció a los parientes del mandatario colombiano, Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, tío y primos sucesivamente, de liderar un escuadrón de la muerte llamado «los Erres». Este grupo está señalado de haber asesinado más de setenta personas en los municipios de Titiribí y Armenia-Mantequilla, en el departamento de Antioquia. Entre las víctimas de «los erres» aparecen dos estudiantes universitarios fusilados en mayo de 1995, por pasearse sin permiso de estos sicópatas en lugares que eran controlados por ellos mismos, según autoridades judiciales. Los Vélez Ochoa, además de ser parientes del presidente Uribe, lo son también del clan familiar de los narcotraficantes Ochoa Vásquez, otros de los cabecillas del Cartel de Medellín. Uno de estos narcotraficantes Fabio Ochoa Vásquez, se encuentra preso en Miami.

La banda terrorista de «los Erres» llegó a contar hasta con doscientos miembros fuertemente armados y un sistema de comunicación bastante adelantado para la fecha de sus fechorías 1995. Estos criminales familiares del presidente, fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un año, hasta cuando un para-complaciente juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso, aduciendo que no había pruebas suficientes contra los acusados. A la fecha de hoy se desconoce el paradero exacto de los Vélez.

Estos dos casos de impunidad en favor de los familiares del presidente Uribe, no pueden ser disociados del ocurrido con su propio padre Alberto Vélez Sierra, que también estuvo preso en una ocasión para ser extraditado hacia los Estados Unidos por el delito de narcotráfico, pero Jesús Aristizabal Guevara, entonces secretario de gobierno de la alcaldía de Medellín, logró que lo pusieran en libertad, ante los insistentes ruegos de un joven y prometedor político paisa llamado Álvaro Uribe Vélez. También es difícil dejar de lado lo sucedido en 1979 en el conflicto laboral y de tierras de cincuenta familias campesinas con la familia Uribe Vélez, propietaria de la hacienda «La Mundial» ubicada en el municipio de Maceo, departamento de Antioquia. A continuación el reporte del sindicato agrícola:

«Comunicado a la opinión pública, del sindicato de trabajadores agrícolas del departamento de Antioquia, de abril 2002, en el que hacen el recuento de la persecución sufrida por las 50 familias de la hacienda La Mundial, del municipio de Maceo (Antioquia), propiedad de la familia Uribe Vélez, que por haber reclamado derechos laborales y de tierras en 1979, y a pesar de haber ganado judicialmente la propiedad de esta hacienda, tuvieron que abandonarla tras la persecución ensañada de estructuras paramilitares que actúan unidas al ejército, que han producido ya doce muertes o desapariciones, además de numerosos allanamientos y amenazas...»

También es materia de investigación, los testimonios rendidos ante la Justicia, según los cuales, en la hacienda «Las Guacharacas» (San Roque-Antioquia), de propiedad del presidente Uribe Vélez, operaba una fuerte estructura paramilitar que perpetró innumerables crímenes. Pero a pesar de las denuncias y los serios indicios que comprometen al jefe del Estado, no ha habido una seria y debida investigación, lo cual no deja de ser preocupante para la estabilidad del país y la tranquilidad de los colombianos.

El fenómeno paramilitar, según el eterno discurso de las elites colombianas, se debe tan solo al mero deseo de la defensa y como único objetivo el de repeler el acoso armado de las guerrillas izquierdistas. Esta 'verdad' está completamente fuera de la realidad, si tenemos en cuenta que el Estado colombiano ha participado y encubierto el macabro accionar del paramilitarismo e incluso, incluyó una política de 'defensa' nacional en la lucha contra ideas foráneas (comunismo), mucho antes del nacimiento de las mismas guerrillas izquierdistas, que la han venido combatiendo durante casi cincuenta años. Lo anterior se puede constatar en los muchos archivos estatales clasificados y ocultos, con el sello de «reservado». Con lo cual la historia, o por lo menos una gran parte de esa terrible historia de crímenes y violencia estatal, seguirá encubierta y bajo el manto de la ignominiosa impunidad.

Pero, muy a pesar de lo anterior, se tiene conocimiento que en el año 1962 en el mes de febrero miembros de la Escuela de Guerra Especial de los Estados Unidos realizó una visita al país. Un informe fue elaborado por el general Yarborough, director de investigaciones de esta misma escuela en Carolina del Norte. En el suplemento secreto de este informe podemos leer:

«Debe crearse ya mismo un equipo en dicho país, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se utilizará para forzar los cambios que sabemos se van a necesitar para poner en acción funciones de contra agentes y contra propaganda y, en la medida que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas para-militares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos debe apoyar esto.»

El general Yarborough incluía en su informe recomendaciones para el ejército y la policía, en el sentido de reforzar el control de la población, y se mejorara la inteligencia. En particular sugería:

«Un programa intenso de registro de los civiles... de modo que todos sean registrados en archivos del gobierno incluyendo huellas digitales y fotografías»...

También recomendaba este esmerado militar, el procedimiento de técnicas de interrogatorio que incluyeran:

«...sodio, pentotal y el uso de polígrafos... para arrancarles información a pedazos».

Es decir, que las recomendaciones del alto militar estadounidense, no estaban encaminadas solamente a la posible defensa y a la vez ataque contra un enemigo (comunismo), si no que también marchaban en el sentido de poner en práctica usos y procedimientos como la tortura y la degradación del Ser Humano,

para poder ganar la partida, empleando el abuso, largamente reprochable y condenado por todas las personas de buena voluntad. Sin embargo, el Estado colombiano, carente de toda independencia, responsabilidad y proyección republicana, sentaba las bases para la creación del paramilitarismo a pesar de los enormes peligros que este hecho podría representar en la estabilidad del país y la seguridad de sus habitantes. Así fue como el 24 de diciembre de 1965 y después de varios años de 'sesudos' estudios y juiciosos informes provenientes de manuales extranjeros (norteamericanos y franceses), el gobierno emite el decreto 3398 de Organización de la Defensa Nacional, afirmando que:

«Los compromisos que el país tiene contraídos en el campo internacional requieren la adopción y ejecución de medidas que fortalezcan su seguridad interior y exterior».

Lo anterior hace alusión a la visita hecha por el militar enviado por el gobierno de los Estados Unidos en 1962, y perteneciente a la Escuela Especial de Guerra y su suplemento secreto. En el Artículo 25 del decreto 3398, se lee igualmente:

«Todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad». Artículo 33 parágrafo 3°:

«El Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de sus comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas...».

Al aplicarse al pie de la letra las 'recomendaciones' dadas en 1962 por el general Yarrow, perteneciente a la Escuela Especial de Guerra de los Estados Unidos, el Estado colombiano abrió una nueva era de violencia y muerte en todo su territorio, tal vez un tanto diferente a la padecida por los colombianos durante toda la mitad del siglo XX, que fue atizada por el sectarismo religioso católico y el partido conservador contra los liberales, que se defendían y a la vez atacaban a sus enemigos conservadores, muchas veces con la misma ferocidad y salvajismo. El financiamiento de esta violencia fue hecha por los grandes propietarios de tierras, políticos y gobiernos conservadores, con la participación decidida de gran parte de la iglesia católica con su inmenso poder económico³⁵.

Para este mismo año 1962, la bonanza de la marihuana irrumpía en la economía informal colombiana.³⁶

³⁵ La clase en el poder veía que tras la violencia política comenzaba la revolución social; grupos seculares, fanatizados por la religión, toman partido con el clero a favor del régimen conservador. Desde los pulpitos, calles y campos, los religiosos y policías lanzan la consigna de combate: Viva Cristo Rey! Viva el partido conservador!; así motivados se lanzan a una guerra santa. 'Aun que no se crea, una nueva Santísima Trinidad tuvo que ver con el proceso de la violencia en Colombia. Trío menos celestial, profundamente terrenal que confluye en tres organizaciones: el clero, el latifundio y los directorios políticos. Confluencia que combinando intereses ideológicos, políticos y económicos, se convirtió en factor decisivo de la lucha partidista. Cuando adviene la violencia como fenómeno totalizante en el país, estas tres fuerzas deciden ir a las armas, cada cual con sus normas de persuasión y de acción. Tradicionalmente ligados al latifundio, vieron con muy buenos ojos, no solo la reconquista del poder por parte de los conservadores en 1946, si no la implantación de una dictadura antidemocrática'. Aquí existió un importante factor de carácter ideológico-religioso: defender a la iglesia de los embates del 'ateísmo liberal', en realidad eran los militantes liberales los más creyentes. Policías y clérigos alienados religiosamente, se convertían en piezas útiles del régimen y se lanzaban con el fusil y la cruz a liquidar o escarmentar erróneamente, oponentes del partido como si fueran enemigos religiosos, lo que dramatiza aun más la violencia; los levitas se lanzan al asalto en pueblos y campos, disfrazados con uniformes de las fuerzas armadas en acciones punitivas y los párrocos en los pueblos obligan a los campesinos liberales a arrodillarse y torturarse para hacer 'fe religiosa conservadora'; hasta violaron el 'sigilo de la confesión' a fin de delatar a los liberales ante las 'autoridades'. Escritos de Francisco Posada.

³⁶ Si estudiamos juiciosamente, los cambios que padece el país en la segunda mitad del siglo XX veremos que, la violencia que fue apareciendo hacia los años sesenta no bajo en intensidad ni horror, pero si dio un giro completo en su táctica y financiamiento, pues ya el país comenzaba a «disfrutar» de la bonanza marimbera —comercio y exportación de marihuana— y la participación activa del partido liberal en el poder, después del acuerdo en el que nació el 'Frente Nacional'.

Después vendría en los años ochenta el auge del comercio de la cocaína y la consolidación de fuertes mafias regionales de la droga, siempre bajo el signo del fascismo, el autoritarismo y el crimen que incluía al Estado. Y precisamente serían estos grupos mafiosos, quienes irían a reforzar económicamente una variedad de pequeñas, pero sanguinarias estructuras paramilitares, que después devendrían verdaderos batallones de la Muerte, con la complicidad de las Fuerzas Armadas que los arroparían confortablemente.

Al igual que durante el siglo XIX y la mitad del siglo XX, la iglesia católica jugaría un papel primordial al lado del Estado en su cruzada anticomunista y luego en su espantoso silencio frente a las horribles acciones de los batallones de muerte contra la población civil campesina. Salvo ciertas excepciones, la iglesia católica³⁷ siendo otro grupo de poder dentro de la sociedad colombiana, cerraría sus ojos y abriría sus arcas frente a la violencia extrema y al auge del comercio de narcóticos.

Entre los muchos grupúsculos de muerte, patrocinados por las fuerzas armadas, aparece la 'Tripe A' (Alianza Anticomunista Americana) impulsada y auspiciada por oficiales del ejército nacional. La 'Triple A', fue creada en el Batallón de inteligencia y contrainteligencia 'Charry Solano', desde donde se daba la orden de asesinar y desaparecer campesinos supuestamente auxiliares de la guerrilla, estudiantes con carisma reivindicativo, simpatizantes de izquierda, como también militantes del partido comunista. En una carta publicada en el periódico El Día de México el 29 de noviembre 1980, pero originalmente dirigida al presidente de Colombia Julio Cesar Turbay Ayala³⁸, al Congreso de la República, al Procurador General, a la OEA (Organización de Estados Americanos) y a los organismos de Derechos Humanos, por dos oficiales de inteligencia militar, revela quienes integraban la 'Triple A', los atentados y crímenes perpetrados, su planeación y quienes cumplieron las tareas concretas de terrorismo. Aparecen en la misiva cuestionados oficiales del ejército que ocuparon, -y ocupan aún hoy en día- altos puestos de mando, como los generales: Mario Montoya Uribe³⁹, Harold Bedoya Pizarro, Ruiz Barrera, Cardona

³⁷ Desde simples sacerdotes hasta los jefes de la Iglesia Católica colombiana, vieron con buenos ojos ese resurgimiento económico de una clase emergente, sin cuestionar sus prácticas o condenar sus horribles métodos, ya que sus alcancías comenzaban a llenarse gracias a la 'bondad' y fervor de narcotraficantes inescrupulosos como Pablo Escobar el clan Ochoa, Rodríguez Gacha y la mafia en general. En muchas oportunidades estos mismos curas bendecían las motos de los sicarios antes que estos acometieran sus crímenes. Y sus discursos ante las sospechas de haber recibido dineros sucios del narcotráfico eran bastante celestiales, afirmando, que ese dinero devendría limpio al ingresar a las arcas de la Iglesia, pues había sido bendecido. El investigador y especialista sobre el narcotráfico y el capo Pablo Escobar, Alonso Salazar, afirmó en la revista Semana, edición N° 1265 de julio 31 2006: «... Como gran criminal, él tenía a su lado una gran diva (la hermosa actriz Virginia Vallejo), tenía un capellán (padre Lopera) apoyado por el arzobispo de aquella época que era monseñor Alfonso López Trujillo, y tenía un séquito de políticos y funcionarios de la época que le hacían todos los honores... Ese capellán, un sacerdote que aun ejerce en la ciudad (Medellín) y que estuvo presente en todas las grandes manifestaciones de Escobar, y a quien curiosamente la Arquidiócesis nunca sanciona...

Hay documentos publicados sobre sus relaciones con Escobar, como arzobispo de la ciudad (Alfonso Lopez Trujillo). Se habla mucho de los regalos que recibía. En los años 80 en Medellín, la catequesis parece que no la hubieran hecho los obispos sino los narcotraficantes. Se generalizó esta religiosidad popular fetichista alrededor de la virgen y las alcancías de varias iglesias se crecieron por que fueron muy generosas las limosnas. Había una actitud completamente complaciente de la iglesia, y existen casos muy conocidos de sacerdotes que salían a bendecir las motos de los sicarios».

³⁸ En este violento periodo presidencial de Turbay Ayala (1978-1982), el hoy premio nobel de literatura Gabriel García Márquez, tuvo que salir corriendo del país, a refugiarse en México, al ser enterado de que en 24 horas sería asesinado por orden de oficiales del ejército. 'Gabo' fue uno de los fundadores de la revista «Alternativa», la cual sufrió varios atentados dinamiteros. En una ocasión un periodista interrogó al presidente Turbay, sobre cuántos presos políticos habían en Colombia, a lo cual el mandatario respondió con voz socarrona y el cinismo que lo caracterizó «El único preso político que hay en Colombia soy yo». Anos después una de sus hijas Diana Turbay, sería asesinada por el Cartel de Medellín. En Colombia se ha rumorado sobre la proximidad —que siempre existió— entre este presidente y la mafia de las drogas.

³⁹ El general Montoya Uribe, fue nombrado por el presidente Uribe, comandante del ejército a pesar de las innumerables acusaciones por violación de los derechos humanos cometidas por este militar a lo largo de su carrera, así como su complicidad con los escuadrones de la muerte

Orozco, Iván Ramírez Quintero y el coronel Alfonso Plazas Vega⁴⁰, entre muchos otros, aparecen igualmente civiles y el Juez 3° de Instrucción Criminal Luis Eduardo López Zuloaga. Entre las actividades delictivas de este grupo terrorista, aparecen las bombas puestas en varios medios de comunicación, desapariciones, secuestros y asesinatos, como también, amenazas a magistrados, abogados, periodistas y torturas a sindicalistas y estudiantes. La misiva de los arrepentidos oficiales, no tuvo ningún eco de la parte de sus honorables destinatarios, por el contrario, los dos oficiales fueron asesinados semanas después, sin que este hecho produjera un escándalo mayor del que había producido las desapariciones y muertes de los civiles. Mostrando hasta donde podía llegar la impunidad en el país. Poco a poco fueron tomando posición pequeños grupos terroristas de extrema derecha, los cuales irían a ejercer sus violentas actividades sin problema alguno. Para el año 1990 el gobierno colombiano, por intermedio de su ministro del interior Cesar Gaviria, hablaba de más de ciento cincuenta grupúsculos de extrema derecha, autores de crímenes y toda clase de vejaciones contra la población civil campesina. Nombres como: 'Los Tiznados', 'Mano Negra', 'Los Doce Apóstoles', 'Cali Linda', 'Colombia Libre', 'Los Grillos', 'Amo a Medellín', 'Las Águilas', 'Los Macetos', 'Grupo Hure', 'Los Erres' y otros muchos que, de solo ser nombrados, ponía a temblar a las comunidades indígenas y al campesinado. Con la proliferación de los grupos armados civiles, llamados Convivir en todo el territorio nacional, la violencia sin límites llegaba a la cúspide, no existía control alguno por parte del Estado colombiano y los organismos de derechos humanos y las asociaciones humanitarias eran rápidamente desbordadas por el creciente aumento de asesinatos, secuestros y desapariciones en su mayoría ligados al quehacer político nacional. Las denuncias de estos organismos no gubernamentales se perdían en ese gran desierto de indiferencia estatal. Las Convivir, esos grupos civiles de “campesinos armados” para 'defenderse de la violencia' y defender sus bienes que tanto impulsó Álvaro Uribe, en su calidad de gobernador de Antioquia y que luego logró poner en marcha sin mayores dificultades a pesar del rechazo de la Corte constitucional, fueron una vez más legalizadas políticamente por el narcogobierno del presidente Ernesto Samper Pizano⁴¹ (1994-1998), gran amigo y copartidario de Álvaro

⁴⁰ El coronel Plazas Vega, está sindicado de crimen de lesa humanidad y la desaparición de civiles, sin embargo Uribe lo nombro contra viento y marea, a la cabeza de la Agenda Nacional Antinarcóticos.

⁴¹ Una crisis sin precedentes estuvo a punto de tumbar este gobierno, pero el presidente Ernesto Samper, se aferro con toda su maquinaria política a la silla presidencial, a pesar de las presiones del gobierno de los Estados Unidos, cuando se descubrió que los jefes del Cartel de Cali y su socios, habían financiando la campana presidencial. Fernando Botero —hijo del famoso pintor del mismo nombre—, y ministro de la defensa, fue obligado a renunciar debido al escándalo surgido sobre el financiamiento de la campaña del candidato Samper, con dineros del narcotráfico y en la cual el fue su tesorero. Botero fue condena a tres años de cárcel por enriquecimiento ilícito. El 22 de enero de 1996 Fernando Botero respondió a las preguntas del periodista Yamid Amat sobre el asunto, negando rotundamente su conocimiento sobre los dineros del narcotráfico en la campaña presidencial: Periodista: «Doctor Botero, ¿en ningún momento de la campaña, usted sabía que estaba recibiendo dineros del narcotráfico?». Botero:

«Yo estaba enterado de muchos aspectos de la campaña, por ejemplo, yo estaba enterado que estábamos violando los topes normales, que habíamos tornado la decisión de presentar unas cuentas financieras por debajo de los 4 mil millones de pesos, cuando era evidente que la campaña había gastado mucho mas... de cualquier forma hoy yo quiero admitir ante usted, ante el país... ni yo tuve la idea ni fui el autor intelectual, ni material del ingreso del dinero del narcotráfico a la campaña, no los distribuí, no los toque, no tuve nada que ver con ellos... Periodista. Si usted no sabía que había dinero del narcotráfico en la campaña, porque si sabía que Samper lo sabía? Botero:

Yo empecé a ver una cantidad de cosas que sucedieron los últimos días de la campaña y a ver personajes que nunca habían estado en la campaña, de pronto aparecieron, muchísimas conversaciones, muchísimas reuniones que me parecían sospechosas. En ese momento investigué lo que estaba pasando, tratando de esclarecer, tratando de detener cualquier cosa, no lo hice, fue un error de omisión... por eso estoy en la cárcel... por eso el día de hoy puedo afirmar que el presidente, y me da tristeza decirlo, sabía del ingreso de esas sumas de dinero a su campaña». Fernando Botero fue nuevamente condenado por la justicia colombiana el 26 de enero de 2007 a 36 meses de prisión por el delito de robo, se había apropiado de varias decenas miles de dólares de la campaña presidencial de Ernesto Samper, y su orden de captura fue transmitida a la Interpol. Radicado en México Fernando Botero, rompe su silencio y declara al periodista Joaquín López, de la radio 'Formula' de Ciudad de México, que si sabía sobre los dineros que entraron a la campaña de Samper. «Botero: Ernesto Samper Pizano, fue candidato a la presidencia de Colombia en el año 1994 y en un momento en que tenía perdida la 87 presidencia y había tenido un bajonazo en las encuestas. Perdiendo ante el candidato conservador Andrés Pastrana, tomo la decisión de pedir apoyo al Cartel de Cali, un cartel con el cual, el había tenido relaciones tiempo atrás... Periodista: ¿Así de fuerte? Botero: Si, tenía una relación de tiempo atrás... aceptó dineros del narcotráfico en su campaña... y fue así que

Uribe. En efecto, estos grupos armados reunidos bajo el nombre de «cooperativas de seguridad», renunciaron oficialmente, gracias a una resolución emanada del ministro de defensa Fernando Botero, hacia finales de 1994. Botero propuso que se establecieran en todo el territorio nacional y pidió que sirvieran para informar a las autoridades (Policía, Ejército, Fiscalía, DAS) sobre las irregularidades que se presentaran en sus zonas y para ayudar a la captura de delincuentes. Y se habló de dotar las, exclusivamente, de armas cortas. Dicha resolución fue demandada por inconstitucional. Pero mientras las Cortes resolvían tan delicado tema, estos grupos de extrema derecha se reorganizaban y se afianzaban en todo el territorio nacional con el aliento de los narcotraficantes e incrustándose paulatinamente en las instituciones del Estado a nivel regional. Establecieron su sede principal en el departamento de Córdoba y una especie de segunda sede en el departamento de Antioquia, donde la familia del presidente Uribe, crearía sus propios grupos criminales⁴². A la par con estos movimientos de muerte, en este departamento surgiría también otros grupos de seguridad privada de la mano de terratenientes y ganaderos (a los cuales la poderosa prensa llama “campesinos”, de tal manera para confundirlos con los campesinos pobres de base, cuando se habla de las exacciones de la guerrilla), con la plena aprobación de los poderes civiles y militares, y los cuales, con el tiempo unirían fuerzas con los cabecillas del narcotráfico. Otra de las maneras de poder despojar de sus tierras a los pequeños propietarios campesinos, que hoy en día pueblan las principales ciudades del país, viviendo en una pobreza extrema, sin trabajo ni medios de subsistencia, y que en el peor de los casos entran a engrosar las filas del narcoparamilitarismo o la delincuencia, mientras que los infantes des-escolarizados, venden frutas, cigarrillos, periódicos o toda clase de chucherías en las esquinas de los semáforos de las principales ciudades, o en los buses de transporte urbano, ante la mirada despreciativa de los ciudadanos. Pero también son explotados por las mafias del sexo, que los obligan a prostituirse.

entraron esos dineros... y ese fue un factor decisivo para haber ganado las elecciones por un escaso margen. Periodista: ¿Es exacto que tu formabas parte de su equipo de campaña? Botero: Efectivamente, yo formaba parte de su equipo de campaña... por esos hechos un poco más tarde fui declarado culpable por la justicia colombiana, y pagué dos años y medio de cárcel... Periodista: Haber, " perdón, gana Samper y te hace Secretario o Ministro de la Defensa. Botero: Si, me nombra Ministro de la Defensa o Secretario como se dice en México, y lógicamente, si se quiere, fui una persona responsable en la destrucción del Cartel de Cali... por haber sido yo, el representante legal de la campaña, la justicia me acusó, me condeno por esos hechos... estando en la cárcel yo denuncie que la persona que había tenido la iniciativa, los contactos, que había propiciado esa financiación fue directamente el candidato Ernesto Samper, ya presidente de la República. Declaraciones que desataron el escándalo político más grande de la historia de Colombia del siglo XX. Periodista: ¿o sea te destituye como ministro de defensa y te encarcela el presidente Samper... Botero: No me destituye, yo renuncié... Periodista: Cuando gana las elecciones ya tus sabias del financiamiento del Cartel de Cali a la campaña del candidato Samper? Botero: Si lo sabía. Periodista: Entonces cuéntame, ¿Como le aceptas en esas condiciones, ser su Secretario de la Defensa? Botero: Yo sabía de esa financiación y yo tenía la esperanza que a través de los hechos se pudieran corregir esos acontecimientos y los hechos concretos que son verificables, es que durante mi gestión como Secretario de Defensa, se capturaron, se dieron de baja, se mataron, perdón, a las 7 principales cabezas del Cartel de Cali (?)... luego, yo hice la gestión que llevó a la destrucción del Cartel de Cali (?) de Colombia, entre el año 1994-1995 en que fui ministro de defensa del país... Vuelvo a la acusación... después de tomar la decisión de colaborar con la justicia colombiana y denunciar la responsabilidad de Samper... Periodista: ¿Desde la cárcel? Botero: Si, estando en la cárcel tome la decisión de contar la verdad, se desato esta tremenda tormenta en Colombia. Y en retaliación el presidente Samper con todo el poder de la presidencia, Joaquín, imagínate, la Procuraduría, la Fiscalía, las fuerzas militares, el dinero, los contactos, los políticos, todo lo que representa el poder de la presidencia, me acusó de haberme apropiado de los recursos que ingresaron a su campaña, el argumento que el dio, fue que los recursos no habían entrado a la campaña por que yo me había quedado con ellos, luego él era limpio, el era inocente de lo que había acontecido en la campaña».

⁴² El ex guerrillero y congresista Gustavo Petro, aprovechando los innumerables documentos de años anteriores, hizo varias denuncias en el sentido de que, en procesos adelantados por la Fiscalía Regional de Medellín, fueron capturados y tuvieron resolución de acusación de primera instancia los hermanos de apellido Velez Ochoa, prunes tanto de Alvaro Uribe Velez, como de los confesos narcotraficantes del llamado 'clan Ochoa'. Petro afirmó que, Carlos Albcro y Juan Diego Velez Ochoa, estuvieron sindicados de varios crímenes con un sector del paramilitarismo conocido como «la banda de los Erres» y en el proceso figura que el entonces gobernador de Antioquia Alvaro Uribe Velez, intercedió por su libertad, y en la segunda instancia del proceso, todos quedaron libres. El ahora congresista afirmó igualmente, que la resolución de acusación contra los Velez Ochoa se produjo el 7 de octubre de 1996, sindicados de varios asesinatos, torturas y delitos de lesa humanidad.

Es precisamente desde esta plataforma terrorista, que Pablo Escobar, el clan de los Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha, crearían ese poderoso ejército de asesinos llamado el 'MAS'⁴³ (muerte a secuestradores, el cual iría a sembrar el terror en las principales ciudades del país Bogotá Cali, Medellín, haciendo explotar bombas en lugares públicos y en los edificios gubernamentales, el asesinato sistemático de funcionarios, políticos demócratas y de izquierda (posteriores investigaciones, dieron cuenta de la participación de miembros de la fuerza pública en estos atentados), todos ellos férreos opositores al narcoparamilitarismo. Igualmente se desataría, tiempo después, una guerra interna entre narcotraficantes a causa del robo de cargamentos de cocaína, el no pago de deudas, que comportaban gruesas sumas de dinero productos del narcotráfico, y tal vez lo más grave, por alta traición, lo que llevo a la escisión de la gran mafia nacional, oponiendo al Cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar, con el Cartel de Cali, encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela. Una guerra sin merced, en la cual como ha sido siempre la norma, los civiles inocentes también pagarían los platos rotos. A causa de esta rivalidad a muerte, la mayoría de los políticos del país tuvieron que acomodarse a uno u otro cartel, dependiendo su ubicación geográfica e intereses, a pesar de pertenecer al mismo partido, fuese este liberal o conservador. El caso fué que el Cartel de Medellín se llevaría la mejor tajada política y sus fieles seguidores políticos largo suceso.

En esta interminable guerra a la colombiana y ahora con la maldita contribución de las mafias, otro grupo criminal sería creado por los enemigos de Pablo Escobar, con la participación de agentes estatales y agentes de los Estados Unidos, denominado los Pepes⁴⁴. Este mixto grupo ayudado también por los cabecillas del Cartel de Cali y varios de los cómplices del capo de Medellín que habían caído en desgracia, se encargaría por todos los medios legales e ilegales de capturar o eliminar definitivamente al hombre que se había convertido en el 'enemigo número uno de los colombianos', si nos atenemos a la retórica gubernamental, o como es costumbre de los diferentes gobiernos estadounidenses dependiendo de sus intereses, a su 'enemigo publico number one', si nos atenemos a su doble moral. A pesar de los buenos servicios que el capo Pablo Escobar, le prestara al gobierno de Ronald Reagan, en su loca guerra contra el gobierno sandinista nicaragüense en los años ochenta y noventa. En efecto, el Cartel de Medellín donaría varios millones de dólares al emisario del gobierno norteamericano para la compra de armas destinadas a los 'contras', grupo criminal financiado por la CIA —el director de la época era George Bush (padre)—, que luchaba por todos los medios militares posibles, para derribar el gobierno revolucionario sandinista, que había logrado deponer al sanguinario dictador Anastasio Somoza, sostenido durante décadas por los Estados Unidos.

Es de especial interés, el saber por qué Estados Unidos quería eliminar a toda costa al capo de Medellín, si bien, los estragos humanos y materiales los había cometido en Colombia, y con su desaparición el narcotráfico continuaría como si nada. Al parecer existieron otros hechos de alta importancia en los cuales estuvo involucrado Pablo, y que estaban ligados a la lucha anticomunista del

⁴³ El 'MAS' comienza con los volantes que lanza un helicóptero sobre la ciudad de Cali el 3 de diciembre de 1981, anunciando castigo para todo aquel que osara retener familiares o amigos íntimos de la clase emergente, dicha medida había sido adoptada después del secuestro de la sobrina de uno de los capos de la mafia, raptada por la guerrilla nacionalista M-19 de la cual hacia parte Gustavo Petro. Supuestamente el MAS fue fundado por 223 jefes de la mafia, que habrían formado un escuadrón de 2.230 sicarios para asesinar secuestradores. Pero rápidamente sus objetivos se desviarían y es así, como en mayo de 1982 un joven es capturado en Medellín y torturado por el B2 (Inteligencia del Ejército) y cuando una comisión de búsqueda indaga por él, es trasladado a una casa particular de propiedad del 'caballista' Fabio Ochoa. El 20 de febrero de 1983 el procurador Carlos Jiménez Gómez, —asesinado por la mafia revela públicamente los nombres de 163 pudientes 'campesinos' (terratenientes y ganaderos) pertenecientes al MAS, y 59 oficiales pertenecen a las fuerzas armadas. Ante tal noticia, el descontento dentro de las filas castrenses es enorme y una amenaza de golpe de estado planea, pero las investigaciones se interrumpieron y ningún proceso concluyo, ni hubo sanciones.

⁴⁴ La alianza entre los Perseguidos Por Pablo Escobar, (pepes) y la Policía colombiana, unidades elites de los Estados Unidos (Delta Force del ejército, las SEALs de la armada, la CIA, el FBI, la DEA, la Agenda Nacional de Seguridad), se dio para dar muerte a Pablo Escobar. El libro «Killing Pablo» del investigador norteamericano Mark Bawden (Atlantic Monthly Press, New York, 2001) y el diario «Philadelphia Inquirer» (nov 2001) hacen las revelaciones.

gobierno norteamericano en el continente, teniendo como puntos estratégicos: la ciudad de Panamá en Panamá y la ciudad de Santiago en Chile.

En efecto, el Cartel de Medellín donaría varios millones de dólares al emisario del gobierno norteamericano para la compra de armas destinadas a los 'contras', grupo criminal financiado por la CIA —el director de la época era George Bush⁴⁵—, que luchaba por todos los medios militares posibles, para derribar el gobierno revolucionario sandinista, que había logrado deponer al sanguinario dictador Anastasio Somoza, sostenido durante décadas por los Estados Unidos. El presidente Reagan y el director de la CIA Bush, encargaron de la misión al coronel Northon, que debía reunir los narco dólares para la compra del armamento con destino a los enemigos del gobierno sandinista de Nicaragua. Años más tarde, este favor no serviría como positiva referencia en favor del capo Pablo Escobar. Los gobiernos de Estados Unidos no tiene amigos, sino servidores ocasionales y en su pretendida lucha contra el narcotráfico y sus principales cabecillas, el capo del Cartel de Medellín, no era lo primero y ya no era lo segundo, era simplemente el enemigo.

Los Pepes pues, aportarían a los agentes colombianos y estadounidenses datos y reportes sobre los diferentes escondites del capo, nombres de sus más allegados compinches que le aportaban información y alimentación, y en ultimas, serían los cabecillas del Cartel de Cali, quienes dirigirían a los investigadores al último escondite donde se encontraba el criminal mafioso y en donde sería dado de baja. Según informaciones extraoficiales, hombres de los Pepes cercanos al Cartel de Cali, habrían logrado localizar a Pablo Escobar por intermedio de uno de sus hombres de confianza y luego con equipos ultramodernos, aportados por los investigadores, habrían localizado dos o tres llamadas que Pablo había efectuado, en especial a su familia. Fue su perdición, localizado, los Pepes informarían a la fuerza pública sobre el lugar de su escondite y esta haría rápidamente el allanamiento con el resultado conocido por todos. Los cabecillas del Cartel de Cali, respiraban tranquilos, ya no habría más bombas, más amenazas y crímenes espectaculares a la vista de todo el mundo. El negocio se enfilaría por los caminos discretos, comprendiendo los capos de Cali, que era mejor asociar o 'mojar' en el negocio a los políticos, que amenazarlos públicamente o aterrorizar a la sociedad, sobre todo a los habitantes de las principales ciudades. Pero con lo que no contaban los capos del Cartel de Cali, en especial Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, fue con la venganza de los amigos y socios de Pablo Escobar. Y efectivamente en los primeros días del mes de diciembre de 2004, los hermanos Rodríguez Orejuela, serían extraditados a Estados Unidos, a pesar de haber pagado su condena por narcotráfico en Colombia. Esta vez los que sonreían tranquilos eran otros, unos tales Álvaro Uribe Vélez, José Obdulio Escobar Gaviria y Mario Uribe entre otros.

Las Autodefensas Unidas de Colombia, como son llamadas por la extrema derecha colombiana o Escuadrones de la Muerte que es lo que son desde su nacimiento, acompañados de una innata ideología fascista, se nutrió física, material y económicamente de los políticos de extrema derecha, el militarismo estatal y del financiamiento de la mafia entre otros sucios aderezos. Estos grupos tendrían desde el mismo inicio de sus actividades criminales un pasaporte de impunidad que les ha permitido aterrorizar, extorsionar y masacrar niños, mujeres y Ancianos del campo, además de la desaparición de colombianos, hombres en su mayoría que incomodan al sistema político imperante. Los Paramilitares⁴⁶,

⁴⁵ Bush padre sería presidente de Estados Unidos. Y el clan Bush no solo figura en este confuso episodio bautizado 'Iran-contras', también, en tanto que petroleros, tuvieron como socios a la familia Ben Laden. Ben Laden padre, murió en un extraño accidente aéreo cuando su avioneta se estrelló cerca al estado de Texas.

⁴⁶ El primer experimento paramilitar en Puerto Boyacá (1982-89), fue elaborado con extrema audacia y conto con todo el apoyo oficial. Promovido y dirigido por el Batallón Bárbula y su comandante el coronel Luis Arcenio Bohórquez. Una fundación civil de terratenientes y ganaderos —ACDEGAM les aseguro recursos financieros y proyectos civiles de proyección. El movimiento político y legalizado de extrema derecha MORENA (movimiento de renovación nacional) difundió su ideología. El periódico «puerto rojo» difundió información y las motivaciones del paramilitarismo, a la vez que invitaba a adquirir las armas en la Brigada XIV de Puerto Berrío. Las confesiones de varios de sus miembros como el oficial del ejército Luis Antonio Meneses Báez en noviembre de 1989; el ex concejal Diego Viafara Salinas en mayo de 1988; el mayor del

como también se les conoce, han hecho gala de un sectarismo cavernario y un sadismo ilimitado, que no han conmovido la fibra humana de ninguno de los gobiernos colombianos y mucho menos del actual, el cual no ha expresado el menor dolor o condolencia por los cientos de miles de colombianas y colombianos masacrados, torturados, asesinados y desaparecidos por los escuadrones de la muerte. Crímenes que no siguen teniendo una justificación racional. Después de la muerte del capo Escobar, sus más cercanos compinches y socios se reciclarían, entrando a formar parte de ese gran movimiento narco-paramilitar que se tomaría lentamente los poderes del Estado ante la pasividad casi general. Como ya está probado el fenómeno paramilitar moderno surgirían de la mano de las fuerzas armadas en los años ochenta, con la instrucción militar dada en las instalaciones del Batallón de Infantería N° 42 del ejército, —Batallón Bombona— a los hermanos Castaño Gil y otros civiles, quienes se convertirían en tenebrosos verdugos de la población civil campesina e indígena del país. Fidel Castaño Gil, Vicente Castaño Gil y Carlos Castaño Gil⁴⁷ irían, con las complicidades de fuerzas oscuras del Estado, tanto civiles como militares, a bañar en sangre una gran parte del territorio nacional. Fidel Castaño, el mayor de los tres hermanos comenzaría su criminal carrera, bajo la premisa de combatir los grupos guerrilleros de izquierda, pero rápidamente su discurso quedaría atrás, pues en la práctica, en tanto que jefe paramilitar se orientaría hacia el narcotráfico y a combatir la ideología de izquierda, perseguir a campesinos e indígenas que no comulgaban con sus ideas o, a asesinarlos y robarles sus tierras; otros muchos campesinos colombianos tuvieron que partir de sus pequeñas parcelas, abandonando sus ínfimas pertenencias por temor a ser asesinados. El desplazamiento de familias enteras, mujeres, niños, hombres y Ancianos fue un horrible y triste hecho, continuando su inhumana espiral y en forma cada vez más alarmante. Ha sido una horrible realidad en el país, pasando de decenas a centenas y luego a miles y a cientos de miles y a millones de seres humanos lanzados a la miseria, el abandono y la desesperanza, completamente desprotegidos. El gobierno central y muchos gobiernos departamentales continúan volteándole la espalda al grave problema de los desplazados, cuando de dar soluciones se trata.

El principal cabecilla de la época Fidel Castaño⁴⁸, ese campesino ultraconservador, de ideas enrevesadas; imponente, intolerante y sanguinario, caería muerto en uno de los tantos combates que su organización criminal sostendría con la guerrilla de las FARC. El segundo en el mando debería ser Vicente Castaño, pero este hombre marrullero y zorro prefirió quedarse en la retaguardia, sin renunciar a una soterrada participación de mando en la organización terrorista. Entonces, Carlos Castaño, es el llamado, el indicado, el escogido para suceder a su sacrificado hermano mayor y continuar la lucha,

ejército Oscar de Jesús Echandía Sánchez en 1990, revelarían los innumrables crímenes cometidos, así como el apoyo incondicional de la alta jerarquía militar y los políticos de la región.

⁴⁷ Carlos Castaño en su libro «Mi Confesión» Bogotá 2002, cuenta como sus segundos pasos militares los dio en 1983 en Israel, recibiendo un curso intensivo llamado «562» sobre la guerra y como llevaría a cabo. «Allí complementé mi educación y aprendí a moverme en el mundo regular e irregular, la forma de vestir y de hablar en público. Recibí una clase para aprender a entrar y registrarse en un hotel... se analizaba la forma de actuar ante los policías de emigración en los aeropuertos... me enseñaron a valorarme y a tener confianza en mí, a ganar en momentos difíciles mediante la intimidación... En lo práctico, recibía instrucción en estrategia urbana. Aprendimos a bloquear un carro blindado y utilizar las granadas de fragmentación para romper entrando a un objetivo, practicamos con lanzagranadas múltiples y entrenamos para dar golpes certeros con RPG7, o introducir el proyectil de un obús por una ventana... Curso complementario sobre terrorismo y antiterrorismo, miras nocturnas y paracaidismo, incluso aprendimos a fabricar explosivos manuales. También tuve la oportunidad de conocer militares de nuestro país, los hombres del Batallón Colombia, en el desierto de Sinaí. No conocí el Batallón, pero en mis días de descanso nos encontrábamos en sitios que usualmente frecuentaban; compartía con amigos oficiales y sargentos» (Oficiales y suboficiales entre los peores violadores de los Derechos Humanos del continente Americano). En su libro Castaño comenta sobre los asesinatos que cometió o que ordeno a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Según reportajes de prensa, su hermano Fidel, creo un grupo criminal llamado «los tangueros» sacado del nombre de su hacienda «Las Tangas». Este grupo capturó decenas de campesinos de un pueblo y los llevó a la hacienda en donde fueron torturados con arma blanca durante una noche, matando luego a algunos de un tiro en la cabeza y enterrando vivos a otros.

⁴⁸ La desaparición de este criminal es un completo misterio, pues hasta el momento jamás se ha encontrado su cuerpo y nadie sabe en donde está enterrado. Lo único cierto sobre su muerte, se basa sobre declaraciones de sus familiares y miembros de su escuadrón de la muerte. Nadie sabe en donde está enterrado Fidel Castaño

según ellos, contrainsurgente, pero en la que sus víctimas no se contaban en el bando enemigo llamado FARC o ELN, (Ejército de Liberación Nacional) si no en la población civil campesina, desarmada y ajena al conflicto armado, aun cuando no al debate ideológico. Los carteles de la droga del país vieron con buenos ojos, el 'maravilloso' trabajo realizado por los escuadrones de la muerte, comandados por los hermanos Castaño Gil, en la parte norte de Colombia y que iban tomando fuerza, extendiendo sus ramificaciones a otras partes del territorio nacional, con apoyo logístico de las fuerzas armadas. Entonces, combatir a la guerrilla y a la vez sacaría de terrenos vastos y productivos, para luego utilizar los en la siembra de coca, crear los laboratorios para su debido procesamiento en polvo blanco, y luego crear más pistas aéreas para exportar ese polvo blanco llamado cocaína, (que tanto gusta a muchas estrellas y personalidades en el mundo) hacia Estados Unidos y Europa, era el negocio del siglo en el cual todos deberían cerrar filas y conformar un solo frente. Dicho y hecho, con una participación sin precedentes de parte de la mafia del narcotráfico y los escuadrones de la muerte, —llamados también paramilitares— irían a financiar su criminal guerra con un saldo bastante satisfactorio en lo económico y un saldo monstruoso en pérdida de vidas humanas. Pero no solo el binomio 'narco-paras', iría a dominar el redondo negocio del narcotráfico y la guerra que se llevaría a cabo, con una rentabilidad de incalculable millones y billones de dólares y que ya nadie podía parar.

También oficiales de las fuerzas armadas, políticos de los partidos tradicionales liberal y conservador, ganaderos, comerciantes y empresarios irían a sucumbir al encanto del enriquecimiento rápido e ilícito. Sacrificando de paso, millones de familias pobres, honradas y trabajadoras que pagarían con su muerte y la de muchos de sus seres queridos, pagarían con la tortura, pagarían con la masacre, pagarían con el desplazamiento, serían las víctimas menos conocidas o consideradas, jamás enumeradas en los noticieros de la elite narco-democrática, ni en los periódicos de los ricos industriales, ni en las radios 'informativas' perteneciente a los anteriores, ni en los discursos presidenciales, a pesar de la horrenda carnicería de la que serían víctimas. Muchos de sus seres queridos serían descuartizados vivos en presencia de sus hijos, otros serían descuartizados después de inhumanas torturas con motosierras o, a machete, otros asesinados mediante la lapidación, mujeres serían violadas y luego asesinadas a machete a garrote o con la motosierra, las embarazadas serían golpeadas y después sus vientres abiertos para arrancarles sus inocentes embriones en gestación para luego ser lanzados al no o a los animales salvajes, niñas violadas, golpeadas y después obligadas a presenciar la muerte de sus padres o hermanos. Los cuerpos de las mujeres y las jóvenes se habrían de convertir en trofeo de guerra, para estos monstruosos genocidas. Niños forzados a seguir a sus verdugos después de presenciar tan macabros asesinatos, muchos de ellos serían obligados a enrolarse con estos escuadrones de la muerte y aprender a matar sin miedo alguno, bebiendo sangre humana o durmiendo con los cadáveres ensangrentados y destrozados para perderle el miedo a la muerte. También aprendieron a jugar partidos de fútbol, celebrados entre paramilitares después de una masacre, con la cabeza de una de sus víctimas. Estas son simplemente las víctimas de unos cuantos insensatos, según el discurso del Estado y la poderosa prensa nacional, pero también internacional. Y no las víctimas de las más horribles matanzas, de un increíble genocidio, efectuado por abominables y avaros criminales y con la complicidad del Estado.

Varios generales y oficiales del ejército entre los que podemos destacar Faruk Yanine Díaz, Rito Alejo del Río, Mario Montoya Uribe, Alfonso Plazas Vega, Manuel José Bonnet Lucarno, Juan Armando Arias Cabrales, Rafael Samudio Molina, Manuel Sanmiguel Buenaventura, Hernando Navas Rubio, Luis Antonio Meneses Baez, Oscar de Jesús Echandía Sánchez entre otros cientos de miembros de las fuerzas armadas, se encargarían de tender los puentes para que los paramilitares del norte del país tuvieran un contacto diario y fluido con sus pares, los escuadrones de la muerte del centro y sur del país. Y estos generales con otros militares y policías de diferente rango, no se limitarían a tender los puentes entre estos criminales, si no que también irían a participar en el genocidio de colombianos; irían a crear listas y programar masacres y asesinatos de líderes populares, líderes indígenas, líderes sindicales, políticos de izquierda y todo aquel que mostrara su desacuerdo con las políticas de derecha o extrema

derecha enmarcadas en el Frente Nacional⁴⁹. Esa fatídica unión de los liberales y conservadores Las Convivir, estas cooperativas de seguridad impulsadas e impuestas por Álvaro Uribe Vélez, absolverían rápidamente a los escuadrones de la muerte, sin objeción alguna, ya que habían sido creadas con el mismo fin militar. Las masacres de campesinos mujeres y hombres, indígenas y sindicalistas se sucedían a diario en los departamentos de Cesar, Córdoba, Antioquia, Santander, descendiendo a los departamentos de Boyacá, Arauca, Meta, Valle del Cauca y Choco en la Costa Pacífica, y luego terminaban su abominable descenso de muerte, en el departamento de Nariño en los límites con el Ecuador. Cientos de miles de familias, millones de seres humanos serían también desplazados y sus tierras y propiedades arrebatadas por estos genocidas y en la mayoría de ocasiones sus casas y pertenencias incendiadas, cuando no tenían ningún interés para estos criminales. La acusación principal en contra de estas familias campesinas y comunidades indígenas, por parte del ejército, policía y los escuadrones de la muerte, era la de pertenecer o de ser auxiliares de la guerrilla. Señalamientos totalmente absurdo y lejos de la realidad. Pues el abandono en que los mantiene el poder central, los tiene engolosinados en su tarea de supervivencia. Lo que demuestra el morboso y criminal proceder de las fuerzas armadas y de policía enmarcadas en el siniestro proceso de persecución y exterminio de la población rural, y por consiguiente, su complicidad con el narcoparamilitarismo en su loca carrera de acaparamiento de tierras. Y es ahí, donde podemos confrontar lo dicho y lo hecho por esta organización criminal a todo lo largo de su increíble y macabra existencia, ya que, su susodicha 'Autodefensa' consistente en repeler el avance de la subversión es un 'vitrinazo' para confundir a la opinión nacional e internacional, encubriendo su real propósito, que salta a la vista con los resultados que empezamos a conocer: cientos de miles de muertos y desaparecidos, con el descubrimiento de varias miles de fosas comunes. Poco a poco y con la consolidación del narco-paramilitarismo como forma de poder, terror y presión sobre una gran masa de desprotegidos colombianos, personajes igual o más sanguinarios que Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha por ejemplo, se irían a unir para llevar a cabo esa gran empresa narcoterrorista con inmenso poder económico y político, llegando a la cima del poder. Y este monstruo se consolidaría con la decidida participación de hombres-bestias como: Salvatore Mancuso⁵⁰, Rodrigo Mercado Pelufo, Álvaro Uribe Vélez, Diego Fernando Murillo, Carlos Castaño, Rodrigo Tovar Pupo, Juan Manuel Santos, Francisco Santos, Farik Yanine Díaz, Jesús Ignacio Roldan, Rocío Arias, Jorge Noguera, Alfonso López Trujillo, Álvaro Araujo Noguera, Vicente Castano, Vicente Blel, Rito Alejo del Río, Mario Montoya Uribe, Ivan Roberto Duque Gaviria, Andres Felipe Arias, Oscar Naranjo, Mario Uribe Escobar, Luis Camilo Osorio, Rodrigo Perez Alzate, Jairo Wilmer Varela, Ramón Isaza Arango⁵¹, el clan Gnecco, Enilse López, Víctor Carranza⁵² y Santiago Uribe Vélez entre otros muchos, quienes

⁴⁹ El Frente Nacional fue creado por los dos partidos tradicionales liberal y conservador, en una reunión celebrada en Madrid España, en enero de 1958 para ponerle fin a la guerra que desangraba al país, desde decenios atrás, entre los dos bandos políticos y 96 de paso tumbar al general Gustavo Rojas Pinilla, quien se había apoderado del poder mediante un golpe de estado. El acuerdo estableció que los dos partidos tradicionales se turnarían en el poder cada cuatro años y por espacio de veinte años. El primer presidente del Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo (1958-1962) y el último fue Alfonso López Michelsen (1974-1978). Es de aclarar que con este acuerdo bipartidista, la élite le cerró las puertas a la participación de una tercera fuerza política. El país quedó amarrado a los dos partidos tradicionales. Y esto puede en una pequeña parte, explicar también uno de los motivos por los cuales se dio la masacre de la Unión Patriótica, con más de cinco mil de sus miembros y simpatizantes asesinados —entre ellos dos candidatos a la presidencia— por los escuadrones de la muerte y agentes del Estado, en tanto que tercera fuerza política y alejada de cualquier compromiso con el narco-paramilitarismo.

⁵⁰ Salvatore Mancuso de origen italiano y el principal enlace entre la mafia colombiana y la mafia Calabresa del sur de Italia. Además de ser pedido en extradición por los Estados Unidos, a su turno el gobierno italiano también solicitó su extradición por el delito de narcotráfico. El gobierno de Uribe ha guardado completo silencio. Mancuso miembro de la poderosa N'Drangheta calabresa ha introducido varias toneladas de cocaína a Italia y Europa. El juez italiano del Tribunal de Calabria Nicola Gratelli, declaró a la prensa Colombiana en diciembre de 2006, que Mancuso no es un des-movilizado del paramilitarismo para Italia, si no un narcotraficante que opera con la mafia calabresa y responsable del tráfico de droga.

⁵¹ Apodado por sus más allegados compinches criminales como 'el viejo', se encuentra en los diálogos de paz con Uribe. Este narco criminal fue uno de los subalternos de Pablo Escobar, razón suficiente para que tenga la clemencia del gobierno Uribe.

⁵² Víctor Carranza llamado también el 'zar de las esmeraldas', sobrevivió a la «guerra verde» entre esmeralderos que tuvo lugar en los años setenta y ochenta en la cual se contaron por miles los muertos en los numerosos ajustes de cuentas y

comenzarían a determinar el curso de la economía y de la política —años ochenta y noventa— en regiones bajo su control de terror y muerte. Con la participación de altos oficiales del ejército y la policía, altos funcionarios de los diferentes gobiernos, así como de parlamentarios de casi todas las regiones del país y empresarios e industriales del sector privado. Igualmente la participación de concejales, alcaldes y gobernadores con estos grupos de la muerte, se fue afianzando, se fue estrechando con el correr del tiempo y de la reelección, hasta convertirse en una especie de unión sagrada para compartir ganancias, para acumular riqueza, acentuar el poder político mediante el chantaje, el terror, la amenaza y la masacre. Así fue como se fue organizando la democracia capitalista en Colombia a partir de los años ochenta y hasta nuestros días. Convirtiéndose en un verdadero **Estado Mafioso**.

Los narcotraficantes unidos a los paramilitares (narco-paramilitares) poco a poco fueron controlando las rentas públicas regionales, las transferencias de la nación, los juegos de azar, el fútbol regional y nacional, las empresas departamentales de licores y hasta la salud, manipulando lo poco que queda en atención en los centros de salud y hospitales públicos⁵³ (medicamentos, bonos de rebaja) y lucrándose de la renta de sectores de bajos recursos. Para las elecciones municipales, departamentales y de presidente de la república, los narco-paramilitares con sus aspirantes previamente escogidos, obligarían a los ciudadanos con metralleta en mano para que votaran por sus candidatos a los puestos públicos. En el mejor de los casos, los constreñidos votantes reciben una cerveza o un plato de comida de la región después de su 'elección', porque la democracia capitalista, es también fiesta.

luchas por el poder. Carranza estuvo preso acusado de narcotráfico, pero por extrañas circunstancias y la ayuda de su amigo Juan Manuel Santos fue puesto en libertad por 'falta de pruebas'. Organizaciones de Derechos Humanos también lo acusan de conformar y financiar los escuadrones de la muerte en los departamentos de Arauca y Boyacá donde están situadas las minas de esmeraldas. Este vulgar e imponente criminal se desplaza en varios 4x4 con vidrios oscuros y cuenta con varias decenas de hombres armados hasta los dientes. Campesinos de la región sostienen que los deseos de este mafioso son ley en casi todo el departamento. Su fortuna se estima a varios miles de millones de euros producto en mayor parte al narcotráfico. Y si su deuda con la justicia no le quita el sueño, es gracias a los amigos que posee en el alto gobierno, como el ministro de defensa Juan Manuel Santos.

⁵³ En el norte del país la mafia maneja el sistema de salud. Y es en estos departamentos del norte del país en donde ha habido el mayor número de menores fallecidos por falta de una oportuna atención médica.

ALGUNA MASACRES COMETIDAS POR LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE:

ANTIOQUIA

Mutata: 25/ 05/ 97 Diez personas asesinadas entre las cuales hubo una decapitada. Mutata: 14/ 01/ 98 Once personas asesinadas sus pertenencias destruidas

Dabeiba: 24/11/97 Catorce campesinos asesinados, tres desaparecidos (dos menores de edad) mas de treinta viviendas quemadas.

Ituango: 25/10/97 Once personas asesinadas durante cinco días, un empleado de la municipalidad y un comerciante ejecutados en presencia de los habitantes.

Peque: 04/07/01 Diez personas asesinadas y once desaparecidas, originando un desplazamiento forzado de todos sus habitantes.

: 17/10/97 Once campesinas y campesinos horriblemente masacradas, solo se pudo identificar a ocho. Esta matanza originó el desplazamiento de 250 personas de la zona.

Sabanalarga 12/ 07/ 98 Once personas masacradas, que originaron el éxodo de 300 personas.

San Luis: 29/03/04 Cuatro personas asesinadas por sicarios.

San Luis: 17/05/01 Trece personas torturadas y masacradas por los escuadrones de la muerte.

San Carlos: 29/11/02 Ocho campesinas y campesinos asesinados por un grupo paramilitar.

Yolombo: 16/04/01 Diez personas masacradas y cinco desaparecidas, los 'paras' se presentaron con lista en mano. También quemaron varias viviendas y desplazaron varias familias.

Puerto Rico: 15/08/00 Siete niños fueron asesinados por el ejercito de la IV Brigada: Alejandro Arboleda: 10 años, Paula Arboleda 8 años, Marcela Sánchez 6 años, Harold Tavares 7 años, David Ramírez 10 años, Gustavo Carmona 9 años; y herido cuatro otros Cesar Arboleda 10 años, Oswaldo Muñoz 7 años, Cristian Isaza 5 años y Andrea Sánchez 15 años y quienes hacían una excursión escolar. Según el ejército, fueron confundidos con guerrilleros.

Remedios: 07/07/01 Dieciocho personas masacradas, varias viviendas fueron quemadas, igual mente una cooperativa. Robaron 40 mulas que subieron en tres camiones Los criminales tuvieron secuestrados a los habitantes la noche del viernes 6 de julio, comenzando la masacre el día siguiente, uno por uno de los campesinos fueron asesinados delante de sus familias.

Medellín: 06/12/02 Cinco jóvenes torturados por un grupo mixto de policías y paramilitares.

Barranca bermeja: 16/05/98 siete personas fueron atrocemente asesinadas y veinticinco mas desaparecidas por el grupo criminal comandado por Castaño y Mancuso.

San José de Apartado: 01/02/2005 Miembros de la Brigada XVII del ejército asesinaron en forma horrible a 8 Campesinos, un niño de 5 años y una niña de 18 meses. En la masacre intervinieron 2 oficiales; 9 suboficiales y 58 soldados profesionales. Sin embargo el gobierno sigue acusando a las FARC, a pesar de las pruebas.

Briceño: 25/11/2007 Miembros de la Brigada IV del ejercito asesinaron a cinco campesinos a los que pretendieron hacer pasar como guerrilleros a pesar del testimonio del párroco de Briceño, Daniel

Zapata, en el sentido de que los asesinados eran labriegos sin ninguna pertenencia a grupos subversivos, el ejército no lamentó los hechos ni ofreció explicaciones.

ARAUCA

Santo Domingo: 13/12/98 Dieciocho personas asesinadas entre ellas vaños niños en un bombardeo efectuado por la Fuerza Aérea Colombiana. Los militares se contentaron con declarar que habían disparado contra una columna guerrillera.

BOGOTA

Soacha: 30/08/02 Seis personas asesinadas. Soacha: 20/08/03 Cinco personas horriblemente asesinadas.

Fontibón: 06/09/96 Dos hombres asesinados de múltiples disparos, los autores eran de la Policía Nacional. Nunca fueron condenados.

BOLIVAR

Bolívar: 18/02/00 El Salado y Carmen de Bolívar, Cuarenta y seis personas asesinadas. Los criminales paramilitares torturaron en primer lugar a sus víctimas y luego las degollaron, violando a varias mujeres entre el viernes 17 y el sábado 18 de febrero.

San Pablo 08/01/99 los escuadrones de la muerte al mando de Salvatore Mancuso, masacraron catorce personas.

BOYACA

San Pablo: 09/10/04 Cinco campesinos masacrados por los escuadrones de la muerte.

CAUCA

Corinto:???? Doce personas masacradas por escuadrones de la muerte.

Timbio: 04/09/02 Cuatro personas asesinadas por paramilitares

CESAR

Astrea: 27/01/02 Once personas ejecutadas. Los criminales se desplazaban en dos camiones. Hubo dos desaparecidos.

Curumaní: 04/12/05 Veintidós campesinos cruelmente asesinados, después de ser torturados los criminales 200 en total bajo el mando del narcoparamilitar Ramón Isaza Arango. Retuvieron a una parte de la población y robaron ganado y otros bienes de las familias campesinas.

CHOCO

Cienaga: 05/05/02 Cuatro personas asesinadas por los escuadrones de la muerte. Rio Sucio: ???? Catorce personas asesinadas. Los catorce campesinos fueron masacrados entre los días 17, 18 y 31 de diciembre. Los criminales se llevaron 9 personas.

CORDOBA

Tierra Alta: 20/09/00 Once personas masacradas. Los criminales reunieron a toda la población determinando asesinar a los once campesinos.

Ovejas: 28/05/01 Once personas masacradas. Las víctimas fueron asesinadas a garrote y después descuartizadas con machetes.

Chengue: 17/01/01 Treinta y cuatro personas fueron horriblemente masacradas por los escuadrones de la muerte comandados por Mancuso

CUNDINAMARCA

Viota: 13/06/03 Cuatro personas fueron masacradas.

Mosquera 6/09/96 Seis personas fueron horriblemente asesinadas, sus cuerpos fueron mutilados e incinerados el día 7 en el basurero Mondoñedo en Soacha. Los autores pertenecían a la policía nacional. Nunca fueron juzgados.

GUAJIRA

Bahia Portete: 18/04/04 Un comando paramilitar bajo las órdenes de alias 'Pablo' entro al pueblo indígena y asesino a 12 personas de la etnia wayuu, y desapareciendo a o tras 30. Entre los muertos hubo 4 niños que fueron carbonizados y 8 mujeres, una de ellas cruelmente decapitada. El ejército no hizo nada.

MAGDALENA

Ciénaga grande 11/00 Los escuadrones de la muerte al mando de Carlos Castaño y Mancuso asesinaron después de torturar a sesenta personas entre mujeres y niños.

META

Mapiripan: 14/07/97 Cuarenta y nueve mujeres, niños y hombres masacrados antes de ser torturados y niños degollados. Quema-ron viviendas y robaron pertenencias. Como en la mayoría de las masacres el ejército fue cómplice.

NARIÑO

Samaniego: 11/10/01 Diez personas fueron torturadas y luego asesinadas.

NORTE DE SANTANDER

Cúcuta: 24/01/02 Cuatro personas asesinadas.

El Tarra: 06/01/04 Cuatro personas asesinadas después de haber sido torturadas.

PUTUMAYO

Valle del Guamuez 07/11/99 Veintinueve campesinos asesinados y una mujer embarazada. La masacre duró varios días. Ejército y Policía nada vieron.

TOLIMA

Falan: 15/09/01 Diez y ocho campesinos fueron salvajemente asesinados y dos más heridos. La complicidad del ejército y policía fue evidente.

SUCRE

Ovejas: 16/02/00 Cuarenta y dos mujeres, niños y hombres asesinados, de los cuales 39 campesinos fueron torturados y degollados durante el miércoles 16 y el jueves 17 de febrero. Ejército y policía nada vieron Ovejas 17/01/01 Veintisiete personas asesinadas a garrotes y piedra y sus viviendas saqueadas y luego quemadas. Participaron 80 paramilitares con la complicidad del ejército al mando del coronel Arango.

VALLE

Jamudí: 08/04/01 Cuarenta y cinco personas asesinadas. La masacre duro varios días y la mayoría de las víctimas fueron degolladas con machete y motosierra

Buga:???? Veinticuatro campesinos asesinados. Los paramilitares se movieron sin problema y ejército y policía no hicieron nada por detener la masacre.

54

Cuando Álvaro Uribe Vélez se lanzó como candidato presidencial en el 2001, la verdad no era muy conocido por el pueblo colombiano, aunque sí lo era por la elite económica y la clase política, ligada con la mafia, en tanto que hombre político de postura intransigente, militante de la extrema derecha, católico ultraconservador, miembro del Opus Dei y convencido amante del enfrentamiento en todos los terrenos, sobre todo el bélico, además de ser un excelente manipulador. La mayoría de la población del país no conocía su oscura trayectoria, salvo todos aquellos en el departamento de Antioquia, que habían sufrido en carne propia los arranques militaristas e injustos métodos de este ex director de la aeronáutica civil, ex alcalde, ex gobernador, ex diputado, ex senador de la república y ex socio de Pablo Escobar.

Ignoraba pues, el pueblo colombiano que este individuo había ofrecido decenas de permisos a pilotos del narcotráfico, que se había reunido con narcotraficantes a escondidas, que varios de sus más cercanos colaboradores y amigos habían sido sindicados de pertenecer al narcotráfico y uno de ellos condenado a cinco años de prisión, que había impulsado las Convivir, cooperativas de seguridad que asesinaban a diestra y siniestra, que se había opuesto a la extradición de sus narcotraficantes socios y que una parte de su familia había sido señalada por narcotráfico y enjuiciada por creación de escuadrones de la muerte. Tan solo las elites corruptas y los políticos mafiosos lo conocían muy bien, cierta parte de la izquierda que se inquietaba de verlo ascender rápida e impunemente y la poderosa Prensa nacional que solo daba cuenta de los aciertos de este (enigmático) 'carismático' político y que podría ser el indicado para «pacificar el país», después de tantos años de guerra. Pacificar el país con una guerra total y a gran escala. Este era pues, el 'Mesías' de las elites colombianas y la ficha de Estados Unidos, que iría a salvarlos de cualquier cambio democrático en el país y asegurarles las ganancias y el disfrute sin tropiezos de sus inmensas fortunas, muchas de las cuales han sido mal habidas. El grueso del pueblo colombiano no sabía, no se imaginaba el fango que lo cubriría.

⁵⁴ A partir de 1999 hasta 2002 se pudo constatar un total de 2.137 masacres, con un saldo escalofriante de 9.927 víctimas. Macabra cifra que debiera ir en ascenso a medida que se sigan descubriendo mas fosas comunes en todo el territorio nacional. En los 2 periodos presidenciales de Alvaro Uribe Velez, desde agosto 2002 hasta la fecha no existen cifras exactas, lo cierto es que el numero de masacres se encuentra en pleno descenso y los asesinatos selectivos continuan en ascenso pese a los «dialogos de paz» entre el gobierno de Uribe y los narco-paramilitares, quienes estan obligados a un ccsc total de hostilidades y de pleno respeto a la poblacion civil. Mientras tanto, el ejercito ha tornado la dclantera y se contabilixan incesantes ataques a la poblacion civil con saldo de varias decenas de muertos entre indigenas, campesinos, estudiantes y sindicalistas. Sin contar con las continuas detenciones arbitrarias.

Fuentes: Cinep, Redher, Central Unitaria de Trabajadores, Organizacion Internacional del Trabajo, Indymedia, Amnistia Internacional, Organizacion Nacional de Indigenas de Colombia, entre otras.

El slogan para su campaña presidencial fue «mano firme y corazón grande» los afiches publicitarios lo mostraban con la mano derecha puesta en el lado izquierdo⁵⁵, sus propuestas se enrumbaban hacia una solución militar del conflicto armado (entiéndase conflicto armado contra las guerrillas de izquierda), un reforzamiento del neo-liberalismo o capitalismo salvaje y una incondicional servidumbre al gobierno norteamericano, para procurar sus «ayudas» sobre todo en lo militar, y también de paso, el silencio total sobre su oscuro pasado y el de su familia. En su discurso hacia lo domestico se baso en la seguridad y la autoridad, y una lucha frontal contra la corrupción, la cual juro combatir a muerte pues no permitía el buen desarrollo de las instituciones, igualmente, como todo político en campaña, desplegó su hermoso menú de promesas en favor de los más necesitados, prometiéndoles más escuelas, más y mejores hospitales, un aumento sustancial de viviendas sociales, empleo seguro para todos, democracia y seguridad.

A pesar de ese encanto de discursos y promesas, el Álvaro Uribe Vélez de los años ochenta, sería el mismo que el Uribe candidato en el 2001 en cuanto a sus convicciones y oscuras relaciones de otrora. Pues, su jefe de campaña no era nada más ni nada menos que Pedro Juan Moreno Villa, —importador de insumos para la fabricación de cocaína— su secretario en la gobernación de Antioquia. Igualmente aparecía en su lista selecta de amigos y colaboradores el general Rito Alejo del Rio⁵⁶ acusado de paramilitarismo y crímenes de lesa humanidad, como también varios políticos de la costa norte del país, acusados de pertenecer al narco-paramilitarismo como: Trino Luna, Álvaro Araujo, Jorge Noguera, Miguel de la Espriella y Arturo Char entre otros y quienes trabajaban arduamente en su campaña presidencial. Lo era también José Obdulio Escobar Gaviria, primo hermano del capo Pablo Escobar Gaviria, y su más cercano colaborador en la época en que este estuvo preso en su propia cárcel que mando construir, llamada 'La Catedral'⁵⁷. El candidato Álvaro Uribe, no disimulaba su simpatía hacia sus amigos, sospechosos todos de pertenecer al narco-paramilitarismo, pero si escondía perfectamente sus planes políticos económicos y sociales que destinaria para el país. Y salía al paso de toda acusación en contra de sus singulares amigos con frases como: «Yo lo conozco en una persona honrada», «eso es una equivocación», o «yo no lo sabía» y cuando se tocaba su gestión publica, siempre respondía con un tono muy cercano al de un grito desesperado queriendo imponer su verdad «Soy una persona honesta!». Como se puede observar en la entrevista que el periodista Joseph Contreras, corresponsal de la revista Newsweek en Bogotá, le hiciera al candidato Álvaro Uribe, meses antes de la primera vuelta a la elección presidencial:

Newsweek: En 1997 y 1998, agentes de la administración de combate contra las drogas de Estados Unidos (DEA) decomisaron 50 toneladas de un precursor químico usado en el procesamiento de

⁵⁵ La sabiduría popular comenzó a hacer bromas sobre esta publicidad: decían que tenía la mano sobre el pecho por que se había cansado de tenerla extendida hacia adelante haciendo el saludo fascista. También apareció en Internet una caricatura donde una mujer miraba la televisión con su pequeño hijo, el niño pregunto a su madre 105 donde tenía la otra mano el señor que aparecía en la televisión y ella le respondió, en el gatillo hijo, en el gatillo.

⁵⁶ Este general apodado con el alias de «el pacificador», fue retirado del ejército bajo la presión de los organismos de derechos humanos. Fue protagonista de innumerables masacres cometidas por los escuadrones de la muerte en el Magdalena Medio y de la persecución sin cuartel de sindicalistas y organizaciones populares a las cuales tildaba de guerrilleras. En compañía del general Yanine Diaz, se distinguirían por llevar a cabo una despiadada persecución contra las comunidades indígenas y campesinas. Uribe patrocino un homenaje realizado a este sanguinario militar, una forma de desagravio por haber sido 'injustamente' separado de la institución militar. Uribe dio un largo discurso agradeciendo los servicios rendidos a la patria por el general, y acuso a las organizaciones de Derechos Humanos de atentar contra el honor de gente honesta. Uribe, durante sus dos mandatos no ha cesado de agredir y acusar a las organizaciones humanitarias y de Derechos Humanos de favorecer el terrorismo.

⁵⁷ La Catedral fue el nombre dado por Escobar, a la cárcel que el mismo mando construir con todo el confort inimaginable, cuando se sometió a la justicia en el gobierno del liberal Cesar Gaviria (1990-1994). José Obdulio Escobar lo visitaba a escondidas y le servía como su mensajero titular.

cocaína. Ese químico fue supuestamente adquirido por una compañía de propiedad de Pedro Juan Moreno Villa⁵⁸, quien trabajó con usted cuando era gobernador de Antioquia.

URIBE: Me di cuenta de eso solo después de que mi periodo como gobernador había terminado. Si los cargos son ciertos, el debería ir a la cárcel. Si carecen de sustento, la DEA deberá rectificar el error. Yo creo que se cometió un error en este caso.

NW: De acuerdo a un libro que es best-seller sobre el comercio de droga, titulado los jinetes de la cocaína, usted se pronunció a favor de un programa de vivienda⁵⁹ de bajo costo en Medellín, que fue financiado por el señor de la droga Pablo Escobar, cuando era usted alcalde de esa ciudad en 1982...

URIBE: Yo pedí a la oficina del Fiscal General investigar ese asunto, y fui completamente liberado de esos cargos. Ese programa de vivienda estaba muy encaminado cuando fui electo alcalde y no tuve nada que ver con él.

NW: Fuentes bien informadas dicen que un número record de licencias de pilotos y permisos de construcción de instalaciones aéreas, fueron emitidas por la oficina de aviación civil, cuando usted encabezaba la agenda en los años 80, un periodo en el cual el narcotráfico estaba creciendo...

URIBE: No hablemos más. Veo que usted ha venido aquí a ensuciar mi carrera política.

NW: Su delegado en la oficina de aviación civil era un hombre llamado Cesar Villegas, mas tarde sentenciado a 5 años de cárcel por nexos con el Cartel de Cali y asesinado a principios de este mes...

URIBE: Me rehúso a aceptar que los corresponsales extranjeros me hagan este tipo de preguntas y repitan calumnias hechas contra mí. Todo lo que digo es esto: Como político, he sido honorable y responsable. No tenemos nada más que discutir...

Dicho y hecho, el candidato a la presidencia dio media vuelta y salió disparado, dejando al periodista hablando solo. Su ejército de guardaespaldas corrió tras de él, quien asemejaba un alma que lleva el diablo. Según el testimonio del periodista Contreras, Uribe, estaba enfurecido y no era la primera vez, ni sería la última en que este ridículo personaje, como lo catalogaría el escritor Fernando Vallejo, perdía los estribos. Pues también, cuando los periodistas —independientes o extranjeros— o sus opositores políticos le tocaban el tema sobre su oscura y reprochable gestión política y su cercanía con los narcoparamilitares, Uribe, se descomponía y sus ojos parecían salirse de sus orbitas y brotarle una espumosa baba producto de la ira.

Poco antes de las elecciones presidenciales, comenzó a circular en Bogotá y otras ciudades del país, un libro escrito a toda velocidad y titulado «La Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez» con el singular subtítulo de «El señor de las sombras» (Editorial La Oveja Negra, mayo 2002), escrito por los periodistas Fernando Garavito (asilado en Estados Unidos) y Joseph Contreras, en el cual denunciaban la participación del entonces candidato Uribe y sus servicios prestados al Cartel de Medellín, la formación de los escuadrones de la muerte, mediante sus cooperativas 'Convivir', su participación con el

⁵⁸ Pedro Juan Moreno Villa era en ese preciso momento el jefe de su campaña.

⁵⁹ Uribe presidió personalmente la ceremonia de inauguración de esas casas construidas por Pablo Escobar, después de que él fuera elegido alcalde. La respuesta del candidato Uribe confunde de tal manera que es necesario remitirse a la acusación original. También con Uribe aparecían los políticos liberales Jairo Ortega y Alberto Santofimio Botero. Este último está preso acusado de haber propiciado el asesinato del candidato a la presidencia Luis Carlos Galán. Según un testigo, brazo derecho de Pablo Escobar, el ex ministro Santofimio le había aconsejado al capo Escobar eliminar a Galán, pues si este llegaba a la presidencia lo extraditaría a Estados Unidos inmediatamente. El hijo de Santofimio Botero, Alberto Santofimio Hernández, fue nombrado por el presidente Uribe, en la embajada de Colombia en París, en calidad de primer secretario.

crimen organizado y ser el candidato de los narcoparamilitares. Pero en un país en donde más de la mitad de la población no tiene con que comprar siquiera una digna comida diaria, en donde el nivel de educación va en retroceso día tras día, en un país, con un mayor número de desempleados que de empleados, en un país aterrorizado por la violencia estatal y corroído por la corrupción a todos los niveles, con una pobreza cerca al sesenta por ciento, no era fácil hacer pasar el mensaje y mucho menos evitar el ascenso de la mafia encarnado, en el que sería considerado como «el Mesías» de los dos partidos tradicionales y de la inescrupulosa elite. El libro no tuvo el efecto deseado (evitar que Uribe se apoderara de la presidencia) a pesar de sus acertadas revelaciones, pues, si su venta fue conforme a la población con capacidad monetaria de compra, la concientización de esa porción privilegiada de la población fue mínima, casi nula, y el obligado debate nacional no tuvo lugar, máxime, cuando los poderosos medios de comunicación, no prestaron el debido interés por un acontecimiento que era denunciado y que concernía a todos los colombianos, pues se trataba de la vida y obra de uno de los candidatos a la presidencia de la República.

Catástrofe! el grueso de la población colombiana ignoraba todo sobre el pasado oscuro de Álvaro Uribe, pero desde luego que, sus innumerables problemas a resolver para poder seguir sobreviviendo, no era más que otro sofisma de distracción, para que se fijaran en lo que se les venía encima, con la elección del capo de los capos de la mafia colombiana Álvaro Uribe Vélez. En todo caso, por fuerza de costumbre el grueso de los colombianos ven las cosas siempre en blanco y negro y tienden a vivir al día, con la biblia debajo del brazo casi las veinticuatro horas del día, y un ilimitado culto a los monumentos y estatuas de yeso y bronce a los cuales les solicitan cotidianamente esa ayuda celestial (trabajo, paz, dignidad, un mejor vivir) que jamás llegará, sino toman sus destinos en sus propias manos. Contrariamente a este panorama macondiano, las elites del país, con los pies en tierra y sus cabezas plenas de avaricia, encasillaban sus propuestas y reafirmaban sus aspiraciones político-económicas en un noventa por ciento de ganancia, seguras del triunfo de la ideología extremista de derecha, si esto los llevaba a hacer pactos con el mismo diablo, como reza el dicho cristiano.

El 26 de mayo de 2002 y faltando cuatro horas para que se cerraran las mesas de votación en todo el país, la Registraduría Nacional, el organismo encargado de controlar el proceso electoral, anunciaba que el candidato Álvaro Uribe Vélez, había ganado la elección presidencial con un 53% de votación y que por lo tanto no era necesaria una segunda vuelta. Para ser ciertos, no fue una sorpresa, y para ser honestos con nuestra historia, para la gran mayoría de colombianos esta noticia fue como si el rey de un lejano país desconocido hubiese llegado a la luna. La abstención fue de aproximadamente un 62%, apenas unos puntos por encima de lo acostumbrado. El ganador (aparentemente) recogería alrededor de 5.7 millones de votos y el resto de votos 2 millones aproximadamente, serian para su contender Horacio Serpa, sobre una cifra total de 19.5 millones de colombianos con derecho al sufragio universal⁶⁰.

Más de 12 millones de colombianos seguían despreciando, rechazando, castigando a los políticos corruptos tradicionales, señalados sistemáticamente de corruptos e incapaces y desde luego, castigándose a sí mismos, dándole la espalda a una alternativa de gobierno al no buscar una nueva forma de hacer política, al no emprender la renovación de esas viejas y corruptas practicas del viejo poder y a su ingenuo rechazo a la participación en la conducción de los destinos de nuestra apabullada República. Los colombianos por muchas razones, desertaron de la política hace bastante tiempo, dejando a los mas ineptos e incapaces, a los mas deshonestos ocupar todo el terreno. Dejaron el país, en última instancia, en manos de la mafia.

⁶⁰ Estas estadísticas reposan en el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas). Ahora bien, durante el primer gobierno de Uribe, este Departamento ha sido nocivamente politizado, hasta el punto que sus estadísticas sobre empleo, desempleo, pobreza, crecimiento económico o densidad de la población, han sido adulterados y en el menor de los casos, maquillados por capricho presidencial.

Los intentos casi individuales de parte de candidatos presidenciales diferentes a los dos partidos tradicionales, prestos a recuperar el honor de la república y la dignidad nacional en representación de todos aquellos que hemos creído y seguiremos creyendo en una real democracia colombiana y a seguir rechazando espurios gobernantes, ha sido en vano, pues estos candidatos confiados en el combate de ideas, solo han conseguido sucumbir ante las balas estatales⁶¹. Y fueron asesinados tal vez porque nunca ha existido la cohesión suficiente con la mayoría del pueblo, tal vez porque no se ha sabido hacer una política diferente que se aleje de la politiquería y sucias costumbres de los partidos tradicionales, o puede ser y es lo más seguro, que sus muertes se deban a la intolerancia y extrema crueldad, egoísmo y avaricia de la parte de los 'dueños' del país (se habla de cincuenta familias), que ha impedido, en unión de la mafia, que estos «quijotes» con ideas socialistas se hicieran rodear de la inmensa mayoría del pueblo colombiano, que llevaran los debates a la plaza pública y así, trataran de cambiar el curso de la historia del país. Todo y preservando sus vidas de los cobardes ataques criminales, que han impedido el cambio necesario que el país necesita urgentemente. Mediante el asesinato de estos candidatos, y desde luego de hombres y mujeres también, de todos los niveles, profesiones y demócratas convencidos, hemos sucumbido ante la ciega violencia estatal.

Desde el otro lado de las fronteras, las gentes nos miran y no comprenden, tratan de ignorarnos por que no quieren comprender o simplemente no les interesa. Los gobiernos, en especial los europeos, se encogen de hombros como diciendo: al fin y al cabo es el patio trasero de Estados Unidos, dejemos las cosas así y recojamos las inmensas ganancias de nuestras empresas sin tanto cuestionamiento. A la par con esta 'despreocupación' europea, el Estado colombiano le sigue vendiendo a los pueblos del mundo su propia versión de los hechos, no sin la ayuda y el cinismo de intelectuales y políticos de Norteamérica y Europa, haciéndose pasar por una víctima más de la violencia, según la elite, ocasionada por los grupos extremos. Versión sostenida por los irresponsables intelectuales autodenominados 'especialistas', o 'conocedores' de la situación en Colombia. Estos intelectualoides europeos lanzaron la idea de que en Colombia el principal problema, era el de un tener un «Estado débil» que impide su gobernabilidad. La elite mafiosa colombiana, con Uribe a la cabeza, rápidamente lo tomo como palabra bíblica y militarizó el país.

Los poderosos medios de comunicación cacarean continuamente sobre la vulnerabilidad del Estado, que sufre también de la horrible violencia proveniente de los dos extremos, como si no fuera el Estado el principal promotor de la violencia desde hace más de siglo y medio. Lo cierto es que cuando un Estado democrático se apoya en las armas y recurre al uso sistemático de la represión para solucionar TODOS sus problemas, sobre todo los del orden económico y social, pierde toda credibilidad, toda legitimidad en tanto que democracia, y pasa a convertirse en un Estado dictatorial e ilegítimo, ocasionando a la par con su brutalidad una irreversible inestabilidad. Y el Estado colombiano siempre se ha apoyado en el estamento militar para «solucionar» los problemas de la Nación; manifestaciones pacíficas en contra del hambre, la miseria intelectual, la extrema pobreza, la desigualdad y las injusticias de todo orden. Se ha caracterizado, el Estado colombiano, en prohibir la ideología comunista o cualquier ideología cercana, persiguiendo y eliminando a sangre y fuego a los portadores de tales posiciones políticas. El debate de ideas jamás ha sido posible en Colombia.

El nuevo inquilino de la Casa de Nariño Álvaro Uribe, se posesionaría el 7 de agosto de 2002 con la presencia de una muy poco concurrida presencia de estadistas del continente americano y diplomáticos. En el momento que el nuevo presidente, recibía la banda presidencial de manos del presidente del

⁶¹ Durante estos últimos sesenta años 6 candidatos a la presidencia de la república fueron asesinados, de los cuales 4 pertenecían a la izquierda siendo los tres últimos asesinatos en los últimos quince años: Jorge Eliecer Gaitán, Movimiento Socialista, asesinado en 1948; Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica, asesinado en 1987; Bernardo Jaramillo Ossa de la Unión Patriótica, asesinado 1990; Pizarro León Gómez, Movimiento Nacional, asesinado en 1994. Fueron asesinados 2 candidatos a la presidencia de la república pertenecientes a la derecha: Luis Carlos Galán Sarmiento del Nuevo liberalismo en 1998 y Álvaro Gómez Hurtado del Partido Conservador en 1996. El común denominador en estos crímenes radica en que fueron cometidos directa o indirectamente con la participación de agentes y funcionarios del Estado.

parlamento— colombiano, dos rockets cayeron estrepitosamente produciendo el pánico entre los honorables asistentes y un desconcierto general. Los dos rockets averiaron el ala izquierda de la casa presidencial y habían sido lanzadas por milicianos de las FARC, como una forma de dar la «bienvenida» al presidente Álvaro Uribe, a quien este grupo guerrillero también había acusado en varias oportunidades de pertenecer a la mafia y de favorecer a los escuadrones de la muerte. Los bogotanos y desde luego los honorables invitados a la posesión del nuevo representante de Colombia, no salían de su estupor, en medio de la incredulidad de los primeros y el temor de los segundos. El presidente Uribe debería, desde el mismo momento de su posesión, hacerle frente a su oscuro pasado, mientras que sus principales asesores en comunicación, deberían hacer enormes esfuerzos por difundir la biografía autorizada del nuevo presidente. Con el ascenso de Uribe a la presidencia y el 'afectuoso' recibimiento efectuado por las FARC, la paz en Colombia se alejaba inexorablemente.

Uribe recibía de parte del saliente presidente Andrés Pastrana, un país en plena guerra. Pastrana había roto meses atrás, las negociaciones de paz con el movimiento armado de las FARC, aduciendo que esta guerrilla no deseaba la paz y no había respetado el proceso de reconciliación. Por su parte la guerrilla denunciaba que el presidente Pastrana, no había cumplido con sus compromisos entre los que estaban el desmonte de los escuadrones de la muerte (paramilitares) y la puesta en marcha del Plan Colombia. Rotas las negociaciones entre gobierno y guerrilla, el ejercito comenzó inmediatamente a bombardear El Caguán, zona de concentración de los altos mandos guerrilleros y en donde se habían efectuado las conversaciones durante tres años. A la zona del Caguán, perteneciente al departamento del Caquetá, sur del país, desfilarían durante esos tres años de conversaciones entre gobierno y guerrilla, ex presidentes, ministros y políticos del mundo entero, altas personalidades de la banca mundial, periodistas de todos los países, importantes actrices y actores de todos los continentes, como también personalidades de organizaciones humanitarias y derechos humanos. Convencidos en su gran mayoría, que esta era la mejor forma de sacar al país de ese espiral de guerra infinita. Era mediante el dialogo y los acuerdos concertados la manera de llegar a una paz duradera. Pero, rotas las negociaciones, las hostilidades retomaban su macabro curso y la tragedia de los colombianos continuaba⁶².

La prioridad de la extrema derecha colombiana con el apoyo de los Estados Unidos, era la de poder echar a andar el Plan Colombia, configurado en el gobierno de Pastrana⁶³, pero elaborado en Washington, y que consistía, según informaciones oficiales y de prensa en una lucha frontal contra el

⁶² La poderosa prensa nacional culparía a la guerrilla del fracaso de las negociaciones de paz y en todo el país fue lanzada una campaña de desprestigio contra el gobierno de Pastrana, por haber perdido tres años en negociaciones estériles en lugar de haber endurecido la guerra. La prensa escrita, radio, televisión y los sectores más retardatarios de la sociedad no escondían su beneplácito de tener un nuevo presidente que hablaba de confrontación armada y hasta de fijar la fecha en la cual la guerrilla sería totalmente aniquilada. La campaña informativa de desprestigio sobre las negociaciones del gobierno de Pastrana y las FARC, fue acordada por los directores y jefes de redacción de la prensa con el narcoparamilitarismo. Los principales cabecillas de este monstruo, ordenaron efectuar una continua publicidad negativa en miras de diabolizar al movimiento insurgente y presentarlo como única causa de la violencia en el país.

⁶³ En el mes de septiembre de 1999 el presidente Pastrana ofreció una conferencia de prensa en el lujoso Hotel 'Le Crillon' de París. Al parecer su objetivo era dejar en claro las inmensas bondades del Plan Colombia, pues según el propio Pastrana, estaba encaminado a luchar humanamente contra el cultivo y tráfico de cocaína. Yo le hice dos preguntas al presidente, 1°- Si era verdad que este Plan Colombia estaba enmarcado para luchar frontalmente contra la guerrilla. 2°- Explicara si obtuvo la autorización del congreso de la República, para permitir la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional, como lo ordena la Constitución. A lo cual él respondió: «Señor periodista, a usted lo han engañado» sic. Agregando que el Plan Colombia no era una plan contrainsurgente, era un 80% social y un 20% militar y que justamente el se encontraba en una correría por Europa, para solicitar una ayuda financiera que pudiese llegar a la población rural más pobre y lograr la sustitución de cultivos ilícitos por lícitos. En cuanto a la presencia de tropas extranjeras, dijo que era falso, que en el país había solamente varios instructores estadounidenses. Los posteriores hechos, demuestran la falsedad con la cual actúan los gobernantes. El mismo Pastrana declaró a la revista Semana (15-9-2007), que el suceso militar de Uribe, es gracias a él, que le entrego una fuerzas armadas bien entrenadas y súper armadas. En cuanto a la presencia de tropas extranjeras en el gobierno de Pastrana, se estimaron en más de mil militares estadounidenses y ahora en el sistema mafioso de Uribe, se sabía de más de cinco mil norteamericanos y varias decenas de militares israelíes e ingleses, contando los mercenarios por ellos entrenados.

tráfico de droga y sus carteles. Por lo menos en la teoría ese sería el fin. En la práctica, se dibujaba una ciega e inhumana guerra contra la subversión, pero en la cual, los civiles llevarían la peor parte⁶⁴. Durante su campaña el candidato narco-paramilitar Álvaro Uribe Vélez, se había mostrado intratable con respecto a los que él llamaba “violentos”, de ahí su slogan electorero “mano firme y corazón grande”. Ahora bien, su gestión nos obliga a desmenuzar cuidadosamente, hacia quien o quienes iba dirigida “su mano firme” y quienes se favorecerían de su “corazón grande”. Con respecto al plan Colombia, el nuevo gobierno endurecería las fumigaciones aéreas y su lucha contra las drogas parecía sin cuartel. Pero en realidad, los informes de los organismos nacionales y las Naciones Unidas muestran un ascenso sostenible en cuanto a cultivos de coca y una continua exportación de cocaína, ya que el consumo de este producto, también avanza a ritmo sostenido, en las principales metrópolis del mundo.

En diciembre de 2002 con un Plan Colombia contrainsurgente a todo vapor, Uribe anunciaba al país el comienzo de negociaciones de paz con los escuadrones de la muerte, (o narco-paramilitares y grandes exportadores de cocaína) organizaciones o grupúsculos que en estas tres últimas décadas han tenido un comportamiento preponderante en la violencia y en el escalamiento de la guerra interna que vive el país, empleando formas altamente destructivas y crueles, y exterminando arbitrariamente a cuanta persona, ellos sindicaban de 'incomoda' o 'colaboradora de la guerrilla', produciendo a la vez, un desplazamiento sin precedentes en muchas ricas y estratégicas regiones del país, con el acompañamiento del estamento militar. En este 'Proceso de Paz' se vaticinaba la desmovilización de sus aproximadamente ocho mil miembros⁶⁵ y su reintegración a la sociedad —pero no exactamente a la vida civil—, mediante facultades otorgadas por la ley 782 de 2002. Allanando así el camino para otorgarles beneficios económicos y jurídicos a estos grupos de la muerte. Obra que durante varios años líderes políticos y sectores del establecimiento se habían dado a la tarea de la legitimación total del narco-paramilitarismo, sin haber podido conseguirlo⁶⁶.

Mientras el poder político hacia lo suyo, la poderosa prensa desplegaba todo su aparato y en artículos de prensa —revistas, periódicos, entrevistas televisadas y reportajes en las radiodifusoras del país— se encargaba de familiarizar a los colombianos con las principales cabezas del narco-paramilitarismo mostrándolos como unos guerreros por la libertad y los salvadores de la democracia capitalista a la colombiana, y hasta en ciertas universidades se hablaba de estos criminales con cierto romanticismo. Las (auto)biografías de Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, Vicente Castaño, Diego

⁶⁴ Para el año 2006 el presupuesto del Plan Colombia se estimó a 18.5 millones de dólares por día. Con un saldo de millones de civiles desplazados, decenas de miles de asesinatos por parte de las fuerzas armadas y los escuadrones de la muerte, la degradación paulatina de la flora, la fauna, los suelos y el agua debido a las incontroladas fumigaciones aéreas con glifosato. Sin embargo el negocio del tráfico de cocaína se mantiene, la siembra de coca se desplazó de unas regiones del país a otras en donde los escuadrones de la muerte tienen gran influencia, las ganancias de este tráfico siguen su fructífero ascenso y el comercio y consume igualmente sigue intacto. Reporte ONU 2006. En un extenso artículo elaborado por las FARC y publicado por la Agenda de Noticias ANNCOL en septiembre de 2001 y titulado «Armas químicas y Plan Colombia» acusaron al presidente Andrés Pastrana, de someterse a los dictados de la Casa Blanca y desconocer el pedido de seis gobernadores del sur del país, que solicitaron suspender las fumigaciones, igualmente señalaron que uno de los grandes favorecidos con las fumigaciones es el poderoso grupo MONSANTO productor del glifosato y una de las empresas financiadoras de la campaña presidencial de Bush. Dan a conocer en el extenso artículo, los graves daños para la salud humana y la irreversible destrucción de tierras, sembrados lícitos y el agua de los ríos, como también la degradación acelerada del medio ambiente, solicitando por último la intervención de la comunidad internacional para evitar una catástrofe casi irreversible.

⁶⁵ Esta cifra es cercana al número de miembros de estos grupos terroristas, así no haya existido un censo fiable por parte del gobierno nacional. De acuerdo a los mismos cabecillas de estos escuadrones, el número no pasaría de diez mil. Pero, por conveniencia gubernamental y la de ciertos altos cabecillas el número ha sido triplicado.

⁶⁶ A finales de 1.995 el ministro del interior de ese entonces Horacio Serpa, había intentado un diálogo con estos grupos criminales, pero sectores sociales y personalidades nacionales e internacionales habían objetado tal iniciativa. Lo incomprensible es porque estos grupos no han sido combatidos por las fuerzas armadas y siempre se ha buscado razonarlas mediante el diálogo, se pregunta mucho colombiano.

Fernando Murillo, Ramiro Vanoy, Rodrigo Pérez Alzate entre otros, y máximos cabecillas de los escuadrones de la muerte, eran presentadas al grueso del público con todo tipo de adornos lícitos, para que desde un principio, se tuviera la dichosa idea de donde venían estos señores que le habían declarado la guerra a la subversión, y ahora de la mano de su presidente, el doctor Álvaro Uribe Vélez, se ofrecían enteros por la paz, después de cumplirle a los colombianos y colombianas y de haber salvado la patria. (sic)

El maquillaje sobre la vida y la realidad del andar delictivo de estos hombres-bestias, fue de un profesionalismo envidiable, hasta el punto que el mismo Uribe, pidió a los colombianos no compararlos con criminales (sic). Los poderosos medios de comunicación, no ahorraban epítetos descalificadores en contra de la subversión y al mismo tiempo, no cesaban de alabar a los miembros de las (AUC) Autodefensas Unidas de Colombia, como son llamadas por los perversos en el país. Uribe por su parte, no cabía de la dicha en su enorme traje de presidente. Y el publicitado y maquillado Carlos Castaño, entrañable amigo de Uribe, y máximo cabecilla del narco-paramilitarismo se multiplicaba para poder atender todos los requerimientos de la poderosa prensa, tomando suficiente aire para poder complacer todos esos micrófonos abiertos plácidamente, para que expusiera su discurso estrechamente ligado a las políticas neoliberales, a las bondades del capitalismo, para que contara su hazañosa lucha contra ese demonio subversivo y confesara su ferviente defensa de las instituciones del Estado y su admiración por el presidente de la república. Hasta una periodista española cercana al Opus Dei, y columnista del diario El Tiempo de Bogotá, le serviría complacida de comodín al criminal en uno de sus auto elogiosos libros.

Parte de la historia de ese acuerdo de 'desmovilización y paz', comenzaría a principios de 2001, cuando varias decenas de parlamentarios y otros "elegidos", (gobernadores, alcaldes, concejales) pertenecientes a los dos partidos tradicionales liberal y conservador, bastante comprometidos con la candidatura de Uribe, se reunieron con jefes de los escuadrones de la muerte en Santafé de Ralito, departamento de Córdoba, con el fin de legitimar un movimiento político, el cual seguiría los lineamientos y propuestas político-económicas del grupo narco-paramilitar⁶⁷. En la reunión se concretó de manera solemne 'La Refundación de la Patria'. Meses antes un ejército de abogados al servicio de los narco-paramilitares, se habría reunido en varias oportunidades con los principales cabecillas de estos grupos criminales, con el fin de actualizar una extensa propuesta jurídica y sobre la cual el gobierno (uribista) a venir, se basaría para echar a andar un proyecto de paz, con el narco-paramilitarismo. Dichas reuniones se celebraron en el más completo hermetismo y sus conclusiones fueron remitidas a parlamentarios uribistas, —que en la práctica eran socios de este grupo criminal—. No es difícil saber hasta qué punto el candidato Álvaro Uribe estaba enterado, pues el mismo estuvo reunido clandestinamente con varios cabecillas del narco-paramilitarismo. El secreto de estas reuniones se mantendría por varios años, excepto la efectuada con el ejército de leguleyos, prestos a sacar del fango a sus clientes. Otra reunión clandestina, tendría lugar por la misma época, esta sí, convocada directamente por los cabecillas narco-paramilitares a los dueños y directores de la poderosa prensa nacional. Completo silencio! Nada que pudiera filtrarse a la opinión pública. Al parecer en dicha reunión los cabecillas criminales, se quejaron ante los jefes de los medios de comunicación, de la forma 'despiadada' como eran tratados y solicitaron (ordenaron) a la prensa, ser más indulgente con sus estructuras narco-paramilitares, tratándolas como autodefensas y no como paramilitares de extrema derecha y a la vez, pidieron lanzar una ofensiva mediática en contra de las guerrillas de izquierda, de tal forma que el público en general se acomodara a la idea de que estos subversivos eran terroristas, pese a las negociaciones entre el gobierno del presidente Pastrana y la guerrilla de las PARC. Al día siguiente en las salas de redacción de la poderosa prensa nacional, la orden fue de evitar todo ataque contra los escuadrones de la muerte y con una sutileza remarcable se 'recomendó' hablar de los sanguinarios

⁶⁷ En declaraciones del senador uribista Miguel de la Espriella, preso por su complicidad con el narco paramilitarismo, a la Cadena Radial Colombiana (Caracol) el 26-11-2006, admitió que estos grupos (narco-paramilitares) son verdaderos dueños de varias zonas del país y confirmó la existencia de un para-estado constituido

grupos de extrema derecha, como «Autodefensas Unidas de Colombia» principal opositor de la subversión. Así pues, los deseos de las AUC eran órdenes cumplidas. La actividad mediática tuvo sus frutos, las negociaciones entre gobierno y guerrilla se estrellaron contra el muro, la extrema derecha política, económica, mediática y militar lanzo su grito de guerra y los cañones volvieron a hablar. Los violentos y partidarios del viejo statu quo lograron ampliamente sus objetivos. Cuando el candidato de la extrema derecha Álvaro Uribe Vélez, “ganó” la presidencia de la república en la primera vuelta el 16 de mayo de 2002, la fiesta narco-paramilitar se dio con bombos y platillos, ilimitado licor del más fino, y succulentos platos regionales. La orgía duraría casi tres días. Y esta alegría no era para menos, si tenemos en cuenta el parte de victoria expresado por el cabecilla narco-paramilitar Salvatore Mancuso, cuarenta y cinco días antes, cuando declaró que por lo menos un 35% de los congresistas pertenecían a sus filas⁶⁸.

La reunión de Santafé de Ralito fue contada de esta manera por el diario de El Tiempo, el 28-11-2006: «La cita comenzó a la 10 de la mañana, en la misma casa que después ocuparía Salomón Feris Chadid, alias 'comandante 08', durante las negociaciones de paz con el gobierno de Álvaro Uribe... Los políticos llegaron en varios carros... La reunión se inicio cuando los comandantes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso arribaron al quiosco... Castaño dijo que el temor de las Autodefensas eran las negociaciones de paz que en ese momento el presidente Andrés Pastrana, adelantaba con las FARC en el Caguan. 'Nosotros también necesitamos un proceso de paz' dijo Castaño y advirtió que la suerte de las autodefensas no podía quedar sellada en el proceso que Pastrana estaba tratando de sacar adelante con la guerrilla...

Fue entonces cuando dos profesores de la Universidad de la Sorbona (de París), cuyos nombres no recuerdan pero que algunos congresistas han visto en la Universidad Militar, tomaron la palabra y empezaron a explicar la estrategia política que las autodefensas querían desplegar. Primero, eso sí, dieron una visión particular de lo que para ellos era el conflicto, hablaron de como se estaban desarrollando los procesos de paz en el mundo y finalmente dijeron como se veía Colombia en el mundo. Después, sin mayores rodeos, explicaron la estrategia que apuntaba a convertir a las autodefensas en 'un actor político reconocido en el conflicto interno', dijo otro de los asistentes... A las cuatro de la tarde, cuando se termino la explicación de estos argumentos, Mancuso tomo la palabra y dijo que tenían que firmar un documento, enseguida el documento fue impreso y puesto en una mesa... Varios dudaron en firmar, pero solo cuando el entonces congresista Luis Carlos Ordosgoitia⁶⁹, ahora director del Instituto Nacional de Concesiones en el gobierno de Uribe, dijo '*yo lo firmo comandante*', los demás procedieron a hacerlo... se supo que hubo varias reuniones de este tipo. Meses después del encuentro de Ralito, los jefes paramilitares presidieron otra reunión en Arboletes, Antioquia».

El 18 de febrero de 2002 tuvo lugar un nuevo encuentro entre los cabecillas del narco-paramilitarismo con Mancuso a la cabeza, y varios ferviente parlamentarios uribistas entre los cuales se encontraban Zulema Jattin, Juan Manuel López Cabrales y Salomón Nader para reforzar la candidatura de su jefe político Álvaro Uribe Vélez, y hacer una evaluación sobre el trabajo realizado por sus copartidarios incrustados en las gobernaciones, alcaldías y concejos del país, y los futuros “elegidos”, quienes asumirían el encargo de colaborar con la 'Refundación de la Patria'.

El presidente Uribe persistía en su proyecto de negociación con el narco-paramilitarismo, a pesar del inmenso desconcierto de la mayoría de colombianos y la abierta apatía de cientos de miles de víctimas. Un proceso de paz con estos escuadrones de la muerte y tráfico de drogas, que consistía en la desmovilización, amnistía y reincorporación a la sociedad de todos sus miembros a través de diversos procedimientos, leyes e instancias legales, a pesar de que estos grupos, carecían de un estatuto

⁶⁸ * Prensa nacional 17-03-02. Dicha información fue corroborada por el ministro del interior de la época. Periódico El Colombiano de Medellín. 24-04-02.

⁶⁹ Gran amigo personal de Alvaro Uribe

político, o mejor, jamás habían incurrido en delitos de rebelión, ni eran considerados delincuentes políticos. Sin embargo, a pesar de estos enormes vacíos jurídicos y deslice político, el presidente Uribe, en complicidad de los narcoparapolíticos se empeñaba en llevar adelante dicha negociación, muy a pesar de los temores y desacuerdo de la totalidad de las Organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales y Organizaciones de Víctimas en todo el país. Por parte de los narco-paramilitares, su plana mayor dio a conocer una «propuesta de paz» en un documento que consta de doce puntos, publicado en todos los diarios del país⁷⁰. En el documento estos grupos se ufanan de haber ejercido el papel de Estado en muchas regiones de Colombia, advirtiendo que ha llegado el momento de entregarle dicha responsabilidad a un gobierno, en el cual, ellos tienen plena confianza, pero exigiendo participar en todos los planes de control de estas regiones o zonas conjuntamente con el Estado, con el propósito de que no se eche por la ventana, todo lo que ellos han construido, bajo los principios e ideales de sociedad que les caracteriza. Amenazan con volver a las armas, si la subversión trata de copar las zonas en cuestión, que deben, imperativamente, estar bajo su control haciendo dúo con el Estado, y el cual, debe replantear sus relaciones con la población. Las incoherencias jurídicas y políticas estaban al orden del día.

Los temores se iban instalando a lo largo y ancho del país y las reacciones ante estos hechos no se hicieron esperar. El periodista Alfredo Molano escribiría en el diario El Espectador el 22-12-02:

«El corolario obligado es que en adelante el carácter de toda negociación no será política es decir, no podrá discutirse la estructura del poder establecido— sino jurídico, solo admite consensos sobre la reinserción al statu quo... La negociación sobre el sistema político que nos rige quedo abolida de cuajo: el poder no es negociable, el bipartidismo seguirá incólume».

A su vez Hernando Gómez Buendía, ideólogo liberal, señaló en la revista Semana el 09-12-02:

«La diferencia es que ahora no hay que hablar de reformas por que las AUC (paramilitares) no les interesa las reformas, son, como dijo Castaño 'un grupo progubernamental que opera en la ilegalidad'... El proceso, en efecto, comenzó muy discreto y hace ya varios meses. Antes de cualquier cosa, había que remover el escollo de que con los paramilitares no se puede negociar por qué no son insurrectos o delincuentes políticos. Entonces con mucho tino, el gobierno se ahorro la polvareda de un debate domestico y mundial, al sugerirle inocentemente al congreso que, al prorrogar la ley 418, le quitara la traba del status político».

El Defensor del Pueblo y ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes Muñoz, llamo la atención en declaraciones hechas al diario El Nuevo Siglo el 27-12-02:

«...temo que la desmovilización pueda llevar a conformar más tarde, otros grupos irregulares, o lo más grave se inserten, en las fuerzas militares sobre cualquier esquema... sería reprochable que con esta agrupación irregular no se diera un sometimiento de la justicia... que se le otorgue una oportunidad a la justicia colombiana para investigar y sancionar a los miembros de las 'autodefensas' inmersos en delitos de lesa humanidad que no serán amnistiables ni indultables».

El recién posesionado presidente Uribe y su equipo de gobierno⁷¹, se apresuraron a establecer los presupuestos legales para que el proceso con los escuadrones de la muerte no tuviera trabas, y se

⁷⁰ (Diario El Colombiano 29-11-02).

⁷¹ Varios ministros y asesores del presidente Uribe estaban en la mira de la justicia por su pertenencia con grupos de narcotraficantes o paramilitares por ejemplo: Consuelo Araujo ministra de educación, ella y su familia codirigen los escuadrones de la muerte en el norte del país; Jose Obdulio Gaviria asesor presidencial y primo hermano de Pablo Escobar a quien le sirvió de mensajero cuando este estuvo en la cárcel de «la catedral»; Rito Alejo del Río asesor militar, general

desarrollara con la mayor rapidez posible. Por su parte el congreso, del cual, se ufanan los cabecillas criminales de tener una respetable cuota, (35 a 40% pero en realidad superior), le aprobó al gobierno rápidamente el 13 de diciembre de 2002, la ley 782, que modificaba la ley 418 de 1997, en la que se habían establecido normas para negociaciones de paz con los movimientos insurgentes. Esta nueva ley suprimió numerosos artículos que exigían un «reconocimiento de carácter político» como requisito indispensable para que el Estado pudiera entrar en negociaciones con un grupo armado ilegal. En adelante cualquier grupo armado de delincuentes, lo mismo cualquier delincuente (común), podrá entablar negociaciones con el gobierno nacional. Es más, el decreto 128, del 20 de enero del 2003, abrió la posibilidad de indultos y amnistías para miembros de grupos armados, mencionando explícitamente a las «autodefensas» como posibles beneficiarios de estos indultos y amnistías. Yendo aun más lejos, el espurio presidente Uribe anunciaba un proyecto de ley (mayo 2003), que permitía la excarcelación de autores de crímenes atroces, sin que su proceso penal se haya cerrado, formula, -según el “presidente”-, iría a satisfacer las exigencias de quienes se oponen a la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Para nadie es un secreto que el objetivo de esta ley es la excarcelación por anticipado de los máximos cabecillas y militantes del narco-para-militarismo. Pero también, queda en el aire la pregunta de oro y que muchos colombianos no cesan de buscarle una respuesta justa: Estas leyes no están encaminadas en especial, a favorecer a su propia familia? Hermano, tío y primos, quienes tienen deudas con la justicia colombiana, por su participación en la conformación de escuadrones de la muerte (Los Doce Apóstoles y Los Erres) y culpables de masacres y asesinatos en Antioquia especialmente. El incipiente «dialogo» y «negociación» con los narco-paramilitares, deja entrever una innegable empatía del modelo imperante en el sistema político colombiano con estos grupos criminales, llamados narco-paramilitares o más tiernamente: «autodefensas».

La firma de un acuerdo por parte de los representantes del gobierno y los líderes del narco-paramilitarismo el 15 de julio del 2003, inauguro la fase de negociación propiamente dicha y abrió la etapa para buscar la desmovilización definitiva, de los aproximadamente 8 mil hombres y mujeres, que componen estos grupos de extrema derecha. De acuerdo a las medidas adoptadas por el gobierno, los desmovilizados tienen derecho al indulto o liberación condicional (decreto 128), serian incorporados a los programas de «seguridad democrática» que adelanta el gobierno, —y que fue bandera en la campana de Uribe— principalmente como soldados campesinos o incorporados a las redes de informantes civiles al servicio de las fuerzas armadas. Medidas de ninguna manera anodinas, si se tiene en cuenta la proximidad de los escuadrones de la muerte con la fuerza pública. Todo este programa circense y de impunidad infinita entre Uribe y sus socios avanzaba a grandes pasos, como avanzaba la guerra declarada por el gobierno contra la insurgencia y contra todos los miembros y militante de las organizaciones civiles y sociales, —sin hacer la debida distinción entre combatientes armados y luchadores populares— que se levantaban contra los atropellos y violaciones de toda índole, de los derechos humanos. Pues para Uribe, los militantes de estas organizaciones humanitarias son terroristas disfrazados, que trabajan para la guerrilla. Las mazmorras del Estado no dan abasto y el número de exiliados aumentan escandalosamente.

Ya para el año 2005 la Asociación Justicia y Paz que dirige el sacerdote jesuita Javier Giraldo M. hacía un análisis de fondo en un artículo titulado “El paramilitarismo: Política de Estado”:

«El paramilitarismo en Colombia, a través de su desarrollo histórico; a través de los documentos legales que pretendieron sustentarlo; a través de confesiones extraordinarias de varios de sus gestores que conocieron su funcionamiento intimo; a través de sus experimentos más destacados; a través de sus patrones de funcionamientos regionales y nacionales; a través de sus vínculos patentes o discretos, activos o pasivos, con todos los poderes e instancias del

separado del ejercito por su participacion en crímenes de lesa humanidad; Pedro Juan Moreno asesor presidencial, importador dc insumos para la fabricacion de la cocama y fuertemente ligado a los escuadrones de la muerte.

Estado. No dudamos en calificar el paramilitarismo como política de Estado. Esta conclusión se impone por sí misma a quien analice las fuentes que fueron consultadas y a quien rastree en los últimos 30 años las posiciones tomadas frente a él por los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y disciplinario. Dicho análisis se detenía, al comienzo, en la etimología misma del vocablo, según la cual, la paramilitar constituye una actividad anexa o auxiliar de la militar pero que al mismo tiempo deforma, desvía o desnaturaliza a esta. Se veía allí mismo como la justificación de cuerpos armados en un Estado de Derecho, se funda precisamente en la necesidad de confiar el manejo de las armas a profesionales que las utilicen estrictamente dentro de cánones jurídicos y éticos que se compadezcan con ese modelo de Estado, siendo entonces fundamental la distinción transparente entre lo civil y lo militar, así como la absoluta transparencia en el manejo de las armas por parte de aquellos a quienes se confía su uso, de modo que su conducta este abierta al más exhaustivo escrutinio de cualquiera.

El paramilitarismo (colombiano) se sustenta, por el contrario, en su raíz más honda, en el esfumamiento de las fronteras entre lo civil y lo militar, y asume dos manifestaciones complementarias: el uso de civiles en el accionar militar y el accionar de militares *subespecie civiles* (bajo apariencia civil). Ambas manifestaciones se sustentan en una necesidad inconfesable de oscurecer, de encubrir, de esconder, de ocultar, de eludir responsabilidades, de fingir identidades, de disfrazar acciones, de falsificar realidades, de oponer murallas a las investigaciones, de imposibilitar esclarecimientos, de confundir y engañar, de obstruir la búsqueda de la verdad, de obstaculizar la justicia. En otros términos, es de su esencia establecer un imperio de noche y niebla.

El rastreo de documentos históricos y jurídico-legales nos demostró que el paramilitarismo en Colombia se perfiló en dos grandes etapas: la primera entre 1968 y 1989, durante la cual se defendió públicamente, sin pudor alguno, su legalidad, su constitucionalidad y su legitimidad, la segunda de 1989 en adelante, cuando la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de mayo de 1989, declaró inconstitucionales los artículos que habían sustentado su apariencia legal y estigmatizó con nombre propio el «paramilitarismo» y las «autodefensas» (escuadrones de la muerte) pasando esta política a apoyarse en un entramado de relaciones clandestinas con los altos poderes del Estado, como lo reconocen varias confesiones de alto nivel allí citadas y como lo evidencian las certezas morales que se cosechan después de cada una de sus acciones.

El paramilitarismo inundó el país principalmente en las décadas de los 80 y 90 y se erigió como columna vertebral de la Guerra Sucia y como el más monumental desafío de impunidad que nuestra historia pueda recordar.

Poco a poco los diversos poderes del Estado se fueron adaptando a todos sus postulados, El estamento militar, como órgano del poder ejecutivo, obvió fácilmente las cortapisas constitucionales que se erigieron en 1989, y respondió a ellas con una promoción atrevida, desafiante, intransigente y brutal del paramilitarismo, es decir, a través de una imposición de facto que desprestigió cada vez más las instancias legales del Estado, dejando a estas en la calidad de lo decorativo. El resto del poder ejecutivo acogió el paramilitarismo y se acomodó a todas sus exigencias por la vía de la pasividad y de la tolerancia, de la aquiescencia y de la anuencia, de la ignorancia y de la ingenuidad, del disimulo y del discreto aval, de hipócritas discursos condenatorios que se conjugaron siempre con las condecoraciones, ascensos y honores a sus más aguerridos promotores; caminos todos que no por la debilidad de sus con-notaciones semánticas carecen de eficacia y de fuerza; por el contrario en orden a consolidar un imperio de noche y niebla, ese talante político que se arraiga en la pasividad, en la tolerancia, en la aquiescencia, en la fingida ignorancia en el disimulo, y en los falsos discursos, ha mostrado su máxima eficacia y fortaleza. Por su parte, los poderes legislativo, judicial y disciplinario, siguieron estos mismos derroteros. El Congreso fue aprobando sin remordimiento todos los ascensos de

los promotores y gestores del paramilitarismo y sanciono leyes de amnistías disfrazadas para los sicarios, mientras las instancias judiciales y disciplinarias del Estado se las arreglaron para consagrar férreamente su impunidad.

El principal mecanismo que encontró el poder judicial para dejar impunes todos los crímenes del paramilitarismo, brindándole a este el más eficaz apoyo para avanzar en su estrategia criminal, fue el de ignorar las características más esenciales de estos crímenes en cuanto «paramilitares» (es decir, en cuanto toman su fuerza del sometimiento de la víctima al «imperio y fuerza del Estado», gracias a la autoridad del Estado que se muestra detentar en el momento de someterla por el respaldo activo u omisivo de todos sus agentes).

Dichas características miran a ocultar la responsabilidad del Estado, mediante la utilización de medios que oscurecen y encubren la identidad de los victimarios y que tienden a fingir alteridades o ficticias identidades «diferentes»: uso de personas no vinculadas formalmente a los cuerpos armados del Estado, uso de trajes civiles; uso de vehículos y haciendas privadas; transformación del escenario del crimen; atribución de los hechos a otras entidades (recurrentemente a organizaciones guerrilleras o a grupos «fuera de la ley») etc...

El poder judicial le ha prestado el más eficaz servicio al paramilitarismo al ignorar estas características, o al desarrollar las investigaciones bajo los supuestos de que: si no son halladas ordenes de capturas, de allanamientos, o de operativos en los archivos oficiales; si no fueron registrados los detenidos en los libros de minuta de guardia; si no son identificados por varios testigos presenciales los agentes perpetradores con sus nombres completos y sus placas etc., el crimen «no es oficial» ni la investigación debe enfocarse hacia el accionar de la fuerza pública y sus ramificaciones, debiendo, por lo tanto, decretarse el archivo del caso, la cesación de procedimiento o la absolución de los sindicados, o ir al limbo de los expedientes que permanecen eternamente como investigaciones preliminares, «contra desconocidos».

Al hacer caso **omiso de las características propias del crimen paramilitar**, como la no existencia de ordenes de capturas, de allanamientos o de operativos; como la ausencia de testigos «útiles», ya que las víctimas son tenidas por personas con la cara cubierta, en carros sin placas o con placas falsas, aisladas o conducidas lugares incognitos; como la ausencia de testigos «suicidas», ya que muchas veces sobre los verdaderos testigos (que vieron, oyeron o saben algo) pesan amenazas de muerte contundentes; o desde el otro punto de vista: al empeñarse el poder judicial en investigar los crímenes del paramilitarismo como si hubiesen sido perpetrados con todas las de la ley, esta prácticamente declarando el más típico accionar del paramilitarismo como campo ajeno al poder judicial y franqueándole todos los accesos a la impunidad.

Quien podría, con honestidad, negar los estrechos vínculos entre numerosas guarniciones militares a lo largo y ancho del país, y reconocidas hordas paramilitares?

Quien podría negar que la estructura paramilitar de Puerto Boyacá fue creación del Batallón Bárbula, apoyado férreamente por sus ascendentes líneas de mando?

Quien puede negar que el accionar criminal del Grupo URE en el Magdalena Medio, se nutrió de los armamentos y directrices de la XIV Brigada del Ejército?

Quien puede negar que los primeros grupos paramilitares del Caquetá, fueron creación del Operativo N° 12 del Ejército, mas tarde XII Brigada?

Quien puede negar que el imperio paramilitar de Carranza⁷² en los departamentos del Meta, Boyacá, Casanare, Arauca, Vichada y Guaviare, está en pie y activos gracias a su estrecha coordinación con las unidades militares de la región, como lo confiesan sus más estrechos colaboradores?

Quien puede negar el estrechísimo vínculo entre la inmensa red de bases paramilitares en San Juan Bosco de la Verde, Santa Helena del Opón, El Carmen de Chucuri, San Vicente de Chucuri, Betulia, Zapatoca, Galán, Simatoca, Yarima, Barrancabermeja (departamento de Santander)... y el Batallón Luciano D'Elhuyart, apoyado por sus líneas ascendentes de mando?

Quien puede negar el incondicional apoyo militar con que Fidel Castaño ha montado su imperio paramilitar en (el departamento) Córdoba, Urabá y Nordeste antioqueño?

Quien puede negar el vínculo entre el imperio paramilitar creado por Henry Loayza y otros miembros del Cartel de Cali en el norte del valle y las estructuras policiales de la zona y el Batallón Palacé de Buga? Acaso esto no lo han evidenciado todas las investigaciones hechas sobre las masacres de Trujillo y de Riofrio?

Quien puede negar los estrechos vínculos existentes entre la policía antinarcóticos del (departamento) Putumayo y la extensa red de paramilitares que por épocas ha sometido la región a impresionantes baños de sangre?

Pero que no se diga que son pecados del pasado. Denuncias de los últimos días demuestran que el problema, en lugar de revertirse, se está agudizando:

Estremece registrar que en la finca Riverandia de San Alberto (Cesar), propiedad de la familia de un parlamentario (N.R.), donde desde 1988 se tenía evidencia de que el Ejército entrenaba paramilitares y actuaba en unión con ellos; en donde el 4 de noviembre de 1988 fueron cruelmente torturados los jóvenes Antonio Ortega y Luis Rodríguez, siendo sacados hacia la media noche para ser crucificados y siendo asesinado el primero de ellos en el intento de fuga; donde el 7 de febrero de 1989 fuera asesinado el educador Isidro Caballero Delgado, cuyo caso fue abocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó por este crimen al Estado colombiano en diciembre de 1995, continúa aun como centro de entrenamiento y de accionar conjunto de militares y paramilitares. Allí fue introducido por militares, el 5 de septiembre de 1995, el joven John Jairo López, luego asesinado y su cuerpo arrojado a un río.

Si sitios como este, donde han sido perpetrados crímenes que han sido de conocimiento de los más altos tribunales del continente luego de pasar por todas las instancias de la «justicia» interna, continúan desafiantemente consagrados al accionar conjunto militar/paramilitar, que será posible esperar?

A pesar de la conmoción internacional que ha causado la situación de Urabá en los últimos meses y de las múltiples delegaciones nacionales e internacionales que han visitado la región, el 3 de noviembre/95 tuvieron que huir 289 familias de la zona rural de Acandi cuando un grupo de 70 paramilitares llegó a la zona y asesinó a 6 campesinos utilizando métodos de extrema sevicia.

Los paramilitares se alojaron luego en el Comando de la Policía del pueblo, y en la madrugada del 5 de noviembre muchos pobladores de Acandi pudieron observar como el Comandante de la

⁷² Victor Carranza el zar de las esmeraldas, narcotraficante y jefe de los escuadrones de la muerte de toda la región del departamento de Boyaca, del cual es oriundo; posee un ejército de escenarios armados hasta los dientes, su fortuna se estima en varios miles de millones de dolares producto en su mayor parte del tráfico de drogas. El principal amigo de este criminal en el gobierno de Uribe, es el ministro de defensa Juan Manuel Santos.

Policía acompañaba a los paramilitares hasta la playa, donde estos se embarcaron mar adentro. El comandante había convencido a la población, la noche anterior, para que se encerraran en sus casas por que la guerrilla iba a atacar al pueblo, lo que fue leído como una manera astuta de cubrir la retirada de los paramilitares. Horas después llegaba a Acandi un contingente del Ejército y con ellos un reconocido para-militar alias, «Topolin», quien hacía signos de victoria por la masacre de los 6 campesinos perpetrada el 3 de noviembre.

El 5 de octubre/95, una delegación de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, visitó la vereda Meseta de San Rafael del municipio de Barrancabermeja. Allí pudo observar «en vivo y en directo» un fuerte contingente de 80 paramilitares acantonados en una de las hacienda ganaderas del lugar. Pocos días antes habían asesinado al joven Francisco Pinto y se paseaban por la zona, reuniendo con frecuencia a la población. A escasos 10 minutos del lugar la delegación de ONG encontró a miembros del Batallón Héroes de Majagual del ejército nacional patrullando la zona. Le fue solicitada una explicación al alcalde de Barrancabermeja sobre esta situación abiertamente ilegal, pero el respondió ignorar lo que allí ocurría y pidió que se pusiera en conocimiento del Ministro de Defensa Nacional dicha situación. Luego de solicitarle repetidas veces por escrito, al ministro, una explicación, este se negó a darla. Es un hecho incontrovertible que el paramilitarismo ha avanzado durante cerca de 20 años bajo la dirección y protección de la fuerza pública; que ha copado inmensas extensiones del territorio nacional y las ha puesto bajo su control; que ha perpetrado innumerables crímenes de lesa humanidad, como retenciones torturas, desapariciones, asesinatos individuales y colectivos, genocidios, violaciones carnales, saqueos, atentados, intimidaciones y desplazamientos masivos; que han sido favorecidos por acción u omisión, por todas las instancias del poder público, que le han garantizado su absoluta impunidad y su plena libertad de acción; que su poderío ha ido en declive, sino en ascenso».

Javier Giraldo M., S. J.

Mientras en el gobierno y el presidente Uribe a la cabeza, se lanzan precipitadamente en una conversación de «paz» con los escuadrones de la muerte, en varias regiones del país comenzarían a escucharse los murmullos⁷³, que devienen abiertamente sospechas y al final hechos confirmados, sobre el fraude en las elecciones presidenciales (mayo 2002) y el favoritismo que recibió el candidato Uribe, de parte de los grupos armados de extrema derecha, el narcotráfico y por intermedio de parlamentarios vinculados con el crimen organizado y entre los que se encuentra su primo el senador Mano Uribe Escobar. Igualmente para las elecciones parlamentarias de (marzo 2002) candidatos a diputados y senado recibieron todo el apoyo del narco-paramilitarismo (apoyo económico y votos mediante la amenaza y el chantaje) en departamentos como Boyacá, Santander, Antioquia, Magdalena, Cesar, Guajira, Bolívar, Caldas y Córdoba entre otros, según revelaciones de un estudio elaborado por la Corporación Arco Iris⁷⁴ Estos señalamientos durarían varios años sin que los diferentes poderes del Estado lanzaran las investigaciones preliminares para lograr aclarar si estos rumores tenían pruebas reales o no, de lo ocurrido en los comicios electorales para elegir congreso y presidente de la república. Uno de los hechos concretos se dio en el departamento del Magdalena y que fue noticia, apareciendo en periódicos locales y que fuera retomado tímidamente por la poderosa prensa nacional: «... el sonado

⁷³ Murmullos corren en todo el territorio nacional por parte de los ciudadanos de bien, quienes no se atreven a hablar abierta y públicamente sobre los chanchullos de los políticos de sus regiones y mucho menos de sus alianzas con el narco-paramilitarismo, pues eso significaría una condena a muerte. Igualmente, cuando se les pregunta el por que no acuden a la fiscalía, la respuesta que se obtiene después de una sonrisa de desconsuelo, es que los funcionarios de este ente judicial y de policía, en su mayoría pertenecen a los 'narco-paras' y más se demora el ciudadano en denunciar, que los cabecillas criminales en entararse de quien, como, cuando y a quien está denunciando el ciudadano.

⁷⁴ [www. nuevoarcoiris.org](http://www.nuevoarcoiris.org).

fraude electoral para las elecciones de 2002 le dio notoriedad a estos pueblos de la Costa Caribe, donde este domingo únicamente salió a votar el 32 por ciento de las personas aptas para votar... en corregimientos como Los Pozos y El Barbudo, dijeron los registradores locales, que, extrañamente, voto el ciento por ciento de los votantes inscritos en las mesas... aunque jamás ha visitado estos pueblos, el candidato-presidente (Uribe) arrasó en todo el pueblo, y se llevo la mayoría de los votos...»

En la mayoría de los pueblos de la Costa, sus habitantes decían en voz baja, que los escuadrones de la muerte los habían obligado a votar por el candidato Uribe. Los que se atrevieron a desobedecer están muertos. Ante estas denuncias la Procuraduría General de la Nación prometió una investigación, que jamás se efectuó.

Con un congreso infiltrado por los grupos criminales y mafiosos del narco-paramilitarismo y un presidente de la República asociado a su turno con los dos anteriores, siendo cabeza de la poderosa mafia, el gobierno y la elite colombiana comienza una desenfrenada carrera, para llevar a cabo la legalización del narco-paramilitarismo. Pues el servicio prestado a los dueños del país, por parte de unos y otros (narcos y paras) debía recibir su gratificación y los más altos honores que el sistema capitalista democrático, brinda a sus buenos hijos. Maratónicamente, el gobierno de Uribe comienza a venderle a la población colombiana «la ley de justicia paz» mediante la cual, se puede llegar a la paz duradera y al buen entendimiento entre los colombianos, pasando por encima del sufrimiento de centenas de miles de familias y de millones de excluidos que posee el país. Por su parte los poderosos medios de comunicación, vehiculaban casi las 24 horas al día, lo bien fundado del 'dialogo' entre los grupos de extrema derecha y el gobierno, a pesar de los horribles crímenes cometidos por estos grupos, y que jamás aparecieron en las primera página de sus periódicos o en imágenes exclusivas de los noticieros de televisión. Todo era válido para convencer, hasta el mismo ocultamiento de la verdad. A nivel internacional, el ejercito diplomático del gobierno Uribe, —que deja mucho que desear— desplegado en Estados Unidos y Europa fundamentalmente, hacía enormes esfuerzos para convencer a la clase dirigente y al pueblo de estos países, sobre lo benéfico y fructífero de los acuerdos de paz con los grupos de extrema derecha, tratando de cambiar ese real escepticismo, que invade a los ciudadanos conocedores de la realidad colombiana. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos, continuaba como si nada ocurriese, no solo apoyando políticamente al gobierno de Álvaro Uribe, sino también, participando con impresionante ayuda militar y en menor grado económica para sostener la fratricida guerra interna, y que valga repetirlo una y otra vez, no concierne exactamente, la lucha contra el narcotráfico.

El ministro del interior Sabas Pretelt de la Vega, a mediados de 2003, da a conocer un proyecto de ley titulado: Exposición de motivos del proyecto de ley Justicia y Paz en el cual puede leerse en su primer enunciado que «la paz es el gran propósito nacional. La Constitución de 1991 la concibe como el objetivo central del Estado Social de Derecho. La política de seguridad democrática adelantada por el Gobierno Nacional no tiene propósito distinto que alcanzar la paz combinando con precisión el uso legítimo de la fuerza y la vía dialogada... no puede ponerse en duda que a esta ley solo podrán acogerse quienes hayan demostrado su voluntad de paz»⁷⁵. En otro de sus apartes del proyecto de 4 páginas dice: «la rama jurisdiccional del poder público queda incólume, en tanto que la evaluación de la perspectiva y conveniencias políticas para el logro de la paz, facultad indelegable asignada por la Constitución al presidente de la República, queda en sus manos». Y termina el proyecto de ley del ministro Sabas Pretelt, que sería la base de la ley de Justicia y Paz del gobierno: «a partir de la fecha de

⁷⁵ Pero el uso de la fuerza no recae sobre los paramilitares que continúan asesinando sindicalistas y líderes populares, periodistas y mujeres, líderes de organizaciones femeninas que luchan por un reconocimiento en tanto que víctimas de la violencia estatal y paramilitar, es decir no existe voluntad de paz por parte de estos grupos a pesar de su declaratoria publica de cese unilateral de hostilidades el 29 de noviembre de 2002; y de los acuerdos de Santafé de Ralito el 15 de julio de 2003, por medio del cual, se comprometen a desmovilizarse gradualmente, poniendo como fecha límite el 2005. Nada de lo anterior ha sido ejecutado

su promulgación no pueden volver a delinquir, so pena de quedar por fuera de los efectos de ésta...». Pero los asesinatos y el tráfico de drogas por parte de los narco-paramilitares siguen su horrible curso.

A pesar del acuerdo de Ralito y las garantías que el gobierno del presidente Uribe, gentilmente otorgo a los grupos de extrema derecha y en especial a sus principales cabecillas, la opinión pública nacional no veía los cambios esperados con el paso de los días, las semanas y los meses. La desconfianza de la mayoría de los colombianos se acentuaba, y la duda se apoderaba de todos aquellos que creyeron en una verdadera negociación para darle término a esas decenas de años de masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos y robo de tierras. Los organismos nacionales e internacionales en especial los defensores de derechos humanos, siempre reticentes y siempre atentos a los acontecimientos no veían un real propósito de paz entre estos grupos de extrema derecha -principalmente sus cabecillas-, quienes no estaban dispuestos a someterse a la justicia sin condicionar de ante mano, su desmovilización, dejación de las armas, renuncia al tráfico de drogas e incorporación a la vida civil; y un gobierno cada vez más blando, laxo y permisivo con sus interlocutores, que continuaban apegados a su andar criminal y al tráfico de estupefacientes.

Diferentes reportes, principalmente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Colombia, no dejan duda a la reticencia generalizada sobre las negociaciones en curso. Leamos pues, partes de estos informes de la Comisionada de las Naciones Unidas para Colombia en el 2002 y que no pierden actualidad:

«Evolución del paramilitarismo: 130. En congruencia con las observaciones reportadas por la Alta Comisionada en sus informes anteriores, el Gobierno acepta que el paramilitarismo representa 'una grave amenaza para la institucionalidad y (es) responsable de una gran parte del incremento de las violaciones a los derechos humanos'. Agrega además que es 'uno de los factores que más contribuye a la degradación de la confrontación armada' pues 'tiene como principal forma de acción la utilización del terror contra la población (...) por medio del asesinato selectivo o la masacre indiscriminada', con el propósito de 'provocar el desplazamiento masivo...' 131. Según el Gobierno, el origen del fenómeno paramilitar y la explicación de su actual grado de desarrollo se resumen en la articulación criminal de las bandas de narcotraficantes con redes de apoyo social, económico y político en muy particulares contextos locales y regionales. La Oficina ha observado y señalado además, que, históricamente, la legislación y las políticas estatales también han desempeñado un papel innegable en la actual magnitud y características del paramilitarismo. A ello debe agregarse las notorias responsabilidades individuales de servidores públicos involucrados con estos grupos en el curso de los últimos años, así como los ciclos de activo compromiso de las fuerzas militares con formulas de inclusión de civiles armados en la lucha contrainsurgente. 132. Cuando se somete a escrutinio la eficacia real de la acción estatal contra el fenómeno paramilitar, los resultados presentados por el Gobierno, contrastan con la acelerada expansión y presencia de grupos paramilitares, en, por lo menos, 409 municipios (un 40% del país). El ministerio de defensa reconoce que actualmente operan mas 8.000 paramilitares, lo cual significa un crecimiento del 81% en los últimos dos años. (...) 134. En sus continuas visitas a zonas rurales del país, la Oficina siguió recibiendo y siendo testigo de múltiples indicios sobre la existencia de actitudes omisivas, así como de vínculos estrechos y persistentes entre algunos integrantes de la fuerza pública y los grupos paramilitares.

La triste revelación de que varios de los militares destituidos este ario (véase el capítulo VII A) han pasado a engrosar las filas del paramilitarismo a los pocos días de su separación del servicio activo, es un hecho adicional de suma preocupación y motivo de seria reflexión. El alcance de las observaciones de la Oficina se puede apreciar por el contenido y oportunidad de la información suministrada al Gobierno. Por ejemplo, a la entrada de la vereda «El Placer» es notoria la existencia de un reten paramilitar apenas a quince minutos de La Hormiga (Putumayo) donde se asienta un batallón del ejército perteneciente a la Brigada XXIV. Ocho meses después de que la Oficina reportara su observación directa del mismo, el reten seguía operando. Las autoridades militares negaron por escrito que esa

posición paramilitar existiera. También la Oficina observe que en la hacienda «Villa Sandra», entre Puerto Asís y Santa Ana, del mismo departamento, los paramilitares se mantenían operando a pocos minutos de las instalaciones de la Brigada XXIV del ejército. Con posterioridad se informo de dos allanamientos realizados por la fuerza pública que, al parecer, no dieron resultados. Sin embargo la existencia y mantenimiento de dicha posición para militar es de pleno conocimiento público, tanto así que fue visitada en repetidas oportunidades por periodistas internacionales, quienes publicaron sus entrevistas con el comandante paramilitar. Testimonios recibidos por la Oficina dan cuenta, incluso, de reuniones entre miembros de la fuerza pública y paramilitares en la misma hacienda «Villa Sandra». A fines de julio, la Oficina alerto a las autoridades sobre la inminencia de una incursión paramilitar en el casco urbano de La Dorada municipio de San Miguel (Putumayo), la cual efectivamente tuvo lugar el 21 de septiembre. Los paramilitares permanecieron varias semanas en la localidad, a pesar de que esta se encuentra a pocos minutos de la base del ejército en La Hormiga.(...) 137. A todo lo anterior se añade la perturbadora holgura con la que el principal jefe paramilitar del país, Carlos Castaño Gil, ha obtenido este año una visibilidad pública ante los medios de comunicación, nacional e internacionales. Castaño, quien ha señalado que su itinerario contrainsurgente, inició participando en entrenamientos que se daban en las instalaciones del «Batallón Bomboná» (Batallón de Infantería N° 42 del ejército) en los años 80, confiesa que el 70% de la financiación de sus actividades proviene del narcotráfico y busca, al parecer, que el Gobierno considere a los paramilitares como un actor armado independiente en los procesos de negociación».

Con respecto al paquidermo andar de la justicia colombiana, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas escribía en marzo de 2002, ya elegido presidente Uribe y entablado contactos con los escuadrones de la muerte, por parte de congresistas y agentes gubernamentales, para dar comienzo a las negociaciones:

«**Administración de justicia e impunidad:** 243. La administración de justicia siguió adoleciendo de profundas debilidades y deficiencias que contribuyen a mantener los altos índices de impunidad en relación con las principales violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. 244. La Oficina ve con preocupación los cambios ocurridos a partir de la asunción del nuevo Fiscal General de la Nación⁷⁶, en cuanto a la orientación de la Fiscalía y el relevo de algunos funcionarios, entre otros, que han concitado serios temores en cuanto a las perspectivas de fortalecimiento y compromiso institucional en materia de lucha contra la impunidad. En este sentido, varios sucesos han puesto en cuestionamiento la independencia y autonomía de los fiscales en relación con investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, en particular, aquellas vinculadas a grupos paramilitares y servidores públicos. 245. Un ejemplo de la situación descrita lo constituye la investigación seguida contra el general Rito Alejo del Río por conformación y apoyo de grupos paramilitares, en la que se ordenó una detención preventiva en su contra, después de haber rendido su declaración de indagatoria.

Cabe señalar que la orden de captura librada por el fiscal a cargo del caso fue severamente cuestionada públicamente por el vicepresidente de la República y actual ministro de defensa, lo que representa una grave interferencia en la administración de justicia. El nuevo Fiscal General se mostro en desacuerdo con la medida de

⁷⁶ El nuevo Fiscal al que hace referencia la Alta Comisionada es Luis Camilo Osorio, gran amigo y como partidario político del espurio presidente Uribe. Apenas posesionado de su cargo, el nuevo Fiscal comenzó con una avalancha de despidos que recayeron sobre todo en fiscales de la oficina de derechos humanos que investigaban crímenes paramilitares con participación de políticos. También éste Fiscal ordenó archivar expedientes en curso de altos militares comprometidos en varias masacres paramilitares y fue el, quien también dio la orden de archivar el caso del hermano del presidente, Santiago Uribe, acusado de conformar escuadrones de la muerte y de asesinatos. Sus buenos servicios le fueron recompensados por el presidente Uribe, con la embajada en Italia, al cumplir su periodo de cuatro años al frente de la Fiscalía. Luego fue trasladado a la embajada de México.

aseguramiento y su actitud motive la salida del vice fiscal y del director de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía».⁷⁷

La historia del crimen organizado tiene capítulos, que en muchas ocasiones superan los mejores guiones del cine mundial. Es así, como el 28 de junio de 2004 tuvo lugar uno de esos hechos que pueden ser parte de uno de esos guiones cinematográficos, pero que a la vez hace parte de la realidad en la historia universal de la infamia, y que en nada resalta los valores del ser humano en todo su esplendor. Ese día, en la República de Colombia, en su Capital Bogotá, en el Congreso colombiano, fueron recibidos tres de los más grandes criminales que haya tenido noticia el país, o el continente americano. Tres narcoparamilitares acusados formalmente por la justicia colombiana de crímenes atroces y la justicia extranjera de narcotráfico. Entre los tres suman aproximadamente tres mil asesinatos. Pero estaban allí, ocupando un lugar preferencial, en ese recinto sagrado en el cual se deben sentar los elegidos de todo un pueblo honesto y trabajador. Estaban allí con una sonrisa fresca en sus rostros, con sus vanidades cubiertas con prendas de la más alta calidad desde la cabeza hasta los pies. Desbordaban de riqueza y brillo sus zapatos de una fina marca italiana y sus corbatas y camisas *fabriqueees en france*, sus mancornas y sus vestidos de fino y caro paño inglés, que parecía no diferenciarlos de la mayoría de 'representantes' del pueblo, y los cuales los aplaudirían desenfrenadamente al termino de sus vergonzosas peroratas. Entre los 'elegidos' habían muchos que los observaban con admiración, como se observa al icono de la dignidad, no escondían su satisfacción de ver aquellos trituradores de la humanidad, representantes de la muerte en persona, en aquel sagrado recinto depositario de la Verdad, de la Dignidad y de la Democracia que debe existir en cualquier República que se respete, en cualquier comunidad sana y progresista. Muchos, la mayoría de los «padres de la patria» estaban igual o más felices que los ignominiosos invitados a ese otro capítulo de la vergüenza nacional. En las afueras del Congreso, humildes y muy pobres familias de las víctimas de los escuadrones de la muerte, venidas con grandes sacrificios, desde diferentes puntos de la geografía nacional, se reunieron en la plaza de Bolívar, justo enfrente del Parlamento, enarbolando pancartas pidiendo justicia mientras otras familias exponían las fotos de sus seres queridos (esposos, hijos, hermanos, madres, compañeras), pidiendo su pronto retorno o simplemente pidiendo saber la verdad de donde se encontraban enterrados. A escasos metros de estos cientos de familias, (el gobierno había impedido la entrada a la Capital decenas de buses provenientes de varias regiones del país) un grupeto de aproximadamente quince hombres y varias mujeres, mostraban una gran pancarta, entre gritos histéricos e insultos contra las familias de las víctimas, en la que se podía leer «gracias AUC» (autodefensas unidas de Colombia), los energúmenos partidarios de los tres representantes del narcoparamilitarismo presentes en el Congreso por voluntad presidencial, trataron varias veces de agredir a los familiares de las víctimas, cuando estos gritaban en coro «pedimos justicia». Al final la policía cargo contra las familias de las víctimas, hubo varios heridos y decenas de detenidos. Una vez más, los que solicitaban la verdad y justicia recibían la represión del Estado como única respuesta. Se llevaban la peor parte como ya era costumbre.

Los tres representantes del crimen organizado invitados al Parlamento fueron; Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque Gaviria⁷⁸ y Ramón María Isaza Arango, quienes recibieron autorización especial del presidente Uribe y un salvoconducto para poder desplazarse hasta la ciudad de Bogotá. Los tres narcoparamilitares obtuvieron la plena ayuda y colaboración de oficiales del ejército y la policía, se les proporciono chalecos antibalas, y se les puso a su disposición vehículos y helicópteros de la fuerza pública. A su llegada a la ciudad Capital, fueron recibidos como héroes por varios parlamentarios y funcionarios del gobierno y hasta la diputada uribista, Rocío Arias se encargo de escogerles las finas

⁷⁷ Estos dos importantes funcionarios debieron abandonar el país, en calidad de exiliados, por amenazas en contra de sus vidas y la de sus familias.

⁷⁸ Pocos días después de su presentación en el Congreso de la República, fue hallado un LUJOSO jet privado perteneciente a este jefe narcoparamilitar. El avión fue encontrado en un enorme complejo para la fabricación de cocaína y de propiedad del Bloque Central Bolívar, cuyo jefe es Iván Roberto Duque Gaviria, alias «Ernesto Báez».

camisas y las corbatas que deberían lucir y los zapatos que deberían calzar para aparecer impecables. Eleonora Pineda, se encargó de abrirles el camino hacia el ultrajado santuario del pueblo. Los poderosos medios de prensa escrita, televisión y radio comentaban tal espectáculo, como si se tratase del recibimiento de eminentes personajes, —que para la extrema derecha uribista efectivamente lo eran— o como si fueran héroes nacionales. Los tres malandros leyeron sus infames discursos cargados de mentiras y solemnidad para mayor oprobio al decoro humano, las libertades civiles, la justicia y al honorable poder popular. Las sofisterías brotaban de sus conciencias a borbotones y sin dificultad alguna, complaciendo al vasto auditorio, conocedor de antemano y en su gran mayoría, de aquella barata verborrea con alusiones a la paz, a Colombia, a la reconciliación, al pueblo, a la democracia, a la comprensión, a la razón, al avance y progreso del país y de ahora en adelante con más firmeza. Sin dejarse de escuchar repetidamente, que sus luchas y sus sacrificios habían sido por la patria, por los meros intereses de la nación y contra los subvertidores del orden y la paz en esta patria del corazón, a pesar de la incompreensión de algunos. En sus dicharacheras intervenciones, en el olvido que daban aquellas cobardes y horribles masacres contra un pueblo indefenso, compuesto de niños, mujeres y hombres que abrían cometido el error de atravesarse en sus caminos; en el completo olvido quedaba la tortura propinada a seres indefensos, descuartizados vivos con motosierra o machete; niños y hombres que morían con la cabeza arrancada con fna sevicia a machetazos o con motosierra; niñas y mujeres violadas en medio del terror y la masacre de sus seres queridos; mujeres embarazadas a las cuales les era abierto su vientre en carne viva y arrancado su embrión y tirado al no o a los animales salvajes, no sin antes ser descuartizado. En el total olvido quedaba el tráfico de estupefacientes, toneladas de cocaína producida y comercializada con la cual habían logrado un enriquecimiento personal nunca soñado, y a la vez proporcionado el pago del armamento para someter a sus víctimas eliminarlas y el pago de los salarios para sus soldados de la muerte y los soldados de la patria y la financiación de los podridos neo-partidos con quienes trabajaban estrechamente. Y esto, ellos no se lo recordaron a la mayoría de parlamentarios que aplaudían ininterrumpidamente a sus apóstoles salvadores. Unos y otros estaban convencidos, casi definitivamente, que la «refundación de la patria» era un hecho.

Los apóstoles salvadores salieron del mancillado recinto, en medio de los honores que le prodigaban unos cuantos seguidores y funcionarios uribistas con gritos histéricos pero poco convincentes, los oficiales del ejército y policía encargados de la seguridad de los héroes, se esmeraron en no indisponer a los tres 'jefes', pues, el resto de víctimas y familiares de víctimas que no habían sido golpeadas y arrestadas, se encontraban a más de medio kilómetro, acompañadas de organizaciones humanitarias y sus quejas no molestarían. La poderosa prensa hablaba de la exitosa reunión, sin ahorrarse epítetos de grandilocuentes. Los colombianos y colombianas honestos se mordían la lengua.

Pese a ser una obligación dentro de las negociaciones entabladas entre gobierno y los escuadrones de la muerte, el cumplimiento y res-peto del cese al fuego no se había cumplido a cabalidad, además de los continuos ataques a la población civil, comenzaron a emerger pugnas internas y con ellas la desaparición de cabecillas del narco-paramilitarismo, que según organismos de inteligencia, se debía a arreglos de cuentas motivadas también, para silenciar inminentes confesiones que podían incomodar a los mismos cabecillas, o comprometer a altos oficiales del ejército, o altos funcionarios del gobierno.

Pero lo más inquietante ocurrió el 16 de abril de 2004 con la desaparición en circunstancias por lo demás extrañas, del máximo cabecilla del narcoparamilitarismo Carlos Castaño Gil, las primeras versiones fueron en el sentido de que había sido asesinado, pero su cadáver jamás aparecería. La poderosa prensa a nivel nacional, hablaba de una traición, un ajuste de cuentas entre capos; pero también se rumoreaba que su muerte estaba ligada a sus negociaciones secretas con el gobierno de los Estados Unidos, aprestándose a entregar valiosa información y a delatar con pelos y señales, todos los pormenores, todos los secretos que rodean el comercio de las drogas y la denuncia del conjunto de los narco-para-militares. Otra versión —menos creíble— que la prensa privilegio y que sostiene férreamente, es la de que el criminal fue asesinado por su hermano Vicente Castaño. Carlos Castaño, había sorprendentemente renunciado a seguir siendo cabeza del grupo narco-paramilitar y había declarado

su desacuerdo con la infiltración de capos puros y duros del narcotráfico, en las negociaciones entre el gobierno de Uribe y sus grupos de extrema derecha. Pero a pesar de sus afirmaciones, el mismo, era un narcotraficante y se había servido de los dineros del narcotráfico para su susodicha guerra contrainsurgente y pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Poco después de su renuncia en tanto que máximo cabecilla de los escuadrones de la muerte, el sicópata Castaño, pasaría a la clandestinidad total. Es decir, que ni sus propios compinches de armas y franco de cocaína, incluido su hermano Vicente, no conocían su paradero. De primera mano, las autoridades judiciales y de policía recibieron el testimonio de un hombre, el cual, habría salido herido en la emboscada tendida a Castaño, y que era, según su propia declaración, uno de sus guardaespaldas. El hombre conto que un grupo de aproximadamente quince paramilitares los habían atacado, matando a todos los hombres de mano de Castaño y luego le habían pedido al cabecilla que se entregara, pues este se escondió en su pequeña cabaña, detrás de un pequeño refrigerador con su pistola en la mano. El paramilitar también conto, que su patrón había sido herido en un brazo y luego de ser apresado por sus atacantes, fue arrastrado hacia un helicóptero que acababa de llegar, y en el cual fue evacuado. La poderosa prensa nacional, daba alaridos de dolor y repudio por tan vil acto y se preguntaba, quien o quienes serian los autores de tan repudiable crimen (! ?). Quedaba como huérfana la institución mafiosa. Lo cierto de todo este asunto, es que las investigaciones no han arrojado la verdad de lo que realmente ocurrió. Es más, hay fuertes sospechas que el criminal narco-paramilitar está vivo. Se ha dicho que viajó a Israel y también que ha sido visto en Canadá. Su esposa fue recibida por los Estados Unidos en calidad de asilada política, sobre la base de una petición hecha por Castaño meses antes de 'morir', lo cual deja viva la tesis que el cabecilla de la organización criminal, si pudo haber llegado a acuerdos con el gobierno norteamericano. De ser cierto, jamás pagara sus cientos y cientos de horribles crímenes.

El 23 de agosto de 2006 la prensa nacional confirmaba y la revista Semana en su versión digital tituló:

«Confirmado Carlos Castaño Está Muerto: Semana.com estableció que los seis hombres que participaron en el homicidio confesaron que habían asesinado a Castaño y a cinco de sus escoltas por orden de 'Jorge 40', Salvatore Mancuso y Vicente Castaño. Tras años de incertidumbre las autoridades confirma-ron que el ex líder paramilitar,... fue salvajemente asesinado en la finca Rancho al hombro en la vía San Pedro de Urabá Arboletes (Antioquia... La muerte de Castaño asesinado en abril de 2004, ocurrió en una trampa tendida por alias 'mono-leche', jefe de seguridad de Vicente Castaño. (...) Castaño llego a una casa donde se disponía a conectarse a internet y a comunicarse a través de un teléfono satelital. Los atacantes que eran un grupo de 20 se acercaron con sigilo... Tras la balacera inicial Castaño quedo herido en su brazo izquierdo. Entonces se atrincheró detrás de un refrigerador y empuñó su arma una pistola Glock 9 mm. Cuando Castaño se dio cuenta que sus verdugos eran paramilitares empezó a gritarles para que le respondieran quien estaba al frente del operativo. Dos hombres se abalanzaron sobre él y lo tomaron por el cuello... y lo tiraron fuera. Entonces 'Monoleche' se acercó y le dijo que él era el encargado, desenfundó la pistola y le descargó en el cuerpo y en el rostro las 15 balas que contenía el proveedor ... El pasado primero de julio fragmentos de los restos óseos de alias 'Richard', jefe de seguridad de Castaño... fueron exhumados.

En la escena se comprobó que los cuerpos fueron picados a machete y luego incinerados para dificultar su identificación»...

Estas y otras historietas han circulado en la mayor parte de la prensa nacional, todas con versiones diferentes y llenas de rumores que en lugar de aclarar la muerte del cabecilla criminal lo que hacen es desviar lo que realmente sucedió. Sin embargo titulares de prensa daban a finales de 2006 que el cuerpo del narco-paramilitar había sido hallado en una fosa y que expertos forenses habían logrado comprobar que los restos hallados eran los del paramilitar con mirada de sicópata. Lo cierto es que subsisten rumores que este monstruo está vivo. Nada es claro sobre este hecho, otro más de la sanguinaria e interminable mafia colombiana.

Otros asesinatos de cabecillas narco-paramilitares se han dado, abatidos por sus propios cómplices en los eternos ajustes de cuentas mafiosas, en medio de las negociaciones de paz que el gobierno asegura van por buen camino. Miguel Arroyabe y alias 'Doble Cero', entre otros cabecillas de altos y medios mandos de estos grupos de extrema derecha, fueron asesinados en extrañas circunstancias, lo mismo que el asesinato de tres políticos del departamento del Meta a manos de narcotraficantes a mediados del año 2004 y que pusieron en series aprietos al gobierno de Uribe. Pero los escándalos no apuntaban solamente a los ajustes de cuentas, también apareció, el fenómeno de la infiltración de reconocidos capos del narcotráfico en las huestes paramilitares, y quienes se habían colado, comprando franquicias a los cabecillas de estos grupos de extrema derecha, para poder entrar con pie derecho en la negociación con el gobierno, y así poder escapar a la extradición y a la vez poder gozar de los beneficios de la ley de justicia y paz que, benévolamente, ofreció el gobierno de Uribe. Fue así, como capos de la talla de los hermanos Víctor y Miguel Mejía Munera, apodados los 'Mellizos', Remberto Alvarez, Juan Bolívar, Edgar Fierro, Carlos García, Luis Gómez, Diego Fernando Murillo entre otros muchos, aparecieron de la noche a la mañana como cabecillas de frentes paramilitares e incluidos en la lista de negociadores con el gobierno y avalada plena y ciegamente por el Comisionado de Paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo. Los capos de la mafia, habrían pagado varias decenas o centenas de millones de dólares a cabecillas de los grupos paramilitares como Vicente Castaño, Ramón Isaza, Salvatore Mancuso, 'Jorge 40', Jorge Laverde, Héctor Buitrago, entre otros. Sobre esta increíble e inadmisibles situación el presidente Álvaro Uribe, ha guardado un absoluto silencio. Él, el presidente que todo lo sabe, todo lo ordena y todo lo hace cumplir; él, el presidente que habla de seguridad democrática, el que habla de ética y una lucha frontal contra la corrupción; él, el presidente que está al tanto de las negociaciones de justicia y paz, no se da cuenta o no quiere darse cuenta que, entre los negociadores y miembros de los grupos armados de extrema derecha, con los cuales se había empeñado en negociar una paz duradera, comenzaban a aparecer puros y duros narcotraficantes, que no tenían nada que ver en la negociación entabladas en un principio. Y aunque la opinión pública dudaba aun mas, sobre la transparencia de estas negociaciones, el gobierno y la poderosa prensa, le seguían apostando a la negociación tratando de ocultar o desdramatizar tan embarazosa situación. Aun cuando para esta última, le era difícil seguir ocultando los reales hechos, debido a la avalancha de descontento y la solida información que entregaban las organizaciones humanitarias y de derechos humanos nacionales e internacionales, y las cuales presionaban por una transparencia total en dichas negociaciones. Hasta el punto mismo, que la OEA (Organización de Estados Americanos), representada por el argentino Sergio Caramagna, fue acusada por las Organizaciones No Gubernamentales, de ser blanda y permisiva a la hora de conceptuar sobre la verdad de la composición, el numero y el origen de los miembros de los escuadrones de la muerte, dentro de las negociaciones de paz con el gobierno de Álvaro Uribe. Ante tal señalamiento, la principal y débil defensa expuesta por el representante de la OEA señor Caramagna, fue los escasos recursos que disponía su oficina en Bogotá, para hacer un ajustado control y un seguimiento coherente de desmovilización y desarme a los grupos paramilitares, anunciando, a la vez, que todo iba por buen camino a pesar de los tropiezos. (!?)

Por su parte, los poderosos medios de comunicación no podían seguir tapando el sol con las manos y optaron por entregar a la opinión pública nacional, el secreto a mil voces de que la negociación del gobierno de Uribe, no era ya solo con narco-paramilitares, sino también, con reconocidos narcotraficantes. El 25 de septiembre de 2006 la prensa nacional publicaba en un solo título: «Las Filtraciones», dando cuenta como la mafia se estaba adueñando del paramilitarismo en Colombia. También informaba la poderosa prensa, como los narco-paramilitares (seguían) se estaban apoderando de los recursos públicos, especialmente los de la salud.

De otra parte habitantes de pueblos y regiones donde los cabecillas de los escuadrones de la muerte son dueños y señores, estaban escandalizados, viendo como varios de estos narco-paramilitares vivían a sus anchas y en el confort y la abundancia más extrema y descarada a pesar de su condición de reos, yendo de un lugar a otro como si fueran grandes personajes del Jet-Set. La poderosa prensa de Bogotá

y también los medios alternativos como Indymedia y otros registraron este hecho de la siguiente manera en septiembre de 2006:

«Así es la vida de tres poderosos ex Jefes 'paras': disfrutando de libertad y sus fortunas:

Mientras la Ley de Justicia y Paz, bajo la cual deben ser juzgados por crímenes atroces, despega, Mancuso va de 'Shopping' al centro comercial el Tesoro de Medellín. Otro ex jefe 'Jorge 40' (Rodrigo Tovar Pupo), prefiere la noche para visitar a sus amigos en Valledupar, mientras que 'Macaco' escogió a Cauca para vivir a sus anchas.

Mancuso vive como una figura del Jet Set. Cuando un convoy de camionetas 4x4 blindadas van a toda velocidad por las calles de Montería, se sabe que Salvatore Mancuso anda por la ciudad. De los carros baja en tropel 20 escoltas armados con fusiles y pistolas, y sin distintivos que son su sombra hace casi 2 años: cuatro de ellos pertenecen al DAS (Servicios Secretos) y cuatro otros a la Policía y los 12 restantes son paramilitares desmovilizados, algunos pagados por él. Como si fuera un ministro, el tráfico se paraliza y es tal el alboroto que se arma, que gente del común han manifestado su molestia por la parafernalia que rodea sus desplazamientos a reuniones clubes y restaurantes...

Su rutina es comparable con la de un funcionario de alto nivel —comenta una autoridad de Córdoba—. Converge en reuniones con el Gobernador, los diputados, los concejales y uno que otro senador. Y añade que nadie se puede 'pavonear' en costosas camionetas cuando tiene más de 50 procesos en Bogotá, Montería, Medellín, Bucaramanga, Valledupar, Yopal y Cartagena por terrorismo y masacres, desapariciones, tráfico de drogas, toma de rehenes y hurto.(...) 'Si hablan mal de él, es por envidia —dice el asesor del ex comandante—. El si es de familia adinerada, carga su pasaporte de la Comunidad Europea, y si sale a la calle es a saludar a sus amigos, los empresarios David Bianchi, Jaime Maroso y Pedro Ojeda'. Y otro de sus ex combatientes añade 'cuál es el problema? 'Macaco anda con 35 escoltas y los desmovilizados de la 'Oficina de Envigado'⁷⁹ se la pasan rumbeando en una discoteca en Medellín... poseen 8 camionetas 4x4 iguales a las de Mancuso... Tienen hasta el mismo dentista en Bogotá. (...) Autoridades dicen no entender de dónde saca tanto dinero Mancuso... en una indagatoria dijo que su fortuna la perdió en la guerra... 'Jorge 40' busca la noche para pasar inadvertido, como los gatos y contrariamente a otros ex jefes 'paras' espera la noche para salir a visitar a sus mas cercanos amigos... Pasa los días en sus fincas del corregimiento de la Mesa, en la Sierra Nevada de Santa Marta, —algo más de cien indígenas Kankuamos están entre sus víctimas— y de San Ángel en (departamento) Magdalena (...) de vez en cuando manda a llevar conjuntos musicales a sus fincas... 'Macaco' el señor de Cauca: Por estos días Carlos Mario Jiménez, atiende la visita de unos mexicanos en su finca de la vereda Piamonte de Cauca (Antioquia)... visito el barrio de su juventud, Santa Teresita (departamento de Risaralda), repartió dinero a conocidos y le pago 50 mil pesos al peluquero por el arreglo de su barba... Su esquema de seguridad con 20 hombres y al menos tres vehículos no pasa desapercibido... Mantiene su relación con Risaralda a través de su hermano Roberto, ex presidente del Concejo de Dosquebradas y seguro aspirante a la Alcaldía de ese Municipio para el próximo periodo. Allegados cuentan que tiene grandes inversiones en propiedad raíz, transporte, gasolina y que más recientemente a invertido en cultivos de cebolla. Todo, a través de terceros. En el bajo mundo se da como un hecho que su gente, agrupada en bandas como «La Cordillera», maneja el negocio de la droga en las

⁷⁹ La oficina de Envigado, cerca de Medellín, es un complejo de casas de cambio de dinero, que han servido para lavar el dinero producto del narcotráfico. Los miembros de esta 'Oficina' son gente bastante temida y están acusados de terribles masacres y asesinatos selectivos y narcotráfico.

'ollas' del centro de Pereira (capital del departamento de Risaralda). En la zona también es un secreto a voces su pasión por el fútbol. Dicen que tiene intereses en varios equipos del Eje Cafetero y del bajo Cauca antioqueño y que hasta regaña a los jugadores cuando no hay buenos resultados. Sus preferidas son tres discotecas de la zona rosa en las que, según una fuente de esa población antioqueña, 'lo reciben como si fuera el alcalde'».

Pero no solo los jefes narcoparamilitares continúan viviendo como si nada, absolutamente nada hubiese pasado, contra una población civil completamente desprotegida por el Estado, en esa guerra sucia que lleva algo más de cinco décadas. Su poder político y económico pareciera ser inacabable, y con la más absoluta impunidad continúan manejando el mundo de la criminalidad, para así, con la complicidad de políticos corruptos, seguir haciendo presencia en muchas zonas del país y tomando decisiones que mismo, honestos representantes del pueblo, quienes actúan pegados al derecho y a la ley, no podrían llevar a cabo con tanta facilidad. Es el caso de unos de los más poderosos narcotraficantes devenido (con el pago de una enorme suma de narco-dólares) cabecilla paramilitar, lo cual, le abrió las puertas para ser incluido en las negociaciones entre el gobierno de Uribe y los escuadrones de la muerte y a la par con esta, evitar su extradición hacia los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Las organizaciones humanitarias y la prensa nacional, como la revista Cambio en su edición digital y reproducido por medios alternativos entre ellos Indymedia el 18 de enero del 2007, cuenta la manera como este criminal narcotraficante llamado Diego Murillo alias 'don Berna' gerencia su poder a distancia:

«Documentos del jefe paramilitar Diego Murillo revelan como maneja desde Ralito grupos políticos y negocios oscuros, y como lo mantienen al tanto de crímenes de las AUC. Apenas despuntaban los primeros rayos del sol sobre Santafé de Ralito, Córdoba, cuando el Jefe paramilitar 'don Berna' llamo de urgencia a la casa de cuatro de sus principales guardaespaldas... preocupado y aun a medio vestir, les conto que un fiscal de Montería había ordenado su captura por la muerte del diputado Orlando Benítez y otras dos víctimas y que estaba en marcha una operación de la fiscalía, la policía y el ejército para capturarlo.

Como para ese momento no gozaba de la condición de negociador de las AUC en el proceso con el gobierno y que Estados Unidos lo había solicitado en extradición por narcotráfico, tomo la decisión de huir (...) La huída de Murillo puso en peligro la negociación de las AUC, y por eso su estado mayor envió mensajes diciendo que la fuga de 'don Berna' no afectaba su intención de desmovilizarse. Finalmente, la tormenta que amenazaba con romper el proceso quedo conjurada, cuando Ernesto Báez, vocero político de la organización, propuso una salida para el impasse. Como resultado, 'don Berna' fue recluido en una finca cerca de Ralito donde hoy permanece a ordenes de la fiscalía. (...) Debido a su apresurado regreso a Ralito, 'don Berna' dejo en Bonito Viento (sitio donde estuvo escondido) una carpeta con su archivo personal —cartas, mensajes cifrados y decenas de correos electrónicos— que no deja duda de que, como antiguo socio de Pablo Escobar, es una especie de gran padrino de las AUC. (Escuadrones de la muerte). Cambio tuvo acceso a los archivos que revelan como 'don Berna' maneja desde Ralito grupos políticos y estudiantiles, y como lo mantienen al tanto de crímenes cometidos por sus lugartenientes. En otras palabras, el archivo del líder paramilitar lo muestra como un hombre poderoso al que todo le consultan y quien está al tanto de todo: desde una donación para la compra de balones para una escuela, hasta las amenazas contra un alcalde. La revisión de los documentos no deja duda de que, desde Ralito 'don Berna' ejerce influencia militar y política y que sus tentáculos llegan hasta municipios como Heliconia y San Carlos en el centro y occidente de Antioquia.

Por ejemplo el pasado 21 de febrero del 2005, Luis Alberto Jaramillo, quien se identifica como amigo personal de 'don Berna', le informa en el correo electrónico, los resultados de la votación para la Alcaldía y Concejo de San Carlos, realizada un día antes: «Muchos saludos del doctor Nicolás Guzmán García nuevo alcalde popular de San Carlos, y de los ocho concejales que apoyaron esta causa —dice el mensaje—. De parte de los concejales le enviamos muchos

agradecimientos por su apoyo y esperamos volvernos a encontrar nuevamente». Tres meses más tarde un hombre que se identifica como Fredy, envía desde el computador de la Casa de la Cultura de Heliconia un mensaje al correo electrónico de 'don Berna' en el que agradece su colaboración en los comicios llevados a cabo en ese municipio el 8 de mayo de 2005, y deja entrever que el candidato a quien el jefe paramilitar apoyaba logro hacerse al primer cargo municipal. «Don Adolfo⁸⁰, espero se encuentre bien —dice el correo—. Nosotros en Heliconia estamos muy contentos porque ya tenemos nuevo alcalde, nuestro alcalde. Le agradecemos su colaboración y la de la familia».

Representantes políticos de esta corriente ganaron las alcaldías de los municipios de Tarazona, Cáceres, Heliconia, Cauca y San Carlos. Una de las líderes de Colombia Viva, es la diputada Rocío Arias, con excelentes relaciones con los jefes paramilitares y una de las más cercanas y consentidas del presidente Uribe. La congresista fue interrogada por varios medios nacionales, sobre las comprometedoras relaciones entre políticos de su grupo y narco-paramilitares del departamento de Antioquia, a lo cual manifestó, que ese escenario no era posible, reconociendo sin embargo, que los elegidos a las alcaldías de los municipios antes citados, si pertenecían a su grupo político. Pero en cambio declaró: «No creo que los paramilitares, y en especial 'don Berna' tengan injerencia en la vida política de esos municipios del país, eso lo puedo asegurar. Esas cartas y correos electrónicos deben ser falsos». Además de los municipios señalados, el tal 'don Berna' controla las comunas de Medellín (en donde se hace llamar 'Adolfo Paz') y a las cuales, destina una gran cantidad de dinero, para mantenerlas bajo su influencia. En el 2002 meses después de haberse posesionado como presidente, Uribe ordeno al ejército conjuntamente con la policía limpiar las comunas de Medellín, de la subversión. Las fuerzas armadas no solo lograron desalojar a las milicias de las PARC y el ELN de aquella zona, sino que también dejo instalado grupos narco-paramilitares. El asesinato de civiles mujeres y niños fue horrible. La fuerza pública ametrallo sin discriminación y los paramilitares asesinaban ante la mirada complaciente del ejército y la policía. El Estado fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El principal escuadrón de la muerte al que le dieron total ingreso fue el llamado 'Cacique Nutibara' al mando de 'don Berna', quien destine una especie de prima para sus hombres, logrando el reclutamiento de otros jóvenes de la comuna motivados por el pago. Tiempo después las autoridades judiciales lograron interceptar documentos que dan cuenta sobre la nomina de un determinado número de personas, que fue enviada por una tal 'Paloma', a finales de diciembre del 2004 a su jefe 'Adolfo Paz'. En la nomina relaciona a trabajadores en la comuna nororiental de Medellín y que pertenecen a la 'Corporación Democracia'. 'Paloma', dice en su misiva, al cabecilla narcoparamilitar, que esas personas están recibiendo nomina y apoyo económico⁸¹ con los 30 millones, solicitándole además, un incremento para poder contratar «líderes políticos» en esa misma comuna.

A pesar de las fundadas críticas y el inmenso desorden que han acompañado las «negociaciones de paz» entre el gobierno y los narco-paramilitares, ninguno de los dos quiere escuchar la palabra fracaso y mucho menos, que se llegue a un callejón sin salida, a un fatídico final. Del momento que ambos tienen importantes secretos que guardar y grandes intereses que conservar.

Las bien fundadas críticas, señalan a un gobierno bastante permisivo, titubeante y débil, frente a una organización criminal arrogante, que juega en la mesa como si tuviera todos los ases en su poder. Se

⁸⁰ Diego Fernando Murillo tiene el alias de 'Don Berna', dentro del narcotráfico, pero también se hace llamar 'Adolfo Paz', como nuevo miembro de los grupos narco-paramilitares que negocian acuerdos de paz con el gobierno de Uribe. Investigaciones periodísticas y judiciales coincidieron en señalar que en varias regiones hay presencia constante de escuadrones de la muerte, y que estos grupos controlan y manipulan la vida política y económica de estos departamentos y municipios, y sus alcaldes pertenecen a los partido político Colombia Democrática fundado por Álvaro Uribe y su primo el senador Mario Uribe Escobar, Colombia Viva, Cambio Radical entre otros partidos que existen y que han apoyado sin condicionamiento el uribismo.

⁸¹ Generalmente el apoyo económico es destinado para trabajos de terrorismo o asesinatos selectivos de líderes populares, sindicalistas o personas que estorban el buen desarrollo del trabajo político-militar de los escuadrones de la muerte.

levanta de la mesa cuando quiere, cambia sus cartas como quiere, dirige a sus compinches hacia puntos estratégicos para que le soplen el juego de su adversario, amenaza con retirarse poniendo su revólver encima de la mesa, mientras sus compinches acarician al suyo, apostados detrás de su adversario. Mientras que este (gobierno), se contenta con apostar por lo bajo cuando sabe que va a ganar y arriesgar por lo alto, casi todo lo que posee, cuando sabe de antemano que puede perder. Pareciera un juego de yo con yo, en el que tu ganas y yo también. Pareciera un juego con las reglas amarradas a la conveniencia de uno y otro de los jugadores y no al de la ley del juego de una real negociación, en la que está en juego el futuro de la nación.

Desde luego y esto no es muy comprensible, la organización criminal ha jugado con sus ases, por que los tiene, y los tiene por que los gana con la complicidad del estamento y es por eso, que sus intereses son similares a los del gobierno con el cual negocia. Pero con la ventaja de tirarse el juego si su adversario se pone duro, pues no tiene tanto que perder, como si su adversario. Es por ello mismo, que no es nada fortuito, si los principales cabecillas de estos grupos narco-paramilitares, llevan la batuta en las negociaciones reculando en momentos y aspectos que les son desfavorables y apurando el paso cuando se trata de su más absoluta conveniencia.

La 'desmovilización' de ciertos grupos narco-paramilitares, comenzaría a mediados del 2004 y con una impermeabilidad extrema. En la que se pueda sospechar, la deshonestidad en su entrega tanto de hombres como de armamento. Antes de las primeras conversaciones se había hablado de aproximadamente ocho mil hombres en armas (mujeres combatientes son muy pocas). Pero a medida que la negociación avanzaba y el tiempo transcurría, el número de combatientes aumentaba, sin explicación alguna o sin que haya una lógica, en dicho aumento. Y ninguna explicación por parte del negociador del gobierno y mucho menos del presidente Uribe. Un año después de la primeras conversaciones, se daba como cifra única 12 mil combatientes; dos años más tarde la cifra subía a 18 mil, tres años después a 25 mil, para terminar el año 2006 con 33 mil combatientes 'desmovilizados' y pertenecientes todos a los grupos narco-paramilitares. De donde salió esa cantidad? ¿Quién los conto, o determinó semejante cifra? El por qué tal aumento paulatino en su número? Misterio! Los soldados de la guerra sucia, habían crecido como la espuma y nadie era capaz de dar una explicación convincente.

Peor aún, el numero de cabecillas aumento también, pero ya en este caso, la misma poderosa prensa nacional, sin otra alternativa y separándose momentáneamente de la propaganda progubernamental, había denunciado la filtración de capos del narcotráfico, quienes habían comprado esos puestos de mando a los grupos criminales de extrema derecha, por varios cientos de millones de narco dólares, asegurándose beneficios que jamás obtendrán en tanto que capos del narcotráfico. Sobre este delicado aspecto, el gobierno nacional y el presidente Uribe a la cabeza, siguen mostrando una posición más que ambigua, por no decir, un desentendimiento impresionante.

Y el problema iría mas lejos, por cuanto la entrega del armamento no corresponde al número de combatientes que susodichamente se habían entregado. Por ejemplo: mientras un grupo de 250 combatientes se desmovilizaba, su entrega de armas no pasaba de la mitad de hombres y en muchas ocasiones no llegaba a la cuarta parte (250 combatientes por 105 armas entregadas); y por si acaso, el numero de armas se acercaba al número de combatientes, estas eran de mediados del siglo pasado y la mayor parte inservibles o fuera de complete uso. El gobierno y su directo negociador, el Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, no le daban ninguna importancia a tan escandaloso y grave suceso, tratando siempre de minimizar tal incoherencia. Pese a los problemas inimaginables derivados de este proceso tachado de incongruencias y manipulaciones, la 'desmovilización' de varios de estos grupos criminales se efectuó en varias regiones del norte del país, principalmente en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Norte de Santander, dichos grupos denominados: 'Cacique Nutibara', 'Bloque Bananero', 'Bloque Calima', 'Bloque Catatumbo' y 'Bloque Córdoba' entre otros, 'deponían las armas y se desmovilizaban'. Pero el problema de la violencia continuaba en las zonas donde habían hecho presencia estos grupos, pues la población continuaba denunciando amenazas, extorsiones y asesinatos

por parte de un gran número de estos mismos 'desmovilizados', quienes según datos oficiales, siguen bajo las ordenes de los jefes que negocian en Santafé de Ralito, con el gobierno de Álvaro Uribe. Estos acontecimientos apuntaban hacia un completo engaño a la sociedad por parte de los narco-paramilitares en su real compromiso con la Paz, de acuerdo a su compromiso de Verdad, Desmovilización, Justicia y Reparación a las víctimas; engaño corroborado años más tarde, mientras el gobierno relucía por su laxa conveniencia para exigir nitidez, pues comprobado sería más adelante, la complicidad de altos funcionarios del gobierno con el narcoparamilitarismo.

La pregunta ha sido y sigue siendo, con quien está negociando el comisionado de paz del presidente Álvaro Uribe, si frente a él, en la mesa de negociaciones, no solo están los narco-paramilitares representados por sus jefes, sino también aparecen orondos, los principales capos del narcotráfico, quienes compraron la franquicia paramilitar para evitar la extradición. Con que fin se siguen adelantando dichas negociaciones, si se ha probado y comprobado, que están viciadas, es decir, que poco después de comenzadas las negociaciones con el narco-paramilitarismo, las puertas han estado abiertas de par en par a toda clase de violaciones e improperios. (Que busca realmente el gobierno de Uribe?; ¿Porque después de la desmovilización de varios frentes narco-paramilitares, las amenazas contra la población civil, los asesinatos, las violaciones de toda índole y el tráfico de drogas continúa y está al orden del día? (Por que el gobierno nacional y su comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, siguen encerrados en un incomprensible mutismo a pesar de la intensa polémica generada por las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional sobre estas anomalías? Lo cierto es que ni el gobierno, ni el comisionado de paz, y los narcoparamilitares menos todavía, desean que todos los colombianos sepamos de que están hablando y a que pactos —secretos— hicieron. Mientras tanto, la guerra sucia continúa en la más completa impunidad.

La única respuesta gubernamental que se ha escuchado y de la cual la poderosa prensa ha hecho gran eco, concierne a unas negociaciones sobre ruedas y que ciertos sectores enemigos de la paz, quieren torpedear, y estos sectores enemigos de la paz, según Uribe, son amigos de los terroristas (guerrilla).

El 22 de julio del 2005 siendo las 11 y 15 de la mañana (16:15 UTC), el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, estampaba su firma en el polémico texto de la ley de «justicia y paz», que pretende darle marco jurídico al proceso de paz que adelanta su gobierno con los escuadrones de la muerte o narcoparamilitares. Dicha ley aprobada por el parlamento colombiano, (narco-para-políticos) ha recibido toda suerte de críticas por parte de las Organizaciones de Víctimas y de Derechos Humanos nacionales e internacionales. No obstante, el gobierno nacional emplea enormes esfuerzos en su batalla diplomática para convencer a la Comunidad Internacional, de lo bien fundado de su «Seguridad Democrática» y del proceso de paz con los narco-para-militares. Pero sin nombrar los puntos más polémicos de ese proceso de paz y causa de una de las mas grandes preocupaciones del pueblo colombiano, a saber:

- A) Estatuto político para los narco-paramilitares, lo cual los sal-varia de la extradición y les abriría las puertas para ingresar a la vida política nacional.
- B) Penas de prisión entre 5 y 8 años solamente, para autores de masacres, asesinatos selectivos, robos y secuestros en cadena. Crímenes cometidos perteneciendo al grupo narco-paramilitar, previa confesión, además de una entera colaboración con la justicia.
- C) Enormes ventajas para cumplir la pena en lugares diferentes a la cárcel, por ejemplo Granjas Agrícolas.
- D) Los miembros de estos grupos criminales que se acojan a la ley de justicia y paz, deberán indemnizar a sus víctimas. Algo extremadamente difícil sin la extinción de los dominios y fortunas mal habidas.

Para los juristas nacionales comprometidos con la verdad, para las diferentes organizaciones políticas, sociales, populares y la opinión pública en general sedientos de una Paz duradera; la ley de «justicia y

paz» del gobierno de Uribe, no es más que los primeros pasos hacia una impunidad generalizada de los crímenes cometidos por los escuadrones de la muerte, una legalización del narco-paramilitarismo y un dique para contener la dolorosa verdad que se le debe contar al pueblo, sobre las inadmisibles fechorías cometidas por el narco-paramilitarismo y sus cómplices narco-para-políticos, fuerzas armadas y de policía y otros agentes y funcionarios del Estado. De igual manera las organizaciones internacionales de derechos humanos han rechazado de plano dicha ley y ciertos gobiernos (Americanos y europeos) han tímidamente expresado su reserva. No es saludable en realidad, ver como esta ley de «justicia y paz», viola el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; viola el principio Constitucional de juez natural preconstituido; y viola el principio Constitucional de debido proceso de la víctima de ser reparada.

No había pasado ni dos meses de la aprobación de la ley de 'justicia y paz' y ya se habían interpuesto varias demandas ante la Corte Constitucional, por la inconstitucional de esta ley. El Director de la Corporación Colombia Viva, escribía en Red Voltaire. org, lo siguiente:

«En las diversas presentaciones de la ley de justicia y paz (ley 975 de 2005), el gobierno el Fiscal General de la Nación y algunos amigos declarados de la misma, como los congresistas Eleonora Pineda, Armando Benedetti y Rocío Arias, han insistido en la constitucionalidad de la misma, en su universalidad y en su valor para satisfacer los principios de verdad, justicia y reparación y en consecuencia en proveer a la sociedad la garantía de no repetición (...) plantearemos brevemente las principales razones por las que esta ley no contribuye a satisfacer efectivamente los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, muy particularmente a la verdad, y como ello y los vicios cometidos en el trámite de la ley en el Congreso de la República, ha dado lugar a varias demandas (...).

Cómo interpretar el apuro del presidente Álvaro Uribe y su gobierno, de dialogar con los escuadrones de la muerte para lograr a toda costa una 'paz'? ¿Cómo o de qué manera aceptar la impunidad y el olvido de horrendos crímenes del narco-paramilitarismo, cuándo el gobierno les ofrece todas las garantías judiciales y políticas? ¿Qué diálogo puede entablarse con criminales culpables de horribles crímenes, si de antemano no hay, por encima de todo orden moral o compromiso político, una segundad del pago de sus crímenes en una justa proporción a sus inhumanos actos? ¿Por qué tanta (empecinada) generosidad del presidente Uribe y su gobierno, hacia estos grupos?

¿Es qué nosotros en tanto que Seres Humanos, apegados al respeto de la vida ajena, respetuosos de la integridad, honorabilidad, derecho humano e inviolabilidad de la persona, estamos dispuestos a tolerar que varios miles de estos monstruos, tengan como castigo de 5 a 8 años de prisión? ¿Es ese el castigo ejemplar, por violar niñas y mujeres, descuartizar cuerpos de inocentes campesinos, cortar cabezas indiscriminadamente con motosierras o machetes y muchas veces jugar fútbol con estas mismas cabezas al son de la música, el aguardiente y del 'pito' de marihuana? Sería ignominioso de nuestra parte, ignorar este cuadro desgarrador, vivido por millones de humildes gentes colombianas!

Desde el mismo inicio de las conversaciones el gobierno ha querido presentar a los escuadrones de la muerte, con un ropaje diferente al que realmente poseen. En una de sus alocuciones el propio presidente manifestó: «No hay que seguir llamándolos delincuentes, porque esto no le hace ningún bien a los acuerdos de paz». Pero esas negociaciones de paz son letra muerta; ya que en la práctica los escuadrones de la muerte siguen persiguiendo, torturando, asesinando y desplazando familias enteras de campesinas de sus regiones de origen, robando sus tierras, continúan con el tráfico de estupefacientes; lo mismo que atemorizando y asesinando sindicalistas, periodistas, profesores universitarios, líderes sociales y de derechos humanos, sin que el gobierno tome cartas en el asunto. Los poderosos medios de comunicación, en su lógica propagandística, evitan remarcar las inacabables matanzas y prefieren continuar favoreciendo «los diálogos de paz», que el pueblo colombiano rebautizó sabiamente como «conversaciones de yo con yo».

Mientras tanto la política de «seguridad democrática» del presidente Uribe, marcha a todo vapor y en forma peligrosa. El pie de fuerza policial fue reforzado en un 30% y el número de soldados aumentó casi en la misma cantidad. El presupuesto para la guerra se quintuplicó. La flamante lucha contra el terrorismo se apodero de todo el país y un grito de guerra a muerte contra la guerrilla izquierdista, retumba a toda hora, en todos los batallones y comisarías a lo largo y ancho del territorio nacional. Y en los cuarteles los soldados cantan a todo pulmón, el himno a la guerra en sus entrenamientos mañaneros, a la hora del almuerzo y en el ocaso de la tarde como autómatas, las siguientes himnicas estrofas: «tenemos sed de sangre!!!, de sangre de guerrilla!!! Todo guerrillero bueno es el que está muerto... tenemos sed de sangre!!!». Al mismo tiempo, Uribe cerró con doble llave, toda posibilidad de dialogo con la insurgencia y ordenó a la prensa no hablar de los insurgentes y de señalarlos únicamente como terroristas. La poderosa prensa⁸², representada en el gobierno por Francisco Santos, el Vicepresidente y su primo hermano Juan Manuel Santos, en el Ministerio de Defensa, obedeció!

Todo su plantel diplomático fue despachado a Estados Unidos y Europa con el único fin de conseguir que a nivel internacional, los guerrilleros de las diferentes organizaciones insurgentes fueran decretados o pasaran a formar parte de la lista de organizaciones Terroristas. Lográndolo de una forma, digamos fácil. O sea que las guerrillas de las FARC y ELN pasaron de ser combatientes políticos a simples y temidos terroristas, a pesar de que, poco menos de un año atrás, estaban sentadas las FARC en el Caguán, hablando de paz y negociando con el Estado colombiano. Rodeados de dirigentes políticos, tanto norteamericanos como europeos. De un plumazo, entonces, europeos y norteamericanos refrendaban la locura uribista de cerrarle la puerta a toda esperanza de dialogo y negociación entre insurgentes y gobierno. La cruenta guerra había sido refrendada.

La «Seguridad Democrática» devenía un peligro para el pueblo en general, por cuanto la represión contra la insurgencia era casi nula, y por el contrario, la represión contra los activistas de los derechos humanos, organizaciones sociales, sindicalistas y políticos de izquierda aumentaba inclementemente, sobre la base gubernamental, de que todos los anteriores son «auxiliares de la guerrilla». La criminalización de dichas organizaciones se convirtió en un invisible decreto expedido por el gobierno, pero jamás legalizado en ningún documento, ni firmado por ningún ministro; fue un decreto diseñado por Uribe y expresado a mil voces por su gobierno civil y ejecutado por el estamento militar, con terribles consecuencias para los miembros de estas organizaciones, las cuales, vieron que el mundo se les venía encima. Los agentes del Estado en compañía de los escuadrones de la muerte, continuaban con la guerra sucia, encubiertos en la «Seguridad Democrática» de Uribe, pues, todo sospechoso de terrorismo era ciertamente un sindicalista, un defensor de los derechos humanos, un líder social o un político de izquierda y mismo todo aquel periodista alternativo que se atrevía a condenar la corrupción gubernamental, a denunciar el terrorismo de Estado o disentir de las políticas uribistas, ese sospechoso debía ser neutralizado. Asesinatos y atentados indiscriminados comenzaron a ser casi cotidianos, las detenciones arbitrarias de los «auxiliares de la guerrilla» se repetían sin cesar, era como una especie de apuesta, entre militares, policía política y policía nacional, para ver quien capturaba mas «terroristas» y en qué tiempo; las detenciones se producen en su mayoría, sin el respeto a la presunción de inocencia, bajo denuncias anónimas, además de que muchas de estas detenciones arbitrarias se hacen con la complicidad de narco-jueces o para-fiscales, sin los obligados pasos legales a seguir, como lo ordena la ley. Y como es costumbre hoy en día en Colombia, la fuerza pública se hace acompañar de un delator encapuchado (la versión oficial dice que se trata de un desmovilizado de la guerrilla) quien señala al o a los sospechosos o sospechosas de pertenecen a una agrupación subversiva, siendo de inmediato expuestos al escarnio público. Es en esta forma, es como decenas, centenas y miles de personas han sido encarceladas, torturadas y vejadas sistemáticamente y su entorno familiar expuesto a la violencia

⁸² La familia Santos es dueña del mas grande y unico periodico de circulacion nacional, El Tiempo, tambien poseen la revista Cambio y otros penodicos regionales. Varios de sus familiares dirigen otros medios de prensa, como la revista Semana y ticnen programas de radio y television en asocio o pertenecientes a los multimillonarios Julio Mario Santodomingo y Carlos Ardila Lula y quienes descan una nueva reeleccion del Patron Uribe.

de los grupos de extrema derecha. Igualmente los defensores de estos acusados de «terrorismo», abogados y defensores de derechos humanos, han debido soportar toda clase de amenazas y hasta han sido asesinados, privando así a sus clientes de una debida defensa. Los defensores más afortunados, han logrado asilarse en países lejanos, cambiando bruscamente de vida, llegando a estos remotos e inhóspitos lugares sin conocer el idioma, la cultura, perdiendo muchas veces el hilo familiar, el universo de amigos y colegas profesionales. Los condenados al exilio deben recomenzar una nueva vida. Están condenados al fracaso.

La inmensa mayoría de estos desafortunados hombres y mujeres del pueblo, acusados falsamente de terrorismo han sido liberados por falta de pruebas, según los jueces encargados de los diferentes casos, después de meses e incluso años de haber pasado en las mazmorras del Estado y de haber perdido familia, empleo, o pequeños negocios. Solo les queda el estigma de ser señalados como terroristas y el miedo cotidiano de ser asesinados por los escuadrones de la muerte. Uno de los muchos ejemplos y tal vez uno de los más relevantes, ocurrió el 12 de octubre del 2003, cuando 128 personas fueron detenidas bajo la acusación de terrorismo y pertenecer a grupos guerrilleros; entre los detenidos habían varios funcionarios públicos, a los cuales se les ordenó por intermedio de un fiscal, la suspensión de sus cargos. La poderosa prensa nacional, se vistió de juez y se lanzó con una lluvia de halagos en favor del gobierno de Uribe y su “seguridad democrática”, en su afán propagandístico, olvidando su deber ético y su obligación a una investigación periodística imparcial, seria, libre e independiente para informar a todos los colombianos de un hecho que bien podría tener consecuencias nefastas y graves para los acusados, de comprobarse anomalías o falsas acusaciones. La prensa nacional y El diario El Tiempo del 18 de octubre del 2003, informaban en sus versiones digitales lo siguiente: «En una de las medidas de aseguramiento más grandes que se ha impuesto en el país, ayer fueron afectados con esta decisión un total de 128 presuntos guerrilleros de las FARC por el delito de rebelión, informaron fuentes judiciales. Como varios de los detenidos eran funcionarios públicos, el fiscal instructor solicitó a las autoridades suspender de sus cargos a (siguen nombres)... Para las autoridades este es un duro golpe que nuevamente propinan los organismos de control estatales, ya que se desvertebra toda una red de colaboradores permanentes de esa organización terrorista en esa zona del país». El propio presidente Uribe, sería el instigador directo de las capturas masivas, como lo podemos constatar en su intervención del 10 de diciembre del 2003, al instalar el Congreso Anual Cafetero. Uribe, afirmó: «La semana pasada le dije al general Castro Castro⁸³ que en esa zona (departamento de Arauca) no podíamos seguir con capturas masivas de 40 o de 50 todos los domingos, sino de 200, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas y golpear estas organizaciones. Esas capturas han sido masivas, pero no arbitrarias. Se han ajustado plenamente al ordenamiento jurídico. Se han hecho sobre el examen cuidadoso de un acervo probatorio».

Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, las capturas si serían arbitrarias:

«Sentencia Absolutoria Para Víctimas De La Captura Masiva En Arauca En El 2002. Llegó la hora de la sentencia absolutoria para las víctimas de la captura masiva desarrollada por la brigada XVIII del ejército con sede en Arauca en conjunto con la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación... 32 personas que fueron capturadas desde el 12 y el 14 de noviembre del 2002 en el municipio de Saravena (Arauca), acusados de ser miembros de la guerrilla, han recuperado por lo menos, su libertad. Para entender la lógica de esta decisión y lo que significa en relación a las siempre presentes capturas masivas, debemos profundizar en aspectos, que se encuentran abajo, mucho más debajo de lo que pareciera ser una noticia judicial normal. Deberíamos empezar por reconocer quienes son estas 32 personas: enfermeros y empleados del Hospital Sarare y San Ricardo Pampuri de Saravena, sindicalistas, una ama de

⁸³ El general de la policía Jorge Daniel Castro Castro, se le ha acusado de cubrir narco-trafficantes y de tener el mismo participación en el envío de varias toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, vía México. Así lo denunció el senador Luis Elmer Arenas. Otro general acusado de favorecer y traficar drogas es el ex director de la policía Rosso José Serrano, nombrado como embajador en Austria por el capo Uribe.

casa, tres agricultores, obreros, conductores, un agente de tránsito, un celador, un recolector de basura, un maestro de construcción, el Presidente de la Acción Comunal de un barrio de Araucanía, el Tesorero de la Empresa de Acueducto de Saravena, empleados de una empresa de televisión, un estudiante de Comunicación Social, dirigente de la Asociación Juvenil Estudiantil Regional de Arauca, un vendedor de comidas rápidas, un concejal de Saravena, dos profesores y un fontanero. Es urgente conocer que estas personas fueron capturadas en virtud de un informe de inteligencia presentado por el Teniente Coronel Noel Pastor López Betancourt de la XVIII Brigada del ejército, capturas ordenadas por un fiscal quien labora en las mismas instalaciones de la Brigada...

Quizá sea necesario saber que la sentencia absolutoria se fundó en consideraciones como que resultaba completamente extraño que en la medida que avanzaba la investigación, los testimonios de cargo iban incluyendo más personas que no habían señalado desde el primer momento. Que incluso, después de una amnesia colectiva de los acusadores sobre determinadas personas, milagrosamente las recordaban en posteriores «declaraciones», todos, al mismo tiempo. E incluso un hecho más grave, que ahora los militares acusadores se disfrazan de reinsertados de la insurgencia, así se dice en la sentencia absolutoria (...). Esta historia no ha culminado, son múltiples los procesos que se adelantan actualmente donde se pretende un trueque infame: se transforman ciudadanos, campesinos y activistas sociales en insurgentes; mientras que los militares prodigiosamente son transmutados en guerrilleros desertores que acusan a los primeros. Lamentablemente... Continuara...»⁸⁴

Otros detenidos arbitrariamente, han tenido menos fortuna y han sido asesinados por los paramilitares con el concurso de los servicios secretos, como fue el caso del profesor universitario Alfredo Correa de Andrei. El profesor Correa de Andrei, un ingeniero agrónomo y sociólogo, enseñaba en las universidades Simón Bolívar y del Norte y había sido director de la Universidad del Magdalena. Fue detenido bajo el cargo de subversión, se le acusó de ser ideólogo de las FARC, acusación de tres 'reinsertados de la guerrilla', quienes manifestaron que el profesor Correa, se había reunido con el Presidente de Venezuela Hugo Chávez para conformar la guerrilla de las FARC en el vecino país. (Revista Semana 09-06-2006), Pero el abogado del profesor universitario Antonio Nieto, logró demostrar que para esa fecha el profesor Correa se encontraba dirigiendo trabajos de investigación en la Universidad. Después de 30 días de detención, Correa fue dejado en libertad, por no haberse encontrado pruebas en su contra, y dos meses después de su liberación fue asesinado en las calles de Barranquilla, por sicarios en moto, quienes le dispararon en varias oportunidades. El mismo día de su asesinato, su hermana Magda Correa, responsabilizó al gobierno de su muerte, diciendo que «se trató de un crimen de Estado». Según declaraciones del jefe de informática del DAS (Policía Política) Rafael García, preso en una cárcel de alta seguridad, el máximo jefe de esa Institución Jorge Noguera, protegido del presidente Uribe, estaría detrás de este infame crimen. En Bogotá, otro profesor universitario sería asesinado, Edgar Fajardo de 48 años de edad y catedrático de varias universidades de Bogotá. El profesor Fajardo, integrante del Partido Comunista, fue sacado de su apartamento por tres hombres y conducido hasta la puerta de entrada del conjunto residencial en donde le dispararon tres proyectiles blindados de uso oficial.

Por su parte la Corporación Jurídica Libertad, denunció la captura masiva efectuada por el DAS, el 31 de agosto del 2005, en la cual fueron arrestadas 29 personas acusadas de pertenecer a la guerrilla de las FARC. La operación bautizada «resplendor» fue realizada en Medellín y en los municipios de Argelia, Santuario y Marinilla. «Se repite el libreto —dice la Corporación— de las capturas masivas adelantadas en diferentes partes de la geografía nacional y que tanto cuestionamiento han generado. Hace tan poco unos días fueron dejados en libertad por la Fiscalía General de la Nación, 62 pobladores de Quinchía, luego de permanecer bajo privación de la libertad durante 22 meses, soportando acusaciones de ser

⁸⁴ www.colectivodeabogados.org/articlephp3?id_article=930. (22-02-2007)

integrantes de la guerrilla. El pasado fin de semana los pobladores de Argelia, al igual que había sucedido en las localidades de Ovejas (Sucre), Quinchía (Risaralda), Calamar (Guaviare), y Chaparral (Tolima) se vieron sometidos al espectacular montaje de los cuerpos de seguridad en cabeza del Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, quienes fueron los encargados de llevar a cabo la ya muy consabida fórmula para las redadas masivas... Con base en señalamientos de informantes, la fiscalía, sin realizar ninguna labor de verificación y de análisis procedió a ordenar el allanamiento y captura de todos los pobladores de las veredas ante citadas...». Estos interminables hechos, increíbles y únicos en el mundo entero, después de la posesión del presidente Uribe, en agosto del 2002, muestran la situación de guerra total que vive el país, y donde existe el pleno derecho a toda clase de violaciones y vejaciones contra la población civil; sin un mando central que controle esa desviación del orden público; sin un organismo de justicia capaz de parar tan insólita y desgarradora anomalía, producida por los mismos agentes del Estado, por los mismos encargados de preservar ese orden constitucional e impartir esa justicia derribada de un Estado de Derecho, de una democracia moderna en la que quiere situarse el Estado colombiano.

¿Es que podemos tener alguna duda sobre el mal funcionamiento de la democracia en Colombia, cuando todos los sectores de la población civil colombiana son perseguidos y encarcelados sin motivo alguno?

La Corporación Jurídica Libertad, en carta fechada el 25 de agosto del 2005 y dirigida a las Naciones Unidas, denunció:

«Ante las arbitrarias capturas realizadas por la Fiscalía General de la Nación el pasado 5 de mayo a un grupo de estudiantes y líderes estudiantiles de la Universidad de Antioquia y que ha sido plenamente denunciado ante la comunidad nacional e internacional, la Corporación Jurídica Libertad, como representante de la defensa penal de algunos de los capturados arbitrariamente, presentó el 22 de agosto del 2005 ante el «Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias» de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra-Suiza, el conocimiento del caso, para que estos organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos, se pronuncie sobre la violación del debido proceso constitucional y legal y los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre tratamiento de toda persona sometida a detención o prisión...»

Los estudiantes y líderes estudiantiles capturados fueron 14 en total. También se puso en tela de juicio la independencia de la justicia, por cuanto varios fiscales tienen sus despachos al interior de Brigadas militares. El periodista Athemay Sterling, escribió el 11 de enero del 2007 en la Agenda de Noticias Indymedia.

«Protestas por Detenciones Masivas:

Centenares de personas de Florida y Pradera realizaron sendas manifestaciones públicas con el acompañamiento de CPDH quienes denunciaron «(...) la estigmatización que surge desde la Presidencia de la República y desarrollada por la fuerza pública en estos pacíficos municipios desde donde exigimos cesar la estigmatización y se respete la dignidad de nuestra región que tiene abierta su puerta y corazón al intercambio humanitario(...) y en el caso de nuestros coterráneos, trabajadores y campesinos, exigimos la libertad inmediata y solicitamos a las autoridades respeten los derechos humanos y las libertades ciudadanas, se eviten los atropellos y cese la estigmatización que padecemos desde el momento que el gobierno se negó a concretar la posibilidad del intercambio humanitario(...)»⁸⁵

⁸⁵ Uribe se opone a toda negociación con la guerrilla y busca todos los medios posibles para impedir el intercambio propuesto por las FARC de aproximadamente se-senta retenidos — varios diputados, dos senadoras, un alcalde y oficiales y suboficiales del ejército y la policía, por vanos centenares de guerrilleros presos en las diferentes cárceles del país y en condiciones inhumanas.

El 13 de junio del 2006 la revista Semana publicaba en su sitio internet un informe muy particular sobre estos graves hechos:

«Casi 9 personas son detenidas ilegalmente cada día en Colombia. Un informe reciente advierte los peligros de las capturas masivas. El Fiscal General dice que la política 'Amerita una seria reflexión'. Los colombianos ya estamos acostumbrados a ver en los noticieros (de televisión) las filas de «presuntos terroristas» capturados casi a diario. Ocasionalmente nos enteramos de que algunos, o todos, han sido puestos en libertad. En los pueblos, estas redadas poco selectivas suelen generar desconfianza hacia el Estado. A las personas injustamente capturadas les queda la marca en la frente. El nuevo Fiscal General Mario Iguaran, dijo a la prensa, que esta política de capturas masivas "ameritaba una reflexión seria" ...»⁸⁶.

Pero desafortunadamente la reflexión de la cual hablo el nuevo Fiscal, no fue seria y si momentánea, pues las redadas masivas por parte de la fuerza pública, los organismos de inteligencia y la misma fiscalía no han parado. Más aun! Ya en el 2003 en tan solo un año de haberse posesionado el espurio presidente Álvaro Uribe Vélez, —numero 82 en la lista negra de los principales criminales y narcotraficantes del continente Americano, establecida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 1991— las organizaciones humanitarias lanzaban un grito de alerta contra estas prácticas antidemocráticas derivadas de la 'segundad democrática', bandera del programa gubernamental de Uribe. Tiempo después, los poderosos medios de comunicación y en particular la revista Semana, se vieron obligados a apartarse momentáneamente de su propaganda progubernamental, pues, tapar el gran escándalo producido por las funestas e indiscriminadas capturas masivas, era imposible. Dada la envergadura de estos graves hechos, la revista Semana, dedicaba un informe especial y reproducido por la prensa alternativa el 10/06/2003 y titulado:

«La Gran Redada: En varios de los operativos que han producido capturas masivas han participado testigos encapuchados. Uno tras otro, el dedo del encapuchado acuso a los habitantes de Cartagena del Chaira (Caquetá). Y fue precisamente su dedo el que delate a Napoleón Santanilla. Era mocho... en Florencia se convirtió en principal testigo del DAS en un proceso que termino con la captura de 74 personas del pueblo... el día en que arrestaron a esos cartageneros del Chaira, a las 7 de la mañana los soldados y policías cercaron el pueblo y condujeron en fila India a los hombres y mujeres que estaban en la calle hacia un lote del Idema contiguo a la base del ejército. Eran casi 600 personas, que permanecieron allí casi hasta las 5 de la tarde a pleno rayo del sol... Santanilla acuso a Ivonne Guerrero, una mujer grande y simpática de unos 50 años y dueña de un restaurante en la plaza. Ivonne entro a la bodega del Idema con otros seleccionados donde la filmaron y le pidieron la cedula para cotejarla con un computador... permaneció muda cuando le preguntaron su nombre. El agente del DAS le pidió que colaborara. 'Quiere que colabore'? Entonces dígame al señor Napoleón que me pague el suministro de comida de los tres últimos meses que me debe. Le respondió furiosa'. El detective, sorprendido, le dijo que estaba confundida, que ese joven trabajaba con la Institución. Sin embargo, cuando Ivonne le hablo del dedo mocho, la devolvió al patio donde estaban los que se habían salvado del señalamiento. Los otros fueron trasladados en helicoptero, con los ojos vendados, hasta la base militar de Larandia, cerca de Florencia, donde los retuvieron hasta el martes por la tarde, cuando los trasladaron a Bogotá y los internaron en los calabozos del DAS. Entre los 74 captura dos estaban entre otros, 8 motoristas de Asotaxi; el propietario de una de las farmacias más grande; el fotógrafo; la dueña de una discoteca; dos profesores; varios ganaderos; el inspector de sanidad y los dueños de los tres principales supermercados, entre ellos Héctor Estupiñan, a quien apodan 'papá Héctor', porque a todos les fía y da empleo a casi 100 cartageneros. Dice aun consternado uno de los ganaderos que estuvo detenido en la bodega del Idema. 'Acabaron el pueblo'. La indignación en Cartagena del Chaira es unánime y similar a

⁸⁶ El Cinep; la Comision Colombiana de Juristas; el Comite Permanente por la De-fensa de los Derechos Humanos; el Comite de Solidandad con los Presos Politicos, y diferentes organismo internacionales de libertades civiles y derechos humanos, han estimado el numero de capturas masivas arbitrarias, durante los primeros cuatro anos del gobierno de Uribe, por encima de las 18 mil 500 personas de todos los origenes y profesiones en todo el pais.

la que sienten los habitantes de Quipile, donde fueron capturados hace unos meses en un operativo de gran envergadura 58 personas, de las cuales solo quedan presos 18. Y los del Querenal, un veraneadero a una hora y media de Cali, donde el 28 de septiembre (2002) fueron capturados 26 personas. En ese pueblo vallecaucano, como en los demás lugares, la fuerza pública selló la entrada y salida del pueblo y realizó una redada masiva. Personas del lugar aseguraron que fue una operación indiscriminada y que en el desorden se llevaron hasta un soldado que estaba de permiso. También al carnicero, a un profesor, al boticario y al director del canal de televisión, entre otros. Los familiares cuentan que la policía llegó con órdenes de allanamiento y capturas abiertas, sin nombres ni direcciones preestablecidas. Y que la caleta del escondite que transmitieron por televisión como 'la prueba reina' la construyeron los vecinos de la estación de la policía por petición de los agentes, para que si la guerrilla se tomaba el pueblo, ellos tuvieran donde protegerse... En Florencia, según datos de la Procuraduría, se llevaron a 60 y solo quedan (detenidos) la mitad, en Pitalito (Huila) capturaron a 42, aseguraron a siete, que apelaron y todos quedaron libres. En Viotá (Cundinamarca) capturaron a 47 y todavía están siendo indagados (...) Aunque la Fiscalía ni la Procuraduría tienen el dato preciso de cuantos de los capturados están aun tras las rejas, las voces de protesta por estos operativos ya han comenzado a sentirse. En (el departamento) Tolima el gobernador, Guillermo Alfonso Jaramillo⁸⁷, manifestó su preocupación por los operativos en su departamento. 'Me preocupa que estén involucrados en una situación como esta, pues son gente honorable y trabajadora...»

A este oscuro y penoso panorama nacional, se le agrega el Plan Colombia⁸⁸ —un verdadero negocio millonario para empresas productoras de armamento y fungicidas—, planificado y elaborado en Washington bajo la presidencia de Bill Clinton, durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana (1998-2002) y que pretendía luchar contra el tráfico de drogas. Pero orientado rápidamente en su más profunda esencia hacia la lucha contra las guerrillas de izquierda, copando toda la atención en el campo meramente militar y dejando de lado la confrontación directa, contra los diferentes carteles de la mafia del narcotráfico, que continúan aumentando su floreciente comercio y obteniendo enormes ganancias. Sobre el terreno ya no es un 'Plan Colombia' de lucha contra las drogas, es un 'Plan Colombia' de lucha contra la subversión, con un gran derroche de acciones militares, que muy poco han fragilizado el potencial de los movimientos subversivos y en cambio, si ha postrado a la población civil, en uno de sus más horribles vivencias de violencia.

Colombia es el tercer país, después de Israel y Egipto, en recibir ayuda militar de parte de los Estados Unidos y en gran escala.

El 'Plan Colombia' contra el narcotráfico se ha basado sustancialmente en las fumigaciones de cultivos de la hoja de coca, pero con la variante, que estos cultivos pertenecen a pequeños propietarios de terrenos, quienes al lado de los cultivos de papa, frijol, yuca y maíz cultivan varias hectáreas de coca, para poder obtener una mayor ganancia, equivalente a cinco veces más con respecto a todos los otros cultivos de pancoger. En lo que respecta a los enormes cultivos de coca en los terrenos de propiedad de los grandes terratenientes y en territorios bajo el poder del narco-paramilitarismo, las fumigaciones son

⁸⁷ Este importante político de este departamento fue acusado de pertenecer al movimiento guerrillero FARC. Múltiples acusaciones sin fundamento se han venido tejiendo en contra de Jaramillo, y una especialmente que fue concebida por el espurio presidente Uribe y el narco-parapolítico senador Gomez Gallo Luis H.

⁸⁸ El 'Plan Colombia' contiene tan solo 20 párrafos en letra menuda que determinan en su esencia, el rumbo de la economía en el país durante su aplicación, condición sin la cual, Estados Unidos se habría abstenido de aportar su «ayuda». Los siguientes son algunos de los compromisos asumidos por el gobierno de Andrés Pastrana con el gobierno estadounidense: Definir la 'inversión extranjera' como 'un elemento esencial' para adecuar a Colombia 'a un mundo globalizado' catalogando la 'colaboración de Estados Unidos' como 'indispensable para el desarrollo económico del país'. En lo que respecta al narcotráfico y su lucha hace una referencia curiosa, pues, apunta a 'reducir en un 50% el cultivo de la planta, procesamiento y distribución de la droga', con lo cual su comercio y sobre todo el precio aumentará. Fortalecer el Estado para 'recaudar impuestos; firmar tratados de libre comercio e imponer medidas austeras y de ajuste... para así recuperar el prestigio del país en los mercados internacionales. (www.derechos.org/nizkor/Colombia/doc/planof.html).

esporádicas, ver nulas, siendo total el encubrimiento gubernamental y una completa desatención de los agentes del país del norte, que 'celosamente' trabajan en la lucha contra las drogas. Las fumigaciones contra las familias campesinas, sus cultivos ilícitos, niños y animales han sido una constante en esa loca y mentirosa carrera uribista contra la lucha de las drogas. Irresponsablemente Álvaro Uribe, —hijo de Alberto Uribe Sierra, un antiguo socio de Pablo Escobar, y quien estuviera a punto de ser extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico— se ha empeñado en fumigar los lugares menos nutridos del cultivo de coca y en cambio más poblados por el campesinado pobre, arrasando de paso sus cultivos alimenticios, animales, pequeños arroyos y fragilizando la precaria salud de nenes y niños. En una de sus desafortunadas declaraciones, Uribe afirmó el 30 de junio de 2003, diario el País de Cali: «Mientras yo sea presidente no puedo dejar de luchar contra las drogas. Las fumigaciones se suspenderán el 7 de agosto del 2006, cuando termine mi mandato». Y, con trampa y la ayuda de los narco-paramilitares, el espurio presidente Uribe, fue reelegido por cuatro años más, hasta el 2010. Continuando con esta política de selectivas fumigaciones, el gobierno favorece solamente a dos grandes industrias a saber: Monsanto y el Narcotráfico. El primero porque vende a Colombia cientos de toneladas de glifosato, —veneno que está prohibido en su propio país, Estados Unidos— con una ganancia de millones de dólares al año; y el segundo por que prosigue su prospero negocio, que asciende a más de dos mil millones de dólares al año. Según entidades internacionales y la propia ONU, la demanda del producto blanco va en aumento y la oferta se mantiene y tiende a aumentar. Pues, los laboratorios de procesamiento de cocaína se expanden por todo el territorio nacional en donde el narco-paramilitarismo es amo y señor, sirviendo los pocos laboratorios destruidos por la fuerza pública y que presenta pomposamente en los poderosos medios de comunicación, son para la foto. Lo aberrante de esta guerra química selectiva, se ubica en la destrucción de la salud de los seres humanos⁸⁹ tocados directa e indirectamente por la mezcla de Round Up y Cosmo Flux (glifosato), con los estragos casi irreversibles contra la flora, la fauna y el agua dulce.

Y no solamente la población colombiana ha sufrido los embates de las estériles fumigaciones, también en el sur del país, los habitantes de la hermana república del Ecuador de zonas limítrofes, se han visto afectadas enormemente. En este contexto se desarrolla la llamada «guerra contra las drogas», como parte integral del Plan Colombia. Y los métodos continúan como sigue: cuando las avionetas aseguran el área con ametrallamientos sobre la población civil, después asperjan las tierras de los campesinos, indígenas y afro descendientes, generando zozobra en las familias y afectando no solo los cultivos de la hoja de coca en numerosas pequeñas extensiones, sino también el pan coger, las fuentes de agua, los animales y la biodiversidad. Ancianos, mujeres embarazadas e infantes son los más afectados, asimilando la mayor cantidad de este veneno que degrada rápidamente su estado de salud. Las familias asperjadas con el glifosato, se enfrentan a una crisis alimentaria insuperable en el corto plazo. Obligados a consumir agua contaminada, con sus cultivos de pan coger dañados, los pastes de su ganado secos y el medio ambiente visiblemente deteriorado, su vulnerabilidad solo tiene dos caminos: 1) Permanecer en sus territorios a pesar de la enfermedad y la hambruna. 2) Desplazarse forzosamente. En el primer caso, las diferentes comunidades y campesinos se enfrentan al reto de recomponer su economía de subsistencia en condiciones agroecológicas difíciles y sin contar con el apoyo del Estado. Al militarizar el problema, tanto el gobierno colombiano como los Estados Unidos, convirtieron al campesino coccalero y amapolero en otro enemigo interno y los culpables ideales del narcotráfico y, a quienes sus reclamos no se le atiende ni se le soluciona, por que de antemano se ha decidido que sus denuncias por los daños que causan las aspersiones carecen de toda credibilidad y fundamento⁹⁰.

⁸⁹ Declaraciones del científico Robert Belle, de la universidad Pierre y Marie Currie de Francia, al diario ecuatoriano El Universo, en las cuales dice que el glifosato provoca las primeras etapas de la caracterización.

⁹⁰ Guerra Química Contra la Población: es parte de un artículo de otros tantos artículos plasmados en el libro «Mas allá del Embrujado» (tercer año de gobierno de Álvaro Uribe) editado por Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Bogotá, www.plataforma-colombiana.org.

Efectivamente, el Plan Colombia, que cuatro años más tarde fue rebautizado Plan Patriota — seguramente esperando tener mejores resultados en la guerra antiterrorista que el anterior— fue un completo fracaso aunque el gobierno de Colombia se rasga las vestiduras tratando de demostrar lo contrario, lo mismo si los informes son de la ONU, científicos, de dirigentes políticos de oposición, líderes campesinos y la prensa alternativa colombiana, como también, ciertos sectores del gobierno y una parte de la prensa de los Estados Unidos, dan cuenta de los ínfimos resultados de la lucha contra las drogas. Las nefastas fumigaciones marchan a todo vapor en ciertas zonas del país —sobre todo las pobladas por pequeños cultivadores—, mientras las zonas de influencia narco-paramilitar han sido prácticamente excluidas del azote fumigatorio. Pues todo indica que el Plan Colombia y el ahora Plan Patriota, son Planes exclusivamente Antiterroristas. Por que las pruebas acumuladas y la gestión presidencial al servicio del gobierno estadounidense, indican que el narco-paramilitar presidente de Colombia Álvaro Uribe, había tornado al poder para preservar el Gran Negocio y acentuar una política belicosa contra el movimiento subversivo y la izquierda del país con las decenas de miles de vidas sacrificadas, agravando al extreme el conflicto interno, arriesgando la paz y tranquilidad con los vecinos al trasgredir violentamente sus fronteras, originando enormes tensiones sobre todo con los hermanos pueblos de Ecuador y Venezuela, los cuales se han rehusado a participar militarmente en el conflicto armado colombiano. Esta situación es aprovechada por el gobierno del país del norte, para irse lanza en ristre contra estas dos democracias, en especial la venezolana, que ha catalogado de auspiciadora de terroristas, en referencia a una supuesta ayuda al movimiento armado colombiano, por parte del gobierno del presidente Chávez. Argumentos tendenciosos, vehiculados mediante sus 'agentes' incrustados en los principales y poderosos medios de prensa colombianos. Uribe es pues, la punta de lanza del Imperio en América Latina. O porque no el pirómano latinoamericano, como lo tilda la sapiencia popular⁹¹.

Entre el Plan Colombia y el hoy Plan Patriota han pasado ya siete largos años, y la inversión para la guerra llega tranquilamente a los 42 mil 800 millones de dólares (42'800.000.000) aproximadamente. En un informe elaborado por el Ministerio de la Defensa (¿Guerra?) el 7 de diciembre de 2005 y titulado «Logros y Retos de la Política de Defensa y Seguridad Democrática», señala que en el 2003 se invirtieron en la guerra 4 mil 800 millones de dólares (4'800.000.000) así:

3.671 millones del Presupuesto Nacional; 516 millones del Impuesto al Patrimonio; 694 aportados por Estados Unidos (esencialmente armamento). Para el año 2004 se invirtió en la guerra 5 mil 500 millones de dólares (5'500.000.000): 134 millones del Impuesto al Patrimonio; 4.703 millones del Presupuesto Nacional; 661 millones aportados por Estados Unidos. Y para el año 2005 se invirtió en la guerra 6 mil 400 millones (6'400.000.000): 5.638 millones del Presupuesto Nacional; 57 millones del Impuesto Patrimonial; 674 millones aportados por Estados Unidos. Para un gran total de 16 mil 700 millones de dólares (16'700.000.000) en tres años de guerra. Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, invirtieron un poco mas de 13 millones de dólares diarios en el año 2003; 15 millones de dólares diarios en el periodo 2004 y para el año 2005 se invirtió 17.5 millones diarios. Sin hacer un esfuerzo y ajustes contables rigurosos podemos estimar que en estos siete años de reforzamiento de esta fratricida guerra, se gastaron 42 mil 800 millones de dólares, mientras la pobreza y el desempleo en el país bate records, niñas, niños y adultos mueren en las puertas de los hospitales por falta de atención medica y la muerte de los no combatientes (niños, mujeres y Ancianos) es cada vez superior. La población colombiana se acerca a los 45 millones y existe en el país 35 millones de pobres.

Las promesas de paz, seguridad y prosperidad ofrecidas por el narco-paramilitar candidato Uribe, no se han cumplido y por el contrario, el precio de los artículos de primera necesidad estas por las nubes, el

⁹¹ Los cinco países fronterizos con Colombia: Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil han tenido problemas más o menos graves en sus fronteras con los movimientos armados de extrema derecha y las fuerzas armadas colombianas. Ciudadanos de Ecuador, Panamá y Venezuela han sido atacados con armas de fuego y helicópteros militares. En Ecuador y Venezuela, civiles y varios militares de estos países, fueron asesinados por las fuerzas armadas colombianas y grupos paramilitares.

precio del combustible ha subido en 215%; la educación perdió todo compromiso estatal, con enormes costos desde los estudios primarios en adelante; la prostitución de jóvenes y niñas cada vez menores (un promedio de 12 años) aumenta sosteniblemente en las familias sin recursos; el enrolamiento de jóvenes en las huestes militares y paramilitares es una constante ya que reciben una remuneración un poco más elevada con respecto al salario mínimo vigente y la privatización a ultranza de universidades, centros intermedios de educación y hospitales no da ningún margen de respiro a los millones de colombianos embutidos en el espiral de la pobreza extrema; aproximadamente 1650 sindicalistas han sido asesinados o desaparecidos en los últimos años; alrededor de 30 millones de pobres e indigentes que representan aproximadamente setenta por ciento de la población; mas 4 millones 500 mil familias colombianas desplazadas a causa de la guerra; un número cada vez más elevado de exiliados 6 millones y cada vez más por motivos políticos (periodistas, sindicalistas profesores y líderes sociales entre otros amenazados de muerte)⁹²; un aumento sostenido de la prostitución infantil; un ventajoso y productivo tráfico de armas cada vez más amplio en beneficio del crimen organizado y la elite militar, conjuntamente con la trata de personas que pone al país entre los 'mejores' del mundo; una masiva privatización del sector de la salud que deja cada día más muertes por falta de atención medica sobre todo entre la población infantil⁹³; un elevado número de violaciones, tortura y asesinatos extrajudiciales por parte de la Policía, Servicios de Seguridad del Estado y el Ejército contra la población civil⁹⁴, y una educación cada vez más lejana de las clases menos favorecidas por sus precios exuberantes y de muy baja calidad⁹⁵, es un balance somero de las políticas estatales y en particular de la política del espurio presidente Uribe, durante sus cinco años de gobierno narco-paramilitar y en especial de su política de seguridad democrática. Y los militantes y representantes del ghetto mafioso, (narco-para-política) hablan de un posible tercer mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

Tanto el Plan Colombia como el Plan Patriota, no han en ningún momento enfrentado o reprimido severamente a los cabecillas mafiosos, m a los diferentes carteles del narcotráfico y mucho menos a los escuadrones de la muerte, inmersos, estos también, en el tranco cotidiano de drogas. Los primeros gozan de cierta libertad y complicidad por parte de altos funcionarios y una buena parte de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano y norteamericano; mientras que los otros han entrado por la puerta grande, a engrosar ese selecto grupillo de cabecillas narco-paramilitares que están en 'negociaciones de paz' con el gobierno de Uribe. Por lo tanto, una real persecución o represión por sus actos delincuenciales está completamente prohibida. Los segundos, mismo, si están «negociando la paz» directamente con el gobierno, continúan conservando sus ejércitos paramilitares y siguen teniendo

⁹² Informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

⁹³ La dramática y frecuente falta de atención medica por parte de los centros hospitalarios en el país, ha generado muertes que pudieron haber sido evitadas, los enfermos o mejor victimas en su mayoría niños, tuvieron que trasladarse de un centro hospitalario a otro y luego repartir hacia otro centro sin lograr la debida atención, muriendo inexorablemente en el camino, a este abominable hecho se le bautiza como “el paseo de la muerte”. Y este criminal e inhumano acto los profesionales de la salud o directores de hospitales lo argumentan con absurdas disculpas como la ausencia de personal y en la mayoría de casos por la falta de recursos económicos —del paciente o sus allegados— para el pago de la atención y que el agonizante fuera debida y humanamente atendido. En otros casos el agonizante paciente ha sido rechazado por la expiración de su seguro social. Lo cierto es que “el paseo de la muerte” existe en el país, excepto para las elites y los narco-paramilitares, sean estos cabecillas o simples combatientes rasos.

⁹⁴ Informe Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (febrero 2007) y la organización humanitaria: Human Rights Watch. El 15 de marzo 2007 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe anual dice: «... las fuerzas de seguridad del Estado asesinan cada vez a mas civiles inermes e inocentes y los presenta como 'guerrilleros dados de baja en combates'...».

⁹⁵ Como producto de la privatización de la Educación, hoy en día en el país cualquier persona puede abrir en el garaje de su casa, un Colegio o una Universidad cobrar una inscripción bastante elevada y hacerse pagar mensualidades, trimestres o semestres altísimos, mientras los cursos carecen del nivel apropiado que debe ofrecer un establecimiento de enseñanza. Los fraudes y corrupción entre estudiantes, profesores, dueños de establecimientos y funcionarios del Ministerio de Educación son frecuentes.

presencia en casi todo el territorio nacional, aunque los cabecillas de estos grupos de muerte, estén encarcelados (en maravillosas condiciones) manejando por intermedio de sus testaferros sus inmensas fortunas y manejando el negocio de la cocaína protegido por los susodichos desmovilizados. Los cuales han abierto otra ruta internacional de la cocaína, ubicada en el sur del país entre los departamentos del Valle del Cauca y Choco, utilizando el puerto de Buenaventura en el océano pacífico, ya que en los departamentos de la costa Atlántica con salida al mar Caribe y océano atlántico con su puerto cartagenero, se encuentra bastante trillado y sobre todo sus narco-parapolíticos en su gran mayoría se encuentran en prisión o acusados de narco-paramilitarismo. Es pues, en el sur occidente del país, que la mafia narco-para-política abrió su nueva sede, con la anuencia del gobierno de Uribe y los principales oficiales de las fuerzas armadas colombianas⁹⁶.

Grandes cargamentos o mejor, toneladas de cocaína siguen saliendo de los puertos colombianos, de sus costas atlántica y pacífica, sin que las autoridades colombianas den una explicación real y satisfactoria del porque, el tráfico continua casi sin interrupción, a pesar de su 'tenaz lucha' que dice realizar contra el tráfico de drogas y el 'sometimientos' de los narcoparamilitares en los 'acuerdos de paz' y la extradición de más de doscientos traficantes (en realidad raspachines). Pero también, cabe la pregunta el porqué las autoridades estadounidenses y europeas, no dan una explicación real y satisfactoria del como este alucinógeno entra a sus países y se distribuye y consume sin mayores dificultades. Yo me pregunto ¿porque tanta hipocresía? Si su consumo es vasto y sus ganancias astronómicas. (Por qué no se traza una nueva y revolucionaria política para contener los estragos que genera este producto? Mientras, ciertos políticos, artistas, científicos, profesionales de todas las profesiones, deportistas, celebres escritores y periodistas, magistrados, directores de grandes empresas y gentes del común, en un gran número de países, se deleitan con este polvo mágico, y porque indígenas, campesinos y en general el pueblo colombiano en su gran mayoría, ajeno a la elaboración y comercio de este narcótico deben sufrir la peor de las suertes. Porque no se escoge el menor mal y nos dirigimos por el —sino el menor, si el más adecuado— camino, el de la LEGALIZACION. Hombres y mujeres de buena voluntad, en todo el mundo, así lo han manifestado.

“Todo lo prohibido es más apetecido”, reza el aforismo. Pero desde luego que a todo lo apetecido que no se le impone un límite, deviene en mortal. La cocaína, en tanto que un producto de mercado, hace parte integrante del sistema y de la sociedad capitalista, en donde todo se vende y todo se compra, según su delirante filosofía dentro de ese marco de 'libertad' que se ha auto-designado este sistema, tratando de esconder su real conducta libertina. No es posible pues, seguir «luchando» contra un producto como la cocaína que se comercia, más o menos ilícitamente, y que de todas formas está presente en la vida de varios millones de consumidores, como lo está, por ejemplo, el güsqui, el cigarrillo o los medicamentos. Lo más razonable sería su legalización con todas las prevenciones y controles que ameritan su inevitable venta libre en un futuro próximo. Contando con la aplicación de un plan controlado de sustitución de una parte de este cultivo (koka), en los países andinos por otros productos alimenticios de primera necesidad⁹⁷. Con más proposiciones u otras proposiciones, lograríamos abrir una brecha, un camino adecuado para que, con medidas inteligentemente reglamentadas, leyes aplicables sin detrimento de las partes, cultivadores de koka, consumidores de cocaína, se normalice la fabricación, comercialización y consumo de la cocaína. Y a la par con esta legalización, un poderoso arsenal de medidas y publicidad demostrando lo altamente nocivo para la buena salud humana, y un seguimiento y

⁹⁶ 88 Los departamentos del Valle del Cauca y Choco, han sido beneficiados por el gobierno de la “Política de Seguridad Democrática”, con un aumento de pie de fuerza policial y militar, aumentando de paso los atropellos a la población. Asesinatos selectivos y atentados terroristas, carros bombas, artefactos explosivos y granadas de uso privativo de las fuerzas armadas han explotado en lugares públicos ocasionando numerosas víctimas, igualmente líderes sociales y populares han sido asesinados o desaparecidos.

⁹⁷ Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, hicieron una proposición de 10 páginas en la cual proponen un plan piloto para la erradicación de cultivos de coca en el sur del país con la participación y verificación de ONG's nacionales y la ONU. 1999 Pagina farc.org

ayuda para los consumidores ocasionales que desean parar su consumo y una completa atención médica y psicológica por parte de los Estados, hacia los adictos de este 'mágico' polvo blanco.

Es imprescindible afirmar que, las poderosas mafias colombianas, estadounidenses y europeas entre otras, excelentemente enquistadas en los aparatos estatales, no son partidarias de una legalización y un debido control de la materia prima —koka— y su elaborado producto la cocaína, pues esa prospera empresa les dejaría de percibir, libre de impuestos, aproximadamente 3 mil millones de dólares al año, —según estadísticas de las Naciones Unidas— sobre las fabulosas ganancias que deja el tráfico de drogas, ganancias que en su mayor parte se encuentran consignadas en bancos de Estados Unidos y en menor proporción en Europa, sirviendo también, para la guerra y desestabilización de países que no entran en la órbita 'democrática' occidental.

El gobierno colombiano y Uribe en particular, está decidido a continuar con su 'lucha' contra las drogas, pero, atacando solamente el «problema» de la siembra, es decir fumigando ciertos cultivos de koka, pero de ninguna manera ejerciendo un estricto control sobre la importación al país de los insumos utilizados para la transformación de la hoja de koka en pasta. Y en voz alta y sin ambages, hay que decir que los inmensos laboratorios del narcoparamilitarismo no son siquiera inquietados, como si lo son a menudo, los artesanales laboratorios pertenecientes a diminutos narcotraficantes que hacen la gran noticia de la poderosa prensa progubernamental.

Al decidido y voluntarioso olvido — ¿ignorancia? — de Uribe y su gobierno, sobre las bondades de la milenaria hoja de koka y su propiedades terapéuticas, como también alimenticias, no solo para las comunidades indígenas consumidoras de esta planta desde hace siglos, sino para el ser humano en general. Las comunidades indígenas continúan llamando la atención universal, para superar esta crasa ignorancia, mediante reuniones informativas, conferencias y comunicados de prensa; paseos instructivos sobre el terreno para demostrar, —lo ya demostrado— que la koka (planta) no es nociva en ninguno de sus aspectos para el ser humano. El Consejo Regional Indígena del Cauca, difundió un comunicado en el cual expresa:

«El Uso de la Planta de Koka como Elemento Alimenticio, Medicinal y Religioso entre las Comunidades Indígenas. En el campo indígena no comprendemos como el INVIMA (Instituto de Vigilancia de Alimentos) adscrita al Ministerio del Interior y Justicia, que había expresado tener claridad sobre las calidades y cualidades científicas de nuestra planta sagrada, y había observado que la polémica en contra de la planta de koka era de las entidades que conforman el Consejo Nacional de Estupefacientes como son el Ministerio del Medio Ambiente, el de Relaciones Exteriores, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo Social, y Antinarcóticos; siendo este último el más renuente a escuchar los argumentos que tienen nuestras comunidades, así como las evidencias que tienen prestigiosos centros de investigación entre los que se encuentran la Universidad de Harvard en Estados Unidos e importantes centros científicos en América Latina. De igual forma la Corte Constitucional, entendiendo la situación que viven nuestras comunidades por la satanización de nuestra hoja sagrada y los inconvenientes que causa su ilegalidad para la pervivencia de nuestros pueblos, en la sentencia C-176 /74, ordeno buscar alternativas para el buen uso de la hoja de koka en el país.

Por su parte el Instituto Colombiano de Antropología e historia en carta dirigida a la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), en octubre del 2000, afirma que: 'El uso de la planta de coca como elemento alimenticio, medicinal y religioso entre las comunidades indígenas suramericanas de los Andes y del noroccidente amazónico está ampliamente documentado en los textos sagrados y narraciones indígenas, en las primeras crónicas españolas y de diversos viajeros, en estudios antropológicos contemporáneos y en las declaraciones de las organizaciones y autoridades indígenas. Concluyendo que *'... la planta de coca y sus hojas son de gran importancia para la cosmología y religión de las comunidades indígenas. La masticación*

de hoja de coca es una práctica importante dentro de los rituales y dentro de las ceremonias de los Chamanes o especialistas religiosos y médicos'.

Nos causa sorpresa entonces, que el Invima indique los productos que no pueden ser comercializados ni publicitados en el resto del territorio nacional toda vez que esta actividad infringe la Convención Única de Estupefacientes de 1961, afirmación que carece de veracidad ya que en 1968 esta Convención fue modificada en el sentido que los países se comprometían a no permitir el uso de la coca excepto cuando se tratara de usos tradicionales verificados de los pueblos originarios.(...) No podemos olvidar que por orden Constitucional y legal, las autoridades de los pueblos indígenas tienen reconocidas funciones administrativas, judiciales y legislativas, y que las Entidades Territoriales Indígenas, son Entidades del Estado que cumplen funciones públicas, por lo cual si alguien quiere desconocer un acto de un autoridad Indígena debe demandar lo ante una autoridad competente pues mientras subsista tiene presunción de legalidad y debe ser respetado por todos. (Artículos 246, 286, 329, 330 de la Constitución Política de Colombia). (...) El sol tenía razón, el dios occidental es un dios cruel, sanguinario y depredador, protege a los barbaros y les da poder para convertir en malo lo bueno de nuestras costumbres, de transformar la solidan-dad de nuestros pueblos en hecho vergonzoso, de cambiar la naturaleza espiritual de nuestras plantas en realidades ilícitas, también les da potestad para estigmatizar, perseguir, patentar, fumigar y hasta negociar lo que no les pertenece. Esto último lo vemos en el Tratado de Libre Comercio que acordó el gobierno Colombiano con los Estados Unidos. Tenemos que la firma estampada por el presidente Uribe limita la decisión del congreso de Colombia a un simple si o al rechazo total, sin poder opinar ni sugerir cambios, mientras que se admiten, sin conocerlas, las modificaciones o ajustes que le haga el congreso norteamericano.

En sentido de lo anterior, observamos que mientras a los pueblos originarios se nos restringe cualquier iniciativa, el gobierno abre las compuertas al país del norte para desangrar nuestra de ya maltrecha economía. Por eso hace unos pocos días, en el Congreso de la República, un delegado del CRIC recordó que la Constitución Nacional manda:

«... la dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativas de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.»; expresando que «... tal como están las cosas, con el TLC parece que la Nación le ha entregado al Estado el manejo de la economía para que este a su vez claudique a favor de los inversionistas que en adelante serán quienes tengan el poder sobre recursos naturales, suelo, producción, distribución, consumo, y servicios». Concluyendo que esto «.es un golpe de mano a la Constitución». (...)

Y aunque no nos cabe la menor duda que la decisión de aprobar el TLC o prohibir la comercialización de los productos derivados de la coca ya está tomada desde argumentaciones, intereses e instancias que nada tienen que ver con los de la mayoría de colombianos; persistimos en asistir a estos precarios espacios de la democracia para dejar constancia histórica; expresando nuestra decisión de continuar nuestra resistencia, defendiendo nuestras tradiciones, nuestros territorios, nuestra cultura, nuestra planta sagrada y nuestras iniciativas económicas propias en la perspectiva de construir el país que tanto anhelamos y donde quepamos todos los colombianos; siempre dentro del espíritu de la Constitución, por ser nuestro compromiso como pueblos indígenas y movimientos sociales que estuvo en el diseño y la firma de la Carta Magna de 1991».

KOKA no es cocaína. Esta pequeña muestra, este testimonio, nos muestra los reales demonios que existen para señalar la hoja de coca o el cultivo de esta planta, como algo ilícito y de esta misma manera agredirla, satanizarla y acabarla acusándola de los grandes males de los cuales no es culpable, aunque si, su uso desviado, malintencionado y su criminal transformación sirve en cierta parte, para crear un producto 'mágico' y maldito a la vez, inventado por el hombre blanco. Descartando de plano sus incalculables y benéficas propiedades, no solo en lo medicinal sino también en lo alimenticio y domestico, (infusiones, te, gaseosas, jabones, pomadas, bombones...) que la convierten en otra materia prima fundamental en la economía de las regiones cultivado-ras con fuerte presencia de las comunidades indígenas y campesinas pobres. Pero que con la política colombo-norteamericana de la guerra total, no tiene futuro.

La guerra total impuesta al país por el gobierno de Uribe, a partir del 2002 con el ciego apoyo del presidente de Estados Unidos George Bush, y que ha ocasionado una erosión en la economía colombiana y una violación cotidiana de los derechos humanos con la participación activa de la mafia, hecho sin precedentes, ha sido completamente ignorada por este país del norte y por los países de la Comunidad Europea —tan celosos en su empeño de democratizar a todos los países del antiguo campo socialista y ciertas de sus ex colonias a las buenas o a las malas—. Las denuncias de los opositores contra el gobierno mafioso de Uribe y sus acólitos, prosigue, en ese camino de terror estatal, sin que los pregoneros de una Colombia democrática y sin mafia, tengan el apoyo —de las naciones— que amerita las terribles circunstancias actuales. Mientras que el gobierno La República Bolivariana de Venezuela, país vecino por ejemplo, es tratado como antidemocrático, violador del derecho humanitario, dictatorial y depredador de la sociedad democrática de otrora, este gobierno es satanizado por la poderosa prensa nacional e internacional, pese a que allí, no ocurre ni siquiera un cinco por ciento de lo que ocurre en la 'democracia colombiana', en donde las elecciones han transcurrido en orden y limpieza, contrariamente a Colombia en donde los muertos y el fraude caminan de la mano, en donde los presos políticos son arrumados en las mazmorras que se construyen a lo largo y ancho del país, los desplazados se cuentan por millones, al igual que los extremadamente pobres, quienes son asesinados por grupos narcoparamilitares con la complicidad de la fuerza pública, allí, si existe democracia al decir de la 'Comunidad Internacional'. Allí hay derecho a fumigar con peligroso veneno y hasta los mismos seres humanos con descargas de ametralladora, so pena que el país caiga en manos de esa izquierda que se pasea por América y que tan perjudicial resulta para los intereses capitalistas, tanto del país del norte como de los ricos europeos. Los colombianos no nos interesan, nos interesan son sus riquezas, pareciera ser la consigna de los Norteamericanos⁹⁸.

Horacio Duque⁹⁹ firme opositor del gobierno de turno escribía el 13 de noviembre de 2003 uno de sus artículos titulado:

«Uribe Vélez legaliza escuadrones de la muerte.

Colombia es una de las naciones más vulnerada por la violación sistemática de los Derechos Humanos de su población. Así lo confirman estudios e informes realizados periódicamente por diversas organizaciones internacionales que hacen seguimiento al horroroso calvario de millones de colombianos afectados por la violencia sistemática de los grupos oligárquicos que controlan el aparato estatal. El nombramiento reciente del máximo jefe militar en Colombia, el general Carlos Alberto Ospina, corrobora la realidad. Se trata de un compulsivo aliado de los paramilitares al lado

⁹⁸ Varias empresas de Estados Unidos y de Europa han sido cómplices del asesinato de líderes sindicales y sus familias, a manos de los escuadrones de la muerte.

⁹⁹ Horacio Duque, columnista y analista político fue arrestado por la Seguridad del Estado acusado de narcotráfico y terrorismo. Otro montaje de la fábrica de mentiras en que se ha convertido la casa presidencial.

de quienes ejecuto espantosas masacres de campesinos en el departamento de Antioquia como comandante de la IV Brigada, en coincidencia con el señor Álvaro Uribe Vélez, como gobernador de esa región. La vulneración de Derechos ha sido acompañada de manera recurrente por estrategias de impunidad que pretenden exonerar de culpa a los autores y ejecutores de la guerra sucia, el exterminio, la tortura, la desaparición y las ejecuciones extrajudiciales. Es lo que intenta en estos momentos el señor Álvaro Uribe, el ultraderechista gobernante colombiano, con su agenda secreta para legalizar los escuadrones de la muerte de Carlos Castaño. Para el próximo 25 de noviembre está previsto que cerca de 800 mercenarios del Bloque Cacique Nutibara, que comanda uno de los más temibles asesinos de las bandas de narcotráfico «don Berna» o «Adolfo paz», se concentran en la ciudad de Medellín, iniciando así un proceso de legalización de más de cinco mil paramilitares en varios sitios de la geografía nacional.(...) Todo esto ocurre como parte de una política que se promociona como de «Seguridad Democrática» cuyo objetivo central es adecuar el aparato militar a los planes de guerra que impulsa el imperialismo norteamericano y la clase dominante en Colombia para derrotar la guerrilla revolucionaria que controla importantes áreas del territorio colombiano. Los acuerdos con los paramilitares involucran sus principales grupos y ocurren en el mayor sigilo para evitar traumatismos a una agenda que debe terminar con la impunidad de todos los delitos cometidos por estas bandas. (...) Los pasos incorporados en la agenda secreta seguida con los escuadrones de la muerte incluyen una primera fase de negociación que va desde el 11 de enero al 11 de junio 2003, con una etapa exploratoria del 11 de enero al 11 de marzo y otra concentración que se extiende desde el 11 de marzo hasta el 25 de noviembre. En el tiempo transcurrido desde el 2002 hasta la fecha (nov. 2003) el gobierno impulsa modificaciones a la Ley de Orden Publico para omitir la condición de rebelde político en toda negociación que adelante el Estado para superar procesos de violencia, dando vía libre así a sus relaciones con los paramilitares y pretendiendo sustraerse, de tal manera, de la competencia del Tribunal Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; expide el decreto 128 de 2003 que reglamenta la Ley de Orden Público, con los siguientes beneficios: a) suspensión provisional de ejecución de penas; y b) cesación del procedimiento judicial; firma el Acuerdo de Santafé de Ralito el 25 de julio de 2003; tolera las masacres de campesinos como las ejecutadas por los paramilitares recientemente en Viota (Cundinamarca) y Cajamarca¹⁰⁰ (Tolima), en las que participaron activamente batallones del Ejército; y promueve en las cámaras legislativas un Proyecto de Alternatividad Penal con beneficios jurídicos para dejar en la impunidad todos los crímenes de los paramilitares, lo que ha fracasado merced a la resistencia y denuncia de distintas organizaciones de derechos humanos que valientemente han desenmascarado toda esta infame gestión gubernamental. (...) Muchos colombianos estamos acudiendo a la conciencia de la humanidad y a las instituciones de derechos humanos para que tal cosa no ocurra. El señor Uribe Vélez y los miembros de los escuadrones de la muerte que pretende proteger deben saber que sus delitos serán juzgados y castigados por instancias como el Tribunal Penal Internacional que tiene toda la competencia para hacerlo».

Mientras esperamos con gran ansiedad la solidaridad de los pueblos hermanos del mundo y lograr derrotar esa desidia humana que yace sobre la faz de la tierra; mientras esperamos una real intervención de la justicia internacional, (por cuanto la colombiana no solo está infiltrada por la mafia y el crimen, si no que también, hacen parte muchos de sus funcionarios, de estos sanguinarios grupúsculos de terror) mientras continuamos a esperar, el desorden, el crimen impune y la injusticia no cesan en su empeño de eliminarnos. Y Uribe seguirá adelante con su 'plan patriota', de asimilar o reinsertar en la sociedad colombiana a estos monstruos de crueldad, sus monstruos con sus motosierras, buscando el

¹⁰⁰ El Ejército asesinó a una familia compuesta de seis personas en la cual había un nene de 6 meses y un niño de 5 años. Conocida la horrible masacre el presidente Uribe salió ante los medios de comunicación a disculpar a los militares diciendo que *'pudo haber sido un error'* y justificando la abominable acción mediante el hecho, según el, que *'en la zona se encuentra la guerrilla'*. Las investigaciones dieron cuenta de que los militares asesinaron a quemarropa a sus inocentes víctimas, y no como estos habían anunciado en primera instancia que se trató de un error.

modo de hacerles pagar sus abominables crímenes en fincas agrícolas a guisa de cárcel y por un tiempo ridículo de aproximadamente tres años o cuatro máximo, en comparación a sus abominables crímenes, con todas las comodidades y consideraciones, como si se tratara de verdaderos héroes y como una forma de pagarles sus «servicios presta dos a la patria».

La República de Colombia se convirtió a pasos agigantados una especie de democracia Mafiosa, con la condicionada ayuda del gobierno de los Estados Unidos y la desidia del resto de los países democráticos.

La infamia se fue instalando poco a poco en las mismas entrañas del poder estatal, la vergüenza nacional paso a un segundo piano y los colombianos y colombianas veían el mundo en blanco y negro, en esa cinematográfica cotidianidad colombiana —incomprensible para propios y extraños— en la cual los 'pecadores' necesitaban un Mesías para que redimiera la sociedad de todos sus males. Uribe fue ese 'Mesías' ese 'Salvador', el que iría a exterminar sin piedad las 'fuerzas del mal' —comunistas— encarnadas en las distintas fuerzas de izquierda. Esa izquierda a la colombiana (movimientos políticos, sindicalistas, organizaciones populares, indígenas y campesinas) dispersa, débil, con falta de ideas nuevas —infiltrada por la derecha— que incomodaría en cierta medida, y a pesar de todo, la fundación de la Colombia Mafiosa S.A., sonada por las elites de ultraderecha, los escuadrones de la muerte y las mafias de las drogas, representadas por el Capo Álvaro Uribe Vélez.

Electo con la decidida y condicionada ayuda de las fuerzas criminales, Álvaro Uribe ocuparía el más alto cargo de la nación, con la firme idea de instalar un régimen mafioso. El terreno había sido preparado por el propio Uribe candidato, con el concurso de congresistas, gobernadores, alcaldes y concejales elegidos con el aval del crimen organizado, mediante la amenaza, el chantaje y la coerción que los narcoparamilitares han ejercido sobre la población civil en especial rural. Sin descontar la compra de votos, vieja costumbre de los dos partidos tradicionales liberal y conservador, en todo el territorio nacional y desde principios del siglo XX. Estos mismos elegidos popularmente, se encargarían de ajustar el andamio para la construcción de ese Estado mafioso tan anhelado. Además del concurso del poder civil, se contaría con la participación y pleno apoyo de la mayoría de la oficialidad de las fuerzas armadas, (Ejército, Policía, Servicios Secretos) dispuestos todos a darle la estocada final al país sensato, cubriéndolo con la hedionda bandera del crimen y la impunidad. La justicia, por su parte, cerró sus ojos, con sus parpados bien apretados, no quería ver nada y con sus oídos taponados no quena escuchar nada... se alió con su enemigo. La muda consigna para la ciudadanía era la de sálvese quien pueda.

Ya para el año 2002 el Congreso de la República era ocupado por un 35 por ciento, perteneciente a las fuerzas criminales, anuncio hecho en el mes de marzo por el propio cabecilla Salvatore Mancuso, —el del pasaporte europeo— uno de los monstruosos líderes de los escuadrones de la muerte. Meses más tarde, el 7 de agosto, la fiesta sería total. La extrema derecha —industriales, ganaderos, comerciantes, grandes propietarios de tierras, dueños y jefes de redacción de la gran prensa—, los escuadrones de la muerte, los cabecillas de la mafia del narcotráfico y las cúpulas católica y militar, celebraban cada quien en su respectivo campamento y a su manera, la posesión como primer magistrado de la nación de su representante Álvaro Uribe Vélez. Cumpliéndose la predicción del conservador narco campesino, caballista y de modales toscos Fabio Ochoa, gran amigo y socio del asesinado narcotraficante Alberto Uribe Sierra, (asesinado en un ajuste de cuentas por sus propios «amigos») padre del nuevo presidente de Colombia —muy a pesar de la mayoría de los colombianos— y quien habría repetido muchas veces, que Colombia sería gobernada en el futuro por uno de los suyos: un mafioso. O como lo apuntara con extrema precisión el escritor Rojas, en uno de sus artículos:

«... Fabio Ochoa, 'el obeso padrino de los nuevos ricos' y 'notorios' personajes imparte absoluciones comiendo siempre mandarinas, 'Tupac Amaru' el caballo de un millón de dólares, opaca con su silueta y con el pequeño lucero gravado en su frente, a las otras cabalgaduras.

Rodríguez Gacha (el Mexicano propietario del ejemplar 'disfruta las mieles de su popularidad'. Y allí en ese mismo sitio y hora esta él, el candidato (Uribe Vélez) con sus magnificas cuadrillas de caballos. Allí está el 'doctor Uribe', como le decía el Mexicano (ese sanguinario, inculto y arrogante narco-criminal), o 'Varito', como lo motejaba el gordo Fabio Ochoa (con esa voz autoritaria para adormecer culebras). Y de ninguna manera distante, sin ningún prejuicio, ni timidez alguna, sino francamente comprometido en el negocio turbio, desde la brevedad ambigua de su atuendo de paisano y sus gafas de Harvard, intercambiando toda clase de información, entre otras la pecuaria para modernizar sus dehesas, (yeguas). Daba la impresión —añade el escritor Rojas— de ser un amigo muy cercano de los padrinos caballistas. Me parece observarlo contemplando la conjunción jinete/caballo de Darío Chica (el rejoneador de los narcos), con Venus el esplendido caballo de uno de los narcotraficantes. Uribe alza su entre cejo con visible admiración, seguramente empezando a vislumbrar un país brioso y Tonto a la vez, montado por el».

Aparte de este revelador episodio en el que Uribe jamás trató siquiera de tomar mediana distancia para no involucrarse en el negocio turbio y no cotejar amistades de mala reputación, es imprescindible resaltar la reunión clandestina que se llevaría a cabo a mediados del 2001, en uno de los fuertes del narcoparamilitarismo ubicado en el departamento del Magdalena. La institucionalización del narcoparamilitarismo, no deja ninguna duda, si tenemos en cuenta lo relatado a continuación sobre la «conexión vallenata»¹⁰¹:

«La persona a la cual hare referencia y cuyo nombre omitiré para no exponer a su familia, era un miembro de la policía que fue retirado de la institución por mala conducta. Y como ocurre casi siempre con los miembros de la policía y el ejército, a los que se les retira por torcidos y hallan refugio en el bajo mundo, el individuo en referencia fue acogido por los paramilitares donde se le encomendó la realización de algunas tareas en Valledupar y sus alrededores. Entre ellas lo relacionado al pago de nomina del personal y la contratación de servicios que eran requeridos en la organización. Además, coordinaban con miembros del ejército y la policía lo referente a la movilidad del personal militar en la zona. De ahí que jamás hubo inconvenientes que impidieran la estadía de los paramilitares en zonas urbanas y rurales, igual que los desplazamientos por carretera. El ex policía se había granjeado una importancia en el manejo financiero y logístico de la organización por lo que al cabo de un tiempo se le amplió su zona de acción hasta Barranquilla, ciudad donde fijo su nuevo domicilio. A finales del 2002, según sus familiares, el ex policía fue citado por sus superiores (patrones¹⁰²) a la base paramilitar de San Ángel en el departamento del Magdalena donde debía rendir un informe sobre el manejo de los dineros que se le habían confiado. A partir de entonces sus familiares no volvieron a tener noticias de él, y hasta el día de hoy no ha estado en las desmovilizaciones ni en las fosas encontradas por las autoridades. Hoy, este torcido compatriota no es más que una cifra en las estadísticas de desaparecidos, y de quien seguramente sus familiares jamás sabrán cual fue su final. Su material orgánico bien pudiera haberse convertido en abono de las pasturas que alimentan los rebaños de Poncho Zuleta¹⁰³ en el sur del Magdalena. El recorrido criminal de este ex policía resulta ínfimo comparado al palmares del gobernador Molina¹⁰⁴ o el del mismo Poncho Zuleta, por nombrar solo dos de

¹⁰¹ Denuncia aparecida en el sitio web de la senadora colombiana Piedad Córdoba.

¹⁰² En el bajo mundo del crimen organizado las palabras jefe o comandante no existen, estas fueron inventadas por la gran prensa para referirse a los cabecillas de los escuadrones de la muerte. En el medio se utiliza la palabra patrón pues en el ámbito rural fue donde creció y mas se propago el crimen y la mafia.

¹⁰³ 'Rey vallenato'. Famoso cantante de los aires musicales de la costa atlántica colombiana.

¹⁰⁴ Hernando Molina Araujo perteneciente al clan Araujo, primo del senador Álvaro Araujo acusado de narcoparamilitarismo y María Consuelo Araujo, ex ministra de relaciones exteriores y consentida del presidente Uribe, ambos son hijos del ex ministro Álvaro Araujo Noguera, acusado de narcoparamilitarismo y secuestro.

nuestras peores lacras. Ciertamente, es poca cosa, en cambio, si resulta importantísimo el relato que se escuchara de sus propios labios en alguna ocasión, del cual llegue hacer referencia anteriormente y que ahora podría dar luces sobre algunos interrogantes que he llegado a plantearme. El ex policía manifestó en aquel momento que, a mediados del 2001 se llevo a cabo en la base paramilitar de San Ángel, una reunión de alto nivel donde estuvieron presentes todos los cabecillas del paramilitarismo, es decir, lo que se conoce como «Estado Mayor» de la organización. El evento se había programado a partir de cuando empezaron a barajarse los nombres de quienes serían los candidatos a la presidencia de la república en las elecciones de 2002, y que en el mismo estaría un «invitado especial». El relator de la historia comenta los pormenores durante el desarrollo del evento, la comida que se sirvió, el trago consumido y sobre todo, quién era ese personaje tan importante cuya presencia amentaba la convocatoria del «Estado Mayor» de las autodefensas. Y en efecto era muy importante el personaje, se trataba de un candidato a quien para entonces las encuestas solo le auguraban el 2% en las posibilidades de triunfo. El candidato a la presidencia de Colombia, Álvaro Uribe Vélez había llegado al santuario de las autodefensas en San Ángel Magdalena clamando una «ayudita». En medio del jolgorio, y quizás, ante los resultados fructíferos del encuentro, el candidato presidencial manifestó su deseo de escuchar un conjunto vallenato, y de ser posible, el de Poncho Zuleta, por lo que tan afables anfitriones se dieron a la tarea de localizar dicho interprete. Pero fue imposible ubicar a Poncho Zuleta a pesar de haberse acudido a diferentes medios. Fue entonces cuando se pensó en Diomedes Díaz¹⁰⁵, quien se encontraba prófugo de la justicia y escondido en una zona rural al norte de Valledupar, bajo la protección de (el paramilitar) alias 39. Uribe acepta que sea Diomedes Díaz y de inmediato un helicóptero de las AUC (Escuadrones de la muerte) sale rumbo al corregimiento de Badillo donde es abordado por Diomedes Díaz, partiendo hacia San Ángel donde llega a los pocos minutos. Allí, el fugitivo intérprete deleita con su repertorio al futuro Jefe de Estado, quien al final del acto le prometió que de ser elegido, en lo posible le colaboraría en la solución de su problema judicial. Esta historia vendría a reforzar la creencia que tenemos muchos colombianos en el sentido de que Álvaro Uribe Vélez es un agente de la mafia para militar y que esta misma mafia paramilitar es la encargada de ejercer la función de gobierno en Colombia. (Es gobierno). De no ser así", ¿qué es entonces lo que motiva a Álvaro Uribe y a su equipo de gobierno a ser laxos en su trato con estos delincuentes? Aterra y produce escalofrío como funcionarios del gobierno entre ellos el ministro del Interior y Justicia, Defensa, Agricultura y el Comisionado de Paz, cuando son citados al congreso, de manera descarada y sin ningún recato han asumido la defensa no de las políticas del gobierno como seria su deber, si no, de las acciones de los paramilitares. Se comportan en el atril como los portavoces de los criminales en vez de voceros de la sociedad. El relato del ex policía además, nos pone a pensar en lo que pudo pactar Uribe y los paramilitares en esa ocasión, porque lo que si es un hecho, es que no fue una mera parranda lo que se dio allí. Esta tuvo ocasión solo al final del acto. La respuesta podríamos encontrarla en las penas irrisorias que pagaran estos delincuentes por sus crímenes atroces, la metamorfosis que experimento su estatus criminal que convierte al narcotráfico y las masacres en delito político, la garantía de conservar sus inmensas riquezas mal habidas y otras gabelas.

Y aun no creen que Uribe sea rehén del narcoparamilitarismo. A mí no me cabe la menor duda. Y es que después de ver a Álvaro Uribe acudir ante el hombre más rico del mundo. Bill Gates, a implorarle una «ayudita» para los paramilitares desmovilizados, mientras que a la mitad de sus compatriotas los desvanece el hambre, cualquier cosa es posible en este hombre».

¹⁰⁵ Diomedes Díaz, otro 'rey' vallenato, había sido condenado por el asesinato de su compañera, muerta en extrañas circunstancias y en posesión de cocaína. Este cantautor vive la vida hoy día entre el canto, la droga y el alcohol.

Pero este no sería el único ni el último encuentro entre políticos y las cabecillas del crimen organizado, ya que gobernadores, alcaldes, concejales y congresistas irían a reunirse¹⁰⁶ en muchas ocasiones entre los años 1999-2001, con cabecillas y algunos mandos medios de los escuadrones de la muerte y el narcotráfico para «Refundar la Patria»¹⁰⁷. El proyecto consistía en crear una especie de «partido único», en el cual habría cabida exclusivamente para cabecillas narcotraficantes y paramilitares, ciertos juristas, gran parte de la oficialidad militar y la gran mayoría de políticos comprometidos con la causa mafiosa. Los pasos a seguir serían el de continuar la expansión narcoparamilitar a todos los departamentos y rincones del país, acaparando más gobernaciones, alcaldías y concejos municipales; elegir un líder político afín y comprometido con la 'causa', para que fuera presidente del país, por un tiempo bastante holgado —ya que cuatro años no eran suficientes para los cambios fijados— de tal manera que pudiera proporcionarle a paramilitares y narcotraficantes la tranquilidad de espíritu y de acción en sus labores, así como la continuidad en el poder de los representantes del viejo y corrupto sistema político, que las mafias ayudaron a imponer a punta de pistola y chanchullos, en estas últimas seis décadas. Por su parte los narcoparamilitantes se encargarían de ofrecer una buena y tierna propaganda en favor de los criminales para que el inmenso público se fuera poco a poco familiarizando de sus 'altruistas' acciones y 'bondadosos' rostros. Se buscaba una tranquilidad general que autoridades políticas regionales no tenían la capacidad de proporcionar a estos narcoparamilitares, a la mafia, si no solamente a título meramente local y provisional. Se necesitaba por lo tanto, apoderarse de la jefatura máxima del Estado, para que desde allí, salieran acuerdos, reglamentaciones y sobre todo leyes impulsadas por ese gobierno amigo y aprobadas por ese legislativo amigo, dejando la vía libre para desgastar y si había posibilidad, anular las graves acusaciones, que enfrentaba la mafia y el crimen organizado, como la extradición y en especial crímenes contra la humanidad, entre otras aberraciones. Estas leyes, entonces, serían elaboradas con bastante esmero, para que 'para-narcos' jueces obraran en consecuencia para servirles a los impulsores de la «refundación de la patria», al ghetto mafioso. Por consiguiente la Justicia se sometería enteramente al dictado de los nuevos dueños del poder. Se pacto evitar a toda costa, cualquier acercamiento y mucho menos acuerdos o negociaciones entre el 'refundado Estado' y las guerrillas de izquierda, que pudiera desentrabar ese largo y doloroso conflicto armado colombiano.¹⁰⁸ Los poderosos intereses político-económicos obligan.

Dentro de ese macabro proyecto de 'refundación', habla uno de una gran importancia e inmediata puesta en acción, la de limpiar definitivamente a Colombia de comunistas y auxiliares de las guerrillas, eliminándolos físicamente para erradicar su 'nefasto' pensamiento¹⁰⁹, el cual, según la extrema derecha

¹⁰⁶ Varias reuniones se efectuaron en suntuosos hoteles y clubes al norte de la capital de la república, Bogotá. El club el Nogal es una de las 'sedes' de los narcoparamilitares a donde asistían políticos, empresarios, dueños y directores de los medios de prensa y hasta religiosos para entrevistarse con criminales y cabecillas de la mafia. El presidente de la junta directiva de dicho club fue Fernando Londoño Hoyos, nombrado por Uribe al comienzo de su primer mandato como Ministro del Interior.

¹⁰⁷ La palabra refundar, misma si no existe en el diccionario, tiene una connotación para la mafia narcoparamilitar en su proyecto de crear un Estado a su medida. Significaba entonces, la destrucción del Estado de Derecho.

¹⁰⁸ Los sectores pudientes más reaccionarios del país, junto con la poderosa prensa se encargarían de sabotear y desprestigiar al máximo, las negociaciones de paz entre el gobierno de Pastrana y la guerrilla de las FARC.

¹⁰⁹ En Colombia hizo carrera la diabolización de líderes cívicos, sindicalistas, líderes sociales y defensores de presos políticos a los cuales se les sindicaba de comunistas, mismo si muchos no lo son y también profesores, periodistas independientes o alternativos y defensores de los derechos humanos son también etiquetados como comunistas por el simple hecho de no estar de acuerdo con las políticas gubernamentales o por denunciar los actos de corrupción de los políticos en el poder. Los líderes campesinos reciben el estigma de auxiliares de la guerrilla cuando exigen del Estado y sus fuerzas armadas respecto por su neutralidad en el conflicto armado. En la mayoría de casos, indefensos campesinos han sido asesinados fríamente y mostrados por el ejército como auxiliares o guerrilleros. En las pocas investigaciones que han logrado salir a la luz pública, se comprobó la inocencia de estos campesinos y el acto criminal del ejército en su afán de mostrar resultados al presidente Uribe en su lucha antisubversiva.

empresarial, seguía siendo un obstáculo para el libre y buen funcionamiento de los negocios y sus jugosas ganancias. Con un 'partido único' narcoparamilitar superior en todas sus formas a la doctrina de pensamiento único y con el control de los tres poderes del Estado, con la adhesión incondicional de las fuerzas militares, con el concurso de la mediana y gran empresa en su mayoría untadas de narcotráfico, los 'refundadores de la patria' veían en la toma del poder absoluto el camino expedito, la mejor forma de lograr liberalizar y globalizar el comercio ilícito de las drogas y así evitar los molestos controles internos. Igualmente, seguirían afianzando la mezcla de la gestión del mercado ilícito con la economía estatal no solo en los barrios, comunas y pueblos, sino extendiéndola a las grandes ciudades y departamentos por medio de vastos contratos en los rubros de la salud, la educación, el transporte, la agricultura, el aprovisionamiento en armas, los juegos de azar, las licorerías departamentales y los deportes, con el balón-pie a la cabeza. El Estado regentaría lo lícito e ilícito, siendo todo lícito ante los ojos del mundo. La poderosa prensa (la autocensura ha sido la norma) reventaría todo pesimismo hablando de las bondades del 'nuevo' gobierno uribista, de esa magnífica 're-fundación de la patria' sin nombrar y de las bondades de libertad del sistema capitalista, con el aval del gobierno estadounidense que no tiene por qué preocuparse, o mejor casi ninguna preocupación, por cuanto más del 80 por ciento de las millonarias sumas de dinero producto del comercio del polvo blanco, aterrizan en sus insaciables áreas. La oposición la reducirían a su más mínima expresión, con lo cual el «nuevo gobierno», ese creado por el ghetto mafioso, estaría exento de señalamientos indeseables o de cualquier pequeña desestabilización interna, por desarrollar una política laxa o complaciente frente al crimen organizado y la mafia. Se utilizaría toda la maquinaria de guerra en la derrota de la oposición armada —guerrillas de izquierda— y para este suceso también se contaba con la firme y condicionada ayuda militar del gobierno de los Estados Unidos, (pues como lo analizaron acertadamente los 'refundadores de la patria', los gringos no dimitirían por nada de este mundo en su lucha militar para derrotar a las guerrillas marxistas) pendientes ante todo de la ganancia financiera, la ganancia empresarial y la ganancia mafiosa. Contentas las transnacionales estadounidenses y otras transnacionales (europeas) a lo largo y ancho de la geografía colombiana, el gobierno del país del norte no tendría sino que apoyar las políticas —mismo genocidas— del 'nuevo' régimen colombiano, dopado boyantemente en su economía gracias al narcotráfico, pero sobre todo lanzado a la ciega privatización de sus más estratégicas e importantes empresas en beneficio del capital mundial. Los opositores a estas políticas, serían simplemente tratados

Por su parte los elegidos popularmente, llámense estos alcaldes, concejales, gobernadores o diputados conformaban el triángulo satánico con las directivas de las transnacionales y los narcoparamilitares, ejerciendo toda clase de intimidaciones y haciendo oídos sordos a las reclamaciones públicas de los directamente interesados y de sus administrados. Para los elegidos locales departamentales y nacionales, las denuncias son tan solo una forma de hacerle el juego a las terroristas guerrillas y otros han declarado que los sindicalistas asesinados son simplemente guerrilleros disfrazados de sindicalistas. Esta ha sido la treta asumida por empresarios, políticos y escuadrones de la muerte para actuar en la más completa impunidad y así continuar con sus horribles crímenes. Un ejemplo doloroso fue el del asesinato de varios trabajadores de la empresa Coca Cola. Líderes sindicales y algunos de sus familiares fueron asesinados por los escuadrones de la muerte de Carlos Castaño en el norte del país. Los terroristas ingresaron en varias ocasiones a las instalaciones de dicha empresa y obligaron a los trabajadores a escuchar sus arengas y amenazas, acusando de paso a los representantes de los trabajadores de ser auxiliares de la guerrilla. Por su parte los directivos de Coca Cola hacían como si nada hubiese ocurrido. A partir de 1992 comenzaron a ser asesinados sindicalistas como José Gabriel Castro; José Manco David; Luis Enrique Gómez; Isidro Segundo Gil entre otros. Situación similar han sufrido los empleados de las compañías bananeras Chiquita Brands, Banacol y otras, la empresa carbonífera Drummond, las petroleras Oxxi, Repsol y British Petroleum entre otras, Ecopetrol y Nestlé por solo nombrar una cuantas. La empresa bananera Chiquita Brands, alias Company Fruits, financió a los narcoparamilitares durante varios años aportándoles alrededor de 1.7 billones de dólares. Los obreros del banano asesinados en las dos últimas décadas asciende a 3.378 trabajadores. Es más, el 18 de marzo de 2007, la empresa carbonífera Drummond organizó un fastuoso almuerzo al cual fue invitado especialmente el Patrón Álvaro Uribe, con ocasión de la reunión interamericana de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) en la ciudad de Cartagena, reunión en la cual, los patrones de la prensa aplaudieron al mafioso presidente durante un buen rato. Cabe recordar que en el 2001 el presidente de la Drummond Augusto Jiménez pago aproximadamente 200 mil euros al cabecilla de los escuadrones de la muerte Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', para eliminar varios sindicalistas. Entre los asesinados están Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasista y Gustavo Soler, quienes fueron cobardemente asesinados. El Patrón Uribe, jamás se refirió a estos asesinatos, ni mucho menos ha condenado estas prácticas.

con monstruosa rudeza, siendo asimilados a los grupos guerrilleros o 'terroristas' y así justificar su diaria persecución y exterminación y a los neo asesinatos extrajudiciales por parte de la fuerzas armadas.

Las transnacionales estadounidenses y europeas ya habían aportado su granito de arena para sostener y financiar la paranarcodemocracia colombiana, con el pago de millones de dólares a los escuadrones de la muerte y aprovisionándolos en armas y asesoría militar, sin poder precisar, pero con fuertes sospechas que esta ayuda, era revertida por la mafia colombiana a estas transnacionales en cocaína. Lo realmente constatado ha sido el terror ejercido por el narcoparamilitarismo contra los líderes sindicales y sus familias líderes pertenecientes a las numerosas empresas extranjeras radicadas en el país y las cuales azuzan a estos grupos de muerte y militantes del ghetto mafioso a asegurarles una tranquilidad laboral, empresarial y extraordinarias ganancias, mediante el asesinato y la desaparición de los líderes sindicales y hasta sus familias, quienes han pedido 'demasiadas' contemplaciones laborales y económicas para los obreros y trabajadores. Las maniobras de intimidación y amenaza se ejerce igualmente contra los asalariados —y al interior mismo de las empresas— que intentan acompañar solidariamente a los sindicatos en sus luchas reivindicativas, los narcoparamilitares con la plena anuencia de las directivas empresariales, obligan a los trabajadores a acudir a las reuniones por ellos convocadas, para que escuchen sus amenazas y la irreversible prohibición de sindicalizarse, so pena de sufrir las consecuencias. Consecuencias a saber: muerte, desaparición y/o el asesinato de sus mismos familiares.

Con la toma del poder por parte de la mafia narcoparamilitar en cabeza del Capo de capos Álvaro Uribe Vélez y el nombramiento en ministerios y otros altos cargos estatales de militantes de los carteles de la droga de Cali y Medellín (Carlos Holguín Sardi, Sabas Pretel de la Vega, José Obdulio Escobar, María Consuelo Araujo, Mario Uribe, Oscar Iván Zuloaga, Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Arias, Jorge Noguera Cotes y Francisco Santos entre muchos otros), la 'refundación de la patria' era una hecho casi consumado para aplicarlo durante años y a la par estrenaba la maravillosa ley de 'justicia y paz', que iría a proteger y dejar fuera de toda sospecha criminal a políticos y lograr una impunidad total para testaferros económicos y empresariales, una impunidad parcial para los cabecillas narcoparamilitares, —de antemano negociadas— con penas de un máximo de ocho años, por crímenes atroces cometidos a lo largo de más de tres décadas. Ante esta monstruosa espiral criminal y antidemocrática, los Estados Unidos y sus aliados de Europa no hacían presencia para defender los valores democráticos que 'susodichamente' han defendido en el continente y el mundo, desde un día antes de erigirse en imperios. El Departamento de Estado seguiría acusando a los movimientos armados de izquierda, en especial a las FARC de narcoguerrilla, mientras que en una maniobra oscura y traidora, hacia el pueblo colombiano, negociaba con puros y duros narcotraficantes, su entrega física a la justicia, la entrega de sus fortunas, (punto importante) entrega de rutas de comercio de la droga y delación de sus compinches a cambio de una irrisoria pena de prisión y cambio de estado civil¹¹⁰. El pueblo colombiano poma los muertos y el gobierno estadounidense recogía los enormes frutos económicos de la venta de cocaína.

¹¹⁰ Según los datos aportados por agentes de la DEA estacionados en Bogotá y amigos de la mafia narcoparamilitar colombiana. Narco News Bulletin, comunico en su sitio internet, que David Tinsley agente de la DEA se acuso de negociar sin autorización rebajas de penas de narcotraficantes colombianos ante la justicia de Estados Unidos, fue el mismo, quien denunció la inmensa corrupción de agentes pertenecientes a esta entidad. Según Narco News, el antiguo jefe de la DEA en Colombia Leo Arrequin, intento silenciar a Tinsley, cuando este acuso que agentes recibían dinero de los narcotraficantes en Bogotá. El caso salió a la luz pública cuando a finales de 2005 un documento interne del Departamento de Justicia, escrito por Thomas Kent, abogado al servicio del departamento de narcóticos y drogas peligrosas, acuso a agentes de la DEA de 'hacer parte de la nómina de los narcos', participan en el blanqueo del dinero sucio y estarían envueltos en varios asesinatos de informantes que sabrían de sus maniobras. El Nuevo Herald de Miami publico a principios de 2006 que en el informe llamado «memo Kent» agentes de la DEA torpedearon los esfuerzos que hacia esta entidad para enlistar como informante al reconocido narcotraficante del Valle del Cauca José Nelson Urrego, quien supuestamente aportó fondos a la campaña presidencial de Ernesto Samper.

Recordemos también que en 1999 un coronel de la embajada de Estados Unidos en Bogotá y su esposa, fueron encontrados culpables de enviar varios kilos de cocaína hacia el país del norte vía la agenda de correos Adpostal.

Comparadas las sumas recibidas por los estadounidenses por concepto de fortunas entregadas por varios cabecillas del narcotráfico colombiano y otros de menor importancia, con respecto al monto destinado a la supuesta lucha contra este flagelo, este es aproximadamente de cien dólares recibidos por cinco destinados a la supuesta lucha¹¹¹.

Y no solo en el ámbito económico, el gobierno del país del norte se lucía, en lo que respecta a la situación política en el país también, Pues, Álvaro Uribe, a quien ellos mismos habían acusado en 1991 de pertenecer al Cartel de Medellín y de haber sido gran amigo y asiduo colaborador de don Pablo, el peligroso narcotraficante, disponía de una total libertad para llevar a cabo su agenda narco política. Para la inteligencia del país norteamericano, no tenía ninguna importancia las relaciones de Uribe con los principales narcoparamilitares, ni mucho menos que gracias a estas nada recomendables amistades, mas truculentas maniobras haya logrado tomar el poder absoluto en un país que todo el mundo señalada, acusa y hasta humilla y desprecia a sus honestos habitantes, sin conocer su realidad social política y económica.

Uribe inmediatamente posesionado se hizo rodear de notables narcoparamilitares como el general Rito Alejo del Rio asesor militar y acusado de masacres cometidas con los escuadrones de la muerte; Obdulio Gaviria asesor presidencial y quien era el mensajero personal del criminal narcotraficante Pablo Escobar, además de ser su primo hermano; Pedro Juan Moreno, otro asesor presidencial e importador de insumos para los narcos de Medellín; María Consuelo Araujo, Ministra de Cultura y en el segundo mandate de Uribe, Ministra de Relaciones Exteriores, perteneciente al poderoso clan de la familia narcoparamilitar Araujo, de la Costa Norte de Colombia; Jorge Noguera, jefe de los Servicios de Seguridad del Estado (DAS) amigo personal del presidente y enlace con la mafia narcoparamilitar de la Costa Atlántica; Martha Lucia Ramírez Ministra de Defensa y traficante de armamento pesado en compañía de su esposo; y nombrando como jefe del ejercito a Carlos Alberto Ospina Ovalle, denunciado con bastante anterioridad por las Organizaciones de Derechos Humanos por su participación junto a los escuadrones de la muerte en masacres, desapariciones y torturas. Así como el nombramiento de uno de los más conservadores caciques de Antioquia y narcoparamilitar convencido Fabio Valencia Cossio, en calidad de asesor presidencial. Como ministro del Interior nombro a Fernando Londoño Uribe, un neofascista acusado por el robo de varios millones de dólares a la Empresa Colombiana de Petróleos, utilizando documentos falsos. Este fue parte del 'brillante' y primer gabinete del espurio "presidente Uribe", enteramente validado por el gobierno norteamericano y la comunidad europea. Colombia era por fin gobernada por uno de los suyos, como lo deseo Pablo Escobar y lo repitiera el traquete gordo y cabeza del clan Ochoa, Fabio. Y correctamente vaticinado por el escritor Rojas. «Uribe había montado ese país Brioso y Tonto a la vez».

En el ámbito domestico el país se sumergía en una guerra total, la política mafiosa de la 'seguridad democrática' se aplicaba con fiereza, la guerrilla debía ser aniquilada en seis meses a punta de cañonazos y bombas según la orden presidencial, los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos, así como los sindicatos deberían ser interpelados y reprimidos por su 'similitud ideológica' con los «terroristas» (guerrilleros) y entre tanto, los escuadrones de la muerte continuaban su concierto de muerte y trafico de cocaína amparados en las «negociaciones de paz» con el gobierno del espurio presidente Uribe.

¹¹¹ El caso patético se puede observar en la negociación entre los narco hermanos Rodríguez Orejuela con la justicia estadounidense. La dupla Rodríguez firmo un documento en el cual se comprometen a entregar toda su fortuna al gobierno estadounidense y que ni ellos ni ninguno de sus familiares entablan o entablaran procesos contra el Estado norteamericano para recuperar dineros o bienes inmuebles. A cambio los Rodríguez recibieron rebaja de pena y una completa tranquilidad judicial para toda su familia.

Las compañías extranjeras —Coca Cola, Droumond, British Petroleum, Bananas, Chiquita Brands, Nestle y Sagem¹¹² entre otras recibían total libertad para continuar a imponer su ley, intimidando y asesinando sindicalistas y surtiendo en dinero y armamento a los escuadrones de la muerte que hacían, sin pausa alguna, el sucio trabajo de liquidar sindicalistas con la ayuda del ejercito.

La Fiscalía General, en representación del ministerio publico se dedicaba a esconder expedientes de narcotraficantes y el mismo Fiscal General Luis Camilo Osorio se encargaba de archivar o coartar el trámite de procesos contra peligrosos narcoparamilitares, y hasta se dio el lujo de licenciar a fiscales del departamento de derechos humanos, quienes preparaban ordenes de captura contra los cabecillas del crimen organizado y la mafia. Varios de estos fiscales tuvieron que salir del país por amenazas de muerte. Igualmente el Fiscal General, se encargó de archivar el proceso que se le seguía al hermano del “presidente” de la república, Santiago Uribe, por los delitos de concierto para delinquir y conformar grupos armados ilegales de extrema derecha que en los años 90 asesinaron en el departamento de Antioquia a más de cien personas. En cambio, este mismo organismo en compañía del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Ejercito y la Policía comenzaban sus diabólicas detenciones masivas con nefastos resultados para la casi totalidad de población civil inocente. Decenas de hombres y mujeres eran arrestados, muchas de las veces sin orden judicial y contraviniendo los mínimos derechos humanitarios, siendo acusados de «terroristas». En la mayoría de las veces las «pruebas» eran aportadas por 'ex guerrillero' o 'desmovilizados' —narcoparamilitares— como les llama el gobierno, pero también por mujeres y hombres encapuchados, los cuales recibían la mitad de la recompensa prometida por el gobierno, por denunciar a los terroristas, pues la otra mitad era destinada para el comandante de la patrulla militar o de policía. Con listas en mano, señalaban a los 'auxiliares' de la guerrilla o a los milicia nos de esta misma. Indígenas, campesinos, sindicalistas profesores, periodistas y hasta simples funcionarios serían encarcelados y torturados bajo la falsa acusación de terrorismo, sin que tuvieran la debida defensa. En muchos casos en los que abogados de organismos de derechos humanos se personaban de tal o cual caso de un sindicato, eran amenazados de muerte. Varios abogados han sido asesinados en el ejercicio de su profesión defendiendo a estos inocentes, otros han tenido que exiliarse. De las decenas de arrestados, en las múltiples incursiones militares o policiales, la gran mayoría de los infortunados capturados —el 90 % aproximadamente— recuperaban su libertad al cabo de meses y a veces de años, con sus vidas despedazadas, su dignidad destruida, vapuleada y un destine incierto y lleno de temores. Ninguna importancia para este gobierno por el mal causado, por la desesperada situación en que dejan a sus víctimas, pues, esta puesta en práctica la incontenible y perversa «seguridad democrática».

Los poderosos medios de comunicación se adaptaban fácilmente a las ordenanzas del gobierno de turno, con un comportamiento alcahuete y falta de toda ética, —de tiempo atrás se habían convertido en quinta columna del sistema— dejaban de informar sobre hechos mayúsculos que hundían aun más el país en el fango y la infamia, por una información barata y mas que trivial. Su propaganda progubernamental, destila un hediondo perfume de perversión y engaño, reconocible apenas con el conocimiento casi milimétrico de la historia y acontecimientos pasados y presentes de la nación y su espinoso andar en esos intrínquilos pasillos de trampas, traiciones y arreglos de cuentas, que existe en la política capitalista. Su apoyo incondicional al Patrón, presidente de la mafia Álvaro Uribe, no parecía haber sido precedido por una profunda reflexión en favor del interés nacional, sino mas bien, por su compromiso con el poder narcoparamilitar y el aprovechamiento al máximo de las ganancias que otorga este corrompido poder, confortando todo su poderío (des)informativo, sobre una masa ingenua y a veces estúpida y sin tiempo de reflexionar. Lo cual permitiría que propietarios y directivos de estos poderosos medios informativos, (?) influenciaran negativamente en la formación de la opinión publica, con el propósito de que esta comprase cualquiera de sus productos negociables, que van desde un simple jabón, hasta un espurio presidente de la república. El derecho del ciudadano a estar debidamente

¹¹² Esta empresa francesa fue acusada de pagar 'favores' a la funcionaria de la Registraduría Nacional Ana María Araujo Castro, perteneciente a la narcoparamilitar familia de los Araujo.

informado paso a un tercer piano, era como ese sueño juvenil de alcanzar una luminosa estrella allá en el firmamento, es decir una Utopía. La información devenía en una mera mercancía perdiendo todo su resplandor natural.

Un acuerdo secreto sería llevado a cabo por los principales dueños, directores y jefes de redacción de los más importantes medios informativos (vistos, leídos y escuchados) con el crimen organizado, para tratar de silenciar en lo posible sus abominables maniobras criminales y banalizar sus sucios negocios de tráfico de drogas, así como la de desacreditar los pasados diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC. Aun cuando no es de conocimiento público este encuentro, la reunión tuvo lugar y ha sido uno de los secretos más celosamente guardados. Lo cierto es la forma como la poderosa prensa nacional iría a simplificar y en muchas ocasiones, minimizar el accionar narcocriminal de estos grupos de extrema derecha. Al siguiente día de dicha reunión, periodistas y reporteros fueron 'invitados' a informar con mas benevolencia sobre el accionar narcoparamilitar, a denominárseles únicamente con el sugestivo y agradable nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en lugar de ser llamados, Paramilitares o Escuadrones de la Muerte. Por el contrario, periodistas asalariados y empleados de las salas de redacción se les impuso tratar mas drásticamente y sin límites de criminalización a las guerrillas de izquierda, a las cuales no había que bajarlas del pedestal de terroristas. Según el testigo de ocasión, los narcoparamilitares se habían quejado de la forma inadecuada como eran tratados por los medios informativos. El cabecilla narco-criminal Carlos Castaño, secundado por su homologo Salvatore Mancuso, no solo amenazaron a los periodistas recalcitrantes que no cumplieran con el designio informativo por ellos trazado, como también, al pequeño e independiente periodismo alternativo, ausentes en dicho encuentro, sino que también pidieron más solidaridad con 'la causa' de parte de los grandes y poderosos medios informativos. El objetivo era una completa colaboración de toda la prensa nacional y el debido tratamiento —'especial'— hacia las guerrillas de izquierda. Había que satanizarla Pues la guerra también había que ganar en las salas de redacción. Con demostrativos titulares de prensa, con artículos y reportajes que demostraran «la realidad» terrorista de las guerrillas. Fue a si, como el desprestigio de los movimientos subversivos se llevo al extreme de la mentira repetida una y mil veces, con infundadas acusaciones y montajes de toda índole que provenían sobre todo de las fuerzas armadas, pero también con otras 'pruebas' fabricadas en las salas de redacción, que mostraban 'el siniestro andar guerrillero y su inclemente accionar contra la población civil'¹¹³. Por el contrario, pese a

¹¹³ El diario de El Tiempo de Bogotá, único periódico existente a nivel nacional, publico en abril 2006 sobre el asesinato del Corregidor de Toche Arturo Díaz. El corresponsal en Ibagué, departamento del Tolima, al parecer, el que origino la noticia, informo que Arturo Díaz, había recibido varias amenazas a comienzos del 2005. 'El 11 de diciembre, (2005) día de las elecciones a la gobernación del Tolima, Arturo Díaz, el corregidor de Toche, sostuvo un fuerte alegato con «Enrique», comandante del (rente 50 de las PARC. La discusión se generó por que el jefe guerrillero había ordenado la destrucción de las mesas de votación, e incluso, había amedrentado a la población para que no votara. Sin embargo el corregidor se opuso y defendió a los sufragantes (...) días después de ese incidente, al parecer un grupo de milicianos de las FARC llegaron al caserío, sacaron a Díaz de su casa y lo asesinaron en una de las vías de la localidad. L)n punado de familias llevo a (Cajamarca)... huyendo por temor a una nueva incursión de los guerrilleros... 'Pero otra es la información del diario local El Nuevo Día. 'En el panfleto que llegó... amenazaban a unos campesinos que les daban destierro... y al corregidor, decía que lo asesinaban en cualquier momento, recordó la viuda de Díaz García. Según narró Gladys Camacho, (esposa de Arturo Díaz) luego de la aparición del panfleto, que sembró el terror entre la comunidad y llevo a seis familias de Toche a abandonar la zona de inmediato, el corregidor estuvo hablando con el alcalde, 192 el secretario de gobierno y todos los organismos de seguridad (...) Luego de esto, el domingo 26 de junio, (2005) en operativo realizado por efectivos de la Sijín, (inteligencia de la policía) el corregidor de Toche fue detenido en Cajamarca y conducido hasta Ibagué para que rindiera indagatoria ante la Fiscalía por el delito de rebelión. Así lo recordó Gladys Camacho, casada hace 12 años con Arturo Díaz, quien indico que se le adelantaba una investigación por «presuntos vínculos con la guerrilla y todo era falso»... El martes 28 de junio Arturo Díaz salió en libertad y siguió trabajando normalmente. Tras esta detención, el temor parecía estar latente en el corazón del corregidor, quien en su último dialogo con su esposa le dijo que creía que lo iban a matar. Gladys Camacho relato el dialogo de la siguiente manera: «Mamita tenga muchas fuerzas y valor porque yo creo que a mí me matan. Le dije, porque papito, y dijo, yo que tengo muchas amenazas, yo he pedido mucha colaboración al Estado y no me la han brindado y yo por ustedes luchare hasta que me maten o lo que sea». El me había comentado que estaba el ejercito por allá, que eso estaba delicado, pero que a el le tocaba ejercer su labor... 'El diario local comentó igualmente, que la situación en la zona es difícil y que ha habido fuertes enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército, pero en ningún momento, había sobre la culpabilidad de las PARC en el asesinato del funcionario Arturo Díaz. 'La situación siempre ha sido tensa y lo fue más con la aparición del

las continuas denuncias de organizaciones indígenas y campesinas sobre los horribles crímenes cometidos por los escuadrones de la muerte contra la población civil, el robo de sus tierras e innumerables desplazamientos forzados, la poderosa maquinaria informativa era tuena, hasta ciega, su estruendoso y monstruoso silencio no dejaba sin aliento, muchas de las masacres y asesinatos selectivos cometidos por los escuadrones de la muerte, eran achacados a las guerrillas, apareciendo en los principales titulares de la poderosa prensa nacional, siendo desmentidas fugazmente mucho tiempo después, cuando exhaustivas investigaciones —de las pocas que se logran llevar a cabo daban cuenta de la participación o la responsabilidad del crimen organizado, la mafia o las mismas fuerzas armadas. Había que seguir dándole a ese brioso y a la vez tonto pueblo colombiano más circo a falta de pan; pues, a pesar del deterioro socioeconómico de la población, el alto desempleo, la extrema pobreza y las masacres cotidianas, en Colombia, no pasaba nada. Los titulares de prensa, radio y televisión seguían mostrando reinados de belleza, festivales musicales, telenovelas baratas y toda clase de mamarrachadas nacionales y sobre todo 'gringas', y haciendo siempre alusión en los noticieros de televisión, la radio y las primeras páginas de los diarios, sobre una democracia estable y la ascendente popularidad del presidente Uribe, omnipresente y asiduo invitado.

Esta peculiar situación no era para nada ingenua, por cuanto uno de los dueños de la poderosa prensa nacional, Juan Manuel Santos, había fungido como ministro de hacienda en el gobierno de Pastrana, y su primo hermano Francisco Santos, es el vicepresidente de la república, ambos dueños del diario El Tiempo y la revista Cambio entre otros. Y ambos entrañables amigos del narcoparamilitarismo. Para su segundo periodo presidencial, reelegido con el pleno apoyo del narcoparamilitarismo el mafioso presidente Uribe, seguiría siendo acompañado por Francisco Santos, como vicepresidente y su primo Juan Manuel Santos, sería nombrado tiempo después por Uribe, en calidad de ministro de defensa.

Pero el fangoso quehacer de la poderosa prensa nacional, no se limita solamente a mentir y desinformar a la opinión pública nacional, igualmente se ha prestado para encubrir el real andar criminal de los escuadrones de la muerte y más exactamente de sus genocidas cabecillas. Fue así, como los reconocidos medios de prensa escrita: la Revista Semana y el diario El Espectador y el diario de El Tiempo, se prestaron comedidamente para ofrecer a la opinión nacional, publinreportajes que presentaban a varios asesinos del narcoparamilitarismo como brillantes hombres del campo u honorables comerciantes de paz, celosos del bien estar y la seguridad nacional. Los favorecidos con estos falaces publinreportajes fueron los sanguinarios cabecillas Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'; Ramiro Vanoy, alias 'Cuco Vanoy' y Hernán Giraldo Serna, responsables los tres juntos del asesinato y masacres de más de mil colombianas y colombianos indefensos y a quienes les fueron robadas sus tierras. La revista Semana, ofreció a los colombianos en su publinreportaje a un hombre con sentimientos y amante de la paz, a un campesino de la Sierra Nevada de Santa Marta, que lo primero que exigió fue no ser extraditado hacia los Estados Unidos y lo último que dijo fue que se desmovilizaba 'porque ahora, si tenemos al presidente Uribe' añadiendo 'por eso lo apoyamos y le creemos'. Aun cuando la revista Semana no puede esconder la criminal trayectoria de este viejo narcoparamilitar, no ahorró esfuerzos en presentarlo como un 'Salvador' de la subversión. Por su parte, el diario de El Espectador en su publinreportaje, presento a otro genocida Carlos Mario Jiménez, como un «Empresario de Paz», para este periódico el más antiguo del país, el asesinato de infantes, mujeres, Ancianos y hombres es una gran 'empresa'. Y por su parte, El Tiempo único diario de circulación nacional no se

panfleto firmado por las AUC el 25 de marzo, viernes santo. Un día después de ser conocidas las amenazas las autoridades indicaron que no serían de las autodefensas (paramilitares) y que se trataría de un grupo de delincuencia común que quena sembrar el terror entre la comunidad y generar así un desplazamiento.'... La esposa del corregidor Díaz, nunca nombro a las PARC ni al tal comandante «Enrique». Ni tampoco los acuso de ser los autores de la muerte de su esposo. ¿De dónde sacó, o que fuente utilizó el periódico el Tiempo para escribir que las FARC habían amenazado al corregidor y habían saboteado las elecciones? ¿Cuál es su real objetivo al lanzar una falsa información? A nuestros lectores de analizar sobre el verdadero espíritu informativo de uno de los más grandes y serios periódicos del continente americano. Pero lo realmente inquietante, es que este es un ejemplo de los miles de casos, en que la prensa nacional ha manipulado o presentado falsas informaciones.

inhibió tampoco en recibir varios millones de narco-pesos manchados de sangre de colombianos inocentes, dándole cabida en sus páginas a otro de los más grandes y sanguinarios criminales que haya tenido el país en su historia, Ramiro Vanoy, a quien igualmente se le quiso presentar como otro de los 'salvadores' de la democracia capitalista colombiana. El dios dinero es el que manda y la filosofía capitalista no repara en nada.

Otros hechos escalofriantes, han sido vistos en directo por el pueblo colombiano. Los poderosos medios televisivos presentan sin pudor ni confirmación alguna, campesinos, estudiantes, obreros, trabajadores asesinados por el ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate. En el mejor de los casos muchas y muchos de estos inocentes son presentados vivos en calidad de «terroristas» pertenecientes al movimiento subversivo tal o cual, y sin que haya habido de por medio una seria investigación. Tiempo después de confirmarse el craso error, estos mismos medios de televisión no tienen el mas mínimo escrúpulo en esconder la verdad dejando sin desmentir el 'scoop informativo', entregado con bombos y platillos. Los anunciadores necesitan público, se necesita audiencia y poco importa la veracidad de una información, lo ideal es ser el primero, tener 'la exclusividad', la noticia que produzca histeria o falsas expectativas. Al fin y al cabo la mayoría de los ultrajados a que se hace referencia, no poseen muchos recursos económicos, en el caso que deseen pedir a la justicia reparación a su pisoteada dignidad. Pues en la democracia capitalista sin dinero no hay justicia.

El plan para «refundar la patria» había funcionado a lo largo del primer mandato del narcoparamilitar “presidente Uribe”. Las eficaces 'cortinas de humo' habían permitido que señalamientos de corrupción, tráfico de droga, crímenes contra la población civil, efectuados por los escuadrones de la muerte y la fuerza pública, (achacados a la subversión) pasaran a un segundo piano. La complicidad de altos funcionarios del gobierno y de congresistas con el crimen organizado se banalizaría, desertando los titulares de la poderosa prensa. La noticia de un hecho importante era cubierto por otro en tan solo doce o veinticuatro horas, dejando al primero en el olvido; un cargamento de cocaína perteneciente a oficiales del Ejército era tapado con otro suceso, en el cual, el presidente reganaba a sus subalternos en directo por televisión por no hacer las cosas bien, en la lucha contra la subversión; el asesinato de un líder sindical o incomodo periodista era tapado rápidamente con un derrumbe en la región central del país, a la cual el presidente exigía una ayuda inmediata, ayuda que jamás llegaría; la noticia sobre militares acusados de asesinato se desvanecía rápidamente con la intervención del presidente desde la sede presidencial o en tal o cual lejana comarca del país, — con su circense Concejo Comunitario— solidarizándose con los militares y demitiendo sin conocimiento de causa las acusaciones, a la vez que, se agitaba y con improperios arengaba contra los 'terroristas' de las PARC, acusándolos de todos los males, y prometiendo de paso a los habitantes del lugar —obligados a punta de metralleta a asistir al consejo comunitario y aplaudir al presidente— mas atención gubernamental, ayudas económicas y protección, algo que nunca su gobierno ha cumplido a los colombianos, sobre todo del campo, en su largo y angustioso mandate; las diversas acusaciones en contra del espurio presidente sobre su criminal pasado y los crímenes de sus hermanos y primos, eran rápidamente desmentidos desde la Casa de Nariño, ridiculizando a los bien documentados acusadores y tratándolos de terroristas o pertenecientes a la guerrilla, en muchas de las veces, por el propio mandatario, peligrosa acusación que gene-raba un eco, el cual era retomado por la poderosa prensa, uno de sus principales aliados, y con los testafierros gubernamentales, encaminaban a la opinión nacional sobre otros rumbos como, las bajas cifras de desempleo y el decreciente empobrecimiento de las colombianas y colombianos. Todo era rápidamente encubierto por el narcoparamilitar gobierno y sus poderosos medios informativos. Con magnificas cifras macroeconómicas y el anuncio del FMI en el que felicitaba al país por su excelente salud económica, se le vendía un país estable y rentable a los inversionistas y extranjeros, mientras que en la realidad la pauperización del pueblo colombiano ganaba terreno dramática e inexorablemente. El Capo de capos Uribe, mientras negociaba con los criminales narcoparamilitares una impunidad y la conservación de sus inmensas fortunas, opto por aparecer diariamente en prensa, radio y televisión a gritar y despotricar contra los 'terroristas' de las FARC, por estar matando a sus abnegados soldados, fieles protectores de su narco-democracia; por estar asesinando a la población civil, mientras las victimas y organismos de

derechos humanos señalaban con conocimiento de causa a los narcoparamilitares que tozudamente el gobierno afirma que se han desmovilizado. De esta manera lograba que los —desprevenidos— colombianos y colombianas, principalmente de las ciudades, no se ocuparan de su terrible y sanguinario pasado y el de su familia, y continuaran a creer en sus «acuerdos de paz». Mientras tanto el país ha seguido sumergiéndose en el atraso y la pobreza, imponiéndose una dictadura mafiosa disfrazada de democracia. Pues, el principal objetivo de Uribe de lograr sacar en limpio al narcoparamilitarismo mediante su «acuerdo de paz» y la privatización de la economía nacional, ha avanzado exitosamente a la par con una represión sin límites —seguridad democrática— en esa asombrosa pero justificada pasividad internacional, ya que las principales entidades e industrias nacionales ya pertenecen al capital extranjero. Y mismo la exportación de nenes, niñas y niños se comporta a las mil maravillas, España y Francia lo pueden corroborar.

Pero si el primer mandato constitucional del primer presidente impuesto por la mafia, por los «refundadores de la patria» parecía andar sin muchos tropiezos, la oposición representada en mujeres y hombres trabajadores y honestos pertenecientes a sindicatos, pequeños movimientos de izquierda (incluidos los sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica) adentro y fuera a del país, asociaciones populares y campesinas y la comunidad indígena —duramente golpeada— y una parte de la universitaria entre otras no se cruzaban de brazos. De ahí el rigor y la inclemente represión desatada contra estos pacíficos grupos en aplicación de la “seguridad democrática” del mafioso presidente. Las mazmorras del Estado mafioso no dan abasto. Uribe había sido 'elegido' en su primer mandate por aproximadamente 5.5 millones de colombianas y colombianos, sobre un potencial apto para votar de aproximadamente 19.5 millones; sus adversarios políticos sumaron algo así como 2.3 millones de votos, lo que arrojó en total 7.8 millones de votantes convencidos. O sea que en las elecciones para presidente de Colombia, periodo 2002-2006, solamente un 40 por ciento de ciudadanas y ciudadanos refrendaron el sistema político existente y tan solo un 28% depositó su confianza en el candidato de las mafias, contando, los que fueron obligados. La fiesta narcoparamilitar no se hizo esperar y duraría una semana.

Sin embargo con bombos y platillos, los poderosos medios de comunicación —cómplices del sistema mafioso reinante— no paraban de adular tal nominación apegada —según ellos a las más sanas y republicanas leyes democráticas— y comenzarían a repetir —tan solo un mes después de posesionado el impostor— mañana, tarde y noche sobre la inmensa popularidad sin precedente del mandatario de 'todos los colombianos'¹¹⁴. Empresas encuestadoras de bolsillo del narcoparamilitarismo se apresuraban a confirmar a los cuatro vientos que el nuevo 'estadista' mantenía y mantendría una popularidad de un setenta y cinco por ciento, cifra que se iría a mantener a lo largo de su cuestionado primer cuatrienio y muy a pesar, de los escándalos de corrupción y connivencia con el crimen organizado y la mafia de sus ministros, cercanos colaboradores, consejeros, congresistas uribistas y sus 'honorables' jerarcas de las fuerzas armadas y que el espurio presidente tanto defiende, a pesar de las graves acusaciones de crímenes de guerra y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. A lo cual, me he preguntado todos estos largos años de horrible gobierno, de donde sale ese setenta y cinco por ciento de colombianas y colombianos felices, bajo este sistema mafioso, de represión, hambre, desempleo y muerte. ¿O tal vez será el setenta y cinco por ciento de los que votaron por Uribe? Es posible...

Las voces de rechazo al interior del país, como también en el exterior, se hicieron escuchar al repudiar de piano la ley de «justicia y paz» de Uribe y refrendada por el ('narcopara') congreso, del cual muchos de sus miembros tienen compadrazgo directo con los escuadrones de la muerte y la mafia del narcotráfico. El simple hecho de ver la bondad de este gobierno al ofrecerle al crimen organizado, ocho años de cárcel como pena máxima en colonias agrícolas, o cinco años si confesaban y se arrepentían de sus «errores» hace vomitar. Crímenes atroces acompañados de violación carnal, descuartizamientos

¹¹⁴ En mi calidad de colombiano, jamás he reconocido ni jamás reconoceré la legitimidad de Uribe en tanto que presidente de Colombia.

de seres vivos, degollamientos de niños, abrimiento de los vientre de madres embarazadas para arrancarles su embrión y lanzarlo a los perros salvajes o al no, no ameritan para este gobierno fascista, si no la bagatela de ocho años de cárcel y un total perdón y olvido. Para Uribe presidente, todos aquellos que critican o se oponen a su política de «justicia y paz» con el crimen organizado, son verdaderos enemigos de la paz del país, no son colombianos y si lo son pertenecen a los terroristas de las FARC. Para el gobierno mafioso no hay doble postura, o se es amigo de la paz conceptuada por ellos, reconciliando a los escuadrones de la muerte y la mafia de las drogas con la sociedad entera, dejándose de lado posibles rencores u odios, o bien, su no aceptación implica forzosamente ser enemigo del país, de la paz y amigo de las guerrillas 'terroristas', con lo cual las puertas es tan abiertas para que cualquier ciudadano sea encarcelado, asesinado u obligado al destierro. No hay opción siquiera a un debate. Y al ser declarado 'enemigo del país' por el propio presidente, como muchas veces ha ocurrido, no hay si no que atenerse a las consecuencias. Los despiadados pistoleros de Uribe, lo han ampliamente demostrado.

Las 'conversaciones de paz' entre el gobierno y los escuadrones de la muerte se adelantaban sin contratiempos¹¹⁵. Prestablecido, los cabecillas del crimen organizado, incluidos capos de la mafia, hacían gala de toda la benevolencia estatal, para presentarse en los medios informativos a hablar sobre sus propuestas de paz y de su deseo inalterable de servirle a la patria de una forma diferente.

Prometían buen comportamiento y como la desmovilización de sus tropas sería todo un éxito, los colombianos los verían a la cabeza de movimientos políticos, para una vez más engrandecer la patria que los vio nacer. Los alcahuetes medios de información, extendían sus micrófonos, ofrecían sus modernas cámaras de televisión y entregaban sus principales páginas a los salvadores del comunismo, que la guerrilla quiso implantar. No se hablaba de los cientos de miles de crímenes de lesa humanidad, no se hablaba de masacres de indígenas y campesinos, m de las miles de niñas y mujeres violadas, no se hablaba de las miles de hectáreas de tierras robadas, no se hablaba del tráfico de estupefacientes y no se hablaba de los crímenes que continúan efectuando; solo se hablaba de paz, de paz y únicamente de paz en forma mecánica, como en momentos de su campana, Uribe hablo de trabajar, trabajar y solo trabajar, mismo si el desempleo galopa igual o más que antes, y la extrema pro-breza de las colombianas y colombianos no para de crecer.

A pesar de la idílica relación entre el gobierno y los esbirros narco-paramilitares, los crímenes selectivos continúan, las amenazas contra todo opositor ideológico o político no cesa, las matanzas sobre todo en el campo continúan y el comercio de las drogas se mantiene sin alteración alguna. El proyecto político del crimen organizado en unión de los políticos tradicionales del país y la oficialidad militar, marcha sin mayores obstáculos o contratiempos. Y mismo, el gobierno de los Estados Unidos da un fuerte espaldarazo al gobierno de Uribe, reuniéndose con representantes de los escuadrones de la muerte el 3 de mayo de 2003 en Bogotá. Por ley Estados Unidos tiene prohibido a sus funcionarios negociar con organizaciones terroristas y la última vez que un representante de este país se reunió con integrantes de los escuadrones de la muerte fue en 1998 en Costa Rica. Esta peculiar situación se presento a pesar de la lucha contra el terrorismo que el gobierno estadounidense pregona a los cuatro vientos y de su férreo rechazo a reunirse con terroristas. De lo hablado en dicha reunión es poco lo que se supo y de los posibles acuerdos absolutamente nada; el Departamento de Estado se limito a dar a conocer un escueto comunicado preparado de antemano, en el cual admitió dicha reunión, pero, para reiterar su deseo de extraditar colombianos que tengan procesos pendientes en Estados Unidos.¹¹⁶ (?)

¹¹⁵ Cuando se hace referencia a la palabra sin contratiempos, es una emulación a lo que siempre ha declarado el bufón Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz de Uribe, quien sostiene que todo marcha bien. A pesar de que los criminales y 'narcos' continúan sus monstruosas labores en las mismas barbas del gobierno.

¹¹⁶ Periódico Rebelión 16 de junio del 2003

El 23 de diciembre del 2002, el gobierno de Uribe sancionó una ley mediante la cual quedo facultado para iniciar negociaciones de paz con cualquier grupo armado, así este careciera de estatuto político, abriendo la gran puerta para una negociación con los escuadrones de la muerte, llamados por la elite nacional Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El 25 de noviembre del 2002, los grupos de extrema derecha hacen conocer públicamente un documento de doce páginas¹¹⁷ en el cual resaltaban su plena confianza en el gobierno Uribista. Seguidamente estos grupos harían su primera declaración de un cese al fuego unilateral el 29 de noviembre del 2002 y el 15 de julio de 2003 el gobierno y los grupos narcoparamilitares firmaron el acuerdo de Santafé de Ralito,¹¹⁸ por medio del cual, estos grupos de extrema derecha se comprometen a desmovilizarse gradualmente hasta desaparecer como grupo armado en el 2005. En los primeros días de noviembre del 2003 en la ciudad de Medellín, se materializa la primera entrega de miembros de los escuadrones de la muerte con la presencia de un grupo de aproximadamente 300 hombres, aparentemente combatientes todos, pertenecientes al llamado 'Bloque Cacique Nutibara'. La ceremonia fue presidida por el Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y el representante de la Organización de Estados Americanos¹¹⁹ Sergio Caramagna, la iglesia y políticos. La prensa por su parte no escatimo elogios hacia este primer paso importante en el camino hacia la desmovilización y la paz. Sin embargo tiempo después se supo que el tal contingente de combatientes paramilitares no era real, pues 48 horas antes, cabecillas de los frentes paramilitares de Medellín, habían recogido bajo promesas de remuneración, delincuentes y vagabundos haciéndolos pasar por miembros de estos escuadrones, además la entrega de armamento rozaba con lo ridículo, ya que la cantidad del armamento era bastante inferior al número de los supuestos combatientes, sin contar con la entrega de armas antiguas que muy bien podrían servir para adornar un museo. Pero para el gobierno este era tan solo un pequeño detalle que no iría a cambiar en nada el supuesto programa de desmovilización y la supuesta entrega de combatientes con su poderoso arsenal militar. Después vendrían las desmovilizaciones de otros temidos Bloques entre ellos 'el Catatumbo', 'el Bananero', 'Calima' y 'Córdoba' propiedad este ultimo de Salvatore Mancuso; los Boques Capital y del Norte, propiedad de 'Jorge 40'. El común denominador persistía en las desmovilizaciones y entrega de armamento por parte del narcoparamilitarismo, muchas de las armas eran viejos rifles de los años cincuenta del siglo pasado y entre los combatientes seguía contándose improvisados miembros, que al notárseles su poca experiencia o irreal pertenencia a estos grupos criminales, sus patronos afirmaban sin pudor alguno, que eran cocineros, mensajeros o soplones —delatores— ocasionales. Por su parte el gobierno y su comisionado de paz, continuaba a participar en semejante parodia y el presidente Uribe salía en radio prensa y televisión —debidamente coordinado el libreto— a contar lo bien fundado de la desmovilización y a pedir a los Colombianos acompañamiento y solidaridad en los 'caminos de paz que se llevaban a cabo. A la par con estas «desmovilizaciones», al interior de los escuadrones de la muerte se practicaban purgas, siendo asesinados cabecillas de Bloques en diferentes regiones del país y sus lugartenientes, debido al ajustes de cuentas por narcotráfico, incumplimiento de deudas y traición, (el temor de los cabecillas del núcleo duro de que mandos medios y uno que otro alto Chef negociaría con la justicia colombiana y entregara toda la verdad, incluido sobre todo, la participación del presidente y

¹¹⁷ Prensa Nacional y Diario El Colombiano de Medellín (29 11 02)

¹¹⁸ La zona de Santafé de Ralito está ubicada en el departamento de Córdoba, cuna del narcoparamilitarismo y región donde poseen haciendas con extensos terrenos los principales cabecillas de la mafia y el presidente Álvaro Uribe, y fue allí donde se concentraron los principales cabecillas del narcoparamilitarismo con un número considerable de guardaespaldas fuertemente armados; computadores y teléfonos que les permitiría manejar y seguir al frente de sus actividades narcoparamilitares. Más tarde se les unían puros y duros narcotraficantes, quienes pagarían varias decenas de millones de dólares para así ser aceptados en tanto que combatientes y poder gozar de 'la ley de justicia y paz' millones de dólares para así ser aceptados en tanto que combatientes y poder gozar de 'la ley de justicia y pax' de Uribe. Automáticamente las ordenes de extradición hacia los Estados Unidos quedaban congeladas y a discreción del presidente de la República, o sea del Patrón de la mafia.

¹¹⁹ La participación de la OEA, como órgano supremo americano, ha sido mucho más que opaca y su representan te es señalado por su posición laxa y su permisividad frente a los incumplimientos de los escuadrones de la muerte. Siempre ha tornado la defensa de estos grupos de extrema derecha, en una total solidaridad con el gobierno uribista.

ministros en el bajo mundo de la mafia, hizo que estos patrones ordenaran asesinar a los delatores, pues, el acuerdo de 'justicia y paz' no debía de ser saboteado); mismo políticos de su entorno como los tres diputados del departamento del Meta, serían asesinados en el primer semestre del 2004. Y si las masacres bajaban en intensidad, el asesinato de indígenas, campesinos y más selectivamente de líderes populares, sindicalistas y de organizaciones de derechos humanos continuaba con igual o más intensidad. Los escuadrones de la muerte no le habían dado el adiós a las armas y continuaban sembrando el terror sobre todo en las regiones donde mantienen fuerte presencia. También el franco de drogas se portaba a las mil maravillas y todo sigue casi igual que antes de las negociaciones con Uribe; a la sola excepción, que los principales cabecillas se concentraban en Santafé de Ralito —en un ambiente de fiesta, ostentación y goce de sus inmensas fortunas, paseos e impunidad— a guisa de detenidos; con un poco más de extravagancia, que en la época de la Catedral de Pablo Escobar¹²⁰ los «patrones» del narcoparamilitarismo se hacían visitar de la crema y nata de la política y prostitución nacional venida de las clases media y alta del país; a las 'señoritas de bien' se les pagaba 24 y hasta 30 millones de pesos la noche (9.500 euros), por compartir sus atributos con los hombres más sanguinarios que ha contado el país y uno que otro ministro y político tradicional.

La preocupación de todo este desbarajuste crecía sobre todo, entre los ingenuos colombianos que habían creído en los acuerdos de paz de Uribe, ya que era más notable y frecuente la participación de los escuadrones de la muerte en la vida política nacional de lo que se había sospechado y los colombianos y colombianas comenzaban a conocer la magnitud de la hecatombe, de cómo estos grupos se habían apoderado de los recursos públicos de la educación y en especial de la salud, con la plena participación de los políticos de casi todas las regiones del país y quienes eran cómplices igualmente de horribles masacres y asesinatos selectivos; encontrándose la gran mayoría de estos, bajo la égida narcoparamilitar y aportándole a estos criminales, no solo el dinero público y contratos, si no también, puestos oficiales en los diferentes estamentos del Estado y a lo largo y ancho de las diferentes regiones y departamentos. En el alto gobierno, Uribe ya había nombrado a varios representantes del narcoparamilitarismo. La mafia tenía el poder.

Las negociaciones continuaban a pesar de todos esos manejos oscuros, y lo único claro era que las cosas no eran claras y los problemas 'colaterales' surgían, a saber: El gobierno y por supuesto las colombianas y colombianos no sabían qué hacer con los 'desmovilizados' que supuestamente ascendían a 31 mil según cifras gubernamentales y narcoparamilitares; (sacadas de no se sabe dónde, máxime si la cifra entregada por los principales cabecillas en el 2001, fue de aproximadamente 7.500 miembros) que si bien es cierto, que lo que asustaba en ese momento no era la cantidad, sino su poderío destructor, pues si verdaderos desmovilizado solicitaban al gobierno cumplir con su compromiso de ayuda y rehabilitación en la sociedad, brindándoles estudios y trabajo, muchos otros, entre los que se incluye los batallones de delincuentes y desempleados, que fueron contabilizados como paramilitares desmovilizados, comenzaron a crear desordenes y a cometer actos de vandalismo y muerte en las zonas y regiones donde habían sido agrupados, incluida la capital de la república, hasta tal punto que los vecinos de estos 'desmovilizados' se quejaban en masa sobre la peligrosidad e insociabilidad de estos reinsertados como los denominaba el gobierno.

Otra de las discordancias, fue la mensualidad de aproximadamente 300 mil pesos de ayuda que acordó el gobierno y que debían recibir las personas desmovilizadas, pero entre el desorden y la mala leche de muchos, ya no se tenía certeza quién era quién, y quien debía realmente recibir la ayuda. Igualmente se hizo presente un ejército de leguleyos de baja categoría que comenzaron a asesorar al primer llegado

¹²⁰ Cuando Pablo Escobar Gaviria se entregó voluntaria pero condicionadamente en el gobierno de Cesar Gaviria, (1990-94) mando a construir su propia cárcel, que asemejaba más bien a una enorme mansión con túnel incluido a guisa de salida de emergencia, llamada la Catedral. Desde allí, Escobar siguió controlando su imperio de tráfico de drogas y a sus lugartenientes quienes obedecían al dedillo. Un tal Jose Obdulio Gaviria su primo hermano, le servía de correa de transmisión entre la catedral y el poderoso mundo de la política y el poderoso bajo mundo de la mafia. En sus momentos libres el capo de capos organizaba fastuosas comilonas e inolvidables fiestas con putas caras pertenecientes a la burguesía.

para que obtuviera su mensualidad y si el cliente no había pertenecido a los grupos de muerte, por una cantidad acordada de antemano, se le conseguían las pruebas o los funcionarios encargados de la traumatología los incluirían. El costo de la asesoría podía pasar del cincuenta por ciento de monto total recibido por el 'desmovilizado'. Es verdaderamente escabroso ver una sociedad como la colombiana, en donde más de un sesenta por ciento de sus habitantes viven en condiciones inhumanas, en una pobreza extrema, mientras que ex-criminales podían obtener una mensualidad por encima del salario mínimo, situación que hizo que muchos optaran por matricularse en esa categoría «desmovilizado», el todo era sobrevivir. Mientras tanto muchos de los criminales y verdaderos narcoparamilitares estaban escondidos a la espera de la orden de sus patrones para reincorporarse a la vida activa, sin bajar del todo su actividad narcomilitar. Los relativamente pocos desmovilizados que en verdad deseaban una nueva vida para ellos y sus familias, se estrellaron con el monstruo burocrático, el incumplimiento estatal y las enormes dificultades para continuar sus estudios o encontrar un trabajo estable y decentemente pago. Pero incluso los industriales, terratenientes, grandes propietarios de tierras, comerciantes y empresarios del sector privado no movían un solo dedo para participar en la rehabilitación de esos varios cientos de ex criminales; así mismo, si muchos de estos infelices fueron quienes les habían protegido sus cuantiosos bienes y enormes capitales, hasta el punto de asesinar sindicalistas y desplazar familias enteras para que se apoderaran de sus tierras. Ahora que se encontraban en calidad de desmovilizados, ahora si representaban un grave problema para los capitalistas nacionales y extranjeros, pues para colmo de desgracias, estos hombres no eran vistos siquiera como una especie de mano de obra barata, que pudiese aportar a la economía, y producir esta vez progreso en lugar de tragedia y violencia. La clase capitalista colombiana se lavaba las manos, dejando solamente la puerta abierta en el medio militar, en donde estos desadaptados podrían tener cabida; pero desgraciadamente había poco margen de recepción de este personal, pues ya el mafioso presidente Uribe, había copado el terreno nacional con su millón de soldados-campesinos para colaborar con su seguridad democrática. Además el pie de fuerza armado en el país llega ya a la fenomenal cifra de 380 mil hombres y mujeres, en un país en paz con sus vecinos y como lo sostiene Uribe, sin confrontación armada interna. Únicamente las empresas de vigilancia privada, gerenciadas y de propiedad de ex oficiales del ejército y la policía — estrechamente ligadas con el narcoparamilitarismo— encargadas de la seguridad de narcotraficantes, cabecillas de los escuadrones de la muerte y de grandes empresas privadas nacionales y extranjeras, podían emplear estos ex miembros de los grupos de extrema derecha en la medida que los grupos de la muerte perdían en cantidad. A pesar de que las empresas de vigilancia privada se multiplicaban como el champiñón —en el país la cifra de estas entidades sobrepasaba las mil quinientas con una planta de personal, no bien responsabilizado, de más de trescientos mil, y con un armamento igual o superior al del propio ejército nacional y sin control alguno—, tampoco era una solución de empleo estable para los verdaderos desmovilizados, y lo peor que muchos de estos irían a ganar un máximo de trescientos mil pesos mensuales laborando horas nocturnas y dominicales, mientras que, en tanto que combatientes, se les había asignado un salario de entre quinientos mil y un millón de pesos, fuera de las primas por masacres y envíos de drogas al exterior. La documentación para el funcionamiento de estas entidades, así como su poderoso equipo militar, ha sido una verdadera burla hacia el país, por cuanto no existe un debido control y el Estado no ejercer un seguimiento escrupuloso sobre estas entidades paramilitarizadas. La inspección regular y obligada del gobierno a todas estas entidades armadas ha sido casi nula y su expansión, recomendada por la mafia y ex oficiales de la fuerza pública, traspasa los límites de un desorden planificado.

Otro grave problema para el país, es el de no conocer el paradero exacto de los desmovilizados que había anunciado con bombos y platillos el gobierno de Uribe. Pues, de los más de 31 mil combatientes desarmados y desmovilizados —según el gobierno— tan solo aproximadamente 200 cabecillas y sus más cercanos lugartenientes gozan de las 'penas del encierro' en la gran hacienda ubicada en Santafé de Ralito, mientras que aproximadamente 2.600 han sido detenidos en las diferentes cárceles del país. ¿Y el resto de combatientes? Donde se encuentran los 28.200 restantes, que según la ley de justicia y paz, deberían pagar entre 5 y 8 años de cárcel si confiesan sus crímenes y pertenencia a estos grupos armados de la muerte. Tal desbarajuste no ha sido aclarado por el gobierno nacional y por el contrario

un manto de silencio rodea esta chistosa desmovilización; pero también y menos chistoso, ha sido el férreo e irreversible silencio sobre el número de armas que fueron entregadas por los grupos de extrema derecha. Pues las cuentas no concuerdan, de acuerdo a los desmovilizados y la cantidad de armamento entregado, por parte de los diferentes bloques de los escuadrones de la muerte, en las ceremonias presididas por el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, con la presencia del delegado y observador de la Organización de Estados Americanos, Sergio Caramagna y la feliz 'veeduría' de congresistas, gobernadores y alcaldes comprometidos todos con el crimen organizado y la mafia, todo lo anterior cubierto con estruendoso escándalo mediático por la poderosa prensa que hacía sonar sobre una verdadera reconciliación nacional. Poderosa prensa, culpable también de la hecatombe en que está sometido el país. El armamento entregado no corresponde ni al 50% de los desmovilizados, sin contar con la chatarra de rifles y viejos revólveres entregados. Pero lo más grave aún, son las declaraciones de un arrepentido narcotraficante que vivió escondido en Santafé de Ralito y protegido por los cabecillas narcoparamilitares, quien denunció al cabecilla narcoparamilitar Mancuso de haber escondido moderno y poderoso armamento. Ejemplos sobre la pantomima en la entrega de armas son numerosos, como la desmovilización del 'Bloque Nutibara' en la cual se desmovilizaron 300 combatientes, pero las armas entregadas fue de 190 sin contar con las inservibles o viejas. Caso similar se dio en las desmovilizaciones de otros bloques como 'el Norte', 'el Calima', 'el Capital' sin que el gobierno se inmute.

¿Esta es una de las formas del presidente Uribe, de demostrar su corazón grande a los narcoparamilitares? Todo lo anterior demuestra sin equívocos, que el Gobierno y los escuadrones de la muerte no le juegan limpio al país, o por lo menos en este caso el gobierno, quien tiene la obligación moral y el compromiso republicano de llevar a cabo una real desmovilización con el riguroso desmonte del ultramoderno aparato militar de estas bandas terroristas. Mas los hechos demuestran lo contrario, si nos atenemos a los secretos, —ultra secretos— de esta negociación entre gobierno y estos grupos criminales y mafiosos y los cuales han sido celosamente guardados. Bueno, no todos pues el 9 de septiembre del 2005 en un encuentro entre el Alto Comisionado Luis Carlos Restrepo y los principales cabecillas del crimen organizado y la mafia como Salvatore Mancuso (el del pasaporte europeo), Rodrigo Tovar (alias Jorge 40), Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez) y Francisco Zuloaga (alias gordo lindo) entre otros, el ambiente era más que explosivo. Los cabecillas reclamaban un completo y real compromiso del gobierno para detener definitivamente su extradición hacia los Estados Unidos y la posibilidad de poder tener un estatus político y así poder más adelante ingresar al mundo de la política activa nacional. Por su lado el Comisionado gubernamental reprochaba a sus interlocutores la falta de transparencia en el proceso de desmovilización y pedía comprensión en todo el esfuerzo que hacía el gobierno para no dejar traslucir puntos estratégicos que determinarían el fracaso de las negociaciones. Lo relevante en esta calurosa disputa fue relatado por la revista Semana y reproducido por varios medios nacionales:

«Comisionado: El presidente dice que él no puede cambiar lo de la extradición porque eso sería un problema internacional inmanejable, además que se encuentra en plena campaña electoral y existen buenas relaciones de cooperación con Estados Unidos. Ante esta realidad el presidente dice que utiliza su discrecionalidad. Para un buen entendedor... de hecho se está usando para contener el asunto.

Mancuso: Que va a pasar con la Corte Penal Internacional...? Comisionado: Por la Corte Penal Internacional no hay problema... solo opera si no se ha impartido justicia en el país. Esa es la razón por la cual el modelo que se está planteando es de juicio y condena en el país. De ahí el proyecto de ley que contempla una pena privativa de la libertad, es importante, por cuanto bloquea esa jurisdicción internacional...

Después de un acalorado cruce de palabras y golpes sobre la mesa de parte y parte, el comisionado afirma:

Comisionado: Las negociaciones atraviesan por malos momentos, el proceso tiene dificultades... ustedes deben comprender que el presidente no negocia con ustedes por miedo si no por generosidad. Sería un grave error que ustedes pensarán que el poder que tienen en esta mesa se deba al número de hombres que tengan en armas... Uribe firmó unas condiciones para que no sean capturados en la zona (Santafé de Ralito) a pesar de que nunca ha sido posible tener clara la lista de las personas que están en Ralito y a pesar de las sospechas que se han generado...

Esta es una enorme muestra de confianza, a pesar de esa vergüenza pública del enfrentamiento del año pasado con el Bloque Metro. A pesar de lo atípico que fue la desmovilización de Medellín, en el que nos revolvieron delincuentes callejeros 48 horas antes y nos los metieron en el paquete de desmovilizados. A pesar de todas esas irregularidades que se presentaron, nosotros validamos el proceso...

Nosotros no los estamos tratando como delincuentes comunes. Ustedes saben que aquí hay personas extraditables...

También ustedes saben que hechos como los asesinatos cometidos por algunos en esta zona de ubicación, se han manejado con cuidado para evitar un escándalo público... Todo en política tiene un momento y uno no puede dejar pasar ese momento... si ustedes quieren mostrarse como candidatos al congreso, háganlo! Es mejor entrar en una actitud de cooperación que de confrontación...

Los anteriores hechos descritos son la realidad de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo dentro del llamado «proceso de desmovilización» de los escuadrones de la muerte, los cuales continúan ejerciendo su poder criminal en las regiones y zonas de su influencia. Si bien es cierto que las masacres y asesinatos descendieron, esto no significa que puedan desaparecer completamente, de igual manera el robo de tierras y el comercio de las drogas sigue como de costumbre en contubernio con políticos y Fuerzas Armadas. Y la tutela sobre los elegidos por voto popular en la mayoría de los departamentos del país, —Alcaldes y Concejales— se ejerce sin contratiempos, mientras que los dineros de la educación, la salud y otros rubros siguen abasteciendo las áreas narcoparamilitares con la abierta complicidad de los partidos tradicionales. La desmovilización y desarme de los escuadrones de extrema derecha no es seria, a pesar que el gobierno y la poderosa prensa nacional quiera hacerlo parecer como un hecho concreto y real. El mismo Uribe se pavonea al interior como al exterior del país, anunciando el desmonte de 31 mil combatientes, o lo que él y su corte llaman Autodefensas. Pero no cuenta la verdad, no cuenta toda la vileza surgida en dicho proceso, ni mucho menos la falta de viabilidad, juicio, orden, claridad, eficacia y seriedad en lo que debería ser el desmonte y la eliminación del fenómeno narcoparamilitar. Ya que si seguimos ahondando en los diferentes escollos e incongruencias surgidos en las desmovilizaciones de los narcoparamilitares, nos encontramos con problemas como la no confesión de sus innumerables crímenes cometidos por estos combatientes. Sus crímenes y la verdad de los hechos son una verdadera contradicción. Muchos de estos tienen inconvenientes y dificultades físicas y materiales para ir a declarar, otros declaran lo que bien en gana les conviene y otros tamos se limitan a decir su nombre y apellido, sin demostrarlo con documento alguno. También a los que se les ha logrado llevar a declarar se les pregunta por su 'alias' dentro de la organización criminal, pero muchos no se acuerdan, y cuando de contar la verdad sobre sus andanzas criminales se trata, la mayoría prefiere declararse no combatiente, si no, simple cocinero al servicio del paramilitarismo. Dicha situación a hecho que los pocos fiscales designados para tan delicada e importante tarea se sientan impotentes para recoger la verdad de estos miembros de la organización criminal, pero también los hay quienes se ocupan de llenar una hoja en blanco con dos o tres preguntas sin importancia para salir del paso de una

diligencia judicial que requiere de la mayor seriedad y responsabilidad. No es raro esta actitud de unos cuantos fiscales, pues también existen los narco parafiscales en el país¹²¹.

Las elecciones presidenciales de 2002 fueron señaladas como turbias por organizaciones democráticas del país y varios ciudadanos y ONGs denunciaron el fraude cometido sobre todo en la Costa Atlántica colombiana, especialmente en los departamentos del Magdalena, Cesar, Córdoba, Guajira, Bolívar y también en Antioquia, y los Santanderes entre otros. Varios alcaldes de provincias pertenecientes a estos departamentos y políticos independientes fueron asesinados por los escuadrones de la muerte al atreverse a denunciar públicamente la dupla políticos paramilitares quienes influenciaron con la compra de votos, intimidaron y amenazaron de muerte a los ciudadanos de estos departamentos si no votaban por el candidato disidente del partido liberal y además prohibieron a líderes independientes hacer campaña por otro candidato diferente al disidente liberal Álvaro Uribe Vélez, en esas elecciones para presidente de la República. A pesar de las denuncias, los altos funcionarios de los organismos del Estado obligados por la Constitución Nacional y las leyes a develar tal deshonor brillaron por su ausencia. Estos funcionarios encargados de investigar, de mostrar el camino de la verdad, se sometieron unos por miedo, la mayoría por complicidad a la ley del silencio, permitiendo que el país cayera en manos del crimen organizado y la mafia. El electo presidente Uribe había sido llevado a la más alta magistratura del Estado, por millares de manos manchadas de sangre y untadas de cocaína. No era la primera vez, desde luego, que la mafia auspiciaba y rociaba con sus narco dólares la elección de un presidente; pero en esta ocasión el crimen organizado y la mafia narcotraficante se habían unido para llevar a cabo su proyecto para «Refundar la Patria» y para tal efecto no había sino que hacer nombrar a uno de sus más cercanos condescendiente, a uno de los suyos. Nombrado Uribe, inmediatamente se izaron en los cargos de mayor importancia de la nación, delincuentes como Francisco Santos, José Obdulio Escobar Gaviria, Fernando Londoño Hoyos, María Consuelo Araujo Castro entre otros y criminales como Pedro Juan Moreno, Rito Alejo del Río y Jorge Noguera entre otros más. A la par con estas nominaciones el Congreso de la República estaba conformado por muchos delincuentes y criminales cómplices de hecho con el crimen organizado incluida la mafia; «honorables» diputados como: Álvaro Araujo Castro, Rocío Arias Hoyos, Jorge Luis Caballero, Carlos Alberto Maya Castro, Alfredo Cuello Baute, Alfredo Char Chaljub, Álvaro García Romero, Mario Uribe Escobar, Eleonora Pinedo y Aldo Lacouture entre otros más. (ver lista completa final del libro).

La Fiscalía General de la República se encontraba en manos de un cómplice del crimen organizado y la mafia, llamado Luis Camilo Osorio; el presidente de la Corte Constitucional Alfredo Escobar Araujo gran amigo del presidente y de los narcotraficantes. Por el lado de la Fuerzas Armadas la temperatura ardía, el presidente nombró al general Carlos Alberto Ospina Ovalle, como jefe de las Fuerzas Armadas y acusado años atrás por las Organizaciones de Derechos Humanos de complicidad de crímenes contra la humanidad; Jorge Daniel Castro Castro, como director general de la policía nacional y acusado de narcotráfico; también fue nombrado en la embajada de Australia el general y ex director de la policía nacional Rosso José Serrano, acusado de complicidad con la mafia del narcotráfico; nombró Uribe, al general Oscar Naranjo Trujillo jefe de inteligencia de la policía antinarcóticos y acusado de nexos con el narcotráfico; nombró también a su antiguo amigo el general Mario Montoya Uribe comandante del Batallón Antioquia y acusado por las organizaciones de Derechos Humanos nacionales e

¹²¹ Un informe bastante disimulado rue dado por el Ministerio del Interior, ha dejado al descubierto la tramposa actitud del gobierno y los narcoparamilitares al mostrar la desmovilización de 31 mil combatientes, pues varios cabecillas de 36 estructuras admitieron que aproximadamente un 40 por ciento de los desmovilizados no pertenecían a estos grupos del crimen organizado. Uno de los aparte de una fuente del Ministerio dice: «se calcula que un 40% de los 30.944 'paras' que se desmovilizaron colectivamente no estaban en los que las AUC llaman 'frentes de cheque'. O sea que se estima en 12 mil los 'paras' que no son paramilitares. Es más, admite el ministerio que según fuentes de inteligencia el número de combatientes de estos criminales escuadrones era de 12 a 15 mil antes de desmovilizarse. (Periodico El Tiempo del 08-07-06). Para ver menos claro 'el proceso de paz de Uribe', las cuentas que se temen a principios del 2002 eran de aproximadamente 7 mil paramilitares. Eso anterior no es problema para el gobierno y mucho menos para Uribe quien se ufana ante los gobiernos del mundo de haber desmovilizado y desarmado a 31 mil paramilitares. No sin la ayuda de la gran prensa, en su inmensa propaganda gubernamental.

internacionales de complicidad de crímenes y desapariciones forzadas en asocio con los escuadrones de la muerte En la dirección de los Servicios de Inteligencia, DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), Uribe nombró a su amigo Jorge Noguera Cote, amigo este mismo del sanguinario cabecilla narcoparamilitar Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40', y a quien Noguera entregaba datos secretos y daba listas de sindicalistas y opositores del gobierno para ser exterminados; como Secretario General del DAS, fue nombrado Gian Carlo Aunque di Silvestre, cercano amigo de los narcoparamilitares de la Costa Atlántica y quien en compañía del jefe de informática del DAS Rafael García Torres, viejo amigo de Noguera Cote, borraban datos y expedientes de reconocidos narcoparamilitares. A la par con estos nombramientos presidenciales, el Congreso de la República, con una mayoría narcoparamilitar eligió como Procurador General de la Nación a Edgardo Maya Villazón, padrastro de la ministra María Consuelo Araujo Castro y de su hermano el senador Álvaro Araujo Castro, amiguísimos del presidente y estos a su vez cercanos amigos y socios de los escuadrones de la muerte del norte del país, y especial amistad con el criminal 'Jorge 40'. Por su parte los gremios industriales, ganaderos, bancarios y del comercio atornillaban o elegían en sus puestos de mando a personajes de extrema derecha con plena concordancia con el narcoparamilitarismo. Los poderosos medios de comunicación (manipulación) en una muestra de servilismo, ambición y cobardía se ponían al servicio de la infamia gubernamental, por decirlo más claro, estaban arrodillados ante Uribe y su corte mafiosa. Tanto la televisión como los periódicos y la radio no hablaban sino de todo lo “positivo” de Uribe, escondiendo descaradamente las cosas negativas y perversas del gobierno, el pueblo ha sido sistemáticamente mal informado, completamente desinformado, recibiendo diariamente mentiras¹²², la poderosa prensa ha promovido perpetuar la injusticia para toda una sociedad empobrecida deliberadamente; mientras que los periodistas independientes caen asesinados y otros deben abandonar sus puestos de trabajo y hasta el país ante las amenazas de muerte hechas por los narcoparamilitares y agentes gubernamentales. Así las cosas, la «Refundación de la Patria» ideada por la MAFIA, tomo forma en todas su extensión y en ese momento precise, más que ningún otro jamás vivido en el país, el poder absoluto parece estar en sus manos.

Además de las precipitadas medidas en favor del paramilitarismo y una maratónica aprobación de la ley de 'justicia y paz'; el gobierno de Uribe lanzaba una cruzada militar tan absurda como ciega en favor del recrudecimiento de la guerra interna para exterminar la subversión, según el presidente; cerrando toda opción de dialogo y envolviendo a la sociedad colombiana en una casi irreversible vorágine conflictiva de intolerancia y pavor. Surgía entonces, una pregunta, la pregunta mil veces expuesta e igual número de veces no resuelta: ¿Por qué el presidente Uribe, extendía su blanda mano y abría su corazón grande a toda negociación con los narcoparamilitares y a la vez sumergía a la sociedad colombiana en una guerra, fratricida y no deseada por la mayoría del pueblo, contra la subversión? Y la respuesta está, en los acuerdos del 2001 entre la mafia narcoparamilitar, los políticos liberales y conservadores y la pudiente clase empresarial para 'refundar la patria'; Uribe sería elegido a toda costa y declarado el Mesías de Colombia. Uno de los puntos a seguir al pie de la letra era el de lanzar una campaña de desprestigio para entorpecer los diálogos entre el gobierno de Pastrana y la guerrilla de las FARC, y al unísono con esta, una avalancha mediática de diabolización de la subversión a nivel nacional e

¹²² En septiembre 2002 en la Revista 'Universo Latino' N° 4 editada en París Francia, apareció un artículo de su director Sergio Camargo, titulado «Colombie un Gouvernement Fasciste» en el cual denunciaba la elección de Uribe por una minoría corrupta y antidemocrática, sus nexos y el de su padre Alberto Uribe Sierra con el Cartel de Medellín y la especial amistad que los unía con Pablo Escobar. También se denunciaba en el artículo, los irrefutables nexos de sus colaboradores y amigos Cesar Villegas y Pedro Juan Moreno Villa con los carteles de la droga de Cali y Medellín respectivamente (ambos colaboradores están hoy día muertos, Villegas asesinado en Bogotá, después de purgar una pena de 5 años por narcotráfico y Moreno murió en un “accidente” aéreo, después de que se retirara como asesor presidencial de Uribe, por graves desavenencias con el presidente). Una semana después que la revista saliera al mercado, un hombre llamó a la redacción y pidió hablar con el director, identificándose apenas como colombiano manifestó que lo denunciado en la revista era grave y que en Colombia esta información no se conocía; después pregunto si el responsable de la revista no temía por una posible demanda ante los tribunales. La respuesta fue: ¡No! Y ahí está el problema, pues la mafia jamás ha echado mano de la justicia.

internacional. Para Uribe entonces, le había sido vetado todo acercamiento con las guerrillas y en especial con las FARC.

La seguridad democrática de Uribe, desde el mismo momento de su puesta en práctica, se puso en marcha a toda máquina. Punto Primero fue la fuerte presión sobre las Fuerzas Armadas para que sometieran todo lo que olía a subversión, el presidente en persona llamaba desde las 5 de la mañana a comandantes de brigada, coroneles y todo jefe militar encargado de exterminar a la guerrilla para pedirles cuentas y sobre todo, resultados en las acciones militares contra los 'terroristas', a Uribe le interesaba más que cualquier otra cosa, cuantos guerrilleros habían sido capturados y sobre todo cuantos habían sido muertos; aquello parecía más una subasta pública de cadáveres entre militares y el ejecutivo, que un reporte de orden público. Aquellos que no presentaban hechos concretos de sangre o prisión de terroristas recibían inmediatamente rayos y centellas, el regaño presidencial tronaba acompañado de epítetos hirientes, lo mismo en público, y la advertencia no se hacía esperar: «si no es capaz, renuncie». Resultados, resultados, resultados, a toda costa pedía resultados, el “presidente” Uribe¹²³.

Punto Segundo fue el reclutamiento de sapos (soplones) en campos y ciudades para que dieran partes hora tras hora sobre el andar de los grupos terroristas en regiones rurales especialmente, y sobre todo la estrecha vigilancia de líderes campesinos, comunales y sindicalistas, auxiliares, según la presidencia, de la guerrilla terrorista. Delinquentes de toda clase, ex paramilitares, uno que otro guerrillero arrepentido y desempleados pasaron a conformar ese ejercito de 'servidores de la democracia', servidores de la causa uribista; y quienes además de ínfimos sueldos, podían ganar millones de pesos que a diario el presidente ofrecía por televisión, radio y prensa a cambio de la delación —falsa o no— de terroristas, por la captura de tal o cual sospechoso, tal o tales autores de atentados terrorista que se sucedían en las principales ciudades. En la televisión y en fotos de prensa se podía ver deprimentes escenas de hombres en su mayoría con el rostro cubierto, recibiendo millones de pesos de recompensa por la captura del terrorista X, o por el señalamiento de los supuestos terroristas (todos pertenecientes a las FARC) que atentaron o atentarían contra instalaciones oficiales, personalidades del país o lugares públicos, como centros comerciales u otros sitios de asidua frecuentación pública. Los soplones no descansaban en su 'trabajo' y las cárceles del país se llenaban cada día con más inocentes¹²⁴. Punto tercero declarando terrorista a toda o a todo aquel que no cumpliera con los parámetros establecidos por este sistema injusto y este nuevo gobierno dictatorial. Sirviéndose de los horribles atentados de las

¹²³ En su columna semanal en el diario «El Tiempo» de Bogotá, la ultraconservadora Salud Hernández escribió el 21 de mayo del 2006, un artículo titulado 'Los Inquietantes Positivos'. Dice Hernández que un comandante de una estación de policía le había confesado hace unos años, que acudió a sus 'primos' los 'paracos' (paramilitares), para que le hicieran un favor. Necesitaba dar positivos y el cabecilla de la zona se los proporciono. Le 'regaló' los cadáveres de unos campesinos asesinados con la excusa de ser colaboradores de la guerrilla, los vistieron de camuflado, les calzaron botas de caucho y la policía los presentó a sus superiores y a los medios locales como trofeos de un inexistente y cruento combate contra la subversión. «Feo asunto pensó el oficial»... se consolaba diciéndose, que se los dieron ya muertos, que el mal era menor. Los civiles que la IV Brigada hizo pasar por subversivos dados de baja estaban muy vivos antes de utilizarlos para mostrar resultados. El ejército y el gobierno prometieron investigar la treintena de casos denunciados y esperemos que no nos salgan con otra mascarada como la de Guitarrilla. Para que esta dama se decida a contar una verdad que quema las entrañas del silencioso poder, es porque es intolerable lo que sucede a diario en el país y que el ilimitado poder capitalista nacional e internacional pretenden ocultar.

¹²⁴ En una de las 'pescas milagrosas' como fueron bautizadas las detenciones arbitrarias del gobierno uribista, el periodista Hollman Morris mostró en el programa «Contravía» que presenta Telesur, un reportaje sobre las recompensas y las detenciones masivas, que ilustra la barbaridad que se vive en ese estado policiaco y en donde hasta una abuela es sindicada por su hijo de ser «guerrillera de las FARC». También el 28 de septiembre del 2003 aproximadamente mil efectivos de la policía nacional acompañados de la Unidad de Derechos Humanos de las Fiscalía General de la Nación hicieron un operativo en el Municipio de Quinchia, allanaron decenas de casas de vivienda y capturaron a 90 personas entre las cuales había dos menores de edad y tres ancianos mayores de 73 años, reportó el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos del departamento de Risaralda. José de los Santos Suarez de 73 años e invidente fue acusado de ser experto en explosivos para la guerrilla. Todos estuvieron presos durante dos largos años. Luego salieron libres al comprobarse su inocencia.

torres gemelas, y con los cuales la palabra terrorismo o terrorista quedo a flor de labio del poder represor, los sospechosos serían combatidos sin ninguna precaución jurídica, ni miramientos humanos. Los pacíficos luchadores populares y militantes de las organizaciones no gubernamentales serian tachados de potenciales terroristas, por el gobierno fascista de Uribe. Manifestaciones por mejoras en la atención medica, contra el cierre de hospitales o contra la privatización de la educación publica, o contra el Tratado de Libre Comercio con el gobierno estadounidense, o contra las políticas neoliberales del gobierno eran reprimidas con extrema violencia por el ejército y la policía, y los dirigentes y líderes sociales recibían la estigmatización de auxiliares de la guerrilla, por parte del gobierno y mismo, de ser señalados de terroristas por parte del mismo presidente, lo que ocasionaba inmediatamente una condena a muerte de parte de los escuadrones de la extrema derecha. Muchos líderes no nos acompañan hoy en día.

En ese espiral de confusión y oscurantismo, las Fuerzas Armadas y en especial oficiales del ejército se idearon la forma de presentar resultados al presidente y a la vez recibir condecoraciones, primas y ascensos, fue así como haciendo llave con delincuentes y soplones, fraguaron atentados o posibles atentados que acomodaban a las guerrillas, en especial a las FARC, y que luego los soplones corroboraban auto acusándose, apareciendo como autores arrepentidos o simplemente haciendo los señalamientos que los oficiales les imponían y avalaban entregándolos como «positivos»¹²⁵. Un ejemplo de esta abierta aberración institucional fue revelado por la prensa nacional y resumida por los medios alternativos 26/906:

Farid Mota González, conto a la Fiscalía sobre los MONTAJES efectuados por oficiales del ejército para hacer pasar a las FARC como autores de criminales atentados en los cuales hubo numerosos muertos:

«...el que planeó todos los atentados desde el carro bomba hasta el último montaje que hicieron lo Hainan 'Condorito'. Todos fueron montajes.

Hasta en el que mataron al reciclador. Un camión que colocaron por allá en Sibaté (pueblo cerca a Bogotá). El carro de la 53 con Boyacá (noroeste de Bogotá), ese también fue montaje. El nombre de 'Condorito' quien es el que ha manejado todo, es Jaime Orlando Ávila Cano. También participaron Omar Mosquera Pardo; Orlando Díaz Bonilla; Luis Carlos Chaparro Uribe, ellos son los autores intelectuales. Otro que trabaja por fuera y es informante con 'Jessica' (Lidia Sánchez Manrique) de la brigada 13 del ejército. 'Jessica' se ocupa de legalizar la plata (dinero). Ella cobra la plata de la recompensa, después de cuadrar todos los detalles con el mayor Hermida y el capitán Barrera, quienes pertenecen a la brigada 13. (...) Yo se que el mayor Hermida ha hablado varias veces con 'Condorito'. (...) Otro montaje fue el del taxi bomba del Centre Comercial de la Avenida Caracas. 'Condorito' fue el que hizo todo el montaje. El material y los explosivos nos lo aportan miembros del ejército. En especial el comandante del Batallón Sumapaz. (...) En principio el carro bomba de la Escuela Militar¹²⁶ no debía explotar, pero... se tenía que hacer sonar por lo menos uno, además ya estaba cerca la posesión del presidente, entonces iba tener mucho más credibilidad. Ahora están montando una casa bomba y tienen que hacerla explotar. Con la explosión de esa casa bomba los otros atentados se vuelven creíbles. (...) Todo esto es un negocio... «

¹²⁵ Los 'falsos positivos' se pusieron de moda en el país a raíz del descubrimiento de tentativas de atentados y atentados fabricados y llevados a cabo por miembros de la inteligencia militar y oficiales de esta misma institución. Bicicletas con bombas, coche-bombas, casa bombas, hasta un caballo bomba y un burro bomba han sido utilizados por el narcoparatorrismo en complicidad con la fuerza pública.

¹²⁶ En el 'falso positivo' del carro bomba que estalló cerca de la Escuela Militar al norte de Bogotá y en la que murieron dos personas, «Jessica» fue presentada por el ejército como guerrillera. Aun cuando no lo es, la prensa sigue presentándola como tal. Treinta minutos después de este infame atentado, el presidente Uribe salió a los medios de información a acusar a los terroristas de las FARC de este abominable crimen.

Otro hecho que iría a marcar el espíritu de los colombianos sería el atentado contra las instalaciones del club el Nogal al norte de la capital y el cual servía de punto de encuentro de cabecillas de los escuadrones de la muerte con altos funcionarios del Estado, hombres de negocios, narcotraficantes y mismo jefes de la iglesia católica. El Nogal se había convertido en una especie de sede oficial del crimen organizado y la mafia de las drogas. En dicho atentado murieron 39 personas, 190 heridos y cuantiosas pérdidas, todas las víctimas eran empleados del club, como hecho extraño hay que destacar la ausencia de directivos del club y la no presencia en ese momento de ningún alto personaje del bajo mundo y la vida pública colombiana. Inmediatamente cometido dicho crimen, las autoridades de policía, ejército y DAS acusaron a los «terroristas de las FARC» (sic), como autores de tan inadmisibles hechos. Por su parte el “presidente” Uribe no perdió mucho tiempo en salir a los medios de comunicación (manipulación) a acusar y lanzar improperios contra «los criminales de la FAR» (sic). Al tiempo de dichas afirmaciones, ninguna investigación clara, seria y profesional se había llevado a cabo y sin embargo, como ya era costumbre en las Fuerzas de Seguridad del Estado y del propio presidente, todo acto criminal o atentado terrorista inmediatamente era imputado a la guerrilla de las Farc; por su parte la gran prensa en forma sumisa y con falta de profesionalismo avalaba tales dudosas afirmaciones a sabiendas que carecían de un fundamento serio y probatorio. Transmitía simplemente la propaganda gubernamental. Una irresponsabilidad flagrante con respecto a la sociedad en su conjunto, le incumbe tanto al gobierno como a los medios informativos, ya que reforzaban la confusión e inquietud de la inmensa mayoría de colombianos y colombianas de bien. El atentado había sido perpetrado el viernes 7 de febrero del 2003 con un carro bomba que había sido introducido por dos individuos en el parque automotor del club el Nogal. El vehículo explotaría sin dar tiempo a sus dos ocupantes de ponerse a salvo, algo bastante curioso, pues hasta esa fecha y a pesar de la cruenta guerra sucia que vive el país, los kamikazes felizmente han brillado por su ausencia. La línea que siguió el gobierno no cambió un milímetro con respecto a su primera temeraria declaración. El “presidente” Uribe se reunió con los presidentes centroamericanos convenciéndoles del enorme peligro que representaba los “terroristas de las FARC” y por su parte la Ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez salió corriendo hacia Washington a pedir más armas, y el vicepresidente Santos dio una conferencia en la OEA, exigió a los Estados Americanos condenaran a las FARC como grupo terroristas. Los gobiernos de Brasil, Ecuador y sobre todo Venezuela se negaron a hacerlo. El gobierno venezolano de Hugo Chávez pagaba con creces semejante osadía.

El ministro del interior y justicia Fernando Londoño Hoyos —presidente de la junta directiva del Nogal—, declaraba el 10 de febrero:

«Lo que se está buscando a nivel internacional es una declaración obvia y elemental de que este (FARC) es un grupo terrorista. Por lo menos para que se mantenga ese protocolo.

El 11 de febrero, el ministro Londoño reiteraba ante los medios de información que el atentado terrorista contra el Nogal, había sido perpetrado por las FARC, alentadas por los recursos que reciben del narcotráfico y pidió a los colombianos unir esfuerzos para luchar contra los violentos.

El 12 de febrero la OEA manifestó su «profundo rechazo al execrable atentado terrorista cometido por las FARC el 7 de febrero del 2003 en Bogotá». Por su parte el gobierno estadounidense por intermedio del subsecretario de Estado para asuntos políticos Marc Grossman, declaró: «Si quedaba alguna duda sobre las verdaderas intenciones de las FARC, las bombas de Neiva¹²⁷ y el club el Nogal las aclararon,

¹²⁷ La ciudad de Neiva es la capital del departamento del Huila, al sur del país. Varias bombas estallaron en esta ciudad ocasionando la muerte de una docena de transeúntes entre los cuales habían niños y decenas de heridos. Las FARC fueron designadas como autoras del atentado. La guerrilla desmentiría la acusación.

al contabilizar 53 muertos y 192 heridos, muchos de ellos niños y mujeres»¹²⁸. La diabolización del movimiento guerrillero era un hecho consumado.

Pero tales aseveraciones no concordaban con las investigaciones llevadas a cabo por los expertos de la Fiscalía, la policía y 20 expertos en atentados de Estados Unidos.

«Ni siquiera sabemos si el carro bomba fue activado manualmente o a control remoto» (Diario de El Espectador: 2 de marzo del 2003).

«Se sabe además que hasta el momento la Fiscaliza no tiene la prueba reina que vincule a la guerrilla de las FARC con el alevé atentado. Advirtió un investigador». Revista Semana: 3/3/2003)

Por su parte el grupo insurgente emitió un comunicado vía internet el 9 de marzo 2003 que fue reproducido por la agencia de noticias ANNCOL , en el cual negaron toda implicación en el atentado terrorista y señalaron a las fuerzas de Seguridad del Estado como las autoras a la vez que condenaron el terrorismo como forma de lucha:

«Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, informan:

1. Que el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC- EP, luego de hacer una paciente, rigurosa y seria investigación al interior de todas sus estructuras político-militares a nivel de estados mayores de bloques, frentes, columnas, compañías, guerrillas, fuerzas especiales y estructuras urbanas concluyo: que no existe responsabilidad de unidades de su organización en los hechos ocurridos en el club el Nogal de Bogotá, el pasado 7 de febrero del año en curso.

2. Nuestra percepción revolucionaria nos permite afirmar, que los autores de los hechos de El Nogal son los mismos del «collar bomba», los mismos que borrarón de la vida a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 1985, a los que sacrificaron, sin importarles que era de su misma clase y fiel representante de sus intereses al doctor Álvaro Gómez Hurtado¹²⁹, los que mataron a Luis Carlos Galán Sarmiento¹³⁰, por suponer que él, de forma, no de contenido, representaba una nueva opción; los que igual que los mercaderes de la muerte fabricaron una cadena de dolor y frustración, escalonada con los magnicidios de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro Leongomez y Bernardo Jaramillo; los mismos que a físico plomo exterminaron a la Unión Patriótica y a destacados Líderes del Partido Comunista, al igual que a miles de compatriotas...

3. El terrorismo de Estado con lo de El Nogal solo buscar desatar al interior del país un histerismo contra guerrillero, que haga propi-cio la aprobación del Estatuto Antiterrorista por el congreso, y en el campo internacional, limpiar la imagen y cosechar la popularidad con el gobierno paramilitar de Uribe Vélez.

4. Es muy sospechoso la prontitud con que los representantes del Estado y del gobierno, salieron, por exigencia del Departamento de Estado norteamericano a señalar a las FARC como autores... creando con ello una malintencionada y distractiva cortina de humo, para proteger a los verdaderos autores.

¹²⁸ Narcotraficantes secuestraron a una mujer, en uno de sus arreglos de cuentas, y le adornaron su cuello con un collar bomba que le explotó al tratar de ser desactivado. Los organismos de seguridad del Estado señalaron a las FARC como los autores de tan horrible crimen. Meses después se supo lo del arreglo de cuentas entre mafiosos. La prensa dedico una cuantas líneas para desmentir la autoría del grupo guerrillero, en contraste con los grandes titulares cuando se acu.so a la subversión.

¹²⁹ El ex candidato conservador a la presidencia de la República fue asesinado por un grupo de oficiales del ejército. Al parecer se negó a participar en una conspiración contra el gobierno de Ernesto Samper.

¹³⁰ El candidato del «Nuevo Liberalismo» fue asesinado por Pablo Escobar e 'ilustres' políticos militantes de la mafia entre los que estaban Alberto Santofimio Botero, ministro, presidente del partido liberal, varias veces senador.

5. *Ratificamos una de las conclusiones de la Octava Conferencia Nacional Guerrillera realizada en 1993: 'Queremos manifestar con claridad nuestra condena al terrorismo, independientemente al origen que tenga. Las acciones violentas que tienen como objetivo intimidar a la población civil o suplantar al pueblo con acciones individuales que este debe desarrollar... Nuestra política es justa porque somos interpretes de un país intimidado por el terrorismo de un Estado, que desde hace 45 años se ensaña con la población'». Montañas de Colombia marzo 9 del 2003.*

Las investigaciones del atentado más sangriento de los últimos tiempos, después de los efectuados por Pablo Escobar Gaviria amigo y socio de los Uribe, padre e hijo, y primo hermano del actual asesor presidencial José Obdulio Escobar, y el sanguinario narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha en los años 90, no avanzaban. Los investigadores seguían privilegiando a las FARC como los autores intelectuales y materiales del crimen terrorista, sin buscar, aparentemente, otras pistas como la del narcotráfico o el arreglo de cuentas entre cabecillas del crimen organizado. Lo cierto era que dicha investigación estaba siendo influenciada o dirigida por fuerzas externas.

El club el Nogal tenía entre sus socios a la esposa del tristemente célebre Gonzalo Rodríguez Gacha, allí se habían celebrado varias reuniones entre narcoparamilitares y congresistas afines a su carácter terrorista. En el 2001 Carlos Castaño y Salvatore Mancuso tuvieron varias reuniones con empresarios, políticos y cinco obispos de la iglesia católica colombiana a plena luz del día, como si los cabecillas narcoparamilitares no fueran los criminales más buscados por la justicia del país. Así describió la revista Semana la reunión entre Mancuso y los congresistas aliados con los escuadrones de la muerte el 23 de noviembre:

«Paralelamente a las primeras reuniones, Mancuso se dedicó a mover los hilos de la alta política. En un exclusivo club al norte de Bogotá, el jefe militar de las autodefensas se reunió con congresistas amigos... Mancuso comenzó por explicarles porqué Castaño —y el mismo— habían decidido no entregarse a la justicia estadounidense. Luego, les pidió a los legisladores su apoyo para encontrar una fórmula jurídica para el perdón de sus delitos (crímenes) que no exigiera reconocerles un estatus político. 'Si esta ley finalmente sale, estaría listo prácticamente el 70 por ciento del proceso de paz'. Aseguro a Semana el asesor de uno de los jefes paramilitares.»

En la dirección postal del club el Nogal, fue registrada la pagina web de las AUC (paramilitares) «www.colombialibre.org». El periodista sueco Dick Emanuelsson autor de innumerables artículos sobre la realidad nacional, investigó sobre estos hechos encontrando que el servidor y la empresa de la pagina web de las —mal llamadas— AUC, se encontraban en Canadá. Según datos arrojados por la investigación, esta página fue abierta a las 5 de la mañana el 1 de noviembre de 1998. La empresa que recibió la solicitud de este grupo terrorista se llama ORBI.COM, situada en Quebec, Canadá y el director es Nelson Tactuk un dominicano de 48 años residenciado en Canadá desde 1991 y al parecer único empleado de la empresa. En su interesante investigación Emanuelsson encontró que la persona de 'referencia' es de las AUC y de la página www.colombialibre.org fue registrada a nombre de Teófilo Borges. Esta persona no existe pero figura en el registro de la empresa ORBI como contacto para el pago del arriendo de la página web de los paramilitares. Los números de teléfono y fax registrados fueron 57- 4- 790-1201 que corresponde a los dos receptores, fax y teléfono. El 4 es indicativo del departamento de Córdoba, cuna de los escuadrones de la muerte y donde el “presidente” Uribe tiene sus fincas al lado de las de Mancuso. También es interesante lo de la dirección, pues es Carrera 6a Numero 78-89 de Bogotá, y la dirección del club el Nogal con sus 32.000 hectáreas, está localizado entre las carreras 5a y 7a con la calle 78; y aun cuando la dirección también es falsa, si corresponde a las coordenadas del club, con lo cual se puede deducir que la pagina de los escuadrones de la muerte estaba siendo manejada desde los lujosos locales del club el Nogal.

El 27 de febrero del 2003, el periodista Emanuelsson envió un mensaje al señor Tactuk preguntándole quien es la persona física y jurídica de la página www.colombialibre.org y como paga su cliente el arriendo de dicha pagina. Al día siguiente, 28 de febrero hacia las 11 de la mañana, el señor Nelson Tactuk, sin mediar palabra, borró todos los datos de la página de los paramilitares e incluso borro sus datos personales: nombre, apellido y dirección electrónica. Ahora, no solo ORBI. COM, tomó medidas drásticas, si no que uno de los responsable de los escuadrones de la muerte, tomo inmediatamente contacto con el periodista sueco y le envió un mensaje por internet, identificándose como «'Adolfo Paz' inspector nacional de las AUC», uno de los más sanguinarios narcoparamilitares. El criminal se ofreció a responderle todas las inquietudes que él tuviera, añadiendo: «Por ahora le informo que colombialibre, cambiará su suscriptor del Canadá y ya hemos abierto una web en Estocolmo, pues este país es abierto en cuanto a la libertad de expresión, que es un derecho de todo ciudadano y más de una organización política y militar, como son las Autodefensas Unidas de Colombia que, para su información no somos paramilitares, y menos terroristas».

Muchas preguntas hay que hacer al respecto, pero, la más importante es ¿qué ha hecho la policía, en qué estado se encuentran sus investigaciones, que resultados se han obtenido? lo cierto es que seguiremos esperando las respuestas. Pues, El Cartel de la Policía colombiana poco interés tiene en aclarar muchas dudas Uno de los grandes interrogantes sobre los autores intelectuales y materiales del criminal atentado del club el Nogal se puede aclarar en el libro que escribió el periodista Alfredo Serrano titulado 'La Última Batalla de Castaño, Editorial Oveja Negra, Bogotá 2007, sobre el atentado del Nogal. Según el periodista Serrano, el criminal atentado habría sido planeado por el narcopara-militar Hernando Gómez Bustamante alias 'rasguño' perteneciente al Cartel del Norte del Valle y quien al parecer tenía en mira a su «amigo» Salvatore Mancuso. 'Rasguño' conocía de cerca la frecuencia con la cual el cabecilla narcoparamilitar, (con pasaporte europeo), se hospedaba y se reunía en el Nogal, y fraguo el golpe con la casi seguridad que Mancuso se encontraría ese viernes 7 de febrero en horas de la noche en dicho club. Pero las circunstancias y buena suerte del criminal cabecilla, hizo que este se enterara de dicho atentado y se abstuviera de ir ese día al Nogal, en donde se había preparado de tiempo atrás una fiesta. También afirma el periodista Serrano, que después de varias investigaciones se logro saber que el atentado no solo era dirigido hacia el cabecilla narcoparamilitar, si no también era un llamado de «atención» a altos funcionarios del gobierno de Uribe. Lo investigado hasta el momento, sobre el atentado al club de el Nogal ha sido teledirigido por fuerzas oscuras, la verdad tardará en aparecer, mientras la pista narcoparamilitar siga siendo desechada de plano, pues, el gobierno no tiene mucho interés en esclarecer este otro atentado terrorista.

En Colombia pasan muchas cosas a diario (especialmente deplorables), pero nunca pasa nada. Una tras otra, las informaciones se suceden, una cubre a la otra y así sucesivamente transcurren las horas, los días, los meses y allí nunca ocurre nada. Como anestesiados, las colombianas y los colombianos escuchan y ven en las noticias: que un enfrentamiento entre ejército y guerrilla dejó varios muertos, que el gobernador o alcalde de tal departamento se robo tantos millones, que la pobreza aumenta irremediamente, que el presidente Uribe promete mas mano dura contra los violentos, y sin embargo, se escucha y se lee en los periódicos que los escuadrones de la muerte asesinaron tal o cual dirigente o sindicalista, que el ejercito ajustició tres campesinos a los cuales hizo pasar como guerrilleros, que en el Congreso de la República se vende y se compra drogas libremente, que otro niño murió por falta de atención medica ya que ningún centro hospitalario quiso prestarle ayuda por no tener dinero con que pagar, que se descubrió una red de prostitución de niñas menores entre los 8 y los 14 años, y nadie dice nada, nadie hace nada. Que subió el combustible, que el ejército y la policía siguen amenazando y martirizando a la población de Cimitarra, tratándolos de guerrilleros, que varias decenas de familias quedaron en la calle y desamparadas por la alud de tierra debido a las fuertes lluvias, que destruyeron sus humildes viviendas y lo peor que la ayuda prometida por el presidente nunca llego, se afirma con pruebas que Uribe y su familia pertenecen al narcoparamilitarismo. Y en Colombia no pasa nada. El presidente habla por radio, televisión y a la prensa escrita diciendo que todo va bien, que su lucha contra el terrorismo va en la recta final con el valeroso empuje de sus fuerza armadas y que la economía se

porta mejor que el año anterior, que los índices son alentadores, que las exportaciones marchan muy bien y por lo tanto los colombianos no tienen de que quejarse, y las encuestas de «opinión» arrojan un 70 o 75 por ciento de popularidad del narcoparapresidente, y los poderosos medios de «información» anuncian otro atentado terrorista y achacan la autoría a la guerrilla de las FARC, mientras en la calle mucho ciudadano comenta que ese es otro «falso positivo» del ejército para ganar condecoraciones, dinero y ascensos; y son acusados por crímenes, de la parte de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, funcionarios y militares cercanos al presidente, y este sale a gritar a todo pulmón que eso es una patraña de los enemigos de su «seguridad democrática», y despotrica contra las ONGs acusándolas de encubrir a los terroristas, de ser cobardes y ser instrumentos del terrorismo, pero no pone en tela de juicio a sus subalternos civiles y militares que con pruebas, son señalados de complicidad con el narcoterrorismo y crímenes de lesa humanidad. Para el presidente, todos ellos son buenas personas y él los conoce muy bien, según sus propias palabras; en tanto que para las víctimas de los horribles crímenes narcoparamilitares, jamás ha tenido una palabra de consuelo, ni mucho menos ha habido un grito de dolor o indignación en contra de los sanguinarios victimarios¹³¹. Y a pesar de toda esta in-vivable situación el presidente de la MAFIA colombiana continúa con sus circenses «Consejos Comunitarios», disfrazado con sombrero, alpargatas y poncho como remedando a sus desprovistos semejantes, al humilde campesinado. Campesinado al que va a encontrar para predicar su parábola de 'seguridad democrática' y a prometerles bien-estar y progreso, a muchos de estos hombres y mujeres que durante decenios solo han recibido represión estatal y quienes en las nuevas circunstancias son obligados en su mayoría a asistir a los «consejos comunitarios» del culebrero¹³², mientras que otros deben, so pena de ser acusados de terroristas, aplaudirlo y vitorearlo. Acompañado —el culebrero— de ministros y directores de institutos descentralizados se limita, después de sus largas, aburridas y conservadoras peroratas, a ordenarle a sus acólitos de anotar todas las inquietudes y solicitudes de los campesinos, quienes con la candidez de la tierna edad, se atreven a pedirle al capo máximo, una real ayuda para ellos, para sus familias, para sus pobres y olvidados pueblos: alcantarillado, electrificación, carreteras, puestos de salud, escuelas y créditos para sus cultivos de pancoger y una asesoría técnica eficaz, son las solicitudes más comunes; el acólito de turno apunta casi escrupulosamente todo lo que le ordena su jefe y terminado el «Consejo Comunitario», parte el presidente como un todopoderoso y moderno dictador, repartiendo apretón de manos a sus 'alegres' dirigidos prometiéndoles solución a todo lo solicitando, porque él sí cumple y los bendice pidiéndoles que apoyen la «seguridad democrática» y se va acompañado de su ejército de guardaespaldas para nunca más volver. 'Las ayuditas' como las llama, este inescrupuloso y cínico personaje, fueron ilusión de un día para muchos de estos hombres y mujeres del campo que creen aún en promesas electoreras, a pesar de todo lo que pasa en Colombia y —que a la vez —no pasa nada.

En muchas ocasiones durante los circenses consejos comunitarios de Uribe, simples ciudadanos o líderes cívicos que se han atrevido a poner en tela de juicio el sistema de gobierno o la 'seguridad democrática', han debido padecer el susto del año y recibir sin concesión alguna, la visita del comandante de la policía o del ejército de la zona, para verificar si son terroristas o si hacen parte de los 'cómplices' de la guerrilla y sobre todo para zarandearlos fuertemente por osar criticar la democracia uribista. Y como «Colombia es pasión», el 1 de febrero del 2003 en uno de sus 'consejos comunitarios' en Corozal, el capo de la mafia Uribe, fue interpelado por el alcalde de El Robledo Eudaldo Díaz Salgado, quien le imploró al «presidente» protección, le pidió que no lo dejara matar, pues él se había atrevido a denunciar casos de corrupción y narcoparamilitarismo en el departamento y que comprometían al gobernador Eric Morris, al político Salvador Arana Sus y otros fervientes uribistas; la Procuraduría

¹³¹ * Ver informe audiovisual «Memorias del Embrujo» en el cual el narcoparapresidente acusa a las ONGs de defender a los terroristas y de ser entidades cobardes: [http:// video.google.es/videoplay?dodd =51965 0896 3203948098](http://video.google.es/videoplay?dodd=5196508963203948098)

¹³² En el lenguaje rural antioqueño, culebrero es aquel charlatán disfrazado de comerciante y que va de pueblo en pueblo vendiendo toda variedad de pomadas y menjurjes que curan todos los males habidos y por haber. Vende sus mentirosos productos y desaparece.

Regional lo había destituido por tales acusaciones y los paramilitares lo habían sentenciado a muerte. Poco más de dos meses después de la solicitud que fue vista por millones de televidentes, el Alcalde fue asesinado por los paramilitares y sus suplicas quedaron en el aire. El jefe del Estado lo dejó asesinar. 'Estas son pues, las maniobras legales de un régimen profundamente corrompido, que ha hecho de la mentira, la adulteración y el manejo mafioso de la cosa pública, su forma de hacer 'política'. El directo responsable del asesinato del alcalde Díaz, fue el ex gobernador del Cesar Salvador Arana Sus y quien poco tiempo después del asesinato del alcalde Díaz, fue nombrado por Uribe embajador en Chile. Interrogado por la prensa del por qué el intempestivo nombramiento de Arana como embajador, el ministro de interior de la época Sabas Pretel de la Vega, respondería que el envío de el ex gobernador a Chile, se debía sobre todo para preservar su seguridad.

En su primera "elección" presidencial Álvaro Uribe no solo se hizo rodear de gente cercana al narcotráfico y al paramilitarismo, si no que también financio su campaña con narco dólares para asegurar su triunfo. La mayoría de los narcotraficantes hicieron una recolecta de varias decenas de millones de dólares para que no le faltara nada a su elegido en la ruta hacia la cima presidencial¹³³. Había que jugársela toda, pues, de su triunfo dependía el futuro del narcoparamilitarismo. En la misma tónica se encontraban los políticos de ambos partidos liberal y conservador, allegados al narcoparamilitarismo, comprometidos con la «refundación de la patria», en la inmensa mayoría de los departamentos del país y teniendo como fuerte, o base de operaciones, la parte norte del país. Los criminales cabecillas del narcoparamilitarismo como Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, Diego Murillo, Carlos Mano Jiménez, Ramiro Vanoy, Rodrigo Mercado, Eduardo Cobo, Francisco Zuloaga y Hernando Gómez entre otros, tendieron puentes con políticos profesionales del bipartidismo que domina la escena política nacional hace mas de 180 años, para cerrar filas en pro del triunfo anunciado del 'Mesías' Uribe. Reconocidos políticos, no por sus labores democráticas, sino por sus indelicadas maniobras, emprendieron la 'gloriosa' tarea de hacer triunfar al líder de la mafia, mientras que otros políticos novatos (salidos de las filas del narcoparamilitarismo) como por ejemplo Rocío Arias, empujaban la máquina de la victoria con igual o más entusiasmo pues, si los dineros legales destinados para la campana faltaban, no había preocupación ninguna, ya que todo estaba asegurado por los «patrones» del crimen organizado. El clan Araujo: Álvaro, María Consuelo, Álvaro padre, Sergio; el antiguo patrón de patrones industriales Sabas Pretel de la Vega; el político de las dos caras Germán Vargas Lleras; el intermediario entre la mafia de la costa atlántica y Uribe, Jorge Noguera Cote; Fabio Valencia Cossio; el discreto mafioso Bernardo Moreno; el primo del capo Pablo, José Obdulio Gaviria; otro de los dueños de la poderosa prensa Juan Manuel Santos; el asesino Salvador Arana Sus; el entrañable amigo de Uribe, Miguel de la Espriella; el cerebro de la mafia en el centro del país Ciro Ramírez Pinzón; el narcopara de la zona (cafetera) centro-sur del país Oscar Iván Zuloaga; el proveedor de insumos para transformar la hoja de coca Pedro Juan Moreno; el hijo de la criminal mafiosa apodada la 'Gata', Héctor Alfonso López; otra cuota narcoparamilitar Benito Revollo Muriel; el otro hijo de la 'Gata', alcalde de Magangue, acusado de asesinato y cercano a Uribe, José Luis Alfonso López; Carlos Alberto Clavijo; Juan Manuel López Caballero; Mario Salomón Nader Muskus; Luis Humberto Gómez Gallo; Álvaro Alfonso García Romero; Leonor Serrano de Camargo; Jaime Ernesto Canal; Zulema Jattin; Musa Desaire; Reginaldo Montes; Jorge Luis Caballero; Elias Raad Hernández; Dieb Nicolas Maloof Cuse; Germán Hernández Aguilera; Eleonora Pineda Arcia; el ex secretario de Uribe en la gobernación de Antioquia Rubén Darío Quintero Villada; Freddy Ignacio Sánchez; Luis Elmer Arenas; Mauricio Pimiento Barrera y Piedad Zucardi; Alfonso Antonio Campo; José Rosario Gamarra; José Joaquín Vives;

¹³³ A diferencia de la campaña presidencial de Ernesto Samper (1994) la cual recibió dineros de los narcotraficantes del Cartel de Cali (aproximadamente 18 millones de dólares) y con condiciones poco conocidas pero si muy limitadas; la primera campaña de Álvaro Uribe recibiría el pleno apoyo económico del conjunto de los narcotraficantes y paramilitares del país (aproximadamente entre 25 y 30 millones de dólares) con la gran condición de quitarles el enorme peso de las penas de cárcel en Colombia que oscilan entre 30 y 60 anos por sus crímenes y para los extraditables penas entre 40 anos y cadena perpetua en los Estados Unidos. Con la «refundación de la patria» todos pensaban que las cosas irían por el buen camino, el más convencido era Uribe, quien tenía la certeza de agradecer a su hermano y sus primos por los crímenes cometidos y de paso, el mismo zafarse definitivamente de todo señalamiento. La impunidad sería total.

Sergio Díaz Granados; Jorge Carmelo Pérez; Adalberto Jaimes; Manuel Darío Ávila; Jorge Luis Feris; Alfonso López Cossio, el mafioso Andrés Felipe Arias y el nombrado por Mancuso, cabecilla de los paramilitares en Bogotá, Bloque Capital, Francisco Santos; entre otros muchos, no se esforzaban en su tarea política de convencer a las masas hambrientas que el mejor candidato a la presidencia era el de ellos, el Mesías Uribe, pues, los no convencidos o reticentes se les 'enderezaba' a punta de amenazas con fusil en mano y en el mejor de los casos con ínfimos sobornos. Los empresarios 'narcoparas' también participarían con el triunfo del candidato de la MAFIA, sin preocuparse en lo más mínimo del futuro de la Nación. Los poderosos capitalistas Grupo Santo domingo y grupo Ardilla Lule (varias de sus empresas nacionales están acusadas de favorecer los crímenes paramilitares) no escatimaron su ayuda económica a favor del candidato de la mafia.

Entre los mecenas directos del candidato Uribe, aparecen varias personas de dudosa reputación, sobre saliendo Enilce López Romero alias «La Gata». Mujer enigmática e inescrupulosa que logró hacer fortuna gracias a su antiguo amigo el sanguinario Gonzalo Rodríguez Gacha, quien le habría depositado una considerable suma de dinero producto del narcotráfico, antes de su muerte. «La Gata» recuperó dicha fortuna y creó una empresa de apuestas llamada 'Chance' (apuestas que son un apéndice de todas las loterías del país). Tuvo un único socio, a quien según denuncias, asesinó para quedarse con su parte. Mujer ambiciosa, cínica y populachera «La Gata» comenzó a ganarse un espacio en su región Magangue, luego en el departamento de Bolívar y después en toda la Costa Atlántica, en la cual alcanzo a desplegar su imperio de terror, mezclado de limosnas y amenazas. A la par con su popularidad de mujer de loterías, paulatinamente gano posición dentro de los estamentos del bajo mundo del narcoparamilitarismo —asociándose con el criminal sicópata Carlos Castaño— hasta convertirse en la 'madona' respetada y temida por todos, incluidos políticos, fuerza pública y mismo cabecillas del crimen organizado. En compañía de su medio hermano Arquímedes Segundo García Romero¹³⁴ y de sus dos hijos, se apoderaron de la alcaldía de Magangue, hicieron nombrar a sus peones en otras alcaldías del departamento y hasta el mismo hospital llego a ser de su entero dominio, creó un ejército de matones fuertemente armados quienes imponían la voluntad de su jefa, amenazando, desapareciendo y eliminando a todos aquellos irreverentes que no se sometieran a sus designios. Casi todas las autoridades civiles y militares de los departamentos de Bolívar, Barranquilla y Cartagena actuaban como si fueran sus empleados. Con su fortuna «La Gata» alquilaba, sobornaba, vendía y compraba conciencias. Financió la campaña de Uribe y hasta dedicó una pequeña fortuna para hacer enmarcar y adornar esplendorosamente la foto en la que aparece su hijo José Luis con el presidente Uribe, muertos de la dicha. La foto fue colgada en el despacho del 'gatico' alcalde, como un trofeo universal.

Los pobres de Magangue y otros poblados acudían a su esplendorosa mansión una vez a la semana para recibir los favores en dinero o recomendaciones de Dona Enilce, alias la 'Gata'. Extensas colas se formaban con gentes pobres venidas de todas partes para que ella les resolviera problemas de toda índole. Incluso era ella quien autorizaba una consulta en el hospital o la entrega de los medicamentos, con una boleta firmada por «La Gata» y dirigida al establecimiento hospitalario, el paciente obtenía lo que necesitaba sin problema alguno. Esta misma mujer, esta narcoparaempresaria, aportaría oficialmente 100 millones de pesos (40.000 euros) para la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez, pero extraoficialmente se cree que el monto se puede multiplicar por mil. En primera instancia Uribe “presidente” negó haber recibido dineros de «La Gata», después aseguró que no la conocía, a pesar de existir una foto en la que aparecen los dos en plena campaña en la costa norte del país. Después de posesionado el presidente Uribe, firmó un decreto con el cual los empresarios del 'Chance' pagarían una tasa de impuestos menor que la que existía. De coincidencia no podría catalogarse esta medida gubernamental, toda vez, que una de las grandes favorecidas en todo el país, sería doña 'Gata', la empresaria más conocida en los departamentos de la Costa norte colombiana.

¹³⁴ La prensa nacional, anuncio el 23-12-06 que la Fiscalía General acusó a 'la Gata' y a su hermano de peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. También fue acusado el alcalde de Montenegro Bolívar, Arcelio Sánchez Rojas por haber transferido 790 millones de pesos (316.000 euros) a los hermanos García Romero. La Nación había girado estos dineros para financiar servicios de salud

La influencia de «La Gata» sobre sus dos hijos José Luis Alfonso López y Héctor Julio Alfonso López es extrema, sofocante, al punto que a este último, lo obligó a presentarse al congreso de la República por uno de los partidos mafiosos cercanos a Uribe, «Apertura Liberal» dirigida por el narcotraficante Luis Enrique Pérez, alias 'el pulpo', Héctor Julio obtuvo una silla de diputado. Por su parte José Luis como alcalde de Magangué, se encuentra huyendo de la justicia y las autoridades 'no conocen' su paradero¹³⁵. Está acusado de haberse apropiado 7 mil millones de pesos (2 millones 800 mil euros). Habitantes del Municipio lo han acusado de haber violado varias jovencitas y de ser «el patrón» del ejercito narcoparamilitar que posee su madre (más de un centenar y medio de hombres fuertemente armados). Otro hecho insólito que llamo la atención de las autoridades nacionales, fue en el 2002 cuando se conoció que entre los ganadores del premio mayor de la Lotería del Atlántico, apareció el nombre de Jorge Luis Alfonso López, quien según su propia versión, compro el billete de lotería por internet; otros casos similares se dieron en los cuales los ganadores, ciudadanos desprevenidos y honestos, se les pedía su billete y se les aconsejaba esperar una semana y abrir varias cuentas bancarias para luego recibir en dichas cuentas el dinero del premio. En todos los casos, los dineros eran consignados por agendas fantasmas de otras ciudades, mientras que el billete ganador era cobrado por un testaferro quien recibía directamente de la lotería departamental el valor del premio. Una 'bonita' y sencilla manera de lavar dineros del narcotráfico. En noviembre del 2006 la Superintendencia de salud, recibió un anónimo en el cual se denunciaba que la señora Ana Carolina Vélez de Tovar, esposa del criminal narcoparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», había ganado un premio de la lotería 'El Libertador' del departamento del Magdalena. Dicha lotería se había acogido a la ley 550 o de quiebras y hacia más de tres años no pagaba los impuestos a la salud y aun así seguía vendiendo billetes y pagando los premios a plazos. Las explicaciones de la señora Vélez no fueron satisfactorias y la superintendencia ordenó el cierre definitivo de la lotería el 30 de noviembre¹³⁶. En otro delicado asunto, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos a Jorge Luis Alfonso López, por haber suspendido de manera imprevista la prestación del servicio de salud, otorgándosela a otra persona que el mismo escogió, la decisión podía ser apelada por los defensores del alcalde de Magangué¹³⁷.

Enilce López Romero fue detenida por la Fiscalía el 6 de enero del 2006 bajo los cargos de lavados de activos. Pero para el año 2005 ya la prensa nacional había denunciado que «La Gata» patrocinaba escuadrones de la muerte e influía con dineros provenientes del narcotráfico en elecciones de gobernadores y alcaldes de la Costa Atlántica¹³⁸. Para la captura de esta peligrosa 'dama', la Fiscalía debió acudir al DAS y al Ejército y llevar a cabo la diligencia en horas de la madrugada (3 a.m. hora colombiana) por temor a un enfrentamiento con los matones y sicarios de Doña Enilce, un ejército de más de 70 miembros armados hasta los dientes y quienes seguramente defenderían a su jefa a costa de sus propias vidas; pero también se quería evitar que sus seguidores, gente extremadamente pobre, hiciera un amotinamiento en su favor, pues la consideran un santa, ella les regalaba dinero, comida y boletas con su firma para ser atendidos en el hospital y para poder obtener medicamentos 'gratis', algo que los mismos políticos del departamento no hacían, decía la gente, ante un completo abandono por

¹³⁵ Según la prensa nacional y radio Caracol 08-10-06, El Alcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso López... después de dos meses de permanecer prófugo de la justicia, a comienzos de esta semana reasumió sus funciones como mandatario local, y volvió a desaparecer. El burgomaestre, reapareció, hizo un consejo de gobierno, anuncio cambios en su gabinete, habló de obras que realizara en su municipio y a través de una emisora local se dirigió a la población, anunciando que no se había reintegrado antes porque tuvo que practicarse una cirugía en una de sus piernas. Sobre su situación judicial, dijo que todo estaba en manos de sus abogados. Sin embargo desde la mañana del miércoles, el paradero del alcalde volvió a ser un verdadero misterio...

¹³⁶ Prensa nacional y revista Cambio 31-12-06.

¹³⁷ Prensa nacional 11-30-06

¹³⁸ Información difundida por la agencia de noticias AFP.

parte del gobierno central. Igualmente fue detenido su hermano Arquímedes y trasladados al «Bunker» de la Fiscalía en Bogotá. «La Gata» como era de esperarse negó todos los cargos en su contra y se presentó como una empresaria con una pequeña fortuna y un corazón grande —no tanto como el de Uribe— que le permitía ayudar a los más necesitados. Filantrópica casi después de haber hecho su pequeña fortuna y su dedicación en favor de los más necesitados, lo podían comprobar las autoridades preguntándole a todos los habitantes de la región y porque no, del departamento, quienes irían a declarar su admiración y eterno agradecimiento. Y efectivamente, mucha gente humilde e iletrada decía que la «La Gata» era una mujer extraordinaria que se preocupaba por ellos, que estaba pendiente de sus necesidades y dolencias; pero lo que no sabían mucha de estas gentes humildes, era que esta «bondadosa» mujer en compañía de sus dos hijos, su hermano y muchos alcaldes del departamento y la complicidad de gobernadores y políticos de la Costa, se robaban los dineros públicos destinados para la salud y la educación de la ciudadanía, que también negociaba con el bajo mundo de la Costa Atlántica y la mafia narcoparamilitar, que asesinaba y atropellaba a todo aquel que no estuviera de acuerdo con sus procedimientos, malversaciones y crímenes. Es seguro que la mayoría de estas humildes gentes lo ignoraban, pero es que un candidato a la presidencia de la República podía ignorar los negocios sucios de esta familia y sobre todo ese imperio levantado a base de extorsiones, amenazas y asesinatos? Pues, es difícil creerlo. Y con todo ese poder económico y militar, además de ese gran capital humano utilizado exclusivamente en campañas políticas, ¿quién no haría preguntas? La súper conocida, respetada y temida Enilce López Romero, participaría en la campaña del candidato de los narco-paramilitares Álvaro Uribe Vélez, ayudándolo a conquistar ese poder máximo, que los 'narcos' siempre soñaron. Y él, el 'irreprochable' nuevo “presidente”, iría a retribuir esa 'ayudita' como él suele decir, impartiendo un decreto presidencial con el cual los empresarios del 'Chance' y juegos de azar pagarían menos impuestos y otras gabelas.

En una de sus acostumbradas jugadas «La Gata» se hizo trasladar de la cárcel de mujeres de Bogotá a una cárcel de Cartagena, aduciendo problemas de salud que el frío de la Capital le agravaban, durante esos meses de detención en Bogotá no quiso señalar a ninguno de los políticos a los cuales le contribuyó financieramente. Pero tan pronto llegó a Cartagena y en su primera declaración ante la Fiscalía, acusó al alcalde de Cartagena Nicolás Curi de no haberle pagado un préstamo y a quien entrego dineros para su campaña. Igualmente acusó al senador William Montes, preso por narcoparamilitarismo, de haberle pagado mal. Habló también del senador Vicente Blel, quien en compañía de otros politiqueros querían hacerle mal a ella una mujer que jamás había cometido siquiera una infracción de tránsito. Dijo que aprendió a hacer discursos de la mano de David Turbay ex senador y ex Contralor General quien fuera condenado por narcotráfico, y habló del ex presidente Cesar Gaviria, a quien en el pasado llevó a su finca a comer asados. Reiteró que no posee fortuna alguna, sin embargo tiene tres cotizados abogados que la defienden, y dijo que sufría de muchos males¹³⁹. En una de sus visitas a Cartagena, el vicepresidente Francisco Santos, denunció a políticos de la Costa quienes visitaban a «La Gata» y pagan 200 mil pesos (80 euros), por el derecho a la visita¹⁴⁰. Pero los problemas de esta narcoparaempresaria no están por terminar, pues fue descubierto en una de sus bodegas de su empresa Uniapuestas en el 2004, dos helicópteros Hughes 500 de procedencia Israelí y de tecnología de punta, una lancha rápida y decenas de repuestos para aviones y helicópteros y equipos de material satelital. El hombre que cuidaba el lugar Gerardo Vega, dijo ser empleado de Uniapuestas, había sido contratado como escolta personal, pero había sido escogido para cuidar la inmensa bodega, dijo también que el jefe de seguridad de Uniapuestas Raúl Montes, lo había prevenido sobre la llegada de unos contenedores, que resultaron ser los helicópteros. Jairo Castillo ex paramilitar y quien ha contado a la Corte Suprema de Justicia sucesos y situaciones de su antiguo patrón Salvatore Mancuso, es uno de los testigos claves de la complicidad de «La Gata» con Mancuso y los escuadrones de la muerte y puede contarle todo sobre los helicópteros y la lancha encontrados en las bodegas de propiedad de

¹³⁹ Prensa nacional y El Tiempo 22-5-07.

¹⁴⁰ Prensa nacional y El Tiempo 21-3-07

Enilce López Romero. El otro testigo de primera mano y quien hubiera podido aclarar este y otros negociados entre esta «dama» y el principal cabecilla de los escuadrones de la muerte Jairo Andrés Angarita, ex piloto de la Fuerza Aérea Colombiana y segundo de Mancuso, fue asesinado. Mancuso, que es experto piloto de helicóptero, confesó ante la Fiscalía que su grupo terrorista poseía 9 helicópteros, la mayoría destinados al tráfico de droga y piloteados por miembros de la fuerza pública¹⁴¹. Para la empresaria Enilce López Romero, mujer con un oscuro poder económico y político en los departamentos de Sucre, Magdalena, Bolívar, Cartagena y Atlántico y quien espera en prisión una condena por lavado de activos, su cuarto de hora no parece haber terminado. Pues esta «Gata» también está involucrada en varios expedientes referentes a crímenes de los escuadrones de la muerte. Pero hay que esperar, pues en el país de Uribe, que él, y su esposa Lina Uribe en compañía de sus acólitos bautizó «Colombia Es Pasión» todo puede ocurrir, incluso la impunidad total, porque hay que tener en cuenta que el jefe del pool de abogados que hacen la defensa de «La Gata» es nada menos que el controvertido Jaime Lombana Villareal, el mismo abogado del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Raúl Montoya Flórez, prospero empresario de la Costa norte del país, fue el gerente y financista de la campaña presidencial en el 2002 de Uribe en el departamento del Magdalena, según acusaciones de Rafael García, ex jefe de informática del DAS y hoy preso y procesado por narcoparamilitarismo. Montoya poco a poco se convirtió en el principal distribuidor y vendedor de licores de la Costa Atlántica, posee un galería de arte en Miami y tuvo millonarios negocios en la Florida, Estados Unidos. Fue amigo de los hermanos Mario y Giovanni Lignarolo, procesados y condenados por lavado de activos en 1988 y tuvo relaciones con Luis Vásquez condenado por conspiración para delinquir y lavado de activos en 1992. El 3 de junio de 1986 fue abierta una cuenta corriente en el Banco de Crédito y Comercio de Colombia, numero 005-218-26-8 a nombre de Carlos Martínez Hernández, con autorización de girar cheques a nombre de Raúl Mejía. Luego la cuenta fue cancelada, el 18 de noviembre del mismo año, pero de ella salió el cheque, con que se pagó el asesinato del director y propietario del diario bogotano 'El Espectador' Guillermo Cano Isaza. El verdadero administrador de dicha cuenta era Luis Carlos Molina Yepes, amigo personal del capo Pablo Escobar Gaviria. Por esta razón Molina Yepes, fue condenado a 16 años de prisión. De la misma cuenta que salió el dinero para el magnicidio del periodista Guillermo Cano, asesinado por orden de la mafia, salieron varios cheques a nombre de Raúl Montoya Flórez director de campaña de Uribe, en el Magdalena. Preguntado Molina Yepes sobre sus actividades y a quien había girado cheques de la cuenta antes citada, expresó que «era distribuidor exclusivo de Aguardiente Antioqueño para el Magdalena», en cuanto a los cheques, no se acordó o no conocía a los destinatarios, «a excepción de Raúl Montoya, que es amigo mío. Debe ser que le compré algunos dólares». Una vez conocidas las revelaciones del ex jefe de informática del DAS, Rafael García, en forma inmediata el presidente Uribe salió a defender a Raúl Montoya, calificándolo de «un señor muy correcto». Sin embargo el diario El Nuevo Herald de Miami, reveló que Raúl Montoya Flórez, se había quedado sin visa para ir a Estados Unidos por «sombrios episodios» A pesar de que Montoya no tiene ningún proceso en su contra, existen dudosos cheques y un pasado que no perdona. En lo que atañe al «presidente» Uribe, estas fueron sus declaraciones ofrecidas a la prensa nacional: «Y ahora entonces le van a quitar legitimidad a este gobierno, cambiando a don Raúl Montoya, un hombre honesto que vive en Santa Marta, por Diego Montoya, un narcotraficante. Hombre no hay derecho que pongan a los colombianos a leer unas revistas importantes en Semana Santa que violan la Constitución, que violan el derecho a la intimidad y al buen nombre de personas, que le cambian al ciudadano el nombre que ha tenido, reconocido como el de una persona honesta, por el nombre de un narcotraficante, para hacerle semejantes imputaciones, a mi me da hasta pena con don Raúl Montoya, pregunten ustedes en Santa Marta quien es don Raúl Montoya»¹⁴²

¹⁴¹ Prensa nacional y El Tiempo 2-6-07

¹⁴² El Espectador, Equipo de Periodismo Investigativo, PIE. A pesar de los nexos de Uribe con la mafia, este diario sigue apoyando férreamente las políticas de Uribe y su gobierno. (¿?!!)

El cuestionado ex director del DAS Jorge Noguera, acusado de complicidad de asesinato, pertenecer al narcoparamilitarismo de la Costa Atlántica y amigo personal del presidente Uribe, cuando fue nombrado en la Dirección General de los servicios Secretos, nombro como su asistente a María Helena Montoya, hija de don Raúl Montoya.

Estos son dos ejemplos de los varios que se pueden dar a conocer sobre los oscuros financiadores de la campaña del capo Uribe, sin descontar la ayuda decidida y firme de los dos más grandes y poderosos grupos económicos del país, el Grupo Santodomingo y Ardila Lule, los cuales aparecen, o por lo menos varias de sus empresas, como financiadores de los escuadrones de la muerte, y los poderoso carteles de los ganaderos liderado por Jorge Visbal y Jose Felix Lafaurie quienes han estado a la cabeza de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) y la Federación Antioqueña de Ganaderos (Fadegan), financiando y participando hombro a hombro con los escuadrones de la muerte y su diabólico proyecto de exterminación de supuestos guerrilleros, y quienes en su gran mayoría, se ha concluido, eran simples campesinas y campesinos a quienes se les arrebató sus pequeñas parcelas. Los familiares sobrevivientes de esta inacabable matanza conforman hoy en día los cuatro millones y medio de desplazados, muchos de ellos viviendo en las grandes ciudades y en la pobreza absoluta.

A la par con su proyecto de «paz» con sus amigos narcoparamilitares, el presidente Uribe lanzaba otro proyecto de gran envergadura, este sí, económico, con sus siempre amigos los narcoparamilitares. La rentable empresa consistía en la plantación de 'palma africana' en todo el territorio nacional, sirviendo a la vez como una forma de incrustar en su organización, dirección y expansión a ex paramilitares para su reinserción, sin tenerse en cuenta en primera instancia, las comunidades negras e indígenas, en donde se comenzaba a imponer a gran escala esta cultura, ni el desgaste del medio ambiente y un atentado contra otros cultivos de pancoger —vitales para la sobrevivencia del campesinado pobre—, condenados a desaparecer con este nuevo monocultivo.

Cabecillas narcoparamilitares ya habían tornado la delantera y se habían apropiado, con métodos violentos, enormes hectáreas de tierras, tierras robadas a campesinos, indígenas y comunidades negras para el exclusivo sembrado de la palma con el total apoyo de la Presidencia de la República.

A principios del 2003 la plantación ilegal de la palma de aceite o africana, avanzaba en el norte de Colombia en las regiones próximas al Darién, llamadas por muchos —«el mejor lugar de América» por la riqueza de su biodiversidad—, son zonas que comprenden varias comunas de los departamentos de Antioquia y Choco. Las comunidades afectadas por este monocultivo han denunciado la invasión de sus tierras, el daño sobre el medio ambiente, y las masacres, desapariciones, asesinatos selectivos, tortura y desplazamientos forzados por parte de la fuerza pública y sus 'primos' los escuadrones de la muerte. Los narcoparamilitares han hecho una verdadera «limpieza» de estas tierras y de sus verdaderos propietarios y son ellos hoy día quienes protegen y garantizan el mega proyecto agroindustrial de la palma africana, impulsada por la Presidencia de la República.

En septiembre del 2003 el 'narcopara' "presidente" Álvaro Uribe proclamó en Cartagena: «El país debe tener 600 mil hectáreas de Palma africana». En consonancia con Uribe y por esos mismos días el cabecilla narcoparamilitar Freddy Rendón Herrera, alias 'el alemán' afirmó:

«Necesitamos una gran revolución agraria que nos involucre». Por su parte la revista semana en una de sus entrevistas al temido cabecilla Vicente Castaño, alias 'el profe' —prófugo de la justicia y quien se pasea como perro por su casa en toda la Costa Atlántica y Antioquia, le preguntó sobre los avances de la siembra de palma (tomado de la prensa alternativa e Indymedia):

Semana: ¿En donde están desarrollando esos proyectos?

Vicente Castaño: En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en este tipo de

proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado solo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes (cabecillas narcopara-militares).

También las tierras y pobladores de las comunidades negras del departamento del Chocó, han sido objeto de toda clase de vejámenes, lo mismo si estas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables según el artículo 7 de la ley 70 de 1993. Sin embargo desde el año 2001 la Brigada VXII del Ejército y el bloque narcoparamilitar «Elmer Cárdenas» por medio de amenazas y asesinatos provocaron el desplazamiento de 28 comunidades del Bajo Atrato (Jiguamiandó, Curvarado y Cacarica). A los que no se fueron o regresaron, les hicieron firmar falsas o ilegales «ventas» a instancias de los Comandantes de la Brigada XVII quienes fungieron como «intermediarios». Tres años después ya había sembradas más de 4 mil hectáreas de palma de aceite por empresas —que según se afirma es socio Álvaro Uribe— como: Urapalma; Palma S.A (Palmura); Palmado asociada de Urapalma; Palmas de Curvarado; Fregni Ochoa y la Tukeka, quienes proyectan la siembra de otras 26.135 hectáreas. El más reciente asesinato fue el de Orlando Valencia a manos de los socios de Uribe y a la vista de las fuerzas militares para complacencia de las compañías palmicultoras. Lo acaecido en el Chocó, es solo una muestra de lo que ocurre en casi todo el territorio nacional. Estimaciones conservadoras de la Universidad de los Andes de Bogotá, estiman que las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas y campesinos desplazados ascienden a 5 millones de hectáreas.¹⁴³

Un estudio de la diócesis de Quibdó y de la ONG Human Rights Everywhere, intitulado «La cultura de la palma africana en el Chocó», demuestra los inconvenientes de plantar la palma africana en esta zona a causa de los impactos negativos sobre el medio ambiente y basándose sobre los estudios de la cultura de palma de aceite en otros lugares similares. La palma se extendió en la región gracias a la protección de narcoparamilitares y a sus amenazas de muerte, lo que ha puesto en peligro la integridad territorial, cultural y física de las comunidades indígenas y afro colombianas que se oponen. Por su parte la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, declaró ella misma en el 2003 que «después del 2001 la empresa Urapalma S.A. ha promovido la cultura de la palma de aceite de forma ilegal y «con la ayuda y protección del Ejército (...) de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados»¹⁴⁴.

En el 2003 según fuentes oficiales y no gubernamentales, la gran mayoría de desplazamientos forzados, fueron efectuados por los grupos paramilitares, los cuales intervienen con la acción, omisión o el consentimiento de la fuerza pública, ya que el paramilitarismo es un proyecto estatal. Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) los grupos paramilitares colombianos han desaparecido entre los años 1988 y 2003 aproximadamente 14.476 ciudadanos asesinatos, desapariciones y torturas.

Vanas ONGs colombianas como la Comisión colombiana de Juristas, la Asociación de miembros de familias de detenidos y desaparecidos (ASFADES), el Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», y la Comisión de Justicia y Paz, han denunciado a nivel nacional e internacional que «en medio del proceso de desmovilización paramilitar iniciado en el 2002, el control del territorio tiene como base garantizar esta apropiación para la puesta en obra de proyectos específicos ligados al desarrollo biotecnológico, a la agroindustria de la palma de aceite, de caucho y de la ganadería.

En un reporte presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión de Justicia y Paz concluye que «paralelamente al proceso de desmovilización de grupos paramilitares, mecanismos de apropiación de tierras y la negación de los

¹⁴³ Indymedia 19-10-06. Javier F Munevar

¹⁴⁴ Resolución del 6 de marzo del 2003

derechos de la población afro colombiana se han desarrollado en los territorios colectivos donde habitan estas comunidades».

«Simultáneamente aparecieron proyectos de ley que tienden a facilitar la legalización de tierras usurpadas por los paramilitares. Se niega de hecho la reparación integral y la restitución de tierras a las cuales tienen derecho 3 millones de desplazados¹⁴⁵.

La revista Semana, también reseña en uno de sus artículos titulado ROBO DE TIERRAS, la forma como los escuadrones de la muerte continuaban, a pesar de sus negociaciones de paz con el capo presidente Uribe, delinquiendo y siendo un peligro para la población civil en especial campesina. El cabecilla narcoparamilitar 'Jorge 40', llama a uno de sus compinches y le da instrucciones para apropiarse de tierras que son destinadas para desplazados y campesinos (tomado de la prensa alternativa):

Jorge 40: ¿Que hubo?

NN: Señor, como está?

Jorge 40: Tú te acuerdas que yo te había dicho de una tierra. Porque no le echas mano para ver si nosotros armamos un proyecto grande. Me dicen que esa tierra en estos días se la están repartiendo a campesinos.

NN: La tenían para parcelar. Fue la que yo le dije que si eran las de Tranquilandia.

Jorge 40: Si, unas que son de Jairo Carrillo que están detrás del tesoro

NN: Si.

Jorge 40: Y que podemos hacer nosotros para un pedazo de esos planos que están a orillas del no, para ver si hacemos un proyecto de palma ahí. ¿Eso quien lo está manejando?

NNHOMBRE: Eso lo está manejando el Incoder.

Jorge 40: Por eso y como hacemos nosotros?

NN: Yo busco los contactos.

Jorge 40: Pero tienes que moverte rápido porque a la hora de que nos la llenen de gente, nos jodimos.

NN: Yo busco los contactos a partir del momento.

Jorge 40: Lo que nosotros tenemos que coger es la tierra plana que sea fácil de regar, me entiendes.

NN: Si señor, entonces a partir de hoy mismo llamo por ahí a un amigo.

Jorge 40: Sobre todo porque son como 2.000 hectáreas.

NN: Si, eso es grande ahí.

Jorge 40: Nosotros nos quedamos por lo menos con 500 u 800 hectáreas. Si nos toca poner ahí uno de los muchachos nuestros de más confianza que aparezcan como campesinos de ahí.

NN: Yo creo que así es posible echarle mano a toda la tierra.¹⁴⁶

Esta pequeña reseña puede ayudar a aclarar más dudas sobre el manejo que le ha dado el “presidente” Uribe a su política gubernamental y no se necesita ser un gran especialista para asemejar ese buen trato político que le ha destinado a los escuadrones de la muerte y narcotraficantes, con el facilitamiento en su progresión económica, con reglas de juego bastante desventajosas para la inmensa mayoría del pueblo colombiano.

A la par con su política interna de tierra arrasada contra una población adversa a sus políticas y a su torcido pensamiento como persona pública, Alvaro Uribe no dudó un segundo en asociarse con el diablo. El presidente de los Estados Unidos George Bush lanzaba su más descabellada e injusta guerra contra el pueblo de Irak, sobre la falsa e infame 'certeza' que su gobernante Saddam Hussein, poseía armas destructoras. La ONU y la llamada Comunidad Internacional, que no es lo mismo, fueron tratadas como el producto que exhala el exhosto de un camello. La matanza en su mayoría de civiles iraquíes

¹⁴⁵ Territorio y apropiación de tierras», Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, noviembre 2004.

¹⁴⁶ Fiscalía General y Prensa colombiana (01-07-2007)

comenzó y el narcoparamilitar presidente de la mafia colombiana aprobó inmediatamente semejante carnicería, pues él mismo la practica en Colombia desde años atrás. La estúpida disculpa de acólitos de su entorno quienes aseveraron que el gobierno no envió tropas, queda como el cuento aquel que 'el que peca y reza empata', no es más si no una forma de tratar de justificar lo injustificable. El gobierno de Uribe jamás condenó la loca e interminable carnicería que aun continua hoy en día contra el pueblo iraquí. Por el contrario el pueblo colombiano honró su estirpe de gentes pacíficas y contrarias a toda clase de violencia como también lo harían la mayoría de pueblos de América y del mundo. Y no solo por ser un hombre de extrema derecha y de convicción militarista que Uribe acompañó políticamente a su homólogo estadounidense en tan infame y cobarde acción militar, fue también su posición de número 82 en la lista de peligrosos narcotraficantes que posee el Departamento de Estado desde 1991 y que bien le puede traer consecuencias nefastas si no se alinea con el imperio, como le ha ocurrido a presidentes 'amigos' de los Estados Unidos, quienes después de querer tomar un poco de autonomía caen en desgracia. Y el grave problema no es la caída de estos infelices títeres del imperio norteamericano. No! lo terrorífico son los miles de litros de sangre derramada y las matanzas de inocentes niños y mujeres que los valientes soldados estadounidenses ejecutan en nombre de la libertad y la democracia. Debería preguntársele al capo Uribe, ¿que entienden los gobiernos estadounidenses y en este caso Bush, por Libertad y Democracia? Ya que él, se la pasa viajando a Estados Unidos, como si fuera allá donde se encontrara la Fuente del Saber cómo Gobernar', (Uribe ha viajado en sus 5 años de gobierno aproximadamente 15 veces a Washington). Lo cierto es que la autonomía de este alto narco político colombiano está en duda. Pobre mi pueblo! Incluido yo.

Ya para el nuevo siglo XXI las costumbres políticas en América Latina comenzaban a cambiar radicalmente, situación poco placentera para los Estados Unidos que veía con malos ojos como su patio trasero cambiaba de color. En Brasil y Venezuela asumían el poder hombres diametralmente opuestos a las políticas intervencionistas, maniqueístas y corruptas del coloso del norte. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez desafiaba abiertamente al imperio norteamericano rechazando de plano cualquier sometimiento y exigiendo un trato de igual a igual con el gobierno estadounidense. Crimen de lesa majestad! eran los gritos que se escuchaban por doquier. Que improperios! retumba estos lamentos en los viejos muros latinoamericanos construidos por los lacayos, esos lacayos, dueños de ese viejo poder que durante por lo menos un siglo se han mantenido con la ayuda del imperio y sus armas. Por el contrario en las calles latinoamericanas el jolgorio de fiesta y el colorido de la libertad y la esperanza de un mundo mejor, retumbaban alegremente contrastando con el cañoneo de ese viejo y moribundo poder de hambre, sometimiento y muerte impuesto durante décadas a los pueblos de América. Nuestra América!

Uribe en su loca carrera guerrillista y su largo sueño de acabar con la subversión armada, matando el dialogo político mediante el recrudecimiento de la guerra, solicitó a los gobiernos vecinos su ayuda para derrotar a las guerrillas y pretendió mediante el «Plan Colombia» —que es un negocio millonario para empresas productoras de armamento y fungicidas de Estados Unidos—, que gobiernos de Brasil, Venezuela y Ecuador intervinieran abiertamente en el conflicto interno colombiano. Un conflicto que no es de ellos. La decidida y firme negativa de estos gobiernos, hizo que Uribe entrara en un furibundo estado, usual en él, y en medio de la cólera hiciera señalamientos aventurados, con los cuales dejaba entender que dichos vecinos eran favorables a los 'terroristas' colombianos. Las consecuencias más graves y nefastas las irían a pagar los pueblos de Venezuela y Ecuador, con por lo menos una decena de sus ciudadanos muertos e igual número de heridos en las diferentes intervenciones militares del lado de sus territorios fronterizos, hechas por el ejército regular colombiano y grupos de escuadrones de la muerte. Ecuador y Venezuela como también Brasil se abstuvieron de participar en la guerra interna colombiana, pero también y sobre todo, no quisieron o no encontraron argumento para condenar a las guerrillas de izquierda como grupos terroristas. Algo intolerable para Uribe, quien muerto de ira partió a Washington a ver como 'solucionaba' dicho impase. La tensión política en Venezuela era intensa si tenemos en cuenta el intento de golpe de Estado que sacó del poder al presidente Chávez durante dos días el 11 de abril del 2002 y la posterior huida de los golpistas, autores de varias muertes de

ciudadanos venezolanos y quienes se refugiarían unos en Miami y otros en Bogotá, como es el caso Del Golpista Rogelio Carmona, con la absoluta complacencia de estos dos gobiernos. El gobierno venezolano del presidente Chávez, como principal oponente a las políticas estadounidenses en la región y su acercamiento con el gobierno del presidente cubano Fidel Castro, ganaba más puntos en Washington y Bogotá para ser blanco de toda clase de ataques y señalamientos, como por ejemplo, el de ser un dictador y el apoyar a la guerrilla de las FARC dándoles refugio en su territorio y una ayuda en armas, según funcionarios estadounidenses y la poderosa prensa colombiana.

Entre tanto agentes de la CIA norteamericana, militares venezolanos refugiados en Colombia agentes del DAS, de inteligencia del ejército colombiano y varios cabecillas del narcoparamilitarismo preparaban un atentado contra el presidente venezolano. La consigna era quitarlo de en medio rápidamente, pues incomodaba de manera creciente 'la libre política' estadounidense en la región —siendo un mal ejemplo para el resto de países—, negándose rotundamente a decretar al grupo guerrillero FARC como terrorista y en la parte económica nacionalizando el oro negro, dejando de paso a toda una elite zángana y corrupta, sin los millones de petrodólares con que se pavoneaba por el mundo, y obligando a las empresas petroleras estadounidenses y europeas a rendir cuentas, a pagar impuestos reales y ganar correctamente su trabajo.

Las relaciones colombo venezolanas ardían, al punto que se llegó a pensar que no tendría retroceso y una confrontación armada podría ser posible. El mandatario venezolano acusaba a Estados Unidos de azuzar la confrontación entre las dos hermanas Repúblicas, Uribe agazapado conspirando contra Chávez, —así como conspirarían contra sus opositores y contra las altas cortes de justicia— mientras tanto altos funcionarios y la poderosa prensa colombiana con el ministro Juan Manuel Santos, el diario El Tiempo, Caracol radio y RCN a la cabeza, continuaban echándole leña al fuego, atacando al gobierno de Venezuela y a su presidente, tildándolo de dictatorial y de dar parte de su territorio fronterizo como refugio a las guerrillas, en especial a las FARC. Acusaciones jamás comprobadas

Ya para finales del año 2003 las estructuras paramilitares estaban dispuestas para entrar a territorio venezolano, con la plena complicidad de ciertos oficiales, suboficiales de la guardia civil, del ejército y políticos de extrema derecha venezolanos, en especial del Estado de Zulia, fronterizo con Colombia, que cuenta con un gobernador opositor al presidente Chavez, Manuel Rosales, también ex candidato a la presidencia y financiado por el gobierno estadounidense. Por el estado de Táchira venezolano, fronterizo con el departamento de Santander colombiano, se negoció el ingreso de paramilitares colombianos por un monto de aproximadamente dos millones de dólares. En los primeros meses del 2004 aproximadamente 130 paramilitares colombianos penetraron a territorio venezolano, instalándose en una finca perteneciente al venezolano de origen cubano Robert Alonso. La mayor parte de la zona venezolana fronteriza con Colombia hacían presencia, duros y puros narco políticos colombianos, instalados desde hace más de dos décadas en ese territorio y desde donde servían de enlace a los narcotraficantes colombianos y venezolanos para enviar cocaína hacia Estados Unidos y Europa¹⁴⁷. Igualmente y como ha sido una práctica continua en Colombia, la asociación de ganaderos fue contactada por los paramilitares de extrema derecha e irían a colaborar en la conspiración y en la medida de sus capacidades. Los miembros de los escuadrones de la muerte, en su mayoría pertenecientes al 'Bloque Norte', que tenía (tiene) como principal cabecilla a 'Jorge 40', habrían cruzado la frontera en pequeños grupos de 4 o 5 personas ayudados por el narcotráfico y políticos adversos al gobierno, hasta completar según fuentes de inteligencia venezolana, 500 combatientes de los cuales 130 serían arrestados cerca de Caracas. La misión de este grupo era atacar varios cuarteles del ejército y propiciar un estado de terror, mientras que sus otros compinches, atacaban otros sectores de Caracas para en medio de la confusión llegar a su blanco predeterminado el presidente de la República. Pero

¹⁴⁷ El ex senador colombiano y ex presidente del congreso Guillermo Ocampo Ospina poseía fincas y negocios en los estados de Barinas, Táchira y Apure. Las autoridades venezolanas intervinieron su empresa y fue investigado por sus ilícitos negocios, en Colombia los poderosos medios de comunicación no le dieron la importancia al suceso.

antes de la asonada final, comenzaron a ocurrir hechos que llamaron la atención de los cuerpos de seguridad del Estado, como la voladura de un oleoducto y el sabotaje eléctrico, otro hecho que prendía la curiosidad del gobierno venezolano, fue la presencia de barcos de guerra estadounidenses en Curazao¹⁴⁸. Con la captura de los 130 paramilitares cerca de Caracas, gracias a la información proveniente de Colombia —de amigos del pueblo y gobierno venezolano— el plan terrorista previsto para el 2 de diciembre del 2004 quedó truncado, pese al bien organizado complot preparado por los Servicios de Inteligencia Colombianos (DAS), la CIA, los escuadrones de la muerte, políticos y ganaderos venezolanos opositores al gobierno del presidente Chávez. Sin embargo, meses más tarde sería cobardemente asesinado el fiscal venezolano Danilo Anderson, cuando conducía su vehículo que explotó cuando el fiscal se dirigía a su residencia. Una fuerte carga explosiva fue adherida al vehículo. Anderson investigaba a los participantes del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, en el que fueron asesinadas decenas de manifestantes y muchas otras personas resultaron heridas por acción de la policía metropolitana de Caracas, la cual estaba en manos del alcalde opositor Alfredo Peña, escondido hoy día en Miami. Según fuentes colombianas, Anderson no estaba en la lista de los que serían sacrificados en la fallida asonada narco-paramilitar, pero su asesinato, si representó una especie de desquite o venganza de la mafia derechista colombo-venezolana.

Poco tiempo después, el presidente Uribe admitía, —sobre pruebas de grabaciones telefónicas presentadas por dos congresistas venezolanos— que en Colombia se habían efectuado reuniones conspirativas en contra del gobierno venezolano. Aun cuando el presidente negó toda responsabilidad por parte de su gobierno en dicho complot, ¿Cómo explica que en una de esas reuniones en el centro de Bogotá, aparecían agentes de su gobierno (DAS), agentes de la CIA y ex oficiales del ejército venezolano refugiados en Colombia? Uribe siempre ha negado cualquier participación de conspiración contra el gobierno venezolano, entonces: ¿Cómo explica que su hombre de confianza y jefe de los servicios secretos Jorge Noguera, si tenía conocimiento de dichas reuniones? Veamos pues, apartes de las declaraciones a la prensa nacional y a la Fiscalía del hombre de confianza del jefe de Inteligencia Jorge Noguera y jefe de informática del DAS, Rafael García Torres, preso y condenado a 16 años de prisión por narcoparamilitarismo y quien acusó a varios funcionarios de esa entidad y políticos de la Costa Atlántica, de connivencia con los escuadrones de la muerte y el narcotráfico:

¿Por qué no ha declarado a la Fiscalía que acompañó a Jorge Noguera a Venezuela, sin dejar rastro cuando pasaban por Cúcuta, para reunirse con la oposición antichavistas?

Rafael García: Hay muchas cosas que no cuento a la Fiscalía, pero llegara el momento oportuno cuando mi familia este fuera de peligro, pues estamos amenazados de muerte. Necesitamos protección y la Fiscalía no ha querido otorgarla. Yo no puedo seguir hablando, denunciado cosas.

¿Quiénes son los conspiradores contra Venezuela?

R.G.: Eso fue un proceso meticuloso y prefiero callar. Eso es algo muy grande. Prefiero no hablar de eso. Debo proteger a mi familia.

¿Jorge Noguera esta dentro de los conspiradores contra Chávez?

R.G.: Muchas de las cosas que se han dicho son ciertas... Yo soy testigo de primera mano en eso. Yo estuve muy al tanto de lo que ahí se manejo... además la cúpula del DAS estuvo untada de narcotráfico, tuvieron muchos vínculos con organizaciones de reconocidos narcotraficantes y eso todavía esta por decirse. Y si existió un complot contra el gobierno de Venezuela y hay mucha gente del gobierno colombiano comprometida.

¿Puede darnos nombres?

R.G.: Yo sé que hay una periodista venezolana de nombre Patricia Poleo muy amiga de «Jorge 40».

¹⁴⁸ Rebellion.Org y Red Voltaire 04-08-2004

¿Sobre los (narco) paramilitares que llegaron a Caracas, que sabe?

R.G.: Ante la Fiscalía he declarado bastante demostrando que conozco todo sobre lo ocurrido. Aunque el gobierno ha querido hacerme pasar como un mentiroso, las investigaciones serias y objetivas me darán la razón. Los colombianos sabrán la verdad

¿Existió un complot para asesinar al presidente Chávez?

R.G. Si, si lo hubo

¿Entonces existe relación entre Jorge Noguera, 'Jorge 40' y el crimen de Danilo Anderson? (fiscal venezolano)

R.G.: Si.

(El director del DAS Jorge Noguera, participo en las reuniones en Venezuela?)

R.G.:... (Silencio)

¿Quién más sabia de todo esto?

R.G.: Esto lo conocíamos dos personas. De parte del gobierno seis personas estaban al tanto sobre todo esto.

¿Nombres...?

R.G. No voy a decir los nombres.

¿De las instituciones del gobierno como el DAS, quien más sabia?

R.G.: Alguien que trabajo como director de inteligencia...

¿El presidente Álvaro Uribe sabia?

R.G.: No lo sé. Es muy posible¹⁴⁹.

En el mes de diciembre de 2004 un comando militar Colombiano en complicidad con militares venezolanos secuestraron en Caracas a Rodrigo Granda, miembro político del grupo subversivo FARC, quien se encontraba viviendo en Venezuela. Rodrigo Granda en el momento de su secuestro se encontraba dando una entrevista al medio informativo colombiano Mundo Diplomático, en una cafetería en el centro de la capital venezolana. Granda fue introducido a la fuerza en un vehículo y llevado durante varias horas fuera de Caracas, luego, con los ojos vendados, fue cambiado de automóvil y horas después fue entregado a la policía en la ciudad fronteriza de Cúcuta. El gobierno colombiano anunciaría que el guerrillero Rodrigo Granda fue arrestado en un hotel de Chucuta capital del departamento de Norte de Santander. Investigaciones judiciales y de prensa, lograron conocer que militares venezolanos implicados en el secuestro habrían recibido un millón de dólares. Una gran parte del dinero fue proporcionada por los narcoparamilitares y la otra parte por el gobierno colombiano. El cabecilla narcoparamilitar del Cartel de Cali, Wilmer Varela, alias, 'Jabón' fue buscado por el hoy secretario privado de Uribe, Bernardo Moreno, para que aportara el millón de dólares que valía el secuestro de Rodrigo Granda

Para los campesinos y habitantes ecuatorianos que habitan cerca de la frontera con Colombia, la situación no es menos desalentadora. Continuos bombardeos por parte de la Fuerza Aérea Colombiana y hostigamiento, amenazas y hasta asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte es la tónica casi cotidiana para los habitantes de la frontera de este hermano país¹⁵⁰. Los diferentes gobiernos

¹⁴⁹ Ultimas Noticias. Y Aporrea.org 15-15-2006

¹⁵⁰ Declaraciones a la prensa y a la Fiscalía General. (Abril/2006). Narcoparamilitares siguen entrando a Venezuela disfrazados de turistas, denunció la diputada del estado de Táchira, Iris Varela. La parlamentaria dijo que cuenta con la lista de paramilitares que han entrado al país y que no tienen prueba de salida. Iris Varela sospecha que existe una mafia al

ecuatorianos, al igual que Brasil y Venezuela, rechazaron toda implicación en el conflicto interno colombiano, absteniéndose de decretar al movimiento insurgente, de terrorista. Lo cual, como era de esperarse, desencadenó la furia del capo Uribe y sus altos mandos militares. Con el «Plan Colombia» el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Pastrana y desde luego el de Uribe, esperaban que sus vecinos intervendrían militarmente para afrontar las guerrillas de izquierda y exterminarlas en un corto o mediano plazo. En varias ocasiones los dirigentes ecuatorianos fueron firmes en sus declaraciones al afirmar que el problema interno colombiano, debería ser solucionado por los colombianos, oponiéndose a cualquier intervención y reivindicando su neutralidad. Ante tan sabia decisión, los gobiernos colombiano y estadounidense no escondieron su descontento dejando entrever en sus comunicados, absurdamente, una especie de acusación de complicidad ecuatoriana con los «terroristas de las FARC». Inmediatamente Ecuador se convertía en una especie de 'vecino alcahuete' al que había que castigar. Y no solo los bombardeos y ametrallamientos desde helicópteros por parte de la aviación y el ejército colombiano y la incursión terrorista de los escuadrones de la muerte, debían soportar los habitantes ecuatorianos fronterizos con Colombia, y que ha dejado varios de cenas de muertos y heridos, también eran agredidos con las fumigaciones de glifosato, en la tal 'lucha colombiana contra las drogas'¹⁵¹.

El nuevo presidente de Ecuador, Rafael Correa, comunico al gobierno del capo Uribe, su intención de demandar al Estado colombiano ante la Organización de Estados Americanos y pedir reparación por los daños ocasionados por las fumigaciones del 'Plan Colombia' que han degradado enormemente la salud de los habitantes de la frontera, así como la contaminación de cultivos, ríos y animales domésticos y otros¹⁵². El gobierno y el propio Uribe ha optado por una posición NEGACIONISTA, argumentando que las fuerzas armadas no han violado espacio aéreo ecuatoriano, ni mucho menos, atacado población civil de ese país. A continuación veamos un dramático testimonio:

«Ante la invitación efectuada por los Moradores de la cooperativa San Martín, para verificar la denuncia de violación del espacio aéreo ecuatoriano, el día sábado 28 de enero del presente año (2006), quienes integramos el COMITE BINACIONAL DE PUEBLOS DE FRONTERA, nos dirigimos a dicha cooperativa agrícola, cuando avanzábamos en aguas internacionales, aproximadamente a las 10:30H, a la altura donde alimenta las aguas del río San Miguel, el río Bermeja, fuimos atacados por aviones y helicópteros de la fuerza aérea colombiana, quienes disparaban indiscriminadamente hacia el territorio ecuatoriano. Suponemos que cuando divisaron nuestra embarcación una avioneta y un helicóptero de la flotilla (compuesta por tres helicópteros, dos aviones y un avión radar) comenzaron a dar vueltas sobre la embarcación hasta llegar a agredirnos con fuego de ametralladora, por varias ocasiones, por suerte y fortuna impactaron en las aguas a pocos centímetros de ambos lados de la embarcación. Al ver y escuchar el estruendo del ametrallamiento, los niños que viajaban hasta una finca cercana comenzaron a llorar desesperadamente, lo que nos obligo a orillarnos al lado colombiano, por que del lado ecuatoriano había bastante ametrallamiento. En ese momento salía una señora con una niña en brazos, gritaba desesperada y al escuchar el arribo del bote, nos pidió que la lleváramos, pues en dicho sector también atacaban las naves antes citadas, al arrancar de la mencionada orilla, el motor del bote sufrió un desperfecto mecánico, quedamos varados un buen rato, soportando el fuego de ametralladora... tanto al lado ecuatoriano como a nuestra embarcación. Ante el miedo y el pánico decidimos, sacarnos las camisas y las prendas blancas, para agitarlas en serial de paz... lo cual no fue suficiente, más bien continuaron atacando... seguimos río abajo, pero el asedio de las naves continuaba hasta llegar a Barranca Bermeja. Al desembarcar aproximadamente a las 12H15 pudimos constatar que la mayoría de

interior de las oficinas de Identificación y Extranjería del estado tachirenses que se encarga de tramitar los documentos necesarios para estos criminales

¹⁵¹ Las diferentes declaraciones del gobierno de Uribe han dado como explicación «convinciente» que las fuerzas armadas colombianas persiguen a los «terroristas de las FARC» que se esconden en territorio ecuatoriano.

¹⁵² Comité Consultivo del Grupo de Monitoreo del Plan Colombia. Aporrea.org 07-02-2006.

la población había abandonado el caserío, después de soportar abundante fuego de ametralladora y misiles... Como prueba del ametrallamiento a Barranca Bermeja, recogimos gran cantidad de casquillos... los pocos pobladores que quedaron se dirigieron a nosotros para denunciar que los casquillos y las balas caían como granizo y que la mayoría para salvar sus vidas tuvieron que verse obligados a retirarse hasta el recinto de Santa Rosa, cantón Cascales, provincia de Sucumbíos (Ecuador)¹⁵³.»

En una de sus últimas declaraciones a la agenda EFE, el presidente Rafael Correa, anuncio su disponibilidad de poner término a los abusos del gobierno colombiano en la frontera, tanto con las fumigaciones aéreas, como en la desprotección de la zona donde actúan impunemente los escuadrones de la muerte de extrema derecha. El presidente Correa recalcó que Colombia «ha bombardeado con glifosato (herbicida) nuestra frontera norte y desprotegido su frontera sur para que sean las fuerza armadas ecuatorianas las que hagan el trabajo para contener los escuadrones paramilitares de extrema derecha». Con el informe de una Comisión Científica ecuatoriana, que confirman las tesis de Quito «Seguiremos acciones legales internacionales ante el tribunal de la Haya contra Colombia» y para ello, pedirá la ayuda de la ONU. También el presidente Correa, mostro su deseo de que el gobierno en Bogotá «si es posible cambie esa estrategia de violencia y militarismo que no le ha dado ningún resultado, aunque eso ya es una decisión soberana de Colombia»¹⁵⁴.

Las autoridades ecuatorianas han estimado en más de 300 mil los colombianos refugiados en ese país, todos los cuales han huido de las confrontación armada interna y en especial de los abusos persecución y crímenes cometidos por el ejército y los escuadrones de la muerte. El presidente Rafael Correa, anuncio a mediados del año 2007, una regularización para todas las familias y refugiados colombianos como un acto de humanismo hacia estas personas perseguidas y en peligro de muerte en su propio país.

A mediados del 2004 fue capturado en Quito capital de Ecuador el miembro político de las FARC, Ricardo Palmera. Su captura fue efectuada por agentes de inteligencia del DAS y agentes de la CIA, cuando trataba de lograr una cita con un alto representante de las Naciones Unidas, para concertar un mini acuerdo que pudiese entreabrir las compuertas de un dialogo con el gobierno de Uribe. Con su captura todo quedaba en un punto muerto.

Para los años 2003, 2004 y sucesivos, el gobierno 'narcopara' de Álvaro Uribe, no tendría tropiezos de ninguna naturaleza para imponer su agenda política, tanto a nivel nacional como internacional. Con un parlamento enteramente dado a su causa para la «refundación de la patria», aproximadamente un 70 por ciento de sus miembros, la tarea era más que fácil. La formidable Constitución de 1991 aprobada por el pueblo colombiano, devenía una verdadera colcha de retazos. Reformas y más reformas en favor del Capo y sus acólitos y en detrimento de todo un pueblo se sucedían en ese otrora recinto respetable y respetado, el Congreso de la República. Delincuentes de toda calaña, amigos del crimen organizado, socios de narcotraficantes y paramilitares, y hasta unos cuantos asesinos de pura sangre, adornaban con júbilo y sin ningún recato los salones de la democracia, desde donde deberían salir las leyes para honrar a los ciudadanos y ciudadanas y engrandecer la Nación. Pero triste y desafortunadamente, para las mayorías de Colombia, ese recinto sagrado había sido asaltado por matones, rufianes, traidores, arribistas y corruptos hombres y mujeres que hacían honor a la mala reputación del inquilino de la Casa de Nariño y Jefe de Estado, e irían a complementar su infame política en favor de criminales y narcotraficantes. LA MAFIA TENÍA TODO EL PODER!

¹⁵³ Diario Altercom y Aporrea. 02-02-2006.

¹⁵⁴ Agencia de Noticias EFE. 05-07-2007.

Para llevar a cabo su monstruoso plan, los caballeros del crimen continuo, crearían —por la época en que el desconocido Uribe negociaba con sus amigos puros y duros del narcotráfico y paramilitarismo, su ascenso a la presidencia de la República, por allá a finales del 2001— fugaces movimientos o partidos políticos a lo largo y ancho de la geografía nacional, con la participación activa del terrorismo paramilitar y los fondos proporcionados por el narcotráfico. Meses más tarde serían elegidos para el periodo 2002-2006 en el senado, el primo hermano del narcoparamilitar presidente, Mario Uribe Escobar, varias veces senador y quien obtuvo una de las más altas “votaciones” en el país con 111.635 votos en departamentos con una enorme influencia narcoparamilitar y entrañables amigos como: Miguel de la Espriella, otro político profesional y quien obtuviera 74.647 votos, también en regiones con influencia narcoparamilitar, incluida Bogotá; Álvaro Araujo, el consentido de los narcoparamilitares de la Costa Atlántica y amiguísimo de Uribe, obtuvo 77.916 votos, en zonas de influencia narcoparamilitar incluida Bogotá; Piedad Zuccardi, obtuvo su mayor votación en zona narcoparamilitar de Bolívar; Rocío Arias, la vocera oficial de los narcoparamilitares y mensajera de confianza del 'narcopara' Uribe, fue elegida por primera vez como diputada por Antioquia; Oscar Iván Zuloaga, otro entrañable amigo del Capo Uribe y quien recibiría la mayor votación en el departamento de Caldas con 63.817 votos narcoparamilitares, Ciro Ramírez, el socio privilegiado de los narcotraficantes de Boyacá y Casanare especialmente y quien tuvo 62.394 votos en Nariño y Norte de Santander, sin que jamás pusiera un pie en estos departamentos y Álvaro García Romero, quien obtuviera 70.622 votos con la plena ayuda del narcoparamilitarismo en la Costa, este hombre hace parte del vasto grupo de políticos que ordenaron a los escuadrones de la muerte la eliminación de sus más directos adversarios. Estos y otros narcoparapolíticos, harían parte de esos «partidos o movimientos» que en compañía del crimen organizado tomarían el poder.

Los siguientes 'partidos' fueron creados por la mafia para la «refundación de la patria»: Movimiento Cambio Radical; Movimiento Alternativo de Avance Social; Movimiento Convergencia Popular Cívica; Movimiento Dejen Jugar al Moreno; Movimiento Si Colombia; Movimiento Popular Unido; Movimiento Integración Regional; Partido Convergencia Ciudadana; Movimiento Nacional Conservador y Movimiento Renovación Acción Laboral, entre otros grupúsculos uribistas¹⁵⁵. Varios senadores y diputados de todos estos «partidos» se encuentran en prisión y muchos otros, están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia, por sus nexos con el narcoparamilitarismo¹⁵⁶. Es más, en el movimiento Convergencia Popular Cívica hicieron parte David Turbay Turbay, ex contralor y el político Rodolfo González García ambos condenados por narcotráfico en el proceso 8000 durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-98); de este mismo grupo saldría elegido el hoy superministro de economía del gobierno del Capo Uribe, Oscar Iván Zuloaga.

Con estos delincuentes es que el espurio presidente Uribe, contaría durante sus primeros cuatro años, para hacer cambios de fondo y reformas a la carta magna, logrando uno de los golpes más certeros contra los intereses del pueblo colombiano y la democracia, su reelección. También mediante puestos burocráticos, embajadas y auxilios de decenas de millones de pesos, lograría convencer a los escasos parlamentarios indecisos, pertenecientes a los dos partidos tradicionales liberal y conservador y que aún quedaban exentos de toda componenda con el narcoparamilitarismo, pero, quienes no ignoraban del todo las andanzas de sus colegas, para que apoyaran su política de “seguridad democrática” y el desmonte de la Constitución de 1991, que en lugar de reforzar el Estado de Derecho, lo que hizo fue darle amparo a los escuadrones de la muerte, preservar el núcleo mafioso narcoparamilitar y vender las principales empresas nacionales, aumentando el desempleo y la pobreza de los colombianos y colombianas. En sus retóricos discursos, el capo Uribe dice que los cambios son por la patria. El camino estaba expedito para imponerles a las mayorías, mediante una verdadera y peligrosa dictadura

¹⁵⁵ Registraduría Nacional

¹⁵⁶ Escándalo político que sacude al país desde mediados del 2006. A pesar del ilícito comprobado en las elecciones parlamentarias del 2002 y 2006, el espurio congreso colombiano continúa con su «trabajo».

disfrazada de democracia, un modelo de sociedad fundado en la ganancia inescrupulosa del más fuerte, la sobreexplotación de los trabajadores, la mentira, la corrupción, el terror y la guerra. *“Pues es peligroso decirle a ese pueblo que las leyes no son justas, porque las obedece creyendo que son justas. Hay que decirle que han de ser obedecidas como ha de obedecerse a los superiores. Así es como toda sedición queda conjurada. Si se les puede hacer entender esto, la populosa bestia se aplaca, agacha la cabeza bajo el yugo. No importa que esto no sea justo; es la definición exacta de la justicia. (...) El poder de los gobernantes está fundado sobre la ignorancia, en la domesticada mansedumbre del pueblo. El poder tiene por base la debilidad. Esta base es firme por que su mayor seguridad está en que el pueblo sea débil”*¹⁵⁷». Y la debilidad del pueblo colombiano es acentuada con la feroz represión de un Estado que no da tregua a la reflexión, que no permite un trabajo consciente, y suficientemente relajado, para optar por una estrategia ciudadana para enfrentar y contrarrestar esa enorme maquina de muerte, impuesta desde las mismas cimas del poder.

Mientras las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, seguían fortaleciéndose y propinando certeros golpes a las fuerza armadas oficiales, en esa fratricida e inacabable guerra que ha vivido Colombia desde hace más de ciento setenta años¹⁵⁸, con diferentes escenarios, actores y objetivos, siendo hoy más abiertamente cruel con el apoyo del gobierno estadounidense y su retardataria gama de novedosos armamentos, no solamente utilizado contra las guerrillas de izquierda, sino contra la población civil en general. Una población civil que recibe en plena figura las nefastas consecuencias de esta guerra de clases, siendo tomada como el pulmón del comunismo criollo, o más exactamente como la fuente de supervivencia de los rebeldes en armas. De ahí, la diabólica invención de la elite civil y militar colombiana de hacerle la guerra 'quitándole el agua al pez'. «Quitarle el agua al pez»¹⁵⁹ en el lenguaje de la guerra contrainsurgente de parte del Estado, significa reprimir y eliminar a la población civil sospechosa de brindarle la mas mínima ayuda a las guerrillas. Esta totalmente prohibido a la población campesina brindarle a la guerrilla siquiera un vaso de agua o un simple saludo. En la paranoica y torcida mentalidad estatal no puede y no debe haber convivencia circunstancial aunque esporádica sea esta. ¿Cómo impedir, entonces, el contacto entre el campesinado y una guerrilla nómada? ¿Porque ese ciego aniquilamiento? Lo cierto es que la población civil campesina ha sido estigmatizada. Sospechosa primero, acusada enseguida y condenada a muerte después — extrajudicialmente— por 'servir a los intereses de la subversión', sin pruebas o hechos realmente consumados; sino contando con la pueril información de un delator, la palabra de un soldado u oficial, o lo que es peor y viene sucediendo desde los años setenta, el convincente presentimiento de un narcoparamilitar, o la delación de un mal vecino sediento de venganza. Y si agregamos la siniestra gratificación monetaria para los delatores y la soldadesca por cada 'guerrillero' campesino eliminado, podemos entender las masacres y asesinatos selectivos cometidos por el ejército y los escuadrones de la muerte en estos últimos decenios. Maquiavélico programa estatal, promulgado las veinticuatro horas

¹⁵⁷ Yo El Supremo, magnífica obra del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. Ed.. La Oveja Negra, Bogotá 1987

¹⁵⁸ Durante el siglo XIX hubo alrededor de 9 guerras civiles bipartidistas con la bendición de la iglesia católica (1830-1900), con un saldo horrible de más de 150 mil muertos, entre campesinos y peones. La guerra bipartidista continuaba en el siglo XX, en 1928 el 'valeroso' ejército colombiano bajo las órdenes de la Company Fruits asesinaría centenas de trabajadores en la zona bananera de Santa Marta. Los conservadores en el poder seguían persiguiendo y masacrando liberales con la anuencia de la iglesia, que los tildaba de ateos (1930-1945). A su turno los liberales se armaron para enfrentar militarmente a los conservadores hasta 1958, con el pacto bipartidista llamado «Frente Nacional». En los años 60, nacen las guerrillas de izquierda siempre con un espíritu de lucha contra un Estado dictatorial e injusto, y en los años 80 se reorganizan los escuadrones de la muerte de extrema derecha como programa de Estado, con el patrocinio económico del narcotráfico, para defender el statu quo y las inmensas riquezas de los pocos propietarios. Lo cual iría y sigue agravando la frágil situación socioeconómica de las mayorías. Esta eterna guerra ha dejado un saldo de más de un millón de muertos y varios millones de desplazados.

¹⁵⁹ Se trata de invertir el principio de la lucha de la guerrilla formulada por Mao Tse Tung, según el cual los insurgentes deben moverse dentro del pueblo como pez en el agua.

al día en la poderosa, alcahueta y cobarde prensa nacional y reproducido por una parte de la no menos prensa internacional¹⁶⁰.

La preocupación de todo este desbarajuste crecía sobre todo, entre los ingenuos colombianos que habían creído en los acuerdos de paz de Uribe, ya que era más notable y frecuente la participación de los escuadrones de la muerte en la vida política nacional de lo que se había sospechado y los colombianos y colombianas comenzaban a conocer la magnitud de la hecatombe, de cómo estos grupos se habían apoderado de los recursos públicos de la educación y en especial de la salud, con la plena participación de los políticos de casi todas las regiones del país y quienes eran cómplices igualmente de horribles masacres y asesinatos selectivos; encontrándose la gran mayoría de estos, bajo la égida narcoparamilitar y aportándole a estos criminales, no solo el dinero público y contratos, si no también, puestos oficiales en los diferentes estamentos del Estado y a lo largo y ancho de las diferentes regiones y departamentos. En el alto gobierno, Uribe ya había nombrado a varios representantes del narcoparamilitarismo. La mafia tenía el poder.

Las negociaciones continuaban a pesar de todos esos manejos oscuros, y lo único claro era que las cosas no eran claras y los problemas 'colaterales' surgían, a saber: El gobierno y por supuesto las colombianas y colombianos no sabían qué hacer con los 'desmovilizados' que supuestamente ascendían a 31 mil según cifras gubernamentales y narcoparamilitares; (sacadas de no se sabe dónde, máxime si la cifra entregada por los principales cabecillas en el 2001, fue de aproximadamente 7.500 miembros) que si bien es cierto, que lo que asustaba en ese momento no era la cantidad, sino su poderío destructor, pues si verdaderos desmovilizado solicitaban al gobierno cumplir con su compromiso de ayuda y rehabilitación en la sociedad, brindándoles estudios y trabajo, muchos otros, entre los que se incluye los batallones de delincuentes y desempleados, que fueron contabilizados como paramilitares desmovilizados, comenzaron a crear desordenes y a cometer actos de vandalismo y muerte en las zonas y regiones donde habían sido agrupados, incluida la capital de la república, hasta tal punto que los vecinos de estos 'desmovilizados' se quejaban en masa sobre la peligrosidad e insociabilidad de estos reinsertados como los denominaba el gobierno.

Otra de las discordancias, fue la mensualidad de aproximadamente 300 mil pesos de ayuda que acordó el gobierno y que debían recibir las personas desmovilizadas, pero entre el desorden y la mala leche de muchos, ya no se tenía certeza quién era quién y quien debía realmente recibir la ayuda. Igualmente se hizo presente un ejército de leguleyos de baja categoría que comenzaron a asesorar al primer llegado para que obtuviera su mensualidad y si el cliente no había pertenecido a los grupos de muerte, por una cantidad acordada de antemano, se le conseguían las pruebas o los funcionarios encargados de la tramitología los incluirían. El costo de la asesoría podía pasar del cincuenta por ciento de monto total recibido por el 'desmovilizado'. Es verdaderamente escabroso ver una sociedad como la colombiana, en donde más de un sesenta por ciento de sus habitantes viven en condiciones inhumanas, en una pobreza extrema, mientras que ex-criminales podían obtener una mensualidad por encima del salario mínimo, situación que hizo que muchos optaran por matricularse en esa categoría «desmovilizado», el todo era sobrevivir. Mientras tanto muchos de los criminales y verdaderos narcoparamilitares estaban escondidos a la espera de la orden de sus patrones para reincorporarse a la vida activa, sin bajar del todo su actividad narcomilitar. Los relativamente pocos desmovilizados que en verdad deseaban una nueva vida para ellos y sus familias, se estrellaron con el monstruo burocrático, el incumplimiento estatal y las enormes dificultades para continuar sus estudios o encontrar un trabajo estable y decentemente pago. Pero incluso los industriales, terratenientes, grandes propietarios de tierras, comerciantes y empresarios del sector privado no movían un solo dedo para participar en la rehabilitación de esos varios cientos de ex criminales; mismo, si muchos de estos infelices fueron quienes les habían protegido sus cuantiosos

¹⁶⁰ «La prensa es también capaz de crear buena reputación que de hacer pasar al asesino por la víctima y la víctima por el asesino. Es la función de la prensa, esa prensa irresponsable. Si vosotros no estáis prevenidos, los periódicos os llevarán a odiar los oprimidos y a amar los opresores». Malcolm X, diciembre 1964.

bienes y enormes capitales, hasta el punto de asesinar sindicalistas y desplazar familias enteras para que se apoderaran de sus tierras. Ahora que se encontraban en calidad de desmovilizados, ahora si representaban un grave problema para los capitalistas nacionales y extranjeros, pues para colmo de desgracias, estos hombres no eran vistos siquiera como una especie de mano de obra barata, que pudiese aportar a la economía, y producir esta vez progreso en lugar de tragedia y violencia. La clase capitalista colombiana se lavaba las manos, dejando solamente la puerta abierta en el medio militar, en donde estos desadaptados podrían tener cabida; pero desgraciadamente había poco margen de recepción de este personal, pues ya el mafioso presidente Uribe, había copado el terreno nacional con su millón de soldados-campesinos para colaborar con su seguridad democrática. Además el pie de fuerza armado en el país llega ya a la fenomenal cifra de 380 mil hombres y mujeres, en un país en paz con sus vecinos y como lo sostiene Uribe, sin confrontación armada interna. Únicamente las empresas de vigilancia privada, gerenciadas y de propiedad de ex oficiales del ejército y la policía — estrechamente ligadas con el narcoparamilitarismo— encargadas de la seguridad de narcotraficantes, cabecillas de los escuadrones de la muerte y de grandes empresas privadas nacionales y extranjeras, podían emplear estos ex miembros de los grupos de extrema derecha en la medida que los grupos de la muerte perdían en cantidad. A pesar de que las empresas de vigilancia privada se multiplicaban como el champiñón —en el país la cifra de estas entidades sobrepasaba las mil quinientas con una planta de personal, no bien responsabilizado, de más de trescientos mil, y con un armamento igual o superior al del propio ejército nacional y sin control alguno—, tampoco era una solución de empleo estable para los verdaderos desmovilizados, y lo peor que muchos de estos irían a ganar un máximo de trescientos mil pesos mensuales laborando horas nocturnas y dominicales, mientras que, en tanto que combatientes, se les había asignado un salario de entre quinientos mil y un millón de pesos, fuera de las primas por masacres y envíos de drogas al exterior. La documentación para el funcionamiento de estas entidades, así como su poderoso equipo militar, ha sido una verdadera burla hacia el país, por cuanto no existe un debido control y el Estado no ejercer un seguimiento escrupuloso sobre estas entidades paramilitarizadas. La inspección regular y obligada del gobierno a todas estas entidades armadas ha sido casi nula y su expansión, recomendada por la mafia y ex oficiales de la fuerza pública, traspasa los límites de un desorden planificado.

Otro grave problema para el país, es el de no conocer el paradero exacto de los desmovilizados que había anunciado con bombos y platillos el gobierno de Uribe. Pues, de los más de 31 mil combatientes desarmados y desmovilizados —según el gobierno— tan solo aproximadamente 200 cabecillas y sus más cercanos lugartenientes gozan de las 'penas del encierro' en la gran hacienda ubicada en Santafé de Ralito, mientras que aproximadamente 2.600 han sido detenidos en las diferentes cárceles del país. (Y el resto de combatientes? Donde se encuentran los 28.200 restantes, que según la ley de justicia y paz, deberían pagar entre 5 y 8 años de cárcel si confiesan sus crímenes y pertenencia a estos grupos armados de la muerte. Tal desbarajuste no ha sido aclarado por el gobierno nacional y por el contrario un manto de silencio rodea esta chistosa desmovilización; pero también y menos chistoso, ha sido el férreo e irreversible silencio sobre el número de armas que fueron entregadas por los grupos de extrema derecha. Pues las cuentas no concuerdan, de acuerdo a los desmovilizados y la cantidad de armamento entregado, por parte de los diferentes bloques de los escuadrones de la muerte, en las ceremonias presididas por el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, con la presencia del delegado y observador de la Organización de Estados Americanos, Sergio Caramagna y la feliz 'veeduría' de congresistas, gobernadores y alcaldes comprometidos todos con el crimen organizado y la mafia, todo lo anterior cubierto con estruendoso escándalo mediático por la poderosa prensa que hacía sonar sobre una verdadera reconciliación nacional. Poderosa prensa, culpable también de la hecatombe en que está sometido el país. El armamento entregado no corresponde ni al 50% de los desmovilizados, sin contar con la chatarra de rifles y viejos revólveres entregados. Pero lo más grave aún, son las declaraciones de un arrepentido narcotraficante que vivió escondido en Santafé de Ralito y protegido por los cabecillas narcoparamilitares, quien denunció al cabecilla narcoparamilitar Mancuso de haber escondido moderno y poderoso armamento. Ejemplos sobre la pantomima en la entrega de armas son numerosos, como la desmovilización del 'Bloque Nutibara' en la cual se desmovilizaron 300 combatientes, pero las armas

entregadas fue de 190 sin contar con las inservibles o viejas. Caso similar se dio en las desmovilizaciones de otros bloques como 'el Norte', 'el Calima', 'el Capital' sin que el gobierno se inmute. ^Esta es una de las formas del presidente Uribe, de demostrar su corazón grande a los narcoparamilitares? Todo lo anterior demuestra sin equívocos, que el Gobierno y los escuadrones de la muerte no le juegan limpio al país, o por lo menos en este caso el gobierno, quien tiene la obligación moral y el compromiso republicano de llevar a cabo una real desmovilización con el riguroso desmonte del ultramoderno aparato militar de estas bandas terroristas. Mas los hechos demuestran lo contrario, si nos atenemos a los secretos, —ultra secretos— de esta negociación entre gobierno y estos grupos criminales y mafiosos y los cuales han sido celosamente guardados. Bueno, no todos pues el 9 de septiembre del 2005 en un encuentro entre el Alto Comisionado Luis Carlos Restrepo y los principales cabecillas del crimen organizado y la mafia como Salvatore Mancuso (el del pasaporte europeo), Rodrigo Tovar (alias Jorge 40), Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez) y Francisco Zuloaga (alias gordo lindo) entre otros, el ambiente era más que explosivo. Los cabecillas reclamaban un completo y real compromiso del gobierno para detener definitivamente su extradición hacia los Estados Unidos y la posibilidad de poder tener un estatus político y así poder más adelante ingresar al mundo de la política activa nacional. Por su lado el Comisionado gubernamental reprochaba a sus interlocutores la falta de transparencia en el proceso de desmovilización y pedía comprensión en todo el esfuerzo que hacia el gobierno para no dejar traslucir puntos estratégicos que determinan el fracaso de las negociaciones. Lo relevante en esta calurosa disputa fue relatado por la revista Semana y reproducido por varios medios nacionales:

«Comisionado: El presidente dice que él no puede cambiar lo de la extradición porque eso sería un problema internacional inmanejable, además que se encuentra en plena campaña electoral y existen buenas relaciones de cooperación con Estados Unidos. Ante esta realidad el presidente dice que utiliza su discrecionalidad. Para un buen entendedor... de hecho se esta usando para contener el asunto.

Mancuso: Que va a pasar con la Corte Penal Internacional...? Comisionado: Por la Corte Penal Internacional no hay problema... solo opera si no se ha impartido justicia en el país. Esa es la razón por la cual el modelo que se está planteando es de juicio y condena en el país. De ahí el proyecto de ley que contempla una pena privativa de la libertad, es importante, por cuanto bloquea esa jurisdicción internacional...

Después de un acalorado cruce de palabras y golpes sobre la mesa de parte y parte, el comisionado afirma:

Comisionado: Las negociaciones atraviesan por malos momentos, el proceso tiene dificultades... ustedes deben comprender que el presidente no negocia con ustedes por miedo si no por generosidad. Sena un grave error que ustedes piensaran que el poder que tienen en esta mesa se deba al número de hombres que tengan en armas... Uribe firmo unas condiciones para que no sean capturados en la zona (Santafé de Ralito) a pesar de que nunca a sido posible tener clara la lista de las personas que están en Ralito y a pesar de las sospechas que se han generado...

Esta es una enorme muestra de confianza, a pesar de esa vergüenza publica del enfrentamiento del año pasado con el Bloque Metro. A pesar de lo atípico que fue la desmovilización de Medellín, en el que nos revolvieron delincuentes callejeros 48 horas antes y nos lo metieron en el paquete de desmoviliza-dos. A pesar de todas esas irregularidades que se presentaron nosotros validamos el proceso...

Nosotros no los estamos tratando como delincuentes comunes. Ustedes saben que aquí hay personas extraditables...

También ustedes saben que hechos como los asesinatos cometidos por algunos en esta zona de ubicación, se han manejado con cuidado para evitar un escándalo público... Todo en política tiene un momento y uno no puede dejar pasar ese momento... si ustedes quieren mostrarse como candidatos al congreso, háganlo! Es mejor entrar en una actitud de cooperación que de confrontación...

Los anteriores hechos descritos son la realidad de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo dentro del llamado «proceso de desmovilización» de los escuadrones de la muerte, los cuales continúan ejerciendo su poder criminal en las regiones y zonas de su influencia. Si bien es cierto que las masacres y asesinatos descendieron, esto no significa que puedan desaparecer completamente, de igual manera el robo de tierras y el comercio de las drogas sigue como de costumbre en contubernio con políticos y Fuerzas Armadas. Y la tutela sobre los elegidos por voto popular en la mayoría de los departamentos del país, —Alcaldes y Concejales— se ejerce sin contratiempos, mientras que los dineros de la educación, la salud y otros rubros siguen abasteciendo las áreas narcoparamilitares con la abierta complicidad de los partidos tradicionales. La desmovilización y desarme de los escuadrones de extrema derecha no es seria, a pesar que el gobierno y la poderosa prensa nacional quiera hacerlo parecer como un hecho concreto y real. El mismo Urbe se pavonea al interior como al exterior del país, anunciando el desmonte de 31 mil combatientes, o lo que él y su corte llaman Autodefensas. Pero no cuenta la verdad, no cuenta toda la vileza surgida en dicho proceso, ni mucho menos la falta de viabilidad, juicio, orden, claridad, eficacia y seriedad en lo que debería ser el desmonte y la eliminación del fenómeno narcoparamilitar. Ya que si seguimos ahondando en los diferentes escollos e incongruencias surgidos en las desmovilizaciones de los narcoparamilitares, nos encontramos con problemas como la no confesión de sus innumerables crímenes cometidos por estos combatientes. Sus crímenes y la verdad de los hechos son una verdadera contradicción. Muchos de estos tienen inconvenientes y dificultades físicas y materiales para ir a declarar, otros declaran lo que bien en gana les conviene y otros tamos se limitan a decir su nombre y apellido, sin demostrarlo con documento alguno. También a los que se les ha logrado llevar a declarar se les pregunta por su 'alias' dentro de la organización criminal, pero muchos no se acuerdan, y cuando de contar la verdad sobre sus andanzas criminales se trata, la mayoría prefiere declararse no combatiente si no simple cocinero al servicio del paramilitarismo. Dicha situación ha hecho que los pocos fiscales designados para tan delicada e importante tarea se sientan impotentes para recoger la verdad de estos miembros de la organización criminal, pero también los hay quienes se ocupan de llenar una hoja en blanco con dos o tres preguntas sin importancia para salir del paso de una diligencia judicial que requiere de la mayor seriedad y responsabilidad. No es raro esta actitud de unos cuantos fiscales, pues también existen los narco parafiscales en el país¹⁶¹.

Las elecciones presidenciales de 2002 fueron señaladas como turbias por organizaciones democráticas del país y varios ciudadanos y ONGs denunciaron el fraude cometido sobre todo en la Costa Atlántica colombiana, especialmente en los departamentos del Magdalena, Cesar, Córdoba, Guajira, Bolívar y también en Antioquia, y los Santanderes entre otros. Varios alcaldes de provincias pertenecientes a estos departamentos y políticos independientes fueron asesinados por los escuadrones de la muerte al atreverse a denunciar públicamente la dupla políticos paramilitares quienes influenciaron con la compra de votos, intimidaron y amenazaron de muerte a los ciudadanos de estos departamentos si no votaban

¹⁶¹ Un informe bastante disimulado fue dado por el Ministerio del Interior, ha dejado al descubierto la tramposa actitud del gobierno y los narcoparamilitares al mostrar la desmovilización de 31 mil combatientes, pues varios cabecillas de 36 estructuras admitieron que aproximadamente un 40 por ciento de los desmovilizados no pertenecían a estos grupos del crimen organizado. Uno de los aparte de una fuente del Ministerio dice: «se calcula que un 40% de los 30.944 'paras' que se desmovilizaron colectivamente no estaban en los que las AUC llaman 'frentes de cheque'. O sea que se estima en 12 mil los 'paras' que no son paramilitares. Es más, admite el ministerio que según fuentes de inteligencia el número de combatientes de estos criminales escuadrones era de 12 a 15 mil antes de desmovilizarse. (Periódico El Tiempo del 08-07-06). Para ver menos claro 'el proceso de paz de Uribe', las cuentas que se temen a principios del 2002 eran de aproximadamente 7 mil paramilitares. Lo anterior no es problemas para el gobierno y mucho menos para Uribe quien se ufana ante los gobiernos del mundo de haber desmovilizado y desarmado a 31 mil paramilitares. No sin la ayuda de la gran prensa, en su inmensa propaganda progubernamental.

por el candidato disidente del partido liberal y además prohibieron a líderes independientes hacer campaña por otro candidato diferente al disidente liberal Álvaro Uribe Vélez, en esas elecciones para presidente de la República. A pesar de las denuncias, los altos funcionarios de los organismos del Estado obligados por la Constitución Nacional y las leyes a desvelar tal deshonor brillaron por su ausencia. Estos funcionarios encargados de investigar, de mostrar el camino de la verdad, se sometieron unos por miedo, la mayoría por complicidad a la ley del silencio, permitiendo que el país cayera en manos del crimen organizado y la mafia. El electo presidente Uribe había sido llevado a la más alta magistratura del Estado, por millares de manos manchadas de sangre y untadas de cocaína. No era la primera vez, desde luego, que la mafia auspiciaba y rociaba con sus narcodólares la elección de un presidente; pero en esta ocasión el crimen organizado y la mafia narcotraficante se habían unido para llevar a cabo su proyecto para «Refundar la Patria» y para tal efecto no había sino que hacer nombrar a uno de sus más cercanos condescendiente, a uno de los suyos. Nombrado Uribe, inmediatamente se izaron en los cargos de mayor importancia de la nación, delincuentes como Francisco Santos, José Obdulio Escobar Gaviria, Fernando Londoño Hoyos, María Consuelo Araujo Castro entre otros y criminales como Pedro Juan Moreno, Rito Alejo del Río y Jorge Noguera entre otros más. A la par con estas nominaciones el Congreso de la República estaba conformado por muchos delincuentes y criminales cómplices de hecho con el crimen organizado incluida la mafia; «honorables» diputados como: Álvaro Araujo Castro, Rocío Arias Hoyos, Jorge Luis Caballero, Carlos Alberto Maya Castro, Alfredo Cuello Baute, Alfredo Char Chaljub, Álvaro García Romero, Mario Uribe Escobar, Eleonora Pinedo y Aldo Lacouture entre otros más. (Ver lista completa final del libro). La Fiscalía General de la Nación se encontraba en manos de un cómplice del crimen organizado y la mafia, llamado Luis Camilo Osorio; el presidente de la Corte Constitucional Alfredo Escobar Araujo gran amigo del presidente y de los narcotraficantes. Por el lado de la Fuerzas Armadas la temperatura ardía, el presidente nombro al general Carlos Alberto Ospina Ovalle, como jefe de las Fuerzas Armadas y acusado de años atrás por las Organizaciones de Derechos Humanos de complicidad de crímenes contra la humanidad; Jorge Daniel Castro Castro, como director general de la policía nacional y acusado de narcotráfico; también fue nombrado en la embajada de Australia el general y ex director de la policía nacional Rosso José Serrano, acusado de complicidad con la mafia del narcotráfico; nombro Uribe, al general Oscar Naranjo Trujillo jefe de inteligencia de la policía antinarcóticos y acusado de nexos con el narcotráfico; nombró también a su antiguo amigo el general Mario Montoya Uribe comandante del Batallón Antioquia y acusado por las organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales de complicidad de crímenes y desapariciones forzadas en asocio con los escuadrones de la muerte En la dirección de los Servicios de Inteligencia, DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), Uribe nombro a su amigo Jorge Noguera Cote, amigo este mismo del sanguinario cabecilla narcoparamilitar Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40', y a quien Noguera entregaba datos secretos y daba listas de sindicalistas y opositores del gobierno para ser exterminados; como Secretario General del DAS, fue nombrado Gian Carlo Auque di Silvestre, cercano amigo de los narcoparamilitares de la Costa Atlántica y quien en compañía del jefe de informática del DAS Rafael García Torres, viejo amigo de Noguera Cote, borrarán datos y expedientes de reconocidos narcoparamilitares. A la par con estos nombramientos presidenciales, el Congreso de la República, con una mayoría narcoparauribista eligió como Procurador General de la Nación a Edgardo Maya Villazon, padrastro de la ministra María Consuelo Araujo Castro y de su hermano el senador Álvaro Araujo Castro, amiguísimos del presidente y estos a su vez cercanos amigos y socios de los escuadrones de la muerte del norte del país, y especial amistad con el criminal 'Jorge 40'. Por su parte los gremios industriales, ganaderos, bancarios y del comercio atornillaban o elegían en sus puestos de mando a personajes de extrema derecha con plena concordancia con el narcoparamilitarismo. Los poderosos medios de comunicación en una muestra de servilismo, ambición y cobardía se ponían al servicio de la infamia gubernamental, por decirlo más claro estaban arrodillados ante Uribe y su corte mafiosa. Tanto la televisión como los periódicos y la radio no hablaban sino todo lo positivo de Uribe, escondiendo descaradamente las cosas negativas del gobierno, el pueblo ha sido sistemáticamente mal informado, completamente desinformado, recibiendo

diariamente mentiras¹⁶², la poderosa prensa ha promovido perpetuar la injusticia para toda una sociedad empobrecida deliberadamente; mientras que los periodistas independientes caen asesinados y otros deben abandonar sus puestos de trabajo y hasta el país ante las amenazas de muerte hechas por los narcoparamilitares y agentes gubernamentales. Así las cosas, la «Refundación de la Patria» ideada por la MAFIA, tomó forma en todas su extensión y en ese momento precise, más que ningún otro jamás vivido en el país, el poder absoluto parece estar en sus manos.

Además de las precipitadas medidas en favor del paramilitarismo y una maratónica aprobación de la ley de 'justicia y paz'; el gobierno de Uribe lanzaba una cruzada militar tan absurda como ciega en favor del recrudecimiento de la guerra interna para exterminar la subversión, según el presidente; cerrando toda opción de dialogo y envolviendo a la sociedad colombiana en una casi irreversible vorágine conflictiva de intolerancia y pavor. Surgía entonces, una pregunta, la pregunta mil veces expuesta c igual número de veces no resuelta: (Por que el presidente Uribe, extendía su blanda mano y abría su corazón grande a toda negociación con los narcoparamilitares y a la vez sumergía a la sociedad colombiana en una guerra, fratricida y no deseada por la mayoría del pueblo, contra la subversión? Y la respuesta está en los acuerdos del 2001 entre la mafia narcoparamilitar, los políticos liberales y conservadores y la pudiente clase empresarial para 'refundar la patria'; Uribe sería elegido a toda costa y declarado el Mesías de Colombia. Uno de los puntos a seguir al pie de la letra era el de lanzar una campaña de desprestigio para entorpecer los diálogos entre el gobierno de Pastrana y la guerrilla de las PARC, y al unísono con esta, una avalancha mediática de simbolización de la subversión a nivel nacional e internacional. Para Uribe entonces, le había sido vetado todo acercamiento con las guerrillas y en especial con las FARC.

La seguridad democrática de Uribe, desde el mismo momento de su puesta en práctica, se puso en marcha a toda máquina. Punto Primero fue la fuerte presión sobre las Fuerzas Armadas para que sometieran todo lo que olía a subversión, el presidente en persona llamaba desde las 5 de la mañana a comandantes de brigada, coroneles y todo jefe militar encargado de exterminar a la guerrilla para pedirles cuentas y sobre todo resultados en las acciones militares contra los 'terroristas', a Uribe le interesaba más que cualquier otra cosa, cuantos guerrilleros habían sido capturados y sobre todo cuantos habían sido muertos; aquello parecía más una subasta pública de cadáveres entre militares y el ejecutivo que un reporte de orden público. Aquellos que no presentaban hechos concretos de sangre o prisión de terroristas recibían inmediatamente rayos y centellas, el regano presidencial tronaba acompañado de epítetos hirientes, mismo en público y la advertencia no se hacía esperar: «si no es capaz renuncie». Resultados, resultados a toda costa pedía el “presidente” Uribe¹⁶³.

¹⁶² En septiembre 2002 en la Revista 'Universo Latino' N° 4 editada en París Francia, apareció un artículo de su director Sergio Camargo, titulado «Colombie un Gouvernement Fasciste» en el cual denunciaba la elección de Uribe por una minoría corrupta y antidemocrática, sus nexos y el de su padre Alberto Uribe Sierra con el Cartel de Medellín y la especial amistad que los unía con Pablo Escobar. También se denunciaba en el artículo, los irrefutables nexos de sus colaboradores y amigos Cesar Villegas y Pedro Juan Moreno Villa con los carteles de la droga de Cali y Medellín respectivamente (ambos colaboradores están hoy día muertos Villegas asesinado en Bogotá, después de purgar una pena de 5 años por narcotráfico y Moreno murió en un accidente aéreo, después de que se retire como asesor presidencial de Uribe, por graves desavenencias con el presidente). Una semana después que la revista saliera al mercado, un hombre llamo a la redacción y pidió hablar con el director, identificándose apenas como colombiano manifestó que lo denunciado en la revista era grave y que en Colombia esta información no se conocía; después pregunto si el responsable de la revista no tenía por una posible demanda ante los tribunales. La respuesta fue: No! Y ahí está el problema, pues la mafia jamás ha echado mano de la justicia.

¹⁶³ En su columna semanal en el diario «El Tiempo» de Bogotá, la ultraconservadora Salud Hernández escribió el 21 de mayo del 2006, un artículo titulado 'Los Inquietantes Positives'. Dice Hernández que un comandante de una estación de policía le había confesado hace unos anos, que acudió a sus 'primes' los 'paracos' (paramilitares), para que le hicieran un favor. Necesitaba dar positivos y el cabecilla de la zona se los proporciono. Le 'regaló' los cadáveres de unos campesinos asesinados con la excusa de ser colaboradores de la guerrilla, los vistieron de camuflado, les calzaron botas de caucho y la policía los presento a sus superiores y a los medios locales como trofeos de un inexistente y cruento combate contra la subversión. «Feo asunto pensó el oficial»... se consolaba diciéndose que se los dieron ya muertos, que el mal era menor. Los

Punto Segundo fue el reclutamiento de sapos (soplones) en campos y ciudades para que dieran partes hora tras hora sobre el andar de los grupos terroristas en regiones rurales especialmente, y sobre todo la estrecha vigilancia de líderes campesinos, comunales y sindicalistas, auxiliares, según la presidencia, de la guerrilla terrorista. Delinquentes de toda clase, ex paramilitares, uno que otro guerrillero arrepentido y desempleados pasaron a conformar ese ejercito de 'servidores de la democracia', servidores de la causa uribista; y quienes además de ínfimos sueldos, podían ganar millones de pesos que a diario el presidente ofrecía por televisión, radio y prensa a cambio de la delación —falsa o no— de terroristas, por la captura de tal o cual sospechoso, tal o tales autores de atentados terrorista que se sucedían en las principales ciudades. En la televisión y en fotos de prensa se podía ver deprimentes escenas de hombres en su mayoría con el rostro cubierto, recibiendo millones de pesos de recompensa por la captura del terrorista X, o por el señalamiento de los supuestos terroristas (todos pertenecientes a las FARC) que atentaron o atentarían contra instalaciones oficiales, personalidades del país o lugares públicos como centros comerciales u otros sitios de asidua frecuentación publica. Los soplones no descansaban en su 'trabajo' y las cárceles del país se llenaban cada día con más inocentes¹⁶⁴. Punto tercero declarando terrorista a toda o a todo aquel que no cumpliera con los parámetros establecidos por este sistema injusto y este nuevo gobierno dictatorial. Sirviéndose de los horribles atentados de las torres gemelas, y con los cuales la palabra terrorismo o terrorista quedo a flor de labio del poder represor, los sospechosos serían combatidos sin ninguna precaución jurídica, ni miramientos humanos. Los pacíficos luchadores populares y militantes de las organizaciones no gubernamentales serian tachados de potenciales terroristas, por el gobierno fascista de Uribe. Manifestaciones por mejoras en la atención medica, contra el cierre de hospitales o contra la privatización de la educación publica, o contra el Tratado de Libre Comercio con el gobierno estadounidense, o contra las políticas neoliberales del gobierno eran reprimidas con extrema violencia por el ejército y la policía, y los dirigentes y líderes sociales recibían la estigmatización de auxiliares de la guerrilla, por parte del gobierno y mismo, de ser señalados de terroristas por parte del mismo presidente, lo que ocasionaba inmediatamente una condena a muerte de parte de los escuadrones de la extrema derecha. Muchos líderes no nos acompañan hoy en día.

En ese espiral de confusión y oscurantismo, las Fuerzas Armadas y en especial oficiales del ejército se idearon la forma de presentar resultados al presidente y a la vez recibir condecoraciones, primas y ascensos, fue así como haciendo llave con delinquentes y soplones, fraguaron atentados o posibles atentados que acomodaban a las guerrillas, en especial las FARC, y que luego los soplones corroboraban auto acusándose, apareciendo como autores arrepentidos o simplemente haciendo los señalamientos que los oficiales les imponían y avalaban entregándolos como «positivos»¹⁶⁵. Un ejemplo

civiles que la IV Brigada hizo pasar por subversivos dados de baja estaban muy vivos antes de utilizarlos para mostrar resultados. El ejército y el gobierno prometieron investigar la treintena de casos denunciados y esperamos que no nos salgan con otra mascarada como la de Guaitarilla. Para que esta dama se decida a contar una verdad que quema las entrañas del silencioso poder, es porque es intolerable lo que sucede a diario en el país y que el ilimitado poder capitalista nacional e internacional pretenden ocultar.

¹⁶⁴ En una de las 'pescas milagrosas' como fueron bautizadas las detenciones arbitrarias del gobierno uribista, el periodista Hollman Morris mostro en el programa «Contravía» que presenta Telesur, un reportaje sobre las recompensas y las detenciones masivas, que ilustra la barbaridad que se vive en ese estado policiaco y en donde hasta una abuela es sindicada por su hijo de ser «guerrillera de las FARC». También el 28 de septiembre del 2003 aproximadamente mil efectivos de la policía nacional acompañados de la Unidad de Derechos Humanos de las Fiscalía General de la Nación hicieron un operativo en el Municipio de Quinchia, allanaron decenas de casa de vivienda y capturaron a 90 personas entre las cuales había dos menores de edad y tres ancianos mayores de 73 años, reporto el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos del departamento de Risaralda. José de los Santos Suarez de 73 años e invidente fue acu-sado de ser experto en explosivos para la guerrilla. Todos estuvieron presos durante dos largos años. Luego salieron libres al comprobarse su inocencia.

¹⁶⁵ Los 'falsos positivos' se pusieron de moda en el país a raíz del descubrimiento de tentativas de atentados y atentados fabricados y llevados a cabo por miembros de la inteligencia militar y oficiales de esta misma institución. Bicicletas con

de esta abierta aberración institucional, fue revelada por la prensa nacional y resumida por los medios alternativos 26/906:

Farid Mota González, conto a la Fiscalía sobre los MONTAJES efectuados por oficiales del ejército para hacer pasar a las FARC como autores de criminales atentados en los cuales hubo numerosos muertos:

«el que planeo todos los atentados desde el carro bomba hasta el último montaje que hicieron lo Hainan 'Condorito'. Todos fueron montajes.

Hasta en el que mataron al reciclador. Un camión que colocaron por allá en Sibate (pueblo cercano a Bogotá). El carro de la 53 con Boyacá (noroeste de Bogotá), ese también fue montaje. El nombre de 'Condorito' quien es el que ha manejado todo, es Jaime Orlando Ávila Cano. También participaron Omar Mosquera Pardo; Orlando Díaz Bonilla; Luis Carlos Chaparro Uribe, ellos son los autores intelectuales. Otro que trabaja por fuera y es informante con 'Jessica' (Lidia Sánchez Manrique) de la brigada 13 del ejército. 'Jessica' se ocupa de legalizar la plata (dinero). Ella cobra la plata de la recompensa, después de cuadrar todos los detalles con el mayor Hermida y el capitán Barrera, quienes pertenecen a la brigada 13. (...) Yo se que el mayor Hermida ha hablado varias veces con 'Condorito'. (...) Otro montaje fue el del taxi bomba del Centre Comercial de la Avenida Caracas. 'Condorito' fue el que hizo todo el montaje. El material y los explosivos nos lo aportan miembros del ejército. En especial el comandante del Batallón Sumapaz. (...) En principio el carro bomba de la Escuela Militar¹⁶⁶ no debía explotar, pero... se tema que hacer sonar por lo menos uno, además ya estaba cerca la posesión del presidente, entonces iba tener mucho más credibilidad. Ahora están montando una casa bomba y tienen que hacerla explotar. Con la explosión de esa casa bomba los otros atentados se vuelven creíbles. (...) Todo esto es un negocio...

Otro hecho que iría a marcar el espíritu de los colombianos sería el atentado contra las instalaciones del club el Nogal al norte de la capital y el cual servía de punto de encuentro de cabecillas de los escuadrones de la muerte con altos funcionarios del Estado, hombres de negocios, narcotraficantes y mismo jefes de la iglesia católica. El Nogal se había convertido en una especie de sede oficial del crimen organizado y la mafia de las drogas. En dicho atentado murieron 39 personas, 190 heridos y cuantiosas pérdidas, todas las víctimas eran empleados del club, como hecho extraño hay que destacar la ausencia de directivos del club y la no presencia en ese momento de ningún alto personaje del bajo mundo y la vida pública colombiana. Inmediatamente cometido dicho crimen, las autoridades de policía, ejército y DAS acusaron a los «terroristas de las FARC» (sic), como autores de tan inadmisibles hechos. Por su parte el «presidente» Uribe no perdió mucho tiempo en salir a los medios de comunicación a acusar y lanzar improperios contra «los criminales de las FARC» (sic). Al tiempo de dichas afirmaciones, ninguna investigación clara, seria y profesional se había llevado a cabo y sin embargo, como ya era costumbre en las Fuerzas de Seguridad del Estado y del propio presidente, todo acto criminal o atentado terrorista inmediatamente era imputado a la guerrilla de las Farc; por su parte la gran prensa en forma sumisa y falta de profesionalismo avalaba tales dudosas afirmaciones a sabiendas que carecían de un fundamento serio y probatorio. Transmitía simplemente la propaganda gubernamental. Una irresponsabilidad flagrante con respecto a la sociedad en su conjunto, le incumbe tanto al gobierno como a los medios informativos, ya que reforzaban la confusión e inquietud de la inmensa mayoría de colombianos y colombianas de bien. El atentado había sido perpetrado el viernes 7 de febrero del 2003

bombas, coche-bombas, casa bombas, hasta un caballo bomba y un burro bomba han sido utilizados por el narcoparaterismo en complicidad con la fuerza pública.

¹⁶⁶ En el 'falso positivo' del carro bomba que estalló cerca de la Escuela Militar al norte de Bogotá y en la que murieron dos personas, «Jessica» fue presentada por el ejército como guerrillera. Aun cuando no lo es, la prensa sigue presentándola como tal. Treinta minutos después de este infame atentado, el presidente Uribe salió a los medios de información a acusar a los terroristas de las FARC de este abominable crimen.

con un carro bomba que había sido introducido por dos individuos en el parque automotor del club el Nogal. El vehículo explotaría sin dar tiempo a sus dos ocupantes de ponerse a salvo, algo bastante curioso, pues hasta esa fecha y a pesar de la cruenta guerra sucia que vive el país, los kamikazes felizmente han brillado por su ausencia. La línea que siguió el gobierno no cambió un milímetro con respecto a su primera y temeraria declaración. El presidente Uribe se reunió con los presidentes centroamericanos convenciéndoles del enorme peligro que representaba los terroristas de las FARC y por su parte la Ministra de Defensa Martha Lucia Ramírez salió corriendo hacia Washington a pedir más armas, y el vicepresidente Santos dio una conferencia en la OEA, exigió a los Estados Americanos condenaran a las FARC como grupo terroristas. Los gobiernos de Brasil, Ecuador y sobre todo Venezuela se negaron a hacerlo. El gobierno venezolano de Hugo Chávez pagaría con creces semejante osadía.

El ministro del interior y justicia Fernando Londoño Hoyos —presidente de la junta directiva del Nogal—, declaraba el 10 de febrero:

«Lo que se está buscando a nivel internacional es una declaración obvia y elemental de que este (FARC) es un grupo terrorista. Por lo menos para que se mantenga ese protocolo.

El 11 de febrero, el ministro Londoño reiteraba ante los medios de información que el atentado terrorista contra el Nogal, había sido perpetrado por las FARC, alentadas por los recursos que reciben del narcotráfico y pidió a los colombianos unir esfuerzos para luchar contra los violentos.

El 12 de febrero la OEA manifestó su «profundo rechazo al execrable atentado terrorista cometido por las FARC el 7 de febrero del 2003 en Bogotá». Por su parte el gobierno estadounidense por intermedio del subsecretario de Estado para asuntos políticos Marc Grossman, declare: «Si quedaba alguna duda sobre las verdaderas intenciones de las FARC, las bombas de Neiva¹⁶⁷ y el club el Nogal las aclararon, al contabilizar 53 muertos y 192 heridos, muchos de ellos niños y mujeres»¹⁶⁸. La diabolización del movimiento guerrillero era un hecho consumado.

Pero tales aseveraciones no concordaban con las investigaciones llevadas a cabo por los expertos de la Fiscalía, la policía y 20 expertos en atentados de Estados Unidos.

«Ni siquiera sabemos si el carro bomba fue activado manualmente o a control remoto» (Diario de El Espectador: 2 de marzo del 2003).

«Se sabe además que hasta el momento la Fiscalía no tiene la prueba reina que vincule a la guerrilla de las FARC con el leve atentado. Advirtió un investigador». Revista Semana: 3/3/2003)

Por su parte el grupo insurgente emitió un comunicado vía internet el 9 de marzo 2003 que fue reproducido por la agencia de noticias ANNCOL, en el cual negaron toda implicación en el atentado terrorista y señalaron a las fuerzas de Seguridad del Estado como las autoras a la vez que condenaron el terrorismo como forma de lucha:

¹⁶⁷ La ciudad de Neiva es la capital del departamento del Huila, al sur del País. Varias bombas estallaron en esta ciudad ocasionando la muerte de una docena de transeúntes entre los cuales habían niños y decenas de heridos. Las FARC fueron designadas como autoras del atentado. La guerrilla desmentiría la acusación.

¹⁶⁸ Narcotraficantes secuestraron a una mujer, en uno de sus arreglos de cuentas, y le adornaron su cuello con un collar bomba que le explotó al tratar de ser desactivado. Los organismos de seguridad del Estado señalaron a las FARC como los autores de tan horrible crimen. Meses después se supo lo del arreglo de cuentas entre mafiosos. La prensa dedicó una cuantas líneas para desmentir la autoría del grupo guerrillero, en contraste con los grandes titulares cuando se acusó a la subversión.

«Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, informan:

- 1. Que el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC- EP, luego de hacer una paciente, rigurosa y seria investigación al interior de todas sus estructuras político-militares a nivel de estados mayores de bloques, frentes, columnas, compañías, guerrillas, fuerzas especiales y estructuras urbanas concluyo: que no existe responsabilidad de unidades de su organización en los hechos ocurridos en el club el Nogal de Bogotá, el pasado 7 de febrero del año en curso.*
- 2. Nuestra percepción revolucionaria nos permite afirmar, que los autores de los hechos de El Nogal son los mismos del «collar bomba», los mismos que borrarón de la vida a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 1985, a los que sacrificaron, sin importarles que era de su misma clase y fiel representante de sus intereses al doctor Álvaro Gómez Hurtado¹⁶⁹, los que mataron a Luis Carlos Galán Sarmiento¹⁷⁰, por suponer que el, de forma, no de contenido, representaba una nueva opción; los que igual que los mercaderes de la muerte fabricaron una cadena de dolor y frustración, escalonada con los magnicidios de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo; los mismos que a físico plomo exterminaron a la Unión Patriótica y a destacados líderes del Partido Comunista, al igual que a miles de compatriotas...*
- 3. El terrorismo de Estado con lo de El Nogal solo buscar desatar al interior del país un histerismo contra guerrillero, que haga propicio la aprobación del Estatuto Antiterrorista por el congreso, y en el campo internacional, limpiar la imagen y cosechar la popularidad con el gobierno paramilitar de Uribe Vélez.*
- 4. Es muy sospechoso la prontitud con que los representantes del Estado y del gobierno, salieron, por exigencia del Departamento de Estado norteamericano a señalar a las FARC como autores... creando con ello una malintencionada y distractiva cortina de humo, para proteger a los verdaderos autores.*
- 5. Ratificamos una de las conclusiones de la Octava Conferencia Nacional Guerrillera realizada en 1993: 'Queremos manifestar con claridad nuestra condena al terrorismo, independientemente al origen que tenga. Las acciones violentas que tienen como objetivo intimidar a la población civil o suplantar al pueblo con acciones individuales que este debe desarrollar... Nuestra política es justa porque somos interpretes de un país intimidado por el terrorismo de un Estado, que desde hace 45 años se ensaña con la población». Montañas de Colombia marzo 9 del 2003.*

Las investigaciones del atentado más sangriento de los últimos tiempos, después de los efectuados por Pablo Escobar Gaviria amigo y socio de los Uribe, padre e hijo, y primo hermano del actual asesor presidencial José Obdulio Escobar, y el sanguinario narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha en los años 90, no avanzaban. Los investigadores seguían privilegiando a las FARC como los autores intelectuales y materiales del crimen terrorista, sin buscar, aparentemente, otras pistas como la del narcotráfico o el arreglo de cuentas entre cabecillas del crimen organizado. Lo cierto era que dicha investigación estaba siendo influenciada o dirigida por fuerzas externas.

El club el Nogal tenía entre sus socios a la esposa del tristemente célebre Gonzalo Rodríguez Gacha, allí se habían celebrado varias reuniones entre narcoparamilitares y congresistas afines a su carácter terrorista. En el 2001 Carlos Castaño y Salvatore Mancuso tuvieron varias reuniones con empresarios, políticos y cinco obispos de la iglesia católica colombiana a plena luz del día, como si los cabecillas narcoparamilitares no fueran los criminales más buscados por la justicia del país. Así describió la revista Semana la reunión entre Mancuso y los congresistas aliados con los escuadrones de la muerte el 23 de noviembre:

¹⁶⁹ El ex candidato conservador a la presidencia de la República fue asesinado por un grupo de oficiales del ejército. Al parecer se negó a participar en una conspiración contra el gobierno de Ernesto Samper.

¹⁷⁰ El candidato del «Nuevo Liberalismo» fue asesinado por Pablo Escobar e 'ilustres' políticos militantes de la mafia entre los que estaban Alberto Santofimio Botero, ministro, presidente del partido liberal, varias veces senador.

«Paralelamente a las primeras reuniones, Mancuso se dedicó a mover los hilos de la alta política. En un exclusivo club al norte de Bogotá, el jefe militar de las autodefensas se reunió con congresistas amigos... Mancuso comenzó por explicarles por qué Castaño —y el mismo— habían decidido no entregarse a la justicia estadounidense. Luego, les pidió a los legisladores su apoyo para encontrar una fórmula jurídica para el perdón de sus delitos (crímenes) que no exigiera reconocerles un estatus político. 'Si esta ley finalmente sale, estaría listo prácticamente el 70 por ciento del proceso de paz'. Aseguro a Semana el asesor de uno de los jefes paramilitares.»

En la dirección postal del club el Nogal, fue registrada la página web de las AUC (paramilitares) «colombialibre.org». El periodista sueco Dick Emanuelsson, verdadero conocedor de la situación sociopolítica y presidente del Congreso. Lugartenientes cercanos al criminal narcotraficante confesaron que Santofimio fue el instigador del asesinato de Galán, pues este, en su programa de gobierno como candidato tenía el firme propósito de extraditar a todos los narcotraficantes pedidos por Estados Unidos. Santofimio está preso en una cárcel de Bogotá y fue condenado a veinte años de prisión por el crimen de Galán. Uno de sus hijos fue nombrado por Uribe en la embajada en París, pero luego del escándalo renunció al país y autor de innumerables artículos sobre la realidad nacional, investigó sobre estos hechos encontrando que el servidor y la empresa de la página web de las —mal llamadas— AUC, se encontraban en Canadá. Según datos arrojados por la investigación, esta página fue abierta a las 5 de la mañana el 1 de noviembre de 1998. La empresa que recibió la solicitud de este grupo terrorista se llama ORBI.COM, situada en Quebec, Canadá y el director es Nelson Tactuk un dominicano de 48 años residenciado en Canadá desde 1991 y al parecer único empleado de la empresa. En su interesante investigación Emanuelsson encontró que la persona de 'referida' de las AUC y de la página colombialibre.org fue registrada a nombre de Teófilo Borges. Esta persona no existe pero figura en el registro de la empresa ORBI como contacto para el pago del arriendo de la página web de los paramilitares. Los números de teléfono y fax registrados fueron 57- 4- 790-1201 que corresponde a los dos receptores, fax y teléfono. El 4 es indicativo del departamento de Córdoba, cuna de los escuadrones de la muerte y donde el presidente Uribe tiene sus fincas al lado de las de Mancuso. También es interesante lo de la dirección, pues es Carrera 6a Numero 78-89 de Bogotá, y la dirección del club el Nogal con sus 32.000 hectáreas, está localizado entre las carreras 5a y 7a con la calle 78; y aun cuando la dirección también es falsa, si corresponde a las coordenadas del club, con lo cual se puede deducir que la página de los escuadrones de la muerte estaba siendo manejada desde los lujosos locales del club el Nogal.

El 27 de febrero del 2003, el periodista Emanuelsson envió un mensaje al señor Tactuk preguntándole quien es la persona física y jurídica de la página colombialibre.org y como paga su cliente el arriendo de dicha página. Al día siguiente 28 de febrero hacia las 11 de la mañana, el señor Nelson Tactuk, sin mediar palabra, borro todos los datos de la página de los paramilitares e incluso borro sus datos personales: nombre, apellido y dirección electrónica. Ahora, no solo ORBI.COM, tomo medidas drásticas, si no que uno de los responsables de los escuadrones de la muerte, tomó inmediatamente contacto con el periodista sueco y le envió un mensaje por internet, identificándose como «'Adolfo Paz' inspector nacional de las AUC», uno de los más sanguinario narcoparamilitares. El criminal se ofreció a responderle todas las inquietudes que él tuviera, añadiendo: «Por ahora le informo que colombialibre, cambiara su suscriptor del Canadá y ya hemos abierto una web en Estocolmo, pues este país es abierto en cuanto a la libertad de expresión, que es un derecho de todo ciudadano y más de una organización política y militar, como son las Autodefensas Unidas de Colombia que, para su información no somos paramilitares, y menos terroristas».

Muchas preguntas hay que hacer al respecto, pero, la más importante es que ha hecho la policía, en qué estado se encuentran sus investigaciones, que resultados se han obtenido? lo cierto es que seguiremos esperando las respuestas. Pues, El Cartel de la Policía colombiana poco interés tiene en aclarar muchas dudas. Uno de los grandes interrogantes sobre los autores intelectuales y materiales del

criminal atentado del club el Nogal se puede aclarar en el libro que escribió el periodista Alfredo Serrano titulado 'La Última Batalla de Castaño, Editorial Oveja Negra, Bogotá 2007, sobre el atentado del Nogal. Según el periodista Serrano, el criminal atentado habría sido planeado por el narcoparamilitar Hernando Gómez Bustamante alias 'rasguño' perteneciente al Cartel del Norte del Valle y quien al parecer tenía en mira a su «amigo» Salvatore Mancuso. 'Rasguño' conocía de cerca la frecuencia con la cual el cabecilla narcoparamilitar, (con pasaporte europeo), se hospedaba y se reunía en el Nogal, y fraguó el golpe con la casi seguridad que Mancuso se encontraría ese viernes 7 de febrero en horas de la noche en dicho club. Pero las circunstancias y buena suerte del criminal cabecilla, hizo que este se enterara de dicho atentado y se abstuviera de ir ese día al Nogal, en donde se había preparado de tiempo atrás una fiesta. También afirma el periodista serrano, que después de varias investigaciones se logró saber que el atentado no solo era dirigido hacia el cabecilla narcoparamilitar, si no también era un llamado de «atención» a altos funcionarios del gobierno de Uribe. Lo investigado hasta el momento, sobre el atentado al club de el Nogal ha sido teledirigido por fuerzas oscuras, la verdad tardara en aparecer, mientras la pista narcoparamilitar siga siendo desechada de plano, pues, el gobierno no tiene mucho interés en esclarecer este otro atentado terrorista.

En Colombia pasan muchas cosas a diario (especialmente deplorables), pero no pasa nada. Una tras otra, las informaciones se suceden, una cubre a la otra y así sucesivamente transcurren las horas, los días, los meses y allí no ocurre nada. Como anestesiados los colombianos y las colombianas escuchan y ven en las noticias que un enfrentamiento entre ejército y guerrilla dejó varios muertos, que el gobernador o alcalde de tal departamento se robó tantos millones, que la pobreza aumenta irremediablemente, que el presidente Uribe promete más mano dura contra los violentos, y sin embargo, se escucha y se lee en los periódicos que los escuadrones de la muerte asesinaron tal o cual dirigente o sindicalista, que el ejército ajustició tres campesinos a los cuales hizo pasar como guerrilleros, que en el Congreso de la República se vende y se compra drogas libremente, que otro niño murió por falta de atención médica ya que ningún centro hospitalario quiso prestarle ayuda por no tener dinero con que pagar, que se descubrió una red de prostitución de niñas menores entre los 8 y los 14 años, y nadie dice nada, nadie hace nada. Que subió el combustible, que el ejército y la policía siguen amenazando y martirizando a la población de Cimitarra tratándolos de guerrilleros, que varias decenas de familias quedaron en la calle y desamparadas por la alud de tierra debido a las fuertes lluvias que destruyeron sus humildes viviendas y lo peor que la ayuda prometida por el presidente nunca llegó, se afirma con pruebas que Uribe y su familia pertenecen al narcoparamilitarismo. Y en Colombia no pasa nada. El presidente había por radio, televisión y a la prensa escrita diciendo que todo va bien, que su lucha contra el terrorismo va en la recta final con el valeroso empuje de sus fuerzas armadas y que la economía se porta mejor que el año anterior, que los índices son alentadores, que las exportaciones marchan muy bien y por lo tanto los colombianos no tienen de que quejarse, y las encuestas de «opinión» arrojan un 70 o 75 por ciento de popularidad del narcopara"presidente", y los poderosos medios de información anuncian otro atentado terrorista y achacan la autoría a la guerrilla de las FARC, mientras en la calle mucho ciudadano comenta que ese es otro «falso positivo» del ejército para ganar condecoraciones, dinero y ascensos; y son acusados por crímenes, de la parte de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, funcionarios y militares cercanos al presidente, y este sale a gritar a todo pulmón que eso es una patraña de los enemigos de su «seguridad democrática», y despótica contra las ONGs acusándolas de encubrir a los terroristas, de ser cobardes y ser instrumentos del terrorismo, pero no pone en tela de juicio a sus subalternos civiles y militares que con pruebas, son señalados de complicidad con el narcoterrorismo y crímenes de lesa humanidad. Para el presidente, todos ellos son buenas personas y él los conoce muy bien, según sus propias palabras; en tanto que para las víctimas de los horribles crímenes narcoparamilitares, jamás ha tenido una palabra de consuelo, ni mucho menos ha habido un grito de dolor o indignación en contra de los sanguinarios victimarios¹⁷¹. Y a pesar de toda esta in-vivable

¹⁷¹ * Ver informe audiovisual «Memorias del Embrujo» en el cual el narcopara"presidente" acusa a las ONGs de defender a los terroristas y de ser entidades cobardes: <http://video.google.es/videoplay?dodd=5196508963203948098>

situación el presidente de la MAFIA colombiana continua con sus circenses «Consejos Comunitarios», disfrazado con sombrero, alpargatas y poncho como remedando a sus desprovistos semejantes, al humilde campesinado. Campesinado al que va a encontrar para predicar su parábola de 'seguridad democrática' y a prometerles bienestar y progreso, a muchos de estos hombres y mujeres que durante decenios solo han recibido represión estatal y quienes en las nuevas circunstancias son obligados en su mayoría a asistir a los «consejos comunitarios» del culebrero¹⁷², mientras que otros deben, so pena de ser acusados de terroristas, aplaudirlo y victoriarlo.

Acompañado —el culebrero— de ministros y directores de institutos descentralizados se limita, después de sus largas, aburridas y conservadoras peroratas, a ordenarle a sus acólitos de anotar todas las inquietudes y solicitudes de los campesinos, quienes con la candidez de la tierna edad, se atreven a pedirle al capo máximo, una real ayuda para ellos, para sus familias, para sus pobres y olvidados pueblos: alcantarillado, electrificación, carreteras, puestos de salud, escuelas y créditos para sus cultivos de pan coger y una asesoría técnica eficaz, son las solicitudes más comunes; el acólito de turno apunta casi escrupulosamente todo lo que le ordena su jefe y terminado el «Consejo Comunitario», parte el presidente como un todopoderoso y moderno dictador, repartiendo apretón de manos a sus 'alegres' dirigidos prometiéndoles solución a todo lo solicitando, porque el si cumple y los bendice pidiéndoles que apoyen la seguridad democrática y se va acompañado de su ejército de guardaespaldas para nunca más volver. 'Las ayuditas' como las llama este inescrupuloso y cínico personaje, fueron ilusión de un día para muchos de estos hombres y mujeres del campo que creen aun en promesas electoreras, a pesar de todo Jo que pasa en Colombia y —que— a la vez no pasa nada.

En muchas ocasiones durante los circenses consejos comunitarios de Uribe, simples ciudadanos o líderes cívicos que se han atrevido a poner en tela de juicio el sistema de gobierno o la 'seguridad democrática', han debido padecer el susto del año y recibir sin concesión alguna, la visita del comandante de la policía o del ejército de la zona, para verificar si son terroristas o si hacen parte de los 'cómplices' de la guerrilla y sobre todo para zarandearlos fuertemente por osar criticar la democracia uribista. Y como Colombia es pasión, el 1 de febrero del 2003 en uno de sus 'consejos comunitarios' en Corozal, el capo de la mafia Uribe, fue interpelado por el alcalde de El Robledo Eudaldo Díaz Salgado, quien le imploro al “presidente” protección. le pidió que no lo dejara matar, pues el se había atrevido a denunciar casos de corrupción y narcoparamilitarismo en el departamento y que comprometían al gobernador Eric Morris, al político Salvador Arana Sus y otros fervientes uribista; la Procuraduría Regional lo había destituido por tales acusaciones y los paramilitares Jo habían sentenciado a muerte. Poco más de dos meses después de la solicitud que fue vista por millones de televidentes, el Alcalde fue asesinado por los paramilitares y sus suplicas quedaron en el aire. El jefe del Estado Jo dejó asesinar. 'Estas son pues, las maniobras legales de un régimen profundamente corrompido, que ha hecho de la mentira, la adulteración y el manejo mafioso de la cosa pública, su forma de hacer política'. El directo responsable del asesinato del alcalde Díaz, fue el ex gobernador del Cesar Salvador Arana Sus y quien poco tiempo después del asesinato del alcalde Díaz, fue nombrado por Uribe embajador en Chile. Interrogado por la prensa del por qué el intempestivo nombramiento de Arana como embajador, el ministro de interior de la época Sabas Pretel de la Vega, respondería que el envío de el ex gobernador a Chile, se debía sobre todo para preservar su seguridad.

En su primera elección presidencial Álvaro Uribe no solo se hizo rodear de gente cercana al narcotráfico y al paramilitarismo, sino que también financió su campaña con narcodólares para asegurar su triunfo. La mayoría de los narcotraficantes hicieron una recolecta de varias decenas de millones de dólares para

¹⁷² En el lenguaje rural antioqueño, culebrero es aquel charlatán disfrazado de comerciante y que va de pueblo en pueblo vendiendo toda variedad de pomadas y menjurjes que curan todos los males habidos y por haber. Vende sus mentirosos productos y desaparece.

que no le faltara nada a su elegido en la ruta hacia la cima presidencial¹⁷³. Había que jugársela toda, pues, de su triunfo dependía el futuro del narcoparamilitarismo. En la misma tónica se encontraban los políticos de ambos partidos liberal y conservador, allegados al narcoparamilitarismo, comprometidos con la «refundación de la patria», en la inmensa mayoría de los departamentos del país y teniendo como fuerte, o base de operaciones, la parte norte del país. Los criminales cabecillas del narcoparamilitarismo como Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, Diego Murillo, Carlos Mano Jiménez, Ramiro Vanoy, Rodrigo Mercado, Eduardo Cobo, Francisco Zuloaga y Hernando Gómez entre otros, tendieron puentes con políticos profesionales del bipartidismo que domina la escena política nacional hace más de 180 años, para cerrar filas en pro del triunfo anunciado del 'Mesías' Uribe. Reconocidos políticos, no por sus labores democráticas, sino por sus indelicadas maniobras, emprendieron la 'gloriosa' tarea de hacer triunfar al líder de la mafia, mientras que otros políticos novatos (salidos de las filas del narcoparamilitarismo) como por ejemplo Rocío Arias, empujaban la máquina de la victoria con igual o más entusiasmo pues, si los dineros legales destinados para la campaña faltaban, no había preocupación ninguna, ya que todo estaba asegurado por los «patrones» del crimen organizado. El clan Araujo: Álvaro, María Consuelo, Álvaro padre, Sergio; el antiguo patrón de patronos industriales Sabas Pretel de la Vega; el político de las dos caras Germán Vargas Lleras; el intermediario entre la mafia de la costa atlántica y Uribe, Jorge Noguera Cote; Fabio Valencia Cossio; el discreto mafioso Bernardo Moreno; el primo del capo Pablo, José Obdulio Gaviria; otro de los dueños de la poderosa prensa Juan Manuel Santos; el asesino Salvador Arana Sus; el entrañable amigo de Uribe, Miguel de la Espriella; el cerebro de la mafia en el centro del país Ciro Ramírez Pinzón; el narcopara de la zona centro-sur del país Oscar Iván Zuloaga; el proveedor de insumos para transformar la hoja de coca Pedro Juan Moreno; el hijo de la criminal mafiosa apodada la 'Gata', Héctor Alfonso Lopez; otra cuota narcoparamilitar Benito Rebollo Muriel; el otro hijo de la 'Gata', alcalde de magangue, acusado de asesinato y cercano a Uribe, José Luis Alfonso López; Carlos Alberto Clavijo; Juan Manuel López Caballero; Mario Salomón Nader Muskus; Luis Humberto Gómez Gallo; Álvaro Alfonso García Romero; Leonor Serrano de Camargo; Jaime Ernesto Canal; Zulema Jattin; Musa Desaire; Reginaldo Montes; Jorge Luis Caballero; Elías Raad Hernández; Dieb Nicolas Maloof Cuse; Germán Hernández Aguilera; Eleonora Pineda Arcila; el ex secretario de Uribe en la gobernación de Antioquia Rubén Darío Quintero Villada; Freddy Ignacio Sánchez; Luis Elmer Arenas; Mauricio Pimiento Barrera y Piedad Zuccardi; Alfonso Antonio Campo; José Rosario Gamarra; José Joaquín Vives; Sergio Díaz Granados; Jorge Carmelo Pérez; Adalberto Jaimes; Manuel Darío Ávila; Jorge Luis Feris; Alfonso López Cossio, el mafioso Andrés Felipe Arias y el nombrado por Mancuso, cabecilla de los paramilitares en Bogotá, Francisco Santos entre otros muchos, no se esforzaban en su tarea política de convencer a las masas hambrientas que el mejor candidato a la presidencia era el de ellos, el Mesías Uribe, pues, los no convencidos o reticentes se les 'enderezaba' a punta de amenazas con fusil en mano y en el mejor de los casos con ínfimos sobornos. Los empresarios 'narcoparas' también participarían con el triunfo del candidato de la MAFIA, sin preocuparse en lo más mínimo del futuro de la Nación. Los poderosos capitalistas Grupo Santodomingo y grupo Ardila Lule (varias de sus empresas nacionales están acusadas de favorecer los crímenes paramilitares) no escatimaron su ayuda económica en favor del candidato de la mafia. Entre los mecenas directos del candidato Uribe, aparecen varias personas de dudosa reputación, sobre saliendo Enilce López Romero alias «La Gata». Mujer enigmática e inescrupulosa que logró hacer fortuna gracias a su antiguo amigo el sanguinario Gonzalo Rodríguez Gacha, quien le habría depositado una considerable suma de dinero producto del narcotráfico, antes de su muerte. «La Gata» recuperó dicha fortuna y creó una empresa de apuestas llamada 'Chance' (apuestas que son un apéndice de todas las loterías del país). Tuvo un único

¹⁷³ A diferencia de la campaña presidencial de Ernesto Samper (1994) la cual recibió dineros de los narcotraficantes del Cartel de Cali (aproximadamente 18 millones de dólares) y con condiciones poco conocidas pero sí muy limitadas; la primera campaña de Álvaro Uribe recibiría el pleno apoyo económico del conjunto de los narcotraficantes y paramilitares del país (aproximadamente entre 25 y 30 millones de dólares) con la gran condición de quitarles el enorme peso de las penas de cárcel en Colombia que oscilan entre 30 y 60 años por sus crímenes y para los extraditables penas entre 40 años y cadena perpetua en los Estados Unidos. Con la «refundación de la patria» todos pensaban que las cosas irían por el buen camino, el más convencido era Uribe, quien tenía la certeza de gracias a su hermano y sus primos por los crímenes cometidos y de paso, el mismo zafarse definitivamente de todo señalamiento. La impunidad sería total.

socio, a quien según denuncias, asesinó para que dase con su parte. Mujer ambiciosa, cínica y populachera «La Gata» comenzó a ganarse un espacio en su región Magangue, luego en el departamento de Bolívar y después en toda la Costa Atlántica, en la cual alcanzo a desplegar su imperio de terror, mezclado de limosnas y amenazas. A la par con su popularidad de mujer de loterías, paulatinamente gano posición dentro de los estamentos del bajo mundo del narcoparamilitarismo — asociándose con el criminal sicópata Carlos Castaño— hasta convertirse en la 'madona' respetada y temida por todos, incluidos políticos, fuerza pública y mismo cabecillas del crimen organizado. En compañía de su medio hermano Arquímedes Segundo García Romero¹⁷⁴ y de sus dos hijos, se apoderaron de la alcaldía de Magangue, hicieron nombrar a sus peones en otras alcaldías del departamento y hasta el mismo hospital llego a ser de su entero dominio, creo un ejército de matones fuertemente armados quienes imponían la voluntad de su jefa, amenazando, desapareciendo y eliminando a todos aquellos irreverentes que no se sometieran a sus designios. Casi todas las autoridades civiles y militares de los departamentos de Bolívar, Barranquilla y Cartagena actuaban como si fueran sus empleados. Con su fortuna «La Gata» alquilaba, sobornaba, vendía y compraba conciencias. Financio la campana de Uribe y hasta dedico una pequeña fortuna para hacer enmarcar y adornar esplendorosamente la foto en la que aparece su hijo José Luis con el presidente Uribe, muertos de la dicha. La foto fue colgada en el despacho del 'gatico' alcalde, como un trofeo universal.

Los pobres de Magangue y otros poblados acudían a su esplendorosa mansión una vez a la semana para recibir los favores en dinero o recomendaciones de Dona Enilce, alias la 'Gata'. Extensas colas se formaban con gentes pobres venidas de todas partes para que ella les resolviera problemas de toda índole. Incluso era ella quien autorizaba una consulta en el hospital o la entrega de los medicamentos, con una boleta firmada por «La Gata» y dirigida al establecimiento hospitalario, el paciente obtenía lo que necesitaba sin problema alguno. Esta misma mujer, esta narcoparaempresaria, aportaría oficialmente 100 millones de pesos (40.000 euros) para la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez, pero extraoficialmente se cree que el monto se puede multiplicar por mil. En primera instancia Uribe presidente negó haber recibido dineros de «La Gata», después aseguro que no la conocía, a pesar de existir una foto en la que aparecen los dos en plena campaña en la costa norte del país. Después de posesionado el presidente Uribe, firmo un decreto con el cual los empresarios del 'Chance' pagarían una tasa de impuestos menor que la que existía. De coincidencia no podría catalogarse esta medida gubernamental, toda vez, que una de las gran-des favorecidas en todo el país, sería doña 'Gata', la empresaria más conocida en los departamentos de la Costa norte colombiana.

La influencia de «La Gata» sobre sus dos hijos José Luis Alfonso López y Héctor Julio Alfonso López es extrema, sofocante, al punto que a este último, lo obligó a presentarse al congreso de la República por uno de los partidos mafiosos cercanos a Uribe, «Apertura Liberal» dirigida por el narcotraficante Luis Enrique Pérez, alias 'el pulpo', Héctor Julio obtuvo una silla de diputado. Por su parte José Luis como alcalde de Magangue, se encuentra huyendo de la justicia y las autoridades 'no conocen' su paradero¹⁷⁵. Está acusado de haberse apropiado 7 mil millones de pesos (2 millones 800 mil euros). Habitantes del Municipio lo han acusado de haber violado vanas jovencitas y de ser «el patrón» del ejército

¹⁷⁴ La prensa nacional, anunció el 23-12-06 que la Fiscalía General acusó a 'la Gata' y a su hermano de peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. También fue acusado el alcalde de Montenegro Bolívar, Arcelio Sánchez Rojas por haber transferido 790 millones de pesos (316.000 euros) a los hermanos García Romero. La Nación había girado estos dineros para financiar servicios de salud

¹⁷⁵ Según la prensa nacional y radio Caracol 08-10-06, El Alcalde de Magangue Jorge Luis Alfonso López... después de dos meses de permanecer prófugo de la justicia, a comienzos de esta semana reasumió sus funciones como mandatario local, y volvió a desaparecer. El burgomaestre, reapareció, hizo un consejo de gobierno, anuncio cambios en su gabinete, hablo de obras que realizara en su municipio y a través de una emisora local se dirigió a la población, anunciando que no se había reintegrado antes porque tuvo que practicarse una cirugía en una de sus piernas. Sobre su situación judicial, dijo que todo estaba en manos de sus abogados. Sin embargo desde la mañana del miércoles, el paradero del alcalde volvió a ser un verdadero misterio...

narcoparamilitar que posee su madre (más de un centenar y medio de hombres fuertemente armados). Otro hecho insólito que llamo la atención de las autoridades nacionales, fue en el 2002 cuando se conoció que entre los ganadores del premio mayor de la Lotería del Atlántico, apareció el nombre de Jorge Luis Alfonso López, quien según su propia versión, compro el billete de lotería por internet; otros casos similares se dieron en los cuales los ganadores, ciudadanos desprevenidos y honestos, se les pedía su billete y se les aconsejaba esperar una semana y abrir varias cuentas bancarias para luego recibir en dichas cuentas el dinero del premio. En todos los casos, los dineros eran consignados por agendas fantasmas de otras ciudades, mientras que el billete ganador era cobrado por un testaferro quien recibía directamente de la lotería departamental el valor del premio. Una 'bonita' y sencilla manera de lavar dineros del narcotráfico. En noviembre del 2006 la Superintendencia de salud, recibió un anónimo en el cual se denunciaba que la señora Ana Carolina Vélez de Tovar, esposa del criminal narcoparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», había ganado un premio de la lotería 'El Libertador' del departamento del Magdalena. Dicha lotería se había acogido a la ley 550 o de quiebras y hacia más de tres años no pagaba los impuestos a la salud y aun así seguía vendiendo billetes y pagando los premios a plazos. Las explicaciones de la señora Vélez no fueron satisfactorias y la superintendencia ordeno el cierre definitivo de la lotería el 30 de noviembre¹⁷⁶. En otro delicado asunto, la Procuraduría General de la Nación destituyo e inhabilito por diez años para ejercer cargos públicos a Jorge EUIS Alfonso López, por haber suspendido de manera improvisada la prestación del servicio de salud, otorgándosela a otra persona que el mismo escogió, la decisión podía ser apelada por los defensores del alcalde de Magangué¹⁷⁷.

Enilce López Romero fue detenida por la Fiscalía el 6 de enero del 2006 bajo los cargos de lavados de activos. Pero para el año 2005 ya la prensa nacional había denunciado que «La Gata» patrocinaba escuadrones de la muerte e influía con dineros provenientes del narcotráfico en elecciones de gobernadores y alcaldes de la Costa Atlántica¹⁷⁸. Para la captura de esta peligrosa 'dama', la Fiscalía debió acudir al DAS y al Ejército y llevar a cabo la diligencia en horas de la madrugada (3 a.m. hora colombiana) por temor a un enfrentamiento con los matones y sicarios de Doña Enilce, un ejército de más de 70 miembros armados hasta los dientes y quienes seguramente defenderían a su jefa a costa de sus propias vidas; pero también se quería evitar que sus seguidores, gente extremadamente pobre, hiciera un amotinamiento en su favor pues la consideran un santa, ella les regalaba dinero, comida y boletas con su firma para ser atendidos en el hospital y para poder obtener medicamentos 'gratis', algo que los mismos políticos del departamento no hacían, decía la gente, ante un completo abandono por parte del gobierno central. Igualmente fue detenido su hermano Arquímedes y trasladados al «Bunker» de la Fiscalía en Bogotá. «La Gata» como era de esperarse negó todos los cargos en su contra y se presento como una empresaria con una pequeña fortuna y un corazón grande —no tanto como el de Uribe— que le permitía ayudar a los más necesitados. Filantrópica casi después de haber hecho su pequeña fortuna y su dedicación en favor de los más necesitados, lo podían comprobar las autoridades preguntándole a todos los habitantes de la región y porque no del departamento, quienes irían a declarar su admiración y eterno agradecimiento. Y efectivamente, mucha gente humilde e iletrada decía que la «La Gata» era una mujer extraordinaria que se preocupaba por ellos, que estaba pendiente de sus necesidades y dolencias; pero lo que no sabían mucha de estas gentes humildes, era que esta «bondadosa» mujer en compañía de sus dos hijos, su hermano y muchos alcaldes del departamento y la complicidad de gobernadores y políticos de la Costa, se robaban los dineros públicos destinados para la salud y la educación de la ciudadanía, que también negociaba con el bajo mundo de la Costa Atlántica y la mafia narcoparamilitar, que asesinaba y atropellaba a todo aquel que no estuviera de acuerdo con sus procedimientos, malversaciones y crímenes. Es seguro que la mayoría de estas humildes gentes lo ignoraban, pero, ¿es que un candidato a la presidencia de la República podía ignorar

¹⁷⁶ Prensa nacional y revista Cambio 31-12-06.

¹⁷⁷ Prensa nacional 11-30-06

¹⁷⁸ Información difundida por la agencia de noticias AFP.

los negocios sucios de esta familia y sobre todo ese imperio levantado a base de extorsiones, amenazas y asesinatos? Pues, es difícil creerlo. Y con todo ese poder económico y militar, además de ese gran capital humano utilizado exclusivamente en campanas políticas, quien no haría preguntas? La súper conocida, respetada y temida Enilce López Romero, participaría en la campaña del candidato de los narco-paramilitares Álvaro Uribe Vélez, ayudándolo a conquistar ese poder máximo, que los 'narcos' siempre sonaron. Y él, el 'irreprochable' nuevo presidente, iría a retribuir esa 'ayudita' como él suele decir, impartiendo un decreto presidencial con el cual los empresarios del 'Chance' y juegos de azar pagarían menos impuestos y otras gabelas.

En una de sus acostumbradas jugadas «La Gata» se hizo trasladar de la cárcel de mujeres de Bogotá a una cárcel de Cartagena, aduciendo problemas de salud que el frío de la Capital le agravaban, durante esos meses de detención en Bogotá no quiso señalar a ninguno de los políticos a los cuales le contribuyo financieramente. Pero tan pronto llego a Cartagena y en su primera declaración ante la Fiscalía, acuso al alcalde de Cartagena Nicolás Curi de no haberle pagado un préstamo y a quien entrego dineros para su campana. Igualmente acuso al senador William Montes, preso por narcoparamilitarismo, de haberle pagado mal. Hablo también del senador Vicente Blel, quien en compañía de otros politiqueros querían hacerle mal a ella una mujer que jamás había cometido siquiera una infracción de transito. Dijo que aprendió hacer discursos de la mano de David Turbay ex senador y ex Contralor General quien fuera condenado por narcotráfico, y hablo del ex presidente Cesar Gaviria, a quien en el pasado llevo a su finca a comer asados. Reitero que no posee fortuna alguna, sin embargo tiene tres cotizados abogados que la defienden, y dijo que sufría de muchos males¹⁷⁹. En una de sus visitas a Cartagena, el vicepresidente Francisco Santos, denunció a políticos de la Costa quienes visitaban a «La Gata» y pagan 200 mil pesos (80 euros), por el derecho a la visita¹⁸⁰. Pero los problemas de esta narcoparaempresaria no están por terminar, pues fue descubierto en una de sus bodegas de su empresa Uniapuestas en el 2004, dos helicópteros Hughes 500 de procedencia Israelí y de tecnología de punta, una lancha rápida y decenas de re-puestos para aviones y helicópteros y equipos de material satelital. El hombre que cuidaba el lugar Gerardo Vega, dijo ser empleado de Uniapuestas, había sido contratado como escolta personal, pero había sido escogido para cuidar la inmensa bodega, dijo también que el jefe de seguridad de Uniapuestas Raúl Montes, lo había prevenido sobre la llegada de unos contenedores, que resultaron ser los helicópteros. Jairo Castillo ex paramilitar y quien ha contado a la Corte Suprema de Justicia sucesos y situaciones de su antiguo patrón Salvatore Mancuso, es uno de los testigos claves de la complicidad de «La Gata» con Mancuso y los escuadrones de la muerte y puede contar todo sobre los helicópteros y la lancha encontrados en las bodegas de propiedad de Enilce López Romero. El otro testigo de primera mano y quien hubiera podido aclarar este y otros negociados entre esta «dama» y el principal cabecilla de los escuadrones de la muerte Jairo Andrés Angarita, ex piloto de la Fuerza Aérea Colombiana y segundo de Mancuso, fue asesinado. Mancuso, que es experto piloto de helicóptero, confesó ante la Fiscalía que su grupo terrorista poseía 9 helicópteros, la mayoría destinados al tráfico de droga y piloteados por miembros de la fuerza pública¹⁸¹. Para la empresaria Enilce López Romero, mujer con un oscuro poder económico y político en los departamentos de Sucre, Magdalena, Bolívar, Cartagena y Atlántico y quien espera en prisión una condena por lavado de activos, su cuarto de hora no parece haber terminado. Pues esta «Gata» también está involucrada en varios expedientes referentes a crímenes de los escuadrones de la muerte. Pero hay que esperar, pues en el país de Uribe, que el en compañía de sus acólitos bautizo «Colombia Es Pasión» todo puede ocurrir, incluso la impunidad total, porque hay que tener en cuenta que el jefe del pool de abogados que hacen la defensa de «La Gata» es nada menos que el controvertido Jaime Lombana Villareal, el mismo abogado del presidente Álvaro Uribe Vélez.

¹⁷⁹ Prensa nacional y El Tiempo 22-5-07.

¹⁸⁰ Prensa nacional y El Tiempo 21-3-07

¹⁸¹ Prensa nacional y El Tiempo 2-6-07

Raúl Montoya Flórez, prospero empresario de la Costa norte del país, fue el gerente y financista de la campana presidencial en el 2002 de Uribe en el departamento del Magdalena, según acusaciones de Rafael García, ex jefe de informática del DAS y hoy preso y procesado por narcoparamilitarismo. Montoya poco a poco se convirtió en el principal distribuidor y vendedor de licores de la Costa Atlántica, posee una galería de arte en Miami y tuvo millonarios negocios en la Florida, Estados Unidos. Fue amigo de los hermanos Mario y Giovanni Lignarolo, procesados y condenados por lavado de activos en 1988 y tuvo relaciones con Luis Vásquez condenado por conspiración para delinquir y lavado de activos en 1992. El 3 de junio de 1986 fue abierta una cuenta corriente en el Banco de Crédito y Comercio de Colombia, numero 005-218-26-8 a nombre de Carlos Martínez Hernández, con autorización de girar cheques a nombre de Raúl Mejía. Luego la cuenta fue cancelada el 18 de noviembre del mismo año, pero de ella salió el cheque con que se pago el asesinato del director y propietario del diario bogotano 'El Espectador' Guillermo Cano Isaza. El verdadero administrador de dicha cuenta era Luis Carlos Molina Yepes, amigo personal del capo Pablo Escobar Gaviria. Por esta razón Molina Yepes, fue condenado a 16 años de prisión. De la misma cuenta que salió el dinero para el magnicidio del periodista Guillermo Cano, asesinado por orden de la mafia, salieron varios cheques a nombre de Raúl Montoya Flórez director de campana de Uribe, en el Magdalena. Preguntado Molina Yepes sobre sus actividades y a quien había girado cheques de la cuenta antes citada, expreso que «era distribuidor exclusivo de aguardiente antioqueno para el Magdalena», en cuanto a los cheques no se acordó o no conocía a los destinatarios, «a excepción de Raúl Montoya, que es amigo mío. Debe ser que le compre algunos dólares». Una vez conocidas las revelaciones del ex jefe de informática del DAS, Rafael García, en forma inmediata el presidente Uribe salió a defender a Raúl Montoya, calificándolo de «un señor muy correcto». Sin embargo el diario El Nuevo Herald de Miami, revelo que Raúl Montoya Flórez, se había quedado sin visa para ir a Estados Unidos por «sombrios episodios» A pesar de que Montoya no tiene ningún proceso en su contra, existen dudosos cheques y un pasado que no perdona. En lo que atañe al presidente Uribe, estas fueron sus declaraciones ofrecidas a la prensa nacional: «Y ahora entonces le van a quitar legitimidad a este gobierno, cambiando a don Raúl Montoya, un hombre honesto que vive en Santa Marta, por Diego Montoya, un narcotraficante. Hombre no hay derecho que pongan a los colombianos a leer unas revistas importantes en Semana Santa que violan la Constitución, que violan el derecho a la intimidad y al buen nombre de personas, que le cambian al ciudadano el nombre que ha tenido, reconocido como el de una persona honesta, por el nombre de un narcotraficante, para hacerle semejantes imputaciones, a mi me da hasta pena con don Raúl Montoya, pregunten ustedes en Santa Marta quien es don Raúl Montoya»¹⁸²

El cuestionado ex director del DAS Jorge Noguera, acusado de complicidad de asesinato, pertenecer al narcoparamilitarismo de la Costa Atlántica y amigo personal del presidente Uribe, cuando fue nombrado en la Dirección General de los servicios Secretes, nombro como su asistente a María Helena Montoya, hija de don Raúl Montoya.

Estos son dos ejemplos de los varios que se pueden dar a conocer sobre los oscuros financiadores de la campana del capo Uribe, sin des- contar la ayuda decidida y firme de los dos más grandes y poderosos grupos económicos del país, el Grupo Santodomingo y Ardila Lule, los cuales aparecen, o por lo menos vanas de sus empresas, como financiadores de los escuadrones de la muerte, y los poderoso carteles de los ganaderos liderado por Jorge Visbal y José Felix Lafaurie quienes han estado a la cabeza de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) y la Federación Antioqueña de Ganaderos (Fadegan), financiando y participando hombro a hombro con los escuadrones de la muerte y su diabólico proyecto de exterminación de supuestos guerrilleros, y quienes en su gran mayoría, se ha concluido, eran simples campesinas y campesinos a quienes se le arrebató sus pequeñas parcelas. Los familiares sobrevivientes de esta inacabable matanza conforman hoy en día los cuatro millones de desplazados, muchos de ellos viviendo en las grandes ciudades y en la pobreza absoluta.

¹⁸² El Espectador, Equipo de Periodismo Investigativo, PIE. A pesar de los nexos de Uribe con la mafia, este diario sigue apoyando férreamente las políticas de Uribe y su gobierno. (¿?!!)

A la par con su proyecto de «paz» con sus amigos narcoparamilitares, el presidente Uribe lanzaba otro proyecto de gran envergadura, este sí económico, con sus siempre amigos los narcoparamilitares. La rentable empresa consistía en la plantación de 'palma africana' en todo el territorio nacional, sirviendo a la vez como una forma de incrustar en su organización, dirección y expansión a ex paramilitares para su reinserción, sin tenerse en cuenta en primera instancia, las comunidades negras e indígenas en donde se comenzaba a imponer a gran escala esta cultura, ni el desgaste del medio ambiente y un atentado contra otros cultivos de pancoger —vitales para la sobrevivencia del campesinado pobre—, condenados a desaparecer con este nuevo monocultivo. Cabecillas narcoparamilitares ya habían tornado la delantera y se habían apropiado, con métodos violentos, enormes hectáreas de tierras, tierras robadas a campesinos, indígenas y comunidades negras para el exclusivo sembrado de la palma con el total apoyo de la Presidencia de la República.

A principios del 2003 la plantación ilegal de la palma de aceite o africana, avanzaba en el norte de Colombia en las regiones próximas al Darién, llamadas por muchos —«el mejor lugar de América» por la riqueza de su biodiversidad—, son zonas que comprenden varias comunas de los departamentos de Antioquia y Chocó. Las comunidades afectadas por este monocultivo han denunciado la invasión de sus tierras, el daño sobre el medio ambiente, y las masacres desapariciones, asesinatos selectivos, tortura y desplazamientos forzados por parte de la fuerza pública y sus 'primos' los escuadrones de la muerte. Los narcoparamilitares han hecho una verdadera «limpieza» de estas tierras y de sus verdaderos propietarios y son ellos hoy día quienes protegen y garantizan el megaproyecto agroindustrial de la palma africana, impulsada por la Presidencia de la República.

En septiembre del 2003 el 'narcopara' "presidente" Álvaro Uribe proclamó en Cartagena: «El país debe tener 600 mil hectáreas de Palma africana». En consonancia con Uribe y por esos mismos días el cabecilla narcoparamilitar Freddy Rendón Herrera, alias 'el alemán' afirmó:

«...necesitamos una gran revolución agraria que nos involucre». Por su parte la revista semana en una de sus entrevistas al temido cabecilla Vicente Castaño, alias 'el profe' —prófugo de la justicia y quien se pasea como Pedro por su casa en toda la Costa Atlántica y Antioquia, le pregunto sobre los avances de la siembra de palma (tomado de la prensa alternativa e Indymedia):

Semana: ¿En donde están desarrollando esos proyectos?

Vicente Castaño: En Araba tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en este tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado solo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes (cabecillas narcoparamilitares).

También las tierras y pobladores de las comunidades negras del departamento del Chocó, han sido objeto de toda clase de vejámenes, mismo si estas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables según el artículo 7 de la ley 70 de 1993. Sin embargo desde el año 2001 la Brigada VXII del Ejército y el bloque narcoparamilitar «Elmer Cárdenas» por medio de amenazas y asesinatos provocaron el desplazamiento de 28 comunidades del Bajo Atrato (Jiguamiando, Curvaradó y Cacarica). A los que no se fueron o regresaron les hicieron firmar falsas o ilegales «ventas» a instancias de los Comandantes de la Brigada XVII quienes fungieron como «intermediarios». Tres años después ya había sembradas más de 4 mil hectáreas de palma de aceite por empresas —que según se afirma es socio Álvaro Uribe— como: Urapalma ; Palma S.A (Palmura); Palmado asociada de Urapalma; Palmas de Curvaradó; Fregni Ochoa y la Tukeka, quienes proyectan la siembra de otras 26.135 hectáreas. El más reciente asesinato fue el de Orlando Valencia a manos de los socios de Uribe y a la vista de las fuerzas militares para complacencia de los compañías palmicultoras. Lo acaecido en el Chocó, es solo una

muestra de lo que ocurre en casi todo el territorio nacional. Estimaciones conservadoras de la Universidad de los Andes de Bogotá, estiman que las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas y campesinos desplazados ascienden a 5 millones de hectáreas.¹⁸³

Un estudio de la diócesis de Quibdó y de la Ong Human Rights Everywhere, intitulado «La cultura de la palma africana en el Chocó», demuestra los inconvenientes de plantar la palma africana en esta zona a causa de los impactos negativos sobre el medio ambiente y basándose sobre los estudios de la cultura de palma de aceite en otros lugares similares. La palma se extendió en la región gracias a la protección de narcoparamilitares y a sus amenazas de muerte, lo que ha puesto en peligro la integridad territorial, cultural y física de las comunidades indígenas y afrocolombianas que se oponen. Por su parte la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, declare ella misma en el 2003 que «después del 2001 la empresa Urapalma S.A. a promovido la cultura de la palma de aceite de forma ilegal y «con la ayuda y protección del Ejército (...) de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados»¹⁸⁴.

En el 2003 según fuentes oficiales y no gubernamentales, la gran mayoría de desplazamientos forzados fueron efectuados por los grupos paramilitares, los cuales intervienen con la acción, omisión o el consentimiento de la fuerza pública, ya que el paramilitarismo es un proyecto estatal. Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) los grupos paramilitares colombianos han desaparecido entre los años 1988 y 2003 aproximadamente 14.476 ciudadanos asesinatos, desapariciones y torturas.

Vanas ONGs colombianas como la Comisión colombiana de Juristas, la Asociación de miembros de familias de detenidos y desaparecidos (ASFADES), el Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», y la Comisión de Justicia y Paz, han denunciado a nivel nacional e internacional que «en medio del proceso de desmovilización paramilitar iniciado en el 2002, el control del territorio tiene como base garantizar esta apropiación para la puesta en obra de proyectos específicos ligados al desarrollo biotecnológico, a la agroindustria de la palma de aceite, de caucho y de la ganadería.

En un reporte presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión de Justicia y Paz concluye que «paralelamente al proceso de desmovilización de grupos paramilitares, mecanismos de apropiación de tierras y la negación de los derechos de la población afro colombiana se van desarrollado en los territorios colectivos donde habitan estas comunidades».

«Simultáneamente aparecieron proyectos de ley que tienden a facilitar la legalización de tierras usurpadas por los paramilitares. Se niega de hecho la reparación integral y la restitución de tierras a las cuales tienen derecho 3 millones de desplazados¹⁸⁵.

La revista Semana, también reseña en uno de sus artículos titulado: ROBO DE TIERRAS, la forma como los escuadrones de la muerte continuaban, a pesar de sus negociaciones de paz con el capo presidente Uribe, delinquiendo y siendo un peligro para la población civil en especial campesina. El cabecilla narcoparamilitar 'Jorge 40', llamo a uno de sus compinches y le da instrucciones para apropiarse de tierras que son destinadas para desplazados y campesinos (tomado de la prensa alternativa):

Jorge 40: ¿Que hubo?
NN: Señor, como esta?

¹⁸³ Indymedia 19-10-06. Javier F Munevar

¹⁸⁴ Resolución del 6 de marzo del 2003

¹⁸⁵ Territorio y apropiación de tierras», Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, noviembre 2004.

Jorge 40: Tu te acuerdas que yo te había dicho de una tierra. Porque no le echas mano para ver si nosotros armamos un proyecto grande. Me dicen que esa tierra en estos días se la están repartiendo a campesinos.

NN: La tenían para parcelar. Fue la que yo le dije que si eran las de Tranquilandia.

Jorge 40: Si, unas que son de Jairo Carrillo que están detrás del tesoro

NN: Si.

Jorge 40: Y que podemos hacer nosotros para un pedazo de esos planos que están a orillas del no, para ver si hacemos un proyecto de palma ahí. ¿Eso quien lo está manejando?

NNHOMBRE: Eso lo está manejando Incoder.

Jorge 40: Por eso y como hacemos nosotros?

NN: Yo busco los contactos.

Jorge 40: Pero tienes que moverte rápido por que a la hora de que nos la llenen de gente, nos jodimos.

NN: Yo busco los contactos a partir del momento.

Jorge 40: Lo que nosotros tenemos que coger es la tierra plana que sea fácil de regar, me entiendes.

NN: Si señor, entonces a partir de hoy mismo llamo por ahí a un amigo.

Jorge 40: Sobre todo porque son como 2.000 hectáreas.

NN: Si, eso es grande ahí.

Jorge 40: Nosotros nos quedamos por lo menos con 500 u 800 hectáreas. Si nos toca poner ahí uno de los muchachos nuestros de más confianza que aparezcan como campesinos de ahí.

NN: Yo creo que así es posible echarle mano a toda la tierra.¹⁸⁶

Esta pequeña reseña puede ayudar a aclarar más dudas sobre el manejo que le ha dado el presidente Uribe a su política gubernamental y no se necesita ser un gran especialista para asemejar ese buen trato político que le ha destinado a los escuadrones de la muerte y narcotraficantes, con el facilitamiento en su progresión económica, con reglas de juego bastante desventajosas para la inmensa mayoría del pueblo colombiano.

A la par con su política interna de tierra arrasada contra una población adversa a sus políticas y a su torcido pensamiento como persona pública, Álvaro Uribe no dudo un segundo en asociarse con el diablo. El presidente de los Estados Unidos George Bush lanzaba su más descabellada e injusta guerra contra el pueblo de Irak, sobre la falsa e infame 'certeza' que su gobernante Saddam Hussein, poseía armas destructoras. La ONU y la llamada Comunidad Internacional, que no es lo mismo, fueron tratadas como el producto que exhala el exosto de un camello. La matanza en su mayoría de civiles iraquíes comenzó y el narcoparamilitar presidente de la mafia colombiana aprobó inmediatamente semejante carnicería, pues el mismo la practica en Colombia desde años atrás. La estúpida disculpa de acólitos de su entorno quienes aseveraron que el gobierno no envió tropas, queda como el cuento aquel que 'el que peca y reza empata', no es más si no una forma de tratar de justificar lo injustificable. El gobierno de Uribe jamás condenó la loca e interminable carnicería que aun continua hoy en día contra el pueblo iraquí. Por el contrario el pueblo colombiano honro su estirpe de gentes pacificas y contrarias a toda clase de violencia como también lo harían la mayoría de pueblos de América y del mundo. Y no solo por ser un hombre de extrema derecha y de convicción militarista que Uribe acompañó políticamente a su homologado estadounidense en tan infame y cobarde acción militar, fue también su posición de numero 82 en la lista de peligrosos narcotraficantes que posee el Departamento de Estado desde 1991 y que bien le puede traer consecuencias nefastas si no se alinea con el imperio, como le ha ocurrido a presidentes 'amigos' de los Estados Unidos, quienes después de querer tomar un poco de autonomía caen en desgracia. Y el grave problema no es la caída de estos infelices títeres del imperio norteamericano. No! lo terrorífico son los miles de litros de sangre derramada y las matanzas de inocentes niños y mujeres que los valientes soldados estadounidenses ejecutan en nombre de la libertad y la democracia. Debería preguntársele al capo Uribe, ¿que entienden los gobiernos estadounidenses y en este caso Bush, por Libertad y Democracia? Ya que el, se la pasa viajando a Estados Unidos, como si fuera allá donde se

¹⁸⁶ Fiscalía General y Prensa colombiana (01-07-2007)

encontrara la Fuente del Saber cómo Gobernar', (Uribe ha viajado en sus 5 años de gobierno aproximadamente 15 veces a Washington). Lo cierto es que la autonomía de este alto narcopolítico colombiano está en duda. Pobre mi pueblo! Incluido yo.

Ya para el nuevo siglo XXI las costumbres políticas en América Latina comenzaban a cambiar radicalmente, situación poco placentera para los Estados Unidos que veía con malos ojos como su patio trasero cambiaba de color. En Brasil y Venezuela asumían el poder hombres diametralmente opuestos a las políticas intervencionistas, maniqueístas y corruptas del coloso del norte. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez desafiaba abiertamente al imperio norteamericano rechazando de plano cualquier sometimiento y exigiendo un trato de igual a igual con el gobierno estadounidense. Crimen de lesa majestad! eran los gritos que se escuchaban por doquier. Que improperios! retumba estos lamentos en los viejos muros latinoamericanos construidos por los lacayos, esos lacayos, dueños de ese viejo poder que durante por lo menos un siglo se han mantenido con la ayuda del imperio y sus armas. Por el contrario en las calles latinoamericanas el jolgorio de fiesta y el colorido de la libertad y la esperanza de un mundo mejor, retumbaban alegremente contrastando con el cañoneo de ese viejo y moribundo poder de hambre, sometimiento y muerte impuesto durante décadas a los pueblos de América. Nuestra América!

Uribe en su loca carrera guerrerrista y su largo sueño de acabar con la subversión armada, matando el diálogo político mediante el recrudecimiento de la guerra, solicitó a los gobiernos vecinos su ayuda para derrotar a las guerrillas y pretendió mediante el «Plan Colombia» —que es un negocio millonario para empresas productoras de armamento y fungicidas de Estados Unidos—, que gobiernos de Brasil, Venezuela y Ecuador intervinieran abiertamente en el conflicto interno colombiano. Un conflicto que no es de ellos. La decidida y firme negativa de estos gobiernos, hizo que Uribe entrara en un furibundo estado, usual en él, y en medio de la cólera hiciera señalamientos aventurados, con los cuales dejaba entender que dichos vecinos eran favorables a los 'terroristas' colombianos. Las consecuencias más graves y nefastas las irían a pagar los pueblos de Venezuela y Ecuador, con por lo menos una decena de sus ciudadanos muertos e igual número de heridos en las diferentes intervenciones militares del lado de sus territorios fronterizos, hechas por el ejército regular colombiano y grupos de escuadrones de la muerte. Ecuador y Venezuela como también Brasil se abstuvieron de participar en la guerra interna colombiana, pero también y sobre todo, no quisieron o no encontraron argumento para condenar a las guerrillas de izquierda como grupos terroristas. Algo intolerable para Uribe, quien muerto de ira partió a Washington a ver como 'solucionaba' dicho impase. La tensión política en Venezuela era intensa si tenemos en cuenta el intento de golpe de estado que sacó del poder al presidente Chávez durante dos días el 11 de abril del 2002 y la posterior huida de los golpistas, autores de varias muertes de ciudadanos venezolanos y quienes se refugiaron unos en Miami y otros en Bogotá con la absoluta complacencia de estos dos gobiernos. El gobierno venezolano del presidente Chávez, como principal oponente a las políticas estadounidenses en la región y su acercamiento con el gobierno del presidente cubano Fidel Castro, ganaba más puntos en Washington y Bogotá para ser blanco de toda clase de ataques y señalamientos, como por ejemplo, el de ser un dictador y el apoyar a la guerrilla de las FARC dándoles refugio en su territorio y una ayuda en armas, según funcionarios estadounidenses y la poderosa prensa colombiana.

Entre tanto agentes de la CIA norteamericana, militares venezolanos refugiados en Colombia agentes del DAS, de inteligencia del ejército colombiano y varios cabecillas del narcoparamilitarismo preparaban un atentado contra el presidente venezolano. La consigna era quitarlo de en medio rápidamente, pues incomodaba de manera creciente 'la libre poli-tica' estadounidense en la región —siendo un mal ejemplo para el resto de países—, negándose rotundamente a decretar al grupo guerrillero FARC como terrorista y en la parte económica nacionalizando el oro negro, dejando de paso a toda una elite zángana y corrupta, sin los millones de petrodólares con que se pavoneaba por el mundo, y obligando a las empresas petroleras estadounidenses y europeas a rendir cuentas, a pagar impuestos reales y ganar correctamente su trabajo.

Las relaciones colombo venezolanas ardían, al punto que se llegó a pensar que no tendría retroceso y una confrontación armada podría ser posible. El mandatario venezolano acusaba a Estados Unidos de azuzar la confrontación entre las dos hermanas Repúblicas, Uribe agazapado conspirando contra Chávez, —así como conspiraría contra sus opositores y contra las altas cortes de justicia— mientras altos funcionarios y la poderosa prensa colombiana con el ministro Juan Manuel Santos, el diario El Tiempo, Caracol radio y RCN a la cabeza, continuaban echándole leña al fuego, atacando al gobierno de Venezuela y a su presidente, tildándolo de dictatorial y de dar parte de su territorio fronterizo como refugio a las guerrillas, en especial a las FARC. Acusaciones jamás comprobadas.

Ya para finales del año 2003 las estructuras paramilitares estaban dispuestas para entrar a territorio venezolano, con la plena complicidad de ciertos oficiales, suboficiales de la guardia civil, del ejército y políticos de extrema derecha venezolanos, en especial del Estado de Zulia, fronterizo con Colombia, que cuenta con un gobernador opositor al presidente Chávez, Manuel Resales, también ex candidato a la presidencia y financiado por el gobierno estadounidense. Por el Estado de Táchira venezolano, fronterizo con el departamento de Santander colombiano, se negoció el ingreso de paramilitares colombianos por un monto de aproximadamente dos millones de dólares. En los primeros meses del 2004 aproximadamente 130 paramilitares colombianos penetraron a territorio venezolano, instalándose en una finca perteneciente al venezolano de origen cubano Robert Alonso. La mayor parte de la zona venezolana fronteriza con Colombia hacia presencia duros y puros narco políticos colombianos, instalados desde hace más de dos décadas en ese territorio y desde donde servían de enlace a los narcotraficantes colombianos y venezolanos para enviar cocaína hacia Estados Unidos y Europa¹⁸⁷. Igualmente y como ha sido una práctica continua en Colombia, la asociación de ganaderos fue contactada por los paramilitares de extrema derecha e irían a colaborar en la conspiración y en la medida de sus capacidades. Los miembros de los escuadrones de la muerte, en su mayoría pertenecientes al 'Bloque Norte', que tenía como principal cabecilla a 'Jorge 40', habrían cruzado la frontera en pequeños grupos de 4 o 5 personas ayudados por el narcotráfico y políticos adversos al gobierno, hasta completar según fuentes de inteligencia venezolana, 500 combatientes de los cuales 130 serían arrestados cerca de Caracas. La misión de este grupo era atacar varios cuarteles del ejército y propiciar un estado de terror, mientras que sus otros compinches, atacaban otros sectores de Caracas para en medio de la confusión llegar a su blanco predeterminado el presidente de la República. Pero antes de la asonada final, comenzaron a ocurrir hechos que llamaron la atención de los cuerpos de seguridad del Estado, como la voladura de un oleoducto y el sabotaje eléctrico, otro hecho que prendía la curiosidad del gobierno venezolano, fue la presencia de barcos de guerra estadounidenses en Curazao¹⁸⁸. Con la captura de los 130 paramilitares cerca de Caracas, gracias a la información proveniente de Colombia —de amigos del pueblo y gobierno venezolano— el plan terrorista previsto para el 2 de diciembre del 2004 quedó truncado pese al bien organizado complot preparado por los Servicios de Inteligencia Colombianos (DAS), la CIA, los escuadrones de la muerte y políticos y ganaderos venezolanos opositores al gobierno del presidente Chávez. Sin embargo, meses más tarde sería cobardemente asesinado el fiscal venezolano Danilo Anderson, cuando conducía su vehículo que explotó cuando el fiscal se dirigía a su residencia. Una fuerte carga explosiva fue adherida al vehículo. Anderson investigaba a los participantes del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, en el que fueron asesinadas decenas de manifestantes y muchas otras personas resultaron heridas por acción de la policía metropolitana de Caracas, la cual estaba en manos del alcalde opositor Alfredo Peña, escondido hoy día en Miami. Según fuentes colombianas, Anderson no estaba en la lista de los que serían sacrificados en la fallida asonada narco-paramilitar, pero su asesinato sí representó una especie de desquite o venganza de la mafia derechista colombo-venezolana.

¹⁸⁷ El ex senador colombiano y ex presidente del congreso Guillermo Ocampo Ospina poseía fincas y negocios en los estados de Barinas, Táchira y Apure. Las autoridades venezolanas intervinieron su empresa y fue investigado por sus ilícitos negocios, en Colombia los poderosos medios de comunicación no le dieron la importancia al suceso.

¹⁸⁸ Rebellion.Org y Red Voltaire 04-08-2004

Poco tiempo después, el presidente Uribe admitía, —sobre pruebas de grabaciones telefónicas presentadas por dos congresistas venezolanos— que en Colombia se habían efectuado reuniones conspirativas en contra del gobierno venezolano. Aun cuando el presidente negó toda responsabilidad por parte de su gobierno en dicho complot, ^como explica que en una de esas reuniones en el centro de Bogotá, aparecían agentes de su gobierno (DAS), agentes de la CIA y ex oficiales del ejército venezolano refugiados en Colombia? Uribe siempre ha negado cualquier participación de conspiración contra el gobierno venezolano, entonces (Como explica que su hombre de confianza y jefe de los servicios secretos Jorge Noguera, si tenía conocimiento de dichas reuniones? Veamos pues, apartes de las declaraciones a la prensa nacional y a la Fiscalía del hombre de confianza del jefe de Inteligencia Jorge Noguera y jefe de informática del DAS, Rafael García Torres preso y condenado a 16 años de prisión por narcoparamilitarismo y quien acuso a varios funcionarios de esa entidad y políticos de la Costa Atlántica, de connivencia con los escuadrones de la muerte y el narcotráfico:

¿Por qué no ha declarado a la Fiscalía que acompañó a Jorge Noguera a Venezuela, sin dejar rastro cuando pasaban por Cúcuta, para reunirse con la oposición antichavistas?

Rafael García: Hay muchas cosas que no cuento a la Fiscalía, pero llegara el momento oportuno cuando mi familia este fuera de peligro, pues estamos amenazados de muerte. Necesitamos protección y la Fiscalía no ha querido otorgarla. Yo no puedo seguir hablando, denunciado cosas.

¿Quiénes son los conspiradores contra Venezuela?

R.G.: Eso fue un proceso meticuloso y prefiero callar. Eso es algo muy grande. Prefiero no hablar de eso. Debo proteger a mi familia.

¿Jorge Noguera esta dentro de los conspiradores contra Chávez?

R.G.: Muchas de las cosas que se han dicho son ciertas... Yo soy testigo de primera mano en eso. Yo estuve muy al tanto de lo que ahí se manejó... además la cúpula del DAS estuvo untada de narcotráfico, tuvieron muchos vínculos con organizaciones de reconocidos narcotraficantes y eso todavía esta por decirse. Y si existió un complot contra el gobierno de Venezuela y hay mucha gente del gobierno colombiano comprometida.

¿Puede darnos nombres?

R.G.: Yo sé que hay una periodista venezolana de nombre Patricia Poleo muy amiga de «Jorge 40».

¿Sobre los (narco) paramilitares que llegaron a Caracas, que sabe?

R.G.: Ante la Fiscalía he declarado bastante demostrando que conozco todo sobre lo ocurrido. Aunque el gobierno ha querido hacerme pasar como un mentiroso, las investigaciones serias y objetivas me darán la razón. Los colombianos sabrán la verdad

¿Existió un complot para asesinar al presidente Chávez?

R.G. Si, si lo hubo

¿Entonces existe relación entre Jorge Noguera, Jorge 40' y el crimen de Danilo Anderson? (fiscal venezolano)

R.G.: Si.

¿El director del DAS Jorge Noguera, participó en las reuniones en Venezuela?

R.G.:... (Silencio)

¿Quién más sabia de todo esto?

R.G. Esto lo conocíamos dos personas. De parte del gobierno seis personas estaban al tanto sobre todo esto.

¿Nombres...?

R.G. No voy a decir los nombres.

¿DC Las instituciones del gobierno como el DAS, quien más sabia?

R.G.: Alguien que trabajó como director de inteligencia...

¿El presidente Álvaro Uribe sabia?

R.G.: No lo sé. Es muy posible¹⁸⁹.

En el mes de diciembre de 2004 un comando militar Colombiano en complicidad con militares venezolanos secuestraron en Caracas a Rodrigo Granda, miembro político del grupo subversivo FARC, quien se encontraba viviendo en Venezuela. Rodrigo Granda en el momento de su secuestro se encontraba dando una entrevista al medio informativo colombiano Mundo Diplomático, en una cafetería en el centro de la capital venezolana. Granda fue introducido a la fuerza en un vehículo y llevado durante varias horas fuera de Caracas, luego, con los ojos vendados, fue cambiado de automóvil y horas después fue entregado a la policía en la ciudad fronteriza de Cúcuta. El gobierno colombiano anunciaría que el guerrillero Rodrigo Granda fue arrestado en un hotel de Cúcuta capital del departamento de Norte de Santander. Investigaciones judiciales y de prensa, lograron conocer que militares venezolanos implicados en el secuestro habrían recibido un millón de dólares. Una gran parte del dinero fue proporcionada por los narcoparamilitares y la otra parte por el gobierno colombiano. El cabecilla narcoparamilitar del Cartel de Cali Wilmer Varela, alias, 'Jabón' fue buscado por el hoy secretario privado de Uribe, Bernardo Moreno, para que aportara el millón de dólares que valía el secuestro de Rodrigo Granda

Para los campesinos y habitantes ecuatorianos que habitan cerca de la frontera con Colombia, la situación no es menos desalentadora. Continuos bombardeos por parte de la Fuerza Aérea Colombiana y hostigamiento, amenazas y hasta asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte es la tónica casi cotidiana para los habitantes de la frontera de este hermano país¹⁹⁰. Los diferentes gobiernos ecuatorianos, al igual que Brasil y Venezuela, rechazaron toda implicación en el conflicto interno colombiano, absteniéndose de decretar al movimiento insurgente de terrorista. Lo cual, como era de esperarse desencadenó la furia del capo Uribe y sus altos mandos militares. Con el «Plan Colombia» el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Pastrana y desde luego el de Uribe, esperaban que sus vecinos intervendrían militarmente para afrontar las guerrillas de izquierda y exterminarlas en un corto o mediano plazo. En varias ocasiones los dirigentes ecuatorianos fueron firmes en sus declaraciones al afirmar que el problema interno colombiano, debería ser solucionado por los colombianos, oponiéndose a cualquier intervención y reivindicando su neutralidad. Ante tan sabia decisión, los gobiernos colombiano y estadounidense no escondieron su descontento dejando entrever en sus comunicados, absurdamente, una especie de acusación de complicidad ecuatoriana con los «terroristas de las FARC». Inmediatamente Ecuador se convertía en una especie de 'vecino alcahuete' al que había que castigar. Y no solo los bombardeos y ametrallamientos desde helicópteros por parte de la aviación y el ejército colombiano y la incursión terrorista de los escuadrones de la muerte, debían soportar los habitantes ecuatorianos fronterizos con Colombia, y que ha dejado varios de cenas de muertos y heridos, también eran agredidos con las fumigaciones de glifosato, en la tal 'lucha colombiana contra las drogas'¹⁹¹.

¹⁸⁹ Ultimas Noticias. Y Aporrea.org 15-15-2006

¹⁹⁰ Declaraciones a la prensa y a la Fiscalía General. (Abril/2006). Narcoparamilitares siguen entrando a Venezuela disfrazados de turistas, denunció la diputada del estado de Táchira, Iris Varela. La parlamentaria dijo que cuenta con la lista de paramilitares que han entrado al país y que no tienen prueba de salida. Iris Varela sospecha que existe una mafia al interior de las oficinas de Identificación y Extranjería del estado tachirenses que se encarga de tramitar los documentos necesarios para estos criminales

¹⁹¹ Las diferentes declaraciones del gobierno de Uribe han dado como explicación «convinciente» que las fuerzas armadas colombianas persiguen a los «terroristas de las FARC» que se esconden en territorio ecuatoriano.

El nuevo presidente de Ecuador, Rafael Correa, comunico al gobierno del capo Uribe, su intención de demandar al Estado colombiano ante la Organización de Estados Americanos y pedir reparación por los daños ocasionados por las fumigaciones del 'Plan Colombia' que han degradado enormemente la salud de los habitantes de la frontera, así como la contaminación de cultivos, ríos y animales domésticos y otros¹⁹². El gobierno y el propio Uribe ha optado por una posición NEGACIONISTA, argumentando que las fuerzas armadas no han violado espacio aéreo ecuatoriano, ni mucho menos, atacado población civil de ese país. A continuación veamos un dramático testimonio:

«Ante la invitación efectuada por los Moradores de la cooperativa San Martín, para verificar la denuncia de violación del espacio aéreo ecuatoriano, el día sábado 28 de enero del presente año (2006), quienes integramos el COMITE BINACIONAL DE PUEBLOS DE FRONTERA, nos dirigimos a dicha cooperativa agrícola, cuando avanzábamos en aguas internacionales, aproximadamente a las 10H30, a la altura donde alimenta las aguas del río San Miguel, el río Bermeja, fuimos atacados por aviones y helicópteros de la fuerza aérea colombiana, quienes disparaban indiscriminadamente hacia el territorio ecuatoriano. Suponemos que cuando divisaron nuestra embarcación una avioneta y un helicóptero de la flotilla (compuesta por tres helicópteros, dos aviones y un avión radar) comenzaron a dar vueltas sobre la embarcación hasta llegar a agredirnos con fuego de ametralladora, por varias ocasiones, por suerte y fortuna impactaron en las aguas a pocos centímetros de ambos lados de la embarcación. Al ver y escuchar el estruendo del ametrallamiento, los niños que viajaban hasta una finca cercana comenzaron a llorar desesperadamente, lo que nos obligo a orillarnos al lado colombiano, por que del lado ecuatoriano había bastante ametrallamiento. En ese momento salía una señora con una niña en brazos, gritaba desesperada y al escuchar el arribo del bote, nos pidió que la lleváramos, pues en dicho sector también atacaban las naves antes citadas, al arrancar de la mencionada orilla, el motor del bote sufrió un desperfecto mecánico, quedamos varados un buen rato, soportando el fuego de ametralladora... tanto al lado ecuatoriano como a nuestra embarcación. Ante el miedo y el pánico decidimos, sacarnos las camisas y las prendas blancas, para agitarlas en señal de paz... lo cual no fue suficiente, más bien continuaron atacando... seguimos Ho abajo, pero el asedio de las naves continuaba hasta llegar a Barranca Bermeja. Al desembarcar aproximadamente a las 12H15 pudimos constatar que la mayoría de la población había abandonado el caserío, después de soportar abundante fuego de ametralladora y misiles... Como prueba del ametrallamiento a Barranca Bermeja, recogimos gran cantidad de casquillos... los pocos pobladores que quedaron se dirigieron a nosotros para denunciar que los casquillos y las balas caían como granizo y que la mayoría para salvar sus vidas tuvieron que verse obligados a retirarse hasta el recinto de Santa Rosa, cantón Cascales, provincia de Sucumbíos (Ecuador)¹⁹³.»

En una de sus últimas declaraciones a la agenda EFE, el presidente Rafael Correa, anuncio su disponibilidad de poner término a los abusos del gobierno colombiano en la frontera, tanto con las fumigaciones aéreas, como en la desprotección de la zona donde actúan impunemente los escuadrones de la muerte de extrema derecha. El presidente Correa recalco que Colombia «ha bombardeado con glifosato (herbicida) nuestra frontera norte y desprotegido su frontera sur para que sean las fuerza armadas ecuatorianas las que hagan el trabajo para contener los escuadrones paramilitares de extrema derecha». Con el informe de una Comisión Científica ecuatoriana, que confirman las tesis de Quito «Seguiremos acciones legales internacionales ante el tribunal de la Haya contra Colombia» y para ello, pedirá la ayuda de la ONU. También el presidente Correa, mostro su deseo de que el gobierno en

¹⁹² Comité Consultivo del Grupo de Monitoreo del Plan Colombia. Aporrea.org 07-02-2006.

¹⁹³ Diario Altercom y Aporrea. 02-02-2006.

Bogotá «si es posible cambie esa estrategia de violencia y militarismo que no le ha dado ningún resultado, aunque eso ya es una decisión soberana de Colombia»¹⁹⁴.

Las autoridades ecuatorianas han estimado en más de 300 mil los colombianos refugiados en ese país, todos los cuales han huido de la confrontación armada interna y en especial de los abusos persecución y crímenes cometidos por el ejército y los escuadrones de la muerte. El presidente Rafael Correa, anuncio a mediados del año 2007, una regularización para todas las familias y refugiados colombianos como un acto de humanismo hacia estas personas perseguidas y en peligro de muerte en su propio país.

A mediados del 2004 fue capturado en Quito capital de Ecuador el miembro político de las FARC, Ricardo Palmera. Su captura fue efectuada por agentes de inteligencia del DAS y agentes de la CIA, cuando trataba de lograr una cita con un alto representante de las Naciones Unidas, para concertar un mini acuerdo que pudiese entreabrir las compuertas de un dialogo con el gobierno de Uribe. Con su captura todo quedaba en un punto muerto.

Para los años 2003, 2004 y sucesivos, el gobierno 'narcopara' de Álvaro Uribe, no tendría tropiezos de ninguna naturaleza para imponer su agenda política, tanto a nivel nacional como internacional. Con un parlamento enteramente dado a su causa para la «refundación de la patria», aproximadamente un 70 por ciento de sus miembros, la tarea era más que fácil. La formidable Constitución de 1991 aprobada por el pueblo colombiano, devenía una verdadera colcha de retazos. Reformas y más reformas en favor del Capo y sus acólitos y en detrimento de todo un pueblo se sucedían en ese otrora recinto respetable y respetado, el Congreso de la República. Delincuentes de toda calaña, amigos del crimen organizado, socios de narcotraficantes y paramilitares, y hasta unos cuantos asesinos de pura sangre, adornaban con júbilo y sin ningún recato los salones de la democracia, desde donde deberían salir las leyes para honrar a los ciudadanos y ciudadanas y engrandecer la Nación. Pero triste y desafortunadamente, para las mayorías de Colombia, ese recinto sagrado había sido asaltado por matones, rufianes, traidores, arribistas y corruptos hombres y mujeres que hacían honor a la mala reputación del inquilino de la Casa de Nariño y Jefe de Estado, e irían a complementar su infame política en favor de criminales y narcotraficantes. La MAFIA tenía todo el Poder!

Para llevar a cabo su monstruoso plan, los caballeros del crimen continuo, crearían —por la época en que el desconocido Uribe negociaba con sus amigos puros y duros del narcotráfico y paramilitarismo, su ascenso a la presidencia de la República, por allá a finales del 2001— fugaces movimientos o partidos políticos a lo largo y ancho de la geografía nacional, con la participación activa del terrorismo paramilitar y los fondos proporcionados por el narcotráfico. Meses más tarde serían elegidos para el periodo 2002-2006 en el senado, el primo hermano del narcoparamilitar presidente, Mario Uribe Escobar, varias veces senador y quien obtuvo una de las mas alias votaciones en el país con 111.635 votos en departamentos con una enorme in-fluencia narcoparamilitar y entrañables amigos como: Miguel de la Espriella, otro político profesional y quien obtuviera 74.647 votos, también en regiones con influencia narcoparamilitar, incluida Bogotá; Álvaro Araujo, el consentido de los narcoparamilitares de la Costa Atlántica y amiguísimo de Uribe, obtuvo 77.916 votos, en zonas de influencia narcoparamilitar incluida Bogotá; Piedad Zuccardi, obtuvo su mayor votación en zona narcoparamilitar de Bolívar; Roció Arias, la vocera oficial de los narcoparamilitares y mensajera de confianza del 'narcopara' Uribe, fue elegida por primera vez como diputada por Antioquia; Oscar Iván Zuloaga, otro entrañable amigo del Capo Uribe y quien recibiría la mayor votación en el departamento de Caldas con 63.817 votos narcoparamilitares, Ciro Ramírez, el socio privilegiado de los narcotraficantes de Boyacá y Casanare especialmente y quien tuvo 62.394 votos en Nariño y Norte de Santander, sin que jamás pusiera un pie en estos departamentos y Álvaro García Romero, quien obtuviera 70.622 votos con la plena ayuda del narcoparamilitarismo en la Costa, este hombre hace parte del vasto grupo de políticos que ordenaron a los escuadrones de la

¹⁹⁴ Agencia de Noticias EFE. 05-07-2007.

muerte la eliminación de sus más directos adversarios. Estos y otros narcoparapolíticos, harían parte de esos «partidos o movimientos» que en compañía del crimen organizado tomarían el poder.

Los siguientes 'partidos' fueron creados por la mafia para la «refundación de la patria»: Movimiento Cambio Radical; Movimiento Alternativo de Avance Social; Movimiento Convergencia Popular Cívica; Movimiento Dejen Jugar al Moreno; Movimiento Si Colombia; Movimiento Popular Unido; Movimiento Integración Regional; Partido Convergencia Ciudadana; Movimiento Nacional Conservador y Movimiento Renovación Acción Laboral, entre otros grupúsculos uribistas¹⁹⁵. Varios senadores y diputados de todos estos «partidos» se encuentran en prisión y muchos otros, están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia, por sus nexos con el narcoparamilitarismo¹⁹⁶. Es más, en el movimiento Convergencia Popular Cívica hicieron parte David Turbay Turbay, ex contralor y el político Rodolfo González García ambos condenados por narcotráfico en el proceso 8000 durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-98); de este mismo grupo saldría elegido el hoy superministro de economía del gobierno del Capo Uribe, Oscar Iván Zuloaga.

Con estos delincuentes es que el espurio presidente Uribe, contaría durante sus primeros cuatro años, para hacer cambios de fondo y reformas a la carta magna, logrando uno de los golpes más certeros contra los intereses del pueblo colombiano y la democracia, su reelección. También mediante puestos burocráticos, embajadas y auxilios de decenas de millones de pesos, lograría convencer a los escasos parlamentarios indecisos, pertenecientes a los dos partidos tradicionales liberal y conservador y que aún quedaban exentos de toda componenda con el narcoparamilitarismo, pero, quienes no ignoraban del todo las andanzas de sus colegas, para que apoyaran su política de seguridad democrática y el desmonte de la Constitución de 1991, que en lugar de reforzar el Estado de Derecho, lo que hizo fue darle amparo a los escuadrones de la muerte, preservar el núcleo mafioso narcoparamilitar y vender las principales empresas nacionales, aumentando el desempleo y la pobreza de los colombianos y colombianas. En sus retóricos discursos el capo Uribe dice que los cambios son por la patria. El camino estaba expedito para imponerles a las mayorías, mediante una verdadera y peligrosa dictadura disfrazada de democracia, un modelo de sociedad fundado en la ganancia inescrupulosa del más fuerte, la sobreexplotación de los trabajadores, la mentira, la corrupción, el terror y la guerra. “Pues es peligroso decirle a ese pueblo que las leyes no son justas por que las obedece creyendo que son justas. Hay que decirle que han de ser obedecidas como ha de obedecerse a los superiores. Así es como toda sedición queda conjurada. Si se le puede hacer entender esto, la populosa bestia se aplaca, agacha la cabeza bajo el yugo. No importa que esto no sea justo; es la definición exacta de la justicia. (...) El poder de los gobernantes está fundado sobre la ignorancia, en la domesticada mansedumbre del pueblo. El poder tiene por base la debilidad. Esta base es firme por que su mayor seguridad está en que el pueblo sea débil¹⁹⁷». Y la debilidad del pueblo colombiano es acentuada con la feroz represión de un Estado que no da tregua a la reflexión, que no permite un trabajo consciente y suficientemente relajada, para optar por una estrategia ciudadana para enfrentar y contrarrestar esa enorme maquina de muerte, impuesta desde las mismas cimas del poder.

Mientras las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, seguían fortaleciéndose y propinando certeros golpes a las fuerza armadas oficiales, en esa fratricida e inacabable guerra que ha vivido Colombia desde hace más de ciento setenta años¹⁹⁸, con diferentes escenarios, actores y objetivos,

¹⁹⁵ Registraduría Nacional

¹⁹⁶ Escándalo político que sacude al país desde mediados del 2006. A pesar del ilícito comprobado en las elecciones parlamentarias del 2002 y 2006, el espurio congreso colombiano continua con su «trabajo».

¹⁹⁷ Yo El Supremo, magnífica obra del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos . Edit. La Oveja Negra, Bogotá 1987

¹⁹⁸ Durante el siglo XIX hubo alrededor de 9 guerras civiles bipartidistas con la bendición de la iglesia católica (1830-1900), con un saldo horrible de más de 150 mil muertos, entre campesinos y peones. La guerra bipartidista continuaba en el siglo XX, en 1928 el 'valeroso' ejército colombiano bajo las órdenes de la Company Fruits asesinaría centenas de trabajadores en

siendo hoy más abiertamente cruel con el apoyo del gobierno estadounidense y su revolucionaria gama de novedoso armamento, no solamente utilizado contra las guerrillas de izquierda, sino contra la población civil en general. Una población civil que recibe en plena figura las nefastas consecuencias de esta guerra de clases, siendo tomada como el pulmón del comunismo criollo, o más exactamente como la fuente de supervivencia de los rebeldes en armas. De ahí, la diabólica invención de la elite civil y militar colombiana de hacerle la guerra 'quitándole el agua al pez'. «Quitarle el agua al pez»¹⁹⁹ en el lenguaje de la guerra contrainsurgente de parte del Estado, significa reprimir y eliminar a la población civil sospechosa de brindarle la mas mínima ayuda a las guerrillas. Esta totalmente prohibido a la población campesina brindarle a la guerrilla siquiera un vaso de agua o un simple saludo. En la paranoica y torcida mentalidad estatal no puede y no debe haber convivencia circunstancial aunque esporádica sea esta. ¿Como impedir, entonces, el contacto entre el campesinado y una guerrilla nómada? Porque ese ciego aniquilamiento? Lo cierto es que la población civil campesina ha sido estigmatizada. Sospechosa primero, acusada enseguida y condenada a muerte después — extrajudicialmente— por 'servir a los intereses de la subversión', sin pruebas o hechos realmente consumados; sino contando con la pueril información de un delator, la palabra de un soldado u oficial, o lo que es peor y viene sucediendo desde los años setenta, el convincente presentimiento de un narcoparamilitar, o la delación de un mal vecino sediento de venganza. Y si agregamos la siniestra gratificación monetaria para los delatores y la soldadesca por cada 'guerrillero' campesino eliminado, podemos entender las masacres y asesinatos selectivos cometidos por el ejército y los escuadrones de la muerte en estos últimos decenios. Maquiavélico programa estatal, promulgado las veinticuatro horas al día en la poderosa, alcahueta y cobarde prensa nacional y reproducido por una parte de la no menos prensa internacional²⁰⁰.

Cuando el Estado colombiano con sus diferentes gobiernos que se han sucedido, desde hace por lo menos cuarenta años, realiza las practicas de una guerra abierta para acabar con la oposición política, desapareciendo y asesinando Líderes de la izquierda; desintegrando y aniquilando comunidades indígenas con la permisibilidad del terror y desplazamiento y la marginalización de niños y mujeres, confinados a refugiarse en las grandes ciudades en tanto que desplazados internos, está aplicando una decidida política de terrorismo de Estado. Convirtiendo asquerosamente, la actividad bélica como un mercado productivo, enaltecendo la industrial militar foránea y engordándola financieramente. La mafia que gobierna lo entendió muy bien y participa de sus ganancias. Y en todo este oscuro panorama, el conjunto de las Fuerzas Armadas colombianas ha jugado un rol relevante y activo en el genocidio llevado a cabo en el país, comportándose como un ejército invasor, o como simples y míseros mercenarios israelíes entrenados para matar a civiles sin distinguir entre estos y los combatientes. Pero si bien es cierto, el resultado no puede ser otro, ya que la mayoría de la oficialidad ha sido entrenada en escuelas militares estadounidenses, en campos israelíes y en menor grado europeos, en donde el mas mínimo respeto al ser humano brilla por su ausencia, en donde la enseñanza de la tortura, la aplicación del sufrimiento a terceros y la eliminación física del 'enemigo' ideológico deviene algo corriente e

la zona bananera de Santa Marta. Los conservadores en el poder seguían persiguiendo y masacrando liberales con la anuencia de la iglesia, que los tildaba de ateos (1930-1945). A su turno los liberales se armaron para enfrentar militarmente a los conservadores hasta 1958, con el pacto bipartidista llamado «Frente Nacional». En los años 60 nacen las guerrillas de izquierda siempre con un espíritu de lucha contra un Estado dictatorial e injusto, y en los años 80 se reorganizan los escuadrones de la muerte de extrema derecha como programa de Estado, con el patrocinio económico del narcotráfico, para defender el statu quo y las inmensas riquezas de los pocos propietarios. Lo cual iría y sigue agravando la frágil situación socioeconómica de las mayorías. Esta eterna guerra ha dejado un saldo de más de un millón de muertos y varios millones de desplazados.

¹⁹⁹ Se trata de invertir el principio de la lucha de la guerrilla formulada por Mao Tse Tung, según el cual los insurgentes deben moverse dentro del pueblo como pez en el agua.

²⁰⁰ «La prensa es también capaz de crear buena reputación que de hacer pasar al ase-sino por la victima y la victima por el asesino. Es la función de la prensa, esa prensa irresponsable. Si vosotros no estáis prevenidos, los periódicos os llevarán a odiar los oprimidos y a amar los opresores». Malcolm X, diciembre 1964.

imprescindible. Para las tres ramas militares: ejército, aviación y armada, para la policía nacional y servicios secretos, les pertenece toda la responsabilidad histórica del sufrimiento, terror y muerte de los ciudadanos de la nación, por cuanto han dirigido sus armas y sus profesionalizadas maniobras de represión contra el pueblo y en beneficio de los intereses foráneos y de una elitista minoría mafiosa, corrupta, racista y excluyente.

Con la toma del poder del Capo de la mafia Álvaro Uribe Vélez, la situación en el país iría a empeorar y las fuerzas armadas tendrían las manos libres para actuar a conveniencia propia, en una guerra de clases, convirtiéndose en un poder absoluto, un verdadero estado dentro del Estado, en el cual la soldadesca obedece ciegamente las ordenes y la oficialidad mantiene su status y reafirma su incontestable e ilimitado poder, para su beneficio propio. Ya no es solamente la ínfima y corrupta clase política y empresarial que se aprovecha de los bienes de la nación —incluidos los ilícitos—, la mafiosa oficialidad se apoderó de su parte 'inalienable', de esa enorme torta, en medio de ese conflicto, armado, que tanto encumbrados civiles, como los mandos uniformados no quieren reconocer por pura conveniencia, pues las enormes ganancias que deja la cruenta guerra colombiana con los chanchullos en la compraventa de armamento y las drogas, representa para el generalato más de cincuenta años de “honroso y digno trabajo”. En su loca carrera de enriquecimiento y muerte, el narcoparamilitarismo aprovecharía y compartiría los bienes hurtados a la población campesina mediante el chantaje, la amenaza y muerte, con la mayoría de esa oficialidad dispuesta a cubrirlos en todo momento; de este botín compuesto de productivas tierras, cabezas de ganado, bienes raíces y dinero, mucho dinero en dólares, producto del tráfico de cocaína, una parte le ha sido destinada. La directa participación, complicidad y silencio, de estos militaruchos, en las innumerables masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y desplazamiento de cientos de miles de familias campesinas, tiene un buen precio, por eso la orgía continua.

Uribe no se limitaría solamente en rendirle homenaje de desagravio a unos de los militares más sanguinarios del país, el general Rito Alejo del Río, cuando este fue retirado del ejército por las numerosas acusaciones en su contra por la violación de los derechos humanos; también iría a nombrarlo en su calidad de presidente de la República, como asesor militar; mientras que otros altos oficiales comprometidos en horribles masacres y complicidad con el narcoparamilitarismo como el general Martín Orlando Carreño, Iván Ramírez, Mario Montoya Uribe, —su mano derecha— su amigo y colaborador en la época que el Capo-presidente se desempeñó como gobernador de Antioquia, el general Alfonso Mansalva, —uno de los fundadores del grupo criminal 'La Triple A', en compañía del general Faruk Yanine Díaz, apodado 'el turco', y el general Mario Montoya— los nombraría en puestos estratégicos en el poder castrense y estatal.

A la cabeza de la policía nacional, Uribe nombraría al narcotraficante general Jorge Daniel Castro Castro y en la dirección de inteligencia antidrogas al también cómplice del narcotráfico el general Oscar Naranjo Trujillo²⁰¹. Para garantizar tranquilidad en el país, Uribe nombraría como embajador en Austria al ex director de inteligencia antidrogas y socio de los narcoparamilitares, el general Rosso José Serrano, quien en compañía del general y ex director de la policía Luis Ernesto Gilbert, en las administraciones presidenciales de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, lavarían activos del narcotráfico²⁰². El hoy

²⁰¹ El hermano del general Naranjo, fue capturado en la ciudad de Colonia Alemania por tráfico de cocaína. Juan David Naranjo Trujillo fue detenido el 27 de abril del 2006 con 37 kilos de cocaína junto a tres italianos y un español, después de una investigación de varios meses hecha por la policía alemana. Juan David Naranjo fingía como el número dos de la organización mafiosa y supuestamente estudiaba en España.

²⁰² El periodista y escritor colombiano Manuel Vicente Peña, hizo una larga investigación (1994-2001) en la cual incluye documentos públicos, conversaciones transcritas y fotos para su libro «El General Serrucho» en donde revela también los nexos del gobierno Samper y Pastrana con el narcotráfico. En particular señala la corrupción de la policía antinarcóticos involucrando a sus más altos oficiales en asociación con el narcotráfico. Serrano y sus compinches cometieron toda clase de abusos, utilizando el crédito público para la construcción de inmuebles privados, viajaron injustificadamente por Europa y montaron negocios familiares a los cuales se adjudicaron contratos multimillonarios relacionados con la policía. También el

embajador de Austria, general Rosso Jose Serrano, siendo director de la policía, intercedió por la liberación de los que se convertirían en abominables criminales Salvatore Mancuso Gómez, —el del pasaporte europeo— y Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40', a principios de mayo de 1977, los dos narcoparamilitares acompañados de seis hombres más, asesinarían a sangre fría a Celin Suarit Núñez y su compañera Elisabeth Araujo Vega, quienes habían presuntamente invadido una pequeña parcela en Villanueva departamento de la Guajira, de propiedad de un poderoso terrateniente de la región. La policía de Villanueva alerto por radio del crimen y una unidad al mando del teniente Enrique Vásquez montó un reten en Fonseca, arrestando a los ocho hombres, los policías requisaron los dos vehículos en que se transportaban los asesinos, encontrando 6 subametralladoras Colt, 2 pistolas Beretta, una pistola Gloc, un revolver Llama, una granada y 629 cartuchos. Dicho arsenal estaba amparado por un permiso otorgado en 1995 a la Convivir Horizonte de Mancuso, legalizada por Álvaro Uribe. Los asesinos se identificaron como ganaderos; tras las reseñas de rigor, quedaron a órdenes del fiscal Rodrigo Daza Bermúdez, quien en pocas horas los dejó en libertad. Según los narcoparamilitares Mancuso y Tovar, la orden de dejarlos en libertad provino del entonces director de la policía Rosso José Serrano. El propio Mancuso aseguró que ese 'favor' del general Serrano, se debió a que era muy cercano a la organización y amigo del desaparecido narcoparamilitar Carlos Castaño. Los familiares de las víctimas alertaron al personero de Villanueva Alberto Pareja Ariza, quien comenzó a investigar los hechos, pero fue desaparecido por los mismos autores del crimen de la pareja, según informe confidencial de Julio de 1997²⁰³.

En la dirección de la Policía Nacional, Uribe, nombro al general Jorge Daniel Castro Castro, a quien le ha profesado una confianza y apoyo a toda prueba. Sin embargo, este general hace parte del cartel de la droga de la policía y esto Uribe conscientemente lo ha ignorado, a pesar de las varias denuncias que pesan sobre este policía delincuente. Una de las graves acusaciones, fueron hechas por el senador Elmer Arenas en octubre 2005, cuando anunció con firmeza «Ha llegado la hora de destapar la corrupción en la fuerza pública y de poner en evidencia a un general de la policía que está comprometido con la mafia». Según el senador Arenas, el 17 de octubre de 2005 miembros de la policía ingresaron a las bodegas del aeropuerto de El Dorado en Bogotá, varias cajas de cartón selladas, que luego dispusieron en un avión de la compañía Avianca, que horas después partiría hacia México. Dicha carga no fue sometida a los controles de inspección magnética, ni fue olfateada por los perros de la policía antinarcóticos, es decir, salió sin contar con todos los controles de rigor. Arenas manifestó que tenía conocimiento que el contenido de las cajas era de media tonelada de cocaína y de cuyo envío estaba implicado el general Jorge Daniel Castro. Según la declaración del senador Arenas, el único control que hubo ese día en El Dorado, fue el efectuado por María Cristina Mann Castro, despachadora internacional y quien se limito a llenar unas planillas y a dar su visto bueno de salida de la mercancía. Algo también inusual, fue la orden que recibió de parte de la Dirección General de la Policía, el coronel a cargo del dispositivo de seguridad y quien un día antes, fue enviado a Medellín a pasar revista al personal de los aeropuertos Olaya Herrera de esa ciudad y José María Córdoba de Rionegro. También varios de los empleados asignados a los puestos de control del aeropuerto fueron trasladados a otros sitios. En ciudad de México, poco tiempo después del arribo del avión de Avianca, agentes de ese país descubrían la media tonelada de cocaína en las cajas cuya descripción correspondía a las que la policía había cargado horas antes en el aeropuerto de Bogotá. El senador pidió una entrevista con el Presidente Uribe y le conto el delicado asunto, pero Uribe le respondió que no tenía tiempo para ocuparse de ese hecho y lo remitió a su secretario Bernardo Moreno. El secretario presidencial ordeno unas pesquisas, se le hizo seguimiento a la despachadora María Cristina Mann Castro, quien meses después sería capturada por la policía antinarcóticos en compañía de la DEA, para así demostrar cómo

periodista pena denunció en su libro el desvío de fondos destinados para la lucha contra el narcotráfico, por los policías y pone en tela de juicio a varios ídolos del penodismo nacional muy cercanos al general Serrano.

²⁰³ Prensa nacional y el Tiempo (5-11-2006)

se golpea las estructuras de una red internacional del narcotráfico²⁰⁴. La detenida Marín Castro, se abstuvo de denunciar a sus cómplices. Y el asunto no para ahí, ya que existen revelaciones sobre contactos entre los peligrosos narcotraficantes Wilber Alirio Varela alias 'Jabón' y Diego Fernando Murillo, alias 'don Berna' con miembros de la policía nacional. El senador Luis Elmer Arenas, también señaló al general del ejército y director de la escuela superior de guerra Mario Correa Zambrano, de tener vínculos con la mafia. Sin embargo y a pesar de todas estas acusaciones contra miembros de la fuerza pública, El espurio presidente Uribe, persiste en su posición de que estos oficiales son honestos y buenos servidores de la patria.

Las diferentes acusaciones bien documentadas de parte de las organizaciones de derechos humanos y ONGs nacionales e internacionales sobre un numeroso grupo de militares envueltos con el crimen organizado y culpables de crimen de lesa humanidad, no impidió que Uribe nombrara a muchos de ellos, en los puestos claves del Estado. Este hecho no puede ser considerado como un desconocimiento del presidente sobre el curriculum de sus subordinados y con mayor razón si son sus más allegados colaboradores, sean estos civiles o militares, máxime, cuando la mala reputación de los antes aludidos es conocida a vox populi. No es anodina entonces, la actuación de Uribe, su estrategia presidencial, que está enmarcada dentro del programa de la «refundación de la patria», elaborado durante varios años y concertado con los puros y duros componentes de la MAFIA nacional, en el año 2001, poco antes de la elección presidencial —en la que Álvaro Uribe Vélez, era un completo desconocido para la mayoría de la población colombiana— y las elecciones parlamentarias, de gobernadores y alcaldes. El hecho que Uribe haya convocado y participado a una gran reunión de desagravio en compañía de la elite reaccionaria empresarial de Antioquia, en favor del general Rito Alejo del Rio, después de su separación del ejército por presiones de organizaciones de derechos humanos, y que inmediatamente elegido Uribe presidente, llamara a este militar como uno de sus privilegiados consultores en el campo de la guerra, muestra a todas luces de qué lado se inclina la justicia presidencial. Del Rio es autor de crímenes, desapariciones forzadas, torturas y el desplazamiento de miles de familias campesinas. En 1985 este general, siendo teniente coronel, colaboró con los escuadrones de la muerte del Magdalena Medio, brindándoles protección y apoyo logístico, también participo desde Medellín en el desplazamiento de un cargamento de ametralladoras MP5 con destino a los escuadrones de la muerte de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá. En 1997 lanzaría la 'Operación Génesis' so pretexto de enfrentar a grupos armados fuera de la ley (guerrillas); durante cuatro días, del 24 al 27 de febrero los pobladores de las cuencas de los nos Cacarica, Salaqui y Truandó sufrieron los embates militares y paramilitares por tierra y agua de la brigada XVII y grupos armados «civiles». Pero la realidad fue otra. Nunca hubo combate. No había guerrilla. Solo hubo 4 mil afrocolombianos desplazados, 85 torturados y otros más desaparecidos, entre otras violaciones a los derechos humanos. A medida que los pobladores de la zona huían de sus tierras aterrizados para salvar sus vidas, la selva primaria fue desapareciendo, las grandes empresas madereras fueron apareciendo y con ellas los proyectos agroindustriales de banano y Palma y la carretera panamericana. Este sanguinario militar siendo comandante de la brigada 17 asentada en Careca Antioquia, participo de manera directa en la composición de los escuadrones de la muerte en Córdoba y Urabá, dirigidas en ese entonces por el sicópata cabecilla narcoparamilitar Carlos Castaño Gil. Si bien todas las denuncias contra este 'valeroso' soldado, varias veces condecorado, han sido rechazadas por el conjunto la elite política, empresarial y militar del país, las pruebas recogidas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, tras tres años de investigaciones, por su participación en la muerte y desaparición de más de 1.200 personas, entre 1996 y 1997, cuando se desempeñó como comandante de la brigada 17 de ejército, dio lugar a su detención el 21 de julio del 2001, proferida por el juez Pedro Díaz. Sin embargo, fue excarcelado el 6 de agosto del mismo año y el 9 de marzo del 2004, el entonces Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio Isaza —compro metido con la «refundación

²⁰⁴ Informe prensa nacional y diario El Tiempo 16-05-2007.

de la patria»— y gran amigo de varios cabecillas narcopamilitares y del Capo presidente Uribe, precluyó la investigación²⁰⁵.

Martin Orlando Carreño, otro de los 'elegidos' de Uribe, fue nombrado en 2003 comandante en jefe del ejército nacional. Carreño se desempeñó como comandante de la brigada XI y a finales de 1997 reemplazó a del Rio en la brigada XVII, continuando con las privilegiadas relaciones con los escuadrones de la muerte. El general Carreño impartió la orden a sus soldados de patrullar en compañía de los paramilitares; por esa época, uno de esos patrulleros era nada menos que el criminal Salvatore Mancuso y quien se reuniría después con el jefe de inteligencia del ejército Iván Ramírez, quien lo iría a relacionar con el general Alfonso Manosalva, —mano derecha del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez— y con quien se reuniría más de diez veces. Manosalva ha sido acusado en varias ocasiones como uno de los participantes de la masacre del Aro, Municipio de Ituango en Antioquia. El propio Mancuso manifestó en una de sus declaraciones que, entro a la brigada IV y planeó con el general Manosalva la masacre. La matanza ocurrió del 22 al 26 de octubre de 1997. A esa zona llegó un grupo de paramilitares con una lista en mano de 15 personas y a las cuales fueron matando una a una, en presencia de todo el pueblo²⁰⁶. Para esa época en Antioquia hubo más de 150 hechos de sangre en sus municipios, la mayoría era gente de izquierda acusada de pertenecer o auxiliar a la guerrilla, sindicalistas, líderes de izquierda, candidatos a elección popular diferentes a los dos partidos tradicionales. Solían ser asesinados a bala, o decapitados, o bajo una atroz tortura. Los paramilitares se paseaban a sus anchas por todo el departamento y con facilidades de transporte, en automóviles, camiones de carga, volquetas y motocicletas, eran los amos y señores de la movida. Infundieron el terror y las diferentes formas de eliminación, así como el asesinar en cualquier lugar del departamento fincas, parques y carreteras, hasta en los despachos públicos como fue el caso de Margarita Guzmán, secretaria de la inspección de policía de Segovia, asesinada en su propio despacho. El asesinato de cuatro campesinos en el municipio de Betulia fue horrible, después que los paramilitares acabaron con sus vidas, les echaron un químico que les desprendió la piel dejándolos irreconocibles. Pero para el gobernador de la época Álvaro Uribe y su secretario de gobierno Pedro Juan Moreno, el departamento era cada vez más seguro y tranquilo con las Convivir. Entre tanto la fuerza pública y la fiscalía se saludaban efusivamente con los paramilitares y hasta se llamaban 'primos'²⁰⁷.

El cabecilla Salvatore Mancuso, en su segunda versión libre en la fiscalía de Medellín (15-05-07), declara: «Yo soy la prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado en Colombia. Mancuso también hizo importantes revelaciones en las que puso en conocimiento la participación de oficiales del ejército desde 1960 en la conformación y sostenimiento de los escuadrones de la muerte, como el general Harold Bedoya comandante general de la segunda división en Bucaramanga en 1993; el comandante del ejército en 1973 Luis Carlos Camacho Leyva²⁰⁸; el comandante Orlando Zafra en 1985; el general Fernando Landazábal Reyes²⁰⁹ y el comandante Luis Arcesio Bohórquez en 1989. Todos implicados en asesinatos, desaparición forzosa, torturas y negocios con el narcotráfico.

²⁰⁵ CINEP. Human Rights Watch.

²⁰⁶ CINEP. Colectivo de Abogados «Jose Alvear». Amnistía Internacional.

²⁰⁷ Prensa nacional y Rcvista Semana 18-01-2007.

²⁰⁸ El general Camacho fue nombrado ministro de defensa por el presidente Julio C. Turbay Ayala, (1978-82) periodo de una feroz represión con un saldo de centenares de estudiantes asesinados, desaparecidos y encarcelados, igual suerte para los sindicalistas y miembros del partido comunista. Así como horribles masacres de población indígena y campesina en todo el país. Durante este periodo el narcotráfico echaba raíces.

²⁰⁹ Landazábal fue ministro de defensa en el gobierno de Belisario Betancur (1982-86). Fue apodado 'Lanzabalas' por su extreme carácter guerrerrista. En este gobierno se pacto los acuerdos de paz con las FARC y vio la luz un tercer partido político alternativo llamado Unión Patriótica, el cual sería suprimido con la muerte de más de 5 mil de sus miembros entre senadores, diputados, alcaldes, concejales y activistas. Dos candidatos a la presidencia de la República serian igualmente

Sin embargo, sin complejo alguno, Uribe sigue rodeándose de lo más podrido y degradante que pueda tener un país en potencial humano deformado para el crimen; fue así como igualmente dispuso de los servicios del general Mario Montoya, uno de los oficiales en quien tiene más confianza el Patrón presidente Uribe. Montoya no solo está acusado de negligencia, al no activar sus tropas contra los escuadrones de la muerte en varias masacres por estos efectuadas —Bojayá 2 de mayo de 2002—, sino igualmente se le acusa de la ejecución de personas que aparentemente servían a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Antioquia. Él, que era comandante de la IV brigada, fue exonerado por la Procuraduría General de la Nación, de toda responsabilidad en la matanza efectuada en el 2002 en la comuna 13 de Medellín, por parte de militares y policías a su mando, y con paramilitares que lo acompañaron en su labor de desalojar las milicias de las FARC allí presentes. Pero a pesar de la absolución decretada por este organismo estatal, varias ONGs nacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suboficiales y arrepentidos paramilitares lo acusan de haber ordenado disparar en forma indiscriminada contra la población, con armas poderosas como ametralladoras M60, causando decenas de muertos y heridos entre la población civil desarmada; allanamientos y capturas no reportadas, pero que quedaron registradas en los sistemas de comunicación. La operación militar llamada «Orión» y ordenada directamente por el Capo presidente Uribe, fue concebida entre el oficial del ejército y el cabecilla narcoparamilitar del 'Bloque Cacique Nutibara', 'don Berna', con la participación de King Kong y 'Federico'. Según uno de los desmovilizados que perteneció a los escuadrones de la muerte y que declare el 18 de mayo del 2004 ante la Fiscalía, la orden de las autoridades y los cabecillas del bloque, era acabar con las milicias de las FARC y los Comandos Armados del Pueblo. En su declaración, el desmovilizado dijo que ellos le sirvieron de guía al ejército, la policía y la fiscalía. « (...) Que yo me acuerde, nos colaboro mucho un teniente Rojas (...) Yo no hablé con él, pero lo veía subir a la Palomera a hablar con King Kong. Lo vi varias veces, por ahí tres o cuatro ocasiones, subía en moto o en una patrulla (...) Subía con tres o cuatro policías (...) ellos recibían plata (...) ellos detenían a un miliciano y se lo entregaban a las «AUC». (Paramilitares)²¹⁰.

Y las acusaciones contra este militar traspasaron las fronteras. El 25 de marzo de 2007 el periódico estadounidense «Los Ángeles Times» daba cuenta —sobre un informe emanado de la CIA— los nexos entre el general Montoya Uribe y los escuadrones de la muerte. El periódico relata cómo este militar en unión de paramilitares planeo y ejecuto en el 2002 el denominado «Plan Orión» en la comuna 13 de Medellín, luego de un impresionante despliegue militar, los paramilitares tomaron el control de la zona, control que aun mantienen bajo la protección del ejército oficial. En la toma de la comuna 13 participaron 2000 miembros del ejército, apoyados con tanques de guerra y helicópteros que desde el aire disparaban contra la población, además de los muertos y heridos, se presentaron más de 400 personas capturadas y las cuales fueron llevadas a un estadio. El informe de los Ángeles Times, afirma que existen documentos en donde se detalla la operación y están firmados por el general Montoya, el comandante de la policía local y el narcoparamilitar Fabio Jaramillo, alias 'Orión', subordinado del poderoso cabecilla narcoparamilitar Fernando Murillo Bejarano alias 'don Berna'²¹¹. El periódico también cuestiono duramente al presidente Álvaro Uribe a quien no rebaja de jefe paramilitar. Incómoda situación para Uribe, acostumbrado a llamar a las emisoras radiales Caracol y Radio Cadena Nacional de 7 a 9 de la mañana, o a cualquier otra hora, para imponer sus puntos de vista, su verdad, sin que tenga quien lo contradiga, o desmentir con falsos argumentos o evasivas las innumerables acusaciones de narcoparamilitar que existen en su contra; y con la complicidad de los periodistas de estas emisoras,

eliminados: el ex magistrado Jaime Pardo Leal en 1987 y Bernardo Jaramillo Ossa en 1991. Las fuerza armadas colombianas en unión de los escuadrones de la muerte, fueron los verdugos. Hasta la presente este genocidio sigue en la impunidad.

²¹⁰ Fiscalía General, prensa nacional y Revista Cambio 13-07-2007.

²¹¹ El Instituto de Capacitación de Medellín, denunció en su momento la toma de la comuna por los escuadrones de la muerte.

seguir afirmando que su lucha contra el terrorismo, mediante su política de seguridad democrática, avanza maravillosamente en beneficio de los colombianos; que desmontó el narcoparamilitarismo, con la desmovilización de 31 mil paramilitares (los cuales no sabemos donde están) y que en el país todo marcha bien. Esta vez Uribe, si tuvo que tragarse toda su ira, pues el diario Los Angeles Times, no pertenece a esa corporativa prensa colombiana sin ética, cómplice y cobarde²¹².

Ante las severas acusaciones en contra del general Mario Montoya Uribe, el Patrón presidente Uribe, salió apresuradamente ante los medios de comunicación a defender a su pupilo, argumentando, lo que siempre ha argumentado sobre 'figuras' como Jorge Noguera, María Consuelo Araujo, Jorge Daniel Castro, Juan Manuel Santos, Rito Alejo del Río, Pedro Juan Moreno y otros muchos torcidos, "que es una persona decente, un colombiano honesto al cual yo conozco", que son calumnias de los amigos del terrorismo, que todo es mentira. Extrañamente, un día después de publicada la información, el embajador de Estados Unidos en Bogotá Milton Druker, visitó a Montoya en su oficina y le ofreció una disculpa por la filtración de la noticia —tal vez por ser uno de los primeros oficiales al mando del Plan Colombia—. Igualmente el ministro de la defensa Juan Manuel Santos, le reiteró todo su respaldo y el general en su laberinto fue visitado también, por los comandantes de la armada y policía nacional²¹³ a guisa de solidaridad. Pero, para el Patrón Uribe y el (para)militar Montoya Uribe, tales hechos no deberían quedar así, deberían ser contrarrestados y el espectáculo circense de nuevo entraría en acción. Unos días después de la información aparecida en el diario estadounidense, la comuna 13 de Medellín recibiría la sorpresiva visita del 'héroe' militar. «Yo vengo a ver que están dando' dijo María del Rosario Usugua. Minutos antes del arribo del general Mario Montoya, a un colegio en el barrio Salado de Medellín... Al igual que ella algunos otros llegaron pidiendo comida... ¿Aquí es donde están dando pollo? preguntó una anciana... pocos eran los que realmente sabían de la reunión que se había anunciado la tarde anterior en los barrios de la comuna 13. Una pancarta amarilla pintada con aerosol a la entrada de un colegio decía: «Bienvenido señor general Montoya a la comuna 13». La llegada del comandante del ejército estaba programada a las 2 de la tarde. Para esa hora el auditorio del colegio ya estaba colmado, en su mayoría por personas de la tercera edad, que habían sido convocadas y transportadas por el ejército en camionetas. Incluso desde el medio día llegaron buses, transportando pobladores desde y hacia la comuna... El fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio Betania, Jorge Vargas, manifestó que miembros del ejército lo habían contactado para que les ayudara a llevar gente al colegio para la visita del general Montoya. Cuando él les manifestó que no tenía como trasladarlos, ellos le dijeron que no se preocupara por eso, que el ejército lo proporcionaba. Más de 300 personas ayudaron a llenar el gran auditorio. El 'héroe' arribo a las 2 y 50 de la tarde. De inmediato fue abordado por una nube de periodistas que lo inundaron de preguntas, pero a las que el solo atinó a decir, que estaba muy contento de ver como sonreían los niños en un lugar en donde antes solo había caras de terror. Se refería el sanguinario militar, a los niños del colegio la Independencia, que desde las horas de la mañana estaban siendo pintados en las caras con corazones y mariposas por soldados porque, según los niños, alguien importante iba venir... En los pocos minutos que estuvo en el recinto, el general Montoya, no tocó el tema sobre la «Operación Orión», dio vivas al ejército y a la comuna, recordando al general Leonardo Gallego, ex comandante de la policía metropolitana de Medellín, para quien pidió aplausos. El general Gallego (socio de los narcoparamilitares), fue retirado de la policía en el 2003 por robo y mal uso de dineros reservados para informantes y operaciones encubiertas. Cuando este militar, cofundador del grupo criminal «La Triple A», salió del recinto, una ola de niños se le acercó a pedirle un autógrafo, pero ante la negativa del general, muchos se consolaron con tocarlo. Después los infantes preguntarían a los adulto: ¿...y, quien era ese señor...?»²¹⁴.

²¹² Es indispensable hacer la diferencia entre esa poderosa y conservadora prensa empresarial, ligada con las viejas prácticas bipartidistas y la prensa alternativa que ha recibido los ataques mortíferos del Estado mafioso, con un saldo de varias decenas de periodistas sacrificados y otros obligados al exilio.

²¹³ Argenpress. Miguel Suarez, periodista

²¹⁴ Cadenas de televisión y Revista Semana 23-03-2007.

Las cadenas de radio y televisión, registraron el gran suceso del general Montoya en su visita a la comuna 13 de Medellín. Por su parte, Uribe complacido diría y repetiría que ese era un pueblo agradecido con su ejército y con su gobierno, un país democrático que lucha contra el terrorismo.

La IMPUNIDAD sobre los crímenes cometidos por la gran mayoría de los miembros de las fuerzas armadas se pasea a lo largo y ancho del país; pero, y a pesar de esa maldición a la colombiana, el criminal general Mario Montoya Uribe, posee 15 denuncias por violación a los derechos humanos, radicadas en la Procuraduría General de la Nación, la esperanza sigue viva, aunque no será en el mandato del espurio presidente Uribe que se hará justicia. En un último recurso, será a la Corte Penal Internacional de impartirla.

La nominación por parte del Capo presidente Uribe, del ex coronel Alfonso Plazas Vega en la dirección de estupefacientes, no sorprendió a casi nadie, excepto a los familiares de los desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia en 1985 por el grupo guerrillero M19 y la retoma a sangre y fuego horas más tarde por parte del ejército colombiano en pleno centro de Bogotá. Durante más de veinte años, los horribles sucesos de ese 6 y 7 de noviembre en los cuales perdieron la vida 43 civiles; 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, 33 subversivos, once desaparecidos y dos estudiantes torturados, han vivido en la más completa impunidad. Los 35 integrantes del grupo guerrillero al mando de Almarales, pretendían hacerle un juicio político al presidente de la época Belisario Betancur Cuartas, por su incumplimiento en los acuerdos de Paz. Rápidamente los militares tomaron el mando de la situación impidiendo toda negociación entre gobierno y subversivos. Los repetidos llamados a la cordura y al cese al fuego hechos por el presidente de la Corte Suprema Alfonso Reyes Echandía, fueron saboteados por los militares y la ministra de comunicaciones de la época y hoy embajadora en España del gobierno MAFIOSO de Uribe, Nohemí Sanín Posada²¹⁵, dio la orden de parar la retransmisión por televisión, de la sangrienta retoma del Palacio de Justicia por el ejército, emitiendo en su lugar un partido de fútbol; también se dio la orden de silenciar los diferentes radios, para acallar el clamor del presidente de la Corte Suprema, quien suplicaba al presidente de la República, un cese al fuego inmediato por parte del ejército. La masacre fue sin piedad. Y los sobre vivientes que salieron del Palacio de Justicia, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes, fueron llevados a la Casa del Florero —situado en una de las esquinas de la céntrica Plaza de Bolívar y a 50 metros del Palacio de Justicia— con la perentoria orden dada por el comandante del ejército y socio de narcotraficantes Rafael Samudio Molina y el cofundador del grupo criminal 'La Triple A' coronel Alfonso Plazas Vega, de ser torturadas hasta obtenerse información. Si no resistían la tortura, el problema estaba resuelto, habían preparado unas canecas que contenían ácido para desaparecer los cuerpos y no dejar rastro alguno. Además de esta horrible masacre, preparada de antemano por los militares, en la sangrienta retoma, el ejército también incendió los archivos del Palacio, en los cuales se encontraban numerosos expedientes de importantes narcotraficantes, incluido el del tristemente célebre Pablo Escobar Gaviria, número 79 en la lista de narcotraficantes, amigo y socio de un tal Álvaro Uribe Vélez, número 82 en la lista de los más importantes narcotraficantes, y primo hermano del actual asesor presidencial José Obdulio Gaviria Escobar, cerebro de las conspiraciones presidenciales. Según las confesiones de un ex policía y delator del ejército en la época de estos terribles sucesos y hoy refugiado en Canadá, el coronel Plazas quien era comandante de la escuela de caballería y otros altos oficiales — los generales Arias Cabrales y Rafael Samudio— habrían dado la orden de incendiar los archivos del Palacio de Justicia. En el informe redactado por este militar, sugiere a sus superiores que se mantenga la tesis de que los guerrilleros del M-19 incendiaron los archivos del Palacio de Justicia, para favorecer a los narcotraficantes y en especial a Pablo Escobar. El ex coronel Alfonso Plazas, después de ser retirado de la institución militar, creó una empresa de vigilancia privada, —algo así como las Convivir de

²¹⁵ Siendo candidata a la presidencia de la república en el 2002, Noemí Sanín declararía a la prensa nacional «Si Álvaro Uribe gana la presidencia de la república, es como si ganara Carlos Castaño».

Uribe— bien es sabido que la mayoría de estas empresas sirven para proteger 'personalidades' del narcotráfico, para-militarismo y empresas conectadas con el crimen organizado. Tal vez no haya existido mejores referencias de un ex militar del ejército, como las presentadas por Alfonso Plazas, para que el Capo presidente Uribe, lo haya puesto al frente de la dirección nacional de estupefacientes.

El general Carlos Alberto Ospina Ovalle, ha sido uno de los militares más aplicados de la institución militar colombiana, no solo por sus labores al interior del país, sino también, por sus importantes y generosas enseñanzas en el exterior. Por tal razón, el Capo presidente Álvaro Uribe Vélez, lo nombraría jefe de las fuerzas armadas en noviembre del 2003; —y ministro encargado de la defensa— a pesar de las acusaciones de organizaciones de derechos humanos que lo sindicaban de haber colaborado con el narcoparamilitarismo²¹⁶. El general Ospina Ovalle se desempeñaría como agregado militar en Santiago de Chile a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Y tal vez por ser un buen soldado, — de la patria fascista latinoamericana— el dictador Augusto Pinochet, lo condecoraría en 1990 con la medalla 'Diosa Minerva', una de las más altas distinciones que otorga la milicia chilena. No se sabe a ciencia cierta, cual haya sido la valerosa actuación del militar colombiano, para haber merecido tan 'honrosa' atención por parte de este sanguinario dictador. Tan solo podemos atar cabos, y preguntarnos si su presencia tiene algo que ver con la elaboración y tráfico de cocaína que había puesto en marcha el dictador en uno de sus complejos químicos ubicado en la región de Talagante, a unos 40 kilómetros al suroeste de Santiago y dirigido en la época, por el coronel y químico Eugenio Berrios, quien también pertenecía a la temida DINA (policía secreta de Pinochet) y dirigida por el siniestro general Manuel Contreras. Berrios sería asesinado en Uruguay en 1991, cuando fue llevado clandestinamente para que no declarara sobre el homicidio del ex canciller Orlando Letelier, asesinado, según versiones, por orden de Pinochet y Contreras. En ese jugoso negocio de narcotráfico también participaron Marco Antonio Pinochet, hijo menor del dictador, y el empresario Edgar Bathich. Uno de los encargados de comercializar y distribuir la cocaína hacia los Estados Unidos y otros países era el sirio Monser Al Kassar y quien se encargaba también, de depositar las inmensas ganancias en los diferentes bancos internacionales, que poseía el dictador Pinochet. La fortuna del dictador y su familia producto del narcotráfico se estima en más de 26 millones de dólares.

Años después, en 1996 Ospina fungiría como comandante de la IV Brigada del ejército en Medellín, trabajando mancomunadamente con el gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. Para esta época y desde hacía más de un año, los grupos armados civiles (Convivir) hacían de las suyas y los asesinatos contra campesinos se sucedían en la más completa impunidad. De igual manera los principales dirigentes del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, habían sido asesinados entre ellos el médico Héctor Abad Gómez, cofundador del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia en 1979, cobardemente asesinado el 25 de agosto de 1987.

Para 1996 el presidente del Comité era el doctor Jesús María Valle Jaramillo, nacido en Ituango en 1944, lugar justamente donde se produjeron dos masacres perpetradas por los escuadrones de la muerte (Convivir) con plena participación del ejército. Las pruebas sobaban, sobre la participación del ejército en las escabrosas masacres de los campesinos, los cuales muchos de ellos habían sido sus vecinos y amigos, razón más que justificada, para que el doctor Valle Jaramillo denunciara a viva voz y a todo el que le quisiera escuchar, la impunidad que se cernía sobre estas abominables masacres del Aro y la Granja. El 11 de julio de 1996 el doctor Valle concedió una entrevista a varios periódicos de Medellín:

«Desde el año pasado le pedí al gobernador Álvaro Uribe (...) y al comandante de la IV brigada Carlos Alberto Ospina Ovalle (...) que protegiera la población civil de mi pueblo, porque de septiembre a hoy han muerto más de 150 personas...»

²¹⁶ Human Right Watch

Días después, Álvaro Uribe lo acusó de ser «enemigo de las fuerzas armadas» y también fue denunciado ante los tribunales por calumnia. Pero el defensor de los derechos humanos de Antioquia, no se dejaba amilanar, su rectitud y humanismo no le permitían rendirse ante el infame acoso de los escuadrones de la muerte y sobre todo de servidores públicos cómplices en la ignominiosa, cobarde y ruin gestión de muerte.

Meses antes de ser asesinado, el doctor Valle Jaramillo había elaborado un informe sobre los derechos humanos en Antioquia, tres de sus puntos se referían: 1°) a las fuerzas oscuras que habían reemplazado a las autoridades locales. 2°) que las Convivir, los paramilitares y la autodefensas (AUC) eran la misma cosa, y 3° que las fuerzas oscuras en asocio del ejército habían cometido las masacres y los crímenes en el departamento. En la misma semana de su muerte rindió versión libre en el proceso de injuria y calumnia que en su contra habían entablado miembros del ejército por sus denuncias sobre la colaboración de las fuerzas armadas y más precisamente del ejército, la cuarta brigada con los escuadrones de la muerte, en las masacres de la Granja y el Aro, ratificándose en sus denuncias:

«Se percibe esa connivencia entre comandantes de la policía y el ejército con aquellos agentes armados que cometen una serie de asesinatos en el perímetro urbano de nuestros municipios...»

El máximo dirigente y defensor de los derechos humanos de Antioquia, fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina, en pleno centro de Medellín. Los asesinos subieron y bajaron los cuatro pisos del edificio Colón, con la mayor tranquilidad. Ese desafortunado día cuando vio entrar a los dos criminales en su oficina, le dijo a su hermana, quien era su más cercana colaboradora: «Tranquila Nelly que ya nada podemos hacer. Deje que las cosas pasen». Jesús María Valle Jaramillo, siempre había dicho que prefería morir con dignidad, que arrodillado frente a quienes habían convertido a Colombia, en un país paria para los derechos humanos en el mundo²¹⁷.

Para el Capo presidente Uribe, no existe ninguna incidencia negativa para el país, los anómalos hechos arriba anotados; ni comporta hecho culposo el comportamiento de los oficiales anteriormente descritos, pues el nombramiento en puestos claves del Estado y el total respaldo que el mismo ha hecho público a estos oscuros militares, en sus dos mandatos presidenciales, denota su real moral y su fibra política mafiosa, bordeada de sólidos ribetes de fascismo. Es más, su frialdad y cinismo para voltear estas pruebas de terrorismo de Estado a su favor, culpando a las víctimas y llamando terroristas a organizaciones humanitarias²¹⁸ que buscan la verdad y denuncian el crimen organizado, al cual han pertenecido funcionarios civiles y militares, no dejan de despistar a propios y extraños, convencidos de que la verdad esta de lado del que más fuerte hable y más propaganda haga, con la complicidad de la poderosa prensa colombiana que no ha hecho sino ayudarlo a cimentar su política mafiosa y de terror, confundiendo cada vez más a la gran masa sumisa. Siendo esta, una postura fraguada y delimitada en el tiempo, ya que dos de sus más importantes y cercanos colaboradores, son propietarios del primero y único periódico de circulación nacional 'El Tiempo' y sus derivados informativos, que solo se han preocupado en mantener ese podrido statu quo que predomina en esta sui generis democracia colombiana, desde hace más de un siglo. Los periodistas — ¿Con incontestable talento o simples herederos de papi? — Francisco Santos y Juan Manuel Santos, son hoy en día, dos estrellas apagadas de ese mafioso gobierno uribista, que solo brillan por su estupidez y oportunismo, y valga la aclaración, defectos que no se aprenden en ninguna escuela, ni necesita de talento. Pachito —mejor “fachito”, como cariñosamente le llaman los que le conocen sus torcidas ideas— es el vicepresidente de Colombia. Su principal merito para que haya sido vice y repetido vicepresidencia al lado del Capo presidente, fue un simple ruego. Por su parte Uribe, sabiendo lo torpe y farfullento que es “fachito”, lo escogió como

²¹⁷ Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia. Fiscalía Regional de Antioquia. Comité Interamericano de Derechos Humanos.

²¹⁸ <http://video.google.es/videoplay?dosid=5196508963203948098>. 'Las ONGs defienden a los terroristas cobardes'. Álvaro Uribe (2003).

formula vicepresidencial estando seguro que no le iría a pelear la máxima magistratura en su primera reelección y posible segunda reelección, como así lo han manifestado varios narcoparapolíticos, y como es el deseo de los cabecillas narco-paramilitares para lograr alzarse con una plena impunidad, sobre sus atroces crímenes. Como periodista "fachito" fue la... ca tas.tro.fe! Lo mejor que hacía en su oficina, era desnudarse sus piecitos, ponerlos encima del escritorio y en la soledad de su estupidez ponerse a jugar con su ordenador. Pero su sosa vida iría a dar un vuelco extraordinario. Cuando fué secuestrado por Pablo Escobar, y ahí fue cuando el pueblo colombiano tuvo la esperanza que 'fachito' Santos, podría llegar por fin a ser un brillante periodista, al menos contando que fue lo que vivió en las garras de ese apátrida narcotraficante. La desilusión fue total. 'Fachito' se convirtió de la noche a la mañana en político! Tal vez —no es seguro— la decisión la tomó en un traqueto-cooffe en Ámsterdam, por allá en el año 1997, un año después de haber sido liberado, fumándose un enorme 'cacho' de marihuana — joint—, junto a su esposa María Victoria, quien en medio de la alucinante visita al mundo de las maravillas, se quejaba de que todo el mundo se compadeció del sufrimiento de su 'fachito' y nadie se había compadecido del de ella, esto lo contaron a la periodista Petra Koning de la revista VRIJ Nederland. Victoria es una mujer injusta, pues el gobierno en el que participa su marido, bombardea con veneno y misiles a pobres campesinos que ni siquiera saben armar un 'cachito' de marihuana. En su inmensa estupidez y humor destemplado, Francisco Santos se convertiría en el primer vicepresidente de un gobierno enteramente mafioso, haciendo honor a su virtuoso talento de hipócrita. Ocurre que el hoy vicepresidente Santos, se reunió en varias ocasiones con los narcoparamilitares en 1976 y 1977 en la vereda el Volador de Tierra Alta, Córdoba, especialmente con el criminal Carlos Castaño Gil, con el firme propósito de lograr un acercamiento irreversible en sus aspiraciones políticas, llegando al colmo de proponer la creación de un comando paramilitar en la ciudad capital, Bogotá, para defender los enormes intereses económicos de la minúscula elite bogotana, lo cual interesó al cabecilla narcoparamilitar quien encomendó a su segundo, Salvatore Mancuso, de viajar a Bogotá para reunirse con Santos y otros periodistas²¹⁹. El Bloque Capital que propuso Francisco Santos, entró en funcionamiento en Bogotá de una manera casi desordenada, pero a medida que pasó el tiempo se fue enraizando en los principales sectores comerciales de la ciudad. El narcotráfico se apoderó poco a poco de grandes y lujosos centros comerciales y el narcoparamilitarismo lo hizo a su turno en grandes centros de mercadeo y comercios populares como Corabastos y los San Andresitos. En estos dos centros el narcoparamilitarismo ha logrado lavar grandes sumas de dinero del narcotráfico y a punta de amenazas, asesinatos y chantajes ha logrado apoderarse de la mayoría de comercios que antes pertenecían a legales comerciantes. De igual manera las bodegas de estos centros, han sido destinados para el almacenamiento de gran cantidad de poderoso armamento, que utilizarían los escuadrones de la muerte en el momento llegado, no solo para defender sus mezquinos intereses, sino también para arremeter contra un gobierno diferente al de su patrón Álvaro Uribe Vélez, y que pusiese en peligro su statu quo; todo con el mayor apoyo de las fuerzas armadas, que mediante la corrupción y su complicidad cierran los ojos ante tal antidemocrática y peligrosa trama. El narcoparamilitarismo, igualmente ha logrado apoderarse de casas de cambio en la capital de la república, por medio de las cuales controlan un flujo enorme de dólares producto del narcotráfico, el cual lavan en estas entidades seudofinancieras.

**COMUNICADO A TODOS LOS ARRODILLADOS SERVILES CAMUFLADOS DE CIVIL²²⁰
COLOMBIA LIBRE DE COMUNISTAS BRAZO POLITICO ARMADO DE LAS EX AUC
FRENTE CAPITAL CENTRAL SUR CARIBE LLAÑOS NORORIENTE NUEVA GENERACION
AGUILAS NEGRAS**

Nos identificamos con la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez, estamos con él hasta la victoria final sobre los comunistas disfrazados y los camuflados de civil que siguen sirviendo a la insurgencia de las PARC estamos a un paso de conseguir el mayor sueño de nuestro presidente que es

²¹⁹ Declaración libre ante la fiscalía del cabecilla narcoparamilitar Salvatore Mancuso.

²²⁰ Este panfleto fué distribuido en varias regiones del país. El agresivo lenguaje Utilizado en este panfleto es el mismo utilizado por Uribe, para desacreditar al movimiento civil y pacifico que le es hostil.

la consolidación del estado comunitario y la nueva división politicoadministrativa de Colombia ese es el mejor acuerdo que hemos podido realizar desde los encuentros de ralito, hasta el momento hemos liberado una campaña de limpieza de toda esa escoria social que dicen llamarse defensores de los derechos humanos, líderes sociales, sindicalistas, ex guerrilleros politizados, y claro encabezados por un grupo insignificante de abogaduchos de pacotilla que dicen van a llevar al presidente a juicio por su pasado, como si ya no supiéramos también ese puerco pasado que estos todos en conjunto ocupan.

Libraremos desde este momento una guerra frontal a sangre y fuego contra todos esos que se esconden tras sus guaridas de fachada. ongs, diarios rebeldes oficinitas, casas de "protección" de falsos demócratas, iremos a sus casas, edificios, oficinas, universidades, les vamos a sacar públicamente ante los medios para que el país vea la clasecita de gentuza que les espera si cambian el rumbo de la política de seguridad.

Vamos a aplicar desde este momento la pena de muerte a los traidores a la patria, aquellos que la pasan pidiendo asilo por que se cagan de miedo en su país sinvergüenzas hijueputas que le dan la espalda a su gente, que se roban los dineros que de otros países llegan a esas ongs para servir a la comunidad, fundaciones camufladas de benefactores que no son otra cosa más que ladrones del futuro de nuestra patria.

Por eso es nuestra razón de esta nueva cruzada que haremos de la mano con el ejército nacional y las fuerzas armadas de Colombia, limpiaremos lo que queda de mierda en la casa.

Nuestro objetivo militar inmediato es la ejecución de los comunistas disfrazados que se esconden en el polo democrático, ongs que "protegen" arrodillados serviles a las FARC, y esos nuevos movimientos revoltosos bolivarianos que han empezado a trascender nuestra soberanía y traicionan al gobierno elegido democráticamente en Colombia. NO MÁS CON USTEDES PA-RRANDA DE HIJUESPUTAS.

La única salida digna que tienen es el DESTIERRO, no permitiremos que continúen con sus acciones de supuesta democracia cuando ya bien sabemos que lo que esconden es la ultima estrategia que les queda a las FARC para tomarse el poder... claro con la ayuda del los petrodólares de Chávez y su ideología comunista de la mierda, NO PODRAN.

El pueblo norteamericano en cabeza de su gobierno actual saben muy bien que Ustedes no seran el futuro de nuestra patria, contamos con el apoyo militar y tecnico que nos garantizara una victoria contundente sobre los insurgentes y sus serviles arrodillados.

Deben saber todos ustedes que tras de cada uno de aquellos que dicen ser defensores del derecho humano, líderes sociales y abogaduchos de pacotilla, periodistas camuflados, y todo ex guerrillero que se crea intocable, tras de cada uno habra un comando de los nuestros siguiendo día y noche sus acciones, sus nexos con las FARC, el ELN, y cualquier otro grupito que aparezca.

Los desnudaremos ante el país y el mundo, mostrando la falsedad que esconden tras de esas "inocentes" caritas.

Les juzgaremos conforme a las acciones masacrándoles en plazas públicas para que el pueblo conozca la justicia social que se merecen los traidores a la patria.

Acabaremos con Ustedes por medio de sus familias, sus hijos y seres queridos darán su vida por culpa de sus actos sucios, cobardes que no dan la cara y por eso sus famitas pagaran caro su error.

En cuanto a los abogaduchos esos del colectivo y otra ongs y los ex guerrilleros del polo que dicen que van a juzgar al presidente, les advertimos que tales atrevimientos les costaran sangre.

*Ya verán lo que les espera hijueputas sin oficio.
Martes 13 de Febrero... Un amarillo está en la mira!!!!!!!
Sera que se atreve a sesionar y enjuiciar al presidente,
Usted ya tiene su tiempo listo!*

*MUERTE A LOS CAMUFLADOS DE CIVIL
ARRODILLADOS A LAS FARC
MUERTE A LÍDERES FALSOS DEFENSORES Y PACOTILLAS
FUERA DE COLOMBIA LOS COMUNISTAS DISFRAZADOS
SANGRE Y FUEGO PARA LIMPIAR A COLOMBIA
COLOMBIA LIBRE POR SIEMPRE!!!!!!!!!!!!*

El vicepresidente Santos, además de haberse especializado en ser el portador y suministrador de 'cortinas de humo' para sacar de apuros al Capo presidente y su gobierno, no se inmuta siquiera cuando de hablar y hacer campanas sobre un planeta sin droga. En uno de sus estrafalarios paseos por toda Europa, llevo en sus maletas una campana contra las drogas y hasta se atrevió a regañar y a vociferar en contra de estrellas del modelaje y la farándula, como la supermodelo inglesa Kate Moss, por su consumo de cocaína, según la cual, esas fueron sus propias palabras, ayuda a sostener los terroristas y violentos en Colombia. Al parecer olvido el vice, sus fumadas alucinantes de años atrás, cuando la violencia se imponía en el país de la mano de otros inescrupulosos políticos como él. El cinismo y la hipocresía de este espécimen politiquero y la doble moral de este gobierno salido de las entrañas del narcotráfico e impulsor de los más grandes y sanguinarios criminales, que desafortunadamente, vomita esa hermosa y productiva tierra Colombiana, es infinito. Sin roborarse, el vicepresidente del gobierno mafioso, gesticulaba en los lujosos salones europeos su repugnancia contra los consumidores de drogas, que repletos de inconsciencia patrocinan el terrorismo en esa Colombia democrática con ese responsable y justo gobierno, del cual él hace parte. Las elites europeas y su poderosa prensa lo aplaudieron —snifando muchos de ellos ese mortífero pero delicioso polvo blanco. Yo que Jamás he fumado ni consumido, ni snifado alucinógenos, pregonó la legalización controlada de las drogas. ¿Para qué seguir con tanta hipocresía?

Mientras tanto, ingenuos colombianos y colombianas se siguen preguntando el por qué, ese torpe y circense vicepresidente de Colombia, se inventó la proposición de celebrar un reinado universal de la belleza o candidatizar el país como sede mundial de futbol, en plena crisis política, en momentos en que altos funcionarios del gobierno y congresistas uribistas, están siendo encarcelados acusados de pertenecer a la narcopapolítica. Pero lo más deprimente y ridículo a la vez, es escuchar al vicepresidente con esa voz chillona a guisa de suplica, hacer llamados al narcocriminal Vicente Castaño Gil, alias 'el profe', culpable de horribles masacres, para que se entregue a la justicia lo más pronto posible.

El caso de Juan Manuel Santos, el otro dueño del diario 'El Tiempo', sus inclinaciones son otras, pero su vida privada no nos importa; lo que si debe importar son sus inclinaciones políticas que sobrepasan los límites de la extrema derecha. Soñador incansable de la presidencia de la república, escribía sus artículos siempre con la mirada puesta en la Casa de Nariño. Lo cual lo llevo a codearse con toda clase de políticos, empresarios, ganaderos y seudoempresarios, seudoganaderos, narcopolíticos, y —en esto si obró como su primo—; reuniéndose con sanguinarios narcoparamilitares. Tal vez porque, el desgraciado destino de un futuro presidente de la república de Colombia, sea el de embolsillarse al poderoso crimen organizado, para no perder la esperanza de llegar a la máxima magistratura. Para este país, en el que la mafia todo lo controla, esto es vergonzosamente natural. Y esto lo comprendió Juan Manuel, haciéndose nombrar varias veces ministro y en sus tiempos libres como ideólogo de la extrema derecha, se perfiló como un excelente francotirador, disparándole a todo lo que oliera a social y convirtiéndose en el verdugo del gobierno venezolano del presidente Chávez, hasta el punto de fingir

como uno de los cerebros del grupúsculo narcoparamilitar, que preparó y llevó a tierras del vecino país más de un centenar de sicarios con el fin de crear el caos y la muerte y asesinar al presidente de esa hermana nación Hugo Chávez Frías, a quien veía debajo de la tierra hasta en sus más “nobles sueños”. La sucia maniobra no funcionó, pero Juan Manuel, fue tranquilizado por el Capo presidente Uribe, que le prometió que lo tendría en cuenta en su segundo mandato, programado y ganado de antemano. Para tal efecto, no tendría si no que fundar un narco partido llamado «La U», como U de Uribe y dejar que el agua corriera debajo del puente. Así como en el 2002, 'La U' haría parte de esa muchedumbre de pequeños partidos narcoparaauribistas que llevarían a su líder, a su patrón, a su Capo eterno de nuevo a la presidencia de la república. Una hazaña! pues Uribe se convertiría en el primer presidente reelecto, en más de un siglo de saludable prohibición.

Juan Manuel Santos, es un hombre que detesta quedar rezagado, el adora los retos y se enorgullece mostrar y el poder comparar sus odiseas con las efectuadas por los demás. Pues, si generales y coroneles de la policía y el ejército liberan criminales narcoparamilitares y les proporcionan camino libre para que hagan sus horribles masacres, si políticos ordenan el asesinato de incómodos y sanos competidores, si gobernadores, alcaldes y otros funcionarios negocian el fisco con; los narcocriminales y se reparten el dinero público impunemente, si magistrados, jueces y fiscales extravían o engavetan expedientes de peligrosos mafiosos o los dejan libres mediante ilegales maniobras, si su patrón Uribe, había creado las famosas Convivir, y había asesinado a ocho supuestos guerrilleros, como el mismo lo afirmó; si desde fincas de su propiedad se torturaban, desaparecían y masacraban campesinos acusados de colaboradores de la subversión y si sus más cercanos familiares —su hermano, sus dos tíos y dos primos— se habían armado para defenderse de los «malhechores comunistas» creando los escuadrones de la muerte 'Los Doce Apóstoles' y 'Los Erres' con sacerdote a bordo; entonces, ¿cómo él, Juan Manuel Santos, no iba a presentar en su Curriculum Vitae, una odisea que le hiciera creíble ante los ojos del ghetto mafioso y ahora dueños del país? Pues él lo sabía muy bien, la mafia no se contenta con palabras, son los hechos los que cuentan y entre más sangrientos, mucho mejor.

Ocurrió que el impecable doctor Santos, intercedió por la liberación del criminal narcotraficante Víctor Carranza²²¹. El 25 de febrero de 1999, la Fiscalía General capturó a este temido y reconocido esmeraldero por varios delitos y crímenes entre los cuales aparecía, el de concierto para delinquir y conformación de escuadrones de la muerte. En la misma noche de la captura del narcoparamilitar Carranza, Santos llamo por teléfono al apartamento del Fiscal General, de ese entonces, Alfonso Gómez Méndez, por ser más de la media noche el fiscal alarmado contestó personalmente. Santos le exigió al fiscal Gómez, que dejara en libertad a su mafioso amigo Víctor Carranza.

En un informe del Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular) titulado «El Imperio Paramilitar de Víctor Carranza» podemos leer:

«Los llanos orientales de Colombia, región golpeada por casi todas las formas históricas de violencia, fue incubando el paramilitarismo desde comienzos de los años 80, primero con núcleos del MAS para convertirse poco a poco en un imperio paramilitar articulado y potenciado por el narcotráfico, uno de cuyos principales gestores ha sido el esmeraldero y narcotraficante Víctor Carranza (...) De acuerdo con los elementos recaudados por el juzgado 17 de Instrucción Criminal de Villavicencio, la investigación preliminar abierta el 12 de noviembre de 1982, se puede llegar a la conclusión de que la brigada 7, y especialmente su grupo de caballería Guías del Casanare(...) montaron su propia estructura paramilitar bajo la sigla del MAS en 1982. En ese momento actuaba como comandante el teniente coronel Luis Alfonso Plazas Vega (...) La alianza entre el ejército y los narcotraficantes quedaba, pues, consolidada, y uno de sus objetivos fundamentales era la contrainsurgencia, para lo cual implementarían las estructuras paramilitares.(...) En su confesión el médico Diego Viafara Salmas, dirigente de la estructura paramilitar de Puerto Boyacá, revelo los estrechos vínculos de Víctor Carranza con los líderes nacionales del

²²¹ Artículo del periodista Felipe Zuleta, Blog (26-5-2007)

paramilitarismo y el envío que hizo de paramilitares para ser entrenados en la hacienda 'El Cincuenta' de Puerto Boyacá (diciembre/87 a marzo/88) por mercenarios israelíes e ingleses.

Ya para la Década del Genocidio (1985-1996) en que se extermina la militancia de la Unión Patriótica y a otras muchas organizaciones cívicas y populares en la región de los llanos orientales, como se hizo en otras regiones del país. La alianza entre militares, paramilitares y narcotraficantes está consolidada y actúa estrechamente coordinada. Quizás uno de los rasgos característicos del paramilitarismo llanero es justamente su doble soporte: por un lado las fuerzas armadas, por el otro el narcotráfico. Desde mediados de los 80 y en los 90, continuando el 2000, Víctor Carranza, conocido como 'el Patrón', es la figura más estable y destacada de toda esa estructura. (...) Las confesiones de Camilo Zamora y William Góngora integrantes de la estructura paramilitar de Víctor Carranza, muestra como los tres cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado: el ejército con su departamento B2, la policía con su departamento F2 y el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), actuaban en unidad de acción y de objetivos con la red de civiles armados cuya cabeza era Carranza. La fuerza pública suministraba armamentos, municiones, información y protección, mientras 'el Patrón' pagaba y avocaba a su tribunal supremo los premios y sanciones de quienes habían sido seleccionados para ejecutar el genocidio. Los testimonios de los paramilitares que se auto inculparon coincidieron con pruebas físicas que obraron en el proceso, como el hallazgo de cadáveres de algunas víctimas de la estructura paramilitar en la hacienda San Pablo, de Julio Carranza, hermano de Víctor o el hallazgo de caletas con armas y mas restos humanos en las haciendas La Reforma, La Sesenta y otras piedades de Carranza. La juez Cuarta de Orden Publico de Villavicencio, Marcela Fernández, recurrió a mecanismos de impunidad ya muy probados, llevándolos a extremos difíciles de imaginar, se negó a tomar en cuenta las coincidencias entre las pruebas físicas y técnicas y los testimonios, descalificando estos con argumentos psicológicos sin acudir a ningún concepto de expertos y llego al extreme de absolver a los paramilitares que se auto culparon, para poder rechazar sus testimonios contra 'el Patrón' Víctor Carranza, afirmando en un párrafo de su sentencia que «no es posible creer bajo ningún punto de vista que exista una persona con tan bajos sentimientos y rastrera condición humana...» (Proceso 019, pg. 60)...

Por doquiera aparece 'el Patrón' Víctor Carranza pronunciando sentencias de muerte y recompensando las ejecuciones de las mismas; departiendo con gobernadores, alcaldes, líderes políticos y comerciantes. Se multiplican los nombres de coroneles, mayores, capitanes y sargentos del ejército, agentes de la policía y de otros cuerpos de seguridad del Estado, quienes coordinan acciones, proveen y movilizan cargamentos de armas, despejan los escenarios de los crímenes de la fuerza pública para evitar obstáculos y, cuando por algún 'error', son detenidos los sicarios, intervienen apresuradamente para 'corregir tales errores'...».

Esta es pues, una de las cortas historias del narcoparamilitar Carranza, pero que el supremo Juan Manuel Santos no ha querido, o mejor, no le conviene aceptar. Tal vez para él, como para la jueza Fernández, este criminal no tiene bajos sentimientos ni una rastrera condición humana. Lo cierto es que en esa madrugada en que Santos 'ordeno' al fiscal general la liberación de su mafioso amigo, no lo logró, ya que el cabecilla criminal dormiría muchas noches más en ese lugar que se merece, la cárcel. Desafortunadamente tiempo después el zar de las esmeraldas, uno de los narcoparamilitares más temidos del país, apodado 'el Patrón' saldría libre sin cargos en su contra y más limpio de lo que estaba cuando entró en prisión. Es de suponer, que la ayudita que prodigó el hoy ministro de defensa colombiano al cabecilla narcoparamilitar Víctor Carranza, fue oportuna y eficaz, sin lo cual, el Capo, el Patrón y ahora "presidente" no lo hubiese nombrado en tal alto ministerio. El jefe del gobierno mafioso Álvaro Uribe, sabe premiar. Y Juan Manuel Santos aspira a ser presidente de la república. Entre los cobardes asesinatos ordenados por Carranza, —el protegido del ministro Juan Manuel Santos— está el del alcalde de Puerto Rico, Meta, José Rodrigo García y también diputado a la asamblea por ese mismo departamento. El alcalde García perteneció a la inolada Unión Patriótica y fue en 1992 cuando

agentes del ejército y la policía comandados por el sicario Arnulfo Castillo Agudelo, alias 'Rasguño' y su hermano alias 'Puntillón', al servicio de Víctor Carranza, acribillaron a José Rodrigo, ocasionándole la muerte instantánea de cinco disparos de revólver calibre 9 mm, a pocos metros de una estación de policía. En 1989 el alcalde de la localidad de Puerto Rico, José Rodrigo García, sufrió su primer atentado por parte de paramilitares de Carranza, con la complicidad de la policía. Su esposa, María Mercedes Méndez, alcaldesa de la localidad de El Castillo, Meta, también fue asesinada por Carranza y sus sicarios el 3 de junio de 1992, junto al alcalde elegido popularmente y perteneciente al mismo partido Unión Patriótica. La Fiscalía Sexta Delegada ante Jueces del Circuito Especializado, precluyó la investigación realizada en contra de Arnulfo Castillo Agudelo, alias 'Rasguño'. En septiembre de 2005 este criminal fue asesinado en Villavicencio, capital del departamento del Meta, por sus propios compinches.

Además de la farsa en que ha devenido la desmovilización de los integrantes de los escuadrones de la muerte, del narcotráfico y el circense acuerdo de paz con sus principales cabecillas, continua el comercio y exportación de drogas por parte de estos sanguinarios personajes, el recrudecimiento de la violencia contra los sectores más pobres y en especial de la oposición, los desplazamientos de familias campesinas y comunidades indígenas, para ser despojados de sus tierras, persiste, a pesar, del cacareo gubernamental sobre la lucha contra el terrorismo; la situación socioeconómica y laboral de las mayorías no cesa de degradarse en beneficio de los grandes capitales nacionales e internacionales, despreocupados completamente sobre esta aberrante situación colombiana, del momento que sus ganancias son cada vez más confortables. Las empresas bananeras (mayoría estadounidenses), las petroleras (en poder de estadounidenses y europeos) y carboníferas estadounidense (Drummond); el sistema financiero (privatizado en un 90 por ciento y en manos del capital extranjero y español), transnacionales como Bavaria, Coca Cola, Nestlé, Carrefour entre otras, llenan, repletan sus insaciables áreas, pagando cada vez menos impuestos, y en ocasiones no pagando absolutamente nada. Mientras que para los trabajadores, el avance en la mejora de salarios es cada vez más tormentoso conflictivo y mortal frente a la patronal cada vez más intransigente y súper-respaldado por el gobierno de la "seguridad democrática"; por el contrario, el pago de horas extras y días festivos y dominicales trabajados no cuenta, pues fue prácticamente anulado por el gobierno de Uribe de un plumazo, desde el mismo momento de la toma de su poder infinito, en su primer mandate; afectando también los intereses de los pensionados quienes han visto reducir su flaca remuneración mensual. El desempleo continúa en ascenso como lo señalo en septiembre de 2006 el DANE (Departamento Nacional de Estadísticas) a pesar de la censura impuesta desde el 2002 por la Presidencia de la República²²²; el informe oficial señala un aumento paulatino del desempleo a límites del 12,9, superior en 1.7 puntos al del año inmediatamente anterior. Según el departamento de estadísticas 2'544.000 personas no tienen empleo —250 mil más que el año anterior— con una fuerte previsión que esta grave situación tienda a aumentar. Pero eso no es todo, el número de subempleados también aumenta llegando a 3'740.000, los subempleados son personas que realizan trabajos ocasionales, que no corresponden a sus reales capacidades, están mal remunerados, carecen de seguridad social o forman parte de la economía informal. La situación de salud pública reventó todos los índices de inconsciencia e irracionalidad con la muerte de niñas y niños en su mayoría por falta de atención médica inmediata; en efecto hospitales y clínicas rehúsan sistemáticamente atender casos de extrema urgencia por el simple hecho de que los pacientes, familiares o acompañantes no tienen los recursos para el pago de la admisión al centro hospitalario y su debida atención. Desde el 2003 comenzó a hablarse en todo el país del, "paseo de la muerte". Personas (niños en su mayoría) en un estado de gravedad extrema, con diferentes padecimientos eran enviadas de un centro de salud a otro por motivos económicos en su mayoría y en

²²² El director del Dane Cesar Caballero, tuvo que renunciar después de haber tenido un enfrentamiento con la presidencia de la república que se opuso a la publicación de un informe sobre índices económicos y en especial sobre el aumento de la violencia en varios departamentos. La presidencia tenía sus propias estadísticas que exigía fueran publicadas. Por ser contrarias a la realidad el director del Dane se negó, hecho que desembocó en su separación del cargo. Hasta finales de 2007 el gobierno seguía manejando las estadísticas a su entero capricho, apoyado por la poderosa prensa.

el menor de los casos por falta de camas o material médico o de personal. En ese ir y venir buscando, rebuscando la atención médica y siendo reiteradamente rechazado, el paciente moría en el camino.

En los últimos años, Uribe ha dado la orden de cerrar varios centros hospitalarios, uno en Bogotá, dos en la Costa Atlántica, y otro en Bucaramanga, pues, no eran rentables. Igualmente decenas de infantes están muriendo, ante la impavidez del gobierno central, por desnutrición, hambre y enfermedades como la Tuberculosis, que sufren niños de las comunidades indígenas y afro colombianas. Un suceso verdaderamente infame ocurrió en la Sierra Nevada, al norte del país, en donde paramilitares habían cercado a la comunidad indígena de los Kankuamos que habita la zona, ocasionado la muerte de 17 menores. El crimen fue denunciado por la iglesia católica por intermedio del obispo Héctor Fabio Henao quien declararía a los periodistas que: «Los narcoparamilitares no permiten el ingreso de alimentos ni drogas (medicamentos). Este bloqueo ha ocasionado la muerte de niños, pues les imposibilitaba tener acceso a los recursos básicos de nutrición y salud». Henao sostuvo que según denuncias de las comunidades los 'desmovilizados' escuadrones de la muerte, continúan actuando en la región. Estos grupos criminales siguen al servicio del cabecilla Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', quien aparentemente se desmovilizó en el 2003 en el marco de los acuerdos de paz con el gobierno de Uribe²²³.

La iglesia católica había anunciado días atrás que más de 5 millones de colombianos sobre los 42 millones que cuenta el país, sufren hambre y que la falta de alimentación está provocando graves efectos, especialmente sobre la población infantil. Sin embargo el gobierno de Uribe utiliza 18.5 millones de dólares diarios en su inconsecuente guerra. Por su parte, el sacerdote Albeiro Parra, director de la Pastoral Social del Chocó, continúa denunciando la muerte de infantes por desnutrición y falta de atención oportuna por parte de los galenos colombianos, que en su mayoría cambiaron su sagrado sermón por la cómoda rentabilidad. El prelado manifestó que durante el año 2006 más de 78 personas murieron en el departamento del Chocó y otros tantos se encuentran en condiciones de desnutrición crónica. Según la radio colombiana (25-03-2007), doce niños murieron por desnutrición extrema, en el Carmen del Darién. En la ciudad de Barranquilla otros dos niños habían muerto a causa de desnutrición, mientras centenas se encontraban en un estado avanzado de anemia, como lo confirmaría en la radio colombiana (12 junio /07) un alto funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Un 41 por ciento de la niñez sufría de anemia y desnutrición en esa parte de la Costa Atlántica, azotada por el crimen organizado y la mafia. Diez de cada cien menores de cinco años presentan un retraso en su crecimiento y la inseguridad alimentaria en esta ciudad es del 39.7 por ciento según fuentes oficiales. La directora seccional de Instituto de Bienestar Familiar Emilia Fontalvo, dijo que los más vulnerables son los desplazados de la violencia que no tienen como dar de comer a sus hijos. Hay que recalcar que el gobierno de Uribe, destinó un salario mínimo²²⁴ para los falsos miembros y miembros supuestamente desmovilizados de los escuadrones de la muerte.

Según un informe de Planeación Nacional e investigadores de la Universidad de los Andes de Bogotá, Ana María Ibáñez y Andrés Moya, buena parte de los hogares colombianos afectados por este flagelo viven en condiciones tan críticas que en la mayoría de los casos, al compararlas, son peores que las que caracterizan la indigencia. El estudio señala que los niveles de desempleo para los miembros de los hogares desplazados son mucho más altos que los que se tienen para los miembros de familias pobres urbanas y rurales e indigentes urbanos. La población desplazada tiene menos acceso a los programas oficiales de vivienda y para los menores de edad, las bajas tasas de asistencia educativa y los índices de deserción escolar son elevados. También señalan los investigadores de la Universidad de los Andes, que el apoyo del Estado es insuficiente y en muchos casos los programas están mal orientados. Revela

²²³ Telesur (23-03-2007). La Television del Sur, tiene su sede en Caracas Venezuela. La poderosa prensa colombiana no informó sobre este importante acontecimiento

²²⁴ Aproximadamente 350.000 pesos. (140 euros)

el informe que el fenómeno del desplazamiento forzado se extendió a la mayor parte del país afectando hoy en día a 997 municipios, el 90 por ciento del total. El 57 por ciento de población desplazada proviene de 78 municipios mientras que solo 44 reciben el 66 por ciento de las personas expulsadas de sus lugares de origen. Los departamentos más afectados por el desplazamiento forzoso son Antioquia, Bolívar, Choco, Cesar, Magdalena, Putumayo, sostiene el informe. Es de anotar que en estos departamentos incluidos el de Córdoba la presencia de los escuadrones de la muerte sigue siendo importante a pesar de las “desmovilización” paramilitar. Los asesinatos, el robo de tierras y el narcotráfico continúan cabalgando impunemente.

Las Empresas Privadas de la Salud, en manos de la mafia narcoparamilitar, no solo extorsionan a los pocos centros públicos de salud que quedan, sino también, han impuesto un sistema laboral de terror que consiste en obligar a los médicos generales, bajo la amenaza de suspensión o licenciamiento definitivo, de dedicar no más de quince minutos a un paciente, de formularle medicamentos baratos que no permiten un ligero mejoramiento de la enfermedad que padece el paciente y para lograr que este sea enviado al especialista, el paciente debe encontrarse en un estado de avanzada gravedad y que el galeno se encuentre de un muy buen humor. Para lograr exámenes de laboratorio, radiografías o imágenes diagnósticas, es una verdadera lotería para el paciente, pues, el generalista piensa primero en su puesto laboral que en la salud de su paciente. La dictadura capitalista es aplicada con todos los rigores en Colombia, con la sola salvedad de otros países, donde es la mafia, la que administra el país.

Colombia es también uno de los 20 países con mayor índice de trata de personas, revelo la ONU. La coordinadora del proyecto contra la trata de personas de las Naciones Unidas, Adriana Ruiz, lamentó la muerte de dos colombianas en el desierto de Sinai, diciendo que «es un caso de trata para explotación laboral», añadiendo que las mujeres y los niños son las principales víctimas de este flagelo. Según Naciones Unidas, actualmente en el mundo se ha triplicado el número de esclavos a comparación con el siglo XVII, cuando era permitida la trata de personas²²⁵.

El panorama general por la violencia sociopolítica es igualmente desalentador, pues se registraron 11.084 personas asesinadas o desaparecidas por fuera de combate (o sea en su casa, en la calle, en sus sitio de trabajo) entre julio 2002 y junio 2006, es decir en los cuatro años del primer periodo de gobierno del presidente de la mafia colombiana Álvaro Uribe Vélez. Esto significa que en promedio más de siete personas (7,7) cada día, fueron asesinadas o desaparecidas forzosamente por fuera de combate y por motivos políticos en Colombia. Es en esta sombría y mortífera situación nacional, que el uribismo ha gobernado en estos últimos cinco años; más preocupado de la guerra que de los intereses del pueblo colombiano en lo que respecta a su seguridad, empleo, salud, paz y bienestar.

Pero para Uribe y su corte —comprendido una gran parte del congreso de la República— lo más importante es sacar a flote el «acuerdo de paz» con los grupos paramilitares, lo mismo si para llegar a su fin deba imponerse la impunidad y la mentira, llegando al despropósito de convertir estas fanáticas hordas en combatientes políticos, como fue el acuerdo hecho en el 2002 entre el espurio presidente representado por su flamante comisionado de paz Luis Carlos Restrepo y los principales cabecillas narcoparamilitares, quienes vienen comportándose como un ejército vencedor, imponiendo condiciones y maniobrando siempre en favor de sus mezquinos intereses; olvidando su real carácter de criminales sometidos a las leyes y a un acuerdo político extremadamente ventajoso. En una reunión efectuado en el 2001 según revelaciones de los congresistas uribistas Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda —detenidos hoy día por narcoparamilitarismo—, los narcoparamilitares crearían un gran movimiento o partido político que defendería sus tesis (fascistas) y promovería el inicio de un 'proceso de paz' (Esta fue una de las reuniones con políticos de todo el país para la 'Refundación de la Patria' 2001²²⁶. El plan

²²⁵ Informe sobre la esclavitud moderna, ONU.

²²⁶ Prensa nacional y diario Tiempo (28-11-2006)

inicial fue establecer un proceso de paz que incluiría el delito político, la no extradición y a la larga, una ley de punto final. Lo cierto era que el ejército de abogados al servicio del narcoparamilitarismo, encabezado por Gustavo Salazar Pineda, buscaba afanosamente que sus clientes fueran considerados como delincuentes políticos, o sediciosos. Y así quedó establecido en la Ley de Justicia y Paz elaborada por el gobierno tiempo después. Acto seguido, vendría el apoyo a sus compinches políticos para las elecciones al congreso en el 2002; la “elección” (de Uribe) parapresidente ese mismo año, y para las elecciones regionales de 2003²²⁷.

Desde el 2004 comenzó la «desmovilización» de los principales cabecillas, agrupándose en la zona llamada Santafé de Ralito, departamento de Córdoba, —donde son amos y señores Mancuso y Uribe— sitio desde el cual, los cabecillas seguían manejando sus tropas dejadas en la retaguardia o bien camufladas mientras entregaban a guisa de combatientes, a delincuentes, vagabundos y hasta desempleados que por unos cuantos decenas de miles de pesos, hicieron parte de la pantomima entregando armas viejas e inservibles y declarándose miembros de los grupos de la muerte, y, argumentando muchos de ellos que no combatieron pues fueron simples cocinero, mandaderos o soplones de vereda etcétera. También desde la sede de Ralito, estos cabecillas continuaban con el tráfico de estupefacientes y con la complicidad de las fuerzas armadas y políticos de varios departamentos exportaban por mar y aire cocaína hacia México, Estados Unidos y Europa.

Igualmente Ralito serviría como escondite de poderosos narcotraficantes pedidos en extradición por los Estados Unidos, y a pesar de la presencia de miembros del ejército, las continuas visitas del (bufón)²²⁸ comisionado de paz Luis Camilo Restrepo y congresistas uribistas nadie vio nada, nadie escuchó rumor alguno, el país de nada se percató. Santafé de Ralito asemejaba más a un centro de operaciones empresarial dotado de teléfonos, fax, televisión con antena internacional, celulares, mensajeros propios y modernos computadores, desde donde el negocio narcocriminal y el control político se ejercía con toda seguridad y profesionalismo. En los fines de semana para relajar el ambiente y prodigar un poco de esparcimiento a la patronal, el bacanal se iniciaba con putas de elite y 'modelos' de la alta sociedad a más 24 millones de pesos la noche, güsqui, música con orquesta y todo lo que pudiera dar la desenfrenada opulencia, la fiesta era total. Dicho lugar pasaba a convertirse en un 'Santafé de Relajito' nombre como también se le conoció, con altas personalidades a bordo. Terminada la fiesta, las cosas retomaban su serio rumbo y, cerca de Ralito y en todas partes del país continuaban cayendo asesinados o siendo desaparecidos más colombianos y colombianas de a pie; pero también lugartenientes de los cabecillas de Ralito pertenecientes a los escuadrones de 'Jorge 40', 'Macaco', 'Vecino' y 'Berna'. Al parecer, estos hombres habían tomado la firme decisión de contar toda la verdad sobre crímenes, lugares de fosas donde habían sido tirado campesinas, campesinos y lo mismo, infantes acusados de auxiliar a las guerrillas; informar sobre las nuevas rutas de narcotráfico y sobre todo, de dar nombres de los políticos, empresarios y miembros de las fuerza armadas envueltos con la mafia y el crimen. Este grave peligro había que cortarlo de raíz, eliminando para siempre la fuente. Entre los asesinados podemos citar a Angarita; 'Omega', segundo de «Jorge 40»; y a Daniel Mejía alias 'Danielito', mano derecha de «Berna». El caso de Jairo Angarita Santos, ex oficial de la fuerza aérea colombiana, segundo de Mancuso en el «bloque Sinú», es un hecho probado de la manera como el narcoparamilitarismo quiere ocultar la verdad. Angarita había fundado su temor de ser asesinado

²²⁷ Los pactos entre políticos y narcoparamilitares para la Refundación de la Patria, fueron cinco: Ralito; Magdalena; Llanos Orientales; Antioquia y Puerto Berrío (Santander). El pacto de Santafé de Ralito es, sino el más importante si el principal, ya que este se celebró con la presencia de los principales cabecillas de la mafia 'narcocriminal' y el representante del futuro y seguro presidente de Colombia Álvaro Uribe en el departamento de Córdoba, sede del paramilitarismo. En los otros pactos antes nombrados, hicieron presencia políticos que hoy en día fingen o fingieron como ministros con importantes cabecillas y patronos de los bloques o escuadrones de la muerte.

²²⁸ Este señalamiento de bufón o payaso, no es de mi autoría. Pertenece al artista Vlado, quien dibuja a Restrepo como lo que es, o se comporta, en tanto que Comisionado.

después de haber dado declaraciones sobre la complicidad de políticos, empresarios y fuerzas armadas con el narcotráfico y los escuadrones de la muerte. Acusó al gobernador de Córdoba Libardo López, de negociar su gabinete con el cabecilla Mancuso, razón por la cual Manuel Troncoso, cuñado del criminal, llegó a la secretaria de salud del departamento²²⁹. También era una realidad que durante su paso por la Fuerza Aérea Colombiana, Angarita sirvió de enlace entre la policía y el ejército con la mafia y fue testigo presencial de la reunión de 2001 en Ralito en la que más de 80 importantes políticos y altos dirigentes gremiales se reunieron con los narcoparamilitares, para apoyar el proyecto político que consistía en la «Refundación de la Patria». Según fuentes «paras» son más de un centenar de cabecillas paramilitares de segunda línea, sentenciados a muerte. La elite narcoparamilitar, así como las elites políticas y económicas del país, temen a los negativos resultados en su contra, de momento en que se desate una confesión en cadena sobre la real participación de las elites en el 'narcocrimen'.

De los supuestos 31.000 desmovilizados de estos grupos de muerte, que el gobierno agita dentro y fuera de sus fronteras en su mentirosa propaganda, no se tiene gran noticia. Solamente 2695 de estos criminales serán procesados bajo la ley 975 de 2005, o sea el 6.4 por ciento del total (supuestos 31 mil). De los 2695 tan solo 60 se concentraron en Santafé de Ralito (Relajito) por ser los principales cabecillas del narcoparamilitarismo y con pleno derechos a los favores gubernamentales, que apuntan a una real impunidad sobre sus horribles crímenes. En esta zona también había presencia de poderosos narcotraficantes. Así las cosas aproximadamente 28.800 narcoparamilitares tiene auto inhibitorio, preclusión de investigación, cesación de procedimiento e indulto según la ley 782 de 2002 y el decreto 128 de enero de 2003, o sea un 98 por ciento de impunidad²³⁰; esto significa que las atroces masacres contra la población civil cometidas por estas bestias, no merece castigo alguno. Además estos 2695 que según el gobierno se acogieron a la 'ley de justicia y paz' recibirán sentencia a partir de la aceptación de cargos cuyas penas oscilaran entre 5 y 8 años de condena, que según el propio gobierno, podrán purgar en centros agrícolas o en fincas de su propiedad, añadiéndole los 18 meses de rebaja de pena por haber estado concentrado en Santafé de Ralito —Relajito—. Ahora bien, con el obligado traslado de que fueron objeto los cabecillas narcocriminales a la cárcel de Itagüí, Antioquia (por presión nacional e internacional.) se podría decir que el pago real de la pena se situara en no más de dos años, lo que sigue dejando al descubierto un proceso de impunidad absoluta, en el que no va haber ni justicia, ni verdad, ni mucho menos reparación a las más de 100.000 víctimas de la violencia y masacre narcoparamilitar. Y si añadimos a todo lo anterior, la reforzada presencia de los narcoparapolíticos en el Congreso de la República, que controlan el Senado y la Cámara de Diputados, y quienes les van a otorgar más beneficios a sus socios narcocriminales en un futuro próximo, no hay donde perderse. Además de la reelección del Capo presidente Uribe a quien respaldaron públicamente y posee poderes de monarca. Otro hecho preocupante que se presenta, son los crímenes cometidos por los narcoparamilitares durante las negociaciones con el gobierno y que permanecen en la impunidad absoluta, a pesar de que uno de sus compromisos y obligación es la de no volver a delinquir. La Comisión Colombiana de Juristas, tiene reseñados aproximadamente 1865 crímenes durante toda la etapa de negociaciones.

La alternativa que tenemos la inmensa mayoría de colombianas y colombianos de buena voluntad, es el de acudir a la Corte Penal Internacional, para lograr obtener una real justicia.

En la ley 975 de 'Justicia y paz', entre el gobierno y el narcoparamilitarismo quedo reglamentado tres puntos importantes en la negociación y que son: Justicia, Verdad y Reparación. Si bien en los dos primeros falta mucho por concretizar y los principales actores del drama colombiano se contentan con

²²⁹ Prensa colombiana (29-12-2006)

²³⁰ Comisión Colombiana de Juristas. Informe Colombia 2002-2006, Situación de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. www.coljuristas.org. Bogotá, Colombia.

contar hechos a medias, callar explosivas verdades y amenazar de no contar toda la realidad por cuanto «el país no está preparado para conocer toda esa verdad» y chantajear a Uribe, para recibir ventajas que los blinde contra largas penas de prisión, extradición por narcotráfico y sobre todo una opción que les permita su participación activamente en la política nacional, siendo elegidos en el congreso, gobernaciones y alcaldías por ejemplo. En el punto de Reparación a las víctimas no pasa nada. Hasta el momento es incomprensible por que el gobierno y en especial Uribe, no ha tomado medidas para intervenir el inmenso haber de los cabecillas narcoparamilitares, pues, sin tenerse una idea exacta del capital de estos cabecillas, podríamos especular en que la cifra no es inferior a los 30 mil millones de dólares. De esta danza de los millones hace parte tierras, ganado vacuno, caballos pura sangre, haciendas, empresas de todo orden, inversiones en las bolsas, deposito en bancos, inmuebles (edificios, casas, hoteles), cuadros de arte, vehículos de marca, casinos de juegos y equipos de balompié entre otros intereses. Y preocupa más aun, cuando voces de importantes 'narcoparas' se han elevado para declarar que no tienen con que reparar a sus víctimas, varios cabecillas criminales han dicho ante los fiscales en sus declaraciones espontaneas, que no poseen medios económicos para reparar a todas sus víctimas- y mismo el gobierno uribista, en su inmenso cinismo, ha solicitado la ayuda internacional para llevar a cabo tan noble obligación. Así pues, solo resta preguntarle al gobierno, el por qué no ha intervenido los haberes, las inmensas fortunas en cuestión. El por qué los cabecillas del narcoparamilitarismo continúan disfrutando de sus inmensas riquezas, mientras que sus víctimas no han recibido la correspondiente reparación, devolviéndoles sus tierras²³¹, por ejemplo, recuperando en dinero el valor de sus haberes perdidos al momento de los desplazamientos y mismo recibiendo compensación material, por los daños morales ocasionados por el terror y la muerte de sus familiares. Parte de las desafortunadas respuestas a estas inquietudes, las podemos obtener en el informe de la Comisión Colombiana de Juristas arriba señalado: «El gobierno tomo medidas profundamente regresivas contra la población desplazada. El Plan Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada (decreto 250 de 2005) exige que las personas desplazadas estén 'en situación de urgencia extrema', para reclamar el apoyo alimentario. Esto a pesar de que el 93 por ciento de los hogares desplazados están por debajo de la línea de indigencia». De las 100.000 víctimas de la monstruosa arremetida de los escuadrones de la muerte con la connivencia del Estado, ninguna ha sido tenida en cuenta dentro de ese *particular negocio* entablado entre estos criminales y el mafioso gobierno de Uribe, llamado solemnemente «Acuerdos de Justicia y Paz».

Las primeras declaraciones de los cabecillas narcoparamilitares ante la fiscalía comenzarían a finales de 2006. Las expectativas de los colombianos era enorme y se pensaba que realmente la verdad saldría a note y el país se reencontraría con ese sombrío y bárbaro pasado, para así poder darle un entierro de primera. Pero las cosas estaban lejos de pasar como todos hubiésemos querido. Las primeras presentaciones de estos abominables criminales transformaron la sede fiscal en una especie de tribuna política en la que se justificaban sus horribles actos y de paso, se acusaba al Estado de ser culpable por su inoperancia y 'vacío de poder'. Y a medida que más actores de esta irracional y desenfrenada violencia y muerte se presentaban, iban siendo presionados por las miles de víctimas para que contaran la verdad sobre sus crímenes y donde estaban sus familiares desaparecidos o donde estaban enterrados la mayoría de los que fueron masacrados; el libreto narcoparagubernamental se desplomaba y otro escenario jamás imaginado por unos y otros salía a flote, los criminales, sin otra opción, comenzaron a rendir cuentas y contar verdades a medias sobre su participación y la complicidad del Estado, (fuerzas armadas, políticos, jueces, fiscales y hasta empresarios y comerciantes) en esos decenios atroces de narcotráfico y ríos de sangre.

El corrobora miento de la horrorosa participación y complicidad del Estado colombiano con el narcotráfico y los crímenes de los escuadrones de la muerte, fue casi inesperado, casi fortuito, (a pesar de las numerosas denuncias de las propias víctimas y ONGs desde años atrás) por cuanto las

²³¹ La Procuraduría General de la Nación, en un informe entregado a mediados de 2006, estimó en 6 millones de hectáreas expropiadas por los narcoparamilitares a sus verdaderos dueños

declaraciones de parte de ciertos funcionarios del Estado, fueron precisas para que se tomaran medidas judiciales. La comprobada complicidad de una gran parte de políticos con el crimen organizado, 'ayudo' a las semiconfesiones de los 'narcoparas', los cuales se sintieron traicionados por muchos de sus cómplices anidados en el Congreso y haciendo parte del gobierno y quienes no perdían un minuto ante cámaras de televisión y micrófonos radiales para lavarse las manos y pedir mano dura contra los autores de crímenes y narcotráfico. Pero también, se convirtió en una poderosa arma que ha utilizado los principales cabecillas del narco crimen, para chantajear altos funcionarios, parlamentarios, industriales y hasta el propio "presidente", al no contar toda la verdad, si las mayoría de sus exigencias no son echadas en el cesto de la basura. El jueguito consiste en que los peligrosos cabecillas como Mancuso, Tovar, Murillo, Duque e Isaza otrora subalterno de Pablo Escobar, entre otros, saben mucho sobre la carrera delictiva de Álvaro Uribe y su familia, a su vez Uribe conoce al dedillo sobre el andar criminal de estos y sobre todo su enorme capital mal habido, donde lo esconden y en que esta invertido una parte. Si por un caso extraordinario, pero improbable, Uribe los dejara a su suerte, estos criminales no tendrán otra opción que contar toda la verdad sobre el espurio presidente y la de sus ministros y parlamentarios que aun no han sido tocados por el escándalo narcoparamilitar, y de esta forma todos estarían en el suelo. Si por un caso, alguno de los principales cabecillas suelta la lengua, inmediatamente sería extraditado a Estados Unidos, por Uribe, bajo cargos agravados; mientras el gobierno saldría a decir, que lo confesado por un criminal no hay que ponerle la importancia y seriedad debida. O en el peor de los casos, el delator sería eliminado ipso facto. La ley del silencio es lo mejor para unos como para los otros.

Mientras comenzaba en firme, las deposiciones de los principales cabecillas narcoparamilitares recluidos en la cárcel de alta seguridad de Itagüí, ante los fiscales, el ambiente que se vivía allí no podía ser el mejor. Para la preparación de sus alimentos, se contaba con el chef de cocina del tristemente célebre Pablo Escobar, y quien era el que les ingresaba los suculentos platos desde fuera de la prisión. Tienen celulares y ordenadores con internet, en sus celdas hay televisor, grabadora y DVD, entran y salen de sus celdas a cualquier hora y para relajarse un poco ven televisión en el patio, leen y se beben un buen vaso de güisqui. Se les permite la entrada de visitas sin contratiempo alguno. Para ciertos funcionarios del Inpec, (Instituto Nacional Penitenciario) esto es una vergüenza, pero ellos no pueden hacer nada, pues la orden viene del alto gobierno. La vida en prisión para estos 17 jefes del crimen y sus cuarenta lugartenientes que también están a guisa de guardaespaldas, es única en este injusto mundo.

La periodista María Jimena Duzan²³² escribiría no sin la amargura y tristeza que nos invade a todos los colombianos de buena voluntad, haciéndose muchas preguntas a la vez: «Hace algunos días leí en algún medio que el juez español Baltasar Garzón, durante una corta visita a Colombia, se había llevado una magnífica impresión de la manera como la Fiscalía estaba aplicando la ley de justicia y paz, semejante espaldarazo sorprendió a los expertos, no solo por venir de quien viene, si no porque en realidad, esta polémica ley, en la práctica no ha comenzado a ser aplicada. Miremos la lista de los narcoparamilitares desmovilizados que están en capilla esperando ser llamados a rendir versión libre, desde septiembre de 2006, cuando la Fiscalía recibió la lista de quienes debían ser sometidos a la ley de justicia y paz. De esos 2975 —última cifra oficial— el ente acusador solo ha oído a siete, o sea una versión libre por mes. Supongamos que ese ritmo mejore (...) y no sea uno por mes si no cuatro (...) Necesitaríamos aproximadamente 62 años y medio, para que la Fiscalía termine de oír a los cerca de 3 mil paramilitares. (...) De los 53 cabecillas del narcoparamilitarismo que están recluidos en Itagüí, solo Mancuso ha sido llamado a rendir versión libre. (...) ¿Por qué no hablan Mancuso ni ninguno de sus socios de Ralito? La respuesta la tiene el gobierno y la Fiscalía, pero no la quieren compartir. (...) Hace unos días, el abogado de Mancuso amenazó con suspender su versión libre si la Fiscalía no cedía en unos temas acordados durante su estancia en Ralito, muchos de los cuales contaron con el beneplácito

²³² Su hermana Silvia, también periodista fue asesinada por los narcoparamilitares.

de Iguarán en su condición de viceministro de justicia. (...) Mancuso le exige a la Fiscalía que le suspenda todas las medidas de aseguramiento en su contra. El quiere salir de la cárcel y volver al estatus de habitante de colonia agrícola, que fue lo que acordó con el gobierno en Ralito y así volver de compras a los centros comerciales de Medellín, como héroe capitalista. (...) Mancuso ha conseguido que el gobierno y la Fiscalía cedan en temas tan sensibles como el de la entrega de bienes para efectos de la reparación de víctimas. Según la ley aprobada por el Congreso, a los 'paras' se les conmina a entregar los bienes ilícitos. La Corte Constitucional, sin embargo, en su fallo aclaró que, además de los bienes ilícitos, tenían que entregar los lícitos. En la práctica, las cosas no han funcionado así. (...) Luego del asesinato de Yolanda Izquierdo²³³, el presidente ordenó allanar predios de los familiares de los 'paras' con el objeto de proceder a la extinción de dominio. La orden tocó la puerta de una familia cercana a Mancuso y la ira del cordobés llegó a tal punto que hasta Itagüí fueron el Alto Comisionado y el Fiscal.²³⁴ (¿Debería un Fiscal prestarse para estos menesteres?). Vaya uno a saber que pactaron en esa reunión. Lo cierto es que los allanamientos cesaron y se acordó, por debajo de la mesa, que el gobierno renunciara a la extinción de dominio...».

Uno de los lugartenientes del 'Bloque Norte', escuadrón caracterizado por su fiereza y barbarismo, llamado Wilson Salazar Carrascal alias 'el Loro', se presentó ante la fiscalía seccional de Barranquilla, llegó tranquilo, sereno y se declaró inocente. Negó las acusaciones:

'no', 'no', 'yo no fui', 'soy inocente' y con una tranquilidad aterradora aseveró 'yo no he matado a nadie'. Esta fue la declaración del primer postulante en versión libre en presentarse ante la unidad de «justicia y paz» de la fiscalía. A pesar de haber pertenecido a uno de los escuadrones de la muerte más sanguinarios, autor de varias masacres en las que descuartizaron a sus víctimas, mientras escuchaban música y bebían aguardiente.

Otro de los 'desmovilizados' y este sí, un pez de los gordos, gordos, que se presentó ante la fiscalía, se llama Ramón Isaza, (ex subalterno de Pablo Escobar) tiene 69 años de los cuales lleva más de treinta y cinco en la guerra narcoparamilitar. Fue el fundador de los escuadrones de la muerte en el Magdalena Medio junto al sanguinario narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha alias 'el Mexicano' y es el hombre más temido de toda esa zona. El viejo criminal llegó acompañado de su abogado, quien pidió comprensión para su cliente, pues, es un hombre pobre, de escasos recursos a pesar de que militó en la auto-defensas (paramilitares), por lo que de él, no se puede esperar grandes sumas de dinero para la reparación de sus víctimas, terminó diciendo el abogado. Pero lo más sorprendente, fue que hizo su relato en forma normal, contando por que había empuñado las armas y devenido para-militar. Pero cuando se le pidió que hiciera un relato de sus crímenes... hubo una pausa, larga pausa, y después respondió 'me dio Alzheimer', añadiendo 'me siento bien, pero se me olvidan las cosas'. Al final de la tarde cuando el fiscal le preguntó al viejo criminal Isaza por su influencia en la política, este le contestó categóricamente «a mi no me gusta la política, yo se es de guerra»²³⁵. Finalizada la audiencia, más de 400 víctimas reunidas en un salón del Bunker de la Fiscalía en Bogotá, fueron saliendo en silencio y lentamente con la esperanza de que en una segunda versión libre, el viejo 'narcopara' recobre la

²³³ Yolanda Izquierdo era la presidenta de una Asociación de Víctimas del narcoparamilitarismo. Mujer humilde honesta y una líder batalladora, no cesó en su empeño de hacer restituir todas las tierras robadas por los narcoparamilitares a sus legítimos dueños. Razón por la cual fue asesinada por un grupo de 'paras' al servicio de Vicente Castaño y Mancuso. El día de su muerte Yolanda, llevaba en sus bolsillos escasamente lo del pasaje del bus. Existe una 'cooperativa' narcoparamilitar llamada Funpazcor dirigida por Sor Teresa Gómez, una ficha de Vicente Castaño, y quien fue arrestada por el crimen de Yolanda. Dicha 'cooperativa' fue allanada por la fiscalía en el 2001, pero tiempo después el parafiscal Luis Camilo Osorio precluyó las investigaciones en su contra. La 'cooperativa' sigue funcionando normalmente y tiene contratos con el Estado. Otra familiar de las víctimas Carmen Cecilia Santana, fue asesinada.

²³⁴ El Fiscal General Arnoldo Iguarán, fue viceministro de justicia del primer gobierno de Uribe. Después sería nominado a la cabeza de la Fiscalía a pesar de que existen rumores de su proximidad con el narcoparamilitarismo.

²³⁵ Fiscalía General. Prensa Nacional (4-30-2007).

memoria. Se estima entre 300 y 500 personas asesinadas por este monstruo. Su grupo criminal participo en la tortura, desaparición y asesinato de campesinos y campesinas. Varias masacres aparecen en su activo y en la que estarían niños.

Por su parte Salvatore Mancuso, alias 'el mono', en su primera versión libre ante la fiscalía (19-12-06), se presento como un político-militar triunfante en una guerra declarada por el mundo al comunismo. Habló de la inoperancia del Estado y de la fundación de lo que, la elite colombiana y los cabecillas narcoparamilitares se empeñan en llamar autodefensas, su funcionamiento en varios departamentos reemplazando al Estado y en ningún momento hizo referencia a sus crímenes y numerosas actividades delictuosas, que es lo que le ordena la ley de 'justicia y paz'. Mancuso está acusado de haber participado en por lo menos veinte masacres y el asesinato de más de 1.700 personas incluidos niños.

La versión libre de otro de 'los peces gordos' del narcoparamilitarismo Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', ante la fiscalía de Barranquilla, asemejaba más bien a un recital académico sobre sus estudios, su proveniencia de una familia de clase media alta y católica, de la cual recibió una muy buena educación que se le olvido cuando ingreso a la guerra (narcoparamilitarismo). En forma folclórica relato que no tomaba licor, ni ingería narcóticos, desde hacia 10 años atrás, y que cuando ingreso a los grupos paramilitares, lo hizo para contribuir a la paz. Negó toda participación de niños en las filas de su grupo, manifestó nunca haber capturado, ni reclutado menores de edad. En cuanto a las víctimas, les dijo sagazmente que tenían que tener paciencia pues la verdad se conocería en tres años como mínimo y en cuanto a la indemnización él no sabía cómo hacer, pues los bienes e inmuebles estaban en terceras manos, y pidió de nuevo mucha paciencia. El colmo de su desfachatez fue cuando dijo casi solemnemente «Yo soné con la libertad con la libertad del país y la sociedad, quena conseguir la soberanía de mi pueblo, liberte a mi pueblo de la opresión que alii había y así se lo entregue el día que me desmovilice». Terminada la audiencia, más de mil personas que habían asistido —en su mayoría victimas-, dijeron que Rodrigo Tovar está loco o es un vulgar sicópata. Y en las escaleras del edificio donde se realizó la reunión, por lo menos un centenar de personas gritaban «Ahora se cree el Simón Bolívar del siglo 21» Este criminal monstruo, es el autor de por lo menos una decena de masacres y asesinatos de mujeres y hombres acusados falsamente de pertenecer a la subversión. Su grupo de la muerte participo igualmente en violaciones y ejecuciones a infantes.

El narcoparamilitar Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', no solo en su primera versión libre si no en las siguientes, continuó presentándose como un simple 'comisario político de 'las autodefensas', dijo que jamás estuvo en campamentos y que se dedico a politizar los miembros de los escuadrones de la muerte. Tan solo fue claro en señalar, que se incorporo a los escuadrones de la muerte en 1.999 con el 'Bloque Metro' y que después que este fuera aniquilado por divergencias entre los grupos narcoparamilitares, fue llamado por el cabecilla Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar', para que ingresara al 'Bloque Central Bolívar' en donde creó escuelas de comisarios políticos, en el sur del departamento de Bolívar y Santander. Admitió que utilizó documentos de identidad falsos para movilizarse en todo el país, y que en sus apariciones en ruedas de prensa con armas y uniforme de combate, estos le fueron prestados. Los familiares de las víctimas no podían salir más desconsoladas y deprimidas en cada versión fantoche de este criminal cínico y mentiroso, y que pretendía igualar a su "narcopara" "presidente" Uribe, quien no se cansaba de repetir cínicamente ante la prensa nacional e internacional, que la desmovilización y la verdad de las 'autodefensas' era el camino de la justicia, gracias a la "seguridad democrática", bandera de su gobierno. Lo que si sorprendió en su segunda versión libre, y que no parecía estar en el libreto, fue su acusación contra el ex director del DAS, Miguel Maza Márquez y un general del ejército cuyo nombre omitió, en el asesinato del candidato a la presidencia de la república Luis Carlos Galán Sarmiento, el 18 de agosto de 1989, dijo que dicho asesinato fue programado en la Isla de la Fantasía, en Puerto Boyacá, en una reunión en que estuvieron los 'narcos' Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, el cabecilla de los escuadrones de la muerte Henry de Jesús Pérez, Maza y otros funcionarios del gobierno nacional. Afirmó que sin la estrecha colaboración del DAS, y el B2 de la brigada 13 del ejercito no se habría ejecutado el crimen de Galán.

Con las primeras presentaciones de varios de estos criminales ante la fiscalía, todo parecía apuntar a una ciega estrategia defensiva destinada a desviar la atención de la justicia y sobre todo de las víctimas, que en masa, se agolpaban en los edificios de las fiscalías en Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá y otros lugares del país, con la esperanza de conocer la verdad sobre el paradero de sus familiares desaparecidos años atrás, otros masacrados y enterrados en algún lugar de la geografía nacional; también acudían estos miles de víctimas en busca de la restitución de sus haberes y tierras perdidas casi para siempre. Esta estrategia estaba en marcada en la ley de 'justicia y paz' elaborada por el ejército de abogados del narcoparamilitarismo y puesta en marcha por el gobierno mafioso de Uribe. Sin embargo dicha estrategia comenzaría afortunadamente, a agrietarse con las confesiones hechas por los segundones de los cabecillas 'narcoparas' empeñados en ocultar la verdad. Pues su fin ha sido el de legalizar sus inmensas fortunas provenientes del narcotráfico y del robo de bienes y tierras a millones de colombianos y colombianas, el de perpetuar la impunidad de sus horribles crímenes, con la complicidad de la presidencia de la República, el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y otros estamentos de la Nación, acudiendo a la propaganda gubernamental de la poderosa prensa del país.

La descoordinación y el incumplimiento del gobierno mafioso de Álvaro Uribe, con sus socios narcoparamilitares en lo concerniente a su estatus de sediciosos, negado por la alta Corte de Justicia, su encarcelamiento en prisiones de alta seguridad —una forma del gobierno uribista de dar contentillo a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias— y el sentirse traicionados por sus amigos congresistas quienes volteaban la espalda a sus antiguos protectores, entre otras razones, obligo a estos últimos, siguiendo los pasos de sus subalternos, sin olvidar la fuerte presión de los familiares de las víctimas, a contar gota a gota una parte de la verdad que desconocía el país sobre masacres, fosas comunes, ajusticiamientos, complicidad de políticos y fuerzas armadas, tráfico de armas y el desplazamiento y robos de tierras de cientos de miles de campesinos. El país, o mejor, el común de la gente veía horrorizada, descubría entre estupefacción, incredulidad e indiferencia, esa ínfima y oscura parte de la historia pasada y presente del país, aparentemente desconocida por las elites, pero muy adherida a esa Colombia opulenta; a esa Colombia desentendida y por qué no misteriosa. Esa Colombia en donde sus más humildes hijos han sido ultrajados, martirizados, desmembrados vivos, desaparecidos para siempre con sana, infamia y cobardía en nombre de esa libertad y esa democracia capitalista, en donde todo vale, todo se compra y todo se vende y a muchos se les excluye. En nombre de ese sacrosanto derecho al poder y la fortuna venga de donde venga y obténgase como se obtenga sin importar los medios. Poco a poco fueron saliendo a la luz pública los horrores de esa guerra sucia, impulsada por el poder y la avaricia de una minoría elitista, por el imperio norteamericano, dejando regados en los campos más de 5.000 fosas comunes, con cientos de miles de muertos por esas tenebrosas hordas bien instruidas en el arte genocida, hordas sedientas de sangre y obligadas también a comer carne humana para retomar fuerzas y continuar la barbarie. La dictadura capitalista por nada se inmuta! La fiscalía se encargaría de comenzar el lúgubre trabajo de ubicar los cementerios clandestinos a todo lo largo y ancho del país, a medida que los arrepentidos esbirros confesaban unos cuantos sitios donde yacían los restos de los sacrificados, de las inocentes víctimas.

A la par con los asesinatos selectivos y las masacres, estos grupos de muerte se dedicaron a expropiar tierras y robar cabezas de ganado de propiedad de sus víctimas o de sus familiares, bajo la amenaza y el chantaje. El cabecilla narcoparamilitar Sergio Córdoba, alias 'el gordo', confesó ante la fiscalía, como obligaba a las viudas para que firmaran documentos de traspaso de tierras a manos de testaferros y cabecillas narcoparamilitares de otras regiones. Este criminal narro a la fiscalía, como en 1999 con otros 19 compinches llegaron al municipio de San Juan de Nepomuceno, departamento de Bolívar y asesinaron a Sergio Echeverri y Walter Cristo, propietarios de la finca San Sebastián, el asesinato de estos dos ganaderos se debió, según el paramilitar, al parecer por ser auxiliares de la guerrilla. Ante la amenaza las viudas y sus familias terminaron abandonando los predios y según testimonios los criminales montaron varios campamentos para albergar a otros paramilitares.

'El Gordo' manifestaría que sus declaraciones ante el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos la hacía con el fin de acogerse a la Ley de Justicia y Paz y obtener sus beneficios.

FOSAS COMUNES²³⁶

CALDAS

Victoria: diez cuerpos encontrados, ocho hombres, una mujer y un menor: Masacrados por los escuadrones de la muerte de Ramón Isaza, los investigadores del CTI de la Fiscalía no podrán establecer la identidad de las personas sacrificadas.

MAGDALENA

Sierra Nevada: doce cuerpos de campesinos fueron encontrados por la Fiscalía en los Municipios de Bellavista, Santa Clara y Sacramento; según la comunidad las masacres fueron ordenadas por José Mangones Fundación. Diez cadáveres encontraron el Grupo de Criminalística y Derechos Humanos de la Fiscalía en diez fosas. Los cuerpos habían sido torturados.

Otras cinco fosas fueron encontradas en el corregimiento el Soplador (zona bananera), con seis cadáveres.

SANTANDER N.

Catatumbo: Funcionarios de la Fiscalía encontraron 19 cadáveres en la región del Catatumbo, en dos fosas cavadas por los paramilitares. La Fiscalía estimó que en toda la región se podrían hallar 500 cadáveres diseminados.

Tibú: Los funcionarios de la Fiscalía, encontraron 32 cadáveres enterrados desde el año 2001 por los paramilitares que patrullaban en la zona.

TOLIMA

Lérida: En una fosa de más de cuatro metros de profundidad fue encontrada una camioneta Toyota con tres cadáveres calcinados al interior. Uno era un emisario de Mancuso, que llevaba 2.000 millones de pesos (700 mil euros aproximadamente) y los dos otros eran funcionarios de la fiscalía de Medellín La Toyota perteneció a Juan Manuel Vives Daza empresario de Santa Marta quien dijo que se la vendió al ganadero y ex diputado de Córdoba Cesar Cura, pero a la vez se la debía entregar a Hugo Alberto Márquez González; ninguno de los tres sabía que la Toyota estaba en una fosa. El padre de Cura fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

META

Mapiripán: la Cooperativa El cabecilla narcoparamilitar Manuel Piraban alias 'Pirata' indicó a las autoridades como llegar hasta la Jungla, un inhóspito lugar del Meta, en donde los paramilitares enterraron restos de personas asesinadas en diferentes masacres entre 1999 y 2001. Dentro de la fosa se encontraron 100 cadáveres, que deberán ser identificados con la ayuda de los parientes de personas desaparecidas en la zona.

CORDOBA

En este departamento se estima que existen más de 2 mil fosas comunes.

Por ser cuna del paramilitarismo y en límites con Antioquia, otro santuario de muerte; las previsiones sobre los asesinados pueden ser terroríficas.

PUTUMAYO

Zona Selvática: Grupo de los Derechos Humanos de la Fiscalía, halló 46 cuerpos sin vida y con signos de tortura en una zona selvática de este departamento

²³⁶ Existe una lista completa en el departamento de Derechos Humanos de la Fiscalía, de fosas comunes encontradas en varios departamentos del país. Se puede aseverar que existe un vasto cementerio paramilitar clandestino en Colombia.

La Hormiga: La Fiscalía encontró 50 cadáveres en varias fosas en zonas rurales del municipio de la Hormiga cerca a la frontera ecuatoriana. Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, dijeron que eran 107 los cuerpos exhumados en esta región ajusticiados por los paramilitares

CESAR

Curumaní: Diez cuerpos desmembrados fueron encontrados por antropólogos forenses del DAS y miembros de la Fiscalía. Cinco cadáveres mutilados se hallaban en varias fosas cerca de las fincas El Oscar y La Victoria, al parecer podrían corresponder a cuatro hombres y una mujer desaparecidos en el 2001. Los otros cinco cadáveres entre ellos dos menores de edad fueron hallados en la finca las Palmas. Los autores de estos crímenes fueron los escuadrones de la muerte comandados por Jefferson Martínez, alias 'Omega', mano derecha del cabecilla 'Jorge 40'. Martínez fue asesinado en Medellín por haberse apoderado de algunas rutas de narcotráfico en el Magdalena Medio.

ANTIOQUIA

Oriente Antioqueño: La Fiscalía y la gobernación de Antioquia lograron elaborar un mapa en el cual están ubicadas alrededor de 114 fosas que contendrían aproximadamente 246 cadáveres de los 213 desaparecidos en los 23 municipios del oriente antioqueño. Sin embargo la Fiscalía no prometió fecha para la exhumación por falta de recursos. Los grupos paramilitares que reinaron en esta zona pertenecían al cabecilla narcoparamilitar 'don Berna'. Sin embargo hay muchas fosas más por descubrir.

SUCRE

San Onofre: Funcionarios de la Fiscalía hallaron 88 cadáveres en más de una docena de fosas ubicadas en la región del Golfo de Morrosquillo, entre los ajusticiados se encuentran menores de edad y mujeres. Los horribles crímenes son autoría del narcoparamilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena' y de su mano derecha, alias 'el oso' quienes azotaron y llenaron de dolor la región convirtiéndola en un inmenso cementerio clandestino. A finales del 2005 Mercado desapareció y las autoridades encontraron su vehículo en Montería calcinado pero su cuerpo jamás ha sido encontrado.

LA GUAJIRA

Mingueo: En el corregimiento de Mingueo, la Fiscalía encontró 34 cadáveres pertenecientes en su mayoría a indígenas de la región, la exhumación fue practicada en dos fincas de la zona rural de Dibulla. Los crímenes habrían sido perpetrados por un grupo de paramilitares perteneciente a Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40', conocido de Álvaro Uribe.

En los 32 departamentos en que se divide el país, se estima que 29 poseen fosas comunes en las cuales los escuadrones de la muerte, formando parte de esa estructura estatal corrupta excluyente, criminal y antidemocrática con el apoyo de ganaderos, industriales, políticos, comerciantes, jerarcas de la iglesia católica, funcionarios y oficiales de las fuerzas armadas y sus subalternos empleados como sicarios, tiraron sus víctimas, en la más completa impunidad y desprecio por las vidas de estos seres humanos y sus familias. Estos son algunas de las fosas encontradas, la gran mayoría 'gracias' a las confesiones de los arrepentidos miembros de este ejército criminal.

Según la Fiscalía General, las exhumaciones realizadas hasta noviembre 2007, han sido las siguientes:

Fosas encontradas	973
Cuerpos encontrados	1153
Información preliminar	406
Identificación plena	13
Cuerpos entregados	105

«**No hay que confundir paramilitares con criminales**» declaración del “presidente” de Colombia Álvaro Uribe Vélez.

Dos hechos importantes fueron las semillas que posteriormente daría los frutos para conocer realmente los intrínquilos de la narcopapolítica: 1°) La disputa entre el director del DAS (Policía Política) Jorge Noguera y el jefe de informática de esa institución Rafael García. Y 2°) La captura de Edgar Fierro Flórez, alias 'Antonio', segundo hombre de 'Jorge 40' y quien fue capturado con un computador en el cual se encontró una inmensa lista de políticos y empresarios comprometidos con la mafia y el bajo mundo del crimen, sin estos dos grandes episodios, los colombianos no habrían conocido la media verdad que hasta hoy día, se sabe sobre la narcopapolítica, a pesar como ya lo hemos dicho, de las innumerables denuncias de las víctimas y organizaciones populares y de derechos humanos. También es muy importante aclararlo, que lo poco que se ha sabido sobre este bochornoso andar de la clase política tradicional y su complicidad con el crimen, no es gracias a la “política de seguridad democrática” del gobierno, como lo viene asegurando y gritando a los cuatro vientos Uribe. El uribismo ha sido el principal obstáculo para que el país y el mundo conozcan la repugnante verdad sobre las atrocidades que han ocurrido en todo el territorio nacional, ya que ellos mismos han participado activamente con los escuadrones de la muerte y son socios del narcotráfico.

El escándalo de la narcopapolítica se iría conociendo poco a poco con el descubrimiento del contenido hallado en el computador que pertenece a 'Jorge 40' y que fue decomisado a su lugarteniente Edgar Fierro Flórez, alias, 'Antonio', el 11 de marzo de 2006 en la ciudad de Santa Marta, cuando fue capturado. Fierro era otro 'desmovilizado' y desde el 2002 había sido retirado del ejército por sospechas de tener vínculos con paramilitares, y efectivamente poco después hizo parte activa de la banda narcoparamilitar del temible 'Jorge 40' cabecilla del 'Bloque Norte'. El peligroso criminal, al momento de su captura, tenía para movilizarse dos vehículos, uno de ellos con matrícula oficial, tenía consigo dos computadores protegidos con un sofisticado sistema con llaves y claves para evitar su lectura, ciento diez millones de pesos, tres armas de fuego y abundante documentación. Para las autoridades judiciales no fue nada fácil descifrar los códigos y claves para lograr la lectura de uno de los ordenadores que guardaba una fabulosa y a la vez macabra información. En los archivos del ordenador se encontró una relación de la nómina de personal del 'Bloque', una lista de armas, vehículos y los más terrorífico fue, la larga lista de casi cien líderes asesinados y otros tantos en espera de ser dados de baja, demostrando la campaña de exterminio en que continuaba el grupo narcoparamilitar de 'Jorge 40' a pesar de su desmovilización. Entre los ajusticiados estaban el abogado y líder comunal Pedro Pérez Orozco y quien actuó también como defensor de los derechos humanos en el Atlántico; Eislén Escalante Pérez, reconocido líder de desplazados y quien había llegado a Barranquilla en 1995 desde Cúcuta, de donde salió por amenazas de los grupos narcoparamilitares; Alberto Pacheco Rodríguez, otro líder sindical asesinado, presidente del sindicato Electrocaribe y quien, según los escuadrones de la muerte, pertenecía a las FARC. Pacheco fue acribillado en la casa de sus padres y estaba amenazado desde hacía cinco años; Jesús Caballero Escorcía y Miguel Espinosa Rangel, botánico el primero y a quien este grupo de muerte lo señaló como brujo y el abogado y líder sindical, el segundo acusado de colaborar con las FARC, aparecen como liquidados en esa larga lista donde están igualmente prostitutas, pequeños delincuentes y ladrones.

En la abundante documentación decomisada, los agentes de la fiscalía, encontraron centenares de nombres de ganaderos, empresarios, comerciantes y políticos del Atlántico, como también grandes propiedades en el departamento de Sucre. En la relación de propiedades aparece una que está en frente de la residencia del senador Álvaro García Romero (en prisión y acusado de pertenecer a grupos narcoparamilitares y asesinato). Según la prensa nacional (11-6-06), los bienes que aparecen en el computador serían del sanguinario cabecilla Rodrigo Pelufo, alias, 'cadena' y quien se encuentra desaparecido. Todo parece indicar, según los investigadores, que 'Jorge 40', ordeno recuperar toda la riqueza de 'cadena' porque considera que le pertenecen al narcoparamilitarismo y no a sus familiares.

También aparece en el ordenador un listado de contratos en el municipio de Coveñas y según los investigadores, el cabecilla 'Jorge 40', extorsionaba a todos los contratistas de este municipio de Coveñas que no tiene acueducto, pero nada en los dineros de las regalías petroleras. Este sería uno de los motivos del asesinato del líder social Luis Alberto Guevara, que encabezaba la red de veedurías ciudadanas del municipio y que venía denunciando los actos delincuenciales de los narcoparamilitares de 'Jorge 40'. Otro de los municipios que estaban en poder de los 'narcoparas' era el de Soledad en el departamento del Atlántico, la fiscalía encontró un informe de «ingresos y egresos del Hospital Materno Infantil de la Soledad, del 16 de abril 2004 a diciembre 2005». El narcoparamilitar 'Antonio', admitió que su hermana trabaja como jefa interna de control de dicho hospital y que su cuñado es subgerente de la misma entidad. También se encontró en los archivos del ordenador, todos los contratos firmados por la alcaldía de Soledad. Con lo anterior se pone de manifiesto que los cabecillas del narcoparamilitarismo siguen delinquiendo y asesinando a pesar de su compromiso de abandonar las armas, parar el narcotráfico y someterse a la ley de 'justicia y paz' del gobierno Uribe, que valga reafirmarlo, es mucho lo que vocifera y poco lo que hace por la seguridad de los ciudadanos del país. A todas luces, tanto el gobierno como los narcoparamilitares se están burlando de los colombianos y colombianas, de momento que no hay una real armonía de entrega de hombres y armas, una real convicción y voluntad para parar los crímenes y el narcotráfico por parte de esta mafia, mientras que el gobierno de Uribe funge mas como cómplice que como autoridad suprema para poner orden. No se ve una salida decorosa a los acuerdos del gobierno con los narcoparamilitares, pues, los unos callan y tapan los crímenes de los otros y, cuando se conocen tales hechos, el gobierno minimiza y hace como si nada hubiese ocurrido.

Para mayor preocupación, los datos encontrados en el ordenador de alias 'Antonio' hablan de un proyecto de los paramilitares del norte del país, sobre el puerto alterno de Palermo y el cual fue apoyado por Uribe, el espurio presidente ofreció todo su respaldo por considerarlo fundamental para la competitividad del Caribe. Los narcoparamilitares con 'Jorge 40' y 'Antonio' a la cabeza, tienen el proyecto de construir un puerto alterno al de Barranquilla. En este corregimiento de Palermo del municipio de Sitio Nuevo, la violencia continua y la guerra por el control de la tierra es sin cuartel; organizaciones de derechos humanos han denunciado el asesinato de varios de sus miembros y todo parece indicar que el asesinato del profesor y sociólogo Alfredo Correa de Andreis (acusado falsamente por el DAS y la Fiscalía de pertenecer a las FARC), se debió también a su firme defensa por los derechos de los habitantes de la zona. Otro de los interesados en este 'pedazo' de tierra, fue el gobernador de Barranquilla Trino Luna, (en prisión acusado por su pertenencia con grupos narcoparamilitares) que tenía la idea de construir un puerto carbonífero. El proyecto del puerto Palermo continúa vivo y la violencia también.

A la par con estos desagradables descubrimientos, en los primeros días de septiembre, el país comenzó a conocer las reales implicaciones de los políticos, fuerzas armadas y empresarios de la Costa Atlántica y otras regiones con el crimen organizado y la mafia. Poco a poco se fue desenredando el hilo conductor de los lazos entre el Estado y la mafia narcoparamilitar, siempre defendida por Uribe y su gobierno, en todo momento y por todos los medios posibles. También se ente-rana, el adormecido pueblo colombiano, de la estrecha cooperación de funcionarios de la rama judicial, funcionarios de la Fiscalía, empleados públicos nacionales y regionales y fuerzas armadas con el narcoparamilitarismo, y quienes a la vez recibían un 'salario' mensual por su valiosa colaboración, prestada con empeño a los cabecillas de la mafia. Fue así, como muchos de estos criminales lograron obtener documentos de identidad y pasaportes falsos con diferentes nombres, lograron zafarse de redadas en las cuales su captura era casi segura, pero que gracias a un llamado telefónico oportuno salían escapando; lograron la devolución de varias toneladas de cocama incautadas por la policía o el ejército y mismo, lograron ser ayudados para que mucho cargamento de drogas prohibidas salieran del país sin problema alguno, y lograron muchos de estos cabecillas del narcoparamilitarismo, que sus expedientes judiciales fueran desaparecidos o escondidos para evitar su curso normal y, lograron también, que muchos de sus compinches fueran socorridos para que en juzgados y tribunales sus 'negocios' fueran favorecidos o tratados con mano de

seda. Lograron corromper la conciencia de muchos ciudadanos, logrando nombrar uno de los suyos a la cabeza de ese Estado colombiano descarrilado y sin una alternativa de cambio a corto plazo.

Al mismo tiempo, las revelaciones del exjefe de informática del DAS (Policía Política) Rafael García Torres, eran contundentes. Hubo fraude electoral en toda la Costa Caribe colombiana en las elecciones para gobernadores, alcaldes y presidente de la República, por que se indujo al voto a mas de 500 mil ciudadanos en favor de la campana que orientaba los narcoparamilitares, esto sin contar con los amenazas. Para la elección de presidente de la república hubo, según García, manipulación de votos y millonarios gastos electorales fuera de norma.

El todo era conseguir la elección para presidente de la república de un tal Álvaro Uribe Vélez, político desconocido por el gran público, disidente del partido liberal y quien habría sufrido un atentado terrorista contra su integridad física en el 2001 por parte de las FARC, pero que años más tarde se conocería que había sido un auto atentado. El funcionario de la policía secreta, no escatimó palabras para contar como el director del DAS Jorge Noguera Cote, íntimo amigo suyo desde la niñez, era uno de los más cercanos amigos del criminal narcoparamilitar 'Jorge 40', con el que se había reunido varias veces y a quien, entre otros 'narcoparas', les había proporcionado una lista de sindicalistas y líderes populares para ser aniquilados, bajo el supuesto de ser auxiliares de la guerrilla. Igualmente contó García a las autoridades, que los candidatos de las preferencias de los escuadrones de la muerte del 'Bloque Norte', fueron llevados al Congreso de la República: tres senadores del Magdalena, tres diputados por este mismo departamento; dos senadores y dos diputados por el Cesar; dos candidatos para diputados por la Guajira y un candidato al senado por Bolívar. Añadió el ex secretario del ente de inteligencia, que José Gamarra (diputado), le pidió a él, y a Enrique Osorio de la Rosa (Jefe de Informática de la Registraduría Nacional), que estudiaran la posibilidad de ver como se hacía para garantizar la votación sin que la gente fuera a votar, porque la gente al verse presionada por los paramilitares, no iría a votar. 'Enrique es un tipo que trabajo 18 años en la Registraduría y el conoce muchísimo sobre el tema', afirmo García, y fue él quien diseñó todo.

Añadió Rafael García, que Enrique Osorio ordenó buscar los nombres de los votantes para que los jurados pudieran incluirlos en los tarjetones y así poder suplantar a los electores. El hombre de la Registraduría, también logró comprar cuatro censos electorales que fueron utilizados en los departamentos del Cesar, Magdalena, la Guajira y Bolívar. Según declaraciones de García a la Fiscalía, este programa cargaba los censos y mostraba mesa a mesa cada puesto de votación de los municipios que se querían manipular. (...) El programa de computador fue una herramienta de apoyo para el fraude que fue realizado a través de los jurados. Rafael García Torres, sería muy claro al declarar sobre la participación de Uribe en todo ese andamiaje de corrupción y tratos con la mafia: «Se que el señor José Gelves²³⁷ era el ideólogo del 'frente resistencia Tayrona' y quien dijo que ellos le habían hecho campaña a Uribe.

El mismo Gelves, confirmó que se había reunido varias veces con el candidato Uribe en los años 2001 y 2002 ¿Por qué nadie le ha prestado atención a eso? (Por qué ese señor le estaba haciendo campaña al doctor Uribe? ¿Por que recibía respaldo de é en su campaña?²³⁸. Añadiría García, que el se encontró con José Gelves en la tarde de las elecciones regionales y este le contó que venía de un almuerzo con Jorge Noguera, en el restaurante Panamerican y que también se encontraba Raúl Montoya, persona reconocida en Santa Marta y quien financió la campaña de Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo Rafael García Torres, no contaría todo a la Fiscalía, en la cual según sus propias palabras, no tenía plena confianza, pues se había filtrado una gran parte de sus declaraciones. Dijo a la prensa, que hubo cosas

²³⁷ José Gelves Albarracín, peligroso cabecilla narcoparamilitar, su escuadrón de la muerte 'frente resistencia Tayrona' es autor de varias masacres entre las que se encuentran niños y mujeres.

²³⁸ Declaraciones de Rafael García a la prensa nacional y Revista Semana. (09-04-2006).

muy delicadas de narcotráfico en la campaña presidencial de Uribe en el 2002, Innegables los vínculos de narcotraficantes y paramilitares y se pregunta por qué la Fiscalía no se dedica a averiguar quiénes son los señores Camacho Martínez y Néstor Caro, pedido en extradición este ultimo narco-traficante del Casanare e importante mecenas de la campaña de Uribe.

Vuelve a hablar del narcotraficante Raúl Montoya, quien le pago un salario mensual a Jorge Noguera, cuando este se desempeñaba como jefe de la campaña de Uribe en la Costa Norte y de Ramón Crespo, oscuro hombre de negocios muy amigo de Uribe. Caro y Crespo habrían financiado campañas al senado y habían logrado negociar con el DAS, la Fiscalía y la Dijín sanear todos sus problemas por un valor de tres millones de dólares. Entre los senadores favorecidos por el narcotraficante Caro esta el senador Germán Vargas Lleras y a muchos de sus amigos candidatos en su lista y quienes tienen fuertes lazos con los narcoparamilitares del sur del país.

El ex jefe de informática del principal ente de inteligencia del país, también hablaría sobre los nexos del secretario general de la entidad Giancarlo Auque Di Silvestre, con los narcoparamilitares de la Costa Atlántica y su participación activa junto con Noguera para ayudarles evitando ser arrestados cuando el caso se presentaba. García confirmo igualmente, que la hija del narcotraficante Raúl Montoya, Claudia Montoya fue traída desde Santa Marta por el director del DAS Jorge Noguera, como su asistente personal.

También confirmó que el general Rito Alejo del Rio, viajo en varias oportunidades con el director de inteligencia para reunirse con el criminal 'Jorge 40', quien apoyo, entre otras muchas, la campaña de Trino Luna a la gobernación del Magdalena. El gobernador Luna, uno de los fieles amigos de Uribe, se encuentra preso acusado de pertenecer a grupos narcoparamilitares, su hermano Juan Carlos era uno de los cabecillas de uno de los grupos de muerte de la Costa Atlántica, bajo el alias de 039.

En su paso por el Servicio de Inteligencia más importante del país y con dependencia directa de la presidencia de la república Jorge Noguera Cote, conspiró contra gobiernos extranjeros, entregó listas a los narcoparamilitares para el asesinato de líderes populares de izquierda y sindicalistas, participó en operaciones de narcotráfico y tuvo estrechas relaciones con el paramilitarismo; sin embargo, Uribe salió en su defensa diciendo que su director de inteligencia era inocente, un hombre honesto y de su total confianza. Incluso yo dormí una noche en su casa (sic)²³⁹. Ante monumental escándalo, el espurio presidente se negó en primera instancia a retirar a su amigo Noguera de la dirección del organismo de inteligencia, hasta que obligado por las circunstancias y las pruebas en contra de su hombre de confianza, le solicitó que renunciara, buscándole inmediatamente un cargo diplomático, lo nombró como embajador en Canadá, pero, afortunadamente el gobierno canadiense tuvo un comportamiento decoroso y rechazo tajantemente a este sombrío personaje en su territorio, acto seguido, Uribe probó con un país europeo y logró meter a Noguera como cónsul en Milano, Italia, país en donde había logrado imponer también a su ex Fiscal de bolsillo Luis Camilo Osorio como embajador, en agradecimiento por sus valiosos favores representados en numerosos expedientes de narcoparamilitares archivados (escondidos) o ignorados y sobre todo por haber precluido, sin un estudio serio, el expediente abierto en contra de su hermano Uribe Vélez, por los delitos de concierto para delinquir y conformación de grupos armados ilegales.

²³⁹ El ex coronel Heriberto Pardo declaración ante la Fiscalía, que en el año 2003 recién posesionado como Comandante de la policía del Magdalena, se produjo un grave atentado terrorista contra un hotel en Santa Marta. Dijo el ex oficial que mientras la Dijin y la Sijm señalaban a los narcoparamilitares de Hernán Giraldo como los autores, Noguera se empeñaba en acusar a las FARC. Al final la investigación demostró la responsabilidad del grupo paramilitar y desde ese momento las investigaciones contra los escuadrones de la muerte no se hacían conjuntamente con el DAS. También el ex director seccional del Cesar afirmó que Noguera, lo presionaba para que entregara resultados contra la guerrilla, pero que no estaba interesado en combatir a los escuadrones de la muerte. Héctor Montañés, jefe de escoltas también afirmó que el director del DAS se reunía con cabecillas del narcoparamilitarismo. En sus oficinas en Bogotá, Noguera recibió varias veces a Álvaro Pupo, primo de 'Jorge 40' y quien era el enlace entre él y el grupo criminal.

Y lo peor estaba por conocerse, al margen de las incestuosas relaciones del poder estatal con el crimen organizado, los colombianos irían a comprobar que los escuadrones de la muerte, la mafia de las drogas en complicidad con funcionarios de los diferentes estamentos de la nación, comenzando por el jefe de Estado y diferentes gobiernos de los Estados Unidos, habían tenido un comportamiento más que bárbaro; habían traspasado los límites de la monstruosidad, acudiendo a métodos crueles que ni siquiera una bestia salvaje y hambrienta estaría en la capacidad de efectuar. Todo valía en su desenfrenada lucha anticomunista, con tal de liquidar al enemigo. Mujeres, niños y Ancianos, campesinos en su gran mayoría, serían sometidos a crueles torturas, como aquel desafortunado hombre que amarraron y luego comenzaron a pelarlo vivo en medio de alaridos de dolor; a otras desafortunadas les abrieron el vientre y las descuartizaron vivas; campesinos que suplicaban por sus vidas mientras eran torturados y desmembrados; a muchas mujeres campesinas después de ser violadas, las amarraban de pies y manos, les abrían el vientre, les sacaban las tripas y luego los cuerpos eran rellenas de piedras para ser tiradas al río; a un niño le cortaron la cabeza y se la tiraron encima a los aterrorizados pobladores que fueron obligados a mirar el monstruoso acto; la desalmada ceremonia de tortura y muerte llegó a tal punto que muchos paramilitares se volvieron diestros en el oficio de descuartizar a sus semejantes, y entonces, apostaban cual era el más rápido, o quien descuartizaba en el menor tiempo posible a una de sus víctimas, hubo algunos que lo hicieron en tan solo quince minutos, mientras otros menos diestros se demoraban hasta una media hora, los ríos se llenaban de cabezas de niños, mujeres y hombres, troncos destrozados, brazos de todos los tamaños y piernas de todas las edades y características flotaban. Las aguas de los ríos perdían su diáfana belleza, tomando un espectral color púrpura de muerte. Marina, una de las tantas desafortunadas mujeres que se atravesaron en el camino de estas bestias pertenecientes a los escuadrones de la muerte, no tuvo el tiempo de dar a luz, los genocidas le abrieron su vientre y le sacaron su nene, Marina moriría en medio del horror²⁴⁰; esa es la rutinaria orgía de terror, maldad, locura y muerte de los protegidos del espurio presidente Uribe, a quienes no hay que confundir con criminales, según sus propias palabras.

«Robinson» miembro de uno de los escuadrones de la muerte del departamento de Putumayo, narro que para ser admitido en el grupo narcoparamilitar debió demostrar su lealtad y obediencia, para lo cual no dudó en cumplir la orden de asesinar a su propio amigo y luego descuartizarlo, lo que le valió aplausos y felicitaciones de sus nuevos compinches, también contó que lo obligaron a beber sangre y a comer carne humana extraída de los mismos muertos. El cabecilla encargado de su entrenamiento, cuando asesinaba a una de sus víctimas enterrándoles el cuchillo en el cuello y la sangre chorreaba, cogía un vaso y nos lo pasaba a uno por uno, diciendo que de esta forma sentían más sed de sangre. Y cuando no había otra cosa para comer, siempre escogían la parte más pulposa de los cadáveres, que eran las nalgas o los muslos. Esta práctica, dijo, era regular entre ciertos miembros de los grupos de extrema derecha y en especial destacó al cabecilla narcoparamilitar «muela rica»²⁴¹. Según otras declaraciones de paramilitares, el patrón traía al cliente amarrado de pies y manos y les mostraba como cortarlos en pedazos. Si el desafortunado gritaba, le cortaban la lengua, se le torturaba para que confesara si era guerrillero o si conocía guerrilleros, después se le picaba y se le enterraba en pequeños hoyos. A una guerrillera llamada Daniela, de diecisiete años, la capturaron y entre ocho paramilitares la violaron después de torturarla, la joven gritaba que la mataran, prefería morir a ser ultrajada por sus enemigos. En el norte del país, costa caribeña, se encontró una fosa común con varios cuerpos aparentemente de guerrilleros que fueron torturados por los paramilitares y luego enterrados vivos²⁴².

²⁴⁰ www.revolucioncolombia.blogspot.com

²⁴¹ Reportaje del periodista colombiano Hollman Morris, en su emisión 'Contravía' presentado en la Televisión del Sur. «Telesur».

²⁴² Declaraciones del ex fiscal Alfonso Gómez Méndez a la radio colombiana (25-07-2007)

Los cabecillas de la mafia y del paramilitarismo entre ellos: los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil; Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'don Berna'; Rodrigo Pérez Álzate, alias 'Julián Bolívar'; Jesús Ignacio Roldan, alias 'mono leche'; los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez; Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez'; Salvatore Mancuso; Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño'; Ramiro Vanoy, alias 'Cuco'; Héctor Germán Buitrago Parada, alias 'Martin Llanos'; Freddy Rendón Herrera, alias 'el Aleman'; Jairo Wilmer Varela, alias 'Jabón'; Francisco Zuloaga, alias 'gordo lindo' y Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'cadena' entre otros muchos, con la complicidad y participación de políticos, industriales, hacendados y fuerza pública, crearon y financiaron durante esa alianza maldita, la 'Escuela' de descuartizadores del narcoparamilitarismo en la que entrenaban en forma macabra y a la vez profesional a jóvenes para que supieran desmembrar a sus víctimas vivas en el menor tiempo posible y con la mayor agilidad. Uno de los 'profesores' de estas atroces maniobras es Juan Carlos de la Cruz Mozo, alias el Profe', 'Barranquillero' o Pueblito' y quien pudo ser conocido por las autoridades, gracias al celular de un desmovilizado paramilitar que seguía delinquiendo y que fue arrestado por su complicidad en la falsificación de dólares y euros. En las fotos recuperadas en dicho celular, aparece el feroz maniático destrozando a un joven de 22 años llamado John Moreno, que trabajaba en una tienda de fotografía en la población de la Hormiga, (Putumayo). Juan Carlos de la Cruz Mozo, dictaba 'clases' de como torturar a las personas y sacarles información o por el simple placer de sembrar el terror. Es un experto en desmembrar a sus víctimas de tal forma que puede enterrarlas en un hueco de medio metro de profundidad y tan solo 50 centímetros de ancho. Este sicópata, según algunos de sus antiguos 'alumnos', hablaba con frecuencia de Dios y de su devoción, en el brazo izquierdo tiene tatuada la imagen de la Virgen del Carmen; en el brazo derecho la del Divino Niño y colgando siempre de su cuello, una camándula bañada en agua bendita²⁴³. De este aparente hombre, se sabe que nació en Baranoa departamento del Atlántico, tiene 34 años y parece que se vinculó hace diez años a los escuadrones de la muerte del 'Bloque Central Bolívar' del narcoparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias 'macaco', preso en la cárcel de Itagüí, y quien al igual que sus demás compinches, sigue comandando desde la prisión, sus escuadrones de la muerte y haciendo negocios de narcotráfico, que manejan sus lugartenientes con la complicidad de la fuerza pública —Fiscalía, DAS, Ejército, Policía—. Por su parte el "Presidente" de la República de Colombia, se contentó en declarar: **«No hay que confundir paramilitares con criminales»**²⁴⁴. Y en el país no pasa nada.

Después de un estudio serio y una investigación a fondo hecha por el Alto Tribunal de Justicia Colombiano, con base en las declaraciones y diversas acusaciones, que contra congresistas y funcionarios habían proferido desmovilizados del narcoparamilitarismo y el ex jefe de informática de los Servicios Secretos (DAS) entre otros, comenzaría la captura de los criminales de cuello blanco.

Sería algo peor que el llamado Proceso 8.000, en la época narco presidencial de Ernesto Samper Pizano²⁴⁵. Lo que en un principio se creyó que eran simples rumores o chismes para desacreditar a reconocidos políticos, los colombianos y colombianas de bien que son una inmensa mayoría, descubrían

²⁴³ El cien por ciento de los miembros de estos grupos criminales de extrema derecha son devotos de la Virgen del Carmen y la Virgen María. Por ejemplo Carlos Castaño, en su 'dorada' época de masacres, reunía a su banda de soldados de la muerte junto al altar de la Virgen María para orarle antes de ir a cometer las masacres. Los sicarios del narcotráfico también se van a una iglesia a rezarle a la virgen antes de cometer el crimen encomendado.

²⁴⁴ Álvaro Uribe Vélez, en otra de sus declaraciones en defensa de los escuadrones de la muerte y narcotraficantes (7-12-2006)

²⁴⁵ Las diferentes denuncias hechas en 1994 sobre los aportes del narcotráfico (Cartel de Cali) hechos a la campaña del candidato) Ernesto Samper, salieron a la luz pública mediante varios casetes en los que se pudo comprobar que la mafia ayudó en el triunfo del candidato liberal. Además del propio presidente Samper, se vieron envueltos su vicepresidente... y el que fuera su ministro de defensa Fernando Botero, así como el tesorero de la campana Santiago Medina, que fue en últimas el que comenzó a 'cantar'. Igualmente congresistas y políticos de varias regiones fueron condenados por estar envueltos en el quehacer mafioso.

a esos 'impecables' señores, a esos que se hacen llamar las veinticuatro horas del día y por mera costumbre 'doctores', no eran sino unos facinerosos más, que compartían ideología con el crimen organizado y la mafia. Atrás, bien atrás quedaba esa 'celebridad' de políticos —hombres y mujeres— mañosos, corruptos e ineptos, que asistían al templo de la democracia colombiana a solo pasearse por los pasillos con los 'lagartos'²⁴⁶ de turno, exhibir sus costosos trajes y calzado y contar las alegres aventuras en sus viajes de turismo parlamentario por New York, Madrid, París, Barcelona, Moscú, London y otros lugares mas exóticos a costa del erario público. Ahora estaba de presente —olvidando el pasado reciente, ya que los colombianos y colombianas olvidan fácilmente— algo de magnitudes extremada-mente graves, algo monstruoso. El pueblo se enteraba de horribles sucesos, que las víctimas y organizaciones humanitarias habían denunciado sin que se le prestara atención alguna. Asesinatos recomendados, asesinatos selectivos, asesinatos crapulosos, masacres y asesinatos por robo y hasta asesinatos 'placenteros', cometidos por ese hijo putativo del Estado llamado paramilitarismo; que casi nunca actuó solo o sin la anuencia de la fuerza pública y políticos tradicionales (liberales y conservadores). Las denuncias que corroboran la complicidad de altos oficiales militares y de policías con los escuadrones de la muerte, no asombraron pues, ya era de conocimiento público sus sucias andanzas; pero lo realmente novedoso fue la prueba irrefutable de que un gran número de políticos marchaban al compás del crimen organizado y la mafia. Lo que confirmaba la declaración del cabecilla narcoparamilitar Salvatore Mancuso, cuando anuncio en el 2003 que ellos estaban representados en el Congreso de la República con aproximadamente un 35 por ciento de los parlamentarios. Sin conocerse hasta ese momento preciso, la también participación de gobernadores, alcaldes y concejales como miembros activos del crimen organizado y la mafia. (ver lista al final del libro).

En los últimos días del mes de septiembre de 2006 se registraron las primeras capturas de políticos, en especial congresistas, comprometidos con el crimen organizado y la mafia: Ángel Villareal, Guillermo Villa, Alberto Estrada, Nelson Stanpp Berrío, fueron inculcados por la Corte Suprema de Justicia de ser miembros activos de las bandas narcoparamilitares. Como era de esperarse, este hecho produjo un revuelo entre la mayoría de parlamentarios, los cuales redujeron sus actividades y se dedicaron casi expresamente a comentar los señalamientos y acusaciones que ya recaían sobre muchos de ellos y sobre todo a evaluar la legalidad de las capturas de sus colegas. Mientras tanto, los poderosos medios de comunicación, trataban de obtener las impresiones de los cabecillas narcoparamilitares presos en la cárcel de Itagüí, sobre estas capturas; las respuestas no fueron de un sí o un no, simplemente se escucho el argumento de que habrá un espacio en el que se puedan ventilar muchas más cosas, y el cabecilla Rodrigo Tovar Pupo, tal vez más osado en sus contradictorias declaraciones, dijo que hay que dar un debate de cara al país y no seguir poniendo más cortinas de humo a lo que ha sido la historia de Colombia; pidió hablar de la verdad para que no se vuelvan a cometer los mismos errores, pero que no sea una verdad para abrir nuevos juicios, que solo traerían mas odios y más violencia. Lo cierto en la práctica es la de que ni estos narcoparamilitares han contado toda la verdad sobre lo ocurrido, —especialmente sobre la complicidad de la clase política en su largo andar de crimen y terror, y lo segundo es que no se han desmovilizado verdaderamente, ya que sus grupos terroristas se encuentran intactos y continuaban delinquiendo.

El 18 de octubre de 2006 la Corte Suprema de Justicia, abrió proceso contra tres otros congresistas por conformación y financiación de escuadrones de la muerte y ocho días mas tarde el Alto Tribunal ordenó la captura de estos tres congresistas: Álvaro García y Jairo Merlano senadores y el diputado Erik Morris por los delitos de concierto para delinquir y conformación de grupos terroristas. Los dos senadores desacataron el llamado de la Corte y se dieron a la fuga, pero luego de varias semanas decidieron entregarse, después de declarar públicamente que eran inocentes, que las acusaciones en su contra eran un montaje, que comprobarían su inocencia, ante tan monumental error; pero casi un año después los dos siguen presos e incluso Álvaro García está acusado de haber participado en la masacre de Macayepo en el 2000 en donde quince campesinos fueron salvajemente asesinados a garrote por los

²⁴⁶ Nombre dado a los clientelistas profesionales que solo buscan puestos y otras prebendas politiqueras.

paramilitares²⁴⁷; además existe la declaración de Jairo Castillo, testigo protegido de la fiscalía y quien señaló a los anteriores y otros políticos, como miembros activos de los grupos de muerte. Por su parte Erik Morris se entregara a la justicia una semana después, declarando igualmente que era inocente. Morris tenía una estrecha relación con los cabecillas narcoparamilitares 'Cadena' y 'Jorge 40'. Los tres uribistas pertenecen a los partidos creados por la mafia narcoparamilitar 'Colombia Democrática' (cuyos fundadores fueron Álvaro Uribe y su primo Mario Uribe Escobar) y el Partido de la U'.

Todo parecía indicar que la complicidad de políticos, congresistas, ganaderos y empresarios con el narcoparamilitarismo, fenómeno que abarca casi todo el territorio nacional y que ha perdurado durante varias decenas, empezaba a derrumbarse, que esa aberrante impunidad sería un mal recuerdo y que mujeres y hombres, que tuvieron la oportunidad de ser elegidos congresistas, gobernadores, alcaldes, embajadores y concejales, no se sirvieran de tan honorable y privilegiados cargos, con el único fin de realzar el crimen, la corrupción y el cinismo, planeando desde sus fincas, alcaldías, gobernaciones y mismo desde la presidencia de la república, la eliminación física de sus más cercanos contendores políticos, el asesinato de jueces, fiscales, líderes sindicales, periodistas, profesores, estudiantes, testigos electorales y la matanza sin piedad de pobres campesinas, campesinos y dulces e inocentes niñas y niños. La destrucción del terror y la impunidad reinante en Colombia depende de la conciencia de su pueblo, pero también del Alto Tribunal de Justicia, aun si... depende de los mismos políticos y entre muchos de sus miembros se pasea el crimen.

El 28 de noviembre de 2006, la Alta Corte decidió llamar a indagatoria a seis congresistas mas por sus nexos con la mafia y el crimen organizado, los requeridos fueron Álvaro Araujo Castro; —hermano de la ministra de relaciones exteriores María Araujo Castro— Jorge Luis Caballero (prófugo); Luis Eduardo Vives; Alfonso Campo; Mauricio Pimiento y Dieb Maloof todos uribistas y pertenecientes a los grupúsculos partidos mafiosos creados en el año 2002, para respaldar a Uribe candidato a la presidencia. Dentro del pánico que se vivía dentro y fuera del Congreso, debido a las serias investigaciones del alto tribunal de justicia, un numero bastante elevado de parlamentarios no podían conciliar el sueño y sus noches eran desesperadamente largas y penosas, pero no comparables a las de sus víctimas en aquellas noches de muerte y violencia que estos mismos políticos les infringieron; sin embargo el sufrimiento estaba presente y la prueba fue esa angustia y esa escasez de dignidad mostrada por el conglomerado de parlamentarios, quienes, sin faltar a la verdad, parecían ratas abandonando el semi hundido barco en llamas. Un ejemplo de desespero, fue el del senador Álvaro Araujo Castro, cuando se encontraba en una reunión en la Casa de Nariño, (castillo uribista) sede del gobierno, al recibir la noticia de su implicación con grupos terroristas y la acusación por concierto para delinquir, en las investigaciones efectuados por magistrados de la Corte. Araujo palideció exhalando un 'no puede ser' y de inmediato sentencio: *'Si vienen por mí, vienen por la 'Conchi' —apodo familiar de su hermana la ministra—, y vienen por el presidente Uribe!* Los presentes trataron de tranquilizarlo, sobre todo para que no siguiera diciendo imprudencias, pero el joven parapolítico no se pudo contener y nombró también como posibles perjudicados a su primo el magistrado Jaime Araujo Rentería y al Procurador general —viudo de su tía Consuelo Araujo, llamada popularmente 'La Cacica', asesinada por el ejército en un rescate militar— Edgardo Maya Villazón. En la reunión que se había efectuado justamente para evaluar la situación y el alcance político sobre los tres congresistas uribistas implicados en la formación de grupos terroristas de extrema derecha, se encontraban el ministro del interior Carlos Holguín Sardi, (la cuota del tenebroso Cartel de Cali en el gobierno uribista) el secretario general de la presidencia Bernardo Moreno, (socio y amigo del narcoparamilitarismo y la presidenta del senado Dilian Francisca Toro, (socia de los 'narcos') entre otros. Al día siguiente, el ministro Holguín reconocería ante periodistas de la radio RCN, que efectivamente el senador Araujo había dicho lo que dijo, «El lo dijo, no se puede desconocer, lo manifestó en esa forma», reconoció Holguín. Por su parte la presidenta del

²⁴⁷ La Fiscalía en cabeza de Luis Camilo Osorio, decidió archivar el expediente en contra de Álvaro García Romero, por la masacre de Macayepo a pesar de las pruebas y una grabación en la que García hablaba de dicha masacre con el ganadero Joaquín García.

senado manifestaría que el propósito del senador Araujo, fue advertir lo que considera puede ser 'una cacería de brujas' (sic) para afectar al gobierno²⁴⁸. Al mismo tiempo, el Alto Tribunal al término de su investigación, había enviado copias a la Fiscalía en las que comprometían al ex ministro Álvaro Araujo Noguera, padre del senador y la ministra María Consuelo, por su complicidad con grupos terroristas, concierto para delinquir y secuestro. Álvaro Araujo Castro también sería acusado de secuestro. El ex ministro Araujo Noguera, no se presentó ante el juez y hasta este momento se encuentra fugitivo y buscado por la Interpol²⁴⁹. Estos sucesos eran un duro golpe para uno de los clanes más poderosos de la Costa Atlántica y del país. El Clan Araujo, (Álvaro padre, Alvarito, María Consuelo, Sergio, Martha y Ana todos impregnados con el virus narcoparamilitar) conocido por todos los habitantes de la Costa y más temido que respetado, tenía por fin que hacerle frente a la justicia a la cual debía rendir cuentas. Y vaya cuentas! Para el gobierno de Uribe, nada era fácil y su reputación era una vez más puesta a prueba. Pero nada cambiaba, todo seguía igual y como era ya una costumbre, los funcionarios del gobierno acusados de crímenes y delitos mafiosos eran respaldados por el propio presidente y mantenidos en sus cargos contra viento y marea. En este caso, la hija y hermana de los dos sindicados de delitos mayores, la ministra María Consuelo Araujo, se negaba a renunciar de su ministerio y el 'Patrón' Uribe rehusaba ferozmente apartarla del gobierno, máxime, cuando el había pronosticado que 'la Conchi', tenía talla presidencial. Cualquier asomo de dignidad de este gobierno y respeto hacia el pueblo colombiano, brilla por su ausencia.

Para Uribe la situación era desesperante, pero como "presidente" de un país como Colombia, en donde pasa de todo, pero, no pasa nada a la vez; y a la vez, la poderosa prensa sigue exaltando los dones de «Mesías» del espurio presidente y su 'alta popularidad', las cosas eran de otro color, difíciles de comprender.

A pesar de que su hombre de confianza y antiguo director de los Servicios de Inteligencia Jorge Noguera Cotes, caía preso acusado de concierto para delinquir, asesinato y otros cargos relacionados con el fraude en las elecciones en la Costa en el 2002; muy a pesar de lo anterior, Uribe lo respaldó y le ofreció una defensa a ultranza. Ahora, no solo varios congresistas bien conocidos por el presidente y uribistas irreversibles iban a prisión por sus nexos con el narcoparamilitarismo, también el hermano de su ministra de relaciones exteriores, el padre de esta misma y en general la familia Araujo muy próxima al presidente Uribe y al criminal narcoparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', quedaban al descubierto sobre sus andanzas con la mafia y los paramilitares. Y el 'Patrón Uribe no condenaba. Pues los Araujo se reunieron varias veces con narcoparamilitares de la Costa y en menor grado con los de Bogotá, acompañados de alcaldes, empresarios y candidatos que serían apoyados militar y económicamente por la mafia. De estas reuniones, Uribe candidato y Uribe presidente, tuvo pleno conocimiento, pues lo que se requería era unir fuerzas para lograr su elección a la presidencia y después obtener el mayor número de alcaldes, concejales, las gobernaciones de la Costa Atlántica y la mayor representación posible en el congreso a favor de sus minúsculos partidos, en especial del partido 'Alas' que encabezaba 'Alvarito' Araujo Castro, para así llevar a cabo, el programa de 'justicia y paz' con el narcoparamilitarismo, (un completo esquema de legalización de estos grupos e impunidad de sus crímenes) la 'seguridad democrática' del gobierno, basada en la persecución y liquidación de las guerrillas y la izquierda política en general, y el apoderamiento total de la maquinaria del narcotráfico que sería aglutinada en un solo y poderoso «Cartel Nacional», —después de la liquidación del poderoso 'Cartel de Cali' y la extradición de sus más notables miembros, como así venía ocurriendo—. Esa era a

²⁴⁸ Prensa Nacional y El Tiempo (16-11-2006)

²⁴⁹ El ex ministro Álvaro Araujo Noguera y el senador Álvaro Araujo Castro, están envueltos en el secuestro del narcoparamilitar ex alcalde Ellas Ochoa Daza. El secuestro y amenaza de muerte se motive porque Ochoa se negó a retirar su candidatura a las legislativas de 2002, algo que el clan Araujo tomó como un ultraje. Aunque Ochoa Daza mantenía buenas relaciones con los narcoparamilitares de la Costa, era aventajado por los Araujo, que eran compadres con 'Jorge 40' y se conocían de muchos años atrás.

grandes rasgos la «Refundación de la Patria», programada en los diferentes *pactos*²⁵⁰ llevados a cabo a lo largo y ancho del país, entre los políticos de extrema derecha, el narcoparamilitarismo, los industriales, una parte de la Iglesia católica y los terratenientes. De tal manera que hubo que hacerse varias reuniones —cuatro en total— en el sur del departamento del Cesar, con los 'narcoparas' Juan Francisco Prada, alias 'Juancho Prada' e Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez' y a las cuales asistieron igualmente el senador uribista Mauricio Pimientos y los diputados uribistas Miguel Ángel Duran y Jorge Luis Ramírez. En el norte del departamento las reuniones del clan Araujo y su comitiva se realizaron con 'Jorge 40'.

La canciller, María Consuelo Araujo, se resistía a renunciar a pesar de la gravedad de las acusaciones contra su familia y contra ella misma²⁵¹, había sido ministra de Cultura en el primer gobierno de Uribe, y se había retirado para hacer campaña para la reelección presidencial de Álvaro Uribe y vuelto a reintegrarse en tanto que ministra de Relaciones Exteriores. Ante las graves acusaciones en contra de su padre y hermano, fue citada por el Congreso de la República para que se explicara, la ministra se defendió diciendo que su padre y hermano eran inocentes y que confiaba en ellos; los miembros del partido social demócrata PDA (Polo Democrático Alternativo) pedían su renuncia, y con más rigor lo hizo la senadora liberal Piedad Córdoba; mientras que los congresistas uribistas (mayoría) parecían espectadores enfrente de un cuadrilátero de boxeo, apoyando a la ministra con todas sus fuerzas. Los pocos que esperaban la renuncia de la canciller, debieron esperar mucho más tiempo, pues Uribe la respaldó con vehemencia y se negó a todo pedido de separaría del cargo. Lo mismo, reuniones como la concertada con el gobierno alemán sería pospuesta, y otras muy importantes anuladas.

En cuanto al tío y primo del senador Álvaro Araujo, el procurador general Edgardo Maya Villazón y el magistrado Jaime Araujo Rentería, sus actuaciones no eran tampoco claras. El procurador había sido elegido con la ayuda de narcoparapolíticos y en especial de Álvaro García, y en retribución, Maya favoreció a García en un dictamen, para impedir que lo investigaran, algo muy frecuente en el país. Y el magistrado Araujo Rentería había sido acusado de reunirse con 'Jorge 40'. El motivo, según Jaime Araujo fue meramente humanitario, interceder por su novia que había sido secuestrada por los paramilitares, acusada de pertenecer a la guerrilla, con la intervención del magistrado, la mujer fue liberada por orden del cabecilla narcoparamilitar.

Pero no era el único alto representante de la justicia que se veía envuelto en estas oscuras aventuras, a la par con el escándalo de la parapolítica, también recaían sospechas en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tales como Leonor Perdomo y Rubén Darío Henao²⁵². La magistrada Perdomo, no en una sola ocasión, trato de favorecer intereses del narcotráfico, mediante decisiones controvertidas; y por su parte Henao, hizo parte del ejercito de abogados que se reunieron en Costa Rica, para elaborar y redactar un plan jurídico en defensa de los escuadrones de la muerte y la mafia de las drogas. Y el escándalo no paraba ahí, otro magistrado, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar Araujo, resultaba envuelto con la mafia internacional, después de protagonizar un fuerte encontrón con sus colegas del alto tribunal, por haber enviado una calurosa y elogiosa carta de felicitaciones al reelecto presidente Uribe, misiva que pretendía incluir a todos los miembros del Consejo Superior. Pero los magistrados en su conjunto reaccionaron en contra de dicha carta, no solo por su

²⁵⁰ Se estima en cinco los pactos realizados entre la clase política tradicional, la elite económica y el crimen organizado para 'refundar la patria'; estos son los pactos: Pacto de Ralito; Pacto del Magdalena; Pacto de los Llanos Orientales; Pacto de Antioquia y Pacto de Puerto Berrío (Santander).

²⁵¹ Su padre y sus hermanos estuvieron en la desmovilización del narcoparamilitar 'Jorge 40', Araujo Noguera recibió al criminal como si fuera el último héroe de una guerra con un abrazo de padre. Después le dedico unas tiernas y agradecidas palabras, a su lado estaban sus hijos Sergio y 'Alvarito'.

²⁵² Uribe hizo nombrar a su ex asesor jurídico en la presidencia de la república Mauricio González, como magistrado en la Corte Suprema de Justicia.

adulador contenido, si no porque ellos jamás fueron consultados, además de que, debía guardarse la debida y respetuosa independencia entre los diferentes poderes del Estado (al menos en apariencia). El magistrado Escobar Araujo se contentó en declarar que en su calidad de presidente del Consejo Superior de la Judicatura, él poseía la potestad y la libertad de dirigirse al primer mandatario de la nación, para felicitarlo por su reelección y de la cual todos los colombianos estaban felices (aparte de los más de 16 millones de abstencionistas). Pero el magistrado había incurrido en algo más grave y que sería revelado semanas después por parte de los investigadores de la fiscalía, cuando se desmontó un largo comercio de drogas entre Colombia e Italia y en el cual se encontraban a la cabeza empresarios italianos, utilizando como fachada lujosos almacenes de ropa y lujosos restaurantes en varias ciudades de Colombia. En un video y varias grabaciones, se puede constatar la entrañable amistad entre el magistrado Escobar y el narcotraficante italiano —uno de los dueños de los LUJOSOS almacenes y restaurantes— Giorgio Sale, también uno de los capos de la poderosa mafia italiana conocida como la D'rangheta y estrechamente ligada con el narcoparamilitar Salvatore Mancuso. En un video registrado en el año 2005 en el aeropuerto de El Dorado de Bogotá, se aprecia el encuentro entre Giorgio Sale y el magistrado José Alfredo Escobar, el primero abraza al segundo y después caminan por los pasillos del salón de embarque con destino a Cartagena. En una de las varias grabaciones en poder de la justicia, el magistrado Escobar habla con el hombre de confianza del narcotraficante Giorgio Sale, Francisco Javier Obando Mejía, originario del departamento de Manizales y quien le pide al magistrado su intervención ante los jueces para ayudarlo a él y a Sale con unos procesos judiciales²⁵³. Escobar se defendió argumentando que efectivamente esa conversación existió, pero que él nunca procedió a intervenir en dichos procesos, ni mucho menos, a pedirle ayuda a los jueces encargados, sobre el narcotraficante. Sale afirmó, que lo conoció en tanto que hombre de negocios y en cuanto a su conversación telefónica con el narcotraficante en la cual, este le pide un contacto con la Dirección de estupefacientes para aclarar unos asuntos, él lo puso en contacto con su pariente político Antonio Fernández de Castro, secretario general de la dirección²⁵⁴. Los investigadores lograron determinar también, que Giorgio Sale era socio con Salvatore Mancuso y era quien le manejaba las inversiones en España. Pero el asunto no termina ahí, ya que la esposa del magistrado Escobar, también mantenía estrecha relación con el narcotraficante Sale; algo extremadamente inquietante, si se tiene en cuenta, que la señora Ana Margarita Fernández de Castro, ocupaba uno de los cargos más importantes en la Procuraduría General de la Nación, era su secretaria general y es prima de Antonio Fernández de Castro. En una grabación telefónica en poder de las autoridades, la señora Fernández, deja un mensaje a Giorgio Sale, en la que ella le agradece a él con la ternura más emotiva, los regalos que este le envió y le dice que Jaime va a estar muy feliz con ese par de zapatos tan finos y elegantes; por su parte, ella le agradece ese fino bolso de gran marca parisina y en puro cuero. El magistrado Escobar pidió una licencia, según él, para aclarar dicho malentendido, mientras que su esposa renunció como secretaria general de la procuraduría; y ninguna investigación seria se ha adelantado contra los dos esposos, por su estrecha relación con el narcotraficante Giorgio Sale, preso en Italia recientemente junto a sus dos hijos.

A mediados de noviembre sería capturada en Bogotá la ex diputada uribista Muriel Benito Rebollo, quien se había rehusado a presentarse para rendir indagatoria ante la fiscalía, por sus vínculos con los escuadrones de la muerte y su amistad con los cabecillas narcopara-militares Rodrigo Mercado Pelufo, alias, 'Cadena' y Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino. Según las pesquisas, alias 'Cadena' acogía frecuentemente a la ex diputada Benito en su finca El Palmar en San Onofre, departamento de Sucre, donde la fiscalía encontró numerosas fosas comunes con un centenar de víctimas. El 17 de noviembre de 2006 la fiscalía emitió orden de captura contra Salvador Arana Sus, ex gobernador de Sucre y ex embajador en Chile, —nombrado por el propio Uribe— por el asesinato del alcalde del municipio de

²⁵³ Prensa Nacional y revista Semana (15-11-2006)

²⁵⁴ Radio colombiana (17-11 -2006)

Robledo Eudaldo León Díaz Salgado,²⁵⁵ y sus vínculos con los escuadrones de la muerte. El alcalde había acusado al político uribista Arana, de preparar su asesinato con la complicidad del comandante de la policía de Sucre Norman Arango, por haber hecho las denuncias sobre las prácticas de extrema corrupción del político y acusado a estos dos 'personajes' de compartir con el narcoparamilitarismo. Y efectivamente Salvador Arana, pagaría al cabecilla narcoparamilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias, 'Cadena', para que eliminara al alcalde.

Uno de los testigos de ese crimen fue el mesero de un restaurante en donde se hallaba 'Cocha', jefe del grupo de sicarios a las órdenes de 'Cadena' y quien ordenaba terminar el trabajo ya pago por Arana, de matar al alcalde Díaz. Después de su declaración a la fiscalía, el mesero del restaurante 'La Becerra', Diógenes Mesa Villalobos, sería asesinado. Increíblemente el testimonio del empleado del restaurante fue descalificado por el propio Fiscal General Luis Camilo Osorio, quien de su puño y letra firmó el acto inhibitorio para investigar al ex embajador del gobierno de Uribe, Salvador Arana.

Uno de los conceptos y el más alucinante en el que se pueda pensar, lo aportó el propio Fiscal Osorio, —cómplice del narcoparamilitarismo con respecto al testigo: «se aprecian inverosímiles, pues no puede creerse que una persona con la trayectoria y formación del doctor Salvador Arana Sus (médico cirujano y sin antecedentes penales) participe en conductas tan reprobables como las que gratuitamente se le endilgan»²⁵⁶. Otro testigo, este sí protegido por la Fiscalía, el ex paramilitar Jairo Castillo, alias 'Pitirry', (exiliado en Canadá) contó que escribió en varias oportunidades al Fiscal Luis Camilo Osorio, contándole sobre los nexos de varios congresistas con el narcoparamilitarismo y las actuaciones del gobernador de Sucre Salvador Arana. Dijo que incluso se logró entrevistar con el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Andrés Ramírez Moncayo, —luego se desempeñó como vice fiscal— y quien le sugirió no denunciar al gobernador Arana, ya que se trataba de un hombre «buena gente». Castillo afirmó igualmente, que el advirtió como iban a asesinar a la fiscal Yolanda Paternina, quien fue la persona que trabajo con él sobre las denuncias. Tres años después, un fiscal delegado ante la alta Corte, deberá establecer si Arana cometió más crímenes. Entre tanto, la fiscalía lo acusa de crear y promover grupos terroristas, asesinato, falsedad y otros cargos. El ex diplomático Arana, se encuentra fugitivo y desde donde se encuentre sigue haciendo política y controlando sus huestes para las elecciones de octubre de 2007, como igualmente lo hace el noventa por ciento de los políticos detenidos por participar en la narcopapolítica.

En declaraciones concedidas a la prensa nacional (20-11-2006), el ex paramilitar Jairo Castillo se confesó:

«No me arrepiento de haber sido paramilitar y quiero es pedirle perdón a mi departamento (Sucre) por saber tantas cosas y no haberlas dicho a tiempo.

Pero, es que el que denunciaba se moría y hoy soy el único testigo que queda vivo. Estoy muy agradecido con la Fiscalía porque me protegieron con mis cuatro hijos y mi esposa... cada vez que abría la boca para denunciar, los malos se enteraban (...) La alianza entre políticos y narcoparamilitares viene desde 1996. Quien va a buscar a los paramilitares es el ganadero y diputado Joaquín García, el se reúne con el 'profe' Vicente Castaño y (Salvatore) Mancuso, está acompañado también del gobernador Miguel Nule Amin, Eduardo Chaui y Javier Piedrahita, un 'narco' duro de la región. Ahí comenzaron a conformarse los grupos. Y comienza el plan limpieza y la gente a temblar. En Sincelejo todas las noches había un muerto, dos muertos. Ahí cogen fuerza los ellos. Yo era el escolta de Joaquín por medio del ejército y portaba un carnet del B-2

²⁵⁵ La denuncia del alcalde fue vista en la televisión por millones de colombianos en uno de los circenses consejos comunitarios de Uribe, el 1° febrero de 2003. Díaz le pidió al "presidente" Uribe que no lo dejara matar. Mes y medio más tarde el alcalde sería asesinado, y su suplica quedó en el aire.

²⁵⁶ Revista Semana

(Inteligencia Militar) para poderme chapiar (identificarse) sin problemas. Me da pesar de mi país... pero si quieren hacer la limpieza, es mejor que el país conozca todos esos nombres. Por ejemplo: 'La Gata' (Enilce Lopez) y 'el gordo', Álvaro García son íntimos. Ella es muy importante en el movimiento por que maneja casi todo Sincelejo. Toda la vida ha tenido matones a sueldo muchachos de Medellín a quienes paga un salario de 150 mil pesos y un carro. Ella ordenó la masacre del Salado, en Carmen de Bolívar en el 2002 y asesinaron a 38 personas. Ella le entregó a Felipe, alias de 'pitufo', jefe de finanzas del 'mono' 'Salvatore) Mancuso, 30 millones de pesos en la mano para contratar los hombres y los camiones. (...) A mi me conocía mucha gente y recogía las finanzas de Sucre y los límites de Bolívar y Córdoba.

Salvador Arana acordó ponerles una cuota a los tenderos. A los que vendían gaseosas y pan. Ellos pagaban 100 mil pesos al mes. Con ellos yo recogía 3 millones mensuales. A los municipios se les cobraba cada dos meses 4 o 5 millones, dependiendo del dinero de las regalías (del petróleo). Y los ganaderos eran por hectárea. Si era un ganadero con bastante ganado, eran 50 millones por año. Para los que no pagaban, había un plan 'veneno' en el que se les mandaba gente armada con fusil y se les daban instrucciones para que hablaran con la organización. Y después entraba el plan 'purgante', que era cuando venían a mí, arrodillados. Yo les decía pues venda esa h.p. (hijueputa, término vulgar y muy común) finca o póngala a producir. Y si no pagaba, lo mataban. Así de sencillo. Del miedo le vendían las fincas a los paramilitares. A si se volvieron ricos poco a poco. De no tener nada, hoy tienen fortunas de 3.000 millones de pesos. Y la mayoría de las fincas está a nombre de campesinos bobos (tontos) que tuvieron que prestarse para eso.

Yo tengo por ahí alguna platica, consignada en cuentas con nombres de los muertos de las masacres. Porque nada podía estar a nombre de nosotros, ni siquiera los celulares. Todos eran a nombre de muertos. Y así tienen oculta la fortuna. Y a través de doña Enilce ('la gata') se lavaba mucho dinero con el chance (apuestas derivadas de todas las loterías del país). Ahí es donde ella se vuelve una dura con esa gente. De los implicados hablé de Salomon Feri, ahí está en la Ceja, ahora le dicen '08'. El era un Hitler en el departamento. En Sincelejo no quedó un vendedor público vivo por culpa de él y sin embargo, entraba a la policía con sus carros robados, llenos de paramilitares. Decía que era mayor retirado. Su hermano es representante a la cámara (diputado). También hablé de varios arroceros, empresarios de palma africana, ganaderos y 'paisas' que tienen las mejores tierras en Córdoba gracias a los paras. Me refiero a una gente que está cerca al alto gobierno. Conozco finca por finca y sé como las adquirieron.

Mire para Córdoba y verá un personaje muy importante... Por ejemplo Mario Uribe (senador y primo del presidente) y por eso no se atreve a hablar fuerte. Vamos a esperar, que dice la Corte. Usted más adelante se va a dar cuenta. O si no pregúntenle si conoce a 'Pitirry, a ver qué cara pone. ...Le conté a la Corte de las relaciones de él, con Olegario Otero de Sahagún. Es un ganadero paramilitar. Es el primer hombre que dio los auxilios a los paramilitares de San Marcos y Sucre en 1995. Les dio R-15 y munición que le daba el Batallón de Infantería. Y el promotor de los sicarios en esa época era Fedegan (Federación Nacional de Ganaderos) y el que ayudaba, un hombre de Corozal, fue premiado con una embajada.

Hay que esperar a la Corte que ya se puso los pantalones.”

...

El monumental escándalo político que surgió en el país, en tan solo unas cuantas semanas envolviendo, no sólo a la clase política tradicional, sino también a magistrados, jueces, funcionarios, empresarios y como era lógico a altos mandos militares y de policía, fue bautizado por el pueblo, la «NarcoParaPolítica». Narcoparapolítica en la cual, el espurio presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, aparece como uno de los principales actores, sino, el principal. Pero que, envuelto en esa especie de capa de teflón —fabricada por las mafiosas elites— que lo ha inmunizado contra cualquier

ejercicio democrático de destitución por su connivencia en esa vorágine de muertes, narcotráfico y terror. El narcoparapolítico Uribe, argumenta con su apropiado vocabulario soez y manipulador, que tales acusaciones son falacias de los terroristas, pero cayendo rápidamente en contradicciones, sin dar una explicación clara y convincente sobre sus peligrosas andanzas y reuniones con cabecillas criminales y el bajo mundo de la mafia. Pues, consciente de la ilegalidad de su alto cargo de presidente, prefiere eludir olímpicamente el obligado debate sobre su comportamiento tanto como hombre político como el de ciudadano. Uribe tal vez olvida que, él, tanto como sus compinches, no son eternos en el poder.

El 15 de marzo de 2007 otro narcoparamilitar conto a la Corte Suprema de Justicia, como Freddy Rendón Herrera, alias, 'el Alemán' se reunió con miembros del partido liberal para elegir los congresistas por el departamento de Antioquia, para el periodo 2002-2006; en una de estas reuniones estuvo el que sería gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, —retenido por la guerrilla de las FARC y muerto en el fallido rescate ejecutado por el ejército, ordenado por Uribe, en mayo de 2003—. En dicha reunión quedó pactado entre el cabecilla criminal y los políticos de ese departamento, que en el primer año de legislatura la silla sería ocupada por el diputado Manuel Darío Ávila, luego el turno sería para Jesús Doval, el tercer año correspondería para Estanislao Ortiz de Turbo y para el último año Cesar Augusto Andrade Moreno. También 'el Alemán' negociaría con el candidato al senado Rubén Darío Quintero Villada, (secretario privado del otrora gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez) a quien le dijo que no se preocupara por la financiación de sus campaña, imponiendo en segundo renglón de la lista al profesor universitario Elbo Enrique Escobar Zúñiga, mientras que en el tercer renglón, Quintero colocaba a su amigo y acaudalado empresario Humberto Builes Correa. Rubén Darío Quintero Villada, fue elegido sin problema alguno con un número abultado de votos y tres meses después renunció a su curul, dejando a Humberto Builes Correa en calidad de titular en el congreso, y cumpliendo así parte de su compromiso con el narcoparamilitar a quien también le otorgó varios puestos burocráticos en el departamento y en varios municipios. Quintero aspiraba a la gobernación de Antioquia. Según la prensa colombiana, en la hacienda de la Virgen de la Caridad del Cobre, entre las poblaciones de Turbo y Necoclí, fue famosa por los desfiles de políticos y empresarios que iban a pedir avales o a rendirle cuentas al narcoparamilitar Freddy Rendón Herrera, alias 'el Alemán', máximo cabecilla del bloque criminal 'Helmer Cárdenas'.

En una entrevista a la prensa colombiana (18-12-2006), los hermanos narcotraficantes Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Munera, apodados «Los Mellizos», dijeron que el gobierno de Uribe no les había cumplido las promesas y afirmaron que el ministro del interior Sabas Pretel de la Vega, les prometió no ser extraditados si apoyaban la reelección de Álvaro Uribe. 'Los Mellizos' y el 'narcopara' Vicente Castaño, se escaparon de la zona de concentración de Ralito, devenida en un centro de fiestas, bacanales y refugio de narcotraficantes cuando el gobierno, bajo presión nacional e internacional, ordenó la reclusión de los cabecillas narcoparamilitares en la cárcel de la Ceja, en el departamento de Antioquia. Desde la clandestinidad afirmaron igualmente a la prensa, que la gran mayoría de los cabecillas narcoparamilitares aportaron mucho dinero para la campana de Uribe, a cambio se les prometió la no extradición hacia Estados Unidos, y el envío de todos los cabecillas de la mafia a colonias agrícolas, administradas por ellos mismos; igualmente habrían concertados las posibles zonas en donde podrían ubicarse, como Urrao, La Ceja, la Sierra Nevada y el Magdalena Medio²⁵⁷, en lugar de cárceles, pues los cabecillas de la mafia no estaban dispuestos a aceptar ese tratamiento, y además de una condena no mayor de ocho años. Lo anterior, dijeron 'Los Mellizos', fue aceptado en una reunión llevada a cabo en Copacabana, (Antioquia) en donde el ministro del interior Sabas Pretel y el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, dejaron en claro que ningún cabecilla iría a la cárcel, sino serían enviados a Colonias Agrícolas, y lo mismo, que podrían circular libremente con una manilla o grillete electrónico. A la Pregunta sobre que más habían hablado con el ministro Sabas Pretel en esa reunión, 'Los Mellizos'

²⁵⁷ Estos lugares en donde pretenden ubicarse los cabecillas del narcotráfico y de los escuadrones de la muerte, están en manos de ellos y los políticos en su mayoría pertenecen a sus toldas.

manifestaron, que el presidente les enviaba un caluroso saludo y que también el “presidente” no los iba a defraudar y mucho menos a extraditar. Un mes antes de la reelección del 'Patrón' Uribe, el ministro Pretel los visitó, según contaron 'Los Mellizos', y les dijo, que ese no era el momento para debatir el proceso de paz, sino que era necesario enfilarse para garantizar la reelección de Uribe. «Es más, nos dijo que existía la posibilidad de una segunda reelección presidencial, y agregó, que él esperaba lanzarse a la presidencia en el 2010». Sobre el aporte a la campaña reeleccionista del presidente Uribe, 'Los Mellizos' respondieron tajantemente «pregúntenle a cada uno (de los cabecillas) cuanto aportó».

Sobre las estrechas relaciones entre políticos y narcoparamilitares, respondieron que era una realidad y que el país con el paso de los días se llevaría una gran sorpresa y que la clase política tradicional hizo preacuerdos con los narcoparamilitares para la reelección de Uribe, añadiendo que el proceso judicial contra congresistas, evidencia que el fenómeno de la narcoparapolítica es un engendro del Estado, patrocinado por los más poderosos sectores de la economía, la política, civiles, prensa y fuerzas armadas. Sobre la propuesta de influyentes abogados sobre una ley de perdón y olvido que cobije a narcotraficantes y paramilitares, manifestaron que no eran ellos los que lo habían planteado, señalando a un grupo de congresistas y en especial el senador uribista Miguel de la Espriella, —quien, antes de ser encarcelado, pasaba la mayor parte de su tiempo en la Casa de Nariño, sede del gobierno central, que en el mismo parlamento su lugar de trabajo—. Sobre una posible negociación con los Estados Unidos, respondieron «Estados Unidos utiliza a Colombia, —incluidos ejército, fiscalía, jueces, entre ellos los magistrados de la Sala Penal de la Corte— para luego negociar debajo de la mesa con los acusados de narcotráfico. De allí que, sería recomendable analizar lo de la extradición y crear una ley de sometimiento a la Justicia, que establezca que los bienes pasen al Estado colombiano, pues los colombianos estamos poniendo los muertos y entregando la soberanía, mientras los gringos se quedan con las ganancias del negocio, tal como ocurrió con la fortuna de los hermanos Rodríguez Orejuela. No es justo ni equitativo...

Mientras que los cabecillas fugitivos del narcoparamilitarismo develaban secretos altamente comprometedores para Uribe y su ejército de parlamentarios y ministros; las autoridades judiciales — Corte Suprema y Fiscalía— se reunían para coordinar investigaciones contra empresarios, periodistas y ganaderos vinculados con el narcoparamilitarismo. La lista de políticos sospechosos de entretener relaciones con la criminal y poderosa mafia, llegaba al centenar. La Fiscalía se encargaría de llamar a declarar a todos los que de una u otra forma aparecen mencionados en el computador de 'Jorge 40'. Una labor extremadamente difícil y que devenía lenta y engorrosa para las dos instituciones, pues, con el pasar de los días y las declaraciones libres de los narcoparamilitares y las confesiones a medias de congresistas y funcionarios, el número de señalados o acusados de tener vínculos con el crimen organizado y la mafia, aumentaba como la espuma; y lo peor, que la justicia carecía de medios humanos y económicos para hacerle frente a tan enorme reto.

Sin embargo los arrestos de políticos continuaban, con el impulso serio y profesional de la Corte Suprema de Justicia; esta vez eran concejales y funcionarios de alcaldías y gobernaciones que la Fiscalía detenía por su complicidad con la mafia y los escuadrones de la muerte; los concejales de Sincelejo José David González y Yair Acuña Cardales militantes del partido de la «U» (uribista), y el secretario de gobierno de Sincelejo Daniel Cure, por ejemplo, por sus alianzas y reuniones con 'Jorge 40'. Alcaldes de la talla de Hernando Molina, apodado 'nandito', ferviente seguidor de las tesis uribistas y primo hermano del senador Álvaro Araujo Castro y la ex ministra María Consuelo Araujo Castro e hijastro del procurador general Edgardo Maya Villazon, fue requerido por la Fiscalía General, acusado de concierto para delinquir y financiamiento de grupos terroristas. Pero a pesar de este trabajo contra los criminales y sus compinches políticos, los escuadrones de la muerte continúan con su labor de asesinato, robo, desplazamiento forzado de la población civil, mientras el comercio del narcotráfico sigue igual o mejor que antes de las susodichas desmovilizaciones. Pues, la connivencia entre políticos y mafia sigue entera y lo que es peor, los que se encuentran presos, tanto de un bando como del otro, siguen teniendo influencia sobre sus electores los unos y sus ejércitos los otros. La persecución y

asesinatos contra sindicalistas y líderes populares prosiguen en igual intensidad; entre tanto las denuncias contra las fuerzas armadas y de policía son reiterativas en la violación de los derechos humanos de la población civil. Detenciones arbitrarias y ajusticiamientos crecen en todo el país. No obstante el soberbio silencio de la poderosa prensa, sobre los atropellos y crímenes de los agentes del Estado y la interrumpida y desenfrenada violencia narcoparamilitar, —en el país existe un solo periódico de circulación nacional, 'El Tiempo' de Bogotá— la pequeña prensa y radios locales alternativos, como también las organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares y humanitarias se esfuerzan en hacer pasar el mensaje de lo que está ocurriendo en lo profundo de esa Colombia olvidada, en esas aldeas y pueblos abandonados por el Estado, en los cual hace presencia únicamente el poder militar, que no es muy deseado ni mucho menos saludable para la población en general y rural en particular²⁵⁸. Sin embargo, cada día en el pedestal de la poderosa prensa, Uribe aparece en primera línea con su propaganda estereotipada a mano, martillando siempre sobre las bondades de su estupenda política de 'seguridad democrática' que, según él y sus altos mandos militares, le ha dado tranquilidad a los colombianos (?!). Y para que todos los habitantes del país respiren eufóricos y tengan momentos de relajación, la poderosa prensa emite con bombos y platillos, el imperecedero cliché sobre las 'fiables' encuestas, en las que el señor presidente de la República (el 'Mesías') mantiene una popularidad —desde el primer día de su mandato 7 de agosto de 2002— que varía entre el 70 y el 75 por ciento de “aceptabilidad”, única en el continente Americano... y por qué no, en el mundo; pues, hasta los mismos criminales hablan bien, pero muy bien del “señor presidente”, a quien la narcoparapolítica pareciera no concernirle. Máxime, cuando todos los caminos del narcoparamilitarismo conducen hacia Álvaro Uribe Vélez!

Y si como lo anterior no bastara, hasta la misma literatura sufriría en el país, las arremetidas del crimen organizado, como bien lo señaló el periodista Héctor Abad Faciolince, cuando escribió: «Los Hampones Literatos, Los asesinos que han escrito la historia de Colombia con tinta de sangre y pluma de plomo, ahora pretenden contarla también a su manera, y con todas sus verdades a medias o sus mentiras enteras, en letras de molde y en papel de imprenta. La historia de Colombia, al menos la que la mayoría de la gente lee, la están escribiendo los bandidos. ¿En que se han convertido los semáforos de Colombia? En un basurero editorial. A veces en ediciones piratas, a veces respaldadas con el pie de imprenta de editoriales supuestamente serias, firmadas por periodistas de pacotilla o por tintilleros a sueldo, los hampones están dedicados a contar sus fechorías disfrazándolas de hazañas. Lo más grave es que el público devora esa patraña con avidez, porque esa vieja confianza ingenua en que aquello que se publica bajo forma de libro tiene que ser verdad, o que el que ya no tiene nada que perder lo dirá todo sin ambages, cuando lo cierto es que todas las personas buscan maquillar de moralidad incluso sus fechorías más abominables. Son libros escritos para lavarse las manos. Y como sus lectores son incultos, en general, no les importa que las justificaciones sean increíbles.... Todo, forma parte de esa especie de veneración nacional a los violentos que han tenido éxito en su camino pavimentado con muertos. Hay que creerle a los machos que mataron tanto»...

En medio de toda esta avalancha de escándalos, el círculo más cercano a Uribe, y la familia del mismo presidente no escapaba al señalamiento y acusaciones de pertenecer al narcoparamilitarismo. Empezando por su principal asesor José Obdulio Gaviria Vélez, primo hermano del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, a quien en tiempos inmemorables, visitaba en su dorada cárcel llamada 'La Catedral', siendo una especie de mensajero privilegiado del criminal Capo y de quien recibiera gruesas sumas de dinero. También José Obdulio, es primo hermano de Gustavo Gaviria Rivero, uno de los hombres más sanguinario del Cartel de Medellín, y primo en segundo grado con Carlos Mario Alzate Urquijo, alias 'Arete', jefe de los sicarios de Pablo Escobar, quien organizaría en 1989 la voladura en pleno vuelo del avión de Avianca y pusiera la potente bomba contra el DAS en Bogotá. Y para no alargar el tema y aburrir a nuestros ato-nitos lectores, los dos hermanos del asesor presidencial, Luis Mario y Jorge Fernando Gaviria Vélez, purgaron condena de varios años en Estados Unidos, por tráfico de

²⁵⁸ En cada lugar donde se establece una guarnición militar, aparecen los grupos paramilitares.

cocaína y desde hace varios años ocupan importantes puestos en la administración Uribe, tan calladitadamente como uno pueda imaginárselo. Como es bien conocido a principios de marzo de 1984, la policía nacional tomo por asalto el complejo cocainero de Tranquilandia y Villacoca de propiedad de Pablo Escobar; José Gonzalo Rodríguez Gacha; los hermanos Juan David y Jorge Luis Ochoa Vásquez y Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, los poderosos propietarios de los carteles de Medellín y Cali, quienes serian los autores del asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, en el gobierno de Belisario Betancur Cuartas en 1984. Durante los allanamientos a Tranquilandia, la policía decomiso un helicóptero Hugues-500 modelo 369-D, con matrícula colombiana HK2704-X, que le perteneció al padre de Uribe, Alberto Uribe Sierra, socio de Pablo Escobar, y que en ese momento era propiedad de los hermanos Uribe Vélez. Y justamente un hermano del presidente, Santiago Uribe, conformaría y financiaría el grupo terrorista «Los Doce Apóstoles» entre los años 1993 y 1994 que asesinó a varias decenas de campesinas y campesinos, este escuadrón de la muerte que tuvo sede en la hacienda 'La Carolina' de propiedad del presidente Uribe y sus hermanos y en donde también se sabe que se torturo a campesinos acusados de pertenecer a la guerrilla²⁵⁹; aunque todo ha sido negado en bloque por Uribe y su hermano Santiago, este aparece en una foto un mes después del asesinato del ministro de justicia Lara Bonilla²⁶⁰, con sus primos segundos los hermanos Juan David y Jorge Luis Ochoa Vásquez, en plena celebración. El hermano mayor del mandatario Álvaro Uribe, Jaime, también estuvo preso en la IV Brigada del ejército en Medellín, pues los Servicios de Inteligencia militares de la época, descubrieron sus contactos de radio operador agrónomo con Pablo Escobar, el acusado negó la relación sin convencer a nadie, pero igual-mente fue puesto en libertad, no se sabe cómo, Jaime Uribe murió de cáncer. Otro familiar del espurio presidente Uribe, el senador Mario Uribe Escobar, posee vínculos con los escuadrones de la muerte y no solo ha sido favorecido por este criminal grupo, en la transferencia de las mejores tierras —robadas— en el bajo Cauca antioqueño, sino que también obtuvo votos gracias a la amenaza narcoparamilitar sobre la población en Córdoba. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, le abrió una investigación preliminar por sus vínculos con estos grupos terroristas. —también se le abrió investigación a la senadora Zulema Jattin²⁶¹, uribista del partido de la 'U', y al presidente del partido conservador de la coalición uribista Julio Manzur—. Sin embargo el senador Uribe, militante de la extrema derecha durante más de tres décadas, se defiende, al igual que sus primos y familiares de no tener vínculos con los grupos terroristas y de achacarle tan 'infame' señalamiento, a los guerrilleros y simpatizantes de los grupos rebeldes alzados en armas, no obstante las fidedignas declaraciones del testigo estrella de la Corte Suprema Jairo Castillo Peralta, alias 'Pitirry', quien acuso al senador Mario Uribe, de haberse reunido varias veces con los narcoparamilitares de Antioquia y haber negociado productivas y codiciadas tierras en el bajo Cauca antioqueno. Para desviar tales acusaciones, el senador Uribe ha utilizado una escuálida defensa, que consiste en tratar a 'Pitirry', de delincuente nada creíble (Esta posición o mejor defensa, la han utilizado la gran mayoría del centenar de congresistas, acusados de tener vínculos con la mafia y con los grupos terroristas, para ellos las confesiones de sus compinches criminales, no tienen validez pues provienen de delincuentes a los que no hay que creerles). Pero no solo Castillo ha declarado en contra de Uribe, también el cabecilla narcoparamilitar Salvatore Mancuso, dijo que el senador Uribe, participo en reuniones con los escuadrones de la muerte y resulto favorecido en las pasadas elecciones con votos en Córdoba. Inmediatamente el senador Uribe Escobar negó los cargos, pero Mancuso, ratificó sus señalamientos y aseguró que la ex congresista — también vinculada con el narcoparamilitarismo— Eleonora Pineda, asistió a dichas reuniones y pueden

²⁵⁹ Estos casos están siendo llevados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición de las familias de las víctimas, en vista de que la justicia colombiana ha mantenido hasta ahora los crímenes en la impunidad.

²⁶⁰ En Colombia han sido asesinados dos ministros de justicia, por el Cartel de Medellín, Lara Bonilla y Low Murtra en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y otro ministro fue gravemente herido Enrique Parejo González. Curiosamente, cuando Uribe asume la presidencia de la república una de sus primeras resoluciones fue la de suprimir el ministerio de justicia, lo cual me ha hecho analizar sin tanta profundidad, hasta donde puede llegar la fobia del ghetto mafioso y su Patrón Uribe, hacia los ministros de justicia, por no decir que contra la Justicia misma.

²⁶¹ Zulema Jattin es heredera del caudal electoral de su padre Francisco José Jattin, envuelto en el sonado caso del proceso 8.000, en el que más de 20 congresistas fueron condenados por su complicidad con la mafia del narcotráfico.

corroborarlo ante la Corte. En vista de su grave situación jurídica y sobre todo de la seriedad y rectitud que hasta el momento ha mostrado la Corte Suprema de Justicia, el senador Uribe resolvió renunciar a su fuero de parlamentario, para así ser juzgado por la Fiscalía que se encuentra en manos del ex viceministro de justicia del gobierno de su primo Álvaro Uribe, pero también, en este organismo se encuentra una inmensa cuota del narcoparamilitarismo que puede dejar dormir, archivar o extraviar su proceso y por qué no, dejar vencer los términos, como ya ha ocurrido en épocas inmediatamente anteriores con procesos de otros políticos tradicionales. El sucesor del narcoparaseñador Uribe, político del departamento de Norte de Santander Ricardo Elcure, alias 'El Chico', está acusado de complicidad con los grupos narcoparamilitares. Y efectivamente, el cabecilla del 'Bloque Catatumbo', Iván Laverde, alias 'El Iguano', le aseguró a la Fiscalía, que Elcure había recibido cerca de 100 millones de pesos para el financiamiento de su campaña a la gobernación de Norte de Santander. Elcure ha negado las acusaciones. Pero en grabaciones que reposan en la Fiscalía, y efectuadas en el 2003, su nombre aparece en la conversación de 'narcoparas', quienes conciertan apoyarle, en estas mismas grabaciones, aparecen los nombres de funcionarios de la fiscalía en calidad de cómplices del narcoparamilitarismo y el asesinato de un policía. Las informantes del narcoparamilitarismo en el departamento de Norte de Santander, fueron la Fiscal Ana María Flórez, —recomendada del ex Fiscal General Luis Camilo Osorio— y quien huye de la justicia, se cree que esta en Canadá y su secretaria Magali Moreno, condenada a sesenta meses de cárcel.

El secretario de la presidencia Bernardo Moreno Villegas, en primera instancia fue nombrado por el espurio presidente Uribe, director de Findeter, la financiera territorial del Estado que maneja miles de millones pesos en créditos para las entidades territoriales. Moreno Villegas, es ficha de la mafia narcoparamilitar que opera en Armenia (lugar donde el nació), en el eje cafetero y norte del Valle. Tanto en la dirección de Findeter, como en su función de secretario privado de la presidencia, Moreno ha cogobernado con uno de los más poderosos clanes del narcotráfico del eje cafetero que lidera Gildardo Ceballos Zuloaga, y a quien el espurio presidente Uribe, en pago de sus favores (financió su campaña presidencial con varios millones de narco dólares), le nombro a su hijo cónsul en Boston. Cuando Moreno estuvo al frente de Fidenter, su gestión fue hecha en asocio del narcotraficante Gilberto Ceballos, desde el lujoso ApartaHotel los Andes, ubicado al norte de Bogotá, a media cuadra de las oficinas centrales de Findeter, y desde allí, como ocurrió en el Incofer, Finagro y la Superintendencia de Vigilancia, los narcotraficante y paramilitares disponían de esta entidad a su antojo, concediendo créditos y nombrado funcionarios cercanos a la mafia. A pesar de lo anterior, Moreno ha desplegado un perfil bastante discreto, tratando siempre de no hacerse notar y mucho menos salir en las primeras páginas de los periódicos, cualquiera sea el motivo. A pesar de su connivencia con la mafia, Moreno viaja continuamente a descansar a París, sin que nadie lo cuestione por sus monstruosas compañías.

Otro personaje que lidera, o mejor, que representa a la mafia en este gobierno, es el súper ministro de Hacienda (economía), —según Uribe y sus áulicos medios de prensa— Oscar Iván Zuloaga, quien fuera en el primer mandato del espurio presidente Uribe, ministro de agricultura y ahora en el segundo periodo narcoparapresidencial, ministro de economía y finanzas. Zuloaga habría sido elegido con votos de los escuadrones de la muerte para senador en el 2002, por el departamento de Caldas. Ante las sospechas y después las enormes evidencias, argumentó que su alta votación se debía a su talla de hombre de negocios y también por haber sido alcalde de Pensilvania (Caldas). Aunque los verdaderos hechos lo relacionan con los escuadrones de la muerte de su región, en especial con el grupo de su paisano Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', Zuloaga sigue defendiéndose con disculpas a diestra y siniestra. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sus innumerables investigaciones, encontró un paquete de correos electrónicos cruzados entre el criminal 'Ernesto Báez' y la oficina del senador y ahora ministro, lo cual hace suponer que desde la oficina del entonces senador, partían informaciones relacionadas con proyectos de ley. Esto explicaría tal vez, el por qué los narcoparamilitares se encontraban tan bien informados. Igualmente su aliada política, la intransigente senadora uribista Adriana Gutiérrez, involucrada también en el cruce de correos con el narcoparamilitar 'Báez'. El ministro aparece también en una foto más que comprometedor, con la narcoparamilitar

Maribel Galvis, una de las pocas mujeres cabecilla de uno de estos grupos criminales, y ligado estrechamente al bloque criminal de Ramón Isaza.

A finales de noviembre de 2006 el “presidente” de la república Álvaro Uribe Vélez²⁶², fue denunciado ante la Cámara de Representantes (diputados), por sus vínculos con los narcoparamilitares, —igualmente fue denunciado el ex presidente Andrés Pastrana y el ex vicepresidente y candidato a la presidencia Horacio Serpa Uribe— las denuncias provienen de la fiscalía y de un ciudadano colombiano. Reynaldo Duque secretario de La Comisión de Acusaciones (llamada Comisión de Absoluciones) de la Cámara de Representantes, órgano competente para investigar y acusar al presidente, dijo que fueron aceptadas las denuncias contra el presidente Uribe y el ex presidente Andrés Pastrana, por tener la competencia. Las denuncias contra el presidente Uribe, le fue encargada a la congresista uribista Amanda Ricardo, quien debería adelantar la investigación, recomendar archivar el expediente, o dar vía libre a la acusación y entregarla a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes; Comisión en la cual, tienen asiento un noventa por ciento de diputados uribistas. Casi un año después, no se tiene noticia alguna sobre el curso que se le ha dado a este caso, que como muchos otros relacionados con hombres de poder, duermen plácidamente archivados en algún cajón oficial, hasta que el olvido haga su efecto en el *popolo*.

De todas maneras no es por demás recordar, que en 1994 cuando el presidente Ernesto Samper, fue acusado por haber recibido dineros del narcotráfico en su campaña por la presidencia, la Cámara de Representantes lo absolvió, a pesar de que su ministro de defensa Fernando Botero Zea, se encontraba en prisión por el mismo delito y el tesorero de la campana Santiago Medina, coma la misma suerte habiendo admitido, tiempo después, que en dicha campaña se recibió los narco dólares del Cartel de Cali, con la plena anuencia de Botero y Samper. El ex presidente Ernesto Samper, aceptó haberse reunido alguna vez con los hermanos narcotraficantes y cabecillas del Cartel de Cali, pero según Samper, fue para interceder por la vida de su hermano el periodista y ejecutivo del diario El tiempo de Bogotá, Daniel Samper. Algo que el país desconocía. También declaró el ex presidente, que si hubo dineros del narcotráfico en su campana, pero que no conoce el monto, pues hubo mucho dinero. Esta situación la aprovecho su tesorero de campana y después ministro de defensa Fernando Botero, de quien Samper dice se robó más de cuatro millones de dólares. Algo incomprensible en una persona de la talla de Fernando Botero, hijo del gran pintor y escultor del mismo nombre y nieto del ex ministro

²⁶² Una encuesta vía internet efectuada por Anncol, demostró que Álvaro Uribe es el jefe máximo del narcoparamilitarismo: 'La gran mayoría de colombianos, el 80%, piensa que Colombia está gobernada por una peligrosa banda narcoparamilitar (Escuadrones de la Muerte), en la que como jefe indiscutible sobresale con luz propia el “presidente” de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Encuesta de ANNCOL. Álvaro Uribe Vélez es el máximo jefe del paramilitarismo en Colombia así lo manifiesta la inmensa mayoría, cerca del 80%, de los internautas que contestaron a la encuesta llevada a cabo por Anncol.nu durante los días 20 al 27 de diciembre de 2007 en su página web. Lo más llamativo del resultado —8 de 10 encuestadores que Uribe Vélez le haya sacado una considerable ventaja a sus dos protegidos e inmediatos seguidores, dos declarados criminales narcoparamilitares Salvatore Mancuso y 'Don Berna'. Al primero le tomó la no despreciable ventaja del 66% y al segundo 69%. Observando los mismos resultados y relacionando a los tres miembros del gobierno colombiano en la consulta: Uribe Vélez (“Presidente”), José Obdulio Gaviria (Consejero Presidencial) y Juan Manuel Santos (Ministro de Defensa), encontramos que cerca del 82 por ciento de la población internauta piensa que Colombia está gobernada por una peligrosa banda paramilitar en el que como jefe indiscutible sobresale con luz propia el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, al que lo persigue el numero 82 de una lista de narcotraficantes como un karma. Lo espeluznante de este resultado es que si Salvatore Mancuso y 'Don Berna' son capaces de perpetrar los más atroces crímenes de lesa humanidad contra indefensos campesinos, mujeres y niños —crímenes confesados por ellos mismos—; entonces, cual podrá ser el nivel de maldad y crueldad del «Jefe de jefes» del narcoparamilitarismo colombiano: Álvaro Uribe'. En las encuestas dadas a conocer por los poderosos medios de comunicación (manipulación) y encabezadas por la firma Gallup desde el 2002, Uribe aparece con una aceptación nacional de 70% en promedio y esto ha hecho que 'analistas' nacionales e internacionales lo sitúen como uno de los políticos mas populares y democráticos del continente americano. Recordemos que Uribe fue 'elegido' en su primer mandato por 5.5 millones de colombianos sobre 19.5 millones de potenciales votantes y una abstención del 58,5%. Para su segundo mandato obtuvo 7.8 millones de votos sobre un total de 26 millones y una abstención del 62%) de potenciales votantes. En Colombia la abstención incluidos votos en blanco es del orden del 65%.

Germán Zea, afirmó Samper, agregando que a Botero no le faltaba nada, vivía muy cómodamente para que se robara dicha suma de dinero.

La fuerza del gobierno actual y del propio Uribe, descansa en cuatro inamovibles columnas, a saber: Los Estados Unidos; La Poderosa Prensa Nacional; Las Fuerzas Armadas y El Miedo de la Ciudadanía. Sin uno solo de estos soportes, el mafioso y vergonzoso gobierno colombiano, no hubiese podido andar los cinco largos y dolorosos años, en los cuales ha puesto patas arriba al país, con un enorme deterioro socioeconómico de más del setenta por ciento de la ciudadanía colombiana²⁶³, a pesar de las alegres caras de la empresa privada nacional y extranjera. Ya que la pauperización de las condiciones de vida digna de las mayorías colombianas, no entra en los balances del mundo capitalista, y si las transnacionales doblan y redoblan sus ganancias, qué importa la muerte de infantes por falta de atención médica, hambre o la muerte de adultos producto de la violencia estatal.

Para las fuerzas armadas colombianas, comportándose como un ejército de ocupación, su filosofía de velar por la seguridad nacional y el cuidar las fronteras contra cualquier intervención extranjera nociva para el país, dejó de ser la prioridad absoluta, para convertirse en los guardianes del capital privado extranjero y atropellar a aquellos ciudadanos y ciudadanas, que ellas consideren un peligro para los intereses foráneos. Peor aún, las fuerzas armadas se han convertido en un socio infranqueable del crimen organizado y la mafia. Sus altos oficiales se codean sin vergüenza alguna con los más grandes mafiosos y pudientes criminales, obteniendo una parte, tal vez no mínima, del negocio lícito como ilícito (compra y venta de armas, tráfico de estas mismas, tráfico de drogas, prostitución y trata de blancas, así como su participación en la especulación financiera e inmobiliaria). Lo mismo, ciertos oficiales que se han dado el lujo de ordenar a sus soldados de vigilar sus pequeños pero productivos sembrados de coca; en este mundo globalizado y capitalista, toca “jalarle a todo”, diría por ahí, uno de los gloriosos soldados (general) del ejército, que tanto hace sacar pecho al —Patrón— “presidente” Uribe.

La participación activa de las fuerzas armadas en la elevada violencia que sufre Colombia, no es un secreto para las organizaciones de derechos humanos y mucho menos, para el campesinado víctima directo del criminal accionar de estas fuerzas armadas, que no vacilan en silenciar a todo el que les incomode. Posiblemente este absurdo comportamiento tenga que ver con los cursos dictados en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos, en donde se aprende a odiar la filosofía comunista y a todo civil que no piense, actúe o suene al estilo 'Americano'. La triste historia de las dictaduras latinoamericanas así nos lo ha enseñado. Salvo que Colombia, según la bonachona ideología imperante en el medio elitista del continente, es la democracia más antigua del continente suramericano. La democracia más antigua, pero, con un saldo de hombres, mujeres e infantes sacrificados muy por encima, de los hombres y mujeres de las sanguinarias dictaduras que aliviaron la paranoia estadounidense, durante casi dos decenios, así como fue el caso de Chile. Lo anterior sería un punto de análisis más cómodo, para desentrañar la ilimitada violencia de los soldados colombianos, sino fuera por el fenómeno de la marihuana y después el de la cocaína básicamente, que ha permitido el enriquecimiento económico (empobrecimiento moral) de una ínfima minoría diestra en el negocio y de

²⁶³ En lo que atañe a la clase pudiente y las empresas nacionales y extranjeras, el balance no puede ser más victorioso. La banca privada ha tenido una ascendente ganancia en estos últimos cuatro años y en último semestre de 2007 su ganancia fue de 1 billón 800 millones de pesos, o sea un 26.6 por ciento más que el semestre anterior (Superintendencia Bancaria). Las compañías petroleras en su mayoría extranjeras, no se pueden quejar, ya que a medida que el barril de petróleo aumentaba en precio, Uribe privatizaba. Las telecomunicaciones igualmente han salido beneficiadas con una rentabilidad también en aumento y con un pago de impuestos casi nulo. Por su lado las empresas estadounidenses han sido bien tratadas por el gobierno de Uribe (no se puede decir igual cosa de los trabajadores de estas empresas, —Coca Cola, Drumond, Chiquita Brands entre otras— quienes han sido asesinados, masacrados, sus salarios devaluados y sus reivindicaciones criminalizadas por el gobierno). Las empresas privadas nacionales gozan también de una bonanza sin límites, pero sin tratar de golpear el creciente desempleo, ni mejorar el salario de base, muy por debajo la inflación. A finales de septiembre 2006, el juez Roice Lamberth, permutó por 20 millones de dólares el castigo ejemplar que debió proferir contra la bananera estadounidense Chiquita Brands, financiadora de escuadrones de la muerte autores de atroces masacres de infantes, mujeres y ancianos en el país. (ver lista).

accionar siniestro. Para un soldado entonces, por mas charreteras y estrellas posea en su prestado uniforme, la tentación de ganar en un solo empujoncito, veinte y hasta treinta veces lo que representa su salario anual, no le deja mucho margen para reflexionar entre el bien y el mal; algo que la oficialidad no aprendió ni fue enseñado en la rabiosa filosofía anticomunista estadounidense. A cambio, el lavado cerebral de la soldadesca tercermundista, ha estado encaminado a la adoración de la propiedad privada, a la veneración del capitalismo y entre más salvaje mejor, pues ellos hacen parte, o entran de carambola a ese pequeño mundillo extremadamente acomodado en donde las conversaciones giran en torno al dinero, dinero y más dinero. Dinero que otorga demasiado poder al que lo posee a manos llenas en esta decadente sociedad. Y cuando se habla de mucho dinero, se habla de inversión y se habla de empresas y cuando se tienen empresas se habla de protegerlas sobre todo cuando la ganancia asciende, en Colombia para proteger estas empresas transnacionales no se dudo un segundo en llamar a los escuadrones de la muerte, para que asesinaran sindicalistas. Multinacionales como Repsol; British Petroleum, Coca Cola; Hiunday; Drumond; Chiquita Brands²⁶⁴; Fenosa y Nestlé entre otras, no vacilaron en aliarse con el crimen organizado para proteger sus inmensas ganancias y eliminar a los representantes de los obreros y obreras y hasta amenazar y eliminar familiares de líderes sindicalistas. Cuando no eran los sicarios del narcoparamilitarismo los encargados del sucio trabajo, los mismos militares y policías se encargaban de llevar a cabo esta monstruosa labor²⁶⁵.

La soldadesca colombiana, desde sus muy encopetados oficiales, hasta sus más pobres, —en poder adquisitivo y conciencia— reclutas o policías no tuvieron sino dos opciones en un momento determinado: ligarse a la mafia o luchar contra esta. Y para ser honestos con la verdad escondida, han sido pocos los soldados y policías de la patria, que han hecho honor a sus investidura y varios están debajo de tierra olvidados, sin ningún reconocimiento, mientras que otro punado al interior de estas instituciones, fuerzas armadas y de policía, (devenidas en verdaderos carteles) y quienes trabajan y ven el cotidiano quehacer de la mafia y el crimen pasar por sus propias barbas sin poder hacer nada, pues cualquier muestra de 'sublevación' contra sus comprometidos superiores, es el suicidio y el exterminio de sus familias. Colombia pues, no ha tenido dictaduras militares sangrientas desde hace ya cincuenta años, pero en su 'democracia' se ha enmarcado por mantener un sanguinario sistema militar, hoy en día al servicio de la mafia.

²⁶⁴ En el juicio que se abrió en Estados Unidos contra esta compañía bananera por su patrocinio de grupos terroristas, en este caso los escuadrones de la muerte colombianos, el juez estadounidense Roice Eamberth, permutó la condena, que por crímenes debería pagar esta empresa y sus principales directivos, por 20 millones de dólares. La decisión se dio a finales de septiembre de 2007. La Chiquita Brands aportó a las bandas narcoparamilitares para 'su protección' más de 1.500 millones de dólares. Se cuentan por miles los obreros campesinos del banano asesinados por estos terroristas y decenas de líderes sindicales.

²⁶⁵ La monstruosa labor de asesinatos selectivos y lista de líderes y sindicalistas de base asesinados por los escuadrones de la muerte y pagados por las empresas multinacionales se puede obtener en las siguientes direcciones: Sintrainal; Central Unitaria de Trabajadores; Federación Nacional Sindical; Federación Internacional de los Derechos Humanos; CINEP; Organización Internacional del Trabajo; Prensa Rural; Colectivo de Abogados 'José Alvear'; e Indymedia Colombia. En lo que atañe a la clase pudiente y las empresas nacionales y extranjeras, el balance no puede ser mas victorioso. La banca privada ha tenido una ascendente ganancia en estos últimos cuatro años y en último semestre de 2007 su ganancia fue de 1 billón 800 millones de pesos, o sea un 26.6 por ciento más que el semestre anterior (Súper Intendencia Bancaria). Las compañías petroleras en su mayoría extranjeras, no se pueden quejar, ya que a medida que el barril de petróleo aumentaba en precio, Uribe privatizaba. Las telecomunicaciones igualmente han salido beneficiadas con una rentabilidad también en aumento y con un pago de impuestos casi nulo. Por su lado las empresas estadounidenses han sido bien tratadas por el gobierno de Uribe (no se puede decir igual cosa de los trabajadores de estas empresas, —Coca Cola, Drumond, Chiquita Brands entre otras— quienes han sido asesinados, masacrados, sus salarios devaluados y sus reivindicaciones criminalizadas por el gobierno). Las empresas privadas nacionales gozan también de una bonanza sin límites, pero sin tratar de golpear el creciente desempleo, ni mejorar el salario de base, muy por debajo la inflación. A finales de septiembre 2006, el juez Roice Lamberth, permutó por 20 millones de dólares el castigo ejemplar que debió proferir contra la bananera estadounidense Chiquita Brands, financiadora de escuadrones de la muerte autores de atroces masacres de infantes, mujeres y ancianos en el país. (ver lista).

Como bien se puede constatar en los diferentes documentos redactados por las organizaciones de derechos humanos, organizaciones civiles y populares y la propia Amnistía Internacional, las fuerzas armadas, la policía, la policía judicial y los servicios secretos, adscritos a la presidencia de la república, le deben una explicación a la humanidad entera sobre su vergonzosa participación en el genocidio que se viene llevando a cabo en el país y que desafortunadamente está lejos de terminar, bajo la presidencia del 'Patrón' de la sanguinaria mafia Álvaro Uribe Vélez. El giro de 180 grados que le dio el gobierno de Uribe al militarismo para llegar a los 360 grados o guerra total con la ayuda de los Estados Unidos, Israel e Inglaterra, no ha hecho sino aumentar el número de civiles inocentes asesinados, torturados e injusta y arbitrariamente encarcelados, la destrucción de núcleos familiares y el abandono de varios millones de infantes. Y lo que les espera a las colombianas y colombianos para el 2008 es más terror y pobreza, ya que el gobierno anunció un total de 5.000 millones de dólares para continuar su 'proceso de guerra' o Plan Colombia II. No le basta con los 4,5 millones de ciudadanos desplazados, las 5 millones de hectáreas de tierras robadas por los narcoparamilitares, sus protegidos, las 157 mil hectáreas de sembrados de coca que existen hoy en día (en 1999 la extensión de sembrados de coca era de 166. mil hectáreas), los más de 5 mil presos políticos que abarrotan las mazmorras en el país, acusados de terrorismo y sin pruebas que los acredite como tales y los cientos de miles de infantes que mueren de física hambre, desnutrición y falta de asistencia médica. ¿Quién detendrá a Uribe y su cerrado círculo mafioso? Dudo que pueda ser la aterrorizada ciudadanía colombiana, a menos que deje el miedo y tome conciencia de la atroz situación y tome la decisión de cambiar ese nefasto rumbo por el cual nos conduce esa elite mafiosa, minoritaria y corrompida.

Y no solo la población ha sufrido los embates de la acción fascista militar, los propios soldados sufren en carne propia ese diabólico método miliciano, recibiendo torturas, largas jornadas de entrenamiento exhaustivo sin comer ni beber, violación sexual, inducción al crimen, amenazas a su integridad personal o la de su familia, si denuncian hechos criminales cometidos por sus propios compañeros de armas, cuando son testigos oculares, servilismo hacia sus superiores y hasta son obligados a asesinar testigos para cubrir a sus superiores. Mismo las mujeres de muchos oficiales y suboficiales están obligadas a prestar 'sus servicios sexuales' a oficiales de mando o a ciertos generales empotrados en la cúpula militar para que sus maridos no sean trasladados a terreno de intenso combate o zonas de guerra. Los casos son numerosos en esa institución, verdadera máquina de muerte que no se detiene, ejemplos como las torturas ejercidas en el Batallón Patriotas; el asesinato de falsos secuestradores en Barranquilla; ejecuciones extra judiciales en Antioquia y montajes de falsos atentados en Bogotá. La tortura propinada a 21 soldados pertenecientes a la Brigada VI del departamento del Tolima, es una fehaciente muestra de la deshumanización del ejército, los soldados fueron golpeados por sus superiores con puños, patadas, palos y machetes, so metidos a prueba de asfixia y ahogamiento, agresión verbal y quemaduras en diferentes partes del cuerpo, a varios soldados les obligaron a comer excrementos de animales y otros fueron agredidos sexualmente. La masacre de San José de Apartado, a manos 69 militares, —dos oficiales, nueve suboficiales y cincuenta y ocho soldados profesionales— fue atroz, descuartizaron a ocho personas, entre ellas varios niños de 1, 6 y 11 años, sin piedad alguna.

En un principio el gobierno y ejército habían culpado a las FARC de tan horrendo crimen, los inculcados al parecer serán judicializados; Otra masacre, fue la de Jamundí (Valle) en donde fueron acibillados diez policías y un informante, a manos de un grupo de militares comandados por el coronel Byron Carvajal, esta masacre tenía como fin primordial la de proteger a un importante narcotraficante.

El coronel Carvajal está acusado de narcotráfico y las pruebas encontradas en su contra por las autoridades judiciales, apuntan a una relación y amistad de antaño con peligrosos narcoparamilitares a quienes cuidaba sus cargamento y ayudaba en su exportación, al parecer este militar era cubierto en sus criminales acciones por otros oficiales de alto grado; entre otros detenidos se encuentran el mayor Juan Carlos Rodríguez, el teniente coronel Carlos Andrés Quijano, ex jefe de las fuerza especiales del ejército y otro oficial de apellido Pinzón, socios todos del criminal narcotraficante Diego León Montoya, alias, 'don Diego'. Igualmente fue capturado el coronel Javier Escobar, jefe de movilización de tropas y

como comandante de la brigada trece tenía acceso a la inteligencia, con lo cual se deduce el por qué alias 'don Diego', conocía de antemano los planes militares; existen otros doce oficiales mezclados en este que hacer mafioso del ejército en esta parte del sur occidente del país. La investigación patina y no sería extraño que estos criminales de uniforme queden en libertad. En el poblado de Santodomingo (Meta) el 2 de enero de 2006 después de fuertes combates entre la guerrilla y el ejército, fueron desaparecidos por el comandante de la Brigada 12 Móvil, coronel Carlos Hugo Ramírez, los ciudadanos Henry Cubides, Carlos Vargas, Freddy Caussi y Marilyn Martin, ninguna investigación se ha abierto contra este militar. Algo corriente pues hasta el mismo comandante general del ejército, general Padilla de León, nunca le ha aclarado a los colombianos sobre las acusaciones que existen en su contra por la masacre paramilitar ocurrida en la ciénaga de Santa Marta, cuando era el comandante de la brigada de Barranquilla. Y la descomposición militar prosigue, el soldado José Rodríguez, quien salió en permiso en marzo/07 a causa de una fractura, apareció enterrado como NN después de un combate, narro su familia. Otro hecho de abusos, es relatado por policías auxiliares, quienes después de prestar su turno en el Área Logística de la SIJIN, fueron prácticamente obligados a colaborar con la mudanza del coronel Fernando Cárdenas Vélez, los auxiliares Juan Herrera y Milton Linares al terminar su respectivo turno a las siete de la mañana, fueron subidos en un camión policial en compañía de otros tres auxiliares para efectuar la mudanza del coronel Cárdenas acompañados de su esposa, durante toda la mañana estuvieron ocupados trasteando los corotos del oficial de la población de Chía a Bogotá; el lunes siguiente el coronel Jaime Ulises Ordoñez, mando llamar a los 'responsables' de la mudanza y los acuso de haber robado una caja de electrodomésticos y conminándolos a devolvería antes de terminar el día.

Los auxiliares Herrera y Linares, fueron llevados a una habitación aislada y con duchas en el Área de Logística de la Sijin, por una patrulla comandada por el teniente Ricardo Cifuentes Lozano, a los auxiliares los desnudaron y los hicieron meterse a las duchas por varios minutos, después Linares y Herrera fueron golpeados y torturados durante varias horas, hasta que un policía vestido de traje deportivo paso por el lugar, entro y salió rápidamente, al parecer contrariado por lo que venía de ver. Los auxiliares sostienen que la llegada del funcionario deportista les salvo la vida. Sin embargo, fueron amenazados de muerte si hablaban o denunciaban los hechos, sus familias también serían eliminadas, porque según sus esbirros, 'los muertos no hablan'. El caso paso a ser investigado por la Justicia Penal Militar. A los auxiliares de policía solo se les autorizo ir a Medicina Legal, tres días después de los hechos y todo indica que tales hechos pasaran al olvido total. Tiempo después de la golpiza y torturas, los auxiliares seguían preocupados por lo que les pudiera ocurrir. Herrera manifestó a la prensa: 'Si agentes de policía torturan a otros aquí en la propia unidad ¿Cómo será cuando agarran a un pobre civil? En la zona llanera de Ariari, 53 campesinos, trabajadores y amas de casa fueron presentados ante la prensa nacional e internacional, por las brigadas 4a y 14a del ejército, como guerrilleros muertos en combate y enterrados como tales. La respuesta de la cúpula militar, ante tal aberración, ha sido la misma «... estamos haciendo una exhaustiva investigación»²⁶⁶. Los suicidios comienzan a hacer parte de la cotidianidad en las fuerza armadas y en especial en el ejército, varios oficiales, suboficiales y un número cada vez más elevado de soldados profesionales se quitan la vida. Los motivos, en la mayor parte de los casos, no se pueden conocer o la misma entidad se encarga de imponer un manto oscuro en tan inquietantes sucesos; cartas, mensajes o cortas declaraciones a amigos o colegas, que pudieran aclarar el drama de estos hombres y que los llevo a tomar tal determinación, son escondidas, o tratadas con el mas completo hermetismo por la cúpula militar, actuando como un verdadero cartel de la mafia, que obstruye y no permite la claridad sobre sus actuaciones como institución y las de sus miembros.

También casos como el del soldado Cesar Augusto Castellón, quien murió repentinamente en el Batallón Ayacucho de Manizales, a donde fue remitido desde su unidad militar, sin que sus familiares fueran puestos al corriente. Según la investigación el joven murió en el Batallón por enfermedad y por falta oportuna de atención medica. Matilde Castrillon Castaño, la madre del joven soldado y mujer muy

²⁶⁶ Prensa nacional y diario de El Tiempo (08-10-07)

humilde dijo al diario la patria «el era mi vida, esto es muy duro». Ella no comprende cómo no fue avisada de la enfermedad de su hijo y del hermetismo que reina sobre la muerte de su hijo. Una prima de Cesar, manifestó que él era un muchacho tímido y de pocas palabras «Recuerdo que él me dijo que no quena prestar el servicio militar, pero se tuvo que ir, se lo llevaron a la fuerza el 18 de agosto pasado»²⁶⁷

El mismo cabecilla narcocriminal Salvatore Mancuso, en su versión libre ante la fiscalía de Medellín, afirmo que a la región del Catatumbo (Norte de Santander) habían ingresado en 1999 con la anuencia de la fuerza pública, (ejército y policía) dijo que entraron 7 camiones con hombres, provenientes de Ituango y la zona bananera de Urabá. Sus hombres habían sido profesionalmente entrenados en el departamento de Córdoba. También señaló este criminal que en una ocasión fueron arrestados 5 de sus lugartenientes que habían participado en más de 100 acciones, entre ellas varias masacres, pero la fiscalía los dejó en libertad.²⁶⁸ Mancuso corroboraría los insistentes señalamientos de que han sido objeto generales de la república y que el propio Uribe ha negado tozudamente, en el sentido de que fueron piezas fundamenta-les en la extensión y fortalecimiento de los escuadrones de la muerte, afirmando el cabecilla narcoparamilitar que Rito Alejo del Rio; Iván Ramírez Quintero y Martin Carreño Sandoval ayudaron a expandir el paramilitarismo. Los crímenes de estos tres altos oficiales del ejército se encuentran en la más completa impunidad. De igual manera, las comunidades indígenas del país han sido barridas a sangre y fuego por orden expresa de Uribe, quien manifestaría que no existe ningún lugar del país vedado para la fuerza pública, desconociendo y violando los derechos constitucionales de las comunidades indígenas que han pagado un alto tribute en vidas. Con orden expresa de la presidencial de la República, el ejército y la policía han hecho irrupción en los resguardos indígenas cometiendo toda clase de vejaciones y desplazando familias enteras, con un saldo elevado de víctimas, (mujeres, niños, lideres y Ancianos) asesinados o desaparecidos y acusados de pertenecer o auxiliar al movimiento guerrillero. En un vergonzoso acto caracterizado de cinismo y desbordante corrupción el comandante del ejército —el narcoparamilitar pupilo de Uribe— general Mario Montoya Uribe, presentaría ante las cámaras de la televisión nacional al capitán Leonardo Nur, como un mártir nacional acabado de ser rescatado de las garras de la guerrilla y quien habría estado secuestrado y encadenado por cuatro años. En realidad, varios días después se supo que dicho oficial había desaparecido sin dejar rastro, para luego aparecer intempestivamente y ser presentado como un secuestrado rescatado por la acción valiente del ejército en febrero de 2007. En realidad este oficial estaba al servicio del cartel del norte del Valle, el supuesto rescate fue obra del mayor Carlos Gil Restrepo, también socio de los narcotraficantes. Y las capturas no cesaban ya que con el coronel Álvaro Quijano, a mediados del 2007 y quien venía de asumir el cargo de comandante anti guerrilla de brigada, fueron capturados cuatro mayores, cuatro capitanes, un teniente y tres suboficiales por su complicidad con cabecillas del narcotráfico²⁶⁹.

Pero también la guerra a muerte desencadenada por el gobierno contra las comunidades indígenas es un hecho lamentablemente cotidiano y que tiene que ver con la inmensa riqueza de sus tierras, pues en ellas reposa el oro negro tan anhelado por las compañías petroleras, agua dulce, carbón y otros minerales codiciados por los grandes capitales internacionales. En el departamento del Putumayo, por ejemplo, las compañías petroleras estadounidenses han pagado a los escuadrones de la muerte para que borren del lugar a estos incómodos nativos. Se estima en aproximadamente un veinticinco por ciento los indígenas de esta parte del país desplazados o desterrados de sus tierras, por el narcoparamilitarismo y el ejército nacional al servicio de las compañías extranjeras. Igualmente en zona norte del país en el departamento de la Guajira, los grupos narcoparamilitares con la complicidad de las

²⁶⁷ *Indymedia con diario de la Patria de Manizales (17-10-2007)

²⁶⁸ Fiscalía Regional de Medellín. (7-10-2007)

²⁶⁹ Fiscalía General de la Nación

fuerzas armadas han asesinado o expulsado de sus tierras, a estos nativos que han sobrevivido durante miles de años, todo para poder exportar sin contratiempo alguno toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos y México. El grupo criminal del cabecilla Rodrigo Tovar 'Jorge 40', es el principal causante de las innumerables masacres y asesinatos de las tribus indígenas de la zona de la guajira, pero también Vicente Castaño y su grupo de 5 mil hombres que aun continúan sin desmovilizarse, han reforzado el terror sin que las autoridades puedan hacer algo para evitarlo. Para darle una especie de legalidad al narcotráfico, la elite de la Costa Atlántica, se amparo en la fachada de ricos y prósperos ganaderos, siendo de esta forma, que el notorio desconocido para la ciudadanía, Hugues Rodríguez Fuentes, lavaba la mayor parte del dinero del narcotráfico y era la pieza fundamental, el socio privilegiado del criminal 'Jorge 40' y su 'Bloque Norte', para exportar la cocama. Las continuas denuncias de los nativos de la región²⁷⁰ sobre los mortíferos atropellos del narcoparamilitarismo no dieron ningún resultado, hasta cuando fue asesinada la jueza de Becerril (Cesar), Marilis Hinojosa Suarez, por la mafia. La cacería contra el 'narco' Hugues Rodríguez, alias 'Barbie', desembocó en el descubrimiento de una solida y bien tejida red de 'narcos' y funcionarios laborando día y noche en el negocio del polvo blanco. Pero además de los oficiales de las fuerzas armadas y agentes de la fiscalía, lo que más asombro fue la implicación de la directora del CTI en el Magdalena Marilú Méndez, quien seria premiada meses después por el Fiscal General Mario Iguarán, la nombraría en el estratégico cargo de Directora Nacional del CTI, desde donde maneja un ejército de investigadores y tiene acceso a información privilegiada. En una grabación efectuada en el 2003, la directora del CTI, sostiene una interesante conversación con el sub oficial Jaime Campos Cubillos, alias 'Juancho', en la cual hablan de un plan para ayudar —se supone que a 'narcos'— y de dinero que el funcionario debe entregarle a la directora; también en la grabación, el suboficial Campos habla con el narco paramilitar Hugues Rodríguez, a quien le da cuenta de su gestión, el narcoparamilitar lo azuza para que no pierda la entrevista con la directora de la Fiscalía, para entregarle nombres y dinero. Al día siguiente Hugues Rodríguez, llama por teléfono al suboficial Campos, para saber sobre su encargo y este le comunica que (la directora Mendez) 'nuestra amiga está bien enredada con su entrega', el narcopara le dice que eso hay que manejarlo con cuidado y por los lados de Villavicencio, 'por donde sea Jefe', responde Campos, añadiendo que 'con tal de que se nos den las cosas'.

La alta funcionaria sigue en el importante cargo y el Fiscal General Iguaran no se manifestó ante la delicada infiltración del narcoparamilitarismo y por su parte el espurio “presidente” Uribe, no ha salido ante los medios, como es su costumbre, a denunciar la corrupción y el terrorismo que campea en sus propias barbas. Mientras tanto la población indígena del norte del país sufre los rigores de la segunda democrática y sus pequeños infantes mueren por causa de la desnutrición y la falta de asistencia médica. Similar situación están viviendo las poblaciones nativas y los afro descendientes en el departamento del Choco, sur occidente del país, a donde llegaron y se instalaron un considerable reducto de narcoparamilitares o 'desmovilizados' y quienes se apoderaron de las ('vírgenes') rutas para la exportación de cocaína hacia África y Europa. Los narcoparamilitares con el concurso de la fuerza pública han sembrado el terror en todo el departamento amedrentando y asesinando a la población y reclutando jóvenes para sus filas; los que rehúsan van a parar al fondo del océano pacifico, después de ser torturados. La situación es excesivamente grave para la siempre olvidada y pobre población chocona, que ahora es noticia casi cotidianamente, pero no por la presencia del Estado en la construcción de hospitales, escuelas, implantación de fabricas y empresas que ofrezcan educación y trabajo a una población completamente abandonada, ahora, el departamento del Choco es noticia nacional, por cuanto el narcoparaEstado, llegó para quedarse con toda su maquinaria de muerte y narcotráfico. A diferencia de la zona costera caribeña, la costa pacífica no cuenta con cementerios clandestinos del narcopara-militarismo, pero con la llegada de los protegidos del 'Patrón' Uribe y la seguridad democrática, lo peor está por venir.

²⁷⁰ ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia)

Otros de los 'honrosos' hechos de las fuerzas armadas han consistido en cometer atentados terroristas de toda naturaleza, para luego culpar a las guerrillas de las FARC, —en menor medida al ELN— estos atentados se han convertido en una herramienta de la cual se sirven la oficialidad en la mayor parte de los casos, para mantener en alerta al país sobre el peligro terrorista y a la vez darle al gobierno uribista, legitimidad y acción ilimitada en la represión generalizada que se vive en todo el territorio nacional. Los atentados 'made in Military' que han ocasionado innumerables víctimas inocentes, se les ha denominado «Los Falsos Positivos del Ejército» y consisten en que los mismos militares idean, organizan y ponen en práctica atentados terroristas, inmediatamente son culpabilizadas las FARC y después de serias y contundentes investigaciones, que se enmarcan también en la rapidez del acto y los testigos —que en su mayoría pertenecen al bajo mundo del crimen o son informantes del ejército y cómplices del acto terrorista—, detienen e inculpan a varios hombres y mujeres —supuestos guerrilleros— a lo cuales torturan y amenazan de muerte, presentándolos como terroristas de las FARC y autores del criminal atentado. Los casos de los falsos positivos, es decir atentados oficiales, son múltiples y tenemos el ejemplo del atentado con un carro bomba en el barrio Gaitán de Bogotá (junio/2006) y en el que murieron varios inocentes; el coronel Horacio Arbeláez Sarmiento, ex director de la Central de Inteligencia de las fuerzas armadas y hoy agregado militar en Israel, estuvo a la cabeza de este atentado terrorista, en compañía de los mayores Javier Hermida, oficial de inteligencia del ejército y Gerardo Becerra, oficial de inteligencia de las fuerzas armadas y el encargado de escoltar las bombas²⁷¹, también está abierta la posibilidad de inculpar al general Jorge Enrique Parga; estos tres oficiales también son investigados por la Fiscalía General, por su participación en tres supuestos atentados con explosivos contra Uribe, en los días previos a la segunda posesión del espurio “presidente”. Al tocarse el tema de atentados contra el Patrón Uribe, uno de sus recomendados y a quien nombro jefe del DAS en el departamento del Atlántico, Emilio Vence, fue acusado por la Fiscalía de haber preparado varios falsos atentados en contra de su presidente Uribe, dicho 'atentado' se produciría en el aeropuerto de Valledupar (Valle de Upar, nombre indígena) en la visita del presidente, y en la ciudad de Barranquilla, pero gracias a la inteligencia de la policía política colombiana, se descubrió el plan y se encontró un vehículo cerca de la pista del aeropuerto cargado con explosivos, dicho 'atentado' por supuesto, era obra de los terroristas de las FARC, según los sabuesos. Pero en lo que respecta a los atentados en Barranquilla, Vence acusó directamente al ex director de la policía secreta Jorge Noguera Cotes, de quien dijo, fue el cerebro de varios supuestos atentados contra su Patrón Uribe entre el 2003 y 2005. Además Vence, afirma también que tuvo series inconvenientes con Noguera, porque él asestó duros golpes a los narcoparamilitares del 'Bloque Norte'.

Los ejemplos de los atropellos de la fuerza pública, son tantos que nos daría la tarea de escribir un extenso libro y a la vez comprender el por qué Uribe las defiende a capa y espada. Igualmente sobre cómo, cuando, porque y con quien o quienes se llevaron a cabo y sobre todo cuanta ganancia le ha dejado a la soldadesca y oficialidad, la devolución de miles de toneladas de polvo blanco, que han sido decomisadas por varias horas o varios días y luego devueltas a sus dueños después de una buena transacción. Esto sin contar con la complicidad en la exportación. Una de las últimas pruebas fue la condena a diecisiete años de prisión para dos oficiales del DAS, Fair Rodríguez Burgos y Alfonso Yesid Mujica; y dos funcionarios del CTI de la Fiscalía, Carlos Arturo Buelvas Ramos y Robinson Rojas González, quienes confiscaron 24 kilos de cocaína en el sur de Córdoba, pero en lugar de informar a sus respectivas instituciones se apropiaron del 'tesoro' y pretendieron comercializarlo.²⁷²

La Organización No Gubernamental CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) y una de las más serias y respetadas en Colombia así que internacionalmente, dio a conocer un escalofriante informe en el mes de octubre 2007 en el cual se denuncia las ejecuciones extrajudiciales de las cuales han sido víctimas inocentes colombianas y colombianos; ejecuciones cada vez más presentes dentro de la

²⁷¹ Procuraduría General de la Nación

²⁷² Prensa colombiana (08-10-2007)

cotidianidad en la guerra total desatada por el gobierno uribista. Dice el Centro de Investigaciones que «la fuerza pública colombiana fabricó en un año 96 operaciones que dejaron 169 víctimas civiles, a quienes luego presentó como guerrilleros izquierdistas. Los llamados 'falsos positivos' —operativos montados para reclamar éxitos militares— ocurrieron entre junio de 2006 y junio de 2007, e incluyeron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y amenazas. Hechos como estos no solo cuestionan la legitimidad de la fuerza pública, sino que además cuestionan si la excesiva presión presidencial para que las Fuerzas Armadas muestren resultados en su lucha contra la insurgencia no está llevando a que estas caigan en una lógica perversa: mostrar resultados positivos así haya que fabricarlos»²⁷³

A las fuerzas armadas colombianas no se les puede presentar entonces, como un cuerpo institucional que sirva a su país; el noventa por ciento de su generalato tiene las manos manchadas de sangre inocente y una gran parte de sus miembros cobra 'salarios' al narcotráfico. Pero el asunto deviene mucho más grave, cuando, países a los cuales le cabe el epíteto de irresponsables, asisten en armas, hombres y técnica, a este cuerpo armado, convertido en un verdadero «cartel criminal» Fuera de los Estados Unidos e Israel con políticas militaristas y nocivas para la humanidad, países europeos con Inglaterra a la cabeza, España, Suecia y Africa del Sur no se inmutan ante el terror y crímenes perpetrados por el Estado colombiano y en especial por el gobierno mafiosos de Alvaro Uribe. Estados Unidos, Israel e Inglaterra han prodigado una ayuda enorme, invalorable a las fuerzas armadas colombianas, con sanguinarios mercenarios entrenados para matar en todo momento, en toda circunstancia y sin importar el ser o los seres humanos que tengan al frente. Los mercenarios israelíes han hecho gala de toda una fiereza e inhumanismo para combatir al enemigo —comunista— sin que para estos despiadados asesinos, la vida de un infante, una mujer tengan el más mínimo valor. Pero la invasión de mercenarios estadounidenses, israelíes e ingleses no se debe solamente a la lucha contra el movimiento armado de ideología marxista, no! Esta afluencia de asesinos a sueldo tiene mucho que ver también con el tráfico del mágico y tan deseado polvo blanco, por que como todos podemos constatarlo en los diferentes informes económicos de la misma ONU, sus dividendos son astronómicos, colocándose a la cabeza del mercado ultra liberal, después del comercio de las armas encabezado por los Estados Unidos y el de la prostitución —incluidos los infantes— con enormes ganancias para las mafias internacionales. El comercio de la guerra pues, asociado con el narcotráfico puede darle de comer a los mercenarios y sus familias y por qué no, enriquecerlos en un tiempo bastante corto. Y las miles de víctimas inocentes regadas en plazas y campos, quedaran en el recuerdo de la —susodicha— lucha contra el terrorismo!

La presencia de los altos jefes militares en el gobierno de Uribe, a pesar de sus criminales actuaciones y señalamientos con pruebas fehacientes en los asesinatos de más de 500 mil colombianos y colombianas en estos últimos cincuenta años y su participación activa en el tráfico de drogas, muestra esa columna, una de las cuatro anotadas anteriormente, en la cual se apoya este dictatorial y terrorífico gobierno. Desde luego que el nombramiento de estos criminales con uniforme es impuesta y condicionada, en ningún momento puede ser libre, la mafia no conoce la palabra concertar, ella sabe solo imponer. De tal manera que la vida y honra de los ciudadanos y ciudadanas del país, seguirá valiendo mucho menos que el negocio del polvo blanco. Ese polvo 'mágico' que enloquece de felicidad a estadounidenses y europeos.

Las innumerables acusaciones contra la fuerza pública en la violación de los derechos humanos y crímenes de guerra solo han despertado un sentimiento de rechazo y a la vez de reproche del espurio presidente Uribe, contra quienes se han atrevido a pedir claridad y Justicia. Para Uribe y su gobierno, las organizaciones humanitarias y de derechos humanos están casadas con los terroristas, en muchos de sus circenses «consejos comunitarios» y arengas ante la prensa nacional y extranjera, el Patrón de la mafia colombiana, no ha ahorrado epítetos desobligantes y acusaciones contra estos organismos a los

²⁷³ Ver informe completo en la revista del Cinep, fin octubre/2007.

cuales sigue acusando de hacerle el juego a las guerrillas, a pesar de las pruebas recogidas y las condenas que contra miembros militares han sido proferidas por la justicia, como la condena de cuatro militares a cuarenta años de prisión por el asesinato, en agosto de 2004, de cuatro sindicalistas, que luego hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate. Ante la solicitud de sectores de la sociedad colombiana que requieren la intervención de la Corte Penal Internacional, Uribe declararía —con el cinismo que lo caracteriza— delante de varios jueces de la Corte Interamericana de derechos humanos durante el periodo de sesiones en el palacio de justicia, en Bogotá (17 octubre/2007):

«Mi gobierno pide que se tenga el buen cuidado de examinar esas quejas muy bien por que... se conoce que cada vez que la guerrilla siente un avance de las fuerzas militares contra ellos, el expediente al cual apelan es que se están violando sus derechos humanos».²⁷⁴

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y civiles siguen denunciando numerosos casos en los cuales los militares matan civiles, para luego presentarlos como «bajas en combate». De otra parte, otro organismo no gubernamental, La Comisión Internacional contra Ejecuciones Extrajudiciales, reporto en los primeros días del mes de octubre de 2007, que las fuerza de seguridad del Estado son culpables de 955 ejecuciones extrajudiciales entre julio 2002 a junio de 2007, de las que solo 670 son investigadas por la Fiscalía y, unas pocas han terminado en JUICIO. Igualmente las Naciones Unidas encontraron en sus arduas investigaciones, cientos de muertes atribuidas a la fuerza pública que podrían considerarse como ejecuciones extrajudiciales.²⁷⁵

Como columna principal y la más robusta de la cuatro en cuestión, en que se apoya el gobierno de Uribe para mantener su poderío mafioso, está el ciego e interesado sostén que le prodiga el gobierno de los Estados Unidos. Ese policía 'elegido' por ese instrumento que llaman comunidad internacional, para salvaguardar la paz y la democracia capitalista y que súbitamente ha devenido un policía loco e incontrolable, que tortura, asesina, desobedece las leyes que el mismo aprobó y juró someterse, y que por encima del mundo entero —excepto ciertos de sus compinches— va a la guerra con un saldo de cientos de miles de personas sacrificadas, construye campos de concentración de tortura y muerte lenta y con la aprobación de pseudodemocracias europeas confabula para imponer cárceles clandestinas, donde el derecho a la persona es violado de la A a la Z. Este policía es una pieza clave en la guerra sucia que vive Colombia y el franco de cocaína.

Haciendo un poco de memoria por allá por los años ochenta el gobierno estadounidense en complicidad con el colombiano lanzaron una andanada de herbicidas, en especial el venenoso Paraquat, en varias regiones del país y en mayor concentración sobre la región central, para destruir los inmensos cultivos de marihuana que según los dirigentes políticos estadounidenses, estaba matando a su juventud. Esta acción no concertada y menos consultada con el pueblo colombiano, no solo no fue fructífera en la eliminación de esta planta, sino que si fue altamente nociva y destructora para la salud de muchos de los pobladores de las zonas que recibieron la constante lluvia del Paraquat. Nacerían niños sin brazos,

²⁷⁴ En el sitio internet de Google se puede observar una muestra de los 'falsos positivos' del ejercito, en el cual la población indígena y campesina sufre las consecuencias de la guerra total impuesta por el Patrón Uribe:

Falsos Positivos Documental

<http://www.youtube.com/watch?v=ZweAT1j1pbk&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=h6be7xuKv8c&feature=related>

http://www.youtube.com/watch?v=_maErBblGhc

<http://www.youtube.com/watch?v=hnRbWTRNd7Y&feature=related>

²⁷⁵ A la par con estos crímenes de Estado y la pauperización social y económica de las mayorías colombianas, informes oficiales muestran que el gobierno de Uribe ha gastado más de 80 millones de euros (2004-2007) en la supuesta desmovilización de los miembros de los escuadrones de la muerte, que sin embargo siguen delinquirando y traficando cocaína en todo el territorio nacional y los cabecillas desde sus mismos sitios de reclusión controlan sus ejércitos y el negocio de las drogas.

hombres sufrirían de problemas sexuales, mujeres con cáncer y hasta los animales nacerían con problemas antes nunca vistos, sin la presencia de este veneno. Una decena de años más tarde, en los cuales la siembra de marihuana era casi un mal recuerdo en Colombia, pero no gracias al rocío de veneno sino a la sustitución del cultivo, pues, de la siembra de marihuana a gran escala se paso a la de la coca. Mientras tanto, en las mismas entrañas del imperio, florecía plácidamente grandes hectáreas de marihuana y a la cabeza de esa fructífera siembra se encuentra el estado de California. Esta 'hierba' se ha convertido en la cosecha más lucrativa en Estados Unidos. El día de hoy, el país produce 10 mil toneladas anuales de marihuana con un valor estimado de casi 40 mil millones de dólares, —sin contar su comercialización que es netamente superior por encima de la producción de maíz 23 mil millones de dólares; la soja 17.600 y el heno 12.200 millones de dólares. La cosecha de marihuana es líder de ingresos en doce estados de la unión, muy por encima del cacahuete en Georgia; del tabaco en Carolina del Norte y el Sur²⁷⁶. Alguien ya le llama los Estados Unidos de Marihuana. Y allí, en esas tierras de este país del norte de América, donde crecen plácidamente los sembrados de marihuana, las fumigaciones con Paraquat, poderoso veneno o toxico altamente nocivo para la salud del ser humano, están prohibidas por que el gobierno las considera altamente peligrosas.

Esta situación nos demuestra que la tal lucha contra las drogas proyectada por los Estados Unidos, esta fracasada, pero también, que todo ese cacareo no es más que una forma de engaño e hipocresía. La política de lucha contra las drogas, es el peor de los engaños, (como lo ha sido el de la democracia existente) es la mejor de las comedias de que haya tenido noticia los pueblos del mundo, para evitarles ver la realidad en toda su dimensión. Ya que, en tanto que mercancía dentro de este sistema, dentro de esta dictadura capitalista, no hay forma de que sea aniquilada. Y esto lo saben los poderes privados del gran capital y es por tal motivo que se resisten a su legitimización, pues, los dividendos del tráfico ilícito son astronómicos y es el gran capital que usufructúa esa faraónica ganancia. La legalización de las drogas es inevitable y urgente, así como su más ilimitado control. No podemos continuar con tanta hipocresía.

Los Estados Unidos entonces, después de haberse apropiado de la rentable mercancía —marihuana— que tanto combatieron, se dieron a la tarea de combatir la rentable coca, —que aun no poseen— que se convirtió en el sustituto de la tan requerida y rentable planta que ahora poseen y explotan. La lucha contra la siembra de la hoja de coca, devino uno de los objetivos primordiales de los diferentes gobiernos estadounidenses, fumigando extensas zonas campesinas colombianas en compañía del corrupto e hipócrita gobierno colombiano, con el poderoso veneno o toxico llamado Glisofato, producido y comercializado por la poderosa transnacional Monsanto. Extrañamente, tanto el gobierno colombiano como el estadounidense, han hecho omisión total en lo que respecta a los insumos necesarios para la elaboración de la cocaína, es decir en los productos que sirven para transformar la hoja de coca en pasta y luego en polvo blanco. Estos productos, que son producidos y en plena posesión de países como los Estados Unidos; Alemania; China; e Inglaterra por nombrar solo algunos, no han tenido ningún tratamiento represivo y su control es bastante ligero como es el caso del cloruro de permanganato, el éter y otros. Mientras el 'Plan Colombia' se ensaña al extremo, persigue a muerte los sembrados de la inofensiva y milenaria hoja de KOKA, mientras los productos químicos que realmente dan cuerpo a la cocaína, no sufren similar tratamiento. Nos encontramos pues, en medio de una verdadera guerra química contra las comunidades indígenas y el campesinado colombiano. Pero la lucha colombo-estadounidense contra las drogas no solo patina en el resbaladizo campo de las contradicciones, sino que la corrupción de los funcionarios encargados de reprimir el comercio y venta de la mercancía prohibida viene a agregarse a ese mar de fracasos en lo que debería ser una real lucha contra un flagelo.

Si la participación de agentes y funcionarios colombianos en el tráfico de estupefacientes no se pone en duda, la participación y complicidad de agentes de la DEA estadounidense, tampoco es un secreto.

²⁷⁶ DrugScience.org

Sin número de funcionarios de las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos han sido cogidos *infraganti* y mismo varios han sido condenados por su peligrosa indelicadeza. Igualmente oficiales y soldados que participan en el Plan Colombia, han sido denunciados por traficar y otros capturados con varios kilos de cocaína en los aeropuertos de Estados Unidos procedente de la zona selvática colombiana. Son muchos los casos de corrupción denunciados entre otros por el periódico el Nuevo Herald de Miami y el Narco News Bulletin, una publicación en internet, que se dedica a investigar temas relacionados con el narcotráfico. Las denuncias van en el sentido de que agentes de la DEA reciben dinero de los 'narcos' colombianos, también los agentes estadounidenses utilizan la 'negociación', prometiendo rebajas de penas y otros beneficios para los arrepentidos a cambio de dinero y otros compromisos, sin el aval de la justicia estadounidense. Uno de estos casos fue el del antiguo jefe de la DEA en Bogotá David Tinsley, quien admitió los hechos e inmediatamente acusó a otros agentes de recibir dinero de los capos colombianos. Narco News dice también, que otro de los jefes antinarcóticos en Colombia Leo Arrequin, trató de silenciar a Tinsley, cuando este denunció los sobornos. Otro hecho importante es el informe de Thomas Kent, abogado al servicio de la sección de narcóticos y drogas peligrosas del Departamento de Justicia, en el documento interno escrito por él abogado y conocido bajo el nombre de el «Memo Kent», se le informa a la jerarquía de la DEA, que agentes de esa institución «hacen parte de la nomina de los narcos» en Colombia. El Nuevo Herald, cuenta otro interesante episodio en el que un arrepentido narcotraficante colombiano de nombre José Nelson Urrego, del Cartel del Valle del Cauca y quien habría participado en aportes económicos a la campaña presidencial de Ernesto Samper, fue cultivado por la DEA-Miami, para enrolarlo como informante, pero la mafia colombiana conoció el asunto en el cual se identificaba a Urrego como «Soplón» de la DEA, algo que en el medio mafioso se paga con la vida. Las inspecciones de la DEA dejaron entrever que fueron mismos agentes a su servicio quienes infiltraron la información para, impedir la relación con Urrego, pues este podría dejar al descubierto los vínculos de algunos agentes antinarcóticos con los narcotraficantes colombianos. Tiempo después Urrego fue capturado en octubre de 2007 en Panamá y acusado de narcotráfico, pero fuentes cercanas a su defensa dijeron que el había sido entrenado por la CIA en el uso de teléfonos satelitales en ciudad de Panamá. Su abogado Víctor Almengor declaró que su cliente tiene visa estadounidense, permiso de trabajo en ese país y un permiso de conducir también otorgado por el país del norte. Almengor señaló que las acusaciones contra su cliente no estaban fundamentadas, añadiendo que su defendido estaba montando un sistema de comunicaciones en la isla de Chaperá, que la policía panameña no ha podido determinar. Urrego estuvo preso en 1998 en Colombia acusado de narcotráfico y cuando estaba a cargo de Cartel Tecnológico del Norte del Valle y era propietario de compañías inmobiliarias, varios hoteles, seis edificios y diez fincas.

En esta guerra sin cuartel, es indispensable admitirlo, la mafia colombiana ha sido más audaz, por no decir pragmática, pues en lugar de asesinar agentes antinarcóticos, como ocurrió en el pasado, y echarse encima la policía nacional e internacional, optaron por 'dialogar' con sus investigadores y convencerlos de hacer acuerdos y recibir una muy buena retribución en líquido o bienes raíces, para lo cual los agentes deberían cerrar los ojos ante el comercio y la exportación del polvo blanco, no entregar toda la verdad sobre sus investigaciones e incluso engañar a sus jefes con pruebas, reseñas o informes falsos, de esta manera todos quedaban contentos, todos ganaban.

La activa ayuda militar de los Estados Unidos hacia Colombia por espacio de varias decenas, no solo no ha podido doblegar la resistencia popular y su innata lucha contra la injusticia social, sino que ha logrado convertir al país en un laboratorio permanente de guerra, en donde han terminado su vida mortíferas armas, dejadas de lado por la armada norteamericana, —para utilizar sus modernas— pero también probar nuevo armamento para el combate, en especial desde el aire. Y el drama nacional no tiende a terminarse, sino más bien a agravarse con la intervención de Israel y sus mercenarios, quienes aportan y echan más carburante al incendio colombiano. Apoyando como lo ha hecho Estados Unidos a los escuadrones de la muerte culpables de horribles, de atroces muertes de cientos de miles de ciudadanos colombianos. En un informe periodístico del 18-5-2007 elaborado por Sean Donahue relata que «la semana pasada la Associated Press reportó el descubrimiento de una fosa común en el (departamento)

Putumayo, en donde se encontraron los cuerpos de 105 personas mutiladas, las cuales fueron asesinadas por los escuadrones de la muerte o paramilitares de derecha entre 1999 y 2001. Las masacres ocurrieron mientras el general Mario Montoya Uribe, el actual comandante del ejército de Colombia, estaba liderando una ofensiva masiva en el departamento de Putumayo. A lo largo de dicha ofensiva los Estados Unidos siguieron dotando de armas, inteligencia, entrenamiento y equipo a los Batallones antinarcóticos de las fuerzas armadas del bloque sur del general Montoya, a pesar de que el Departamento de Estado sabía que aquellos batallones estaban ligados con los paramilitares. Anne Patterson, quien ahora supervisa la mayoría de las operaciones de los Estados Unidos a Colombia, fue embajadora en este país por la época y había sido advertida de los acontecimientos. Este hecho genera preguntas y el por qué Patterson permitió los lazos entre el ejército y estos grupos paramilitares responsables de los crímenes más atroces y de la producción y exportación de cocaína que llega a Estados Unidos».

En diciembre 2006 el periodista Robert Collier del San Francisco Chronicle envió a su redacción un escalofriante artículo desde La Hormiga, Putumayo, donde estaban asentadas las tropas antinarcóticos financiadas por los Estados Unidos: «Son los aliados tácticos del gobierno y los asesinos más temidos de la nación, los paramilitares con unos 8 mil soldados han aterrorizado grandes porciones del campo e incontables pueblos y ciudades(...) Estos escuadrones de la muerte han ejecutado gran número de activistas campesinos, miembros de sindicatos, líderes estudiantiles y supuestos seguidores de los rebeldes. Su violencia ha sido crucial en ayudar al ejército de Colombia a detener a las guerrillas. Un mes después, visite La Hormiga: fui transportado en ferry por el mismo general Montoya, quien había acordado permitir la entrada de una delegación de Derechos Humanos en el pueblo, en un esfuerzo por mejorar su imagen. Quedo inmediatamente claro, que nadie había entrado ni salido de La Hormiga sin el consentimiento del ejército y de los paramilitares(...) con un sacerdote y un miembro de derechos humanos que se había ganado la confianza de la gente —a menudo muy atemorizada para hablar— escuchamos historias susurradas sobre lo que había sucedido en La Hormiga. Nos dijeron que todos los días veían a los líderes de los paramilitares entrando en la base militar para encontrarse con los oficiales del Brigada 24 y coordinar sus operaciones. Conocimos a una mujer que había perdido a sus cinco hermanos a manos de los paramilitares, también había perdido todo su capital, representado en su cosecha, cuando los contratistas de Estados Unidos regaron herbicida en los campos de una cooperativa de Yuca a la que se había unido. Ella trataba desesperadamente ir a la ciudad para mendigar comida para sus hijos, pero los paramilitares no la dejaban salir de La Hormiga». El error de Patterson, dice Donahue, de no haber alertado sobre la colaboración entre el ejército y los paramilitares en Putumayo, constituye claramente una violación del espíritu (sino del contenido) de la Ley Leahy, diseñada para impedir que la ayuda militar de Estados Unidos, pudiera estar ayudando a unidades con lazos con paramilitares. Los 105 cuerpos de la fosa común en Putumayo, termina diciendo Donahue, son un atroz recordatorio de los crímenes que Anne Patterson permitió que ocurrieran bajo su mandato. Debemos hacerla responsable de esto.

Por su parte el ex embajador estadounidense en Bogotá Myles Frechette declaró a la prensa colombiana en marzo de 2007, que mientras estuvo al frente de la embajada (1990-95) le advirtió al gobierno de Ernesto Samper y a la cúpula de las fuerzas armadas sobre el peligro que representaban las Cooperativas de Vigilancia Privada, Convivir, creadas por Álvaro Uribe. Estas Convivir se estaban convirtiendo en peligrosos paramilitares, agregando que algunos grupos ya habían recibido armas de las fuerzas armadas. «Yo hable con el ministro de defensa Fernando Botero, con el comandante de las fuerzas militares Camilo Zuñiga, con el general Manuel Bonnet, pero nunca me pusieron atención, además en diciembre de 1994 yo advertí al Departamento de Estado, que esto iba por mal camino y que terminaría mal» dijo Frechette. Inmediatamente los generales Bonnet y Harold Bedoya —implicados ambos con los narcoparamilitares— salieron a desmentir al ex embajador estadounidense y Bedoya hizo una vertical defensa de las fuerzas militares del país. Bonnet manifestó, sin embargo, que en alguna ocasión hablo sobre el tema con Frechette, pero que él no le hizo una notificación oficial. Por su parte el ex presidente Samper manifestó que las declaraciones de Frechette hacen parte de una compañía de

desprestigio de Estados Unidos a su gobierno. «Yo nunca fui notificado de esta grave situación y menos por el señor Frechette ocupado en conspirar contra mi gobierno, además no tenía nada que informar sobre este tema, pues todo el mundo sabía sobre el avance del paramilitarismo en algunas regiones». Ciertamente o no lo declarado por el ex embajador Frechette, la actuación de los Estados Unidos o mejor su complicidad con la matanza de que ha sido objeto el pueblo colombiano es ineludible. Y esta afirmación es corroborada por el mismo senador Bill Delahunt, al afirmar en una Comisión de la Cámara de Representantes, «Estados Unidos es cómplice del drama de la violencia en Colombia». Tal afirmación fue hecha en una audiencia en presencia de un ex paramilitar y un sindicalista colombianos, quienes señalaron los vínculos de empresas estadounidenses con grupos armados de extrema derecha y muertes de sindicalistas. Delahunt, presidente del subcomité de Organizaciones Internacionales, Derechos Humanos y Supervisión, también afirmó que «Somos cómplices en la devastación de esa sociedad, por consiguiente, tenemos un imperativo moral de ayudar a Colombia a terminar ese ciclo de violencia». El legislador igualmente señaló con nombres propios a las empresas estadounidenses Chiquita Brands y Drumond Coal, vinculadas a los grupos paramilitares. Por su parte el ex paramilitar y antiguo miembro del ejército colombiano Edwin Manuel Guzmán, dijo que la Drumond entregó motocicletas y camiones a los paramilitares para patrullar el área donde se encuentran las instalaciones. «Hay nexos entre paramilitares, la Drumond, ejército y políticos» dijo Guzmán, hablando a los presentes a través de un intérprete, contando igualmente que «El ejército capturó en una ocasión a 14 paramilitares que se encontraban en las instalaciones de la Drumond. En su versión, el presidente del Sindicato de la Empresa Nacional Minera (Sintraminercol), dijo que no solo las empresas transnacionales Chiquita y Drumond hicieron pagos y tienen vínculos con los paramilitares, también Coca Cola; British Petroleum; Occidental Petroleum y Exxon Mobil, indicó igualmente el líder sindical que estas empresas tienen «mercenarios para dar seguridad a sus instalaciones y violan los derechos humanos a sus trabajadores». Y se benefician con operaciones de un batallón militar organizado con dineros del Plan Colombia. Pero Dan Burton, republicano de alto cargo del subcomité para el hemisferio occidental, hizo notar que en la audiencia de más de dos horas «no he visto ninguna evidencia de las alegadas transacciones», afirmando que el gobierno del presidente Álvaro Uribe, ha combatido a los paramilitares y otros grupos armados. Lo importante del caso, señaló para finalizar el legislador por el partido demócrata de Massachusetts Delahunt, «es que por la primera vez una compañía reconoce (Chiquita Brands) lo que siempre se ha entendido como una práctica común en Colombia: el pago por protección a grupos armados de extrema derecha que controlan el territorio donde están ubicadas las empresas. Sobre la base de esa admisión se espera que otras empresas estadounidenses sean involucradas en prácticas similares». Pues la empresa Drumond, esta acusada de pagar a los paramilitares por el asesinato de tres sindicalistas colombianos que trabajaban en sus minas de carbón. El asesor del sindicato de Trabajadores del Acero United Steelworkers y testigo de la audiencia Daniel Kovalik dijo que «Colombia es el país más peligroso del mundo para un dirigente sindical»²⁷⁷.

Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, más de 4 mil sindicalistas han sido asesinados en Colombia, en los últimos veinte años.

La lucha contra las drogas o Plan Colombia, no es más sino una verdadera mascarada gubernamental que quiere seguir dándole paso a una guerra infinita en la cual grandes capitales estadounidenses y colombianos se nutren en abundancia y el tráfico de armas y drogas hace la fortuna de ciertas elites, pues, aparte de los Capos de los Carteles que han perdido la exclusividad, pero siguen amasando enormes fortunas— funcionarios y políticos de ambos países, —Colombia y Estados Unidos— participan en el comercio de la cocaína; sin contar que las mafias europeas no son menos participes en este tráfico de drogas. Según estadísticas oficiales, los Estados Unidos se embolilla el ochenta y siete por ciento del presupuesto del Plan Colombia, es decir empresas como Monsanto, que vende el veneno; Sikorsky, que fabrica los helicópteros Black Hawk; DynCorp, que contrata los pilotos para fumigar; Lockheed Martin,

²⁷⁷ Periódico Rebelión con A.P (28-6-2007). Verse informe de Amnistía Internacional (marzo 2007).

que monta los radares; entre otras transnacionales, presentes también en Irak, que aprovechan la mayor parte del pastel. Esto sin contar con el voluminoso capital producto del narcotráfico que entra en la banca estadounidense y que representa más del ochenta por ciento del comercio mundial. Es entendible entonces, el por qué el gobierno de Estados Unidos sostiene y colabora estrechamente con el gobierno narco paramilitar de Uribe; el por qué este gobierno mafioso goza de una total impunidad, en el país del norte de América, a pesar de sus crímenes y su complicidad en el tráfico de drogas"²⁷⁸.

La poderosa prensa colombiana se ha caracterizado por su inmensa cobardía y su connivencia con el poder estatal en sus innumerables actos de sangre e injusticia. La violencia constante que ha padecido el país después de los años 80 del siglo XIX y todo el doloroso recorrido del siglo XX con actores del bipartidismo y la iglesia católica, pues cada cual desde su trinchera atacaba al otro con letras de sangre designando el futuro de la nación. No sería exagerado afirmar que la prensa colombiana ha caído en la intolerancia y la mentira para favorecer intereses de partido e intereses de clase. Pero lo peor de todo su historial no deja ser su alcahuetería con los políticos corrompidos del establecimiento y la incursión de muchos de sus periodistas y altos ejecutivos en la política nacional, sirviendo de comodín al crimen organizado. La pauperización laboral y salarial del periodista de base contrasta con la agresión física y verbal del periodismo alternativo que en últimas, ha sido el más sacrificado en estos últimos años de narcoparapolítica. Por su parte las grandes y poderosas empresas de (des) información, en esta infinita guerra que vive el país, se ha contentado en servir de eco a los informes de prensa del ejército y la policía y en muchos casos a elaborar informes falaciosos en las redacciones de prensa, tergiversando la real situación, los verdaderos acontecimientos del país. Importantes periodistas han tornado el privilegiado asiento en los tanques, helicópteros y aviones de guerra de las fuerzas armadas, para después informar a la ciudadanía, sobre los acontecimientos de orden público y la confrontación entre el Estado y la guerrilla, tomando partido por sus anfitriones de viaje y desorientando aun más a la ciudadanía con sus sesgados informes. En otros casos, los poderosos medios se han dado a la tarea de esconderle al país información de interés nacional, favoreciendo al gobierno de turno, a las fuerzas armadas y también al narco paramilitarismo. Como se había reseñado antes, la poderosa prensa participo en una reunión clandestina con los principales cabe-cillas del narco paramilitarismo y con quienes acordaron sabotear los acuerdos de paz de ese momento entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC, similar actitud tomaron con respecto al despeje de una zona de negociación que había solicitado el Ejército de Liberación Nacional, en sus negociaciones con el gobierno de Pastrana. Al mismo tiempo se acordó, entre la poderosa prensa y la mafia, una mayor publicidad a los (criminales narcoparamilitares) que se les debería llamar Autodefensas Unidas de Colombia, pues el epíteto de paramilitares, sería nocivo para sus futuras negociaciones de «paz» con el seguro presidente de Colombia, un tal Álvaro Uribe Vélez, político desconocido por la mayoría de la población del país. Y no solo los narcodólares del narcotráfico irían a influir en los reportes de la prensa 'libre' colombiana, también los dólares del Departamento de Estado de los Estados Unidos influenciarían en la cotidiana labor de esta prensa, para desviar la realidad de los acontecimientos nacionales.

En el gobierno mafioso de Uribe, la persecución de periodistas alternativos y mismo de ciertos periodistas de la gran prensa ha sido una constante durante sus cinco años de dictadura, la falta de garantías en todo el territorio nacional para ejercer la profesión de comunicador es prácticamente imposible y si a esto le agregamos los vetos del gobierno Uribe y altos funcionarios, la situación es más

²⁷⁸ Varios oficiales de la armada colombiana han sido señalados de entregar valiosa información a la mafia, referente a coordenadas de ubicación de naves que patrullan los mares y las costas colombianas. El capitán de la armada Amórtegui Forero, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, por sus nexos con el narcotráfico. En junio de 2000 fueron incautados 400 kilos de cocama con destino a Mozambique, África y Amórtegui era uno de los cerebros. Igualmente el contraalmirante Gabriel Arango Bacci, está incluido dentro de los socios de la mafia del narcotráfico, el suboficial Víctor Palmera Quintana acepto los cargos en su contra y el capitán Jorge Ahumada está detenido por su apoyo a los 'narcos'. Al parecer los 'narcos' pagaron varios millones de dólares por cartas de navegación y la implicación internacional más que inquietante si tenemos en cuenta que estarían involucrados agentes oficiales de los países de la zona como Chile, Estados Unidos, Colombia y los europeos Francia, Inglaterra y Holanda.

que delicada, dramática. Existen en el país más de 77 periodistas amenazados de muerte por el narcoparamilitarismo, pero también por la fuerza pública que disfraza su autoría detrás de grupos armados²⁷⁹. Pero lo que más ha exaltado la amenaza y el peligro de muerte de varios periodistas ha sido el agresivo comportamiento de Uribe, quien no ha hecho sino instigar la violencia contra aquellos comunicadores que se han atrevido a cuestionar su liderazgo, criticar sus medidas gubernamentales represivas y sobre todo denunciar su oscuro pasado y el de su familia, ligado enteramente con la mafia y el crimen. Los sicarios de Uribe no han perdido un segundo en amenazar y poner en la mira de su gatillo a periodistas como Gonzalo Guillen, quien es el corresponsal del día-rio El Nuevo Herald de Miami en Bogotá. Guillen ha recibido varios ataques por parte de Uribe, que lo culpa de hacerle mala reputación. En una rueda de prensa de finales de octubre 2007 el Patrón Uribe, lo acusó de haber sido el responsable directo e instigador del libro escrito por la ex diva, presentadora de televisión y ex amante de Pablo Escobar Virginia Vallejo, en el cual ella cuenta que el sanguinario Capo le agradeció a Álvaro Uribe su enorme y valiosa ayuda. El periodista Gonzalo Guillen negó toda participación en la elaboración del libro de la ex amante de Pablo, pero igual tuvo que salir del país por amenazas de los pistoleros de Uribe. En una entrevista a la prensa internacional Virginia Vallejo afirmó que Uribe es uno de los tres narcopresidentes que ha tenido el país y que han servido al auge del narcotráfico. Los tres presidentes a que se refiere la presentadora de televisión son: Alfonso López Michelsen, (fallecido); Ernesto Samper Pizano y Álvaro Uribe Vélez. La ex diva manifestó también que «los narcotraficantes prosperaron en Colombia no por que fueran unos genios, sino porque los presidentes eran muy baratos». Sobre Uribe, Virginia Vallejo dijo que el criminal 'narco' lo idolatraba y decía que le agradecía toda su ayuda, — cuando Uribe era director de la Aeronáutica Civil— sin la cual los narcotraficante hubieran tenido que ir nadando hasta las costas estadounidenses con los cargamentos de cocama. «Pablo solía decir — añadió Vallejo— si no fuera por este muchacho bendito tendríamos que estar nadando hasta Miami para llevar la droga a los gringos. Ahora que tenemos nuestras propias pistas no nos para nadie. Pista propia, propios aviones, propios helicópteros». Virginia Vallejo asegura desde Miami, donde esta exiliada que «el narcoestado soñado por Pablo Escobar tiene hoy mas vigencia que nunca en Colombia»

Holman Morris, periodista independiente y autor de varios reportajes en los cuales desnuda la dura situación de violencia que vive el campesinado a causa de la guerra y especial por la persecución narcoparamilitar y los ataques de la fuerza pública que han dejado cientos de miles de víctimas ha debido por segunda vez abandonar el país debido a las amenazas de los paramilitares, que según Uribe se desmovilizaron. Carlos Lozano director del periódico comunista Voz, ha sido igualmente amenazado y debe desplazarse con escoltas. Daniel Coronel fue amenazado el 30 de abril de 2005 mediante llamadas telefónicas amenazantes y a la sede de su noticiero, Noticias Uno, le llegaron dos coronas mortuorias el 16 de junio de 2006, dichas llamadas y 'regales' fueron hechos por el narcotraficante y ex presidente de la cámara de representantes Carlos Nader Simmonds, amigo íntimo del espurio presidente Uribe, —en su carrera política Nader estuvo vinculado con Pablo Escobar y 1982 se vinculó al Movimiento Alternativa Popular fundado por Alberto Santofimio, también amigo de Pablo, el 10 de mayo de 1983 fue elegido diputado bajo el auspicio de Alfonso de la Espriella y diez días después fue detenido en Nueva York con más de 20 kilos de cocama—. Coronel es uno de los fuertes críticos de la política gubernamental. Fredy Muñoz periodista de Telesur, fue tornado preso en el aeropuerto de El Dorado a su llegada de Venezuela en el 2006 y acusado de terrorismo y pertenecer a las FARC, al no comprobársele tal acusación fue puesto en libertad, pero su situación jurídica no ha sido definida, este comunicador fue amenazado de muerte por paramilitares y se encuentra viviendo en la clandestinidad. William Parra, periodista de Telesur fue acusado por el narcogeneral y director de la policía Oscar Naranjo Trujillo, de secuestro y concierto para delinquir, el periodista Parra entrevistado a un oficial de la policía retenido por las FARC y días después dio a conocer su entrevista, no sin antes haber prevenido la familia del policía. Germán Hernández, jefe de redacción del diario El Huila, tuvo que renunciar a su trabajo y salir del departamento por amenazas continuas de grupos paramilitares, Hernández denunció irregularidades y la corrupción en varias instituciones públicas del departamento entre las cuales está el

²⁷⁹ Verse informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLP)

hospital general del departamento. El periodista Dick Emanuelsson, autor de numerosos reportajes en los que ha puesto de presente la corrupción estatal y la connivencia de la fuerza pública con los escuadrones de la muerte, también fue puesto en la picota pública, al ser señalado de «embajador de las FARC en Europa», el autor de tan miserable y falacioso señalamiento fue un agente de Uribe y ex funcionario de seguridad de la embajada colombiana en Suecia Ernesto Yamhure y quien con la anuencia de el diario El Espectador le señala a los sicarios de Uribe, mediante sus artículos a quien hay que silenciar. De igual manera, con más sana y casos menos mediatizados, los periodistas de la pequeña prensa y Prensa Alternativa, han sufrido el inclemente azote de la fuerza pública y los narcoparamilitares, quienes no permiten ninguna clase de crítica ni mucho menos señalamiento contra el corrupto andar político regional o nacional y la andanada de muerte de estos grupos de extrema derecha. El mismo gobierno ordeno el cierre de varias decenas de radios comunales y el ministerio de comunicaciones dio ex-presa orden a la fuerza pública de intervenir para sustraer los equipos de radiodifusión y varios periodistas fueron maltratados y tirados en las mazmorras estatales en nombre de la seguridad democrática. Otros medios de prensa alternativos han sido acusados de pertenecer o hacerle el juego a la guerrilla, por el propio gobierno central, lo que hace que en el ambiente de intolerancia que vive el país, sean puestos en la mira de los grupos criminales narcoparamilitares. La libre expresión o libertad de prensa en Colombia, es un lujo dejado en manos de ciertos privilegiados. Privilegiados comprometidos con el estado mafioso en que se encuentra el país y quienes no se inmutan ante los atropellos y asesinatos de trabajadores de la comunicación. Esta situación tiene mucho que ver con el comportamiento de la poderosa prensa que no ha escatimado esfuerzos para hacerle el juego a la institución castrense en su lucha antsubversiva, difundiendo declaraciones y comunicados de prensa hechos con la pluma de la inteligencia militar, pues no hay una investigación seria para profundizar el tema y se escupe tal cual la ha entregado la institución militar. No existe un cuestionamiento de la información, un enfrentamiento con los autores del tema para su completa y real verificación. A veces se cita la fuente y la información parte como si en verdad hubiese sido un trabajo profesional de un periodismo ético y sin tacha. También es éticamente cuestionable para los periodistas de la gran prensa, el aceptar invitaciones y acompañar a las fuerzas militares en su empeño de ocupar un espacio en la opinión pública, utilizando a trabajadores de los diferentes medios de comunicación, bastante manoseados por 'personajes' de la narcoparapolítica. A esto debemos agregarle el increíble hecho de que periodistas de la poderosa prensa como Caracol, El Tiempo, Radio Cadena Nacional²⁸⁰ entre otros, se vistieron de camuflaje en la base militar de Tolemaida y con fusiles se convirtieron en soldados profesionales por un día. Situación esta que no deja impávida a las guerrillas que ya no ven a estos trabajadores como comunicadores sociales, sino como soldados activos del enemigo, pues como ocurre en cualquier guerra, la pérdida de la neutralidad del comunicador, significa ser señalado del bando opuesto. Y los poderosos medios jamás han sido neutrales en la con-tienda armada que vive el país y jamás han sido sinceros al momento de informar la verdad. Los poderosos medios de comunicación y los carteles de la droga han cerrado filas en torno al mafioso presidente Uribe. No basta sino leer los artículos de prensa del repulsivo Plinio Apuleyo Mendoza, en los cuales presenta al estamento político militar y mafioso como víctimas de los violentos y se atreve sin escrúpulo alguno, en señalar a los desprotegidos campesinos que han sido asesinados por la fuerza pública y acusados después de ser guerrilleros muertos en combate de mentirosos; o ver a la periodistas uribista Claudia Gurissati, derretirse como perra en calor delante del criminal Carlos Castaño, al cual le faltó besarlo tiernamente en la mejilla delante de las cámaras, cuando este sicópata afirmó que su tarea era la de defender la

²⁸⁰ Los diarios del El Tiempo; El Espectador y la revista Semana se dieron el IUJO de hacer publlirreportajes, pagados por la mafia, de vanos cabecillas narcoparamilitares acusados de terribles crímenes. Esto demuestra el alto grado de dignidad y ética de la poderosa prensa colombiana. Igualmente las directivas de RCN no han querido aclarar el asesinato por parte del ejercito de sus dos trabajadores, el camarógrafo Elector Sandoval y el conductor del equipo de televisión en Cali Walter López, (12-4-2002) como también el por qué la periodista Luisa Estela Arroyabe, tuvo que exiliarse en Canadá por amenazas del ejercito. También la sede de RCN en Bogotá recibió un disparo de rocket por parte del ejército un día después del asesinato de los dos periodistas. Una total impunidad se cierne sobre estos asesinatos. Y para terminar con los ejemplos de la labor de la prensa libre, la emisora radial «W» se permiten hacer hablar a Uribe mañana, tarde y noche y servir de vehículo acusador del gobierno contra todo aquel que no está de acuerdo con la política oficial.

patria. La Gurissatti parece hacer gala a su origen. O las desenfundadas columnas de María Isabel Rueda, desbaratando sus vestiduras para defender todo lo que huele a uribismo. La radio y la televisión de los principales y poderosos medios de comunicación tienen un comportamiento nauseabundo, su servilismo no es comparable, apestan. En lo que respecta los medios de información internacionales, la tónica se ha encaminado al silencio sepulcral y cómplice sobre la dolorosa realidad colombiana y el conducto regular de los medios estadounidenses y europeos es el de diabolizar a los luchadores populares contra la mafia y exonerar al mafioso gobierno de Uribe de toda responsabilidad del caos que vive el país.

La prensa europea perteneciente a la derecha dura; y en especial la española, con el diario El País a la cabeza, no cesan sus ataques contra el país pulcro, se ensañan contra la población honesta y sus falacias no hacen sino desviar la realidad de la Nación, engañando groseramente a sus lectores y convirtiendo al Patrón Uribe en un gobernante modelo y su gobierno como el mas democrático de Latinoamérica. El diario El País de España, tal vez no mira mas allá de sus intereses económicos y el de las empresas españolas que han invadido fuertemente el espacio económico nacional, con astronómicas ganancias jamás imaginadas. Y esto es suficiente para tratar al narcoparamilitar Álvaro Uribe Vélez de Señor, gran estadista y demócrata sin tacha. A pesar de los cientos de miles de crímenes de honestos e inocentes colombianas y colombianos y en los cuales empresas españolas tienen algo o mucho que ver, El País calla.

«La prensa es también capaz de crear buena reputación que de hacer pasar el asesino por víctima y la víctima por asesino. Es la función de la prensa. De esa prensa irresponsable. Si vosotros no estáis prevenidos, los periódicos os llevaran a odiar a los oprimidos y a querer a los opresores». Malcolm X, dic, 1964

La población colombiana en general ha vivido durante estas últimas cinco décadas dentro de un sistema de terror, un intenso y latente miedo, una prevención política y un arrinconamiento cada vez mas penable en los vastos y míseros barrios que compone la geografía nacional debido, al estado de sitio durante más de veinte años de una parte y la instauración de una clase antidemocrática, corrupta y mafiosa más influyente en las dos últimas décadas y que ha impuesto su modus vivendi de muerte, de otra parte. Este ha sido el común denominador. Acompañado de un empobrecimiento ascendente y masivo, una falta de oportunidades educativas y una ausencia de empleo estable, todo esto agravado en estos últimos años bajo el narcoparamilitar gobierno de Uribe. Datos oficiales estiman en casi cinco millones de Colombia los regados por el mundo en pos de una vida más tranquila y en mejores condiciones económicas. Pero igualmente, a esta enorme cantidad de inmigrantes en busca de fortuna, se le debe agregar el cada vez más elevado número de exiliados por motivos políticos. No solo el hambre y la miseria han hecho emigrar a colombianas y colombianos de su país, también la ciega y criminal persecución estatal, contra aquellos que se han atrevido a exigir una sociedad democrática y una repartición justa de la enorme riqueza del país, entre todos sus habitantes. Pues en Colombia devino costumbre la consigna de las elites 'sufrir y callar' en marcada en letras doradas, impidiendo el derecho al pueblo a solicitar, a pedir, a exigir democracia, a exigir justicia. Peticiones estas, que son castigadas con la eliminación física y violenta, con el encierro forzado e injusto en las mazmorras del Estado —y el pisoteo diario de los derechos humanos— o el doloroso e indefinido exilio de aquellas y aquellos quienes han osado elevar su voz de protesta. Intrínsecamente la ciudadanía colombiana está obligada a vivir amordazada.

Los informes nacionales e internacionales sobre las inhumanas condiciones de detención de colombianas y colombianos encarcelados por razones políticas contrastan con el cómodo encierro al que han sido llevados los criminales narcoparamilitares, amigos de Uribe y su gobierno. Estos peligrosos criminales están ubicados en cárceles de mediana y baja seguridad con privilegios de toda clase, por ejemplo tienen derecho a la visita de sus abogados tres veces al día, el asesor jurídico de la prisión a su

entera disposición, poseen celulares y en muchos casos poseen computadores que en un principio fue tan solo privilegio de los cabecillas del narcoparamilitarismo. Las visitas de familiares y otras más profesionales —adaptadas a sus sucios negocios— no tiene casi límite. Hasta los propios directores de las cárceles tienen que estar atentos al llamado de los 'narcoparas', pues como lo han manifestado muchos de ellos de rango medio también, es una orden que viene de lo más alto del gobierno. Y el tratamiento de varios de los narcoparapolíticos presos en las cárceles del país hasta hora, no es menos envidiable, pues han sido vistos fuera de las penitenciarias, unos haciendo campaña política en horas del día y de la noche, como fue el caso del diputado Nelson Stanp Berno y otros como Álvaro García, paseándose en un lujoso vehículo acompañado con dos mujeres en un privilegiado sector del norte de Bogotá a plena luz del día. Igualmente se está estudiando la posibilidad, por parte de la Fiscalía, de que otros narcoparapolíticos sean excarcelados y reciban sus suntuosas mansiones por cárcel debido a sus problemas de salud, los infelices sufren de frecuentes jaquecas. Peligrosos individuos como el senador Álvaro Araujo y Enilse Lopez, alias 'La Gata', han sido beneficiados con excarcelamiento por razones de salud o humanitarias. Entonces habría que preguntarle al Patrón “presidente” Uribe, al Fiscal General Mario Iguaran y al director del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario) el por qué presos políticos con graves problemas de salud no han recibido el mismo tratamiento humanitario y por el contrario, la debida atención medica a que tienen derecho brilla por su ausencia. Y Uribe debe responder por que los abogados defensores de presos políticos —entre ellos supuestos colaboradores de la guerrilla— sindicalistas, líderes comunales y de derechos humanos, han sido asesinados y otros amenazados y obligados a exiliarse y, las familias de estas presas y presos políticos, perseguidas y tratadas peor que a peligrosos delincuentes y sus derecho a visita continuamente vilipendiados. Mientras los defensores y familiares de los narcoparamilitares y narcoparapolíticos jamás han padecido la misma suerte, algo desde luego reprochable si llegase a ocurrir.

Las practicas estatales de represiones llevadas a cabo en Colombia, podrían resumirse en un TODO de lo que ocurre en una guerra, en una dictadura, en un sistema de apartheid, en una sociedad racista y clasista, en un sistema antidemocrático e inhumano. El vilipendio, la amenaza, la tortura, el chantaje, la desaparición y el asesinato son obra de los mismos agentes y funcionarios del Estado y en quienes los diferentes gobiernos se han apoyado para sostenerse en el poder. Y no pudiendo dar abasto en su tarea de sembrar el terror en todo el territorio nacional, se hizo el solemne llamado a los escuadrones de la muerte para que una inmensa labor de limpieza social se desplegara y fuera más productiva y eficaz. Y para engañar a propios y extraños, se habló públicamente de una lucha a muerte contra la subversión, posteriormente designada pomposamente de terrorista. Pero extrañamente, la subversión continua viva y con su poder político-militar intacto, mientras que en los campos, pequeñas ciudades, pueblos y veredas yacen centenas de miles de cadáveres enterrados en el más completo silencio en miles de fosas comunes, que m el gobierno de turno, m la prensa nacional ni extranjera lloran o lloraran, pues son simples ciudadanos que no pertenecieron a la nomenclatura capitalista, porque no fueron integrantes de la elite nacional. Esa es la triste realidad.

La práctica estatal de muerte continúa hoy con más saña que nunca, acrecentándose igualmente las ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública en 27 de los 32 departamentos que posee el país. Según el observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Cceeu (Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra y España) confirmaron con pruebas en mano que las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas colombianas coinciden con la política uribista de la «seguridad democrática», existiendo una intención deliberada de impunidad nacional. Estas ejecuciones extrajudiciales son presentadas como un triunfo de la fuerza pública y por el contrario las investigaciones de los organismos— de derechos humanos, son descalificados por el ejecutivo y reiteradamente Uribe ha afirmado que es una estrategia de la guerrilla. Y ahora es el sector educativo el que está siendo severamente reprimido, (como lo ha sido el sector obreros y campesino) estudiantes universitarios y de secundaria asesinados en pacificas manifestaciones, convocadas por decir no a la demencial privatización de la educación y exigir el respeto del estudiantado a escoger sus directivas mas idóneas. Prueba de la represión incontrolada fue el deceso el 6 diciembre de 2005, a causa de los golpes de

agentes del Esmad²⁸¹ quienes hirieron gravemente al joven de 15 años Nicolás Neira, en la manifestación del 1° de mayo de 2005. El estudiante Neira se encontraba en compañía de camaradas y amigos cuando fueron agredidos por la policía. En otras marchas estudiantiles, varios universitarios han sido heridos de bala y otros capturados y acusados de terroristas. Ante tan grave situación, La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) acompañados de la Fundación Comité de Presos Políticos, presentaron ante las altas cortes una acción de amparo contra la policía nacional, argumentando la violación de los derechos fundamentales a la vida y a la libertad. Los voceros de las organizaciones obreras y estudiantiles han pedido el urgente desmonte del temible grupo Esmad de la policía, sin que el presidente ni su ministro del interior Carlos Holguín Sardi —cuota del Cartel de Cali— hayan dando respuesta alguna.

Igualmente Colombia cuenta con el tercer vergonzoso puesto entre los países con una población desplazada interna debido al conflicto interno y la guerra sucia. Las organizaciones humanitarias han estimado en casi 4 millones de infantes y adultos proscritos de sus tierras o lugares de habitación por cuenta de los escuadrones de la muerte con la complicidad del Estado. Son cuatro millones de seres humanos viviendo en condiciones infrahumanas, sin que por parte del ejecutivo exista el más mínimo sentimiento de solidaridad o patriotismo humano.

Las detenciones masivas y arbitrarias en todo el país a partir del 2002 en el gobierno narcoparamilitar de Uribe, están por encima de las 19.570 personas²⁸² entre campesinos, líderes populares y trabajadores en especial en el sector rural; masivas detenciones que han sido retribuidas con las abominables recompensas que al final son compartidas entre policías o militares y los delatores, —los testigos que señalan a los supuestos cómplices de la guerrillera son hombres o mujeres encapuchados— se le agrega las detenciones arbitrarias e ilegales de más de 600 estudiantes entre los años 2002-2006, mas de una docena de heridos con armas de fuego de dotación oficial y varios muertos. Según datos oficiales, estos continuos errores gubernamentales, en especial de las instituciones militares, fiscalía y de policía, han desembocado en demandas contra el Estado que pasan de los 79 billones de pesos (aproximadamente 28 mil millones de euros), comprometiendo seriamente las finanzas públicas de la Nación y colocando al país en una situación de emergencia. Estas demandas contra la nación representarían un 63 por ciento del presupuesto del año 2008. Ya para el año 2006 la Nación debió desembolsar por pagos de sentencias un alto porcentaje del presupuesto de ese mismo año; demandas en su mayoría contra el ministerio de defensa²⁸³ condenado por la justicia, entre otras instituciones.

La Unidad Investigativa Popular Bolivariana y el Frente de Acciones por Colombia-Alemania y también publicado por la Corporación Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo', hacen un análisis de los privados de la libertad por exigir un país realmente democrático:

«El delito político y su penalización en Colombia se remontan a la época de la invasión española y resistencia de los indígenas y esclavos, a los cuales se les daba el tratamiento de enemigos del régimen impuesto por la corona española, a los cuales les eran infligidos todo tipo de castigos y penas que iban desde la tortura física y moral, hasta el asesinato. Posteriormente con la guerra revolucionaria de independencia, los patriotas fueron considerados como rebeldes contra la corona española, las penas impuestas por las autoridades españolas locales contra estos rebeldes fueron entre otras: la

²⁸¹ Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía, señalados por los organismos de derechos humanos por continuas violaciones y brutalidad, ha producido graves heridas a estudiantes en manifestaciones pacíficas, como también arrestos ilegales. Este temible grupo de la policía, está acusado de utilizar ilimitadamente gases lacrimógenos, pimienta y granadas antidisturbios contra universitarios, pero igualmente contra jóvenes y niños de escuelas secundarias.

²⁸² José de los Santos Suarez de 73 años, fue acusado de ser experto en explosivos de la guerrilla. Pasó dos años en prisión y fue dejado libre con otras 90 personas al comprobárseles su inocencia. La particularidad de este anciano campesino es que es invidente.

²⁸³ Datos Ministerio de Hacienda y Crédito Público

confiscación de bienes, el extrañamiento (destierro), la extradición (prisión en el extranjero), la prisión, la tortura y el fusilamiento. Nada refleja mejor las contradicciones de las clases sociales como la aplicación del castigo físico y moral de quienes detentan el poder con sus aparatos jurídicos represivos para mantenerse en su posición privilegiada. La cárcel como parte del aparato represivo del estado busca quebrantar la moral, la convicción y los ideales de los luchadores populares pretendiendo con ello desvirtuar la justeza de su lucha, descomponerlos y ganarlos a su favor. Por otra parte la cárcel cumple el papel de atemorizar y horrorizar al pueblo para que acepte las condiciones que le impone el actual orden y renuncie a sus anhelos de libertad y justicia.

3) Para nosotros, dentro del concepto del preso político se ubican a todas aquellas personas que por razones de su pensamiento político-ideológico, o de sus actividades en particular en pro de los intereses del pueblo sea cual fuere su nivel de participación y compromiso, organizada o espontánea y en contravía con el actual sistema imperante en nuestro país, es víctima del aparato represivo judicial del estado, en calidad de detenido, procesado o condenado. Esta etapa inicial que caracteriza al preso político, ubica a todas las personas que participan de las distintas formas de lucha y tareas, y que como producto de su trabajo caen en la cárcel.

4) LA CRISIS EN LAS CLOACAS Y MAZMORRAS DEL REGIMEN Como respuesta a la grave crisis económica y social del país el Estado y su dirigencia han optado por la vía represiva para contrarrestar los males verdaderos de la sociedad colombiana, se ha impuesto la criminalización de la pobreza y la protesta social sindical y popular, cuyo objetivo es el de crear las condiciones de estabilidad y seguridad para que el proceso de acumulación capitalista se consolide definitivamente, para ello se ha recurrido a la vulneración de la dignidad humana y los derechos fundamentales e inalienables de los ciudadanos colombianos. En resumen, la política criminal en Colombia tiene por blanco a los pobres y a quienes, eventualmente, podrían representar una alternativa de cambio democrático. La reacción estatal se orienta a judicializar y criminalizar sus luchas, en la mayoría de casos de supervivencia.

5) Esto ha traído como consecuencia el desbordamiento de la capacidad carcelaria y penitenciaria nacional, y como consecuencia directa gravísimas violaciones a los derechos más elementales de las personas privadas de la libertad. En los últimos 15 años en las cárceles colombianas se ha vivido una situación de conflicto, caracterizada por protestas, huelgas, motines, desobediencias civiles e incidentes violentos cuyo origen es múltiple: condiciones infrahumanas de reclusión, irrespeto a la dignidad del preso, violación de derechos, y más recientemente, el traslado del conflicto Estado —Insurgencia a las prisiones, —a través del paramilitarismo—, además de la descarada injerencia gringa en la administración de justicia y carcelaria colombianas. "(...) Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción. Razón le asiste a la Defensoría del Pueblo cuando concluye que las cárceles se han convertido en meros depósitos de personas. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del Estado de Cosas Inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc..."

En efecto, tanto el derecho a la dignidad como el de no recibir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se ven quebrantados por el hacinamiento y las malas condiciones de la estructura física y de servicios públicos que se encuentran en los centros de reclusión; los derechos a la vida y la integridad física son vulnerados o amenazados de manera inminente por el mismo hacinamiento; el derecho a la familia es quebrantado por la superpoblación carcelaria y las deficiencias administrativas, condiciones estas que implican que los visitantes de los reclusos han de soportar prolongadas esperas, bajo las inclemencias del clima, para poder ingresar al centro, y que dificultan en grado extremo las visitas conyugales y familiares (...)."

6) La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas-OACNUD convocó una Misión Internacional que elaboró en el año 2004 el Informe "Establecimientos de Reclusión en Colombia: Un estado de cosas inconstitucional y de flagrante violación de derechos humanos." La Misión constató la existencia de un patrón de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de las obligaciones del Estado Colombiano en materia de derechos humanos en los establecimientos de reclusión y salas de retenidos de las estaciones de policía del país. Las condiciones de detención en las que se encuentra la gran mayoría de las personas privadas de libertad en Colombia, así como el trato que reciben por parte de autoridades judiciales, policiales y penitenciarias, constituyen flagrantes violaciones de sus derechos humanos. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) al 30 de septiembre del 2004, de una población total de 50.755 los sindicados son 21.433 y los sentenciados 29.322. Datos que no son reales pues habría que añadir los que se encuentran en las detenciones y retenciones de la policía y en las cárceles municipales del país. Las violaciones a los derechos humanos constatadas por la Misión en las cárceles, penitenciarias, estaciones de policía y salas de retención transitorias visitadas derivan de la combinación de altos niveles de saturación o hacinamiento penitenciario y malas condiciones de detención, aunados a la mala gestión penitenciaria, ingobernabilidad, corrupción e impunidad prevalentes en la mayoría de los centros. Como caso patético de esta situación, tenemos por ejemplo la cárcel Modelo de Bogotá que fue diseñada para albergar 1.900 internos y hay en la actualidad 4.450, los domingos, día de visitas, dentro de la cárcel alcanzan a estar simultáneamente 20.000 personas, de las cuales 10.000 son menores.

7) SITUACION PARTICULAR DE LOS PRESOS POLITICOS COLOMBIANOS. En las cárceles colombianas se encuentran miles de combatientes populares en físico estado de indefensión. Durante décadas las cárceles colombianas, han sido llenadas por un sinnúmero de combatientes populares de izquierda o patriotas, que se han opuesto tácitamente a las oligarquías liberales y conservadoras; muchos han purgado largas condenas y perecido en ellas, padeciendo la atrocidad y humillación inferida por el Estado oligárquico al servicio del imperialismo norteamericano. Normalmente los revolucionarios y combatientes populares que ingresan a las cárceles, lo hacen en condiciones de total indefensión: No tienen abogados que los representen en los debidos procesos; algunos se encuentran enfermos o heridos.

Muchos de estos combatientes provienen de zonas urbanas muy populares o de regiones rurales distantes a los sitios de reclusión. Otros son de la clase media, pero en general, sin ningún recurso económico que les garantice una defensa justa y una permanencia respetuosa y digna en las cárceles. "En las cárceles de Colombia cerca de 7.000 personas cumplen condenas por motivos políticos, el Gobierno, sin embargo, no les concede el status de presos políticos al negar la existencia de un conflicto armado en el país, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos tienen censados alrededor de 6.800 detenidos por razones políticas, esta cifra significa un aumento con respecto a años anteriores y esto se debe a la enorme represión que se ha acentuado con este gobierno. Mucha población civil, desde sindicalistas hasta defensores de derechos humanos, han sido privada de la libertad".

8) A partir de la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, con la aplicación de su mal famosa política de "seguridad democrática" especialmente con su estrategia de "detenciones masivas y arbitrarias", según distintas Ong' s de derechos humanos, puede afirmarse que la cifra de detenidos por razones políticas y/o con ocasión del conflicto hoy en día es de 12.000 personas aproximadamente. La política criminal colombiana ha estado orientada a reprimir y criminalizar, sin reparos, la protesta popular y por esta vía a consolidar la pobreza, bien sea «apaciguando» a los que se levantan, o eliminándolos, o encarcelándolos. Así se ha judicializado y penalizado indiscriminadamente a defensores de los derechos humanos, desplazados internos, ecologistas, cultivadores de cultivos de uso ilícitos; opositores a la impunidad, al modelo de desarrollo y a la intervención militar de los Estados Unidos, en igual forma a los que han investigado y denunciado a los corruptos que han conducido a la nación a la bancarrota, a la inestabilidad económica, a la recesión, al desempleo y al hueco fiscal. En Colombia ningún sector

social o sindical se ha escapado a la penalización, represión y restricción indebida de la protesta social, pero quizá los más golpeados sean los campesinos, los indígenas, los afro colombianos y los trabajadores petroleros, del sector financiero y de las telecomunicaciones. Actualmente la expresión más aberrante de la penalización de la protesta social y popular se ha desarrollado en el marco de la política de "seguridad democrática" aplicada por el Narcopresidente Álvaro Uribe Vélez, que se ha traducido en la persecución y judicialización de cientos de dirigentes de organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, las detenciones masivas y todo tipo de desmanes contra el pueblo y sus organizaciones.

Es evidente como a través del Plan Colombia y con ocasión de los convenios firmados por el Estado con el Buro Federal de Prisiones de los Estados Unidos y siguiendo las órdenes de ese gobierno, se construyen en Colombia una serie de penitenciarías de máxima seguridad, como por ejemplo la de Combita, en el departamento de Boyacá, a más de tres horas al norte de Bogotá. La prisión está ubicada en el altiplano a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar con temperaturas diurnas de un promedio de 4 a 6 grados Celsius, y por debajo de cero en las noches. Los prisioneros no tienen acceso a la calefacción, ni a la luz solar. Combita, en el departamento de Boyacá, es el segundo sitio de reclusión más peligroso en el hemisferio occidental después de la prisión de Gitmo ubicada en Guantánamo —Isla de Cuba. Estos sitios reproducen el esquema de cárcel predominante en ese país y que es asimilado a un campo de concentración, el cual, ha sido motivo de enérgicos cuestionamientos a nivel internacional, pues es una realidad que allí se desconocen abiertamente todos los derechos inherentes a la persona humana. El gobierno colombiano ha decidido implementar este modelo de cárcel desconociendo imperativos constitucionales y los compromisos asumidos por el Estado a nivel internacional en lo que respecta al tratamiento a las personas privadas de la libertad.

Los presos y presas políticos colombianos como parte de la población carcelaria colombiana, además de sufrir las inhumanas condiciones que afrontan los casi 60.000 presos del país, soportan una carga adicional por su condición de presos políticos, la estigmatización, la segregación y el trato discriminatorio por parte de las autoridades judiciales y penitenciarias hacen más gravosa la carga de nuestros compañeros y compañeras. Con la supresión del delito político la mayoría de nuestros compañeros están siendo procesados y condenados por terrorismo, homicidio, secuestro y por todo tipo de delitos menos por rebelión. Urge de la comunidad internacional la puesta en marcha de medidas concretas para conocer y ayudar a nuestros compatriotas injustamente encarcelados en Colombia. Todas las personas, hombres y mujeres que protejan los intereses del pueblo, son merecedores del más profundo respeto y admiración. Son meritorias de la mayor solidaridad y fraternidad cuando las circunstancias y lugar lo requieran».

Dentro de esa vorágine de desaciertos, desorden e injusticia, el gobierno del Patrón Uribe ha extraditado a casi 800 personas hacia Estados Unidos por el delito de narcotráfico, pero, dentro de esas personas se encuentran también inocentes que continúan clamando su inocencia sin ser escuchados por el gobierno, que quiere mostrar resultados a toda costa, ni por la justicia colombiana empeñada en seguirle el juego al espurio presidente Uribe, omitiendo hacer un estudio serio y profundo sobre el condenado a la extradición. Como ejemplo están los casos de dos hombres de la costa atlántica, obreros bananeros, quienes fueron acusados de narcotráfico y lavado de activos. Pero dichos ciudadanos no conocían siquiera el color de un dólar, ni cómo se maneja una chequera y jamás habían visto una tarjeta bancaria, por consiguiente, no eran dueños de las inmensas fortunas que las autoridades colombo-estadounidenses les atribuían. Es tal la pobreza de estas dos familias que ni siquiera podían darse el lujo de comer las mínimas tres veces al día y mucho menos abrir una cuenta ni siquiera de ahorros, pues escasamente ganaban dos euros por día. Los dos hombres fueron encarcelados acusados de narcotráfico y poco tiempo después extraditados hacia los Estados Unidos; con la fortuna que nadie allá tenía referencias de sus nombres ni caras y para el medio judicial y de la mafia, eran verdaderos

extraños²⁸⁴. Los agentes de Bogotá y Washington se habían equivocado. Y el gobierno uribista con tal de mostrar al mundo su susodicha lucha contra la mafia del narcotráfico, no trata de cuidarse de los posibles errores sino de sumar y sumar diariamente mas extraditados. Y por el contrario, los grandes capos del Cartel de Medellín no han sido extraditados y siguen recibiendo el favoritismo de Uribe en persona y del gobierno estadounidense. Pablo descansa tranquilo en su tumba.

La situación social de las mayorías colombianas es más que angustiosa en los planos social, educativo, laboral y de sanidad. Mientras la represión crece y las inversiones en armamento y pie de fuerza militar aumentan año tras año, la mayor parte de la población colombiana se acerca a la pobreza extrema, estimándose en un sesenta y cinco por ciento de colombianas y colombianos que viven por debajo de la línea de pobreza. El desempleo aumenta —aunque desde la Casa de Nariño se manipulen las cifras para mostrar lo contrario— y los pocos colombianos y colombianas que obtienen un trabajo, este no es estable y la remuneración es mínima y en la mayor parte de casos por debajo del salario mínimo oficial²⁸⁵. La privatización de la salud ha conllevado a que muchos hogares se abstengan de visitar los

²⁸⁴ El drama que han vivido varios inocentes y sus familias, por la injusta acusación de pertenecer a la mafia del narcotráfico es indescriptible, mas aun cuando estas gentes no poseen los recursos económicos para pagar un buen abogado que los defienda con todas las de la ley. Ahora son familias destrozadas de por vida. Dos casos que necesariamente se deben tener en cuenta dentro de la guerra interna que vive el país, fueron las extradiciones de los guerrilleros de las FARC, Ricardo Palmera, más conocido en el medio revolucionario como Simón Trinidad y Anayibe Rojas, conocida en las filas de las FARC como Sonia. Los dos revolucionarios fueron extraditados después de un acuerdo entre los gobiernos de Uribe y de Bush, no solo para tratar de demoler la resistencia del movimiento subversivo, sino también para desprestigiarla en el mundo entero presentándola como una organización narcotraficante y desteñir así su andar revolucionario. Antes del envío de los guerrilleros a Estados Unidos, Uribe había propuesto —o mejor chantajeado— a la guerrilla en el sentido de que si los retenidos (políticos, militares y los tres mercenarios estadounidenses) eran puestos en libertad los dos revolucionarios capturados no serían extraditados. Las FARC se negaron ante tal indecencia e inmediatamente y con la velocidad del rayo, los dos subversivos fueron acusados de narcotráfico, la embajada estadounidense remitió el pedido de extradición y la corte suprema de justicia colombiana dio su aprobación. Uribe, sin pérdida de tiempo firmo la extradición. Todo pese a que mucho antes de la captura de los dos guerrilleros no existía ni en Colombia ni en Estados Unidos acusación por tráfico de drogas ni solicitud de extradición. Sonia fue torturada y amenazada de muerte, igual suerte para su familia, sino atestiguaba en contra de los comandantes guerrilleros acusándolos de narcotráfico, ante su negativa fue aislada y llevada a un barco de la armada en el océano atlántico, en donde agentes del FBI le ofrecieron mucho dinero, un pasaporte estadounidense para ella y su familia si denunciaba al secretariado de las PARC de narcotráfico, la joven campesina de extracción humilde y revolucionaria no acepto el chantaje y personal de la DEA, la torturo, prometiéndole el infierno. En una corte federal estadounidense se llevo a cabo el juicio, plagado de errores y testigos pagados por la fiscalía, además de la falta de pruebas que demostraran que Sonia y su grupo son verdaderos traficantes de drogas. La defensora de la joven revolucionaria Carmen Hernández, cuestionó el juicio y dijo al juez James Robertson, que fue bastante defectuoso, agregando que los testigos fueron perjuros. También señaló la abogada Hernández, que a su clienta se le quiere hacer condenar e imponérsele una pena superior a la impuesta a verdaderos narcotraficantes. Después de tratativas y desacuerdos Sonia fue condenada a 16 años de prisión por el delito de importación de droga. La joven revolucionaria declaró que no se arrepentía de pertenecer a la guerrilla de las FARC, que no era terrorista, ni narcotraficante y en medio del llanto solicitó al juez que fuera tratada como un ser humano. El juez Robertson le respondió que esa no era su responsabilidad. El juicio de Simón Trinidad, no se diferencio en mucho al de Sonia, con respecto a los remunerados testigos y a las falsas acusaciones, hasta oficiales de la policía colombiana viajaron a Estados Unidos para testificar contra el revolucionario. A diferencia de Sonia, Simón y sus abogados pudieron desbaratar toda la pantomima creada alrededor del juicio por la acusación y el reo logro obtener la palabra y plena audiencia conto su vida de hombre director de banco y perteneciente a una honorable y acomodada familia de Valledupar y también como renunció a esa deshonrosa comodidad y se unió al movimiento revolucionario armado al constatar tanta injusticia contra la población y su creciente pobreza. Conto igualmente el abominable exterminio de la Unión Patriótica, movimiento del cual el hizo parte, antes de convertirse en guerrillero. Refuto las acusaciones en su contra y en contra del movimiento armado FARC de ser narcotraficantes y se presento como un hombre de convicciones revolucionarias, y dispuesto con su grupo a cambiar la corrupta política colombiana. Al igual que su compañera Sonia no se arrepintió de ser guerrillero de las FARC y afirmo que sus ideas siguen intactas a pesar de todo su sufrimiento. (Simón está confinado en una celda de un metro y medio por dos y tiene solo una hora de sol por semana). Los jurados que participaron en los dos juicios —el primer juicio fue declarado nulo por desacuerdo del jurado— contra Simón Trinidad no pudieron condenarlo por falta de pruebas. El juez Royce Lambreth, no escondió su disgusto y la Fiscalía prometió otro juicio contra este revolucionario que debe ser condenado única y exclusivamente por rebelión al igual que Sonia.

²⁸⁵ La jornada diurna para las trabajadoras y trabajadores colombianos termina a las 22 horas (Art. 25 de la ley 789 de 2002). Impuesta por Uribe. El pago de horas extras y suplemento por días feriados o dominicales trabajados fue igualmente abolido.

centres de salud', por falta de dinero y en los casos de emergencia deben esperar varios días para ser atendidos o simplemente resignarse al fallecimiento del enfermo o la enferma, como ha sido el triste caso de vanas decenas de infantes y adultos en todo el país, pues también la deshumanización del sistema de salud y de muchos médicos y directores de hospitales no pareciera tener límites. A parte del problema meramente sanitario, las Empresas Privadas de Salud (EPS) son manejadas por verdaderas mafias que controlan y súper manejan la salud, de las colombianas y colombianos como meras mercancías a las cuales se les destina un pre-cio. Los infantes y sobre todo jóvenes asisten a la deserción total de los planteles educativos por diferentes razones, pero la más corriente es la falta de recursos tanto para nutrirse²⁸⁶, como para el pago de matrícula, pensiones y textos escolares. La mayor parte de estos infantes o jóvenes 'prefieren' trabajar para ayudar en sus hogares al mantenimiento de la familia. Lo que ha ocasionado una mayor pauperización de la población colombiana y un empobrecimiento no solo económico sino intelectual y de capacitación. Y lo terrible con esta aberración, es que muchos de estos infantes de ambos sexos, no tienen otra opción que entregasen a la prostitución y desde edades tempranas, los ocho, nueve años. En el campo los campesinos quedaron sin tierra para trabajarla —debido al robo narcoparamilitar de más de 5 millones de hectáreas— y en las ciudades los ciudadanos están perdiendo sus viviendas a causa del irracional sistema de financiamiento hipotecario, con el cual deben pagar sus casas hasta cinco veces del monto real de la deuda, pues los intereses se acumulan y el pago del capital es mínimo, agregando la devaluación de la moneda.

Más de 300 mil familias han perdido así sus viviendas a pesar de haberlas pagado varias veces²⁸⁷. Sin embargo el sistema bancario colombiano vive en un paraíso jamás imaginado, pues en los últimos años las ganancias de la banca han sido del orden de los 3.6 billones de pesos (aproximadamente 1.220 millones de euros) por año, o sea un porcentaje positivo del 37 por ciento y con fuerte tendencia al aumento. Y en esto tiene mucho que ver la política del mafioso presidente Uribe, quien se ha desentendido completamente de la paupérrima situación de sus compatriotas.

Uribe solo se interesa en la guerra como se puede ver en la inversión militar que ha malgastado en los años 2003 al 2005:

2003 => invirtió Uribe 4 billones 800 mil millones de dólares en la guerra; 694 millones aportados por los Estados Unidos; 516 Impuestos al Patrimonio y 3.617 del Presupuesto Nacional.

2004 => invirtió Uribe 5 billones 500 mil millones de dólares así: 661 aportados por los Estados Unidos; 134 Impuestos al Patrimonio y 4.705 del Presupuesto Nacional.

2005 => invirtió Uribe 6 billones 400 mil millones de dólares así: 674 aportados por los Estados Unidos; 57 millones Impuestos al Patrimonio y 5.638 del Presupuesto Nacional.

Este monstruoso despilfarro económico en el llamado Plan Colombia, y ahora Plan Patriota que fue implementado en la lucha contra el narcotráfico, pero que en realidad fue elaborado y dirigido por los Estados Unidos para la eliminación de las guerrillas, ha sido un completo fracaso. Y en la actualidad podemos afirmar que no ha habido éxito ni en lo uno ni en lo otro. Las guerrillas siguen enteras y combativas, mientras que la siembra, manufactura, comercio y exportación de cocaína se comporta tan bien como en los años 1999 y 2000. Pues en 1999 las hectáreas de tierra sembradas de coca eran de 163 mil y para mayo de 2007 es de 157 mil hectáreas. La manufactura y exportación de la cocaína no ha sufrido mayor deterioro y sus principales capos y carteles siguen activos, pues si varios de los narcotraficantes y narcoparamilitares mas importantes están en las cárceles del país, desde allí siguen

²⁸⁶ Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, ha denunciado el alto nivel de hambre y desnutrición que golpea a los hogares colombianos. Datos confrontados con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

²⁸⁷ Asociación Nacional de Deudores de Upac. Prensa Nacional (24 sept. /2007).

controlando una buena parte de este comercio, otros capos están libres ejerciendo su “enriquecedora” labor y otros aprendices o lugartenientes de la mafia han venido a copar los lugares dejados por los cabecillas 'narcoparas' y los varios capos del Cartel de Cali extraditados, con la anuencia o complicidad de políticos, empresarios y funcionarios en todo el territorio nacional. Es más los 'desmovilizados' mantienen sus estructuras políticas, económicas y militares intactas y como en los tiempos de Pablo Escobar, la 'nieve' entra al país del norte sin problema alguno, pues, el director de la Aeronáutica civil de esa época, es hoy en día el presidente de Colombia.

Con un completo respaldo de la bancada uribista en el Congreso, bancada mezclada con el narcoparamilitarismo y un Congreso en el cual se compra, se vende y se consume droga libremente, además de la competencia entre los 'brillantes' parlamentarios, hombres y mujeres sobre quien viste mejor, o quien está a la moda como si fueran modelos de los más altos estilistas y modistos de trajes y calzado europeos y estadounidenses, olvidándose de su labor de legisladores y de su compromiso con sus electores y el país. Y más ocupados últimamente en buscar leguleyos para defenderse o evitar la inculpación por sus alianzas con los criminales y la mafia y tratando de cambiar la leyes para no ser condenados.

Todos los caminos del narcotráfico y del paramilitarismo conducen a Álvaro Uribe Vélez²⁸⁸. Con el agravante que ha sido protegido por el gobierno de los Estados Unidos, concedor a plenitud de los crímenes y fechorías de este individuo, de varios de sus familiares y de la mayor parte de su círculo político, militar y empresarial.

Pues así lo siga negando, él es el Patrón de la mafia colombiana. Porque de lo contrario Álvaro Uribe Vélez, sería el hombre más desafortunado del mundo y un caso fuera de lo normal, al acumular tantos hechos casuales que lo vinculan con la mafia y el crimen desde que tenía 26 años de edad²⁸⁹. O acérrimos enemigos que buscan destruirlo, si constatamos que su cercanía con los Patrones de la mafia de Medellín, en los años 80 es un invento y los privilegios otorgados a los narcoparamilitares desde el 2002 no existen. Pero no hay tal, pues no es una casualidad tener un padre, hermanos, tíos y primos mezclados con el narcotráfico y creadores de dos temibles grupos paramilitares que ocasionaron la muerte de muchos colombianos y colombianas. No puede entonces, un hombre tener tal mala suerte de estar ligado casualmente o por error junto a su familia en hechos de narcotráfico y crímenes, como él ha querido hacerlo ver desde que la mafia lo postuló como candidato presidencial por allá en el año 2000. Lo cierto es que este individuo todo lo ha negado verbalmente y jamás ha mostrado pruebas fehacientes de su inocencia y la de su familia. Y por el contrario con el paso del tiempo son más nítidas las pruebas de la activa participación de Álvaro Uribe y su familia con el criminal ghetto de la mafia colombiana.

Que su padre el difunto Alberto Uribe Sierra, haya estado a punto de ser extraditado a los Estados Unidos, no es culpa del “señor presidente” de Colombia, pero si es ya un motivo de gran preocupación que un helicóptero comprado e importado por el señor Uribe Sierra, haya sido encontrado en el allanado complejo más grande en la historia de la mafia en el país, llamado Tranquilandia y en donde el Ministro de Justicia de la época Rodrigo Lara Bonilla, decomisaría miles de kilos de cocaína y un parque de aviones y helicópteros pertenecientes a los narcotraficantes más sanguinarios del momento, Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, los Ochoa y los Rodríguez Orejuela y con permisos expedidos por Álvaro Uribe. Porque el helicóptero de la familia Uribe un Hugues-500 modelo 369D con matrícula HK-2704 X —amparado hasta ese momento con la matrícula estadounidense N215-FA— se encontraba allí, y el por qué, a dicho helicóptero le fue otorgada la licencia de operaciones y la correspondiente matrícula en tan solo medio día, mientras que el tiempo normal de su expedición y autorización era de

²⁸⁸ Uribe fue conocido en el ambiente mafioso por la época de Pablo, los Ochoa y Rodríguez Gacha, con el alias de “Varito”. Con la caída de estos patrones y el surgimiento del narcoparamilitarismo su alias es 'El Salgareño'

²⁸⁹ A sus veintiséis años Álvaro Uribe, tuvo su primera sindicación por un cargamento de marihuana al parecer con destino a los Estados Unidos y en 1983 el mismo Uribe fue ligado a un proceso de contrabando, de un avión cargado con cocaína.

aproximadamente 20 días, y porque también la aeronáutica había concedido licencia y matrícula a tres de los seis aviones encontrados en Tranquilandia y pertenecientes a los patronos Escobar y Rodríguez, siendo director del ente gubernamental el señor Álvaro Uribe Vélez, y teniendo como su principal asesor a Cesar Villegas, condenado años más tarde por narcotráfico y asesinado al norte de Bogotá, horas antes de su entrevista con agentes del FBI a quienes iba a contar muchas cosas sobre su socio Álvaro Uribe. No es culpa tampoco del “señor presidente” que su difunto hermano Jaime Uribe Vélez, alias, “el Pecoso”, haya sido tornado preso por la brigada IV de Medellín, por sus innumerables comunicaciones y amistad con el 'narco' Patrón Pablo Escobar y tampoco sería responsable el “señor presidente”, si su hermano Santiago Uribe Vélez, alias, “cara de manzana”, se haya ingeniado la brillante idea de crear un grupo terrorista llamado «Los Doce Apóstoles» con sacerdote abordo, para asesinar más de un centenar de personas indefensas, aprovechando el proyecto político-militar de su hermano el alcalde de Medellín, con la creación de las cooperativas de seguridad Convivir, que tanta muerte y tristeza han sembrado en el país en estos últimos treinta años. Cada quien es dueño de sus actos, cuando se es mayor de edad, pero es que todos estos hechos mafiosos y criminales de cada uno de los personajes de la familia Uribe están conectados al mismo hilo conductor, el narcotráfico y el paramilitarismo. Como la abominable gestión de muerte de sus primos Carlos Alberto y Juan Diego Vélez²⁹⁰, creadores del grupo terrorista «Los Erres» autores de numerosos asesinatos y de su primo Mario Uribe, respetable Senador de la República, en las altas esferas de la política y la gran prensa y cruel criminal en su vida privada. El Patrón Álvaro Uribe, se defiende diciendo que todo lo anterior son calumnias, pero no da pruebas, mientras si las hay en lo que respecta a su criminal andanza y la de su familia y, aunque su hermano Santiago niega que no es cierto lo de su participación en el grupo de muerte apostolar, pues el propio Fiscal Luis Camilo Osorio, precluyó —precipitadamente— su expediente sobre estas acusaciones, en la Corte Interamericana de Justicia está abierto el expediente numero 11227 formulado el 16/12/93, en el cual él y su grupo «Los Doce Apóstoles» están relacionados también con el genocidio de más de 7 mil miembros del movimiento político Unión Patriótica; sus primos fueron condenados por narcotráfico en Estados Unidos y Mario Uribe, el flamante senador está acusado de pertenecer a ese narcoparamilitarismo que ha robado tierras y masacrado indefensos seres humanos.

Sin embargo, en Colombia no pasa nada. Existe un democrático “presidente”, muy a pesar de las frescas declaraciones de la presentadora de televisión y ex amante de Pablo Escobar, Virginia Vallejo, quien conto en su libro y confirmo a la prensa extranjera que Pablo le había confesado que *'sin ese muchacho —Álvaro Uribe— no hubieran podido ingresar a Estados Unidos miles de toneladas de cocaína, porque les hubiese tocado ir nadando hasta las costas de Miami'*. Esto en referencia a Uribe cuando fue director de la aeronáutica civil y otorgó numerosos permisos de vuelo a las naves del Cartel de Medellín y pistas.

¿Por qué Uribe visitó en 1992 a la esposa de Pablo Escobar, María Victoria Henao, en medio de los bombazos que este criminal estaba colocando en todo el país y matando inocentes y sobre todo porque lo mantuvo en secreto? Ahora que se supo, Uribe sale a decir que el motivo de su visita a la esposa del criminal narcotraficante fue para, por intermedio de ella, pedirle a Escobar que se entregara. Pero acaso la señora María Victoria Henao, no era la mujer más vigilada del país y, olvidó Uribe que entre ella y el 'narco' la comunicación era nula, inexistente. Entonces por que miente. ¿Y sobre el asesinato de Rodrigo Lara? Tampoco se ha tenido en cuenta las declaraciones de la hermana del inmolado Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, Cecilia Lara Bonilla y quien en 1984 declaró ante el juez 77 de instrucción criminal de Bogotá, la conversación que tuvo con su hermano el 30 de abril de 1983 en el norte de Bogotá, y en la cual el ministro Lara, le confiesa sus temores, casi su certitud, de que iría a ser asesinado por los propietarios de los aviones encontrados en la región amazónica del Yarí, en los laboratorios donde se elaboraban toneladas de cocaína en el complejo de Tranquilandia y el propietario del helicóptero de cinco puestos: «el si tenía muchas dudas sobre Uribe Vélez» dijo la hermana del

²⁹⁰ Los 'honorables' primos del señor presidente trabajan en calidad de funcionarios, el primero está trabajando con la presidencia de la República y el segundo con la alcaldía de Medellín.

ministro. Por su parte el coronel de la policía de la época Jaime Ramírez Gómez, y quien acompañó al ministro en su honrosa labor contra la mafia, en otra declaración juramentada y que reposa en el mismo expediente, afirmo que el ministro si le comunico sus inquietudes sobre un posible atentado contra su vida por la operación Tranquilandia. La declaración del ministro después de dicha operación fue «Lo de Tranquilandia es muy grave y compromete a gente muy importante de la política del país... el helicóptero que se incautó en Tranquilandia es del papa de Álvaro Uribe Vélez... la mafia ha entrado a todos los estamentos del país, no solo a la política sino a la economía» La muerte de Rodrigo Lara continúa en la impunidad. Tulio Manuel Castro Gil, el juez que siguió el caso y acusó a Pablo Escobar como uno de los responsables del asesinato de Lara, fue asesinado en julio de 1985 y el coronel Jaime Ramírez Gómez, fue asesinado en noviembre de 1986. En cuanto al helicóptero encontrado en el complejo de elaboración de cocaína, Uribe sostiene que este aparato fue dado en pago de una deuda de 25 millones de pesos a un tal Pedro Fidel Agudelo Chávez, quien en realidad fue un trabajador del narcotraficante Fabio Ochoa, condenado a 30 años de prisión, y testaferro del sanguinario Gonzalo Rodríguez Gacha, muerto en un enfrentamiento con la policía en 1989. Los Uribe no han logrado probar dicha transferencia del helicóptero y es más, el 1 de mayo de 1986 un helicóptero con las mismas características y matrícula cayó en Medellín con cocaína, dicha información fue dada por el diario El Colombiano de Medellín.

El audaz Álvaro Uribe, o mejor el taimado, sorpresivo y venenoso Álvaro Uribe logró mantener siempre un perfil bajo frente a su público no sin perder su estrecha relación con la mafia. Pues él si intuyó el cómo llegar a ser presidente de Colombia, como fue el sueño de sus amigos pertenecientes al ghetto mafioso. El, apodado Varito en los lujuriosos, mortuorios y estrambóticos tiempos de Rodríguez Gacha, Escobar y el clan Ochoa, se dedicó a estudiar siempre con un pie en la política mafiosa, lo mismo cuando estuvo fuera del país, en Harvard y Oxford estudiando el pensamiento anglo-europeo para saber manipular, mientras que sus amigos trabajaban el negocio del 'mágico' polvo blanco. El no se ocupaba sino conocer leyes y sumergirse, introducirse en los llamativos recovecos de la, todo poderosa política nacional, para después tener todo el poder de dirigir, mandar y llegar a ser el Patrón de Patronos. No por nada, el sería el genio, el inventor que puso en práctica la 'policía' privada, que devendrían en escuadrones de la muerte al servicio del narcotráfico para gloria de todos sus adherentes, en ese, su gran sueño de las Convivir, que bien podrían tener un halito de semejanza con los SS del nacionalsocialismo. Entre bambalinas cocía el caldo de su propio poder, juntándose con lo más retardatario o reaccionario de que tenga histona el país y compartiendo su primario y visceral anticomunismo que no lo ha dejado dormir tranquilo. Por eso su displicencia hacia los cientos de miles de asesinados acusados falaciosamente de ser guerrilleros y su desentendimientos con el dolor de sus familias. Con engaños, historias de poder, promesas incumplidas y su verbo engatusador logro embrujar a mucho potentado que nadaba entre las aguas de la intolerancia y el fascismo, convenciéndolos de la futura conformación de un nuevo Estado capitalista, sin comunistas, sin sindicalistas, sin organizaciones humanitarias, que impidieran ese avance puro, del comercio “puro” y en el que, todo se convertiría en oro al tocarlo, al solo desearlo; pues en el mundo capitalista todo se vende y todo se compra. Renunció a su partido liberal en el cual jamás estuvo verdaderamente, hizo un llamado a los políticos de los dos centenarios partidos que estuvieran de lejos o de cerca mejor, comprometidos con el ghetto y lanzaría clandestinamente acompañado de sus acólitos narcoparamilitares la «refundación de la patria», garantizada en todos sus gastos con el tráfico de droga y después a la toma del poder con las arcas del Estado. Todo era fácil, pues teniendo luz verde de parte de los patronos del norte, no habría trastabilleo alguno y, la poderosa prensa nacional —e internacional— no sería obstáculo.

De un simple político desconocido en casi todo el país en comparación a los corruptos varones de la política nacional, el Patrón Uribe se lanzaba como candidato presidencial en nombre de un movimiento independiente salido de no se sabe dónde, pero con suficiente respaldo económico para dar la batalla en los largos y sucios intrínquilis de la democracia capitalista. Uribe y su banda proponía una política completamente alejada de la sindéresis, y con la guerra como bandera a guisa de seguridad para confundir aun mas a los ingenuos e indecisos y después de haberse hecho una propaganda negativa y satanizando los diálogos de paz entre el gobierno de Pastrana y las FARC, —que valga la ocasión para

recordarlo, no estuvo rodeado de asesinatos ni de tráfico de drogas— propuso que la guerra había que acabarla con mas guerra. El camino militar es la paz. Nada podía detenerlo, todo estaba severamente calculado, los políticos regionales estaban todos comprados su militancia en el ghetto mafioso más que comprometido, ninguna deserción era posible. Todo estaba consumado. Y en los sitios en donde no llegara a tiempo el largo brazo de la mafia, con sus in-tratables matones, los ríos de narcodólares correrían en auxilio del ya elegido para darle el triunfo total. La poderosa prensa ya tenía en sus rotativas, bien aceitadas, los titulares para darle la bienvenida al 'Mesías' de esa clase emergente compuesta de narcotraficantes, cabecillas paramilitares y sus socios políticos, empresarios, militares, obispos, ganaderos prestos a refundar la patria. Y con una abstención de casi 60 por ciento y bajo amenazas y compra de votos en todas las regiones del país, Álvaro Uribe Vélez, se convirtió en presidente de Colombia en el 2002 y por cuatro años, sin derecho a ser reelegido por mandato Constitucional. El ghetto mafioso celebró con champaña, pólvora y música, la buena nueva. Los colombianos y colombianas del montón se acostaron pensando si comerían al día siguiente.

Inmediatamente con el poder en el bolsillo, el Patrón de la mafia colombiana y a la vez jefe de Estado Álvaro Uribe Vélez llamó a su lado para que le colaboraran con la gobernabilidad de 'este tonto y a la vez brioso' pueblo colombiano, como Consejeros a los ultraconservadores y mafiosos Pedro Juan Moreno Villa²⁹¹, importante importador de insumos para la elaboración de cocaína y su flamante secretario de gobierno, cuando el ahora “presidente” fue gobernador y José Obdulio Gaviria Escobar²⁹², primo de Pablo, su mensajero predilecto, cuando este se encontraba en su Catedral (cárcel) y desde la cual debía controlar su negocio y sus peones. En los ministerios el Patrón ubicó las cuotas del narcoparamilitarismo como fue el caso de la ministra de educación María Consuelo Araujo Castro, perteneciente al poderoso y temido clan Araujo Noguera²⁹³ de la costa atlántica, y cercanos del narco criminal Rodrigo Tovar Pupo, alias, 'Jorge 40'. En el Ministerio del Interior Uribe nombró en primera instancia al delincuente neofascista Fernando Londoño Hoyos, quien con documentos falsos y otras artimañas robó más de 5 millones de dólares al Estado colombiano en la más completa impunidad, después de haberse descubierto su triquiñuela tuvo que renunciar forzosamente, pero con los dineros robados al pueblo colombiano, se compró una radio y devino periodista para sostener el gobierno mafioso de Uribe, además de escribir en dos periódicos que pregonan la infamia. Como vicepresidente, la mafia había impuesto al cabecilla del Bloque Capital, Francisco Santos, igualmente dueño del poderoso diario nacional El Tiempo y, a la cabeza de los servicios secretos —DAS— el Patrón Uribe, nombraría a su amigo el narcoparamilitar y cuota de 'Jorge 40', Jorge Noguera, de gran utilidad para los narcoparamilitares a quienes entregaba listas de sindicalistas, líderes populares e intelectuales opositores al gobierno a los que había que eliminar y en efecto eso ocurrió. Con estos y otros recomendados de la mafia, el Patrón de la misma, Álvaro Uribe, iría a lanzar su 'magnó' proyecto de «Acuerdos de Paz» con los escuadrones de la muerte y narcotraficantes, en una muy bien orquestada patraña, con el fin de imponer una real impunidad en el país. Hasta los países de la Comunidad Europea alabaron dicho esperpento falacioso, pues en febrero de 2005 el Canciller de la Comisión Europea,

²⁹¹ Pedro Juan Moreno, pereció en un extraño accidente de helicóptero, meses después de haberse separado del gobierno y perder enorme favoritismo de parte de su presidente Uribe. Las buenas relaciones de los dos hombres cayeron al abismo y Moreno se convirtió en un fuerte crítico del gobierno, llegando a la lucidez de denunciar su enorme corrupción. En una entrevista a la revista Semana dijo que en la Casa de Nariño no podían caber dos 'paracos', refiriéndose a él y a Uribe. En el momento de su muerte, Moreno transportaba su computador en el cual conservaba una vasta y preciosa información que el mismo amenazó con dar a conocer en caso de que... —. Dicho computador jamás fue hallado.

²⁹² El hermano de este cínico personaje y adepto de la ilegalidad, Carlos Alberto Gaviria Escobar, tuvo estrechos nexos e importantes negocios con Luis Carlos Molina, el hombre que pago a los sicarios que asesinaron a Guillermo Cano, el director del periódico El Espectador. Carlos Alberto también habría recomendado al mafioso Molina, para que abriera cuentas en el Banco Agrario, desvalijado por la mafia política.

²⁹³ La Fiscalía adelanta una investigación en contra de la alta funcionaria de la Registradora Nacional del Estado Civil Ana María Araujo Castro, por la desviación de recursos de este ente hacia los narcoparamilitares. Según informaciones de prensa, la firma francesa Sagem habría pagado a los narcoparamilitares, por intermedio de la alta funcionaria

señor Eneko Landaburu, le daba un total respaldo a las políticas de Uribe de «Justicia y Paz»²⁹⁴ con los narcoparamilitares, diciendo en la ciudad de Cartagena que 'Colombia es una democracia, donde hay

²⁹⁴ Cinco falacias en negociaciones con paramilitares:

Si se trata de grupos, organizaciones o franjas de población que reclaman una negociación con un gobierno o con un Estado, se presupone que entre esos grupos y el gobierno o el Estado en cuestión se dan diferencias fundamentales sobre los principios o sobre las prácticas políticas. Si no existen esas diferencias carece de lógica un proceso de negociación.

Desde el comienzo del gobierno del Presidente Uribe se vienen adelantando en Colombia diálogos con los grupos paramilitares que se presentan ante la nación y ante el mundo con ropajes que no corresponden a su verdadera naturaleza, dando lugar a falacias de lenguaje que es necesario sacar a la luz.

1. Dichos diálogos son presentados como una NEGOCIACION POLITICA, pero no lo es.

Toda negociación política exige como requisito básico la existencia de dos posiciones antagónicas o al menos diferenciables.

Si se trata de grupos, organizaciones o franjas de población que reclaman una negociación con un gobierno o con un Estado, se presupone que entre esos grupos y el gobierno o el Estado en cuestión se dan diferencias fundamentales sobre los principios o sobre las prácticas políticas. Si no existen esas diferencias carece de lógica un proceso de negociación.

Quien haga un rastreo histórico sobre el pensamiento y las directrices para la acción de las fuerzas armadas o de seguridad del Estado colombiano y las de los paramilitares, no encontrará diferencia alguna importante. Se percibe un enemigo común; un mismo modelo social defendido; una misma doctrina que es la llamada de "seguridad nacional"; unas mismas prácticas represivas; una solidaridad de cuerpo entre ambas fuerzas; un mismo discurso legitimador del sistema vigente; unos mismos mecanismos de impunidad; una misma apología del accionar armado y de la participación de la población civil en é mismo; unos mismos parámetros de estigmatización de los movimientos sociales y de las ideologías políticas no capitalistas, así como una coordinación, combinación y distribución de acciones legales e ilegales con miras a que sirvan a una misma causa.

Esto explica que una de las primeras medidas preparatorias de este proceso, que se ha presentado como de "negociación política", fue la de modificar la Ley 418 de 1997 y suprimir en la nueva Ley (782 de 2002) el requisito enunciado en muchos artículos de la anterior ley, según el cual, para entablar conversaciones y diálogos con alguna organización armada, el gobierno debía reconocerle previamente "carácter político" (Ej.: art. 8, a., b., párrafo 1, párrafo 2; art. 11; art. 50; art. 51; art. 65, etc...). Dicho CARACTER POLITICO, que se basa en la defensa de principios y prácticas 380 relativos a la orientación del Estado de manera opuesta al régimen vigente y en aspectos que toquen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, individuales o colectivos, de quienes integran la nación, es lo que en último término define lo que es una insurgencia armada. Por ello es también revelador que el Gobierno del Presidente Uribe se empeña en negar la existencia de un conflicto armado en Colombia, con el fin de no tener que considerar siquiera una solución política y negociada con el verdadero polo insurgente que defiende principios y prácticas políticas opuestas a las suyas. Prefiere moverse en un discurso donde las únicas fuerzas políticas con las cuales es dable negociar sean las que defienden su mismo modelo social y donde las que defienden otro modelo sean excluidas de toda posibilidad de diálogo o negociación.

2 Dichos diálogos son presentados como una NEGOCIACION DE PAZ, pero no lo es.

La base lógica de una negociación de paz es el reconocimiento de un conflicto que enfrenta a fuerzas opuestas que luchan cada una por la defensa de su causa. Por ello se dice que la paz se negocia solamente entre enemigos y jamás entre amigos. Lo afirmado anteriormente en relación con los principios y prácticas que ha defendido el paramilitarismo colombiano en sus más de 40 años de historia, es suficiente para concluir que no se da una oposición entre el paramilitarismo y las fuerzas de seguridad del Estado colombiano. Por lo tanto, carece de lógica hablar de "proceso de paz" entre gobierno y paramilitares, pues nunca ha habido guerra entre esas dos fuerzas.

Si bien en los últimos meses se ha vuelto frecuente que los mass media registren enfrentamientos entre las fuerzas armadas del Estado y grupos paramilitares, e incluso se den estadísticas de "bajas" (muertes, capturas y deserciones) en el paramilitarismo causadas por agentes del Estado, no se trata, sin embargo, de un enfrentamiento real y de principios entre esas dos fuerzas. En efecto, no se persigue a la dirigencia para-militar; tampoco a los paramilitares que la población denuncia; en muchos casos los "datos de baja" no son paramilitares sino campesinos o pobladores cuyos cadáveres se hacen aparecer como de "paramilitares"; en muchos casos se ha comprobado que se dan acuerdos entre oficiales de las fuerzas armadas del Estado y comandantes paramilitares para "dar de baja" a paramilitares de bajo rango que se han vuelto insubordinados o problemáticos, haciéndolos aparecer como blancos de una persecución oficial.

3 Dichos diálogos son presentados como un PROCESO DE DESMOVILIZACION, pero no lo es.

Como efecto de las numerosas ceremonias de "desmovilización de paramilitares" que se han sucedido desde noviembre de 2003 (iniciadas por la "desmovilización del Bloque Cacique Nutibara" en Medellín, en noviembre de 2003), no se han

desintegrado las estructuras paramilitares, m ha cesado el control de los territorios que antes teman, ni la relación de obediencia a sus jefes, m la apología de las "autodefensas", ni el proselitismo paramilitar, ni las campanas de proyección política del paramilitarismo como anticipo de las campañas electorales.

Hoy día el paramilitarismo representa un poderío económico creciente que impulsa numerosas empresas rentables y mueve sumas exorbitantes de dineros, muchos de ellos "mal habidos" en procesos de legalización, a la vez que proyecta y planifica el control de los próximos debates electorales con miras a eliminar toda competencia mediante las más diversas formas de intimidación. En los mismos documentos públicos con los cuales se inició el "diálogo" con el gobierno (noviembre de 2002) no se hablaba de desmovilización sino que se registraba la complacencia con el gobierno del Presidente Uribe al cual están dispuestos a devolverle el papel de Estado que han estado ejerciendo en muchas regiones, no para desaparecer como fuerza sino para integrarse a los proyectos del Estado y participar con él en el control de los territorios que han estado bajo su dominio.

Quien se movilice por las zonas de conflicto que cubren casi todo el territorio nacional, puede comprobar que los retenes paramilitares no se han desmontado y que la relación con la fuerza pública continúa siendo tan evidente como antes.

4 Dichos diálogos son presentados como un proceso de DESMONTE DEL PARAMILITARISMO, pero no lo es.

El paramilitarismo tiene un principio rector que consiste en desdibujar las fronteras entre lo civil y lo militar y crear una zona gris donde nunca este claro donde comienza la acción armada del Estado y donde termina la acción desarmada de los civiles. Desde su primer origen el paramilitarismo ha buscado involucrar a la población civil en la guerra, ya como combatientes que incursionan en campos vedados por el Derecho a los agentes del Estado, ya como blanco de la acción bélica de un Estado que no per-sigue propiamente a insurgentes armados sino a disidentes políticos y a incómodos líderes sociales.

En lugar de terminar con esa zona gris, el gobierno del Presidente Uribe la ha ampliado de manera exorbitante, creando nuevos campos de grandes proporciones en donde los civiles podrán involucrarse en la guerra, ya como informantes, ya como cooperantes, ya como soldados campesinos que rompen todos los cánones tradicionales de la imparcialidad e independencia que las tradiciones democráticas les fijaron a los hombres de armas del Estado, para involucrarse en la defensa emocional de sus familias y comunidades que han tornado partido dentro de la guerra. De otra parte, el cambio de estatuto legal de las cada vez más numerosas empresas privadas de seguridad, convertidas en apéndices de la fuerza pública (Decreto 3222/02), ha incrementado aun más la zona gris que elimina los perfiles de lo civil y lo militar para confundirlos en un conflicto envolvente en el cual solo un polo cívico-militar monopoliza toda posible legitimidad y autoriza a demonizar a un adversario concebido también como cívico militar, desconociendo sus derechos y justificando toda forma de exterminio del mismo.

Una observación rigurosa de este proceso con los paramilitares llevaría a denominarlo más bien como un proceso de legalización del paramilitarismo, toda vez que se han ido abriendo mas y mas espacios "legales" para que los civiles se involucren en la guerra fortaleciendo el polo bélico estatal.

5 Dichos diálogos son presentados como un proceso de SUPERACION DE LA IMPUNIDAD, pero no lo es.

Tanto el Presidente Uribe como el Vicepresidente Santos, el Alto Comisionado para la Paz y otros altos funcionarios del Estado, han venido defendiendo públicamente la necesidad de sacrificar en gran parte las exigencias de justicia frente a los crímenes de los paramilitares, sacrificio que se justifica, según ellos, para poder obtener como contra prestación "la paz". Esto implica un sofisma, como se vio antes, ya que el proceso no conduce a la paz, puesto que no se está negociando con enemigos sino con amigos.

El sacrificio de la justicia que se demanda se ha ido concretando desde hace muchos meses en diversas propuestas que incluyen indultos y amnistías, rebajas de penas, eliminación de la pena de prisión o la posibilidad de convertir en prisión simbólica los mismos territorios de dominio paramilitar; el establecimiento de blandas sanciones políticas o contribuciones a modalidades de reparación como substitutivas de las penas contempladas en la ley. Todo esto ha suscitado un profundo debate ético y jurídico, a nivel nacional e internacional, toda vez que los crímenes que se propone substraer a la justicia son crímenes horrendos que tienen carácter de crímenes internacionales y han lesionado a la humanidad como tal. Además quebrarían uno de los principios rectores de la Constitución, como es el de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, dando lugar a efectos tan repugnantes como el hecho de que un pobre que cometa atracos para sobrevivir tenga una pena mucho mayor que la de un paramilitar que ha participado en genocidios, desapariciones, ejecuciones, desplazamientos y torturas.

Las experiencias de pretendida "desmovilización" de paramilitares que se han dado en este gobierno, evidencian otra de las trampas de la impunidad: mientras la Fiscalía promete investigar a cada desmovilizado y estudiar sus antecedentes, solo cruza sus nombres con los listados de sindicatos o condenados registrados en la base de datos de la Dirección General de Fiscalías, sin tener en cuenta que una de las tácticas de los paramilitares, que corresponde al diseño del modelo desde sus inicios, consiste en no utilizar el nombre ni el documento de identidad propios, substituyéndolo por un "alias" que además se

cambia con frecuencia. Esto explica que la inmensa mayoría de ellos aparezcan con su hoja de vida "limpia" en los archivos de la justicia, exceptuando a los comandantes ampliamente conocidos, para los cuales han operado otras formas de impunidad: se les ha permitido actuar por décadas a la vista de todo el mundo, amparados por la "ceguera voluntaria" de todos los poderes del Estado, cuidando de que la "justicia no los toque". En lo que se refiere a la impunidad de los agentes del Estado que han hecho posibles o han inducido, impulsado o dirigido el accionar paramilitar, los mecanismos de impunidad han pasado por el no registro de las armas, uniformes o vituallas entregadas a los paramilitares así como de la información referida a esas relaciones.

Por otra parte la Fiscalía se ha negado reiteradamente a investigar los crímenes de lesa humanidad teniendo en cuenta sus notas típicas y esenciales, entre las cuales esta su carácter sistemático. el cual exige decretar la conexidad e investigar las estructuras e instituciones en las que se apoya dicha sistematicidad. Y mientras los crímenes "se investigan", por parte de la Fiscalía, como delitos aislados e inconexos, para que no se puedan tipificar como crimenes de lesa humanidad, se les somete a mecanismos probatorios de antemano destinados al "archivo" o la "preclusión", dado que se hace descansar la carga de la prueba sobre las víctimas y su entorno social, haciendo caso omiso de su situación de amordazadas por el terror, sometidas como están a un paramilitarismo protegido por 383 el Estado que controla todos los espacios de su vida y que sanciona con pena de muerte o de destierro toda denuncia.

Todas estas prácticas impiden que se pueda hablar de un proceso de superación de la impunidad de los crímenes de los paramilitares.

El Derecho Internacional establece que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles; que no son indultables ni amnistiables; que si sus autores no son juzgados en el país donde se encuentran debe aplicarse la jurisdicción universal en cualquier otro país, el cual tiene derecho a exigir su extradición para dicho procesamiento; que no admiten el eximente de obediencia debida ni el del carácter de alto funcionario de Estado de sus autores o cómplices.

Enfrentar el problema de la impunidad de los crímenes de los paramilitares tiene unos REQUISITOS BASICOS. Si estos no se dan, constituye un nuevo engaño prometer una superación de la impunidad.

Esos REQUISITOS serían fundamentalmente los siguientes:

a) Antes de cualquier discusión sobre instrumentos legales que sirvan para superar la impunidad, es necesario que la nación y la comunidad internacional PERCIBAN UNA POSICION DE PRINCIPIOS (ETICA Y POLITICA) EN EOS AGENTES DEL GOBIERNO Y DEL ESTADO QUE TENGA CREDIBILIDAD, EN LA CUAL SE EVIDENCIE SU DISTANCIA Y REPUDIO RESPECTO A LAS PRACTICAS CRIMINALES DE LOS PARAMILITARES. Los instrumentos legales son instrumentos al servicio de posiciones de principio y de convicciones. Desafortunadamente los últimos meses abundan en manifestaciones de simpatía para con los paramilitares por parte de altos funcionarios del Estado y en discursos que invitan a olvidar sus horrores y a considerarlos más bien como víctimas o como héroes que reclaman recompensas sociales. Todo esto se asocia a la consideración del paramilitarismo como poder económico, político y militar en ascenso vertiginoso, cuyo respaldo se anuncia como "necesario" en los próximos debates electorales.

b) Un proceso de superación de la impunidad exige como condición "sine qua non" UN SISTEMA JUDICIAL FIABLE, QUE DEMUESTRE INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, ACATAMIENTO DE LA LEY Y MECANISMOS DE CONTROL. Desafortunadamente vamos en contravía de esto y contamos más bien con un aparato judicial cada día mas corrupto y alejado de los principios universales de la administración de justicia.

c) Un proceso de superación de la impunidad no puede iniciarse sin HABER DESAMORDAZADO PRIMERO LA VOZ DE LAS VICTIMAS. Desafortunadamente cada día vamos más en contravía de esto, pues las víctimas tienen menos voz en la medida en que los paramilitares, al amparo de su legalización, ejercen hoy mayor control social en los territorios donde sembraron el terror.

d) Un proceso de superación de la impunidad exige unos MEDIOS DE COMUNICACION LIBRES, HONESTOS Y AL SERVICIO DE LA VERDAD. Desafortunadamente todo va en contravía de estos principios. La "autocensura" ha sido confesada por los mismos directores de medios en encuestas anónimas. La simple comparación cotidiana entre lo que se informa y lo que no se informa es escandalosa, así como la selección de fuentes y de versiones.

e) Un proceso de superación de la impunidad necesita ENFOCAR LOS CRIMENES DESDE LOS FACTORES QUE LOS HAN HECHO POSIBLES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA NO REPETICION DE LOS MISMOS. Desafortunadamente el sistema judicial colombiano se ha negado reiteradamente a investigar los crímenes de los agentes directos e indirectos del Estado en cuanto crímenes de lesa humanidad, violando los principios del Derecho Internacional Consuetudinario y los tratados internacionales que protegen la dignidad humana.

libertad de prensa y de opinión'. Olvidó el señor Landaburu en ese momento, los más de tres mil presos políticos, los varios periodistas asesinados y los 21.570 colombianos y colombianas detenidos arbitrariamente y tirados a las mazmorras de la 'democracia' uribista, sin ningún derecho y sin ninguna defensa, en tan solo los dos primeros años de su gobierno y en aplicación de su mortífera «seguridad democrática».

A la par con los nombramientos de sus amigos del ghetto mafioso en los principales cargos del Estado y gobierno y recomendados de los sanguinarios cabecillas del narcoparamilitarismo: Carlos Castaño²⁹⁵; Salvatore Mancuso, el cerebro y gestor de la definitiva alianza con la mafia italiana; Diego Fernando Murillo, 'don Berna', alumno de Pablo; Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'; Ramiro Vanoy; Jairo Wilmer Varela, alias, 'jabón', fugitivo de la justicia, pero quien se mueve en el sur oeste del país, como pez en el agua, como lo hace Vicente Castaño en el norte del país; Rodrigo Mercado Pelufo y Hernán Giraldo; Eduardo Restrepo Victoria, alias 'el Socio' entre otros poderosos paranarcotraficantes, sin olvidar a los poderosos narcoparamilitares Vicente Castaño, a quien Francisco Santos le implora por radio y televisión de entregarse; Rodrigo Pérez Alzate y el contemporáneo de Pablo y su 'descendiente' Ramón Izasa; Ivan Roberto Duque, alias, 'Ernesto Baez' entre otros. Uribe se ha hecho rodear de los militares más sanguinarios —acusados de torturas, desapariciones y asesinatos— que pueda albergar las fuerzas armadas y de policía. No contento con haberle ofrecido un pomposo homenaje de desagravio al ex general Rito Alejo del Río, al haber sido retirado del ejército por sus acciones criminales, Uribe lo nombraría —silenciosamente— como su consejero militar. Este ex general apodado «el pacificador», está acusado de crímenes de guerra y de violaciones a los derechos humanos, además de haber sido uno de los baluartes e impulsador de las hordas narcoparamilitares. En el mando de las fuerzas armadas, el ejército y la policía el Patrón Uribe ha hecho gala de su posición ideológica, nombrando sucesivamente a soldados comprometidos con el narco paramilitarismo como los generales Carlos Alberto Ospina Ovalle, narcoparamilitar; Rubén Carrillo Vanegas, 'para' nombrado agregado en Panamá; Rosso José Serrano, narcoparamilitar nombrado embajador en Austria; Mario Montoya Uribe, comandante del ejército y fundador de la Triple A; Freddy León Padilla, comandante de las fuerzas armadas y 'para'; Jorge Daniel Castro Castro, 'narco' y ex director de la policía; Oscar Naranjo Trujillo, 'narco' y director de la policía; Jorge Enrique Mora Rangel, ex comandante del ejército y 'para', enviado como embajador a Corea del Norte, entre otros muchos soldados de la patria comprometidos con la 'refundación de la patria' y militantes activos del ghetto mafioso.

El nombramiento de poderosos industriales en el gobierno mafioso como Sabas Pretel de la Vega, antiguo Lider de la patronal colombiana, en calidad de ministro del interior y de justicia, demuestra el compromiso de los pudientes sectores económicos de acompañar al Patrón Uribe, en sus sucias y suicidas políticas; Sabas Pretel, no solo se encargo de palear y redactar las mejores letras convertidas en ley para favorecer a sus compinches soldados de la muerte, sino también prometerles que de ser reelegido el Patrón Uribe, ellos tendrían sus problemas resueltos²⁹⁶. Sabas Pretel fue premiado por su

Pasar por encima de requisitos tan elementales para superar la impunidad equivale a engañar nuevamente a la nación y al mundo. Cuando se promete construir piscinas y acueductos en un desierto sin fuente alguna de agua, cualquiera cae en la cuenta del engaño. Pero a veces los espejismos obnubilan las mentes y llevan a tomar las apariencias por realidades.

Javier Giraldo, S. J. Bogotá, febrero de 2005

²⁹⁵ Desaparecido misteriosamente, mas no muerto, pues su cadáver no ha sido encontrado y se cree que está vivo a pesar de la propaganda de los poderosos medios de comunicación que ya lo 'mataron'

²⁹⁶ Sabas Pretel en su despedida como ministro de interior ante los sanguinarios cabecillas del narcoparamilitarismo, logró lo que ninguna de sus víctimas o familiares había logrado, hacerlos llorar. En efecto Mancuso e Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Baez', lloraron al momento de despedirse del ministro Sabas, acompañado de un fuerte abrazo al estilo mafioso. Después con lágrimas en los ojos el criminal 'Baez' le deseó suerte a su anfitrión y seguidamente le dio la bienvenida al nuevo ministro, militante de la mafia y cuota del Cartel de Cali, Carlos Holgui Sardi.

gestión gubernamental —que jamás había soñado— al ser nombrado embajador en Italia²⁹⁷, en reemplazo del narcoparamilitar y ex fiscal Luis Camilo Osorio, enviado como embajador a México, país el cual, su futuro mafioso está muy adelantado y al cual, Estados Unidos le aprobó el 'Plan Mexicano' contra las drogas. (!?).

En su segundo mandato, ganado igualmente que el primero a base de chantajes, amenazas, muerte y compra de votos, el Patrón Álvaro Uribe, continuaría a profundizar el establecimiento del sistema mafioso, teniendo en su plantilla ministerial a reconocidos militantes de la mafia y verdaderos neonazis como Andrés Felipe Arias, a quien el Patrón sugirió como su sucesor, en caso de no sabotear de nuevo la maltrecha Constitución de Colombia. Andrés Felipe tomó en serio las palabras de su Patrón y ahora no cesa en su empeño de mostrarse más 'papista que el papa', o mejor ideólogo que Goebbels en su época de guerra. Este 'narcopara', es el encargado de torpedear todas las salidas a una posible negociación o intercambio humanitario entre los prisioneros tanto del gobierno como de la subversión. Y deja entrever a su Patrón Uribe, que él es el indicado para continuar la guerra otros treinta años más, gracias a su juventud, anunciando a grito entero con respecto a los opositores del gobierno que: «... hay que matarlos a todos sin dejar ninguno vivo o por fuera de la cárcel...»²⁹⁸. Mientras tanto, el ministerio de agricultura al cual debería ocuparle su tiempo para solucionar el grave problema del despojo de tierras a humildes campesinos parece poco interesarle, pues, se ocupa exclusivamente en negarle las tierras a los campesinos desplazados por la violencia y entregar las mejores y más extensas tierras al narcoparamilitarismo y ciertos políticos de dudosa honorabilidad. Las malas lenguas cuentan que desea echarse una escapada a Rusia, para fotocopiar el novedoso modelo Putin, de fabricar jóvenes presidentes. Por su parte el 'narcopara' ministro de Hacienda o economía Oscar Iván Zuloaga, aparte de repetir como loro que la economía colombiana va bien, no sabemos para quien pues la pobreza de los colombianos y colombianas desborda los límites, ahora ha tenido que darle posada a los leguleyos del sistema, para que le ayuden a considerar la posibilidad de deshacerse de la sindicación de narcoparamilitar por culpa de las fotos y otras pruebas que existen en su contra y que lo matriculan en el ghetto mafioso. Lo primero que dijo a la prensa y a los tontos y re-signados colombianos cuando se acumularon las pruebas en su contra, fue lo mismo que han repetido todos los narcoparapolíticos: mi vida es un libro abierto, no conozco a esa gente (mafiosos). Pero un ex narcoparamilitar del departamento de Caldas y quien declare ante la Fiscalía lo contradice completamente, ya que dijo que los políticos mas importantes de ese departamento se reunieron con el cabecilla Ramón Isaza, para conformar el grupo de la 'refundación', igualmente Mario Vélez, afirma tener grabaciones y fotos que demuestran la participación de los políticos de Caldas con el narcoparamilitarismo. Zuloaga, además de ser un rico empresario ha sido senador y en su ordenador fueron descubiertos decenas de mensajes cruzados con el criminal Ramón Isaza, el ministro negó haberlos recibido. Pero ya en el 2005 Zuloaga había sido mencionado en numerosos mensajes con el cabecilla criminal 'Ernesto Baez'. Y para no tenerse dudas, en una foto aparece el ministro con la concejal de La Dorada (Caldas) Maribel Galvis, tornados de la mano en una reunión política, la concejal se entrego a la Justicia en calidad de desmovilizada del grupo narcoparamilitar del cabecilla Ramón Isaza. Vélez señaló igualmente que fue testigo del asesinato de un periodista que había denunciado la inmensa corrupción que rema en la región. Sus autores fueron políticos del departamento²⁹⁹. Para el Patrón Uribe, estos señalamientos contra sus ministros y oficiales de las fuerzas armadas es y ha sido moneda corriente y señalamientos a los cuales hace oídos sordos, por el contrario se muestra agresivo en contra de quienes se atreven a

²⁹⁷ En este país europeo en donde se encuentra la sede católica mundial. El Vaticano, labora el arzobispo Alfonso López Trujillo, presidente del consejo pontificio para la familia y antiguo amigo y protector de Pablo Escobar. López Trujillo se caracterizó por su arrogancia hacia los feligreses de su iglesia y una fuerte complacencia con la mafia antioqueña y en especial con Pablo Escobar.

²⁹⁸ Declaraciones a Caracol radio el 11 de enero de 2007

²⁹⁹ Fiscalía General

sugerirle mas recato en sus nombramientos. Arias y Zuloaga, han recibido pleno respaldo de Uribe, igual que lo han recibido narcoparapolíticos y narcomilitares que hoy en día están en prisión o que están siendo investigados por la justicia colombiana. Y para reemplazar a su ministra de relaciones exteriores, Uribe no dudo un instante en nombrar a Fernando Araujo Perdomo, alias, Chambacú, y quien tiene cuentas pendientes con la justicia. Chambacú siendo ministro de Desarrollo en el gobierno de Pastrana, en complicidad con otros altos funcionarios entre ellos Luis Alberto Moreno³⁰⁰, se dieron a la tarea de desterrar a mis de treinta cinco familias afro descendientes del sector de Papayal, arrebatándoles sus tierras en forma fraudulenta. Igualmente con la complicidad de funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, borraron los planos de las tierras en cuestión. El 14 de junio de 2000 la Fiscalía ordeno la captura del ex ministro y hoy ministro de Relaciones Exteriores Fernando Araujo, alias, Chambacú, pero un juez le concedió libertad condicional mediante el pago de tres irrisorios salarios mínimos (200 euros de la época). El 4 de diciembre de 2000, fue apresado por un comando de las FARC en el exclusivo sector de Bocagrande en Cartagena, durando, seis años detenidos.

La política general del Patrón Uribe no deja dudas de su compromiso con la mafia y sus deseos de acabar a sangre y fuego con la oposición en el país, sin importarle el sufrimiento de las mayorías. Su férrea negativa a entablar diálogos con la subversión no son solo los frutos de una inmadurez política, sino también el compromiso pactado con el ghetto mafioso en el 2001, en el que se concrete la guerra a muerte contra las guerrillas, así tuviese el Poder —ganado por todos los medios— que echarle mano a las practicas más escalofrantes y bárbaras para lograr ese objetivo. La PAZ en Colombia no es el objetivo de este grupo mafioso encaramado en el gobierno, y como lo denunciara en Bogotá, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la canadiense Louis Arbour: «Los grupos paramilitares mantienen sus estructuras políticas y económicas», añadiendo que «desmantelarlas es uno de los grandes desafíos de este gobierno». Sin contar con la centena de helicópteros y el moderno y poderoso armamento.

Sin embargo, en la reunión anual de la Organización de Naciones Unidas, llevada a cabo el 27 de noviembre de 2007 en New York, el patrón de la mafia y a la vez espurio presidente de Colombia, se atrevió a mentirle, sin empacho alguno, a todos los presidentes y jefes de gobierno del mundo, diciéndoles que en Colombia ya no existían grupos paramilitares³⁰¹, que su gobierno se había

³⁰⁰ Luis Alberto Moreno, fue embajador en Washington en los gobierno de Pastrana y Uribe. Luego fue elegido por Estados Unidos, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

³⁰¹ Grupos de narcoparamilitares existentes hasta finales de 2007 en todo el territorio nacional.

Guajira Reducto no desmovilizado en la Alta Guajira:	70
Grupo de Desmovilizados y otros	30
Frente contrainsurgencia Wayuu	60
Magdalena Desmovilizados del Bloque Norte:	150
Banda Criminal Emergente El Díficil	18
Banda Criminal de Codazzi	40
Águilas Negras del magdalena	200
Cesar Frente Mártires de Valledupar	50
Desmovilizados del Bloque Norte Frente resistencia Motilona	150
Desmovilizados y NO desmovilizados del frente resistencia motilona del Bloque Norte	200
Desmovilizados del Bloque Norte	70
Banda criminal del Cesar-San Martin	70
Águilas Negras	50*
Bacrim del Cesar y sur de Bolívar	100
Atlantico Desmovilizados v no desmovilizados del Atlántico	60
Banda criminal emergente de "Guerrero y Salomón" (reemplazo de 'Jorge.40')	200
Bolívar Desmovilizados y no desmovilizados del frente defensores de san Lucas del B.C.B	50
Sucre Estructura proveniente del Atlántico	50*
Frente común social por la paz de Sucre	50*

Córdoba "Estructuras armadas"	50
Los Traquetos	100
Vencedores de San Jorge	61
Antioquia Desmovilizados del B.C.B	60
Águilas Negras de Antioquia	100
P.A.C. Protección al Campesino Desarticulado Autodefensas de la Universidad de Antioquia	50
Choco Autodefensas Campesinas Unidas del Norte del Valle – ACUN	350
Risaralda Grupo Cordillera	15
Tolima Bloque Pijao desarticulado	0
Los hombres de azul	80
Futuro Verde	50*
Cundinamarca Bloque Central Santander (y 7 más)	400
Bloque Guaviare	50*
Facciones del desmovilizado "Bloque Capital"	50
Norte de Santander Desmovilizados del Bloque Catatumbo	400
Águilas Negras	150
Águilas doradas	100
Águilas Azules	50*
Águilas Rojas	150
Nueva Generación	50*
Arauca Las Águilas	50*
Casanare Desmovilizados del Bloque Centauros	200
Disidentes del bloque vencedores de Arauca	70
Bloque Llaneros del Casanare	25
Bacrim Autodefensas campesinas del Casanare -Martin Llanos-	50
Meta Grupo de no desmovilizados del Bloque Héroes del Guaviare	200
Por Colombia Presente desarticulado Bacrim de Pedro Oliverio Guerrero "Cuchillo"	250
Seguridad privada de Meta y Vichada	120
Vichada T.C.C. Todos Contra Cuchillo	50*
Reducto del "Grupo de Cuchillo"	700
390	
Guainia Coordinadora Colombiana de Autodefensas del Guainía	50*
Caqueta Desmovilizados del Frente Sur de los Andaquies del B.C.B.	50
Águilas Negras	70
Bloque antisubversivo del sur	70
Putumayo Grupo de no desmovilizados del Frente sur del Putumayo B.C.B.	350
Macheteros y rastrojos del Putumayo	320
Frente Antiterrorista Único	50*
Nariño Desmovilizados del Bloque Libertadores del Sur	100
O.N.G. Organización Nueva Generación	300
Rastrojos de Nariño	450
Frente Social Común por la Paz de Nariño	50*
Mano Negra	150
Recomposición paramilitar	50*
Santander Desmovilizados del Frente Ramón Dávila del Bloque Puerto Boyacá	15
Águilas Negras de Santander	50*
Valle Machos y rastrojos	300
A.U.N.V. Autodefensas Unidas del Norte del Valle	50*
R.C.P Rondas Campesinas Populares	50*
Bloque Central	50*
Frente Social Comun por la Paz	50*
Águilas Negras	50*
Caldas Bacrim en el nororiente de Caldas:	50
Cacique Pipintá	150
Cauca Águilas Negras del Cauca	150
Los rastrojos	50*
Los Victorinos	50*
A.U.C.de Don Berna	50*
B.C.C. Bloque Central Cauca	50*
Total Efectivos:	8.924

encargado de desmontar estos criminales escuadrones de la muerte y que la violencia su gobierno la había reducido casi en un cuarenta por ciento. Negando rotundamente el andar criminal de estos grupos de muerte que continúan activos, y la guerra civil que vive el país hace más de cincuenta años, entre un Estado corrupto y devenido mafioso y un movimiento armado, encarnado en los grupos guerrilleros que si bien no reparten hostias, tampoco se les puede catalogar de terroristas. Los presidente de las naciones del mundo, son testigos de las mentiras dichas por este representante de la mafia criolla y a la vez no serán pocos los que se preguntan, entonces ¿por qué el asesinato de más de 300 mujeres a manos de paramilitares en la ciudad de Medellín, en estos últimos tres meses del año 2007? Como un simple ejemplo de la violencia e impunidad que reina en el país. Desde luego que esta respuesta no la dará el espurio presidente, como tampoco la dio el saliente alcalde de Medellín Sergio Fajardo³⁰², quien no ha hecho sino viajar por Europa³⁰³ y Estados Unidos, mostrando los 'positivos resultados' de su mini gobierno, negando a la vez tozudamente, que la tenebrosa 'Oficina de Envigado' existe y que desde allí los poderosos narcoparamilitares siguen asesinando y manejando sus sucios negocios. Sergio Fajardo, tampoco aceptó que durante su mandate, en la comuna 13 de Medellín, los escuadrones de la muerte seguían asesinando y desapareciendo ciudadanos.

Para comprobar una y otra vez sobre la Gran Mentira de la desmovilización narcoparamilitar y la militancia de Álvaro Uribe en el ghetto de la mafia, no es sino conocer las declaraciones del narcotraficante Fabio Enrique Ochoa Vasco, nacido en Medellín, pero criado en Miami y socio de su tocayo Fabio Ochoa Vásquez. El narcotraficante Ochoa Vasco, conto que estuvo preso en Estados Unidos, que vivió en México y luego volvió a Colombia a trabajar con Diego Fernando Murillo Bejarano, alias, 'don Berna', otro de los descendientes de Pablo Escobar. En el 2000 conoció a Salvatore Mancuso y este le propuso que por su intermedio y gracias a sus conocidos en México, trajeran armamento para los narcoparamilitares. Sus tres pasaportes lo ayudaban a moverse sin problemas por el mundo. Pero cuando fue pedido en extradición por el gobierno estadounidense, pidió 'asilo' a los cabecillas narcoparamilitares y estos lo acogieron en Santafé de Ralito. Durante el tiempo que estuvo en 'la zona de los diálogos', fue testigo del envío de centenas de toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa y de cómo los cabecillas narcoparamilitares recogieron bastante dinero para la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe. Igualmente conto Ochoa, que los narcoparamilitares estaban empeñados en no dejar avanzar las negociaciones de Paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC, por lo tanto tenían que acumular mucho dinero para acrecentar su ejército. En el tiempo que estuvo 'asilado' en Ralito, pudo constatar como los cabecillas narcoparamilitares con Mancuso³⁰⁴ y 'Jorge 40' a la cabeza, manejaban más del 60 por ciento de las rutas del narcotráfico. Por su parte Edward Cobos Téllez, alias 'Diego Vecino' y otros 'narcos' manejaban otras rutas. —Sin embargo el bufón comisionado de paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo nada vio, nada escucho, de nada se entero—.

*23 Grupos sin información con un promedio de 50 Paramilitares

Departamentos con Presencia Narcoparamilitar: 25

GRAN TOTAL:

8.924

³⁰³ José Obdulio Escobar, el flamante consejero del Patrón Uribe, lanzo desde ya la candidatura presidencial del alcalde de Medellín Fajardo. Este oscuro personaje dijo que Sergio Fajardo era la reencarnación de las políticas y la ideología uribista y por lo tanto el más firme sucesor de Uribe.

En su paso por Francia, Fajardo dio una conferencia en el Instituto de Altos Estudios para América Latina (L'IHEAL) en Paris. Le conto a su amañado auditorio sus extraordinarias proezas con las cuales logro pacificar a la ciudad de Medellín, (capital de la droga y el narcoparamilitarismo). Cuando en mi calidad de periodista e investigador le pregunte el por que sus datos y argumentos no concordaban con la realidad; el alcalde enrojeció de cólera y tratando de ridiculizarme ante su público (mayoría paisas) me lanzo la frase de que 'no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar'. Sus asistentes también se disgustaron con el suscrito.

³⁰⁴ El narco criminal Salvatore Mancuso, fue sacado de la cárcel de alta seguridad a mediados de diciembre 2007 y llevado a una finca agrícola, como lugar de reclusión.

Dijo también el narcotraficante Ochoa, que el dinero que recibían los cabecillas por concepto de cocaína, entraba por los aeropuertos comerciales en donde había mucha gente a la que había que 'mojar', y sus testaferros (entre ellos ganaderos de Córdoba y otras regiones) y el ejército de leguleyos que poseen, se encargan de manejar y salvaguardar sus capitales, dijo que por lo menos diez narcotraficante (extraditables) obtuvieron 'asilo' en Ralito, con el pago de varios millones de dólares cada uno, —entre ellos 'los mellizos'— y unos avalados por 'don Berna' y otros por Vicente Castaño. Afirmo que a ellos, (los extraditables) el gobierno de Uribe los prometió que podía incluirlos en el proceso de paz asemejándolos con paramilitares, solo había que trabajar y conseguir votos para Álvaro Uribe. Cuando ganó el Patrón Uribe, Mancuso y otros cabecillas narcoparamilitares dijeron que 'ahora si esto lo manejamos como queramos'. En cuanto al moderno armamento traído de México, Ochoa dijo que lo habían entrado desde Honduras y Mancuso lo tenía escondido por qué no lo entrego cuando se desmovilizo. 'Mancuso es traicionero, cuando se vea apretado va a contarle todo su amistad y arreglos con Uribe'.

Por su parte la Justicia colombiana, haciendo excepciones, se ha mostrado complaciente con el espurio gobierno y de una u otra manera, han servido de bastón de apoyo al refrendar el sistema mañoso que se apodero de las instituciones desde el 2002, pero que venía haciendo carrera varios decenios atrás. Los recientes enfrentamientos en estos últimos meses entre las Cortes y el presidente, quien no ha vacilado en meterle mano al poder judicial, demuestra como esta dictadura mafiosa pretende irrespetar al tercer poder de la República, creyéndose el derecho de imponerle sus políticas. Para el Cartel de la Casa de Nariño, es inconcebible que la Corte Suprema de Justicia se niegue a darle piso político a sus protegidos, los narcoparamilitares, a pesar de las diez mil propuestas gubernamentales. Pero la gota que rebosaría el vaso en este enfrentamiento, sería la orden de captura que profirió la Corte contra el senador Mario Uribe, primo del espurio presidente, por sus nexos con el narcoparamilitarismo. La venganza de los cuatros de la sede presidencial con el Patrón Uribe a la cabeza no se hizo esperar y con típicas argucias mafiosas atacaron a los magistrados de la Corte de faltar a la imparcialidad y el propio Uribe salió en todos los poderosos medios de comunicación a su entera disposición a decir que la Corte Suprema de Justicia, preparaba un montaje en su contra y en el cual lo acusaría de asesinato del narcoparamilitar Alcides de Jesus Durango, alias, 'René'³⁰⁵. Para tan sucia maniobra, la mafia hecha gobierno se apoyo en uno de sus narco pistoleros preso en la cárcel de Itagüí en Antioquia. José Orlando Moncada Zapata, alias 'Tasmania', redactó un documento en el cual acusó a funcionarios de la Fiscalía y magistrados de la Corte de obligarlo a acusar a Uribe y a otras personas de ser los autores del asesinato del 'narcoparas' 'René'. Extrañamente el principal señalado con esta acusación fue el magistrado Iván Velásquez³⁰⁶, quien se ha distinguido por su sereno y profesional trabajo contra los políticos implicados con el narcoparamilitarismo y quien igualmente emitió la orden de arresto contra el senador Mario Uribe. Y como hecho 'normal' en el país, el magistrado fue amenazado de muerte. Es más, el abogado de 'Tasmania', Sergio Augusto González es vecino de Santiago Uribe, pues posee una finca al lado de una finca de los Uribe, es amigo personal del Patrón Uribe y entra y sale de la Casa de Nariño, cuando se le viene en gana y sobre todo para darle cuentas a Uribe sobre su otro defendido un tal Jorge Noguera, ex director del DAS. Sin ir más lejos, el propósito de la mafia gubernamental era el de desprestigiar a la Justicia y crear una cortina de humo que cubriera totalmente el principal acontecimiento del momento que era la orden de captura del criminal senador Mano Uribe. Pero este individuo al igual que sus compinches de labores, no solo renunciaría a su fuero parlamentario sino de paso, renunciaría a ser procesado y condenado por la Corte Suprema de Justicia, dejando en manos de

³⁰⁵ Al parecer el narcoparamilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias, Macaco, tiene conocimiento del hecho en el cual el Patrón Uribe fue el instigador o determinador de la muerte de 'René', quien había tenido serios conflictos con Mario Uribe y el reconocido cafetero y terrateniente Garcés, por disputas de tierras e influencia narcoparamilitar.

³⁰⁶ De los 100 parlamentarios y varias centenas de políticos cómplices de narcoparamilitarismo, el magistrado Velasquez, tiene investigados 40 y en prisión 15, hasta octubre 2007. Las investigaciones continúan.

la Fiscalía General las respectivas investigaciones³⁰⁷. Una Fiscalía en manos de Mario Iguaran, un antiguo ex viceministro de justicia³⁰⁸ del gobierno de Uribe y quien a la vez esta en el OJO del huracán por su presunta alianza con el narcoparamilitarismo de la costa norte del país. El Fiscal Iguaran tiene un gran reto y es el de estar a la altura con su investidura y responsabilidad para demostrar al pueblo colombiano que la justicia castiga a los criminales sin distinción, haciendo olvidar la impunidad puesta en práctica por su antecesor Luis Camilo Osorio, verdadero militante del narcoparamilitarismo dentro del Estado. Hasta finales de 2007, el Fiscal General se había limitado a evacuar ciertos expedientes de narcoparapolíticos, pero porque ya habían sido investigados por la Corte, pero ahora varios casos como el del primo del presidente Mario Uribe y Vicente Blel, ambos con orden de captura emitidos por la Alta Corte, parecen tomar la velocidad de la tortuga. Cualquiera que sea el desenlace de estos procesos, Mario Iguaran, continúa a comportarse como un subalterno de Uribe y no como el jefe de una institución encargada de investigar y acusar con plena libertad e independencia. Existe una no despreciable cantidad de fiscales y jueces en el país, comprometidos con el narcoparamilitarismo, algo que le hace mucho daño a la Paz y al pueblo colombiano, pues sin su debida honestidad e independencia el compromiso de Verdad, Justicia y Reparación sigue siendo un sueño.

El Patrón Álvaro Uribe sigue haciendo de las suyas, nombrando narcoparamilitares en embajadas, ascendiendo y condecorando oficiales de policía y ejército acusados de narcoparamilitarismo y 'narco' empresarios³⁰⁹, hoy más que nunca calla sobre los horribles crímenes cometidos contra la población indígena, se niega a llegar a un acuerdo humanitario con la guerrilla y de paso abrir diálogos de paz, algo que me parece norma en su postura mafiosa, ya que es difícil negociar con la mafia, la mafia no negocia, impone por la fuerza. Toda su energía gubernamental está dirigida hacia la guerra, para jolgorio de la oficialidad militar que le permite vivir en la opulencia extrema, gracias a ella; ignora completamente las acciones terroristas de narcoparamilitares y agentes del Estado que sigue cobrando víctimas diariamente a lo largo y ancho de la geografía nacional; impulsa la llegada al país de un número cada vez más importante de mercenarios israelíes y británicos (o caza-recompensas como el llamado que hizo el 'narcopara' vicepresidente Francisco Santos) entre otros criminales extranjeros en territorio colombiano y quienes en compañía de soldados estadounidenses han violado varias niñas (entre 10 y 12 años) en el sur del país, donde se concentra el mayor número de tropas nacionales y extranjeras y en la más completa impunidad. Pareciera que nada ni nadie detiene a este desequilibrado presidente y ministros, por eso la necesidad urgente para el pueblo colombiano, de la solidaridad de los pueblos del mundo para PARAR esta horrible pesadilla que viven colombianas y colombianos, quienes no necesitan de tanques, aviones ni helicópteros de guerra para solucionar sus graves problemas, Colombia necesita

³⁰⁷ Los paranarcoparlamentarios que han renunciado a sus funciones para ser procesados por la Fiscalía son: Álvaro Araujo Castro, Vicente Blel, Luis Alberto Gil, Dieb Maloof, Héctor Julio Alfonso López, José Manuel Herrera, Luis Carlos Torres, Jairo Enrique Merlano, Álvaro García Romero, Jorge Luis Caballero, Alfonso Campo Escobar, Miguel Alfonso de la Espriella.

³⁰⁸ Un hecho bastante interesante y particular ha ocurrido en los dos gobiernos de Uribe, y es el de no haber existido un Ministro de Justicia. El hecho puede ser anodino, sino fuera por la fobia que la mafia ha tenido hacia los ministros de esta cartera, y de los cuales dos fueron asesinados y uno resulto gravemente herido en un atentado en Budapest, Hungría. El primero en sufrir la venganza mafiosa fue Rodrigo Lara Bonilla, ministro en el gobierno de Belisario Betancur (1982-86), y quien había dicho meses antes de su asesinato que los Uribe y otros mafiosos lo asesinarían. Años más tarde sería el turno de Low Murtra, ministro en el gobierno de Virgilio Barco (1986-90) asesinado al salir de una universidad en Bogotá y el tercero y quien se salvo milagrosamente fue el ex ministro de Justicia Enrique Parejo González, en enero de 1987 en Budapest, cuando al parecer la mafia siciliana por cuenta del Cartel de Medellín quiso asesinarlo. Así pues, el Patrón de la mafia colombiana, por razones obvias, decidió dejar al país sin ministro de Justicia. El actual viceministro de justicia Guillermo Reyes, tiene como principal función la de visitar todos los jueves a los narcoparapolíticos en la cárcel de la Picota de Bogotá, manteniéndoles vivas las esperanzas de que el gobierno los excarcelara y evitara que pierdan sus beneficios políticos y económicos. Mientras tanto, muchos de estos presos reciben diariamente a sus asistentes y aliados políticos con el fin de preparar elecciones y seguir dirigiendo desde la cárcel las regiones de donde son oriundos.

³⁰⁹ El coronel de la policía Mauricio Santoyo, fue ascendido a general por Uribe, a pesar de sus implicaciones en varios crímenes con los paramilitares y de haber sido retirado de la institución por haber interceptado los teléfonos de periodistas, opositores políticos y otros ciudadanos en forma clandestina. Igualmente Uribe condecoro a otro narcotraficante empresario.

la solidaridad internacional que la apoye en la instauración de un gobierno democrático e ímpoluto. Y nada más saludable que la acción en primera instancia de las hermanas repúblicas americanas — Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Nicaragua, Cuba, Panamá, Argentina y otras— para que corten lazos diplomáticos y económicos con este gobierno mafioso y de igual forma expulsando o rechazando embajadores en sus países, que militan en la mafia. Una mafia que tiene fuerte presencia en México, Perú y Honduras y países que no gozan de gobiernos legítimos o transparentes y en los cuales el lavado de activos y el narcotráfico hace camino para apoderarse del Estado, máxime si sus gobernantes actuales no gozan de pulcritud alguna como es el caso de Alan García en el Perú, país que progresivamente está cayendo en manos del narcotráfico y donde operan unas treinta organizaciones internacionales de la mafia con vínculos con Colombia pero especialmente con México, según el jefe antidrogas de la policía peruana Carlos Olivos Valenzuela³¹⁰. Lo más preocupante del asunto es que el corrupto presidente peruano Alan García, no le presta ninguna importancia a la lucha contra el narcotráfico, prefiriendo recibir con bombos y platillos en Lima, al patrón de la mafia colombiana Álvaro Uribe, a quien le ha ofrecido todo su apoyo y colaboración. En México los asesinatos ligados al narcotráfico y la connivencia entre agentes del Estado y la mafia, es algo más que inquietante, sin olvidar que su gobierno ha sido complaciente con la mafia uribista al recibir en su territorio al narcoparamilitar Luis Camilo Osorio, en calidad de embajador de Colombia. Por los lados de la Unión Europea, las cosas no han sido claras tampoco, pues varios países del viejo continente han albergado o albergan en sus sedes diplomáticas a representantes de la criminal mafia colombiana, como por ejemplo Italia, con Sabas Pretel de la Vega; Austria, con Rosso José Serrano; Holanda con Juan José Chaux Mosquera y otros más.

Suponiendo que estos gobiernos han pecado por ignorancia, llega la hora que los países de la Unión Europea tome medidas adecuadas frente a sus relaciones con el gobierno mafioso de Álvaro Uribe Vélez, es hora de que Europa sea consecuente con su discurso de respeto de los derechos humanos y su real lucha contra las drogas condenando las prácticas antidemocráticas y gansteriles del gobierno colombiano y ponga en remojo sus relaciones con este sórdido régimen de terror.

La historia señores presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Nicolás Sarkozy, Romano Prodi, señora Ángela Merkel los condenará, como también a los demás jefes de Estado de la Unión, sino asisten a un país como Colombia en vías de destrucción. No puede ser posible que los países del viejo continente le den prioridad a sus intereses económicos y al de sus poderosas empresas, por encima de la vida, honra y bienestar de más de cuarenta millones de seres humanos. El pueblo colombiano requiere del decidido apoyo democrático, humanitario y pacífico de los pueblos del mundo para lograr separar del cargo al espurio presidente Álvaro Uribe y todo su gabinete, agentes y funcionarios estatales comprometidos con la mafia, dándole paso a un vasto Movimiento de Salvación Nacional (MSN) que incluya a todos los colombianos y colombianas —Indígenas, afro descendientes y mujeres siempre excluidos— para que reinserten al país en el concierto de países dignos, honestos y en paz en el mundo. Que este Movimiento de Salvación Nacional, se dedique en primera instancia a: A) Dar una solución pronta y adecuada al problema de extrema pobreza y falta de atención médica y hambruna que azota al 60 por ciento de la población. B) Lanzar una global operación de diálogo con el movimiento insurgente, con un cese de hostilidades y un alto ilimitado en la confrontación militar entre ambas partes (Estado y movimientos subversivos) y entablar serias negociaciones de Paz. C) La pronta solución jurídica a los más de siete mil presos políticos que se amontonan en las mazmorras del gobierno Uribe. D) Una real apropiación del fenómeno narcoparamilitar, parando toda forma de acción militar de estos grupos y un control férreo sobre las empresas e importadores de insumos químicos, a si como un tácito acuerdo con los pueblos indígenas y campesinos para la erradicación manual de la hoja de KOKA, que no sea utilizada para un consume personal o la elaboración por parte de las comunidades de productos

³¹⁰ El coronel de la policía Mauricio Santoyo, fue ascendido a general por Uribe, a pesar de sus implicaciones en varios crímenes con los paramilitares y de haber sido retirado de la institución por haber interceptado los teléfonos de periodistas, opositores políticos y otros ciudadanos en forma clandestina. Igualmente Uribe condecora a otro narcotraficante empresario.

derivados (jabones, cremas, gaseosas, infusiones etc.) y la destrucción apropiada de inmensos cultivos destinados a la fabricación de la cocaína. E) Un real control de los bancos y las centenas de cuentas ligadas de lejos o de cerca con el lavado de activos y las que son sospechosas de trabajar con la mafia. F) Un rendimiento semanal de cuentas claras y concisas sobre el accionar del Movimiento de Salvación Nacional y G) La realización de una Asamblea Constituyente H) Un llamado a elecciones populares y democráticas en el menor tiempo posible, de presidente, parlamentarios, gobernadores y alcaldes y que pueda incluir a los altos magistrados de las Cortes, Fiscal General, Registrador Nacional y un Consejo Supremo de Vigilancia (alternativo) en la elección popular. Todo candidato deberá desnudar su patrimonio personal y familiar³¹¹.

Colombia tiene graves problemas y dificultades para obrar como un estado democrático, por todo lo señalado anteriormente, entonces, la eliminación de país en tanto que primer productor y exportador de cocaína pasa indiscutiblemente, por apartar del poder al Patrón de la mafia Álvaro Uribe Vélez y su ejército de acólitos (políticos, militares y empresarios) que permita un cambio pacífico hacia la democracia en beneficio de los cuarenta cinco millones de colombianas y colombianos, con la desinteresada ayuda de los pueblos hermanos de América y el resto del mundo. Pues, no sería comprensible que países, con conocimiento de causa, como por ejemplo los europeos que defienden los derechos humanos, sigan respaldando y apoyando un cartel mafioso de las drogas que gobierna y esta enquistado en las instituciones del Estado colombiano. La ayuda económica de países como Suecia y ayuda económica y militar que aporta Inglaterra no es sino una macabra colaboración con el genocidio en Colombia³¹² y la simple complicidad con la mafia. Además los fuertes lazo entre la mafia italiana y la colombiana no cesa de aumentar, habiendo en el país americano aproximado más de 2000 personas que trabajan para la N'Drangheta, mafia calabresa, enviando grandes cargamentos de cocaína hacia ese país europeo³¹³. Por su parte España se ha convertido en un paraíso para los prósperos 'empresarios' del narcotráfico —propios y extranjeros— y allí el lavado de activos del narcotráfico y la prostitución, (infantil también) tiene cierta complacencia, pues al parecer las medidas de control son bastante ambiguas, España en tanto que familiar de Iberoamérica y más exactamente de Colombia, es el punto central, el sitio de encuentro del ghetto mafioso para sus labores en Europa, obviamente no es forzosamente el único país, pues en Holanda existen redes y en Alemania se trato de abrir una sucursal con la familia del narcoparamilitar general Oscar Naranjo Trujillo y su hermano David condenado en este país por narcotráfico. El problema colombiano de las drogas atañe a todos los países del planeta, como también la horrible situación que vive las colombianas y colombianos bajo este sórdido gobierno³¹⁴

³¹¹ Libro Democracia Real Universal.

³¹² Israel en compañía de Estados Unidos son los dos países que mas colaboran con el gobierno mafioso de Uribe, importándoles un bledo el genocidio que se lleva a cabo el país. Israel brinda a Colombia armas, inteligencia militar y mercenarios.

³¹³ Declaraciones del ex narcotraficante y empresario italiano Bruno Fuduli, al diario 'Il sole 24 ore'. Fuduli estuvo secuestrado en el 2003 en Bogotá, por los narcotraficantes sus antiguos 'amigos', (este secuestro fue achacado por el gobierno colombiano, como muchos otros secuestros de verdaderos y falsos empresarios a las FARC) quienes amenazaron con asesinarlo por no devolver los 255 kilos de cocaína, que según Fuduli, le había sido incautada por la policía italiana. Este arrepentido acuso directamente a la familia Mancuso de Limbadi, con lazos familiares con la Mancuso Gómez en Colombia, de liderar el tráfico. Los contactos en Colombia son hechos por importantes empresarios del norte de Italia y quienes colaboran con el lavado de activos.

³¹⁴ Hay niños que salen del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a los batallones para ser entrenados como paramilitares. Como del ICBF salen muchachos a batallones para masacrar campesinos Hace 5 años me desplace hacia el norte del país con el ánimo de recoger algunos testimonios de los habitantes de un pueblo en la costa colombiana. Me interesaba ese lugar por que tenia algunos familiares que Vivian allí y que me dijeron que algunas veces bajaban al pueblo algunos guerrilleros a comprar alimentos o hacer reuniones en las que le explicaban a los lugareños sobre el efecto de las fumigaciones sobre los cultivos (esta era una zona amapolera) sobre la tierra, y el interés de las transnacionales de dañar la capacidad productiva de la misma y el problema de la dependencia alimentaria. Yo quería escuchar esas charlas y ver directamente las relaciones de la guerrilla con las gentes del pueblo. Aunque había estado en el Caguan quería verlos en su ambiente natural y en la cotidianidad con las comunidades y la población civil. Estuve dos meses en el lugar esperando y

dictatorial y de muerte y que los hombres y mujeres de buena voluntad no pueden eludir ni cruzarse de brazos ante tal genocidio que se lleva a cabo en este país, contra un pueblo trabajador, honesto y acogedor que anhela la paz, pero con justicia social. Con todo mi desprecio le deseo a Álvaro Uribe y a sus acólitos, larga vida y una muy buena salud, para que puedan afrontar la justicia y recibir un justo castigo por sus crímenes que no pueden ni deben quedar en la impunidad.

nunca vi un guerrillero por allí, no conté con suerte, pero una semana antes de venirme nuevamente a Bogotá, en la madrugada alguien llamó la puerta, la señora de la casa en que me hospedaba abrió y se encontró con una muchacha de más o menos 15 años. La casa de mi familiar era la primera más cercana a la montaña espesa, supongo que fue por eso a la que la niña primero golpeo. La muchacha pidió agua, paso a la sala, dijo que llevaba muchas horas caminando, quería quedarse allí y salir temprano en la mañana. Mi familiar me dijo, que muy posiblemente ella venía del monte aunque no creía que fuera guerrillera de las PARC porque estos tenían prohibido pedir hospedaje a los civiles, que de pronto era del ELN. Decidí entonces averiguar. le ofrecí un cigarrillo que se fumo ávidamente, la invite a la cocina a charlar conmigo mientras le preparaba un tinto (café) y le fritaba un huevo con arroz, luego de dos horas de conversación sobre los muchos antojos que tenía, pues me decía que quería comer polio y chupar bombón y que extrañaba la comida que le preparaba su mamá; conversamos sobre su origen pues no tenía acento costeño, sino paisa. Luego de que me indago profundamente, ella me conto su historia: fue una niña abandonada en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Medellín siendo muy niña, al cumplir 12 años el director Nacional del Instituto se la llevo junto con otros niños a "pagar todo lo que el Estado le había dado desinteresadamente". Los desplazaron hasta la Costa Colombiana y los internaron en el Batallón la Popa que se encuentra en la Guajira Colombiana, allí los recibió un militar de muy alto rango que le dio la bienvenida y les dijo que recibirían entrenamiento especial en pago por lo que el Estado les había dado desinteresadamente. Era tarde cuando llegaron, los llevaron a unos dormitorios donde había más muchachos, descargaron sus maletas y luego fueron llevados al comedor donde los 400 esperaba una succulenta comida y una película, pues siempre les colocaban películas al comer. Una vez había comenzado su comida, prendieron la televisión, era un video de una masacre campesina. En el video se veía como los paramilitares asesinaban una familia completa con cuerdas de guitarra. Ese video se les colocó hasta el último día que estuvo allí, fueron dos años. La niña manifestaba que al principio les daba asco y algo de miedo pero con los días a ellos se les ocurría formas de aportar al crimen que veían allí. Les dieron un duro entrenamiento físico y militar, aprendieron a manejar toda clase de armas y a identificar plantas venenosas en el monte, lo mismo que el modo de preparar dichos venenos como para matar a 12, 24 o 50 hombres. A las muchachas les enseñaron tácticas para enamorar y para "enloquecer en el sexo" y de esta manera sacar información. Al año de estar allí a ella sola un militar del Batallón al que ella le tenía mucho cariño y con el que había acostado varias veces, la llevo a una sala muy especial; esta sala tenía según la descripción de ella, unas bandejas plateadas largas en las que habían varios tipos de drogas, el militar le explicaba a ella con mucho cariño que efecto producía cada una de esas drogas y como se consumía; así que le mostro la cocama, la marihuana hierba y la que se unta, el éxtasis que tenía según ella figuras bonitas como Mini Mouse o Barth Simpson entre otras... Ella escogió la cocama de la que este hombre querido por ella se encargó de proveerla, de allí en adelante hasta el último día que ella estuvo allí. Así ella se volvió adicta a esta droga. AL mismo tiempo les enseñaban historia, geografía, les hablaban del peligro que representaba la guerrilla y les describían diariamente como estos les despellejaría vivos si se dejasen agarrar. Luego vino la graduación: a todos les dieron unas "pepitas" ella escogió la que tenía la cara de Barth, les dijeron que se iban a sentir muy contentos pues iban a realizar una importante misión. Bajo el efecto de la droga los llevaron a un lugar y bajo la orientación de un alto jefe militar efectuaron su primera masacre, ella me conto detalles de la misma y las sensaciones que le producía cada acción, luego de varios días volvieron al batallón en donde les mostraron los videos de su faena y para hacer formal su graduación. Ella salió de allí y fue entregada a un jefe paramilitar de la zona, este la proveía de su dosis de droga y cuando ella iba a Valledupar, había un barrio de "jíbaros", llamado los músicos en el que buscaba algunos amigos que había visto en el batallón que le entregaban a ella su dosis sin cobrar directamente porque todo eso iba a la cuenta del Batallón la Popa. Posteriormente le fue encomendada una importante misión, infiltrar un campamento de las FARC y matar a uno de sus comandantes, ella estaba en la mitad de la misión pero había huido del campamento porque al parecer la descubrieron. Dado que tenía una enfermedad venérea y le había sido encomendado infectar al mayor número posible de guerrilleros, en cumplimiento de esta orden de sus superiores despertó sospecha por parte de los comandantes guerrilleros. Esta niña de 15 años me conto muchísimas cosas más que espero algún día dar a conocer en su totalidad, pues ella me permitió grabar su testimonio. A los dos meses me llamo el familiar donde me había hospedado para decirme que a la niña con la que había con-versado aquella noche la habían matado los paracos. (Álvaro Peña / Bogotá; tomado de Indymedia 1/8/08). Se estima que más de la mitad de los miembros de las fuerzas armadas se drogan y alcoholizan para poder sostener y soportar el ritmo infernal impuesto por sus superiores, en las confrontaciones armadas contra la subversión, como también contra la injustificada agresión de civiles. Con la política bélica y la militarización del país, Uribe no solamente busca convertir a Colombia en una sociedad represiva, sino también coartar a la juventud cualquier otra oportunidad de avance, conocimiento y desarrollo intelectual y profesional al someterlos por el único camino viable hoy en día en el país para ganar un salario fijo y seguridad social, las fuerzas armadas. Con un desempleo galopante, una formación técnica casi nula y una educación exclusiva para los adinerados, Uribe ofrece empleo a la juventud en los organismos que el mismo ha convertido en máquinas de muerte, ejército y policía.

«Joyas Colombianas»

A estos personajes los he titulado «Joyas Colombianas» pues son los de menor valor para adornar la verdadera imagen del país y son los que han hecho de Colombia un 'paraíso' de terror e impunidad. La presente lista (incompleta) fue establecida gracias a los testimonios de Víctimas, señalamientos de Organizaciones de derechos humanos, delación de arrepentidos de la mafia e instituciones del Estado, entre otros.

ABADIA HERNAY Carlos	diputado	narcotraficante
ABADIA Juan Carlos	consejero municipal	narcotraficante
ABUCHAR GONZALEZ Fernando	narcotraficante	
ACERO de CASTILLO Flor M.	narcotraficante	
ACEVEDO Fabio	narcotraficante	paramilitar
ACEVEDO Ulilo	diputado	paramilitar
ACOSTA Alonso	diputado	paramilitar
ACOSTA ZARATE Ricardo	alcalde	paramilitar
ACUÑA CARDALES Yair	consejero municipal	paramilitar
AGREDO ESTUPINAN Humberto	traficante de armas	paramilitar
AGUILAR NARANJO Hugo	gobernador	paramilitar
AGUILAR Hugo	ex coronel/gobernador	paramilitar
AGUILAR ECHEVERRY Carlos	narcotraficante	paramilitar
AGUILAR NARANJO Carlos	ex agente fiscalía	narco-paramilitar
AGUILERA Heliodoro	gobernador	narco-paramilitar
AGUILLON Edilberto	empresario	narcotraficante
AGUIRRE Germán	senador	paramilitar
AGUIRRE Samuel Antonio	ex diputado/empresario	narcotraficante
AGUIRRE Fernando*	empresario ejecutivo	paramilitar
AHUMADA Jorge	capitán armada	narcotraficante
ALDANA Blanca Janet	alcaldesa	paramilitar
ALEMAN Luis	alcalde	paramilitar
ALFONSO LOPEZ Jorge E.*	alcalde	paramilitar
ALEONSO LOPEZ Héctor J*	diputado	paramilitar
ALFONSO Héctor Julio	empresario	paramilitar
ALMARIO Luis Fernando	diputado	paramilitar
ALMENARES Carlos	narcotraficante	paramilitar
ALVAREZ BERTEL Remberto	empresario	paramilitar
ALVAREZ Gerson*	narcotraficante	paramilitar
ALVAREZ Heriberto	juez	narco-paramilitar
ALVARES TURISO Julio	alcalde	paramilitar
ALVARES Luis	diputado	narcotraficante
ALVARES MORALES Martin	alcalde	paramilitar
ALVARES VERTEL Remberto	narcotraficante	paramilitar
ALZATE MONTES Cesar A.	alcalde	paramilitar
AMADO PALENCIA Carlos	narcotraficante	paramilitar
AMAYA AMAYA Misael	consejero municipal	paramilitar
AMORTEGUI FORERO José	capitán armada	narcotraficante
ANDER Moisés	alcalde	paramilitar
ANDRADE MORENO Cesar Augusto	diputado	paramilitar
ANDRADE Margarita Rosa	política	paramilitar
ANGARITA Luis Hernando	viceministro interior	narco-paramilitar
ANGEL BARCO Emilio	diputado	paramilitar
ANGEL RESTREPO Luis Guillermo	empresario	narcotraficante
ANGEL Marciano	secretario municipal	paramilitar
AMORTEGUI José David	capitán armada	narcotraficante
ANAYA HERNANDEZ Jorge E.	gobernador	narcotraficante
ANAYA MORELOS Jaime E.		narcotraficante
ANDRADE Cesar	diputado	paramilitar
ANDRADE José Eduardo	teniente armada	narcotraficante
ANGEE ARBELAEZ Jorge Mario	empresario	paramilitar
APONTE Francisco	narcotraficante	paramilitar
ARABELLA VELASQUEZ Sandra	diputada	paramilitar

ARANA SUS Salvador	ex gobernador /ex-embajador	narco-paramilitar
ARANGO Norman	coronel ejercito	paramilitar
ARANGO BACCI Gabriel	contraalmirante armada	narcotraficante
ARANGO CARDENAS Luis A.	narcotraficante	paramilitar
ARAQUE Joaquín Antonio	narcotraficante	paramilitar
ARAUJO Alfredo	empresario	paramilitar
ARAUJO NOGUERA Alvaro*	ex ministro	narcotraficante
ARAUJO CASTRO Sergio	ganadero	narcotraficante
ARAUJO CASTRO Álvaro	senador	paramilitar
ARAUJO CASTRO Consuelo	ministra de relaciones exteriores	paramilitar
ARAUJO CASTRO Martha	funcionaria	paramilitar
ARAUJO CASTRO Ana María	Funcionaria	paramilitar
ARAUJO BAUTE Josefina	funcionario	paramilitar
ARAUJO Jaime	magistrado	Cómplice narcotráfico
ARBEEAEZ Edgar Mauricio	capitán ejercito	paramilitar
ARBOLEDA Antonio	empresario vigilancia privada	paramilitar
ARDILA Julio Cesar	ex alcalde	paramilitar
ARENAS PARRA Luis H	diputado	paramilitar
ARENAS PRADA José	diputado	paramilitar
ARENAS Antonio Miller	narcotraficante	paramilitar
ARIAS Andrés Felipe	ministro	paramilitar
ARIAS ARROYAVE Luis*	policía	paramilitar
ARIAS GOMEZ Heine	narcotraficante	paramilitar
ARIAS HOYOS Rocio	diputada	paramilitar
ARIAS VERGARA Luis Carlos	empresario	paramilitar
ARIAS Lino	narcotraficante	paramilitar
Arias Horacio	alcalde	paramilitar
ARIAS Francisco Antonio	narcotraficante	paramilitar
ARISTIZABAL Mauricio	ganadero	paramilitar
ARIZA SANABRIA Iván E.	narcotraficante	paramilitar
ARIZA Juan Pablo	político liberal	paramilitar
AROCA Ever	narcotraficante	paramilitar
ARRAUT VALERO Alfredo	diputado	paramilitar
ARROYAVE Luis Eduardo	narcotraficante	paramilitar
ARROYO José Higinio	narcotraficante	paramilitar
ARROYO OJEDA Jesús	narcotraficante	paramilitar
ARROYO Wilson	alcalde	paramilitar
ARTEAGA POLANIA Carlos F.	capitán ejército	paramilitar
ARTZEN Morten	ejecutivo	paramilitar
ASSI AEVAREZ David	narcotraficante	paramilitar
AUQUE DE SILVESTRE GianCarlo	secretario general del DAS	paramilitar
AVILA Manuel Darío	senador	paramilitar
AYALA BERTEL Mery		narcotraficante
AYALA BERTEL Oswaldo	secretario educación	paramilitar
AYALA AMADO José Ernesto	narcotraficante	paramilitar
AYAS José Luis	policía	narcotraficante
BAEZ Ernesto	narcotraficante	paramilitar
BALDOMERO LINARES José	narcotraficante	paramilitar
BALSEIRO SABAS	alcalde	paramilitar
BANQUEZ MARTINEZ Uber*	narcotraficante	paramilitar
BARBOSA Luis Antonio	narcotraficante	paramilitar
BARON Jesús Orlando	mayor policía	narcotraficante
BARRAZA Jorge	gobernador	paramilitar
BARRAZA VASQUEZ Nelson R*	narcotraficante	paramilitar
BARRERA José María	narcotraficante	paramilitar
BARRERA GOMEZ Hugo	ganadero / ex-alcalde	paramilitar
BARRERA Daniel	narcotraficante	paramilitar
BARRERA Juan	narcotraficante	paramilitar
BARRERO Luis Gerardo	capitán-ejercito	paramilitar
BARRIGA PEÑARANDA Carlos E*	senador	narcotraficante
BARRIGA Rafael	narcotraficante	paramilitar
BARRIGA Pedro Luis	empresario	narcoparamilitar

BAUTE Helman		paramilitar
BECERRA ARAQUE Luis F.	fiscal regional	paramilitar
BECERRA GOMEZ Hugo	ganadero	paramilitar
BEDOYA José	narcotraficante	paramilitar
BEDOYA PIZARRO Harold*	general ejercito	paramilitar
BEDOYA RAYO Wilton*	narcotraficante	paramilitar
BEJARANO Carlos Fernando	fiscal	narcotraficante
BENEDETTI Armando	senador	paramilitar
BENITEZ Eduardo	diputado	paramilitar
BENITEZ BERTEL Jaffet Jacob	tesorero municipal	narcotraficante
BENITEZ Edgar	diputado	paramilitar
BENITEZ VASQUEZ Ana María	narcotraficante	paramilitar
BENITO REVOLLO Muriel de J.	diputado	paramilitar
BENITO REVOLLO Edgar	alcalde	paramilitar
BENITO REVOLLO Laureano		narcotraficante
BENITO REVOLLO Ariel		narcotraficante
BENJAMIN Jeferrey*	ejecutivo	paramilitar
BERCELO Ernesto	médico	paramilitar
BERETTA Pietro	testaferro	narcotraficante
BERGOZOLI Nicolás	narcotraficante	paramilitar
BERNAL MOLANO Hugo	narcotraficante	paramilitar
BERNAL RAMIREZ Juan A.	alcalde	paramilitar
BERRIO José Alfredo	narcotraficante	paramilitar
BERTEL Ferney	alcalde	paramilitar
BESAILE FAYAD Musa	alcalde	paramilitar
BETANCUR Rómulo	director seccional DAS	paramilitar
BETANCOURT RODAS Juan David*	narcotraficante	paramilitar
BLANCO SILGADO Ana Miguelina	secretaria notaria	paramilitar
BLANCO FUENTES Jorge	alcalde	paramilitar
BLANCO Jaime*	narcotraficante	paramilitar
BLANCO MAYA Jaime	empresario	paramilitar
BLANCO Nelly	diputada	paramilitar
BLEL SAAD Vicente	senador	paramilitar
BLUM Claudia	diputada	narcotraficante
BONILLA FUENTES Felix	narcotraficante	paramilitar
BONITO Pedro	empresario bananero	paramilitar
BONNET LOCARNO Manuel Jose*	general ejercito	paramilitar
BOTERO Guillermo	rector universidad	paramilitar
BOTERO Carlos Alberto	gobernador	paramilitar
BOTERO ZEA Fernando	ministro	complicidad en narcotráfico
BRAUKMAN John	ejecutivo	paramilitar
BUILES CORREA Humberto	senador	paramilitar
BUITRAGO ANGEL José Orlando	abogado	narcotraficante
BUITRAGO Héctor	narcotraficante	paramilitar
BUITRAGO PARADA Héctor Germán*	narcotraficante	paramilitar
BULA Otto	testaferro	narcotraficante
BURGOS DE LA ESPRIELLA Rodrigo	senador	paramilitar
BURGOS René	alcalde	paramilitar
CABAL MOLINA María Fernanda?	jefa fiscalía	narcotraficante
CABALLERO ADUEN Enrique	ex senador	paramilitar
CABALLERO Jorge Luis*	ex gobernador / diputado	paramilitar
CABARCAS Manuela	ex alcaldesa	paramilitar
CABRALES Álvaro	diputado	paramilitar
CABRERA BARRETO Raúl	alcalde	paramilitar
CACERES LEAL Javier Enrique	consejero municipal	paramilitar
CAICEDO ESTRADA Rafael		narcotraficante
CAICEDO HOMAR Carlos	director universidad	paramilitar
CAICEDO HOYOS Juan Eduardo	alcalde	paramilitar
CAICEDO ROJAS Jorge Ernesto	empresario	
CAICEDO SANCHEZ Melbin		narcotraficante
CAICEDO TASCÓN Luis Giovanni		narcotraficante
CAICEDO Julio Cesar	diputado	narcotraficante

CALCERAN Deisy	secretaria gobernación	paramilitar
CALVO LOMBANA Gabriel Andrés	empresario	narcotraficante
CAMACHO MORA Salomón	narcotraficante	paramilitar
CAMARGO DE AVILA Demóstenes	fiscal delegado	paramilitar
CAMPO Juan Manuel	empresario	paramilitar
CAMPO Rafael	director Incoder	paramilitar
CAMPO ESCOBAR Alfonso	diputado	paramilitar
CAMPO SOTO Rodolfo	director Incoder	paramilitar
CAMPOS Jaime	sargento inteligencia ejercito	narco-paramilitar
CAMPUZANO VASQUEZ Luis F*	mayor ejercito	narco-paramilitar
CANAL Jaime Ernesto	diputado	narco-paramilitar
CANCINO Mario	policía	narcotraficante
CANO CORREA John E.*	narcotraficante	paramilitar
CANO Adriano José*	narcotraficante	paramilitar
CARDENAS MOLINA Dranner*	sicario	paramilitar
CARDONA ECHEVERRY Guillermo		narcotraficante
CARO CHAPARRO Néstor*	teniente ejercito / paramilitar	narcotraficante
CARRANZA Víctor*	narcotraficante	narcotraficante
CARRANZA Julio*	narcotraficante	paramilitar
CARRASCAL PADILLA Miguel	alcalde	paramilitar
CARREÑO SANDOVAE Martin Oswaldo*	general ejercito	paramilitar
CARREÑO VANEGAS Rubén*	general policía / embajador	paramilitar
CARVAJAL Alexander	narcotraficante	paramilitar
CARVAJAL Byron*	coronel ejercito	narco-paramilitar
CARVAJAL RIVEIRA Rubén	alcalde	paramilitar
CASADO Juan Carlos	alcalde	paramilitar
CASTAÑEDA AVILA Aleyder	alcaldesa	paramilitar
CASTAÑEDA GIRALDO María T.	empresaria	narcotraficante
CASTAÑO GIL Carlos*	capo narcotraficante	paramilitar
CASTAÑO GIL Vicente*	capo narcotraficante	paramilitar
CASTAÑO GIL Héctor	narcotraficante	paramilitar
CASTELLANOS Reynaldo*	general ejercito	paramilitar
CASTELLANOS Cesar	pastor iglesia	narcotraficante
CASTELLO Massimo	comerciante	narcotraficante
CASTIBLANCO Daniel Ernesto*	general policía	narco-paramilitar
CASTILLO CARRILLO Freddy	narcotraficante	paramilitar
CASTILLO MENDOZA Humberto*	narcotraficante	paramilitar
CASTILLO PERALTA Jairo	diputado	paramilitar
CASTILLO RODRIGUEZ José G*	narcotraficante	paramilitar
CASTILLO SALAS Elkin D		narcotraficante
CASTRILLON VASCO John Jairo	empresario	narcotraficante
CASTILLO Marlene	ex alcaldesa	paramilitar
CASTRO Carmen	alcaldesa	paramilitar
CASTRO Cesar Augusto	narcotraficante	paramilitar
CASTRO CASTRO Jorge Daniel*	general policía	narcotraficante
CASTRO CORREDOR Héctor*	capitán policía	paramilitar
CASTRO DA2A Juan Manuel	empresario	paramilitar
CASTRO GAR20N Ricardo	empresario	narcotraficante
CASTRO GARZON Víctor Hugo	empresario	narcotraficante
CASTRO PACHECO Jorge	diputado/senador	paramilitar
CASTRO PACHECO Augusto	narcotraficante	paramilitar
CASTRO PACHECO Carmen	político	narco-paramilitar
CASTRO PAEZ Gerardo	empresario	narcotraficante
CASTRO PAEZ John Paul	empresario	narcotraficante
CASTRO MAYA Carlos Alberto	diputado	paramilitar
CASTRO RINCON Edilberto*	gobernador	narco-paramilitar
CASTRO Milton	narcotraficante	paramilitar
CASTRO Jorge	diputado	paramilitar
CASTRO Pepe	gobernador	paramilitar
CEBALLOS ZULUAGA Gildardo	narcotraficante	paramilitar
CELIS Carlos Augusto	diputado	paramilitar
CEPEDA Jaime Efrén	coronel ejercito	narcotraficante

CEPEDA MALDONADO Jimmy*	teniente ejercito	paramilitar
CERVANTES Jaime*	diputado	paramilitar
CIFUENTES Luis Eduardo	narcotraficante	paramilitar
CIFUENTES HERNANDEZ Edison	narcotraficante	paramilitar
CIFUENTES Ricardo	alcalde	paramilitar
CLAVIJO Carlos Arturo	senador	paramilitar
CLAVIJO Carlos	diputado	paramilitar
CLOPATOFSKY Jairo	senador	paramilitar
COBA Richard	diputado	paramilitar
COBOS TELLEZ Eduardo*	narcotraficante	paramilitar
COLMENARES Sebastián*	narcotraficante	paramilitar
CONDE ROMERO José María	diputado	paramilitar
CONTRERAS Daniel	alcalde	paramilitar
CONTRERAS Mario	alcalde	paramilitar
CORDOBA Rosa Edelmira		narcotraficante
CORDOBA CORDOBA Onaci	narcotraficante	paramilitar
CORDOBA TRIVINO Jaime	magistrado	complicidad-narcotráfico
CORREA ZAMBRANO Mario*	general ejercito	para-narcotraficante
CORREA LARA Rafael		paramilitar
CORONADO LEON Luis	general ejercito	paramilitar
CORSA USSA Milton Guillermo	capitán ejercito	paramilitar
CORTES TRELLEZ Eduardo	narcotraficante	paramilitar
CORTEZ MURILLO Álvaro*	mayor ejercito	paramilitar
CORTES VELASCO Eurídice	narcotraficante	paramilitar
COTE GRAVINO Edgar	alcalde	paramilitar
CORZO Juan Manuel		senador
CRUZ BARRIOS Manuel	alcalde	paramilitar
CRUZ Diana	testaferro	narcotraficante
CRUZ PALOMINO Albeiro	testaferro	paramilitar
CURE PEREZ David	secretario gobernación	paramilitar
CUELLAR Rafael	director sec. DAS	paramilitar
CUELLAR Rolando A.		narcotraficante
CUELLO BAUTE Alfredo	diputado	narcotraficante
CUELLO BAUTE Manuel	superintendente notaria	paramilitar
CUELLO DAVILA Alfredo	empresario	paramilitar
CUELLO Virgilio	diputado	paramilitar
CUESTA Luis Alberto*	narcotraficante	paramilitar
CUESTA RIPOLL Jaime	fiscal delegado	paramilitar
CURI Daniel	diputado	paramilitar
CURI VERGARA Nicolás	alcalde	paramilitar
CURA Cesar	ganadero	narcotraficante
CURE SABAGH Diana María	empresaria	narcotraficante
CHACON GARZON Horacio*	coronel ejercito	paramilitar
CHAGIN FLORIN Ricardo	diputado	paramilitar
CHAPARRO Mauricio Esteban	alcalde	paramilitar
CHAPIN Ricardo	diputado	paramilitar
CHAR NAVAS David	senador	paramilitar
CHAR Fuad	empresario	narcotraficante
CHAR CHALJUB Arturo	senador	narcotraficante
CHAR CHALJUB Alex	político	narcotraficante
CHARRIS Adair	narcotraficante	paramilitar
CHARRY SOLANO Julio*	general ejercito	paramilitar
CHAUX Juan José	gobernador	paramilitar
CHAUX OSSA Jesús Augusto	narcotraficante	narcotraficante
CHAUX OSSA Jaime	narcotraficante	paramilitar
CHAVARRO BURITICA Reinaldo	magistrado	paramilitar
CHAVERRA VARGAS Enot		paramilitar
CHICA HERNANDEZ	narcotraficante	paramilitar
CHIPANTIZA ALOMIA Adolfo	secretario gobernación	narcotraficante
CHIVITA Manuel *	coronel policía	narcotraficante
CHOW RIOS Harding	empresario	narcotraficante
DALE DE MOR María Elena	empresaria	narcotraficante

DANGOND CASTRO Orlando	comerciante	paramilitar
DAVILA ARMENTA Eduardo		narcotraficante
DAVILA José Domingo	gobernador	paramilitar
DAZA BERMUDEZ Rodrigo	abogado/ex fiscal	paramilitar
DAZA Alix Cecilia	fiscal regional	paramilitar
DAZA José	abogado	paramilitar
DAZA PRETEL Javier*	empresario	paramilitar
DE LA CRUZ MOZO Juan Carlos*	descuartizador	paramilitar
DE LA ESPRIELLA BURGOS Miguel	senador	paramilitar
DE LA ESPRIELLA BURGOS Álvaro	político	paramilitar
DE LA ESPRILLA Joselito	diputado	narcotraficante
DE LA OSSA Álvaro*	ganadero	paramilitar
DELGADO CASTILLO Eduardo*	mayor ejercito	paramilitar
DE MARTINI TAMAYO Sergio	empresario	narcotraficante
DEL RIO Rito Alejo*	general ejercito	paramilitar
DE LOS SANTOS NEGRET Jose	director partido conservador	paramilitar
DESAIRE Musa	diputada	paramilitar
DI BITETTO Davide	comerciante	narcotraficante
DI GIAVANDOMENICO Roberto	comerciante	narcotraficante
DIAZ Jairo	político	paramilitar
DIAZ Jorge	director regional das	paramilitar
DIAZ Néstor	director impuestos	paramilitar
DIAZ Eudaldo	alcalde	paramilitar
DIAZ GUEVARA Greisy	concejal	paramilitar
DIAZ GRANADOS Sergio	diputado	paramilitar
DIAZ GRANADOS Juan P	político	paramilitar
DIAZ MATEUS Iván	senador	paramilitar
DIAZ MONTOYA Ernesto	narcotraficante	paramilitar
DIAZ MENDOSA Hernando*	alcalde	narco-paramilitar
DIAZ PACHECO Pedro	fiscal delegado	paramilitar
DIAZ PARODI Mauricio	diputado	paramilitar
DIAZ Wilson	agente inteligencia ejército	paramilitar
DOUER José	empresario	paramilitar
DOVAL Jesús	senador	paramilitar
DUARTE CANCINO Isaías	obispo	paramilitar
DUARTE Libardo	narcotraficante	paramilitar
DUQUE Héctor*	empresario	paramilitar
DUQUE Margarita	narcotraficante	paramilitar
DUQUE Juan	político	paramilitar
DUQUE GARCIA Luis Fernando	senador	paramilitar
DUQUE GAVIRIA Iván Roberto*	narcotraficante	paramilitar
DURAN ABDELNUR Jorge E	empresario	narcotraficante
DURANGO DE PAZ Catalina	alcaldesa	paramilitar
DURANGO Alcides de Jesús	narcotraficante	paramilitar
DURAN Miguel Ángel	diputado	paramilitar
DURAN IBARGUEN Olmes	narcotraficante	paramilitar
DURAN PALOMINO Jorge E.	sicario	paramilitar
DURAN QUINTANILLA Tobin	comandante policía	paramilitar
ECHAVARRIA Nicolás	empresario bananera	narcotraficante
ECHEVERRI CORREA Fabio	consejero presidencial	narcotraficante
ELCURE Ricardo	senador	narco-paramilitar
ELIAS Bernardo	diputado	paramilitar
ESCOBAR ARAUJO José Alfredo	presidente Consejo Sup. Judicatura	narcotraficante
ESCOBAR LOPEZ Gina	alcalde	narcotraficante
ESCOBAR Rodrigo	presidente corte constitucional	paramilitar
ESCOBAR MARTINEZ Javier*	coronel ejercito	narco-paramilitar
ESCOBAR Elbo Enrique	profesor universitario	paramilitar
ESCOBAR PIMIENTA Alexandra P.	testaferro	narco-paramilitar
ESPINEL Héctor	teniente policía	narcotraficante
ESPINOZA María del Carmen	empresaria	narcotraficante
ESPINOZA MORALES Wilmer	narcotraficante	paramilitar
ESQUIVEL CUADRADO John Jairo*	narcotraficante	paramilitar

ESTRADA MUÑOZ Nevardo Antonio		narcotraficante
ESTRADA PADILLA Walberto	diputado	paramilitar
EZPELETA Jaime	diputado	paramilitar
FAJARDO CIFUENTES Jaime*	coronel armada	paramilitar
FANDIÑO ARBELAEZ Francisco	contratista	narcotraficante
FERNANDEZ CASTRO Fernando	contratista	narcotraficante
FERNANDEZ de CASTRO José A.		narcotraficante
FERNANDEZ de CASTRO Ana Margarita	secretaria gral. Procuraduría	narcotraficante
FERNANDEZ POSADA Jorge Iván	narcotraficante	paramilitar
FERNANDEZ POSADA Germán	narcotraficante	paramilitar
FERNANDEZ QUESEPS Jairo	diputado	narcotraficante
FERNANDEZ Marcela	jueza	narco-paramilitar
FERIS Salomón	narcotraficante	paramilitar
FERIS José Luis	diputado	paramilitar
FERIS DOMINGUEZ Farid	medico	narcotraficante
FERRI Melnik	mercenario israelita	narco-paramilitar
FIERRO FLOREZ Edgar Ignacio	narcotraficante	paramilitar
FIGUEREDO Iván	abogado	paramilitar
FIGUEROA Wilson		narcotraficante
FISHER Robert*	ejecutivo	paramilitar
FLECHAS Jorge	magistrado	narcotraficante
FLECHAS Rafael	diputado	paramilitar
FLOREZ RIVERA José Luis	político	paramilitar
FLOREZ SILVA Ana María	fiscal regional	paramilitar
FLOREZ Vladimir	investigador fiscalía	narcotraficante
FLOREZ Raúl	gobernador	narco-paramilitar
FONTALVO Jesús	narcotraficante	paramilitar
FONTALVO Luz Elena	secretario salud	paramilitar
FRAGOSO PUPO Luis Ramón	narcotraficante	paramilitar
FREGNY OCHOA Claudia*	empresaria	paramilitar
FUDULI Bruno	empresario	narcotraficante
FUSCADO MENDOZA Mario	consejero municipal	paramilitar
GALEANO Jairo Andrés	empresario	paramilitar
GALEANO Fernando	narcotraficante	paramilitar
GALEANO DAVID Nohemí	general policía	paramilitar
GALLEGO CASTRILLON José L.*	empresario	paramilitar
GALLEGO VALENCIA John	general ejercito	narcotraficante
GALLEGO Leonardo*	narcotraficante	paramilitar
GALLO BEDOYA John Freddy	diputado	paramilitar
GALLO Jaime Enrique	senador	paramilitar
GALLO GOMEZ Luis Humberto	consejero municipal	narco-paramilitar
GALVIS SALAZAR Maribel*	diputado	narco-paramilitar
GAMARRA SIERRA José	asesora senador	paramilitar
GAMARRA Gumersinda	empresario	narco-paramilitar
GARCES SOTO Ernesto	senador	paramilitar
GARCIA Álvaro*	abogado	paramilitar
GARCIA AMADOR Anibal	medico	paramilitar
GARCIA AVILA Carlos Mario	diputado	paramilitar
GARCIA ANGARITA Gonzalo	narcotraficante	narco-paramilitar
GARCIA Américo	funcionario	paramilitar
GARCIA Jaime	municipal	paramilitar
GARCIA Rafael	jefe informática DAS	paramilitar
GARCIA Rafael	narcotraficante	paramilitar
GARCIA Rodrigo	ganadero	paramilitar
GARCIA Esperanza	traficante de armas	paramilitar
GARCIA Israel	ex alcalde	paramilitar
GARCIA Carlos Mario*	narcotraficante	paramilitar
GARCIA BUITRAGO Miyer	empresario	narcotraficante
GARCIA CAICEDO Rodrigo	ganadero	paramilitar
GARCIA CASTILLO Jesús	fiscal delegado	paramilitar
GARCIA EXBRAYAT Jaime	político	paramilitar
GARCIA FERNANDEZ Carlos M	narcotraficante	paramilitar

GARCIA GARAY Rafael	alcalde	narcotraficante
GARCIA HERRERA Jorge	diputado	paramilitar
GARCIA LONDOÑO Eugenio	narcotraficante	paramilitar
GARCIA RODRIGUEZ José J.	ganadero/diputado	paramilitar
GARCIA RODRIGUEZ Martha	empresario	narcotraficante
GARCIA DE ROJAS Esperanza	empresaria	traficante de armas
GARCIA ROMERO Juan José	político	paramilitar
GARCIA ROMERO Álvaro A	diputado	paramilitar
GARCIA TAMALLO Rafael	alcalde	paramilitar
GARCIA TURBAY Lidio	diputado	paramilitar
GARCIA VARELA Oscar*	narcotraficante	paramilitar
GARZON Yesid	rector liceo	paramilitar
GAVIRIA DE MOR Liliana	empresario	narcotraficante
GAVIRIA ESCOBAR José Obdulio	consejero presidencial	narcotraficante
GAVIRIA MEJIA Luis	empresario	narcotraficante
GAVIRIA RUEDA Gloria Inés	empresaria	narcotraficante
GAVIRIA ZAPATA Guillermo	senador	paramilitar
GEFFER Kostantin	narcotraficante	paramilitar
GEORGES Edgar	alcalde	paramilitar
GUERRERO AGAMEZ Elkin D.		narcotraficante
GELVES ALBARRACIN José*	narcotraficante	paramilitar
GIL BERMUDEZ Ramón Emilio*	general del ejército	paramilitar
GIL CASTILLO Luis Alberto	senador	paramilitar
GIL COLORADO Julio	general del ejército	paramilitar
GIL Luis Alberto	senador	narco-paramilitar
GIL Manuel	narcotraficante	paramilitar
GIL GARZON Marco Antonio	Empresario	narcotraficante
GIL GUIO Alexandra	Empresaria	narcotraficante
GIL LONDOÑO Carlos Gilberto*	Mayor del ejército	narcotraficante
GIL ZULUAGA Orlando	narcotraficante	paramilitar
GERLEIN ECHAVARRIA Víctor	senador	paramilitar
GILIBERT VARGAS Luis E.	general - policía	narcotraficante
GIRALDO SERNA Hernán*	narcotraficante	paramilitar
GIRALDO GIRALDO Nodier*	narcotraficante	paramilitar
GIRALDO VILLALBA Eduardo A*	capitán ejercito	paramilitar
GIRALDO Héctor F.	narcotraficante	paramilitar
GNECO Cesar José	senador	paramilitar
GNECO Jorge	senador	paramilitar
GNECO Flor	consejera municipal	paramilitar
GNECO Cielo	funcionaria	paramilitar
GNECO José Eduardo	ex senador	narco-paramilitar
GNECO Jesualdo	testaferro	paramilitar
GNECO CERCHAR Lucas	gobernador	paramilitar
GNECO CERCHAR Hugo	diputado	narco-paramilitar
GONGI Giuseppe	comerciante	narcotraficante
GONGORA MARTINEZ Silverio	alcalde	paramilitar
GOMEZ ALVAREZ Sor Teresa	narcotraficante	paramilitar
GOMEZ BUSTAMANTE Luis H.	narcotraficante	paramilitar
GOMEZ ESTUPINAN Nestor*	narcotraficante	paramilitar
GOMEZ GALLO Luis H.	diputado	paramilitar
GOMEZ LUNA Edwin Mauricio*	narcotraficante	paramilitar
GOMEZ MARTINEZ Claudio	médico / ex alcalde	narco-paramilitar
GOMEZ William de Jesus*	sub-oficial ejército	narcotraficante
GOMEZ Húber Aníbal*	narcotraficante	paramilitar
GOMEZ Hernán*	mayor-ejército	paramilitar
GOMEZ ROMAN Edgar	diputado	paramilitar
GOMEZ Euclides	concejal	paramilitar
GOMEZ PAVAJEAU Carlos A.	vice-fiscal	paramilitar
GONGORA Silverio	alcalde	narco-paramilitar
GONZALEZ GARCIA Rodrigo	senador	paramilitar
GONZALEZ MEDINA Rodrigo A*	coronel-ejercito	paramilitar
GONZALEZ ROA Yesid	jefe seguridad fiscalía	narcotraficante

GONZALES José David	consejero municipal	paramilitar
GONZALEZ José Luis	gobernador	paramilitar
GONZALEZ Danilo*	coronel policía	paramilitar
GONZALEZ Guillermo León	alcalde	paramilitar
GONZALEZ PALACIOS Simón*	sargento ejercito	paramilitar
GORDILLO SANCHEZ Guillermo	capitán ejercito	paramilitar
GRAJALES Raúl	empresario	narcotraficante
GRAVINI DONADO Dino	empresario	paramilitar
GROSSOCANO Jervin	alcalde	paramilitar
G. GROSSO Gustavo	político	paramilitar
GUAPACHA Arbey	sargento policía	narcotraficante
GUARIN Luis Francisco	diputado	paramilitar
GUERRA Adolfo	narcotraficante	paramilitar
GUERRA Víctor	ganadero	paramilitar
GUERRA DIAZ Albeiro José*	narcotraficante	paramilitar
GUERRA TULENA Julio Cesar	senador	narcotraficante
GUERRA de la ESPRIELLA Víctor	delegado presidencial	paramilitar
GUERRA de la ESPRIELLA Antonio	senador	narcotraficante
GUERRA de la ESPRIELLA José	ex senador	narcotraficante
GUERRERO Wilmer Ignacio*	teniente policía	narco-paramilitar
GUILINSKY Alexander		narcotraficante
GUTIERREZ ANGEL Jaime	alcaldía	paramilitar
GUTIERREZ Adriana Patricia	senadora	paramilitar
GUTIERREZ COTES Carlos Alberto*	medico/alcalde	narco-paramilitar
GUTIERREZ PABON Héctor	obispo	paramilitar
GUTIERREZ QUINTERO José E.		narcotraficante
GUZMAN Lucho		narcotraficante
GUZMAN Carlos	líder cívico	paramilitar
GUZMAN CARDENAS Edwin*	sargento ejercito	narco-paramilitar
GUZMAN DAZA Carlos*	narcotraficante	paramilitar
GUZMAN Luis Ignacio	cónsul	paramilitar
HANIJIMENO Rafael A.*	coronel ejercito	paramilitar
HASBUN Raúl*	empresario	paramilitar
HENAO Orlando*	narcotraficante	paramilitar
HENAO MONTOYA Arcángel de Jesús	narcotraficante	paramilitar
HERMIDA Efrén	mayor ejercito	paramilitar
HERNANDEZ Alejandro	capitán ejercito	narcotraficante
HERNANDEZ Alex Manuel	narcotraficante	paramilitar
HERNANDEZ David*	mayor ejercito	paramilitar
HERNANDEZ AGUILERA Germán	diputado	paramilitar
HERRERA CELI José Manuel	diputado	paramilitar
HERNANDEZ DIAZ Efrén Antonio	diputado	paramilitar
HERNANDEZ FAJARDO Gloria E.		narcotraficante
HERNANDEZ LOPEZ Rafael*	general ejercito	paramilitar
HERNANDEZ Yeison		narcotraficante
HERNANDEZ URREA Alejandro-	capitán infantería	narco-paramilitar
HERNANDEZ VILLAZON Jorge	narcotraficante	paramilitar
HERRERA PACHECO Néstor	empresario	paramilitar
HERRERA Helmer	narcotraficante	paramilitar
HERRERA RENDON Daniel	narcotraficante	paramilitar
HIDROVO YANZA Álvaro	capitán ejercito	narcotraficante
HIGUERA Carlos	senador	paramilitar
HILLS Rodercic*	empresario ejecutivo	paramilitar
HILSACA Alfonso	alcalde	paramilitar
HOLGIN SARDI Carlos	senador/ministro	paramilitar
HOENIGSBERG Guillermo	alcalde	paramilitar
IBAÑEZ Rosa Estela	alcalde	paramilitar
IBARGUEN MOSQUERA Julio	gobernador	narcotraficante
IMBETH José María	diputado	paramilitar
ILSACA Alfonso	político	paramilitar
ISAAC Jaime	ganadero	paramilitar
ISAZA Adriana	narcotraficante	paramilitar

ISAZA ARANGO Ramón María*	narcotraficante	paramilitar
ISAZA GOMEZ Ovidio*	narcotraficante	paramilitar
ISAZA MUÑOZ Javier	mayor ejercito	narcotraficante
JAIMES Adalberto	diputado	paramilitar
JANINE DIAZ Farouk*	general ejercito	paramilitar
JARAMILLO Fabio*	narcotraficante	paramilitar
JARAMILLO John Leoncio	diputado	paramilitar
JARAMILLO Luis Alberto	narcotraficante	paramilitar
JARAMILLO WEDJE Eduardo	contratista	narcotraficante
JATTIN CORRALES Zulema	senadora	paramilitar
JIMENEZ Augusto*	presidente empresa carbón	paramilitar
JIMENEZ NARANJO Carlos M.*	capo mafia	narcotraficante
JIMENEZ NARANJO Roberto	narcotraficante	paramilitar
JIMENEZ OCHOA Filemón	magistrado	paramilitar
JIMENEZ OSPINA Luis A	fiscal delegado	paramilitar
JIMENEZ PEREZ José Mauricio	alcalde	paramilitar
JIMENEZ TRONCOSO Jorge Enrique*	mayor ejercito	paramilitar
JIMENEZ Roberto	presidente concejo	paramilitar
KISTINGER Robert*	ejecutivo	paramilitar
KEEIN Yair*	mercenario israelita	narco-paramilitar
LAINO Darío Alberto	narcotraficante	paramilitar
LACOUTURE Aldo*	diputado	narcotraficante
LAFaurie José Félix*	ganadero/empresario	paramilitar
LAGOS Claudia	consejera inter min defensa	narcotraficante
LAINO Scopetta Darío*	coronel-ejercito	narco-paramilitar
LARA VENCE Kareli	diputada	narcotraficante
LARA ARJONA Jaime	diputado	paramilitar
LAVERDE Ana Carolina	secretaria archivo ejército	paramilitar
LAVERDE ZAPATA Jorge Iván*	narcotraficante	paramilitar
LEGARDA Astrid	periodista	paramilitar
LEYVA Hugo Alberto	narcotraficante	narcotraficante
LEZCANO RODRIGUEZ Juan María		paramilitar
LIGAN Warren*	ejecutivo	narcotraficante
LINARES Fabián	policía	paramilitar
LINDNER Carl*	ejecutivo	paramilitar
LIZARDO Rubiender	narcotraficante	paramilitar
LLOREDA Francisco José	político	paramilitar
LLORENTE CHAVEZ Mauricio	mayor ejercito	paramilitar
LOAIZA CEBALLOS Henry	narcotraficante	paramilitar
LOBO Gustavo*	agente policía	narcotraficante
LONDOÑO Diana Mariela		paramilitar
LONDOÑO HOYOS Fernando	ex-ministro	paramilitar
LONDOÑO José Aleider	alcalde	paramilitar
LONDOÑO Santiago	líder político	narcotraficante
LONDOÑO ZABAEA Ignacio	político	paramilitar
LONDOÑO Henry de Jesús	narcotraficante	paramilitar
LONDOÑO TAMAYO Alejandro	coronel ejercito	paramilitar
LOPEZ Severo Antonio	narcotraficante	paramilitar
LOPEZ CABRALES Juan Manuel	senador	paramilitar
LOPEZ Javier	narcotraficante	paramilitar
LOPEZ BARRETO Jorge Eliecer	alcalde	paramilitar
LOPEZ John William	narcotraficante	paramilitar
LOPEZ José María	gobernador	paramilitar
LOPEZ Emilce del Rosario*	empresaria	paramilitar
LOPEZ COSSIO Alfonso*	diputado	paramilitar
LOPEZ EONDONO Henry de Jesús	narcotraficante	paramilitar
LOPEZ PEÑA Julio Cesar	narcotraficante	narco-paramilitar
LOPEZ RAMIREZ Ernesto*	mayor general ejercito	narcotraficante
LOPEZ TRUJILLO Alfonso	cardenal	paramilitar
LOPEZ VALLEJO Hernán*	teniente ejercito	paramilitar
LOPEZ ZULUAGA Luis E.	juez	paramilitar
LOPEZ Antonio*	narcotraficante	paramilitar

LOPEZ David		paramilitar
LOPEZ Libardo		paramilitar
LOPEZ Ricardo		paramilitar
LORA CABRALES Carlos		paramilitar
LORZA VELASQUEZ Miguel A		paramilitar
LOZADA José Bernardo		paramilitar
LOZADA Santander*		paramilitar
LOZANO Franklin		paramilitar
LUNA ARROYO Guillermo		paramilitar
LUNA ARROYO Guillermo R.		paramilitar
LUNA CORDOBA Rosa E.		narcotraficante
LUNA CORREA Trino	gobernador	narcotraficante
LUNA CORREA Juan Carlos	narcotraficante	paramilitar
MACIAS Romualdo	concejal	paramilitar
MAESTRE ALVAREZ Arnaldo	narcotraficante	paramilitar
MAHECHA Jorge	sub-director DAS	paramilitar
MAHECHA Luis	sargento policía	narcotraficante
MALDONADO Cesar Alfonso*	mayor ejercito	paramilitar
MALKUM Ulises	empresario	narcotraficante
MALO DAVID Adolfo	consejero municipal	paramilitar
MALOOF Shadia	ex-secretaria seguridad	narcotraficante
MALOOF CUSE Dieb	diputado	paramilitar
MANCILLA GARCIA Alexis	narcotraficante	paramilitar
MANCUSO Salvatore*	narcotraficante	paramilitar
MANCUSO Johana	comerciante	narcotraficante
MANGONES LUGO José Gregorio*	narcotraficante	paramilitar
MANTILLA Enith	diputada	narco-paramilitar
MANTILLA PINEDA Alejandro	narcotraficante	paramilitar
MANZUR Félix	funcionario	paramilitar
MANZUR ABDALA Julio	diputado	paramilitar
MARCIANO Ángel	funcionario alcaldía	paramilitar
MARIN Diana	abogado	paramilitar
MARIN Giovanni	narcotraficante	paramilitar
MARIN Mario	diputado	paramilitar
MAROSO PONTIGGIA José M.	empresario	testaferro
MARQUEZ GONZALEZ Hugo A.	ganadero	narcotraficante
MARQUEZ Pedro Julio	alcalde	paramilitar
MARTINE Antonio	político	paramilitar
MARTINEZ BERNAL Ricardo*	mayor ejercito	paramilitar
MARTINEZ BERNAL José A*	narcotraficante	paramilitar
MARTINEZ Oswaldo	consejero municipal	paramilitar
MARTINEZ Francly Elena	consejero municipal	paramilitar
MARTINEZ LOPEZ Jefferson E.	narcotraficante	paramilitar
MARTINEZ Orlando Alberto	mayor ejercito	paramilitar
MARTINEZ PALOMINO Miriam	fiscal delegado	paramilitar
MARTINEZ Pablo	abogado	paramilitar
MARTINEZ RAMIREZ Orlando A.	mayor ejercito	traficante de armas
MARTINEZ SINISTERRA Juan C.	senador	narco-paramilitar
MARULANDA Iván	empresario	narcotraficante
MARULANDA Carlos Arturo	ex embajador U. Europea.	narcotraficante
MARROQUIN Juan Alex	narcotraficante	Cartel Tijuana
MARRUGO Ramel Antonio	empleado armada	narcotraficante
MATAMOROS Víctor Hugo	coronel-ejercito	paramilitar
MATERA Regulo	testaferro	narcotraficante
MATEUS MORALES Carlos F.	narcotraficante	paramilitar
MATTOS BORRERO Edward	ganadero	paramilitar
MATTOS BARRERO Alfonso	senador	paramilitar
MATTOS Carlos	empresario	paramilitar
MAYA VILLAZON Edgardo	procurador general	paramilitar
MAYA DAZA Ángel Eleison	médico	paramilitar
MAYA DAZA Hernán	procurador	paramilitar
MAYA DURAN Jaime		narcotraficante

MAZA MARQUEZ Miguel*	ex director Inteligencia	paramilitar
MAZO MAZO Orlando de Jesús**	narcotraficante	paramilitar
MEJIA ANGEL Daniel	narcotraficante	paramilitar
MEJIA ARAUJO Santander		paramilitar
MEJIA CORREA Fabio C.	narcotraficante	paramilitar
MEJIA GALLO Rocío del Pilar	presidenta consejo municipal	paramilitar
MEJIA GUTIERREZ Hernán*	coronel ejercito	paramilitar
MEJIA Pablo*	narcotraficante	paramilitar
MEJIA MUNERA Víctor Manuel*	narcotraficante	paramilitar
MEJIA MUNERA Miguel Ángel*	narcotraficante	paramilitar
MEJIA Pedro	narcotraficante	paramilitar
MEJIA RODRIGUEZ Juan	narcotraficante	paramilitar
MELO DELGADO Ángel	concejaj	narcotraficante
MENDEZ Eduardo	presidente club futbol	narcotraficante
MENDEZ Marilú	directora Nal. Fiscalía	narco-paramilitar
MENDEZ PELUFO Rodrigo*	narcotraficante	paramilitar
MENDOZA DIAGO Guillermo	fiscal	paramilitar
MENESES José Concepción	empresario	paramilitar
MERCADO PEEUFO Rodrigo*	narcotraficante	paramilitar
MEREK Habib	diputado	paramilitar
MERHEG MARUN Habib	senador	paramilitar
MERLANO FERNANDEZ Jairo E.	senador	paramilitar
MERLANO FERNANDEZ Jaime	alcalde	paramilitar
MERLANO RODRIGUEZ Caries*	empresario	paramilitar
MESA BETANCURT José Ignacio	diputado	paramilitar
MESA Andrés	ganadero	paramilitar
MESA Rafael	narcotraficante	paramilitar
MEZA BATISTA José del Rosario	alcalde	paramilitar
MEZA Andrés	ganadero	paramilitar
MILLAN MOSQUERA Ariosto	gerente Coca Cola	paramilitar
MILLAN Fernando*	general - ejercito	paramilitar
MIRA Oscar	alcalde	narco-paramilitar
MITCHELL PALACIOS Mike		narcotraficante
MOJANA Ramón	narcotraficante	paramilitar
MOLINA ARAUJO Hernando	gobernador	paramilitar
MOLINA ESCOBAR Jairo A.*	narcotraficante	paramilitar
MOLINA TRIANA Leónidas	mayor-policía	narcotraficante
MOLINA YEPES Carlos		narcotraficante
MONSALVO GNECO Luis Alberto	diputado	paramilitar
MONSALVE PENAGOS Oscar A.		narcotraficante
MONTAÑEZ Javier*	narcotraficante	paramilitar
MONTENEGRO Luis Enrique	general ejercito	paramilitar
MONTENEGRO Fernando	narcotraficante	paramilitar
MONTENEGRO Emilio		narcotraficante
MONTERROSA MARQUEZ Alfredo	consejero municipal	paramilitar
MONTERO Pilar	sub-jefe Registro Nal.	paramilitar
MONTES ALVARES Reginaldo	senador	paramilitar
MONTES MONTES Henry	alcalde	paramilitar
MONTES HERNANDEZ Isaías	narcotraficante	paramilitar
MONTES Hernando	ex alcalde	paramilitar
MONTES Rodolfo	alcalde	paramilitar
MONTES Byron	ex alcalde	paramilitar
MONTES William	senador	paramilitar
MONTES Saíos	narcotraficante	paramilitar
MONTOYA Carlos Mario	narcotraficante	paramilitar
MONTOYA Diego*	narcotraficante	paramilitar
MONTOYA URIBE Mario*	general - ejercito	paramilitar
MONTOYA FLOREZ Raúl	empresario	narcotraficante
MONTOYA PAMPLONA Carlos M.	narcotraficante	paramilitar
MONTOYA RUBIANO Leonardo	sargento ejercito	paramilitar
MONTOYA SANCHEZ Diego León*	narcotraficante	paramilitar
MONTOYA SANCHEZ Eugenio*	narcotraficante	paramilitar

MONTOYA SANCHEZ Juan Carlos	narcotraficante	paramilitar
MORA Manuel Guillermo	senador	paramilitar
MORA DAZA Wilmer M*	mayor ejercito	narco-paramilitar
MORA RANGEL Jorge E.*	general - ejercito	narcotraficante
MORA RICARDO Daniel A.	narcotraficante	paramilitar
MORA GUERRA Luis F.	narcotraficante	paramilitar
MORALES DIAZ Tarquino	narcotraficante	paramilitar
MORALES Fernando*	mayor ejercito	narcotraficante
MORALES ESTRADA Javier	empresario	paramilitar
MORAN CUELLO Álvaro	diputado	paramilitar
MORENO Julio Cesar	consejero municipal	narcotraficante
MORENO William	policía	narcotraficante
MORENO Hernán*	sicario	paramilitar
MORENO de CARO Carlos	diputado	paramilitar
MORENO VEGA Magali Janeth	funcionaria fiscalía	paramilitar
MORENO VILLEGAS Bernardo	secretario presidencia	narco-paramilitar
MORENO Gustavo		paramilitar
MORENO MORA Orlando*	empresario	paramilitar
MORILLO José J.*	empresario EFE informat estado civil	paramilitar
MORON CUELLO Álvaro	diputado	narco-paramilitar
MORRIS Eric	ex gobernador/senador	paramilitar
MORTON Ignacio	presidente club futbol	narcotraficante
MOSQUERA BERRIO Dárinson	soldado profesional	paramilitar
MOYA ARANGO Bernardo	narcotraficante	paramilitar
MOZO ORTIZ Fernando	diputado	paramilitar
MUNERA SIERRA Henry de Jesús*	policía	paramilitar
MUÑOZ AZCARATE Armando		narcotraficante
MUÑOZ Andrés	policía	narcotraficante
MUÑOZ Rubén Darío	magistrado	paramilitar
MUÑOZ GONZALEZ Ernén*	empresario	paramilitar
MUÑOZ GUTIERREZ Juan C.	narcotraficante	paramilitar
MURILLO Diego Fernando*	narcotraficante	paramilitar
MURIELO GUZMAN Rodolfo	empresario licores	narco-paramilitar
MUSSI Edwin	alcalde	paramilitar
MUSSI RESTOM José	alcalde	paramilitar
NADER Moisés	alcalde	paramilitar
NADER Salomón Mario	diputado	paramilitar
NADER SIMONDS Carlos	diputado	narcotraficante
NADER MUSKUS Salomón	senador	paramilitar
NAME TERAN José	senador	paramilitar
NAME TERAN David	diputado	paramilitar
NARANJO TRUJILLO Oscar A.*	general-policía	narcotraficante
NARANJO TRUJILLO Norman	comandante policía	paramilitar
NARANJO TRUJILLO J. David	estudiante	narcotraficante
NARANJO SAAVEDRA Luis H.	alcalde	paramilitar
NARANJO Nelson	diputado	paramilitar
NASSAR Jimmy	consejero DAS	narcotraficante
NASSER Julio	narcotraficante	paramilitar
NAVARRO PAEAU Germán	abogado	narcotraficante
NAVAS RUBIO Hernando*	ex coronel ejercito	narco-paramilitar
NEGRETE FEOREZ Wilson	alcalde	paramilitar
NIETO Yesid	narcotraficante	paramilitar
NINO D1AZ Jesús Antonio		narcotraficante
NOGUERA COTES Jorge*	director general DAS	paramilitar
NOVA CARVAJAL Luz M.		narcotraficante
NULE AMIN Miguel	ganadero/ex gobernador	para-narcotraficante
NULE AMIN Guido	ex ministro	paramilitar
NULA Manuel	empresario	paramilitar
NUR Leonardo*	capitán ejercito	narcotraficante
NANGUNA Cristóbal	oficial inteligencia-policía	narco-paramilitar
OCAMPO FOMEQUE Luis A.	narcotraficante	paramilitar
OBANDO MEJIA Francisco J.	empresario	narcotraficante

OCAMPO OSPINA Guillermo	ex senador	narcotraficante
OCAMPO OSPINA Ernesto	empresario	narcotraficante
OCHOA VASCO Fabio	narcotraficante	paramilitar
OCHOA DAZA Elías	gobernador/cónsul	paramilitar
OCHOA GUISAO Walter	narcotraficante	paramilitar
OCHOA PINO Guillermo	empresario	paramilitar
OCHOA QUIÑONEZ Javier E*	narcotraficante	paramilitar
OCHOA VASQUEZ Jorge Luis	narcotraficante	paramilitar
OCHOA VASQUEZ Juan David	narcotraficante	paramilitar
OCHOA VASQUEZ Fabio	narcotraficante	paramilitar
OLANO BECERRA Plinio Edilberto	senador	narcotraficante
OLARTE Fulgencio	diputado	paramilitar
OLAYA RIVERA Fabiola	diputado	paramilitar
OLIVERO GUERRERO Pedro*	narcotraficante	paramilitar
OLIVEROS Leonardo	secretario transporte municipal	paramilitar
OLIVEROS del VILLAR Matias*	alcalde	paramilitar
OLIVET Oliverio	alcalde	paramilitar
OESON Robert*	ejecutivo	paramilitar
ORDOSGOITIA Luis Carlos	director Inst. Nal. Concesiones	paramilitar
OREANDEZ GAMBOA Alberto	narcotraficante	paramilitar
OROZCO Gustavo	diputado	paramilitar
OROZCO José	narcotraficante	paramilitar
OROZCO OCHOA Antonio	narcotraficante	paramilitar
ORTEGA William	diputado	paramilitar
ORTEGA Alexander	narcotraficante	paramilitar
ORTEGA RUEAES Harvey*	mayor policía	paramilitar
ORTEGON William*	mayor ejercito	narcotraficante
ORTIZ Luis Arley*	sicario	paramilitar
ORTIZ Estanislao	diputado	paramilitar
ORTIZ Germán	consejero alcaldía	paramilitar
OSPINA RENDON Sor Enid"	empresaria	paramilitar
OSPINA OVAEEE Carlos Alberto"	general-ejercito	paramilitar
OSORIO Cesar Andrés	oficial policía	narcotraficante
OSORIO Luis Camilo	Fiscal General	narco-paramilitar
OSORIO RIOS Jaime	empresario	paramilitar
OSORIO de la ROSA Enrique	jefe informática Registraduría Nal.	paramilitar
OSPINA TUEENA John Jairo		narcotraficante
OSPINA Jorge Iván	político	narco-paramilitar
OTERO BARRERO Gustavo		narcotraficante
OTERO Ariel	narcotraficante	paramilitar
OTERO Octavio	diputado	narcotraficante
OTERO Cesar	empresario	paramilitar
OTERO Iván	abogado	paramilitar
OTERO Manuel Salvador	empresario	paramilitar
OTERO Pedro	alcalde	paramilitar
OTERO de SAHAGUN Olegario	ganadero	paramilitar
OYOEVA VIDA E Eduardo M	narcotraficante	paramilitar
PABON CARDENAS Giovanni	narcotraficante	paramilitar
PABON CONTRERAS Teodosio	narcotraficante	paramilitar
PACHECO Omar	narcotraficante	paramilitar
PACHECO José Aberney	oficial inteligencia policía	narco-paramilitar
PACHECO DE LA HOZ Danilo*	empresario	paramilitar
PADILLA CASTRO Elvis	director ONG	paramilitar
PADILLA DE LEON Freddy*	general ejercito	paramilitar
PADILLA MELENDEZ Álvaro A	narcotraficante	paramilitar
PADILLA PENA Carlos E.	consejero gobernación	paramilitar
PADILLA REDONDO Álvaro	narcotraficante	paramilitar
PAEZ Orlando*	coronel policía	paramilitar
PALACIO PALACIO Carlos	gobernador putumayo	paramilitar
PALACIOS PALACIOS Iván J*	empresario	paramilitar
PALACIOS Gonzalo*	sacerdote	paramilitar
PALACIOS SALAS Jorge	abogado	paramilitar

PAEOMINO OTERO Iván R.	notario	paramilitar
PRADA MARQUEZ Juan Francisco*	narcotraficante	paramilitar
PARODI DIAZ Mauricio	diputado/senador	paramilitar
PARRA Carlos	ex alcalde	paramilitar
PARRA Héctor	profesor universitario	paramilitar
PARRA GONZALEZ Jesús	narcotraficante	paramilitar
PASCALLI GINO	empresario	narcotraficante
PATIÑO Bonel	secretario educación gobernación	paramilitar
PATINO Iván*	empresario	paramilitar
PATINO FOMEQUE Víctor*	narcotraficante	paramilitar
PATINO RESTREPO Carlos A.*	narcotraficante.	paramilitar
PAYARES Ubaldo	director asociación de paz	paramilitar
PAZOS Alejandro	narcotraficante	paramilitar
PEDRAZA Ever	narcotraficante	paramilitar
PEMBERTHY Leonidas*	policía	paramilitar
PENAGOS Raúl Alberto*	empresario	paramilitar
PEÑA GRANADOS Jaime Enrique	juez	paramilitar
PEÑALOSA Pedro	diputado	paramilitar
PEÑARANDA OSORIO Martin	narcotraficante	paramilitar
PEÑUELA Arnulfo*	empresario/alcalde	narco-paramilitar
PEÑUELA Luis Eduardo*	general ejercito	narco-paramilitar
PEREA MENA Jefferson	narcotraficante	paramilitar
PEREIRA Milena	enfermera	paramilitar
PEREIRA RIVERA Jesús Emiro*	narcotraficante	paramilitar
PEREZ ALZATE Guillermo*	narcotraficante	paramilitar
PEREZ ALZATE Rodrigo	narcotraficante	paramilitar
PEREZ CABADIA Miguel*	empresario	paramilitar
PEREZ CHARRIS Jaime	narcotraficante	paramilitar
PEREZ Luz Irina	alcaldesa	narcotraficante
PEREZ DE LUIZ José	ganadero	paramilitar
PEREZ Jorge Carmelo	diputado	paramilitar
PEREZ Luis Enrique	empresario	narcotraficante
PEREZ GUTIERREZ Luis*	alcalde	narco-paramilitar
PEREZ GUZMAN Marco Tulio*	narcotraficante	paramilitar
PEREZ Rodrigo*	narcotraficante	paramilitar
PEREZ MOGOLLON Luis	narcotraficante	paramilitar
PEREZ MOEINA Hernando*	general ejercito	narcotraficante
PEREZ Wilmer	alcalde	paramilitar
PEREZ Miguel Ángel	gobernador	paramilitar
PEREZESPINEE William	gobernador	paramilitar
PEREZ PEREZ Manuel José*	coronel - ejercito	paramilitar
PEREZ TORRADO Manuel*	capitán ejercito	paramilitar
PERTUZ SAEAA José Felipe	narcotraficante	paramilitar
PESTANA Pedro	político	paramilitar
PETRON EUNA Pedro	alcalde	paramilitar
PIANETA VARGAS Alexander	narcotraficante	paramilitar
PIEDRAHITA Carlos Arturo	diputado	paramilitar
PIEDRAHITA Javier	ganadero	paramilitar
PIETRO SANTIAGO Sandra Milena	empresario	narcotraficante
PIMIENTO BARRERA Mauricio	gobernador	paramilitar
PINEDA Eleonora*	diputada	paramilitar
PINEDA Augusto	viceministro	paramilitar
PINEDA Mario	alcalde	paramilitar
PINEDO VIDAL Miguel	senador	narcotraficante
PINO OLIER Carlos E.	narcotraficante	paramilitar
PINZON GARZON Manuel Enrique*	ex capitán ejercito	narco-paramilitar
PINZON Jorge		paramilitar
PINZON Diego Elipio	narcotraficante	paramilitar
PION Cesar	político	paramilitar
PIRABAN Manuel de Jesús*	narcotraficante	paramilitar
PITA VASQUEZ Héctor M.	capitán ejercito	paramilitar
PHANFER Rudolf	narcotraficante	paramilitar

PEAZAS ACEVEDO Jorge Eliecer-	coronel-ejercito	paramilitar
PEAZAS VEGA Alfonso*	coronel-ejercito	paramilitar
POMBO Andrés*	narcotraficante	paramilitar
PORRAS José Noé		narcotraficante
PORRAS Efraín*	sub-oficial ejercito	narcotraficante
POSADA VARGAS John A.	narcotraficante	paramilitar
PRADA Raúl	narcotraficante	paramilitar
PRADA Manuel	informante policía	paramilitar
PRADA MARQUEZ Juan Francisco*	paramilitar	narcotraficante
PRADA REY Edinson	informante policía	paramilitar
PRECIADO Plutarco	político	paramilitar
PRETEE DE EA VEGA Sabas	ministro	narco-paramilitar
PRIETO JURE Ramón	alcalde	narco-paramilitar
PRIETO Manuel	alcalde	paramilitar
PROSTA Mario	alcalde	paramilitar
PUERTA PARRA Gabriel*	narcotraficante	paramilitar
PUERTA Sandra	política	paramilitar
PUGLIESE Pedro	empresario	narcotraficante
PULIDO ROJAS Orlando*	coronel - ejercito	paramilitar
PULIDO RODRIGUEZ Elías		narcotraficante
PUPO Álvaro	empresario	narcotraficante
PUPO Luis José*	narcotraficante	paramilitar
PUPO CASTRO Ciro*	alcalde	paramilitar
QUEDAGA Felipe	funcionario alcaldía	paramilitar
QUINTANA Sebastián*	narcotraficante	paramilitar
QUIJANO BECERRA Álvaro*	coronel ejercito	narco-paramilitar
QUIJANO Diego		paramilitar
QUIÑONEZ Rodrigo Alfonso*	general armada	narcotraficante
QUINTERO RESTREPO Hugo Albeiro	empresario	narcotraficante
QUINTERO VILLADA Rubén Darío	senador	paramilitar
QUINTERO Alfonso		narcotraficante
QUINTERO Hugo Albeiro	empresario	paramilitar
RAAD HERNADEZ Elías	diputado	paramilitar
RAMIREZ ABADIA Juan Carlos	narcotraficante	paramilitar
RAMIREZ PINZON Ciro*	senador	narco-paramilitar
RAMIREZ Jorge Luis	diputado	paramilitar
RAMIREZ Luis Enrique	empresario	narcotraficante
RAMIREZ MONCAYO Andrés	vice-fiscal	paramilitar
RAMIREZ Iván*	general-policía	paramilitar
RAMIREZ Micky		narcotraficante
RAMIREZ Néstor*	general-ejercito	paramilitar
RAMIREZ URBINA Jorge E.	diputado	paramilitar
RAMIREZ ZAPATA Sergio	consejero político	paramilitar
RAMIREZ ZULUAGA Carlos Hugo*	coronel-ejercito	paramilitar
RAMIREZ Ricardo	narcotraficante	paramilitar
RAMOS LUIS Alfredo	gobernador antioquia	paramilitar
RAMOS Oscar*	teniente ejército	paramilitar
RANGEL Miguel Ángel	diputado	paramilitar
RAQUIRA MEDINA Wilson E.*	teniente ejercito	narco-paramilitar
RAYO MONTANO Pablo	testaferro	narcotraficante
RENAN TRUJILLO José	superintendente salud	cómplice narcotráfico
RENDON Enrique	narcotraficante	paramilitar
RENDON HERRERA Daniel*	narcotraficante	narcotraficante
RENDON HERRERA Freddy*	narcotraficante	paramilitar
RENDON HURTADO Alirio Jesús	empresario	narco-paramilitar
RENDON RAMIREZ José Aldemar	narcotraficante	paramilitar
RENTERIA MANTIOLA Carlos A.	capo valle	narcotraficante
RESTREPO Consuelo*	narcotraficante	paramilitar
RESTREPO OROZCO Luis Carlos	diputado	narco-paramilitar
RESTREPO Victoria Eduardo	empresario	narcotraficante
REY Teófilo	empresario de seguridad	paramilitar
REYES Oscar Josué	diputado	paramilitar

REYES YEPES Ronald	narcotraficante	paramilitar
RIANO CASTILLO Alfonso	diputado	paramilitar
RICO CALLE Fabio	industrial	lavado de activos
RICO CALLE Jesús	empresario	lavado de activos
RILEY James*	ejecutivo	paramilitar
RINCON Carmen*	narcotraficante	paramilitar
RIOS AVENDAÑO Ricardo Antonio*	narcotraficante	paramilitar
RIOS CORDOBA Jorge Enrique	narcotraficante	paramilitar
RIOS Ramón	presidente club futbol	narcotraficante
RIVAS GONZALEZ Samuel*	sub-oficial ejercito	narcotraficante
RIVERA CAUSIL Joaquín S.	narcotraficante	paramilitar
RIVERA FLOREZ Guillermo	diputado	paramilitar
RIVERA Jacobo	político	paramilitar
ROBAYO ESCOBAR Carlos José	narcotraficante	paramilitar
ROBAYO RODRIGUEZ Alejandro	mayor - ejercito	paramilitar
ROCA Carlos	testaferro	paramilitar
RODEEO SAYAS Héctor	ex alcalde	paramilitar
RODRIGUEZ AGUDELO Juan Q*	mayor ejercito	narco-paramilitar
RODRIGUEZ ABADIA William*	narcotraficante	paramilitar
RODRIGUEZ ACEVEDO Héctor I	ex concejal	paramilitar
RODRIGUEZ BEJARANO Dago Enrique	ganadero	narco-paramilitar
RODRIGUEZ Carlos	alcalde	paramilitar
RODRIGUEZ Claudia	embajadora Brasil	narcotraficante
RODRIGUEZ Henry	fiscal	paramilitar
RODRIGUEZ Huguez	empresario	paramilitar
RODRIGUEZ Jorge Tulio	alcalde	narcotraficante
RODRIGUEZ Justo Pastor	fiscal	paramilitar
RODRIGUEZ CERVANTES José*	narcotraficante	paramilitar
RODRIGUEZ FUENTES Hugues*	narcotraficante	paramilitar
RODRIGUEZ John	ex policía	narcotraficante
RODRIGUEZ SAAD Yuri Fresid	narcotraficante	paramilitar
RODRIGUEZ OREJUEA Gilberto	narcotraficante	paramilitar
RODRIGUEZ OREJUELA Miguel	narcotraficante	paramilitar
RODRIGUEZ PEREA Henry	alcalde	narcotraficante
RODRIGUEZ PEREZ Luis A.*	general-policía	paramilitar
RODRIGUEZ PEREZ Álvaro	narcotraficante	paramilitar
ROJAS BARBOSA Reynel	narcotraficante	paramilitar
ROJAS BARRERA Luis F.	narcotraficante	paramilitar
ROJAS Adán	narcotraficante	paramilitar
ROJAS Jorge Enrique*	capitán-ejercito	narcotraficante
ROJAS Marta Cecilia	alcaldesa	paramilitar
ROJAS GALINDO Jorge E*	ex capitán	narco-paramilitar
ROJAS Juan	alcalde	paramilitar
ROJAS MORA Rafael*	narcotraficante	paramilitar
ROJAS MOSQUERA Aldemar	narcotraficante	paramilitar
ROLDAN PEREZ Jesús Ignacio*	narcotraficante	paramilitar
ROMERO VILLA Marta		paramilitar
RONCAYO VALENCIA Rodrigo	ex alcalde/diputado	paramilitar
RONDON VARGAS Wilmar	alcalde	paramilitar
ROQUE Isaza	narcotraficante	paramilitar
RUBIO CONDE José H.*	teniente policía	paramilitar
RUBIO LUIS*	alcalde	paramilitar
RUBIANO Pedro	arzobispo	paramilitar
RUEDA TOBON Abelardo	político liberal	paramilitar
RUEDA GOMEZ Andrés	ganadero	paramilitar
RUEDA VESGA Guillermo	concejal	paramilitar
RUIZ José Pastor	mayor ejercito	paramilitar
RUZEOPEZ Jorge E	ex funcionario medio ambiente	narcotraficante
RUZ RUIZ Robinson	periodista	paramilitar
SAADE Salomón	diputado	paramilitar
SAAVEDRA	capitán policía	narcotraficante
SAAVEDRA Gilberto*	narcotraficante	paramilitar

SAENZ Marta del Socorro	política	paramilitar
SALAS Yimmy*	narcotraficante	paramilitar
SALAS MUÑOZ Héctor Eduardo		narcotraficante
SALAZAR CARRASCAL Wilson*	narcotraficante	paramilitar
SALAZAR CASTANEDA Celso A.	empresario	narcotraficante
SALAZAR PERDOMO Gilbert	teniente ejercito	paramilitar
SALAZAR SANCHES John Mario*	narcotraficante	paramilitar
SALAZAR Gustavo	abogado	narcotraficante
SANTA Fernando	alcalde	paramilitar
SALE Estefano	empresario	narcotraficante
SALE Giorgio	empresario	narcotraficante
SALE Cristian	empresario	narcotraficante
SALEMAN Luis	alcalde	paramilitar
SALGADO MENDEZ Alfredo*	general policía	paramilitar
SALVADOR OSPINA Manuel	narcotraficante	paramilitar
SAMPER PIZANO Ernesto	ex presidente de Colombia	cómplice narcotráfico
SAMUDIO MOLINA Rafael*	ex general-ejercito	narco-paramilitar
SANCHEZ Antonio	periodista	paramilitar
SANCHEZ BARBOSA Leonardo E.*	narcotraficante	paramilitar
SANCHEZ CANDEFO Piedad Rocío	empresaria	narcotraficante
SANCHEZ CARREÑO Frenio*	narcotraficante	paramilitar
SANCHEZ COMAS Adriano		
SANCHEZ ARTEGA Freddy Ignacio	diputado	paramilitar
SANCHEZ CRISTANCHO Orlando*	narcotraficante	paramilitar
SANCHEZ Claudio	profesor universitario	paramilitar
SANCHEZ Cisnery	narcotraficante	paramilitar
SANCHEZ Lino	coronel policía	paramilitar
SANCHEZ Luis Felipe	narcotraficante	paramilitar
SANCHEZ FLOREZ Rodrigo	teniente ejército	paramilitar
SANCHEZ GARCIA Carlos A.	coronel armada	paramilitar
SANCHEZ MEJIA Katia P.*	empresaria	paramilitar
SANCHEZ MORENO Julio	alcalde	paramilitar
SANCHEZ MONSALVE Gilberto		narcotraficante
SANCHEZ PARRA Claudio	director universidad	paramilitar
SANCHEZ QUINTERO Guillermo	alcalde	paramilitar
SANCHEZ ROJAS Arcelio	alcalde	narcotraficante
SANCHEZ Julio	alcalde	paramilitar
SANCHEZ Rubén Darío	concejel	paramilitar
SANDOVAL Miguel	profesor universitario	paramilitar
SANMIGUEL B. Manuel*	general ejercito	narco-paramilitar
SANTAMARIA Germán	político	paramilitar
SANTOFIMIO BOTERO Alberto*	ministro/senador	narcotraficante
SANTOYO Mauricio*	general policía	paramilitar
SANTOS Francisco	vice presidente república	paramilitar
SANTOS Juan Manuel	ministro	paramilitar
SANTOS José	narcotraficante	paramilitar
SANTOS MONTENEGRO Roy W.	narcotraficante	paramilitar
SANTOS NEGRETE Humberto	alcalde	paramilitar
SANTOS ORTEGA Jorge L*	empresario	paramilitar
SARAVIA Darío	concejel	paramilitar
SARMIENTO Félix	consejero municipal	paramilitar
SEDACA Abraham	mercenario	narco-paramilitar
SENIOR Sigifredo	alcalde	paramilitar
SERPA URIBE Horacio	ex vicepresidente de Colombia	compl. narcos
SERRANO de CAMARGO Leonor	diputada	paramilitar
SERRANO Marcela	ex reina belleza	narcotraficante
SERRANO Rosso José*	general policía/embajador	narcotraficante
SEPULVEDA Hernan Milio	empresario	narcotraficante
SEVERINI CABALLERO Saúl	narcotraficante	paramilitar
SEVERINI EEINA Carlos	alcalde	paramilitar
SEVIEEANO Pablo*	narcotraficante	paramilitar
SIERRA Juan Carlos*	narcotraficante	paramilitar

SIERRA DE LARA Flor	senadora	paramilitar
SIERRA José María	contralor deptal.	paramilitar
SIERRA GARCIA Pablo Hernán*	narcotraficante	paramilitar
SIERRA MORENO Gabriel*	empresario	paramilitar
SILVA NUPIA Luis H.	abogado	paramilitar
SIMANCAS Libardo	gobernador	paramilitar
SINISTERRA Juan Carlos	senador	paramilitar
SKAFI ABUCHAIBE Hanin	empresario	narco-paramilitar
SOCHA SALAMANCA Gustavo	director policía antinarcóticos	narcotraficante
SOLANO Miguel*	narcotraficante	paramilitar
SOTO BERRIO Fernando	narcotraficante	paramilitar
SOTO PRETEL Gustavo de Jesús	teniente ejercito	narcotraficante
SOTO SUAREZ Neila	narcotraficante	paramilitar
SOTO TABORDA José Antonio	narcotraficante	paramilitar
SOTO TORO Jacinto	narcotraficante	paramilitar
STAMP BERRIO Nelson	diputado	paramilitar
STANBORRK Steven*	ejecutivo	paramilitar
SUAREZ MIRA Olga	alcalde	paramilitar
SUAREZ MIRA Oscar	senador	paramilitar
SUAREZ CORZO Ramiro*	alcalde	paramilitar
SUAREZ Sandra	ex ministra/asesora presidencial	paramilitar
SUAREZ Jorge Enrique*	alcalde	paramilitar
TABARES Luis Miguel*	sicano	paramilitar
TAFUR Jorge	diputado	paramilitar
TAPASCO Ferney	ex diputado	paramilitar
TAPASCO Dixon	narcotraficante	paramilitar
TAPIAS	general - ejército	narcotraficante
TAPIAS OSPINA Gustavo	empresario	narcotraficante
TATIS TEJADA Joanna P.	asistente senador	narco-paramilitar
TAVERA Didier Alberto	empresario/político	narco-paramilitar
TELLEZ Gonzalo	empresario	paramilitar
TERAN ROMERO Luis	narcotraficante	paramilitar
TERMEER Diana Nubia	secretario transporte municipal	paramilitar
TOLOSA Uldarico	ex alcalde	paramilitar
TOLOZA Luis*	agente policía	paramilitar
TOMMASO Iacomino	comerciante	narcotraficante
TORDECILLAS Reno	concejel	paramilitar
TORO Dilian Francisca	presidenta congreso	narcotraficante
TORO Carlos Felipe	narcotraficante	paramilitar
TORREGROSA CASTRO Manuel	narcotraficante	paramilitar
TORRES ARIAS Leonel	alcalde	paramilitar
TORRES BARRIOS Giovanni	director Icbf	narcotraficante
TORRES RUEDA Luis Carlos*	ex gobernador/senador	narco-paramilitar
TORRES Guillermo*	narcotraficante	paramilitar
TORRES Claudia Milena	empleada of. turismo	narcotraficante
TORRES Edgar Ulises	diputado	narcotraficante
TORRES Wilson Leonel	empresario	narcotraficante
TOVAR PUPO Rodrigo*	narcotraficante	paramilitar
TRIANA Arnubio	narcotraficante	paramilitar
TRIANA Arnulfo	narcotraficante	paramilitar
TRIANA Elkin	narcotraficante	paramilitar
TRIANA Víctor Rafael*	narcotraficante	paramilitar
TROIANO Brigida	comerciante	narcotraficante
TRONCOSO Manuel	narcotraficante	paramilitar
TRUJILLO Luis María	soldado profesional	paramilitar
TRUJILLO Oscar Diego	alcalde	narcotraficante
TSACALIS William*	ejecutivo	paramilitar
TURBAY TURBAY David	ex fiscal general	paramilitar
TURIZO de LEON Gabriel	director CTI Fiscalía	paramilitar
TZEDACA Abraham	mercenario israelita	narco-paramilitar
UEJBEN Eduardo	narcotraficante	paramilitar
UPEGUI LOPEZ Gustavo	empresario	narco-paramilitar

URDINOLA VARELA Jorge Iván	narcotraficante	paramilitar
UREÑA SUAREZ José		narcotraficante
URIBE ESCOBAR Mario	senador	narco-paramilitar
URIBE VELEZ Álvaro*	"presidente" de Colombia	narco-paramilitar
URIBE VELEZ Santiago*	terrateniente	narco-paramilitar
URIBE Jorge Alberto	ministro	narcotraficante
URREGO CARDENAS Nelson	testaferro	narcotraficante
USCATEGUI Jaime Humberto*	general ejercito	paramilitar
USUGA Juan Gabriel*	narcotraficante	paramilitar
VACCA PERILLA José A.*	ex mayor general ejercito	paramilitar
VALDEBLANQUEZ Gervasio	empresario	paramilitar
VALDEBLANQUEZ Yuri	narcotraficante	paramilitar
VALENCIA Antonio	senador	paramilitar
VALENCIA Mario*	coronel ejercito	paramilitar
VALENCIA COSSIO Fabio	consejero presidencial	paramilitar
VALENCIA ESPINOSA Darío	narcotraficante	paramilitar
VALENCIA ESPINOSA Víctor	narcotraficante	paramilitar
VALENCIA ESPINOSA William	narcotraficante	paramilitar
VALENCIA ESPINOSA Ana Cecilia	alcaldesa	narcotraficante
VALENCIA GUISON Carlos H.*	narcotraficante	paramilitar
VALLEJO MARIN Edgar		narcotraficante
VANOY Ramiro*	narcotraficante	paramilitar
VARELA Wilber Alirio*	capo del Valle	narcotraficante
VARGAS Yesid	sargento-policía	narcotraficante
VARGAS Luis Daniel	gobernador	paramilitar
VARGAS Javier	diputado	paramilitar
VARGAS John Alexander	narcotraficante	paramilitar
VARGAS Rodolfo	funcionario alcaldía	paramilitar
VARGAS BARRERA Oscar*	teniente ejercito	paramilitar
VARGAS CUENCA Yesid	coronel	narco-paramilitar
VARGAS LLERAS Germán	senador	paramilitar
VARGAS MORALES Néstor*	ex capitán	paramilitar
VASQUEZ VELASQUEZ Orlando	ex senador	narcotraficante
VELANDIA Arturo	agente policía	paramilitar
VELASCO Luis Fernando	senador	paramilitar
VELASQUEZ Ramiro*	senador	narco-paramilitar
VELEZ ATEHORTUA Luis E*	narcotraficante	paramilitar
VELEZ GIRALDO Mario A.*	empresario	paramilitar
VELEZ Elías	empresario	paramilitar
VELEZ Jorge	soldado profesional	narcotraficante
VELEZ William	diputado	narcotraficante
VELEZ OCHOA Carlos Alberto*	ganadero	paramilitar
VELEZ OCHOA Juan Diego*	terrateniente	paramilitar
VELEZ OCHOA Mario*	terrateniente	paramilitar
VEEEEZ PUERTA Juan Gonzalo	empresario	lavado de activos
VELOZA GARCIA José Barney*	narcotraficante	paramilitar
VELOZA GARCIA Ever*	narcotraficante	paramilitar
VENCE ZABALETA Emilio*	director regional DAS	paramilitar
VENGOECHEA MOLA Eduardo E	narcotraficante	paramilitar
VERA Fernando	investigador fiscalía	narcotraficante
VERA D' Isidoro Sergio	testaferro	paramilitar
VERGARA Carlos	alcalde	paramilitar
VERITY William*	ejecutivo	paramilitar
VIAFARA SALINAS Diego	narcotraficante	paramilitar
VICTORIA Eduardo*	narcotraficante	paramilitar
VIDAL ORTIZ Julio C.	obispo	paramilitar
VILLA UPARELA Johnny Guillermo	diputado	narcotraficante
VILLA UPARELA Freddy	ex alcalde	paramilitar
VILLA RUBIO Bernardo*	narcotraficante	paramilitar
VILLALBA HERNANDEZ Francisco	narcotraficante	paramilitar
VILLAMIZAR Jorge	diputado	paramilitar
VILLAMIZAR William	concejal	narco-paramilitar

VILLA PACHECO Mario León*	empresario	paramilitar
VILLAREAL Miguel	ex policía	narco-paramilitar
VILLAREAL ARCHILA Miguel	narco traficante	paramilitar
VILLAREAL BARRAGAN Ángel	diputado	paramilitar
VILLATE William*	Coronel ejercito	paramilitar
VILLATE Julián	ex coronel ejercito	paramilitar
VILLAZON Alfredo	diputado	paramilitar
VISBAL MARTELO Jorge*	ganadero/senador	narco-paramilitar
VIVAS Jesús*	coronel ejército	paramilitar
VIVES José Ignacio		narco traficante
VIVES José Joaquín	presidente consejo electoral	paramilitar
VIVES Luis Eduardo	senador	paramilitar
VIVES DAZA Juan Manuel	empresario	narco traficante
VIVES LACOUTURE Luis	diputado	paramilitar
VIVES MENOTTI	ex director estupefacientes	lavado activos
VIVES PEREZ Manuel	medico	narco traficante
VIVES VARGAS Alfonso	político	narco traficante
VUELVAS Freddy Enrique*	teniente armada	narco traficante
WADDELL Oliver*	ejecutivo	paramilitar
WARSHAW Steven*	ejecutivo	paramilitar
WILCHES CARREÑO Oscar L.*	diputado	narco-paramilitar
WILCHES RAMIREZ Fernando*	capitán ejercito	narco-paramilitar
YANET Rafael	consejero municipal	paramilitar
YANINE DIAZ Faruk*	general ejercito	paramilitar
YEPES Henry	ex policía	narco traficante
ZALLA Jeffrey*	ejecutivo	paramilitar
ZAMBRANO Nasly Cecilia	alcalde	paramilitar
ZAPATA CAICEDO Víctor A.*	empresario	paramilitar
ZAPATA Hernán Darío*	policía	paramilitar
ZAPATA Carlos Hernán	narco traficante	paramilitar
ZARATE Javier	alcalde	paramilitar
ZEA RESTREPO John*	empresario	paramilitar
ZUCARDI Piedad	senadora	paramilitar
ZULAI DIAZ Greisi	alcalde	paramilitar
ZULETA Poncho	compositor cantante	paramilitar
ZULUAGA Francisco Javier	narco traficante	paramilitar
ZULUAGA Oscar Iván	ministro	paramilitar
ZULUAGA VERGARA Luis Eduardo	narco traficante	paramilitar
ZUÑIGA RIASCOS José Francisco	alcalde	paramilitar

* Los señalados con el asterisco (*) tienen imputaciones por su participación en asesinatos. Es de anotar que ciertos políticos, militares y empresarios no estuvieron presentes en las cinco reuniones (Ralito, Magdalena, Llaños Orientales, Antioquia y Puerto Berrío) en las que se decretó la «refundación de la patria», pero sí tuvieron una participación activa en los crímenes, narcotráfico y el terrorismo que azota al país.

Algunas Empresas Patrocinadoras del terrorismo en Colombia

ABS HEALTH CLUB S.A.	empresa	narcoparamilitar
ACDEGAN	empresa ganadera	narcoparamilitar
BRITISH PETROLIUM	transnacional petrolera	paramilitarismo
BANACOL	empresa bananera	paramilitarismo
BAVARIA	transnacional cervecera	paramilitarismo
CITICAR LTDA	empresa	narcotráfico
CLINICA MAR CARIBE	empresa	paramilitar
CLINICA EL PRADO	empresa	paramilitar
CLINICA CAPRI	empresa	paramilitar
CLINICA LA MILAGROSA	empresa	paramilitar
CLINICA DE LA MUJER	empresa	paramilitar
COCA COLA	transnacional estadounidense	paramilitar
COLOMBIA SIN HAMBRE	ONG	narcoparamilitar
COMERC, DE BIENES RAICES	empresa	narcoparamilitar
COMUNICACIONES A. CAMARY Ltda.	empresa	narcotráfico
CONFECIONES LINA MARIA Ltda.	empresa	narcotráfico
CONVIVIR PAPAGAYO	empresa seguridad	narcoparamilitarismo
COOPSABANAS	empresa	narcotráfico
CRISTALES S. A.	empresa	narcotráfico
CHIQUITA BRANDS	transnacional bananera	paramilitarismo
PROBAN	empresa bananera	paramilitarismo
DAXA S.A.	empresa	narcotráfico
DEL MONTE	empresa bananera	paramilitarismo
DOLE	empresa bananera	paramilitarismo
DRUMOND Ltda.	transnacional carbonífera	paramilitarismo
ECOPETROL	empresa petrolera	paramilitarismo
ENOTECA VINERIA ITALIANA	empresa	narcotráfico
ESSO MOBIE	transnacional petrolera	paramilitarismo
FEDEGAN	empresa ganadera	narco-paramilitarismo
FUNDACION C. FRUTICOLA ANDINO	empresa	narcotráfico
FUNPAZCOR	ONG	narcoparamilitarismo
FUNDACION VILLA ESPERANZA	fundación	narcoparamilitar
GRUPO GRAJALES	empresa	narcotráfico
HIUNDAY	transnacional automotriz	paramilitarismo
INVERSIONES C. Y SOCIALES INCULSO SA.	Empresa	narcotraficante
INVERSION AGROPECUARIA DEL NORTE	empresa	narco-paramilitar
MADE IN ITALY S.A.	empresa	narcotráfico
NESTLE	transnacional suiza	paramilitarismo
OXXI	transnacional petrolera	paramilitarismo
ORGANIZACION NUEVA GENERACION	ONG	narco-paramilitar
POSTOBON	empresa de gaseosas	paramilitarismo
REPSOL	transnacional petrolera	paramilitarismo
RETROMAQUINAS S A	empresa	paramilitarismo
SUPER DEPORTES ETDA	empresa	narcoparamilitar
TRIPLEX PIZANO	empresa maderera	paramilitarismo

Fuentes consultadas:

Corporacion Juridica Libertad, Corporacion Sembrar, Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra, Comisión vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Fundación Reiniciar, Corporación Yira Castro, Humanidad Vigente, Asociación Minga, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codehsel), fundación Sumapaz, Asociación Campesina de Antioquia, Cristianos y Cristianas por la vida y la Paz, Asfaddes, Comité Permanente Hector Abad Gómez, Andas (Seccional Medellín). Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), Grupo Interdisciplinario por los derechos humanos y Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente Antioqueño (ASOPROA), Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cos-pace), Anncol, Rebelion, Indymedia, Prensa Nacional, Amnistía Internacional, Nuevo Herald, Telesur TV, Revista Universo Latino, NarcoNews, Organización de Estados Americanos, Colombia Nunca Más, Organización Internacional del Trabajo, Human Rights Watch, Organización de las Naciones Unidas, Anncol Colombia, Rebelion, Biografía No Autorizada de Álvaro Uribe, Central Unitaria de Trabajadores, Sintrainal, Aporrea.org, Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Fiscalía General, RedVoltaire.org, Tribunal Internacional de Opinión, Nodo50.org, Revista Alternativa, Gobernación de Antioquia, Organización Nacional de Indígenas de Colombia, Acompaz, Prensa Rural, Federación Internacional de Derechos Humanos, Asociación Campesina del Valle del Cauca (ACVC), Asamblea Permanente por la Paz, Los Jinetes de la Coca, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Felipezuleta.blogspot.com, Coordinadora de Asociaciones Agrarias, Proceso 8000, Tribunal Permanente de los Pueblos, Etnasdecolombia.org, Fensuagro. Comisión Interdisciplinaria de Justicia y Paz. Movimiento Nacional de Víctimas de Estado.-

VIDEOS: Aquí una pequeña muestra de la realidad colombiana y el manejo político que la mafia en el poder ejerce en el país con el Patron Uribe a la cabeza.

- 1 -) <http://youtube.com/watch?v=-6P4433R7JI&feature=related>
- 2-) <http://youtube.com/watch?v=ROL3fdJIVfM&feature=related>
- 3-) [http://youtube.com/watch?v=\)TBdZmHhUxQ&feature=related](http://youtube.com/watch?v=)TBdZmHhUxQ&feature=related)
- 4-) <http://youtube.com/watch?v=8oM-SIhcV9o&feature=related>
- 5-) <http://youtube.com/watch?v=FmXoOdKbKlc&feature=related>
- 6-) <http://youtube.com/watch?v=JNjOIZ6iRnY&feature=related>
- 7-) <http://youtube.com/watch?v=Jj2s7RGc-BU&feature=related>
- 8-) <http://Colombia.indymedia.org/news2008/01/77767.php>
- 9-) <http://www.aporrea.org/internacionales/nl07973.html>



... y con la participación de políticos, industriales, hacendados y fuerza pública crearon durante esa alianza maldita, la 'escuela' de descuartizadores del narco-paramilitarismo, en la cual enseñaban en forma macabra y a la vez profesional a los jóvenes reclutados, el saber desmembrar a sus víctimas en el menor tiempo posible y con la mayor agilidad...

“No hay que confundir paramilitares con criminales”

Álvaro Uribe Vélez,

jueves 7 de diciembre de 2006